ANÁLISIS Y DESARROLLO LEGISLATIVO EN EL ÁREA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA.

GUSTAVO ADOLFO CRUZ MATIZ
CAROLINA MARTINEZ FORERO
ANA CAROLINA ROJAS GÓMEZ
DIEGO ANDRÉS TORRES JARAMILLO

UNIVERSIDAD DE LA SABANA
FACULTAD DE DERECHO

TRABAJO DE GRADO

ANÁLISIS Y DESARROLLO LEGISLATIVO EN EL ÁREA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA.

Grupo de Investigación
GUSTAVO ADOLFO CRUZ MATIZ
CAROLINA MARTINEZ FORERO
ANA CAROLINA ROJAS GÓMEZ
DIEGO ANDRÉS TORRES JARAMILLO

Dirigido por:

DR. RAFAEL STAND NIÑO
DR. GABRIEL ZAMUDIO FALLA

UNIVERSIDAD DE LA SABANA
FACULTAD DE DERECHO

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....1
1. LEGISLACIÓN COLOMBIANA EN CIENCIA TECNOLOGÍA.....7
1.1 DESARROLLO HISTÓRICO DE LA LEGISLACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA HASTA LA CONSTITUCIÓN DE 1991 7
1.2 LEGISLACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991 10
1.3 ENUMERACIÓN NORMATIVA CONSTITUCIONAL EN MATERIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 11
1.4 ANÁLISIS CONSTITUCIONAL 13
1.5 ENUMERACIÓN NORMATIVA Y ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL PAÍS14
1.5.1. Ley 29 de 199014
1.5.2 Decreto número 393 de 1991 16
1.5.3 Decreto 585 de 1991 17
1.5.4 Decreto 591 de 1991 18
1.5.5 Ley 30 de 1992 21
1.5.6 Ley 99 de 1993 24
1.5.7 Ley 115 de 1994 25
1.5.8 Decreto 1742 de 1994.....27
1.5.9 Decreto 2934 de 1994.....28
1.5.10 Ley número 397 de 1997 33
1.6 INCENTIVOS TRIBUTARIOS 35
1.7. LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA 39
2.DERECHO COMPARADO.....41
2.1 CHILE 41
2.1.1 Incentivos Tributarios 46
2.1.2 Recopilación normativa sobre ciencia y tecnología nacional, chile 48
2.1.2.1 Leyes nacionales de fomento de la ciencia y tecnología 48
2.1.2.2 Estatutos de organismos nacionales de ciencia y tecnología 49
2.2 ESPAÑA 52
2.2.1 Incentivos tributarios 58
2.3 VENEZUELA 65
2.3.1 Estímulos a los investigadores 64
2..3.2 Desarrollo legislativo regional 64
2.3.3 Incentivos tributarios 64
2.3.4 Ministerio de ciencia y tecnología venezolano 66
2.3.4.1 Visión 67
2.3.4.2 Misión67
2.3.4.3 Áreas prioritarias 67
2.3.4.4 Avances..... 69
2.3.4.5 Acciones próximas 69

2.4 CONSEJOS DE COMPETITIVIDAD 70
2.4.1 Estados Unidos de América 70
2.4.1.1 Council on Competitiveness Washington, DC. 70
2.4.1.2The Office of Strategic Industries and Economic Security (Sigla en ingles SIES) 71
2.4.1.3. Seattle. Economic Development Council of Seattle & King County (Sigla en ingles EDC) 72
2.4.1.4 New York. Empire State development (Sigla en inglésESD) 73
2.4.1.5 Chicago. Chicago's Techonolgy Development Iniciative 74
2.4.1.5 California. Technology, trade and commerce Agency 75
2.4.1.6 Florida. Enterpriise Florida 76
2.4.1.7. Florida. Office of tourism, trade and economic development: "Florida's Economic Development Strategy: Publliic-Priivate Partnerships 77
2.4.1.8 Miami. The Beacon Counciill 77
2.4.2 Europa 78
2.4.2.1 Londres. London Development Agency (Sigla en ingles LDA) 78
2.4.2.2 Frankfurt .Economic Development Corporation (Sigla en inglés FEDC) 79
2.4.2.3 Irlanda .The National Competitiveness Council, 80
2.4.2.4 Dublin. Corporation- Economic Development Unit 80
2.4.3 Unión Europea 81
2.4.3.1 The Industry Council 81
2.4.4 Canada.....81
2.4.4.1Toronto. Economic Development Office 81
2.4.4.2 Vancouver. Economic Development Commission (Sigla en inglés VEDC) 82
2.4.5 ASIA 83
2.4.5.1 Malasia. Visión 2020 Malaysia 83
2.4.5.2 Malasia .The Malaysian Industrial Development Authority (Sigla en ingles MIDA) 88
2.4.5.3 Singapur. Economic Development Board (Sigla en ingles EDB) 84
2.4.6 SURAMÉRICA: 85
2.4.6.1Chile. CORFO Corporación de Fomento de la Producción 85
3. INSTITUCIONES DE FINANCIACIÓN 87
3.1 ORGANIZACIONES NACIONALES 87
3.1.1 Instituto de Fomento Industrial 87
3.1.2 Fondo nacional de productividad y competitividad 90
3.1.3 Servicio nacional de Aprendizaje. Sena 94
3.1.4. Fondo nacional de Garantías 97
3.1.5. Fondo financiero de proyectos de desarrollo. FONADE 100
3.1.6. Fondo colombiano de modernización y desarrollo tecnológico de las micros, pequeñas y medianas empresas. FOMIPYME 102
3.1.7. Banco de Comercio Exterior de Colombia. BANCOLDEX.103
3.1.8. Instituto Colombiano para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. COLCIENCIAS. 106
3.1.8.1Capital Semilla para apoyo a Centros de Desarrollo Tecnológico 109
3.1.9. FINDETER 111
3.2 ORGANISMOS INTERNACIONALES113
3.2.1 Banco Interamericano de Desarrollo. BID 117

3.2.2 Banco Mundial (BM).....118
3.2.3 Organización de la Naciones Unidas para el desarrollo Industrial ONUDI.....119
3.2.4 Cooperación técnica entre países en desarrollo CTPD.....121
3.2.5 Instrumentos para el financiamiento del desarrollo tecnológico existentes nivel mundial..... 122
3.2.5.1Instrumentos y mecanismos de subsidio directo (grants).....122 3.2.5.2 Instrumentos y mecanismos de apoyo directo.....124
3.2.5.3 Otros mecanismos de apoyo y financiamiento..... 124
3.2.6 La cooperación técnica internacional.....126
3.2.6.1Fuentes Bilaterales..... 127
3.2.6.2 Fuentes Multilaterales.....134
3.2.7 Corporación Andina de Fomento. CAF.....136

4. PROPUESTA DE UN NUEVO MARCO NORMATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD.....138
CONCLUSIONES.....163
GLOSARIO.....167
BIBLIOGRAFÍA.....177

TABLA DE ANEXOS

ANEXO Nº 1 Ley 29 de 1990.....190
ANEXO Nº 2 Decreto 393 de 1991.....193
ANEXO Nº 3 Decreto 584 de1991.....196
ANEXO Nº 4 Decreto 585 de 1991.....199
ANEXO Nº5 Decreto 589 de 1991.....216
ANEXO Nº 6 Decreto 590 de 1991.....218
ANEXO N º 7Decreto 591 de 1991.....219
ANEXO Nº 8 Ley 30 de 1992.....225
ANEXO Nº 9Ley 99 de 1993.....259
ANEXO Nº 10 Decreto 117 de 1994.....342
ANEXO Nº 11 Ley 115 de 1994.....350
ANEXO Nº 12 Decreto 1742 de 1994.....412
ANEXO Nº 13 Decreto 2934 de 1994.....418
ANEXO Nº 14 Ley 344 de 1996.....443
ANEXO Nº 15 Ley 383 de 1997.....444
ANEXO N º 16 Ley 397 de 1997.....445
ANEXO Nº 17 Articulo 12 de la Ley 633 de 2000.....475
ANEXO Nº 18 Articulo 30 de la Ley 633 de 2000.....477
ANEXO Nº 19 Ley 666 de 2001.....478
ANEXO Nº 20 Resolución Interna de Colciencias Nº 84.....480
ANEXO Nº 21 Acuerdo Nº 4 Consejo Nacional de Ciencia y tecnologia.....482

ANEXO Nº 22 Cuestionario.....484
ANEXO Nº 23 Entrevistas.....486
ANEXO Nº 24 Aportes a la innovación, la ciencia y la tecnología de científicos colombianos.....509
ANEXO Nº 25 Notas periodisticas sobre competitividad en la región y en el pais.....517

INTRODUCCIÓN

Para salir de su atraso relativo, Colombia no tiene hoy otra alternativa que buscar el avance acelerado de su desarrollo Científico y Tecnológico[1]

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la ciencia y la tecnología son factores de competitividad claves, en la medida en que hace posible la construcción de ventajas competitivas con base en la aplicación innovadora y eficiente de tecnologías existentes. De igual forma se relacionan con la habilidad de la economía para desarrollar, absorber y difundir en su interior nuevas tecnologías, así como la calidad de la educación y las actividades de investigación y desarrollo entre otros [2]

Por este motivo, aventurarse a escribir sobre ciencia, tecnología e innovación en un país que todavía no acaba de entender del todo su gran importancia para el desarrollo económico, social y cultural, se convierte en todo un reto. No obstante, nos arriesgaremos a hacerlo con la intención de generar verdaderas

[1] COLCIENCIAS. Junio de 2001 Véase documento Base para la definición de una política científica y tecnológica con función social para Colombia en la página 1.
[2] Republica de Colombia. Política Nacional para la productividad y la competitividad. Véase documento Marzo 2002 página 53.

conclusiones y aportes que permitan establecer mecanismos que faciliten su apropiación por parte de la sociedad.

Cada vez se hace más importante iniciar un profundo análisis jurídico del tema debido a que la ciencia, la tecnología y la innovación, juegan un papel fundamental para que nuestro país y especialmente Bogotá-Cundinamarca como región sea más competitiva; para lograrlo se necesita de un cuerpo normativo sólido que permita facilitar su desarrollo. Es evidente, que la existencia de una legislación no necesariamente implica un avance en los campos científico y tecnológico, pero sin duda es un primer paso que servirá de cimiento. La política tecnológica y científica de un país, más allá de ser el esfuerzo de un grupo reducido de gente interesada en ello, debe ser el trabajo conjunto de los diversos actores que componen la sociedad para de esta manera convertir estas políticas en un proyecto social sostenible que contribuya de manera contundente al progreso y por ende a mejorar la calidad de vida de los colombianos.

La ciencia y la tecnología, permiten la acumulación de conocimiento en una sociedad; está, a su vez, constituye el origen de la riqueza. Las dos determinan el nivel de bienestar intelectual y material de la población. Una sociedad pobre en conocimiento como es el caso de Colombia, que además no lo valora, es pobre en los aspectos cultural, político, social y económico y no esta en capacidad de manejar en forma eficiente su patrimonio natural.[3]

La intervención de los diferentes actores para consolidar este proceso no es ajena a su fin; pues de la intervención de varios sectores (sector gubernamental, empresarial, académico y científico) que en principio podrían tener intereses y puntos de vista distintos, generarían una verdadera interrelación que conllevaría a una adecuada propuesta legislativa, que se

[3] COLCIENCIAS. Op cit pág 3

convertiría finalmente en política de Estado, con el fin de generar resultados favorables a corto, mediano y largo plazo. Es para cada uno de estos sectores de vital importancia involucrarse en dicho proceso creando sinergias. Corresponde al gobierno, consolidar una política que permita un verdadero desarrollo científico y tecnológico que impulse la economía del país. De otro lado, para los empresarios es de vital importancia actualizar y mejorar estas políticas, buscando su optimización para lograr insertarse en una economía globalizada y sobrevivir en un mundo tan competitivo como el de hoy. Las universidades deben ser lugares donde se concentren bancos de proyectos que contribuyan con el desarrollo y en asociación con la comunidad científica quien es la protagonista de este proceso.

Algunas investigaciones demuestran que países como Estados Unidos, Japón, Alemania, invierten en ciencia y tecnología alrededor de 2,5% de su PIB, pero no solo son los países altamente capacitados los que demuestran interés por estos temas; países mas cercanos a nosotros como Brasil, Cuba y Costa Rica entre otros, destinan 0,75% de su PIB, lo cual confirma una vez más que políticas serias orientadas a impulsar la inversión considerable en temas trascendentales para el desarrollo como los son estos, contribuye profundamente con el desarrollo de un país y a la vez nos hace preguntar porque Colombia invierte menos que otros países de América Latina. La situación actual no puede ser mas precaria: invertimos en ciencia y tecnología menos de 0,4% del PIB, frente a otros países de América latina que se acercan a 1% y a naciones desarrolladas que muestran índices entre el dos y el cuatro por ciento. En materia de recursos humanos para ciencia y tecnología, los países industrializados disponen de 2.000 a 3.000 científicos e ingenieros que trabajan en investigación y desarrollo por cada millón de habitantes, mientras que Colombia apenas cuenta con 166. Para alcanzar la tasa de uno por mil, es decir, 1.000 científicos e ingenieros dedicados a tareas de investigación y

desarrollo por cada millón de habitantes, se debería contar con 36.000, lo que implicaría que deberían formarse por lo menos 30.000 en los próximos años[4]

Estamos convencidos que en Colombia tenemos gente excelente, existen investigadores de talla mundial como Manuel Elkin Patarroyo quien logró sintetizar por primera vez una vacuna elaborada químicamente de principio a fin, Rodolfo Llinas quien ha desarrollado profundas investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro y el origen de la conciencia y a la vez ha publicado numerosos artículos y libros de gran aceptación mundial. Podríamos también mencionar a científicos de la talla de Salomón Hakim quien como neurocirujano e investigador diseñó y construyó una válvula que lleva su nombre para el tratamiento quirúrgico de hidrocefalia.

El problema radica, en que los esfuerzos que se realizan para cambiar la actual situación son aislados, no existe verdadera interacción entre los diferentes actores. Es por esta razón que espacios como el Consejo Regional de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca se convierten en oportunidades de cambio que deben tener como fin lograr transformar de manera conjunta la actual situación. Como miembros del grupo siete del Consejo Regional de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca[5] y en vista del momento coyuntural por el que atravesamos hemos decidido comprometernos con la agenda consolidando una aproximación de un esquema jurídico que responda a las necesidades imperantes, que promueva y sea herramienta para el desarrollo de nuestra región y porque no de nuestro país. Es por esta razón que nos hemos dado a la tarea de analizar la legislación que actualmente existe sobre el tema en Colombia y en algunos países como Chile, España y Venezuela, entre otros, con el propósito de actualizarla mediante una propuesta legislativa que es el fin ultimo de nuestra investigación.

---

[4] COLCIENCIAS. Op cit. pág 2 y 3.
[5] Grupo de Tecnología para la innovación.

El Consejo es un acuerdo de voluntades, promovido por las diferentes organizaciones de los sectores público y privado y sociedad civil dentro de las que se destacan la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), para formular y desarrollar la visión económica regional de largo plazo. A partir de consensos público-privados que generen identidad y compromiso colectivo.

La experiencia de los Consejos de Competitividad en otras regiones del mundo ha contribuido a mejorar el nivel de vida de las personas. Por ejemplo, en *Costa Rica* y *Miami* han contribuido para alcanzar el liderazgo en Latinoamérica por su trabajo colectivo. El Consejo de *Dublín* ha logrado superar la grave crisis de desempleo y emigración. Por su parte, a *Glasgow* le ha permitido ubicarse como el mayor exportador de tecnología para Europa. En Malasia, la visión 2020, ha desarrollado un destino compartido como nación, con una base tecnológica fuerte. En Singapur, el Consejo ha logrado una economía globalmente competitiva. En Hong Kong trabajan para promover el valor agregado en la producción y ayudan a remover los obstáculos para el logro de su visión hacia el futuro.

En Bogotá y Cundinamarca el *Consejo para la Competitividad* está organizado por grupos de trabajo complementarios así: un grupo directivo integrado por el alcalde, el gobernador y representantes del sector privado. Siete grupos de gestión iniciales (sobre retos como cultura para la productividad, cadenas productivas regionales, región atractiva, región exportadora, tecnología para la innovación, plataforma regional funcional y relación con otras regiones), un grupo asesor que orienta y una secretaría técnica que coordina el trabajo de todos los equipos. Esta organización está abierta a la participación de toda la comunidad empresarial, a través de los grupos de gestión.

Los empresarios que participan en el consejo se benefician porque participan y se comprometen en el desarrollo de un proyecto colectivo, en el cual se definen

lineamientos sobre el futuro regional, especialmente del entorno económico. Además, el consejo proporciona información clave, que les permite integrar sus esfuerzos con los de otras entidades.

La meta central del Consejo será lograr que Bogotá y Cundinamarca sean reconocidas en los próximos *10 años*, por su alta *calidad de vida* dentro de la región latinoamericana, para beneficio de todos.[6]

Ahora bien, la dinámica misma de estos consejos regionales, no es otra cosa que el intento por responder a la realidad que esta viviendo el mundo y al fenómeno de la globalización del que tanto se habla por estos días. El mundo durante los últimos 15 años ha tenido una fuerte tendencia hacia el regionalismo que paulatinamente se ha venido dando con la integración de la economía mundial reflejada en los diferentes acuerdos; factores de orden económico, la constante y acelerado desarrollo tecnológico, la integración cada vez mas fuerte de los sistemas sociales; es lo que ha llevado a pensar en mundo mas global, un mundo que va mas allá de ideologías políticas, de fronteras, de barreras arancelarias, aun de diferencias étnicas y condiciones socioeconómicas, un mundo con una acelerada y constante tendencia a la internacionalización de los diferentes procesos económicos, de los diversos fenómenos políticos culturales y sociales. Es aquí donde la ciencia y la tecnología como fenómeno social adquiere una magna importancia para el desarrollo de las sociedades y se convierte en un factor decisivo de competitividad.

Por último, es bueno resaltar que lo expuesto es posible, en la medida en que cada actor que interviene en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación se convenza que el desarrollo científico y tecnológico genera riqueza y trasforma la calidad de vida de los colombianos y todo esto en

[6]Consultado el 5 de marzo de 2003 en www.ccb.org.co

contexto, hace que Bogota-Cundinamarca como región y a la vez Colombia sean más competitivos.

1. LEGISLACIÓN COLOMBIANA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA

1.1 DESARROLLO HISTÓRICO DE LA LEGISLACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA HASTA LA CONSTITUCIÓN DE 1991

En realidad Colombia no tuvo un verdadero desarrollo legislativo; solo hasta los años ochentas se dieron los primeros pasos. No obstante, haremos referencia al desarrollo que ha tenido nuestra legislación en temas relacionados antes de esa década.

El tema científico en nuestro país tiene su origen en el siglo XVIII, con la Expedición Botánica y la Comisión Corográfica.

La Expedición Botánica fue una actividad expedicionaria española dirigida a América y potenciada por el Estado que abarcó un periodo que transcurrió entre 1735 y 1808; expediciones dedicadas a reunir y clasificar objetos de la historia natural que incluían siempre materiales y datos relacionados con la actividad humana. Los estudios de botánica favorecieron el avance de la farmacopea y la experimentación de nuevos cultivos. La aclaración de la cartografía de las costas fue fundamental para la navegación y el comercio. Por su parte la Comisión Corográfica fue una comisión creada por el Congreso de la República por solicitud de los presidentes Tomás Cipriano Mosquera y José Hilario López, en 1850. La comisión estaba dirigida por Agustín Codazzi, y era constituida por Manuel Ancízar, Manuel María Paz y Triana principalmente. Con ella Agustín Codazzi viajó por todo el país y recogió más de 6.500 plantas con sus nombres comunes y la altitud a la cual se producían.

El 11 de junio de 1851 por medio de la ley 59 se estableció una comisión científica permanente que debía realizar un estudio en botánica, geología, mineralogía, zoología y arqueología dentro de todo el territorio colombiano. Dicha comisión estaba integrada por un director quien era el encargado de trabajos generales, dos profesores colombianos naturalistas un dibujante y un secretario redactor.

En Diciembre 22 de 1916 con la aparición de la ley 83 se estableció la organización de una Comisión Científica para que hiciera el estudio geológico del país y levantara la carta correspondiente; además estableció que el gobierno podría contratar dentro o fuera del país técnicos en diferentes áreas para conseguir el objetivo propuesto.

Nuevamente, el 18 de noviembre de 1933, el gobierno se pronuncia sobre estos temas. Con la aparición de la ley 34 se atribuyó como cuerpo consultivo del Gobierno a la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Colombia, en todo lo relacionado con el fomento y organización de los estudios de esas ciencias en los establecimientos oficiales y para la enseñanza en las clases menos favorecidas. También tuvo la obligación de cooperar con el gobierno en la creación y funcionamiento de un museo de ciencias naturales, un jardín botánico y otro zoológico.

Por último la ley orgánica 69 de 1935 de la Universidad Nacional de Colombia agrupo las facultades nacionales, organizó la construcción de la ciudad universitaria y lo más destacable, propició la extensión de los programas académicos existentes a la creación de nuevas actividades técnicas y científicas.

Solo hasta finales de la década de los ochenta, el gobierno de manera conjunta con académicos y científicos, comienza a reconocer aunque tímidamente la

importancia de la ciencia y la tecnología para el progreso del país. Claramente se observa que antes de esta época el desarrollo legislativo no tuvo ningún punto de partida en el campo de ciencia y tecnología.

En 1988 el Gobierno expide el decreto 1600 en el cual crea la Misión de Ciencia y Tecnología y al año inmediatamente siguiente lo declara el año de la ciencia y la tecnología.

La expedición de una ley especifica de ciencia y tecnología se dio hasta el año 1990 y fue precisamente la ley 29 la que se conoció con el nombre de ¨ Ley de Ciencia y Tecnología. Mediante esta ley el gobierno creó mecanismos para incentivar el desarrollo tecnológico y la investigación científica y otorgó una serie de facultades especiales al gobierno como por ejemplo la realización de contratos y asociaciones con particulares para desarrollar actividades científicas así como también buscó promover los viajes de estudio para investigadores entre otras.

1.2 LEGISLACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991

El tema científico y tecnológico nunca tuvo carácter constitucional; solo hasta la Constitución promulgada el 4 de julio de 1991 adquirió tal estatus. Por esta razón pretendemos realizar un análisis de las normas relacionadas con este tema, en la actual Constitución; no sin antes referirnos rápidamente, a que en otros países desde tiempo atrás el tema de la ciencia y la tecnología tiene no solamente estatus constitucional sino que además tiene gran desarrollo.

Existen casos como el de Venezuela en el cual la Constitución de 1961 consagra que es deber para los ciudadanos educarse y a la vez el derecho de toda persona natural o jurídica, de dedicarse libremente a las ciencias o a las artes.

En la Constitución de Guatemala de 1985 establece el derecho de toda persona a participar de la vida cultural y artística de la comunidad y entiende como cultura toda expresión creadora, incluyendo el desarrollo científico. De igual manera esta constitución compromete al Estado al reconocimiento y a la promoción de la ciencia y la tecnología como bases fundamentales del desarrollo nacional.

Por último y para no extendernos podemos traer como ejemplo la constitución mexicana de 1917 que erige como parámetro orientador de la educación los resultados del proceso científico; asimismo los países de Chile y España elevan a rango constitucional la importancia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo educativo.

1.3 ENUMERACIÓN NORMATIVA CONSTITUCIONAL EN MATERIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

- Artículos 2, 27, 44 y 61. La obligación del Estado es garantizar las libertades de pensamiento, creación, expresión y comunicación, asegurando en todo momento la vigencia de un orden justo.

- Artículos 67 y 70. Derecho y garantía del Estado para crear, disfrutar y acceder a los bienes y valores de la cultura, en sus diferentes expresiones y manifestaciones culturales.

- Artículos 7 y 70. Derecho de las minorías a generar conocimiento según sus propias tradiciones y a beneficiarse de una educación que asegure este derecho.

- Artículo 95 núm. 4. Los logros científicos de ninguna manera pueden utilizarse en detrimento de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad e la persona humana. Articulo que se relaciona íntimamente con los artículos 1 y 2 de nuestra carta en donde se establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana

- Artículo 70. Es quizás de los artículos que merece un mayor análisis ya que establece la obligación por parte del Estado a fomentar la educación, las artes, la ciencia la tecnología y las demás expresiones culturales, promoviendo la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación. Además establece la importancia de la promoción estatal del desarrollo y de la apropiación social de la ciencia y la tecnología.

- Articulo 71. Creación de incentivos especiales para quienes desarrollen, apoyen, fomenten o financien la creación artística, la ciencia, la tecnología, la educación la conservación del patrimonio cultural y sus manifestaciones populares.

Nota:

1. La participación de los artistas, educadores y científicos en la formulación y definición de políticas y asignación de recursos para el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y demás manifestaciones de cultura se recogió en la Ley General de Educación, La ley de Educación Superior y la Ley del Plan de Desarrollo.

De acuerdo con el análisis realizado se puede ver que son varias las normas constitucionales que se refieren al tema en cuestión. (Ver ensayo: El derecho de la ciencia, elaborado por Liliana Caballero para la colección de Misión y Ciencia, Educación y Desarrollo. de Colciencias. 1996)

1.4 ANÁLISIS CONSTITUCIONAL

Los artículos de carácter constitucional que hacen referencia al tema de estudio son varios y por ser de orden constitucional podríamos decir que son los pilares y el marco regulatorio en que se debe encuadrar y desarrollar toda la normatividad al respecto.

El preámbulo de la constitución de 1991 colombiana establece ¨ *El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice el orden político…….*¨

En relación con el preámbulo la Corte Constitucional en la sentencia C-479 de agosto 13 de 1992, con ponencia de los H. Magistrados José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero en uno de sus apartes dijo:

"*El Preámbulo de la Constitución incorpora, mucho mas allá de un simple mandato especifico, los fines hacia los cuales tiende el ordenamiento jurídico; los principios que inspiraron al constituyente para diseñar de una determinada manera la estructura fundamental del Estado; la motivación política de toda la normatividad; los valores que esa Constitución aspira a realizar y que trasciende la pura literalidad de sus artículos."*

Por tal razón el Preámbulo señala el camino a seguir de todos los preceptos constitucionales y otorga al conocimiento entendido como un derecho un estatus que debe ser garantizado por el Estado.

1.5 ENUMERACIÓN NORMATIVA Y ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL PAÍS

1.5.1. Ley 29 de 1990

Esta ley denominada "Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias" ha sido considerada por muchos como el pilar fundamental en materia de innovación científica y tecnológica (Ver Anexo Nº 1), de la cual se desprenden muchos de los posteriores desarrollos legislativos que hemos venido conociendo en esta última década.

Desde el principio de su articulado vemos plasmada en ella, principios y fines del estado de rango constitucional, así como artículos específicos que abarcan el tema de la ciencia y la tecnología,[7] los cuales están encaminados a promover por medio de la voluntad y dirección del estado la formulación de planes de ciencia y tecnología y mecanismos idóneos para implementar dichos planes y lograr su eficacia.[8] Se ve igualmente en el espíritu de la ley la finalidad de crear estímulos y condiciones aptas para el fomento y el crecimiento de una cultura encuadrada dentro del ámbito de la investigación tecnológica y científica, implementándola en todos los medios de la sociedad y estableciendo un futuro trámite para que se presente claramente en los contratos estatales y

[7]COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Bogotá, Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Constitucional Nº 114 de julio 7 de 1991. En: OLANO GARCÍA, Hernán Alejandro. Constitución Política de Colombia. Comentada y Concordada. Cuarta Edición. Santafé de Bogotá. Editada por el Consejo de Santafé de Bogotá. 1999 Pág.66 Titulo II, Capitulo II. Artículo 27 "El estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra"

[8] Ibíd., Pág. 127. Titulo I, Capitulo III. Articulo 71 "La búsqueda del conocimiento y la expresión artistica son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y en general a la cultura. El estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades."

en las relaciones que tienen entre ellos los diferentes actores de nuestra sociedad.

A contrario sensu, vemos que esta ley así como gran porcentaje de nuestra normatividad en estos campos específicos, han perdurado pero solamente en la mente de sus creadores o en los medios en el cuales ellas fueron publicadas; claro ejemplo de lo anterior son los múltiples mecanismos que establece la ley 29 de 1990 que no ha tenido un desarrollo acelerado en los últimos años, tales como la creación del sistemas claros y eficientes de información científica y tecnológica o el no aprovechar el otorgamiento al gobierno de facultades extraordinarias para reglamentar el tema y crear verdaderos y verificables procesos de implementación tecnológica tanto en las universidades, el sector privado y el sector público, y más aún que por expreso mandato de nuestra Carta Política en sus artículos 69 y 70, ésta dictamina que el Estado debe fortalecer la investigación en los campos de la ciencia y la tecnología en universidades tanto oficiales como privadas e implementar los planes en dichas instituciones sin importar su régimen o naturaleza de creación.

Vemos como la ley 29 de 1990 se adelanta a la Constitución del 91 y ésta última a su vez recoge los lineamientos en las materias mencionadas y conserva el sentido de la norma posterior para encaminar por el mismo sendero las directrices que se empezaban a gestar desde ese entonces. La ley 29 crea una serie de obligaciones para el Estado colombiano con el fin de apoyarse en las grandes entidades estatales para que estas a su vez implementen una verdadera cultura innovadora y la desplieguen por medio de la descentralización correspondiente, otorgando facultades para reestructurar las entidades estatales (modificando sus estatutos) para que cumplan funciones en materias de ciencia y tecnología o autorizando a las propias

entidades para asociarse con los particulares para desarrollar todos los planes y mecanismos establecidos en la ley.

Es así como sin desconocer el gran avance que para las materias de ciencia, innovación y tecnología ha representado la creación de esta ley, teniendo en cuenta que a nivel colombiano no encontramos antecedentes a la misma, consideramos que no ha sido explotada de la mejor manera, y no se ha venido proyectado como el gobierno en la oportunidad de su expedición se proponía. Es tiempo de hacer más reglamentaciones y emprender los mecanismos que para el desarrollo tecnológico ella nos presenta.

1.5.2 Decreto número 393 de 1991

Por medio de este decreto, se establecieron ciertas normas relativas a la asociación para desarrollar actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías. (Ver anexo Nº 2)

De los 83 artículos del decreto, traemos a colación algunos. El primero de ellos hace referencia a las modalidades de asociación que se pueden crear con los fines anteriormente mencionados. Establece que la nación y sus entidades descentralizadas pueden asociarse con los particulares, bajo dos modalidades: la primera es a través de sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas, sin ánimo de lucro y la segunda, a través de la celebración de convenios especiales de cooperación. De lógica es que la ley exponga los mecanismos que ella misma ha creado con respecto a las formas de asociación para desarrollar actividades tales como las científicas y no que disponga de mecanismos nuevos.

Aclara la norma sin embargo, que los propósitos para la asociación deben ser para adelantar proyectos de investigación científica; apoyar la creación, el fomento, el desarrollo y el financiamiento de empresas que incorporen innovaciones científicas o tecnológicas aplicables a la producción nacional, al

manejo del medio ambiente o al aprovechamiento de los recursos naturales; organizar centros científicos y tecnológicos, parques tecnológicos, e incubadoras de empresas; formar y capacitar recursos humanos para el avance y la gestión de la ciencia y la tecnología, establecer redes de información científica y tecnológica; crear, fomentar, difundir e implementar sistemas de gestión de calidad; negociar, aplicar y adaptar tecnologías nacionales o extranjeras; asesorar la negociación, aplicación y adaptación de tecnologías nacionales y extranjeras; realizar actividades de normalización y metrología; crear fondos de desarrollo científico y tecnológico a nivel nacional y regional, fondos especiales de garantías, y fondos para la renovación y el mantenimiento de equipos científicos y para realizar seminarios, cursos y eventos nacionales o internacionales de ciencia y tecnología; financiar publicaciones y el otorgamiento de premios y distinciones a investigadores, grupos de investigación e investigaciones. Limita de este modo la asociación de la Nación y sus entidades a ciertos propósitos taxativamente señalados.

También se plantea la posibilidad de pactar un convenio especial de cooperación, cuando la nación y sus entidades descentralizadas quieran adelantar actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías.

En su artículo 70, habla acerca del fortalecimiento que el Estado hará de la investigación científica en las universidades oficiales y privadas, ofreciendo las condiciones especiales para su desarrollo. Vemos de este modo que, según este artículo anteriormente mencionado se genera un alianza Estado-universidad necesaria para la promoción efectiva de la investigación que en muchos casos se genera en esta última, pero que requiere el apoyo del Estado.

1.5.3 Decreto 585 de 1991

Este decreto en ejercicio de las facultades constitucionales que le confirió la ley 29 de 1990, creó el Consejo Nacional de Ciencia; Así mismo reorganizó el

Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Colciencias. Este Consejo tiene como función principal servir de garante, consejero y asesor del gobierno en materias relacionadas en ciencia y tecnología. El decreto establece todo lo relacionado con la conformación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, además establece las funciones propias del mismo y de sus participes directos e indirectos. (Ver anexo Nº 4)

Este decreto revela claramente el impulso con que surgió la ley 29 de 1990 y es un ejemplo claro de la aplicación concreta de los mecanismos establecidos en dicha ley, la cual constituye el surgimiento de una entidad especifica con objetivos y finalidades propias como lo es El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; es así como dicha ley establece en su articulado lo siguiente " *(…)* Revístese al gobierno para……. Modificar los estatutos de las entidades oficiales que cumplen funciones de ciencia y tecnología, incluyendo las de variar sus adscripciones y vinculaciones y las de crear los entes que sean necesarios……Dictar las normas a que deban sujetarse la Nación y sus entidades descentralizadas para asociarse con los particulares en actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnología *(…)*"[9]

Consideramos que el decreto 585 de 1991 es un gran aporte en el campo estudiado y se puede interpretar como un verdadero avance legislativo e institucional para un país en vía de desarrollo como lo es el nuestro.

1.5.4 del Decreto 591 de 1991

El decreto 591 de 1991 (Ver anexo Nº 7) , que fue elaborado en desarrollo del decreto 522 de 1991, tenía como objeto, regular todo lo referente a las modalidades especificas de contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas. De sus veintes artículos originales solo cinco quedaron vigentes,

[9] COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 20 de 1990. Inc 1° y 2° Artículo 11, Diario Oficial no. 39205. 27 de Febrero de 1990.

después de la promulgación de la Ley 80 de 1993 [10], por la cual se expidió el Estatuto General de Contratación de la Administración Publica.

Dentro de las disposiciones aun vigentes encontramos el articulo 2 que define y determina, cuales son las actividades científicas y tecnológicas objeto de contratación. Sobre este particular debemos, entender como actividades científicas y tecnológicas las siguientes: investigación científica[11], difusión científica y tecnológica[12], servicios científicos y tecnológicos[13], proyectos de innovación[14] y transferencia tecnológica[15], que en si son las actividades que mas tarde, y después de una buena consecución, generaran competitividad en este nivel.

En los artículos 8 , 9 y 17 que tampoco fueron reemplazados por la Ley 80 de 1993, se establecen las clases de contratos que la Nación , o mejor el Estado que es, a nuestro parecer el término apropiado en este caso, o sus entidades descentralizadas pueden realizar con particulares o con entidades públicas. Estos contratos son : el de financiamiento (articulo 8) el cual estará destinado a actividades científicas y tecnológicas, que tengan por objeto proveer de

[10]COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 de 1993. Articulo 81: De la derogatoria y de la vigencia. A partir de la vigencia de la presente ley, quedan derogados el Decreto –ley 2248 de 1972, la Ley 19 de 1982, el Decreto-ley 222 de 1983, excepción hecha de los artículos 108 a 113, **el Decreto-ley 591 de 1991, excepción hecha de los artículos 2,8,9,17,19, el decreto-ley 1684 de 1991, las normas sobre contratación del Decreto 700 de 1992, y los artículos 253 a 264 del Código Contencioso Administrativo, así como las demás normas que le sean contrarias. (El original sin resaltar)**

[11] Investigación científica y desarrollo tecnológico: desarrollo de nuevos productos y procesos, creación y apoyo a centros científicos y tecnológicos y conformación de redes de investigación e información.

[12] Difusión científica y tecnológica: esto es, información, publicación, divulgación y asesoría en ciencia y tecnología.

[13] Servicios científicos y tecnológicos: Se refiere a la realización de planes, estudios, estadísticas y censos de ciencia y tecnología; a la homologación, normalización, metrología, certificación y control de calidad; a la prospección de recursos, inventario de recursos terrestres y ordenamiento territorial; a la promoción científica y tecnológica; a la realización de seminarios, congresos y talleres de ciencia y tecnología, así como a la promoción y gestión de sistemas de calidad total y de evaluación tecnológica.

[14] Proyectos de innovación: Proyectos que incorporen tecnología, creación, generación, apropiación y adaptación de la misma, así como la creación y el apoyo a incubadoras de empresas, a parques tecnológicos y a empresas de base tecnológica

[15] Transferencia tecnológica que comprende la negociación, apropiación, desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías nacionales o extranjeras

recursos al particular contratista o a otra entidad pública, en cualquiera de las siguientes formas Reembolso obligatorio[16] Reembolso condicional[17] Reembolso parcial[18] recuperación contingente[19] . El de administración (articulo 9) que tiene como objeto la administración de proyectos que desarrollen actividades científicas y tecnológicas. El articulo 17 cierra los contratos aun vigentes para el fomento de actividades científicas y tecnológicas; en este último se determina que el Estado podrá celebrar convenios especiales de cooperación. En virtud de estos convenios, las personas que los celebran aportan recursos en dinero, en especie o de industria, para facilitar, fomentar o desarrollar alguna de las actividades científicas o tecnológicas previstas en el artículo 2.

Después del estudio de estos artículos, podemos concluir que es inoficioso mantener aun modalidades especiales de contratos para el fomento de actividades científicas y tecnológicas, ya que la Ley 80 de 1993 en su articulo 32, define que son los contratos estatales[20] y enuncia, sin llegar a considerarlos como taxativos, varias clases de contratos. Razón por la cual la determinación de si son o no contratos que fomentan actividades científicas y tecnológicas, dependerá de la inclusión de actividades que el articulo 2 considera como científicas y tecnológicas y no de la denominación que se le dé al contrato.

---

[16] Reembolso obligatorio. El contratista beneficiario del financiamiento deberá pagar los recursos en las condiciones de plazo e intereses que se hayan pactado;

[17] Reembolso condicional. La entidad contratantes podrá eximir parcial o totalmente la obligación de pago de capital y/o intereses cuando, a su juicio, la actividad realizada por el contratista ha tenido éxito. Esta decisión se adoptará mediante resolución motivada

[18] Reembolso parcial. Para inversiones en actividades precompetitivas, de alto riesgo tecnológico, de larga maduración o de interés general, la entidad contratante podrá determinar en el contrato la cuantía de los recursos reembolsables y la de los que no lo son

[19] Recuperación contingente. La obligación de pago del capital e intereses sólo surge cuando, a juicio de la entidad contratante, se determine que se ha configurado una de las causales específicas de reembolso que se señalen en el contrato. La existencia de la obligación será establecida mediante resolución motivada.

[20] COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 de 1993. Articulo 32: "son contratos estatales todos los actos jurídicos gereneradores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en deposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a titulo enunciativo, se definen a continuación.."

Para finalizar con la apropiación de este decreto, hallamos el articulo 19 el cual enuncia: “Cuando la naturaleza del contrato así lo exija, se pactarán las medidas conducentes para los efectos de la transferencia tecnológica, conforme a los lineamientos que defina el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.”

Este articulo no es más que la consagración legal de la preocupación del gobierno nacional y en su momento del gobierno distrital, de lograr procesos efectivos de transferencia de tecnología para que las nuevas tecnologías sean asimiladas, apropiadas y adaptas a cada necesidad, para que a la vez se genere a corto, mediano y largo plazo mas competitividad el país y en la región.

1.5.5 Ley 30 de 1992

La ley 30 de Diciembre 28 de 1992 contiene la organización del servicio publico de la Educación Superior. (Ver anexo Nº 8)

Para el desarrollo de este trabajo nos interesa estudiar en principio, el artículo 7 que cita que los campos de acción de la Educación Superior, son: El de la técnica, el de la **ciencia, el de la tecnología,** el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía. Demostrando así nuevamente la preocupación del Estado por demarcar entre sus principales funciones, como lo es la educación superior, la importancia que tiene la ciencia y tecnología en el ámbito nacional.

Continuando con el estudio de esta ley, nos encontramos con el capitulo VII que habla del fomento, de la inspección y vigilancia de la Educación Superior la cual de conformidad con los artículos 67 y 189, numerales 21, 22 y 26 de la Constitución Política de Colombia y de acuerdo con la presente ley, corresponde al Presidente de la República. Específicamente nos interesa el

literal g)[21] del articulo 31, ya que encontramos en este una clara articulación de lo dispuesto en el decreto 1742 de 1994 que establece todos los estímulos para los investigadores.

Dentro de este mismo capitulo, el artículo 33 establece que la suprema inspección y vigilancia de las instituciones de Educación Superior será ejercida por el Gobierno Nacional con la inmediata asesoría del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), de acuerdo con las disposiciones de la presente ley y con la cooperación de las comunidades académicas, científicas y profesionales, de las entidades territoriales y de aquellas agencias del Estado para el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, del arte y de la cultura.

Es precisamente en la aplicación de este artículo donde queremos hacer una critica, ya que hoy, quizás más que nunca, la educación superior debe ser fuente directa de competitividad, aspecto que no se esta logrando ya que, son muy pocas las instituciones de educación superior que realmente se toman en serio el factor de la investigación.

Lo que queremos expresar es como la falta de inspección y vigilancia específicamente de los agentes del Estado encargados del desarrollo de la ciencia y la tecnología, esta llevando a que precisamente, y como lo dijimos anteriormente, que la principal fuente de investigación y acción, como lo es la educación superior esta totalmente desaprovechada.

Con la promulgación de la Ley 30 de 1992, se abrió la posibilidad de crear nuevas universidades, muchas de los cuales no contaban con los recursos humanos, estructurales y académicos para formar profesionales que más adelante sobresalieran en el campo profesional, académico y porque no científico y tecnológico. A la par con la creación de estas universidades,

[21] COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 30 de 1992. Articulo 31. G)Fomentar la producción del conocimiento y el acceso del país al dominio de la ciencia, la tecnología y la cultura

también nacieron muchas facultades, hicieron descender el nivel de la educación.

El objetivo de cualquier universidad en el mundo es investigar para producir conocimiento. En el caso de la ciencia y la tecnología, este conocimiento generará mas adelante, estándares altos de calidad que llevaran a mas competitividad.

Como ejemplo, queremos tomar el problema de las facultades de medicina, que han crecido notoriamente en número desde la promulgación de la Ley 30 de 1992. En efecto, mientras en 1970 había ocho facultades de medicina, en 1990 había 21 y en 2003 hay 46. En Colombia de acuerdo con información de ASCOFAME (Asociación Colombiana de Facultades de Medicina), en el año 2000 se contaba con un total de 43.166 médicos, que para una población de 42'321.386 (población en Colombia según proyección del DANE para ese año), corresponde a una relación de un médico por cada 980 habitantes.

En el año 1969 existían 8.650 médicos para una población de 17´489.508 habitantes, es decir 2.021 habitantes por cada médico. En otras palabras, en un período de treinta años la población total en Colombia creció casi 2.4 veces, mientras que el número de médicos se quintuplicó.

Dejando de lado el caso de los médicos, nos gustaría aclarar que la idea no es parar definitivamente la creación de universidades y por ende de facultades. Lo que deben hacer el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), y agencias del Estado para el desarrollo de la Ciencia, de la Tecnología, en desarrollo de su función, es determinar realmente que programas cumplen con los requisitos establecidos por la ley y que adicionalmente vayan de acuerdo con los parámetros de desarrollo del país y la región.

1.5.6 Ley 99 de 1993

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y reordena el sector publico, encargado de la Gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA. (Ver anexo N º 9)

Esta ley tiene como objetivos fundamentales estructurar los lineamientos en la política colombiana que se adopte con referencia al medio ambiente, para lo cual establece que dichas políticas tendrán en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. De igual forma establece la integración del SINA mediante entidades publicas, privadas o mixtas que realicen actividades de producción de información, investigación científica y desarrollo tecnológico en el campo ambiental.

La presente ley también consagra como función del Ministerio del Medio Ambiente entre otras, coordinar todo lo relacionado con la elaboración de estudios de investigación y de seguimiento de procesos ecológicos y ambientales y la evaluación de estudios de impacto ambiental. Es de vital importancia resaltar que entre sus funciones debe realizar investigaciones y estudios económicos conducentes a la identificación de prioridades de inversión para la gestión ambiental como base para orientar el gasto publico del sector.

Determina las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio del Medio ambiente en las que se encuentran las siguientes:

- Instituto de Hidrología, Meteoróloga y Estudios Ambientales. IDEAM
- Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. INVEMAR
- Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “ Alexander von Humboldt”

- Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “ SINCHI”
- Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico “ John von Neuman”.

Además de las entidades ya mencionadas contará con el apoyo científico y técnico de los centros de investigaciones ambientales y de las unidades publicas y privadas y en especial del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional y de la Universidad de la Amazonia.

1.5.7 Ley 115 de 1994

Podemos comenzar este análisis diciendo que la ley contiene la normatividad general que regula el servicio publico de la educación. (Ver anexo Nº 11)Hace especial énfasis en la importancia que tiene para el país la formación de niños y jóvenes en un ambiente donde se les estimule a interesarse especialmente por temas científicos, regulando también el fomento tecnológico y científico, como lo señala su articulo primero “ se fundamenta en los Principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona….”

De acuerdo con el análisis destacamos como puntos esenciales objeto de nuestro estudio los siguientes:

- Determina como función primordial del Estado atender de manera permanente la calidad y mejoramiento de la educación otorgándole importancia a la innovación e investigación educativa. De igual forma determina con base en el articulo 67 de la Constitución política como fines de la educación el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, el fomento de la investigación, el desarrollo de la capacidad critica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, la promoción en la

persona de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país entre otros.

- Tiene dentro de sus objetivos el avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos; de igual manera hace referencia al estudio científico del universo, de la tierra, de la estructura física.
- Establece que la formación del alumno debe ser integral encaminándolo al logro del conocimiento científico y técnico proporcionándole el acceso al conocimiento científico y tecnológico y así fomentar en los el interés por la investigación.
- Direciona al Ministerio de Educación Nacional a desarrollar una política en la cual se promueva y estimule la investigación científica y tecnológica.
- Fija la participación del Director de COLCIENCIAS en el Foro Educativo Nacional, estamento que deberá elaborar propuestas anualmente a la Junta nacional de Educación y a las autoridades nacionales por convocatoria del Ministerio de Educación Nacional.
- Desarrolla todo el régimen relacionado con los estímulos a los que tienen derecho las personas que desarrollen actividades de investigación en ciencia y tecnología; Cabe anotar que el decreto 1742 de 1994 reglamenta el articulo 185 de la ley que trata todo el tema relacionado sobre dichos estímulos. Todo lo anteriormente expuesto tiene sustento de carácter constitucional ya que en el articulo 71 de la Carta señala la creación por parte del Estado de incentivos para personas e instituciones que desarrollen fomenten la ciencia y la tecnología; De otra parte existe también un sustento legal debido a que el articulo 8o de la ley 29 de 1990 conocida como la ley de la Ciencia y la Tecnología junto con la Ley 115 de 1994 prevén que el estado mediante sus entidades territoriales pueden otorgar los estímulos ya mencionados.

1.5.8 Decreto 1742 de 1994

Este decreto que consta de 12 artículos, nació en desarrollo del artículo 71 de la Constitución Política, el cual establece que el Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades (Ver Anexo Nº 12). Dichos incentivos serán otorgados a través del Ministerio de Educación Nacional y con la participación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas", Colciencias; a su vez estos organismos crearan y reglamentarán los requisitos y las condiciones para acceder a estos estímulos.

El articulo 3 del presente decreto suscribe: “Los estímulos se calcularán con base en el salario mínimo mensual legalmente vigente en el momento de publicarse los resultados de las convocatorias se pagarán en una o varias cuotas, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y de tesorería de Colciencias, para un período de doce (12) meses. Su monto dependerá de la categoría en que quede clasificado el investigador como resultado de su participación en la convocatoria y de la selección de candidatos que realice el Comité de Selección y Clasificación” mientras que el articulo 4 consagra, que para efectos del reconocimiento de los estímulos, los investigadores, independientemente de que desarrollen su actividad en el sector público o privado y dentro de criterios de búsqueda de la excelencia, serán seleccionados y clasificados en las siguientes categorías: CATEGORIA A [22] CATEGORIA B[23] CATEGORIA C[24] y CATEGORIA D[25].

---

[22] En esta categoría, se seleccionarán y clasificarán los más destacados investigadores activos que, a juicio del Comité de Selección y Clasificación, individualmente o, preferiblemente, liderando un grupo de investigación hayan demostrado su capacidad de liderazgo científico a través de publicaciones recientes de reconocimiento internacional, o quienes en el campo de la técnica, la educación o la cultura hayan logrado patentes o registrado cualquier otra forma de propiedad intelectual, de reconocida importancia

Consideramos que esta clasificación puede, de alguna manera, minimizar la actividad investigativa de personas que no cuentan con reconocimientos pero que pueden tener muy buenos proyectos de investigación en ciencia y tecnología y necesitan más incentivos monetarios para llevar a cabo su investigación.

A manera de conclusión podemos decir que este decreto estimula en todos los campos de interacción, la investigación en ciencia y tecnología; cuestión que queda demostrada en el parágrafo 1 del articulo 6[26].

1.5.9 Decreto 2934 de 1994

Por el cual se aprueba el Acuerdo número 0021 de 1994 que establece la estructura interna del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas", Colciencias y se determinan las

---

comercial o social. Además deberán haber formado discípulos destacados, lo que documentarán certificando la dirección de tesis de pre y posgrado, y las realizaciones de estos

[23] En esta categoría se seleccionarán y clasificarán los más destacados investigadores activos que, a juicio del Comité de Selección y Clasificación, trabajando preferiblemente en grupos de investigación hayan logrado un sólido prestigio nacional o internacional en su campo, demostrando a través de publicaciones recientes de reconocimiento internacional, o quienes en el campo de la técnica, la educación o la cultura hayan logrado desarrollos e innovaciones útiles, demostrables preferiblemente a través de patentes o de cualquier otra forma de propiedad intelectual. Además que hayan dirigido tesis de pregrado o posgrado o que tengan discípulos con realizaciones.

[24] En esta categoría se seleccionarán y clasificarán los investigadores activos más destacados que, a juicio del Comité de Selección y Clasificación, haciendo parte, preferiblemente, de grupos de investigación estén en vías de consolidar un prestigio investigativo, que tengan publicaciones recientes de reconocimiento internacional o comiéncen a producir innovaciones o desarrollos útiles demostrables a través de solicitud de patente o de cualquier forma de derechos de propiedad intelectual y que preferiblemente hayan dirigido proyectos de grado.

[25] En esta categoría se seleccionarán y clasificarán los más destacados estudiantes, o los profesionales que hayan recibido su título en el último año, que, a juicio del Comité de Selección y Clasificación, hayan mostrado un alto potencial como investigadores activos, a través de la calidad de sus publicaciones o desarrollos investigativos en el campo de la ciencia, la técnica, la educación o la cultura.

[26] COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1742 de 1994.Art.6 PARAGRAFO 1. Cuando el investigador resida y trabaje en un municipio de menos de dos millones de habitantes, los estímulos se aumentarán en un 10%.

funciones de sus dependencias. (Ver anexo Nº 13) Las dependencias claves para la investigación en ciencia y tecnología son:

a. Dirección General [27]:

El objetivo básico de la Dirección de Colciencias será dirigir, orientar, supervisar y controlar todas las operaciones de la entidad, con miras al mejor cumplimiento de la misión de la entidad y de las funciones asignadas por la ley.

b. Secretaría General[28]

El objetivo básico de la Secretaría General es registrar los actos y custodiar los documentos provenientes de la gestión del Instituto y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, incluidos los convenios y contratos, así como las decisiones tomadas por los Consejos. Igualmente, asesorará al Director de Colciencias en todos los asuntos jurídicos que demande el cumplimiento de las funciones de la entidad, y desarrollará las actividades necesarias para garantizar que todas las operaciones de la entidad y del sistema se enmarquen dentro de la normatividad vigente.

c. Oficina de Regionalización [29]

El objetivo básico de la Oficina de Regionalización es la implantación, coordinación y seguimiento de la estrategia de regionalización de la ciencia y la tecnología, definida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

d. Oficina de Registro de Proyectos [30]

El objetivo básico de esta Oficina es registrar los proyectos que ingresan a Colciencias, organizar y asegurar el funcionamiento de los bancos de evaluadores y constituir el banco de proyectos financiados por la entidad.

e. Subdirección de Programas Estratégicos [31]

---

[27] COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2934 de 1994.Articulo 3
[28] Ibíd..Articulo 5
[29] Ibíd. Articulo 9
[30] Ibíd. Articulo 11

El objetivo básico de la Subdirección de Programas Estratégicos es impulsar y coordinar estrategias de desarrollo científico y tecnológico que apoyen el desarrollo de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología y los Programas Nacionales de Innovación y Desarrollo Empresarial. Por medio de estas estrategias se busca consolidar la comunidad científica colombiana, incorporar la ciencia y la tecnología a la cultura nacional, lograr una adecuada comunicación de los resultados obtenidos por los programas del Instituto, fomentar la internacionalización de las actividades científicas y tecnológicas que se desarrollan en el país, y facilitar el acceso a información científica y tecnológica que sea relevante para el desarrollo nacional.

Para lograr lo anterior, la subdirección elaborará planes estratégicos de mediano y largo plazo que puedan orientar el desarrollo del país en este campo.

f. División de Internacionalización de la Ciencia.[32]

El objetivo básico de esta división es promover la internacionalización de las actividades científicas y tecnológicas y ejecutar las políticas, estrategias y agendas, definidas por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y la Dirección de Colciencias.

g. División de Sistemas de Información para la ciencia y la Tecnología [33]

El objetivo de esta División es promover el desarrollo de mecanismos e instrumentos de captación, procesamiento y difusión de información que sirva de soporte al avance del conocimiento, así como disponer la organización requerida para que el sistema de información sea conocido por la comunidad científica.

---

[31] Ibíd. Articulo 13
[32] Ibíd. Articulo 15
[33] Ibíd. Articulo 17

h. División de Planeación Estratégica y Evaluación [34]

El objetivo básico de la División de Planeación Estratégica y Evaluación es brindar apoyo a los diversos programas nacionales y regionales en lo referente a la planeación estratégica, al análisis prospectivo, a la metodología de evaluación de los programas de investigación, a la generación de indicadores de desarrollo científico y tecnológico, y a la evaluación del impacto que están logrando los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que adelanta el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

i. División de Recursos Humanos y Fortalecimiento de la Comunidad Científica[35]

El objetivo básico de la División de Recursos Humanos y Fortalecimiento de la Comunidad Científica es el diseño de los planes y programas de formación de recursos humanos en materia de ciencia y tecnología que se deberán impulsar en el país, en los distintos niveles educativos, velando porque su adecuada ejecución asegure el fortalecimiento creciente de la comunidad científica y tecnológica nacional.

j. División de Ciencia, Cultura y Comunicación[36]

El objetivo básico de la División de Ciencia, Cultura y Comunicación, es la adopción y desarrollo de la estrategia de Ciencia, Cultura y Comunicación definida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y las autoridades de Colciencias, buscando la conformación y consolidación de una cultura científica y tecnológica en el país.

k. Subdirección de Programas de Desarrollo Científico y Tecnológico [37]

[34] Ibíd. Articulo 19
[35] Ibíd. Articulo 21
[36] Ibíd. Articulo 23
[37] Ibíd. Articulo 25

El objetivo básico de la Subdirección de Programas de Desarrollo Científico y Tecnológico es coordinar y supervisar el desarrollo de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología, velando porque todas sus actividades estén dirigidas a contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, dentro del marco de políticas y estrategias establecido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

l. Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología[38]

El objetivo básico de los programas es implantar la política y las estrategias definidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el ámbito específico de sus programas.

m. Subdirección de Programas de Innovación y Desarrollo Empresarial [39]

El objetivo básico de la Subdirección de Programas de Innovación y Desarrollo Empresarial es fortalecer la competitividad del sector productivo, fomentar procesos de innovación en este último, y coordinar y supervisar el desarrollo de los programas nacionales a su cargo, velando por asegurar una estrecha interacción entre el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sector Productivo.

n. Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología en Innovación y Desarrollo Empresarial [40]

El objetivo básico de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología en Innovación y Desarrollo Empresarial es desarrollar la política y las estrategias definidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el ámbito específico de los respectivos programas, para mejorar la competitividad del Sector Productivo Nacional.

---

[38] Ibíd. Articulo 27
[39] Ibíd. Articulo 29
[40] Ibíd. Articulo 31

o. Subdirección Financiera y Administrativa [41]

El objetivo básico de la Subdirección Financiera y Administrativa es la planeación, manejo y control integral de los recursos financieros y administrativos de Colciencias, y el desarrollo de las actividades de apoyo requeridas por el Instituto, todo ello dentro de una política de mejoramiento continuo y calidad total.

p. División de Coordinación de Crédito Externo [42]

El objetivo básico de la División de Coordinación de Crédito Externo es el registro, administración y control de los recursos de crédito externo, velando porque éstos fluyan de manera consistente con los planes y programas establecidos por las autoridades de Colciencias y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

q. División Financiera [43]

Su objetivo básico es garantizar la adecuada programación de los recursos para el desarrollo de los planes y programas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, así como el correcto y oportuno registro de operaciones presupuéstales y contables.

1.5.10 Ley número 397 de 1997

Por medio de esta ley, se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política. Comienza, mencionando que el desarrollo económico y social deberá articularse estrechamente con el desarrollo cultural, científico y tecnológico. Bien es sabido que lo anteriormente mencionado hace relación al el plan de desarrollo elaborado por el gobierno. Por lo tanto, este debe tener presente el plan nacional de cultura. (Ver anexo Nº 16)

---

[41] Ibíd. Articulo 35
[42] Ibíd. Articulo 37
[43] Ibíd. Articulo 39

Por otro lado, garantiza la libre investigación y fomentará el talento investigativo dentro de los parámetros de calidad, rigor y coherencia académica. Artículo similar al 70 del Decreto 393, definiendo los lineamientos de la investigación y lo desarrolla en artículos posteriores, tales como el 17. En el mismo, afirma que el Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacífica. En cuanto a los estímulos para promocionar la creación y la investigación, dice que es el Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales quien se encargará.

Para ello establecerá, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo en varias expresiones culturales.

En adición a lo anterior encarga al Ministerio de Cultura y las entidades territoriales la creación de programas de estímulo a la investigación a través de convenios con las universidades e institutos dedicados a la investigación histórica, científica y artística nacional e internacional.

1.6 INCENTIVOS TRIBUTARIOS

El estímulo a la actividad científica y tecnológica, a través de herramientas fiscales, es reciente en nuestro país. Solo a partir de la expedición de la Ley 06 de 1992, se dio paso a este tipo de incentivos. Actualmente, existen los siguientes incentivos:

- **Deducciones por inversiones directas que hagan las empresas en proyectos de innovación y desarrollo tecnológico**.

Este beneficio, estaba estipulado en primera instancia, en el articulo 57[44] de la ley 383 de 1997 (ver anexo Nº 15) y es entendido como la posibilidad que tienen las empresas de deducir del impuesto de renta que tienen que declarar, el ciento veinticinco por ciento del valor invertido o donado en proyectos o desarrollo de actividades científicas. Más tarde fue modificado por el articulo 12 de la ley 633 de 2000 (Ver anexo Nº 17)[45]que delimito las instituciones

[44] COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 383 de 1997. Artículo 57. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:
"Artículo 126-3. Deducción por inversiones o donaciones para proyectos de investigación o desarrollo científico o tecnológico: Las personas jurídicas, contribuyentes del impuesto sobre la renta que realicen inversiones o hagan donaciones para proyectos de investigación o desarrollo de actividades calificadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como de carácter científico o tecnológico, tendrán derecho a deducir de su renta el ciento veinticinco por ciento (125%) del valor invertido o donado, en el periodo gravable en que se realizó la inversión o donación.

[45] COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA **Artículo 12 Artículo 12º.** Modifícase el artículo 158-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: "**Artículo 158-1. Deducción por inversiones en desarrollo científico y tecnológico**. Las personas que realicen inversiones directamente o a través de Centros de Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico, constituidos como entidades sin ánimo de lucro, o Centros y Grupos de Investigación de Instituciones de Educación Superior, reconocidos por Colciencias, en proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico o de innovación tecnológica, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o en proyectos de formación profesional de instituciones de educación superior estatales u oficiales y privadas, reconocidas por el Ministro de Educación Nacional, que sean entidades sin ánimo de lucro y que en un proceso voluntario hayan sido acreditadas u obtenido acreditación de uno o varios programas, tendrán derecho a deducir de su renta el ciento veinticinco por ciento (125%) del valor invertido en el período gravable en que se realizó la inversión. Los proyectos de inversión deberán desarrollarse en áreas estratégicas para el país tales como ciencias básicas, ciencias sociales y humanas, desarrollo industrial, ciencias agropecuarias, medio ambiente, hábitat, educación, salud, electrónica, telecomunicaciones, informática, biotecnología, minería y energía. Esta deducción no podrá exceder del
veinte por ciento (20%) de la renta líquida, determinada antes de restar el valor de la
inversión.

receptoras de las correspondientes donaciones; además también estableció los campos en los cuales el proyecto debe fijar su meta. Esta deducción no puede exceder en veinte por ciento (20%) de la renta liquida, determinada antes de restar el valor de la inversión.

- **Exenciones del IVA en las importaciones de elementos y quipos realizadas por instituciones de educación y centros de investigación y altos estudios.**

Nuestra legislación, en el Artículo 30 Ley 633 de 2.000**,** otorga a Los equipos y elementos que importen los Centros de Investigación y los Centros de

---

Cuando la inversión se realice en proyectos de formación profesional desarrollados por Instituciones de Educación Superior señaladas en el inciso anterior, estas deberán demostrar que la inversión se destinó al programa o programas acreditados.
También recibirán los mismos beneficios los contribuyentes que realicen donaciones e inversión para adelantar proyectos de inversión agroindustrial calificados por la entidad gubernamental competente, siempre y cuando sean desarrollados por entidades sin ánimo de lucro, reconocidos como tales por el Ministerio de Agricultura.
Esta deducción no podrá exceder del 20% de la renta líquida determinada antes de restar el valor de la inversión.
El Gobierno reglamentará los procedimientos de control, seguimiento y evaluación de los proyectos calificados.
Parágrafo 1º: Las personas podrán optar por la alternativa de deducir el ciento veinticinco por ciento (125%) del valor de las donaciones efectuadas a centros o grupos a que se refiere este artículo, siempre y cuando se destinen exclusivamente a proyectos calificados previamente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los proyectos a los cuales se dirija la donación deberán desarrollarse igualmente en áreas estratégicas para el país tales como ciencias básicas, ciencias sociales y humanas, desarrollo industrial, ciencias agropecuarias, medio ambiente, hábitat, educación, salud, electrónica, telecomunicaciones, informática, biotecnología, minería, energía, o formación profesional de instituciones de educación superior estatales u oficiales y privadas, reconocidas por el Ministro de Educación Nacional, que sean entidades sin ánimo de lucro y que en un proceso voluntario hayan sido acreditadas u obtenido acreditación de uno o varios programas. Esta deducción no podrá exceder del veinte por ciento (20%) de la renta líquida, determinada antes de restar el valor de la donación. Serán igualmente exigibles para la deducción de donaciones los demás requisitos establecidos en los artículos 125-1, 125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario. Cuando la donación se realice a proyectos de formación profesional desarrollados por Instituciones de Educación Superior señaladas en el inciso anterior, estas deberán demostrar que la donación se destinó al programa o programas acreditados.

Parágrafo 2º: Para que proceda la deducción de que trata el presente artículo y el parágrafo 1º, al calificar el proyecto, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología deberá evaluar igualmente su impacto ambiental. En ningún caso el contribuyente podrá deducir simultáneamente de su renta bruta, el valor de las inversiones y donaciones de que trata el presente artículo".

Desarrollo Tecnológico reconocidos por Colciencias, así como las instituciones de educación superior, y que estén destinados al desarrollo de proyectos previamente calificados como de investigación científica o de innovación tecnológica por Colciencias, estarán exentos del impuesto sobre las ventas (IVA).

Los proyectos deberán desarrollarse en las áreas correspondientes a los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología que formen parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
Como falencia encontramos una clara restricción para poder gozar de este beneficio ya que solo son están exentos e pagar IVA los centros de investigación y universidades, con lo que se limita su uso por parte de otro tipo de instituciones privadas que realizan actividades científicas y tecnológicas.

- **Exención del IVA para la compra de computadores**

La exclusión del IVA en la importación y venta de computadores personales, contenida en el decreto 406 de 2001[46], se aplicará teniendo en cuenta el valor de US$1.500 CIF unitario en el momento de la importación o de la venta, independientemente de la cantidad de equipos amparados por la declaración de importación o la factura.

[46]COLOMBIA. Decreto 406 de 2001. Artículo 20. *Exclusión de IVA para computadores personales.* Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 424 del Estatuto Tributario, y por los años 2001, 2002 y 2003, la exclusión del IVA en la importación y venta de computadores personales se aplicará teniendo en cuenta el valor de US$1.500 CIF unitario en el momento de la importación o de la venta, independientemente de la cantidad de equipos amparados por la declaración de importación o la factura. En los términos del inciso anterior y con el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 424 del Estatuto Tributario estarán excluidas del IVA las siguientes importaciones y ventas:
1. Computadores portátiles.
2. Computadores personales de escritorio, conformados por Unidad Central de Proceso y monitor.
3. Unidades Centrales de Proceso (CPU), con teclado, mouse, manuales, cables, parlantes, sistema operacional preinstalado y habilitadas para acceso a Internet.
Parágrafo. La exigencia de parlantes para acceder a la exclusión del IVA se entenderá cumplida cuando la CPU incorpore tarjeta de sonido.

En los términos del inciso anterior y con el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 424 del Estatuto Tributario estarán excluidas del IVA las siguientes importaciones y ventas:

1. Computadores portátiles.
2. Computadores personales de escritorio, conformados por Unidad Central de Proceso y monitor.
3. Unidades Centrales de Proceso (CPU), con teclado, mouse, manuales, cables, parlantes, sistema operacional preinstalado y habilitadas para acceso a Internet.

Cabe aclarar que este beneficio quedara derogado a partir del 1 de enero de 2004, de acuerdo con lo estipulo en articulo 424[47] de la ley 788 de 2002.

- **Exención del impuesto de renta.**

El Artículo 18 numeral 8 de la Ley 788 de 2002[48] establece son rentas exentas por los nuevos productos medicinales y el software, elaborados en Colombia y amparados con nuevas patentes registradas ante la autoridad competente, siempre y cuando tengan un alto contenido de investigación científica y tecnológica nacional, certificado por Colciencias o quien haga sus veces, por un término de diez (10) años a partir de la vigencia de la presente ley.

---

[47] Artículo 424. *Bienes excluidos del impuesto.* Los siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto a las ventas Por el año 2003, los computadores personales de un solo procesador, portátiles o de escritorio, habilitados para uso de Internet, con sistema operacional preinstalado, teclado, mouse, parlantes, cables y manuales, hasta por un valor CIF de mil quinientos dólares (US $1.500).

[48] Artículo 18. *Otras rentas exentas.* Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:

"Artículo 207-2. *Otras rentas exentas:* Son rentas exentas las generadas por los siguientes conceptos, con los requisitos y controles que establezca el reglamento:

8. Los nuevos productos medicinales y el software, elaborados en Colombia y amparados con nuevas patentes registradas ante la autoridad competente, siempre y cuando tengan un alto contenido de investigación científica y tecnológica nacional, certificado por Colciencias o quien haga sus veces, por un término de diez (10) años a partir de la vigencia de la presente ley.

1.7. LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA

A parte de las leyes y los decretos mencionados anteriormente, también encontramos diferentes estipulaciones que complementan la política en ciencia y tecnología en el país.

- **Decreto 584 de 1991:** (Ver anexo Nº 3)Por el cual se reglamentan los viajes de estudio al exterior de los investigadores nacionales.
- **Decreto 589 de 1991**: (Ver anexo Nº 5)Por el cual se modifica el decreto 3068 de 1968, estatuto orgánico del fondo nacional de proyectos de desarrollo - FONADE -.
- **Decreto 590 de 1991: (** Ver anexo Nº 6**)**Por el cual se reorganiza la administración y manejo de FONDANE
- **Ley 344 de 1996:** (Ver anexo Nº 14 Art. 16) Mediante la cual el SENA asigna el 20% de su presupuesto para el financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico productivo.
- **Decreto 2591 de 2000:** Por el cual se reglamenta la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena
- **Ley 666 de 2001:** (Ver anexo Nº 19) Por medio de esta norma se modifica el artículo 38 de la Ley 397 de 1997, en el sentido que se autoriza a las asambleas departamentales, a los concejos distritales y a los concejos municipales para que ordenen la emisión de una estampilla "Procultura".
- **Resolución interna de Colciencia Nº 84:** (Ver anexo Nº) por la cual se regula lo relativo al reconocimiento de los Centros de Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico y Centros y Grupos de Investigación de Instituciones de Educación Superior para los efectos previstos en los artículos 12 y 30 de la Ley 633 de 2000
- **Acuerdo Nº 4 de 2002. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología** (Ver anexo Nº 21) Por la cual se reconocen como Comisiones

regionales de C y T, a los Consejos Comités o Comisiones de Ciencia y Tecnología del orden departamental creadas por las autoridades territoriales competentes.

2. DERECHO COMPARADO

2.1 CHILE[49]

Dispone la Constitución Chilena de 1989 en su artículo 19:

La Constitución asegura a todas las personas:

10º El derecho a la educación.

- La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.

Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. La educación básica es obligatoria, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población.

Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; **estimular la investigación científica y tecnológica**, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación. (Sin resaltar el original)

- Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.

En desarrollo a estos mandatos constitucionales en 1995, y mediante la expedición del Decreto 20, el Gobierno Chileno creó la Comisión Asesora Presidencial en Materias Científicas, órgano asesor del Presidente de la

[49] Consultado el día 12 de diciembre de 2002 en: www.cab.int.co/cab/infos/infolegi/chile.

República en la identificación de acciones que impulsen el desarrollo coordinado de la ciencia en el país.

Esta Comisión asesora al Presidente de la República en los siguientes aspectos:

a) La formulación de planes, programas, proyectos y acciones destinados a crear condiciones que estimulen el desarrollo de la ciencia.
b) Las iniciativas que incentiven la investigación por parte de la comunidad científica.
c) Las medidas e instrumentos que sean adecuados para el perfeccionamiento de la institucionalidad científica.
d) Las medidas que propendan a mejorar las relaciones entre la actividad científica, la educación en todos sus niveles y la actividad económica.
e) El análisis de las propuestas que sobre las temáticas anteriores surjan de las agencias, consejos y otras instancias de la organización científica.

La Comisión cuenta con todo el respaldo gubernamental, en la medida en que la Presidencia de la República está obligada a prestar el apoyo técnico y administrativo que sea necesario para su funcionamiento y las autoridades y directivas de los órganos de la administración del Estado deberán prestarle toda la colaboración requerida.

De otra parte, mediante la Ley 16.746 de 1968, se crea una corporación autónoma de derecho público, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, también asesora del Presidente de la República, a través del Ministerio de Educación Pública en el planeamiento, fomento y desarrollo de las investigaciones en el campo de las ciencias puras y aplicadas.

Este órgano debe desarrollar, promover y fomentar la ciencia y la tecnología en Chile, orientándolos preferentemente al desarrollo económico y social del país.

Esta comisión tiene a su cargo la importante misión de formular el Plan Nacional de Desarrollo Científico y tecnológico.

Así mismo, tiene entre otras, las siguientes funciones:

a) Coordinación de las actividades del sector público y privado.
b) Asesoría en la programación de inversión y preparación de presupuestos de las instituciones que reciban aportes del Estado para actividades científicas y tecnológicas.
c) Formulación de políticas.
d) Representación técnica del Supremo Gobierno en los eventos nacionales o internacionales de carácter científico y tecnológico.
e) Promoción de la formación de científicos y técnicos y la difusión de la ciencia.
f) Creación o participación en la creación y funcionamiento de entidades o instituciones de investigación, documentación e información científica y tecnológica, sea en su capital, financiamiento o directorio.

Es necesario resaltar la muy importante facultad que le ha otorgado la ley a la comisión para promover la creación, en los ministerios o instituciones responsables de los programas económicos y sociales de cada sector, de oficinas o unidades especializadas que, bajo su coordinación técnica, constituyen las unidades ejecutoras y coordinadoras del Plan de Desarrollo Científico y tecnológico.

También dentro de su función coordinadora, la Comisión debe vincularse con los organismos de educación superior.

Al analizar la institucionalidad chilena para el desarrollo científico y tecnológico, al lado de las entidades públicas y privadas y de las instituciones de educación superior que desarrollan investigación, surge la figura de las corporaciones de

integración mixtas**,** con régimen de derecho privado, autónomas y sin fines de lucro, con importantes funciones en estas materias:

Es el caso de la Corporación de Investigación Tecnológica INTEC - CHILE, la cual tiene por objeto el estudio de los procesos científicos y técnicos de las actividades productoras y la investigación científica y tecnológica, como medio de colaborar al desarrollo económico del país.

Otro caso es el la Fundación Chile, también organismo sin fines de lucro, de derecho privado cuyo objeto es realizar investigación científica y tecnológica y aplicar los avances científicos y tecnológicos que obtenga, en las áreas de producción que correspondan.

Ahora bien, en materia de estímulos a los investigadores**,** la Ley 16.746 creó el Premio Nacional de Ciencias, otorgable anualmente, en forma alternada a las diferentes áreas del conocimiento científico del hombre o de la naturaleza. Este premio se concede al científico o al equipo de científicos cuya obra en el campo de las ciencias puras o aplicadas se haga acreedor a tal distinción.

En materia de financiamiento, debe señalarse los importantes mecanismos institucionales con que cuenta Chile.

En primer lugar, mediante el Decreto con fuerza de Ley 33 de 1982 se crea el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, destinado a financiar proyectos y programas de investigación científica y tecnológica.

Este Fondo está formado por:

a) Los aportes que anualmente le asigna la Ley de Presupuesto de la Nación.
b) Herencias legados y donaciones con que resulte favorecido.
c) Recursos que el Gobierno reciba de asistencia técnica internacional.

El mismo Decreto creó el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico integrado por el Ministro de Educación Pública, quien lo preside, el Ministro de Hacienda y el Ministro Director de la Oficina de Planificación Nacional, con la función principal de establecer anualmente, dentro de la disponibilidad del Fondo, montos globales para la investigación en Ciencia Básica y de Desarrollo de Tecnología, los que a su vez, son asignados por el Consejo Superior de Ciencia.

La asignación de los recursos se hace mediante concurso nacional de proyectos a través de CONICYT, al cual pueden postularse las universidades, los institutos profesionales, las instituciones públicas y privadas del país y cualquier persona natural residente en Chile.

Para la asignación el Consejo Superior de Ciencia debe utilizar como criterios principales de selección, la contribución del proyecto al enriquecimiento científico de la Nación y la idoneidad del personal encargado de dirigir y desarrollar el proyecto.

A su vez, el Consejo Superior está facultado para hacer el seguimiento a los proyectos financiados y al mismo tiempo debe publicar anualmente los resultados de los proyectos y los recursos asignados.

Así mismo, se creó el Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico cuya función principal, de manera similar, es la de asignar los recursos que el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico destine al desarrollo de la tecnología.

En 1992 se utilizó otro mecanismo de coordinación de la ejecución de recursos, se trata de un convenio entre el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y CONICYT con el propósito de colaborar en la operación del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDEF.

FONDEF es un mecanismo de financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo, de servicios científicos y tecnológicos y de infraestructura científica-tecnológica, inscritos en el área de minería, agropecuaria, pesca, manufactura e informática y forestal, cuyos ejecutores son instituciones sin fines de lucro.

La misión del FONDEF es contribuir al aumento de la competitividad del sistema productivo del país en los mercados globales, mediante la aplicación de la ciencia y la tecnología, el desarrollo de capacidades científico-tecnológicas, tanto institucionales como regionales y la vinculación entre estas capacidades y los requerimientos tecnológicos de las empresas chilenas.

Por último, en materia de financiamiento deben mencionarse fondos sectoriales de financiación como, por ejemplo, el Fondo de Investigación Pesquera y el Fondo de Investigación Agropecuaria.

En conclusión, al revisar la institucionalidad chilena para el apoyo de la ciencia y la tecnología, debe resaltarse de una parte el importante estatus otorgado a las instancias comprometidas con estas tareas y, de la otra, los mecanismos de financiamiento.

2.1.1 Incentivos Tributarios

- **Deducciones por donaciones para la ciencia y la tecnología en el Impuesto sobre la Renta**

La legislación chilena ha establecido un tratamiento especial para las donaciones que efectúen los contribuyentes declarantes del Impuesto a la Renta a establecimientos de educación y al Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y las instituciones sin fines de lucro cuyo objeto sea la creación, investigación o difusión de las artes y las ciencias.

Este beneficio consiste en la posibilidad de que se consideren las donaciones como gastos, para efectos de determinar la renta líquida imponible gravada, en

el año en que realmente se efectúen, previa acreditación de los documentos que determine el Director de Impuestos Internos.

Así mismo, la Ley 18.681 de 1987 otorgó un descuento tributario por las sumas donadas a universidades e institutos profesionales estatales y particulares reconocidos por el Estado efectuadas por contribuyentes del impuesto de primera categoría o los contribuyentes del Impuesto Global Complementario.

Este beneficio, es entendido como la posibilidad de deducir de los impuestos hasta un 30% de las sumas donadas en el ejercicio en que efectivamente se haga el desembolso, sin que exceda de 14.000 U.T.M[50]. Cada año y no podrán exceder del monto del impuesto respectivo determinado por el ejercicio, después de rebajar las contribuciones de bienes raíces, cuando corresponda.

Deben cumplirse los siguientes requisitos:

1. Los contribuyentes deben declarar sus rentas efectivas, determinadas mediante contabilidad completa y deben tributar conforme a las normas del impuesto de primera categoría.

2. Las donaciones deben estar incluidas en la declaración respectiva.

3. Las donaciones deben consistir en dinero, y deben ser destinadas a financiar proyectos de investigación o la adquisición de bienes inmuebles y equipamiento.

4. El Ministerio de Educación Pública debe visar, mediante resolución exenta, las donaciones.

Es importante anotar que por expresa disposición legal, los bienes adquiridos con las donaciones quedan afectados a los fines de la docencia, investigación y extensión de la institución beneficiada.

[50] Entendemos este concepto como una unidad de valor constante.

En resumen, las actividades científicas y tecnológicas desarrolladas por entidades sin ánimo de lucro solo están sujetas al impuesto de primera categoría del 15% pero no al impuesto global complementario; las rentas obtenidas por personas que realizan actividades de ciencia y tecnología están sujetas al sistema impositivo general y por último, no se ha previsto exención de IVA para los organismos científicos y tecnológicos.

2.1.2 Recopilación normativa sobre ciencia y tecnología nacional, Chile [51]

2.1.2.1 Leyes nacionales de fomento de la ciencia y tecnología

- **Constitución Política de la República de Chile.**

Constitución Política de la República de Chile, artículo 19 Nos. 10, 22 y 25, promulgada por decreto supremo Nº 1.150 Ministerio del Interior, 21 de octubre de 1980, publicado en Diario Oficial 24 de octubre de 1980

- **Ley sobre propiedad industrial**.

Ley Nº 19.039. Establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial. Publicada en Diario Oficial 25 de enero de 1991, rectificada en Diario Oficial 2 de febrero de 1991

- **Reglamento sobre propiedad industrial.**

Decreto supremo Nº 177 Ministerio de Economía 6 de mayo de 1991. Aprueba reglamento de la ley 19.039. Publicada en Diario Oficial 30 de septiembre de 1991

- **Convenio de París**.

---

[51] Documento preparado por: Sergio Pablo Bazzurro Jorquera, Jefe Departamento Jurídico con la colaboración de José Luis Bravo Ortiz, Abogado Departamento Jurídico del convenio Andrés Bello

Decreto supremo Nº 425 Ministerio de Relaciones Exteriores 8 de abril de 1991. Promulga el “Convenio de París para la protección de propiedad industrial”. Publicado en Diario Oficial 30 de septiembre de 1991

2.1.2.2 Estatutos de organismos nacionales de ciencia y tecnología

- **Comisión Asesora Presidencial en Materia Científica**.

Decreto Nº 20 Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 20 de enero de 1995. Crea Comisión Asesora Presidencial en Materia Científica. Publicado en Diario Oficial. 2 de marzo de 1995.

- **Comisión Nacional de Medio Ambiente.**

Ley Nº 19.300 artículo 69º y siguientes. Crea la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA). Publicada en Diario Oficial. 9 de marzo de 1994.

Modificación (es) y u o normas complementarias:

Artículo único de la ley Nº 19.372, publicada en Diario Oficial. 8 de febrero de 1995.

- **Agencia de Cooperación Internacional**.

Ley Nº 18.989 Crea Ministerio de Planificación y Cooperación. Artículo 17 y siguientes crean la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI). Publicada en Diario Oficial 19 de julio de 1990.

Modificación (es) y u o normas complementarias:

Artículo 23 ley Nº 19.041, publicada Diario Oficial. 11 de febrero de 1991.

Artículo único ley Nº 19.107, publicada Diario Oficial. 30 de diciembre de 1991. Artículo 64 ley Nº 19.284, publicada Diario Oficial. 14 de enero de 1994.

- **Instituto Antártico Chileno.**

Decreto con fuerza de ley Nº 82 de 1979 Ministerio Relaciones Exteriores, publicado en Diario Oficial. 19 de marzo de 1979. Estatuto orgánico del Instituto Antártico Chileno (INACH)

Decreto Nº 266 Ministerio Relaciones Exteriores. 6 de marzo de 1991. Crea Consejo Asesor del Instituto Antártico Chileno (INACH). Publicado en Diario Oficial. 3 de mayo de 1991

Modificación (es) y u o normas complementarias:

Artículo 105 ley Nº 18.768, publicado Diario Oficial. 29 de diciembre de 1988.

- **Corporación de Fomento a la Producción.**

Ley Nº 6.640. Corporación de Fomento a la Producción (CORFO)

- **Instituto de Fomento Pesquero.**

Decreto supremo Nº 1546 Ministerio de Justicia. 26 de mayo de 1964. Concede personalidad jurídica a Instituto de Fomento Pesquero, en carácter de fundación de derecho privado. Publicado Diario Oficial. 12 de junio de 1964. Estatutos contenidos en escrituras públicas de 6 de enero y 18 de mayo de 1964, otorgadas ante los notarios de Santiago, don Gustavo Infante Lecaros, suplente del titular don Javier Echeverría Vial y don Eliseo Peña Abos-Padilla, respectivamente.

Modificación (es) y u o normas complementarias:

Decreto supremo Nº 495 Ministerio de Justicia, 19 de mayo de 1981. Publicado Diario Oficial. 19 de junio de 1987. Las modificaciones constan en escrituras

públicas de fechas 20 de junio y 29 de diciembre de 1986, otorgadas ante el notario público de Santiago don Hugo Figueroa Figueroa.

- **Centro de Información de Recursos Naturales.**

Decreto supremo Nº 1.118 Ministerio de Justicia. 6 de diciembre de 1985. Concede personalidad jurídica al Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN). Publicado en Diario Oficial. 3 de mayo de 1986.

Modificación (es) y u o normas complementarias:

Decreto Nº 1.006 Ministerio de Justicia. 15 septiembre 1988. Publicado Diario Oficial. 31 de octubre de 1988.

Decreto Nº 1.643 Ministerio de Justicia. 6 de diciembre de 1994. Publicado Diario Oficial. 20 de enero de 1995.

2.2 ESPAÑA[52]

El ordenamiento jurídico español en materia de ciencia y tecnología encuentra su fundamento, como es propio de todos los estados, en claros mandatos constitucionales.

En efecto, la Constitución española de 1978 reconoce y protege, entre otros, los derechos a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

De otra parte, el artículo 44 encarga a los poderes públicos de promover y tutelar el acceso a la cultura —a la que todos tienen derecho—, a la ciencia y a la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

El Estado español tiene competencia exclusiva sobre el fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, según lo establece categóricamente el numeral 15 del Artículo 149 de la Constitución.

En cumplimiento de tales mandatos constitucionales, fue expedida en 1986 la Ley 13**,** Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica**,** la cual contiene importantes disposiciones en estas materias, al tiempo que establece eficaces mecanismos de coordinación, como se expondrá a continuación.

En primer lugar, la Ley crea la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, CICYT, órgano de planificación, coordinación y seguimiento de la Administración General del Estado en materia de investigación, desarrollo e innovación. Este órgano está presidido por el Presidente del Gobierno y cuenta con representantes de los departamentos ministeriales.

A su vez, y en consideración a que los distintos Estatutos de Autonomía habían establecido las competencias de cada Comunidad Autónoma, surgió la

[52]Consultado el día 12 de diciembre de 2002 en: www.cab.int.co/cab/infos/infolegi/españa.

necesidad de coordinar la actuación de éstas en el campo de la investigación, con la Administración del Estado.

Por esto se crea en la Ley mencionada, el Consejo General de Ciencia y Tecnología**,** en el cual tienen asiento representantes de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas, con número igual de votos.

Adicionalmente, y con el propósito de promover la coordinación general de la investigación científica y técnica, la Ley 13 crea el Consejo Asesor para la ciencia y la tecnología, órgano consultivo de la CICYT, cuyo propósito es promover la participación de la comunidad científica y de los agentes económicos y sociales en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Nacional.

Por otra parte, el Real Decreto 1887 de 1996, determina que el Ministerio de Educación y Cultura es el órgano de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y directrices generales del Gobierno sobre las políticas cultural, educativa, científica, tecnológica y deportiva.

Ostenta también este Ministerio, la primera vicepresidencia de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología.

Dentro de la estructura del Ministerio de Educación y Cultura se encuentra la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo, de la cual depende la Dirección General de Investigación y Desarrollo, cuyo titular es a la vez el Secretario General del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

Así mismo, adscrita al Ministerio de Educación y Cultura a través de la Secretaría arriba citada, se encuentra la **Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,** con importantes funciones en materia de evaluación científico-técnica de los equipos de investigación que participen en la ejecución de los

programas del Plan Nacional y el seguimiento de sus resultados. También debe esta Agencia realizar estudios y análisis de prospectiva y actividades de evaluación en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico.

Por último, en referencia a la organización institucional española en materia de ciencia y tecnología, debe mencionarse la Oficina de Ciencia y Tecnología, OCYT, creada en enero de 1998, que adscrita a la Presidencia del Gobierno y bajo la dependencia directa del Director del Gabinete, es una unidad de apoyo a la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) para la planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades de ciencia y tecnología de los distintos departamentos ministeriales y organismos públicos.

Esta oficina también realiza las funciones de coordinación y el seguimiento de los programas internacionales de I+D con participación española. La OCYT presta su asistencia a la CICYT para el desarrollo de las competencias que le atribuye la Ley 13 de 1986.

Como consecuencia de la creación de la citada oficina, el Real Decreto 121 de 1998 modificó la estructura orgánica del Ministerio de Educación y Cultura, suprimiendo las dos Direcciones Generales existentes en la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo, asumiendo la nueva Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica las funciones que venían desempeñando, excepto las que debe ejercer la Oficina de Ciencia y Tecnología.

Vale la pena resaltar que la Ley 13 fue muy cuidadosa en determinar todos los mecanismos de coordinación para el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas. Es así como estableció unas normas comunes de organización para los organismos públicos con funciones de investigación, flexibilizó sus estructuras de gestión y posibilitó la participación en sus órganos de gobierno a representantes de otros organismos con interés científico y tecnológico.

Ahora bien, como órgano de planificación, la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología cumple las funciones que le fueran asignadas por la Ley, mediante el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico "integrador mecanismo de programación ágil y eficaz y, conjuntamente, una metodología adecuada y moderna para hacer frente al complejo proceso de planificación, coordinación y gestión".

El Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico establece los grandes objetivos en investigación científica y tecnológica para períodos plurianuales, ordena las actividades dirigidas a su consecución en programas nacionales, programas sectoriales que desarrollan los distintos ministerios con funciones en estas materias y los programas de las Comunidades Autónomas, financiados total o parcialmente con recursos estatales.

La aprobación del Plan corresponde al Gobierno y su seguimiento y evaluación compete al Parlamento.

Es por esto, que se constituyó la Comisión Mixta del Congreso y el Senado de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico para realizar el seguimiento de las actuaciones de la Administración del Estado en materia de I+D e innovación.

En materia de financiación, la legislación española ha dotado al sistema de importantes mecanismos.

En primera instancia, la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica establece que el Plan Nacional debe incluir las previsiones presupuestarias plurianuales de los organismos de investigación para actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico.

Así mismo, el Plan incluye una valoración precisa de los gastos de personal, operaciones corrientes y de capital necesarios para la elaboración, evaluación, gestión, ejecución y seguimiento de los programas Nacionales de Investigación Científica y Tecnológica, de los programas Sectoriales, de los Programas de las Comunidades Autónomas y de los Programas Nacionales de Formación del Personal Investigador.

Es necesario precisar que el Plan Nacional se financia con fondos procedentes de los presupuestos generales del Estado y de otras Administraciones Públicas, así como con aportaciones de entidades públicas y privadas y con fondos procedentes de tarifas fijadas por el Gobierno.

Corresponde entonces a la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, CICYT, proponer la asignación de los fondos públicos y de los privados acordados, destinados a los diferentes programas que integran el Plan Nacional.

El Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, iniciado en 1988, fue objeto de revisión por parte de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, cuyos resultados fueron sometidos a la aprobación del Consejo de Ministros, el cual aprobó en 1995 las líneas de desarrollo del III Plan Nacional para el período 1996 - 1999.

Con base en el III Plan, la Comisión Permanente de la Comisión Interministerial, mediante Resolución del 21 de septiembre de 1995 resolvió publicar la convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos de investigación y desarrollo tecnológico a las acciones especiales en el marco de los Programas Nacionales incluidos en el Plan Nacional.

A través de las llamadas “ayudas”, se otorga recursos para el desarrollo de proyectos, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

De otra parte, como instrumento de apoyo a las actividades **de investigación y desarrollo industrial** se han establecido importantes medidas financieras como las subvenciones a fondo perdido, los créditos subvencionados y los préstamos reintegrables, entre otros.

a) Las subvenciones de los proyectos concertados son créditos sin interés, concedidos por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial CDTI (sociedad estatal adscrita al Ministerio de Industria y Energía, organismo ejecutor de la política de innovación tecnológica) con el propósito de suministrar financiación a largo plazo en una cuantía hasta del 50 % del proyecto.

En estos proyectos se incluye una cláusula de riesgo técnico, según la cual en caso que se produzca un fracaso en el proyecto, la empresa queda relevada de la obligación de devolver la cantidad aportada; sólo está comprometida a reintegrar la parte de inversión realizada que corresponda al precio de venta de los activos fijos.

b) Así mismo, existe la modalidad más habitual de financiación, la de créditos privilegiados (a bajo interés) para los proyectos de desarrollo tecnológico y los proyectos de innovación tecnológica, los cuales presentan un riesgo técnico medio y un corto período de desarrollo, tienen objetivos más concretos que los proyectos concertados y contribuyen positivamente al desarrollo global de las empresas.

Estos créditos pueden ser hasta del 50% del presupuesto del proyecto. Su plazo de amortización es de 2 a 6 años, y sus intereses oscilan entre el 5 y el 9%.

c) También se han previstos fórmulas conjuntas de financiación entre el CDTI y las entidades bancarias, previa suscripción de convenio de colaboración. En

esta modalidad el CDTI aporta hasta un 25% del presupuesto total del proyecto.

Por último, y como importantes mecanismos de estímulo, debe citarse el Programa Nacional de Formación de Personal Investigador y en segundo lugar, que el Decreto Real 1086 de 1989 introdujo en el régimen retributivo del profesorado universitario un concepto nuevo destinado a incentivar la actividad investigadora mediante la evaluación, en convocatorias anuales, de esta actividad por una Comisión Nacional Evaluadora.

2.2.1 Incentivos tributarios

España ha impulsado diversos instrumentos para apoyar eficazmente las actividades de investigación y desarrollo. Se trata de las medidas financieras ya comentadas y de los incentivos fiscales.

La Ley 43 de 1995, por la cual se adoptan disposiciones relativas al Impuesto sobre Sociedades, constituye el marco normativo de los incentivos fiscales que se describen a continuación.

- **Deducción para las sociedades**

La realización de actividades de investigación y desarrollo otorga al sujeto pasivo el derecho a practicar una deducción de la cuota íntegra del 20 % de los gastos efectuados en el período impositivo.

Adicionalmente la Ley establece que en el caso de que los gastos efectuados en la realización de investigación y desarrollo en el período impositivo sean mayores que la media de los efectuados en los dos años anteriores, la deducción será del 20% hasta dicha media y, el 40% sobre el exceso respecto de la misma.

Se consideran gastos de investigación y desarrollo los realizados por el sujeto pasivo en cuanto estén directamente relacionados con la actividad de investigación y desarrollo en España o por terceros por encargo de aquél.

Debe mencionarse que los incentivos fiscales solo tienen lugar para los proyectos y programas relacionados con actividades de investigación y desarrollo, pero no a los procesos y proyectos de innovación tecnológica.

- **Incentivos para las fundaciones**

Reconociendo que “en las sociedades democráticas desarrolladas constituye una realidad la participación, junto con el sector público, de personas, entidades o instituciones privadas en la protección, el desarrollo y el estímulo de actividades de interés general en las diversas manifestaciones que éstas pueden revestir, desde lo puramente benéfico y asistencial hasta lo cultural y artístico”, la Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación privada en actividades de interés general, entre ellas las científicas y tecnológicas, en desarrollo del artículo 149 de la Constitución, establece un régimen fiscal ventajoso.

En este orden de ideas, la legislación establece:

- Incentivos cuyo propósito es debilitar la imposición sobre los aportes recibidos para aplicación íntegra a los fines de las instituciones y a reducir sus cargas tributarias, permitiendo mayor liberación de sus recursos:

a) Exención en el Impuesto sobre Sociedades por los resultados obtenidos, así como por los incrementos patrimoniales en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social.

b) Exención para los resultados obtenidos, previa aprobación del Ministerio de Economía y Hacienda a solicitud de la entidad interesada.

c) Exención sobre tributos locales, esto es al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y al Impuesto sobre Actividades Económicas que constituyan su objeto social o actividad específica.

- Beneficios fiscales para los aportes que efectúen personas naturales o jurídicas a las fundaciones.

a) Las personas físicas, contribuyentes del Impuesto sobre la Renta tienen derecho a deducir de la cuota del impuesto, el 20% de los donativos que realicen a favor de las fundaciones o asociaciones.

b) Así mismo, las personas jurídicas podrán deducir del Impuesto de Sociedades el importe de los donativos que se realicen a favor de las fundaciones y asociaciones en mención. Esta deducción no puede exceder del 10% de la base imponible previa a esta deducción del donante, correspondiente al ejercicio económico en que se realiza la donación. Alternativamente el contribuyente puede acogerse a los límites del 1 por 1000 y del 3 por 1000 de su volumen de ventas sin que en ningún caso, la aplicación de estos porcentajes pueda determinar una base imponible negativa.

No podría concluirse este análisis sin resaltar el privilegiado estatus que en España se ha dado a la investigación científica, el desarrollo y la innovación, no sólo por las normas constitucionales, ampliamente desarrolladas por la legislación, sino por el alto nivel en que se ubican las diferentes instancias con competencias en estas materias dentro de la organización estatal.

De la misma manera, como se observó, la legislación establece técnicamente rigurosos, pero muy operativos, mecanismos de coordinación, evaluación, planificación y financiación que sin duda sirven de soporte para el logro de las obligaciones estatales a través de sus diferentes órganos, en materia de investigación, desarrollo e innovación.

2.3 VENEZUELA[53]

La promoción y consolidación de las actividades de investigación científica y tecnológica, el fomento y coordinación de los entes que la realizan y la planificación de las actividades del Sector Ciencia y Tecnología, están a cargo del **Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, (CONICIT)**, creado por Ley del 13 de julio de 1967, modificada en 1968 y reglamentada mediante el Decreto No. 879 de 1985.

El CONICIT, instituto autónomo, adscrito al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, actúa además como entidad de vinculación con otros organismos del ejecutivo nacional.

La elaboración del **Plan Nacional de Ciencia y Tecnología** —conjunto de programas y estrategias que rige en períodos de tiempo determinados, para el sector ciencia y tecnología, elaborados de conformidad con los planes generales de la Nación— es también competencia del CONICIT, en consulta con la Oficina Central de Planificación y Coordinación de la Presidencia de la República.

La Ley del CONICIT le ordena a este instituto la elaboración y el mantenimiento de un **registro de informaciones** que dará cuenta de las investigaciones en ciencia y tecnología en el país y los recursos humanos y materiales dedicados a esta actividad. Para la alimentación de este registro, los ministerios, institutos autónomos, empresas del Estado, universidades y demás entes del sector público y los centros de investigación y personas jurídicas del sector privado, deberán suministrar la información pertinente al CONICIT.

Al interior del CONICIT, como órgano encargado de definir sus planes y estrategias, está el **Consejo Superior**, del que Presidente y Vicepresidente

[53] Consultado el día 12 de diciembre de 2002 en www.cab.int.co/cab/infos/infolegi/venezuela

son funcionarios de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República y deberán contar con amplia experiencia en actividades científicas y tecnológicas.

Además de los dos funcionarios arriba citados, el Consejo Superior está integrado por 25 miembros más, de los cuales 14 representan al sector público, 1 al sector privado, 9 a la comunidad científica y académica y 1 a los trabajadores.

Salta a la vista, al analizar la conformación del Consejo Superior, la participación que se ha querido dar en Venezuela a los investigadores. Según lo exige el artículo 11 de la Ley, deben tener la calidad de investigadores 16 de los 27 miembros que lo integran, esto es:

- 5 de los 10 miembros designados por el ejecutivo nacional,
- Los 5 representantes de las universidades,
- El representante del Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias,
- El representante del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas,
- El representante de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia,
- El representante de la Asociación de Institutos de Investigación Tecnológica e Industrial,
- El representante de las Academias Nacionales, y
- El representante de las organizaciones privadas de investigación científica y tecnológica.

Como órgano ejecutivo, con la mayor jerarquía administrativa del CONICIT, se encuentra el Directorio, que además de desarrollar tareas puramente administrativas, tiene importantes funciones técnicas. Es así como es el órgano

encargado, entre otras, de presentar al Consejo Superior el proyecto del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y de aprobar el Informe Anual de Actividades que debe presentar el CONICIT al Ejecutivo Nacional.

De la mayor importancia resultan las disposiciones que la Ley contiene sobre regionalización. En primer lugar es clara en disponer: “el CONICIT promoverá el desarrollo de la investigación a nivel regional, atendiendo a las necesidades y recursos existentes, con miras a lograr el establecimiento de una infraestructura científico-tecnológica apropiada para cada región”.

En segundo lugar, es deber del CONICIT procurar la participación regional, especialmente en la elaboración de planes nacionales, de los planes operativos internos y de los presupuestos anuales.

Adicionalmente, el CONICIT puede crear comisiones o centros regionales cuando estén dadas las condiciones locales, que tienen a su responsabilidad la presentación al Consejo Superior de sus planes operativos y programas y la recomendación de políticas regionales de desarrollo para su incorporación a los planes nacionales del Sector de Ciencia y Tecnología.

Dentro de la organización del CONICIT, como cuerpos asesores, se encuentran las Comisiones Técnicas y los Grupos de Trabajo.

Las Comisiones Técnicas analizan las solicitudes de financiamiento presentadas al CONICIT. A su vez, los Grupos de Trabajo diseñan planes y estrategias en cualquier sector y opinan sobre cualquier aspecto encomendado por el Directorio.

No se podría acabar este análisis, sin detenerse en mencionar los aspectos que se señalan a continuación y que llaman especialmente la atención.

2.3.1 Estímulos a los investigadores

El artículo 38 de la Ley, contiene un importante estímulo para los investigadores. Este dispone:

"El CONICIT propiciará ante el Ejecutivo Nacional y los diferentes organismos pertinentes, que se dicten las medidas para asegurar que los investigadores en ciencia y tecnología del sector público gocen de beneficios de estabilidad y de jubilación de acuerdo con las características de su actividad dentro del marco legal existente en la materia"

2. 3.2 Desarrollo legislativo regional

Ya se hizo mención de las disposiciones que en materia de regionalización contiene la Ley del CONICIT. Sin embargo, debe insistirse en la gran importancia que se le ha dado en Venezuela a este tema, lo cual se refleja en el buen número de leyes expedidas por las cámaras legislativas de los Estados en la presente década, como se puede observar a continuación.

Los estados de Sucre, Yaracuy y Bolívar, cuentan ya con su respectivo proyecto de Ley de Promoción y Protección de la Ciencia y la Tecnología, en trámite.

2.3.3 Incentivos tributarios

- Exención del Impuesto sobre la Renta para instituciones dedicadas a actividades científicas y tecnológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12, numeral 10) del Decreto 190 de 1994, Ley de Impuesto sobre la Renta, están exentas de este gravamen las instituciones dedicadas exclusivamente a actividades artísticas, científicas, tecnológicas y culturales. Así mismo, también gozan de esta exención las instituciones universitarias y las educacionales por los enriquecimientos

obtenidos cuando presten sus servicios dentro de las condiciones generales fijadas por el Ejecutivo Nacional.

La exención tiene lugar si se dan las siguientes condiciones:

a) Que no persigan fines de lucro.

b) La exención se otorga para los enriquecimientos obtenidos como medios para lograr sus fines.

c) Que en ningún caso distribuyan ganancias, beneficios de cualquier índole o parte alguna de su patrimonio a sus fundadores, asociados o miembros de cualquier naturaleza.

d) Que solo realicen pagos normales y necesarios para el desarrollo de las actividades que les son propias.

e) Demostrar ante la Administración Tributaria que reúnen las condiciones para el disfrute de la exención y obtener así la calificación y registro de la exención correspondiente.

- **Deducciones por gastos de investigación y desarrollo**

- Los gastos de investigación y desarrollo, efectivamente pagados dentro del ejercicio gravable, realizados en beneficio del propio contribuyente pagador, se pueden deducir para obtener el enriquecimiento neto objeto del Impuesto a la Renta.

- Así mismo, son deducibles de la renta bruta las liberalidades efectuadas en cumplimiento de fines de utilidad común y de responsabilidad social del contribuyente y las donaciones efectuadas a favor de la Nación, los Estados, los Municipios y los Institutos Oficiales Autónomos.

Para que opere esta exención, deben darse las siguientes condiciones:

a. Las liberalidades deberán perseguir objetos, entre otros, culturales docentes, artísticos, científicos y tecnológicos.

b. Los gastos pueden ser directos del contribuyente o contribuciones de éste a favor de instituciones o asociaciones que no persigan fines de lucro y las destinen al cumplimiento de tales objetivos.

- **Asistencia técnica y servicios tecnológicos desde el exterior**

Por regla general, los enriquecimientos netos de los contribuyentes no residentes o no domiciliados en Venezuela, provenientes de actividades profesionales no mercantiles, están constituidos por el 90 % de sus ingresos brutos. Sin embargo, en el caso de los contribuyentes que desde el exterior suministren asistencia técnica o servicios tecnológicos a personas o comunidades que en función productora de rentas las utilicen o las cedan a terceros sus enriquecimientos netos, están constituidos por el 30 % de los ingresos brutos que obtengan por el suministro de asistencia técnica y del 50 % de los ingresos brutos que obtengan por el suministro de servicios tecnológicos.

2.3.4 Ministerio de ciencia y tecnología venezolano

La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología obedece al nuevo rol que ocupa el conocimiento en el mundo contemporáneo. Se trata de jerarquizar la toma de decisiones a nivel del más alto gobierno, asegurando, al mismo tiempo, la vinculación necesaria y equilibrada tanto con el sector académico o de creación de conocimiento, como con la aplicación de los mismos en el sector productivo.[54] Para conocer mas a fondo este importante modelo, a continuación haremos una pequeña alusión de la visión, la misión, áreas

[54] Consultado el día 10 de enero de 2003 en www.mct.gov.ve/mct

prioritarias, avances y acciones próximas del ministerio de ciencia y tecnología de Venezuela.

2.3.4.1 Visión

Hacer del Ministerio de Ciencia y Tecnología una institución al servicio del ser humano, ética, adaptable, con visión global y de futuro, integradora y de amplia participación, comprometida con la producción del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, necesarios para el desarrollo del País.

2.3.4.2 Misión

- Formular políticas, estrategias y planes que conduzcan a la creación de un sistema científico y tecnológico orientando las investigaciones científicas y tecnológicas para que contribuyan a satisfacer los requerimientos de la población y dinamizar el sistema productivo nacional
- Fortalecer, coordinar e integrar el sistema tecnológico en concordancia con las demandas de las cadenas productivas, promoviendo y multiplicando procesos de innovación y transferencia.
- Fortalecer los estudios de postgrado para cultivar el desarrollo científico, tecnológico y humanístico en el país.
- Sostener relaciones de colaboración con el Ministerio de Producción y Comercio y otros organismos regionales e instancias de servicios con la finalidad de apoyar el aparato productivo.
- Fortalecer la cultura científico técnica como herramienta fundamental para el desarrollo social y económico.

2.3.4.3 Áreas prioritarias

- **Metalmecánica:** en esta área se presenta una gran necesidad de innovación, sobre todo en productos relacionados en sectores agrícola e industrial para mejorar la calidad de vida y la productividad. En este

sentido, el Ministerio apunta hacia la creación del Centro Nacional de Tecnología (CENTEC), el cual incentivará la generación de tecnologías propias adaptadas a los requerimientos del país.

- **Petróleo, Petroquímica y Gas:** con el Ministerio de Energía, para obtener mayor valor agregado de los productos y generar espacios distintos al tradicional petróleo, que en estos momentos sólo aporta el 25 por ciento del PIB del país. Actualmente se están haciendo esfuerzos en:
- **Orimulsión:** para mejorar el producto, hacerlo menos contaminante, y aumentar su producción.
- **Gas:** existen planes para el establecimiento de redes de producción de gas que permitirán al país integrarse con el norte de Brasil. A nivel de proyecto, se está comenzando a gestar la idea de que Venezuela coloque un gasoducto en el canal de Panamá, a fin de que el país exporte el producto al otro lado del Pacífico.
- **Tecnología de Información:** con el Ministerio de Educación a fin de que la participación de los jóvenes en las redes telemáticas sea cada vez mayor. Esto incluye aspectos técnicos y educativos, entrenamiento de los maestros y generación de contenidos adaptados a las diferentes necesidades de cada nivel escolar.
- **Agroalimentación:** con el Ministerio de Producción y Comercio, se comenzó con los siguientes rubros:
- **Ganado de doble propósito:** Actualmente existen investigaciones importantes es estas materias, no obstante, será necesario metodizarlas y establecer los mecanismos para acelerar sus resultados. El acercamiento con el sector productivo permitirá establecer mecanismos comunes para determinar problemas e iniciar un proceso dirigido a recuperar la calidad de estos productos en el país.
- **Palma Aceitera:** dada las óptimas condiciones del país para su producción. Un producto vegetal de altísimo valor que genera un buen

número de derivados elaborados. Ya se han establecido conversaciones con Malasia a fin de diagnosticar la magnitud de la inversión en esta área.

- **Pesca:** se evalúa las necesidades del sector a fin de impulsarlo como un área importante de la economía nacional.
- **Salud:** con el Ministerio de Salud para mejorar a través de los resultados de las investigaciones el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades con mayor incidencia en la población venezolana.
- **Educación:** con el Ministerio de Educación, para fortalecer los postgrados nacionales, a fin de incrementar la calidad y productividad de los mismos.

2.3.4.4 Avances:

- Revisión de la infraestructura existente para coordinar el desarrollo armónico y sustentable mediante la ciencia y la tecnología.
- Censo de los recursos humanos capacitados en ciencia y tecnología para promover su vinculación con el sistema nacional de ciencia y tecnología.
- Análisis de las necesidades presupuestarias del sector.
- Diagnóstico integral nacional de las necesidades de ciencia y tecnología a partir de los mapas de productividad, de necesidades, de recursos naturales y de potenciales, tomando en cuenta los planes de desarrollo del país.

2.3.4.5 Acciones próximas

- Programa de consulta con la comunidad científico tecnológica nacional y el sector productivo.
- Diagnóstico de los principales problemas del País con la finalidad de diseñar y ejecutar proyectos en estrecha vinculación con el aparato productivo e institucional de la nación.

2.4 CONSEJOS DE COMPETITIVIDAD

2.4.1 Estados Unidos de América

2.4.1.1 Council on Competitiveness Washington, DC.

Dirigir la competitividad económica de los Estados Unidos y su liderazgo en los mercados internacionales para incrementar en nivel de vida para los americanos, es la misión de esta organización. Su enfoque esta en la fortaleza de la innovación, ascenso de la fuerza de trabajo y en la comparación en el desempeño económico nacional.

Sus funciones se desarrollan en torno a los siguientes temas:

- Proyecto regional de innovación de clusters

Busca desarrollar un marco para evaluar el desarrollo del cluster y el desempeño innovador a nivel regional. Asimismo, compartir herramientas analíticas, resultados de benchmarking y lecciones de aprendizaje con decisores claves en USA. Para llevarlo a cabo, un equipo con Porter, Duane Ackerman y el Steering Committee de líderes nacionales trabajan para:

- Identificar aprox. 50 clusters
- Evaluar el desempeño innovador de clusters en 6 regiones elegidas
- Actuar como catalizadores

- Benchmarking

Cuantifica la prioridad de innovación del Consejo en un aspecto fundamental: la investigación.

Esta es una Organización sin ánimo de lucro creada en 1986. Conformada por un Comité Ejecutivo 30 miembros, además un staff de 16 de tiempo completo provee apoyo investigativo y operativo. Directores ejecutivos de las 50 organizaciones de investigación, sociedades profesionales y asociaciones de comercio contribuyen con su experiencia como afiliados nacionales al Consejo.

Los miembros son directores ejecutivos empresariales, presidentes de universidades y líderes laborales. Sus afiliados nacionales incluyen organizaciones de investigación sin ánimo de lucro Contempla asuntos críticos como innovación tecnológica, desarrollo y comparación del desempeño económico de los Estados Unidos frente a otros países. Los miembros y el Staff del Consejo trabajan juntos, desarrollan recomendaciones basadas en el consenso y en el seguimiento a la implementación de estrategias en cada región del país.

2.4.1.2The Office of Strategic Industries and Economic Security (Sigla en ingles SIES)[55]

Esta oficina hace parte de la Oficina de Administración de Exportaciones BXA de la Oficina de Comercio de los Estados Unidos.

Su trabajo esta encaminado a la asistencia a compañías americanas para diversificar asuntos desde la defensa de la producción comercial y mercados, promoción de la venta de armamento a los aliados y análisis al impacto de los controles de exportación en sectores industriales claves y conducir la investigación y análisis en tecnologías críticas.
Programas:

[55] Consultado el día 11 de enero en: http://www.docbxa.bmpcoe.org/annual97.html

- Programa de mejores prácticas en manufactura
- Oportunidades de fomento empresarial y tecnológico y socios
- Controles de exportaciones
- Investigación de los reportes de impacto de las exportaciones

BXA está conformado por:

- Under Secretary for Export Administration
- Deputy Under Secretary for Export Administration
- Assistant Secretary for Export Administration
- Acting Assistant Secretary for Export Administration
- Deputy Assistant Secretary for Export Administration
- Assistant Secretary for Export Enforcement
- Acting Assistant Secretary for Export Enforcement
- Deputy Assistant Secretary for Export Enforcement
- Chief Counsel for Export Administration
- Acting Chief Counsel for Export Administration
- Director of Congressional and Public Affairs
- Acting Director of Congressional and Public Affairs
- Director of Administration

2.4.1.3. Settle. Economic Development Council of Seattle & King County (Sigla en ingles EDC)

Sus principales cometidos son, capitalizar los activos de la región para crear una economía competitiva y vital globalmente, así como retener y reclutar trabajos de ingreso familiar, promoviendo las inversiones público - privadas y tomando un liderazgo a favor de las herramientas de desarrollo económico y comunicando las actividades.

La visión de esta organización se orienta al reconocimiento del King County como centro industrial, comercial y tecnológico; la importancia económica del Puerto de Seattle y los servicios comerciales; la atracción de industrias líderes incluyendo manufactura, negocios basados en tecnología y servicios comerciales.

El campo de acción de esta organización son los siguientes asuntos:

1. **Retención y reclutamiento de manufactura y alta tecnología:** alianza con las **cámaras locales** y las ciudades para desarrollar e implementar estrategias proactivas para la identificación de fabricantes y de compañías de las características requeridas. Priorización de las inquietudes de los fabricantes de la zona; desarrollo de plan y presupuesto.
2. **Servicios de información empresarial**: para entregar información relevante y oportuna a sus clientes y miembros: proveer información demográfica e industrial, fortalecer redes.
3. **Mercadeo y desarrollo del negocio**: mercadear los servicios de EDC.
4. **Otros proyectos**: plan de acción para la prosperidad del King Country. Proyecto de desarrollo de incubadora de empresas.

Esta organización sirve de lazo entre las entidades de desarrollo económico local y el "Puget Sound Regional Council" para proveer información útil para programas relacionados.

2.4.1.4 New York. Empire State development (Sigla en inglésESD) [56]

[56] Consultado el día 11 de enero de 2002 en www.empire.state.ny.us

Su misión es proveer el más alto nivel de asistencia y servicio a las empresas para fomentar la inversión privada y la prosperidad en el Estado de Nueva York.
Este organismo trabaja con empresas para identificar soluciones creativas para enfrentar problemas, generar oportunidades para el crecimiento y logro de metas a corto y largo plazo.

Su trabajo gira en torno a las siguientes actividades:

- Iniciar una compañía
- Reubicarse o establecerse en N.Y.
- Expandir operaciones existentes
- Retener y engrosar la fuerza del trabajo en el Estado
- Competir más efectiva y rentablemente en el mercado doméstico y en el global

2.4.1.5 Chicago. Chicago's Technology Development Iniciative [57]

Tiene dos departamentos que realizan en su totalidad su trabajo. Estos son:

1. *Comité de Crecimiento de tecnología de la Cámara de Comercio de Chicago*

Su misión es promover programas y proyectos que apoyen el desarrollo y la disponibilidad de los productos y servicios diseñados para impulsar la productividad de las industrias de Chicago

2. *Plan de Acción de Tecnología:*

Posicionar a Chicago como una de las ciudades de los líderes mundiales en crecimiento de alta tecnología entre las más grandes áreas metropolitanas.

[57] Consultado el día 11 de enero de 2003 en www.chicagotechtoday.com

Los objetivos de esta organización giran en la consecución exitosa de los siguientes temas:

- Chicago como centro tecnológico
- Incrementar la fuerza de trabajo tecnológicamente alfabetizada
- Apalancar los activos tecnológicos Organizaciones técnicas: Asociación de profesionales, Asociación de software, Cámara de Comercio de Chicago.

2.4.1.5 California. Technology, trade and commerce Agency [58]

Agencia para la promoción del desarrollo económico, la creación de empleo y la retención de negocios. Fomenta la competitividad empresarial y el mejoramiento del nivel de vida de los californianos a través de estas labores:

- Inversión local y extranjera
- Exportaciones
- Turismo
- Desarrollo económico
- Iniciativas estratégicas – investigaciones económicas
- Impacto de las regulaciones propuestas
- Desarrollo empresarial
- Innovación, ciencia y tecnología

La agencia trabaja con empresarios nacionales e internacionales, asociaciones de empresarios e industriales, corporaciones de desarrollo económico, visitantes regionales y agencias gubernamentales municipales y estatales.

[58] Consultado el día 11 de enero en: www.commerce.ca.gov/agency

Además tiene un Gabinete ejecutivo , que a su vez cuanta con las siguientes áreas de trabajo:

- Comercio e Inversión Internacional: conformado por oficinas en campos internacionales (Ej. Singapur, Argentina, México, Tokio), Desarrollo de exportaciones, Finanzas, Inversión Extranjera y Asuntos con México.
- Infraestructura bancaria,
- Turismo
- Iniciativas estratégicas ERSI: con panel económico estratégico, investigación económica y unidad de revisión de regulación.
- Innovación, ciencia y tecnología
- Administración y finanzas
- Desarrollo Económico
- Proyectos corporativos
- Desarrollo empresarial
- Pequeña empresa
- Marketing

2.4.1. 6 Florida. Enterprise Florida[59]

Es una sociedad entre el gobierno de la Florida y los principales líderes de compañías para promover el desarrollo económico, la creación de empleo calificado y la promoción de negocios competitivos.

Los miembros son el gobernador y los presidentes de las principales compañías.

[59] Consultado el día 11 de enero en http://www.eflorida.com/

2.4.1.7. Florida. Office of tourism, trade and economic development: "Florida's Economic Development Strategy: Public-Private Partnerships"[60]

Su misión es coordinar los esfuerzos de los consejos de desarrollo económico sectoriales y trazar una política común para crear un ambiente general para los excelentes negocios. Sus principales temas se desarrollan en Formular las estrategias de desarrollo de Florida, especialmente en los temas de impuestos, educación, infraestructura. Sus miembros son:

- Office of Tourism
- Trade and Economic Development
- Enterprise Florida
- The Florida Commission on Tourism
- The Florida Sports Foundation
- The Florida Black Business Investment
- Board
- The Governor's Council on Physical
- Fitness and Amateur Sport
- The Spaceport Florida Authority
- The Florida Association of Voluntary
- Agencies for Caribbean Action

2.4.1.8 Miami. The Beacon Council[61]

Sus funciones son favorecer la creación de empleo realizar el mercadeo correspondiente para vender la de la imagen de Miami como centro de negocios. Es el enlace directo entre las empresas y el gobernador.

---

[60] Consultado el día 11 de enero en http://www.state.fll.us/eog/budget/99- 00/economy/economy4.htm
[61] Consultado el día 11 de enero de 2003 en http://www.beaconcounciill.com/

Principales bancos, hoteles, empresas de base tecnológica e industrias localizadas en Miami, son sus miembros.

2.4.2 Europa

2.4.2.1 Londres. London Development Agency (Sigla en ingles LDA)[62]

Los fines de esta organización son fomentar a Londres como centro mundial de negocios, regenerar las comunidades marginadas, asegurar la oportunidad económica para todos los habitantes de Londres y ayudar al desarrollo económico de la ciudad

Las estrategias se basan en 9 objetivos claves:

- Promover Londres como un lugar para vivir y para hacer negocios
- Sostener la región de Londres
- Atacar los desafíos claves de Londres
- Mejorar la competitividad de los negocios de Londres
- Enfocar en conocimientos y aprendizaje
- Habilitar las comunidades de Londres y
- ayudar a personas menos favorecidas para conseguir trabajo

Fue constituida en Julio 2000 para promover desarrollo y regeneración de la economía. Es una de las 9 agencias regionales de desarrollo en Inglaterra.

Está representada por un Presidente y la junta, nombrados por el alcalde. El personal de la LDA consiste de personal de la oficina del Gobierno de Londres y nuevas personas reclutadas.

---

[62]Consultado el día 11 de enero de 2003 en www.lda.gov.uk

La financiación esta administrada por el alcalde. El presupuesto se basa en fondos del gobierno central para regeneración, habilidades, desarrollo de infraestructura, inversión interna e innovación regional.
El alcalde dirige la LDA para generar e implementar una estrategia de desarrollo económico consistente con otras estrategias.

2.4.2.2 Frankfurt .Economic Development Corporation (Sigla en inglés FEDC)[63]

La finalidad de esta entidad es de Desarrollar la economía de Francfort a través de la ayuda a las empresas

Las dos metas principales:

1. Promover Francfort como lugar para hacer negocios, y
2. Atraer empresas a Francfort.

Otra responsabilidad es funcionar como punto de contacto entre la comunidad empresarial y las autoridades municipales.

Sus temas analizar son el desarrollo económico global y su impacto potencial para los desarrollos locales y crear actividades que promueven futuros negocios. Además de apoyar el desarrollo económico en sectores como el de las telecomunicaciones Internet-business y la Biotecnología
Es una corporación creada por el gobierno para ayudar a desarrollar la economía de la Ciudad.
La ciudad es dueña de la corporación y financia sus actividades. Sin embargo, algunas están financiadas por las empresas privadas.

[63]Consultado el día 11 de enero de 2003 en www.frankfurtbusiness.de/index_edc.html

2.4.2.3 Irlanda .The National Competitiveness Council,[64]

Aunque suene obvio, la única misión del National Competitiveness Council es hacer a Irlanda un país más competitivo.

Este organismo publica cada año el reporte anual de competitividad, con indicadores comparativos internacionales de competitividad en donde se revelan las áreas que contribuyen a la competitividad de Irlanda y mide productividad para hacer prioridades para un nivel más alto de competitividad.

Fue constituida por el gobierno nacional en Mayo 1997. Esta conformado por miembros que son ejecutivos en empresas, y organizaciones privadas, un consejo y una secretaría.

La secretaría del consejo esta conformado por el Forfás (la junta nacional de consejos de negocios, ciencia, tecnología y innovación).

2.4.2.4 Dublin. Corporation- Economic Development Unit [65]

Su principal objetivo es planear el continuo desarrollo económico de la ciudad.

Sus principales temas de trabajo son:

- Fomentar el crecimiento de la economía metropolitana y concentrarse en sus fortalezas
- Enfocar en desarrollo industrial sostenible
- Promover y atraer las industrias de ciencia y tecnología
- Construir oficinas cerca de conexiones de transporte público
- Consolidar industrias existentes de manufactura y generar expansión en el sector donde está apropiada
- Promover el desarrollo de nuevos y crecientes empresas, junto con otras agencias
- Atraer inversión internacional, en conjunto con la IDA y otros cuerpos relevantes.

---

[64] Consultado el día 11 de enreo de 2003 en www.forfas.ie/ncc

[65] Consultado el día 11 de enero de 2003 en www.dublincorp.ie/services/econ2.html

- Facilitar la provisión de infraestructura de telecomunicaciones

El “Economic Development Unit” ha sido establecido dentro del Departamento de Desarrollo (Development Department). El departamento de desarrollo hace parte del “Dublin Corporation” y está encargado del desarrollo de inmuebles y propiedad.
Trabaja en conjunto con relevantes cuerpos privados y públicos y otras agencias de apoyo.

2.4.3 Unión Europea

2.4.3.1 The Industry Council[66]

Esta organización promueve la competitividad de la economía y la industria europea y asegura que las condiciones necesarias para la competitividad estén garantizadas.
Se orienta hacia el ambiente de negocios más que en sectores. No importa el tamaño o la actividad de las empresas.
Formular una política de industria, que involucra la industria, las PyMES, y los servicios.
Esta organización es estrictamente Gubernamental

2.4.4 Canada

2.4.4.1Toronto. Economic Development Office[67]

[66]Consultado el día 11 de enero de 2003 en
http://www.vn.fi/ktm/eupresidency/english/kokous/min_neuv/teoln.htm

[67] Consultado el día 11 enero de 2003 en
http://www.city.toronto.on.ca/business_resources/econdevoffice.htm

Desarrolla la economía de Toronto a través de la ayuda a las empresas. Ofrecen los siguientes servicios a empresas:

- Contestar preguntas sobre inversiones y a atraer inversiones
- Identificar sitios y edificios para el crecimiento de empresas
- Información sobre "clusters" claves de industria
- Asistir en iniciar y crecer empresas
- Establecer áreas de mejoramiento de empresas y manejo de capital
- Proveer información estadística
- Promover Toronto como centro internacional de producción de películas
- Hace parte del gobierno de la ciudad de Toronto

2.4.4.2 Vancouver. Economic Development Commission (Sigla en inglés VEDC) [68]

Sus principales funciones son: promover el desarrollo económico y definir los potenciales económicos de la ciudad, actuar como cadena entre el gobierno y las empresas, promover a Vancouver nacionalmente e internacionalmente y atraer a nuevas empresas a Vancouver y mejorar el ambiente para las empresas existentes en Vancouver.

Fue constituida en 1996 para conectar los sectores públicos y privados para promover crecimiento económico para Vancouver. La comisión consiste de 13 comisarios voluntarios que vienen de la comunidad empresarial, incluyendo planeación urbana, recreación, transportación, finanzas internacionales, tecnología avanzada, desarrollo económico, comunicaciones, comercio internacional y entretenimiento.

[68] Consultado el día 11 de enero de 2003 en http://www.vancouvereconomic.com/

2.4.5 ASIA

2.4.5.1 Malasia. Visión 2020 Malasia [69]

Su misión se puede resumir en los siguientes puntos:

- Desarrollar una base científica tecnológica fuerte para impulsar la competencia y la competitividad internacional
- Desarrollar tecnología nativa incrementando la capacidad de la nación para adoptar, adaptar y mejorar la tecnología a través de la Investigación y el Desarrollo
- Desarrollar un grupo de mano de obra hábil capaz de manejar tecnologías nuevas y emergentes
- Asegurar que la conservación y protección del ambiente son construidas dentro de un proceso de desarrollo económico
- Desarrollar una **cultura positiva** basada ,en la integridad, la disciplina y diligencia para alistar a los malayos a una alta productividad y compromiso de calidad.
- Asegurar una sociedad justa económicamente competitiva · Establecer una **sociedad próspera** con una economía que es completamente competitiva, dinámica, robusta, flexible.

2.4.5.2 Malasia .The Malaysian Industrial Development Authority (Sigla en ingles MIDA) [70]

Esta dirigida a la promoción y coordinación del desarrollo industrial y contacto para inversionistas especialmente que interesados en manufactura y servicios relacionados.
Sus principales actividades son:

---

[69] Consultado el día 11 de enero de 2003 en www.mida.gov.my
[70] Consultado el día 11 de enero de 2003 en http://www.mida.gov.my/

- Promover la inversión extranjera y local en la manufactura y servicios relacionados
- Emprender planes para el desarrollo industrial
- Recomendar políticas y estrategias en promoción y desarrollo al Ministerio de Comercio e Industria
- Evaluar solicitudes para incentivos bajo el Acta de promoción de 1986 en temas como turismo, Investigación y Desarrollo, Instituciones de entrenamiento y desarrollo de software
- Facilitar a compañías nuevas y existentes la implementación y operación de sus proyectos t ofrecer asistencia
- Facilitar el intercambio de información y la coordinación entre instituciones

2.4.5.3 Singapur. Economic Development Board (Sigla en ingles EDB) [71]

EDB es la agencia del Gobierno que planea y ejecuta las estrategias para promover la economía de Singapur en los sectores de manufactura y sus servicios y de comercio.

Para realizar la visión, promueve y desarrolla industrias dirigidas al conocimiento.

La visión del EDB para Singapur es ser una vibrante y robusta economía basada en el conocimiento. Esto, por cuanto los avances tecnológicos avanzan muy rápido y el conocimiento es un activo estratégico. Un país que pueda reorientarse al conocimiento puede cosechar abundantes oportunidades.

[71] Consultado el día 11 de enero de 2003 en www.sedb.com.sg

Así, apunta a ser pronto el centro global para los negocios y la inversión, creando el mejor ambiente para las compañías.

- Innovación
- Desarrollo de Negocios Internacionales (International Business Development)
- Programa de ascenso de la industria local (Local industry upgrading program)

Organizado en 1961 ha jugado un rol esencial en la transformación de Singapur como el primer lugar del mundo para los negocios y como una de las economías más competitivas.

2.4.6 SURAMÉRICA:

2.4.6.1Chile. CORFO Corporación de Fomento de la Producción [72]

Promueve la innovación y el desarrollo tecnológico y la modernización de las empresas que se asocian para competir, además de mejorar la gestión empresarial.

Sus principales servicios son:

- Desarrollo de instrumentos financieros para atender las necesidades de las empresas.
- Financiamiento directo.
- Desarrollo productivo regional y de sectores emergentes.
- Innovación y desarrollo tecnológico
- Desarrollo productivo regional y de sectores emergentes
- Apoyo a las empresas que se asocian para competir
- Mejoramiento de la gestión empresarial

[72] Consultado el día 11 de enero de 2003 en http://www.corfo.cl/index.asp

Los miembros de esta corporación son:

- El Ministro de Economía, Energía y Minería.
- El Ministro de Relaciones Exteriores.
- El Ministro de Hacienda.
- El Ministro de Planificación y Cooperación.
- El Ministro de Agricultura.
- El Vicepresidente Ejecutivo de CORFO.
- Dos Consejeros designados por el Presidente de la República

3. INSTITUCIONES DE FINANCIAMIENTO

3.1 ORGANIZACIONES NACIONALES

3.1.1 Instituto de Fomento Industrial

Objetivo:

Financiar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, con crédito de largo plazo, a empresas y entidades radicadas en el país, a in de fortalecer la competitividad de los productos y servicios en el mercado mundial.

Proyectos Financiables:

- Proyectos de Investigación, innovación y desarrollo tecnológico.
- Proyectos de gestión y modernización empresarial y fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la empresa
- Proyectos de sistemas de información y desarrollo de software
- Proyectos de capacitación avanzada a nuevas tecnológicas

Rubros Financiables:

- Fabricación de prototipos y plantas piloto
- Insumos para el primer lote de prueba del mercado
- Desarrollo y/o adquisición de software
- Gastos de patentamiento o de registro de la propiedad intelectual
- Gastos de participación en ferias y eventos para promover la innovación
- Contratación de servicios tecnológicos
- Contratación de consultoría especializada
- Capacitación y actualización de personal
- Asistencia a seminarios ya cursos especializados

- Misiones y pasantías empresariales dentro y fuera del país
- Documentación y bibliografía
- Material para la promoción y divulgación de lo resultados del proyecto
- Conexión a redes telemáticas para transferencia de tecnología
- Adecuación de infraestructura física con destinación especifica para plantas piloto o centros tecnológicos, por un valor que no supere el 30% del valor del proyecto.
- Personal técnico nacional e internacional participante
- Adquisición o arrendamiento de equipos de investigación y control de calidad
- Diseño y construcción de bienes de capital que incluye innovación tecnológica

Rubros no Financiables:

- Compra de maquinaria y equipo de producción corriente
- Pago de pasivos, pago de dividendos, aumento de capital de la empresa
- Capital de trabajo para la producción corriente
- Inversiones en otras empresas
- Inversión en plantas de producción a escala industrial
- Compras de acciones, derechos de empresas, bonos y otros valores mobiliarios
- Instalaciones llave en mano
- Impuestos causados en el desarrollo del proyecto

Beneficiarios:

Empresas de todos los tamaños de los sectores acuicultura, agropecuario, agroindustria, minero, eléctrico, electrónico, telecomunicaciones, informática, comercial, manufacturero, servicios que ejecuten proyectos de innovación y

desarrollo tecnológico y obtengan en el incentivo a la innovación tecnológica, otorgada por Colciencias.

Tipos de financiación:

1. Crédito de redescuento del IFI con los intermediarios financieros

Montos financiables: hasta un 80% del valor total del proyecto con recursos de esta línea de crédito, sin superar el equivalente a 10.000 salarios mínimos legales mensuales. El crédito se otorga en pesos combinaos o en dólares de los Estados Unidos de América.

Presentación de proyectos: Las empresas que consideren que su proyecto puede ser financiado por esta línea de crédito, presentan su propuesta a Colciencias y, simultáneamente inician el tramite para un crédito con un intermediario financiero con cupo de redescuento en el IFI

Evaluación y aprobación de los proyectos: Colciencias, con el apoyo de la red de evaluación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, evalúa tecnológicamente el proyecto y, en caso de ser aprobado por el Conejo del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología al cual corresponde el tema objeto del proyecto, otorga el incentivo a la innovación tecnológica. El intermediario financiero hace la respectiva evaluación financiera y aprueba el crédito y las garantías requeridas

Incentivo a la innovación tecnológica: A los proyectos aprobados técnicamente por Colciencias y financieramente por el intermediario financiero, se reconoce el incentivo a la innovación tecnológica, otorgado por Colciencias, el cual consiste eme el prepago de las primeras cuentas de capital hasta el equivalente a un porcentaje del crédito redescontado por esta línea:

- 30% del crédito redescontado por esta línea para empresas pequeña o medianas con proyectos de muy significativo esfuerzo en innovación y desarrollo tecnológico, y con posibilidades de exportación.
- 25% del crédito redescontado por esta línea para empresas pequeñas o medianas con proyectos de muy significativo esfuerzo en innovación y desarrollo tecnológico, orientados al mercado nacional.
- 20% del crédito redescontado por esta línea para empresas grandes con proyectos de muy significativo esfuerzo en innovación y desarrollo tecnológico orientados al mercado nacional o internacional
- 18% del crédito redescontado por esta línea para empresas de todos los tamaños con proyectos de importante esfuerzo en innovación y desarrollo tecnológico

Plazo del crédito: Hasta 10 años, cuando el crédito se obtiene en pesos colombianos, incluidos hasta 3 años de gracia. Hasta 7 años, cuando el crédito se obtiene en dólares, incluidos hasta 3 años de gracias. Los créditos en dólares deben cumplir con la normatividad cambiara vigente.

Garantías: El Fondo Nacional de Garantías – FNG – emite certificado de garantía de proyectos tecnológicos para pequeñas y medianas empresas. La expedición de garantía del FNG tiene costo para el beneficiario del crédito.

3.1.2 Fondo nacional de productividad y competitividad

Compuesto por aportes de Bancoldex, la Nación, Sena, Colciencias, IFI y FINAGRO.

Objetivo:

El programa Nacional de Productividad y competitividad le permite adaptar su empresa a las nuevas condiciones del mercado, innovar sus productos, y entre otras posibilidades, desarrollarse tecnológicamente.

Proyectos Financiables:

- Proyectos de Fortalecimiento de la gestión
- Proyectos de fortalecimiento de la capacidad tecnológica
- Sistemas de información para proyectos de gestión comercial, innovación y desarrollo tecnológico
- Proyectos de capacitación en nuevas tecnologías

Rubros Financiables:

- Personal técnico nacional o internacional dedicado exclusivamente al desarrollo del proyecto
- Diseño de bienes de capital que incluyan innovación tecnológica
- Diseño y desarrollo de software
- Contratación de servicios tecnológicos
- Contratación de consultoria especializada
- Inteligencia de mercados
- Capacitación y actualización de personal
- Asistencia a seminarios y a cursos en el exterior
- Misiones y pasantías fuera del país
- Conexión a redes telemáticas para transferencias de tecnología
- Gastos de patentamiento o registro de la propiedad intelectual
- Gastos de participación en ferias o eventos para promover las exportaciones
- Documentación y bibliografía directamente relacionada con el proyecto
- Material para la promoción y divulgación de los resultados del proyecto

- Adquisición de materia prima de ensayo, prototipos y equipos de laboratorio.
- Los desembolsos de recursos con destino a materia prima de ensayo, prototipos y equipos de laboratorio, solamente los podrán realizar aquellas entidades financieras, vigiladas por la Superintendencia Bancaria, cuyo objeto primordial les faculte para otorgar créditos con estas finalidades.

Rubros no financiables:

- Compra de maquinaria y equipo de producción corriente
- Adecuaciones físicas
- Materias primas
- Pagos de pasivos, pago de dividendos, aumento del capital social de la empresa
- Inversiones en otras empresas
- Inversión en plantas de producción a escala industrial
- Compras de acciones, derechos de empresas, bonos y otros valores mobiliarios
- Instalaciones llave en mano
- Impuestos causados en el desarrollo del proyecto
- Capital de trabajo para la producción corriente

Beneficiarios:

El Programa nacional de Productividad y Competitividad, trabaja con las empresas exportadoras, potencialmente exportadoras, directas o indirectas que conforman el cluster, suministrándoles información en condiciones preferenciales, incentivos y confinanciación a aquellos proyectos que tengan un alto impacto en mejorar su productividad.

Tipos de Financiación:

1. Línea de crédito con incentivos a la innovación tecnológica

Monto: Hasta el 100 del proyecto. Para solicitudes individuales hasta $200 millones de pesos. Para solicitudes colectivas hasta $ 300 millones de pesos

Plazo: Hasta 7 años, con un periodo de gracia hasta 3 años.

Garantía: Las admisibles pata el intermediario financiero. Los proyectos son individuales cuando benefician a una empresa, los proyectos colectivos benefician a varias empresas a la vez.

Incentivos a la innovación tecnológica y a la colectividad: Los incentivos consistirán en el prepago a capital hasta del 30% del crédito redescontado aprobado. Los incentivos se le entregaran exclusivamente al banco del primer piso pata disminuir la deuda del empresario en el momento en que el proyecto se haya concluido a satisfacción del Programa Nacional de Productividad y Competitividad. El empresario se habrá comprometido previamente a aumentar sus exportaciones y a mejorar sus indicadores de productividad en los montos acordados con el programa. Los incentivos dependiendo del grado de novedad del proyecto, se prepagara a capital hasta el 30% del valor del crédito redescontado

También se entregaran incentivos aquellos proyectos que lleven un beneficio económico importante a un amplio sector industrial o a una parte grande de una misma cadena productiva, a juicio de la junta Asesora del FNCP. En este caso también se prepagara a capital hasta el 30% del crédito redescontado aprobado. Los empresarios podrán acceder a los dos incentivos, pero su sumatoria, innovación, colectividad, no podrán ser superior al 30% del valor del crédito redescontado aprobado.

2. Cofinanciación:

Porcentajes de cofinanciación: En este caso el PNPC cofinanciada hasta el 70% del valor del proyecto en caso de que la empresa sea una PYME y hasta el 50% en caso de que clasifique como Gran empresa

Monto: El monto máximo a cofinanciar será el equivalente en pesos a 1.000 (mil) salarios mínimos legales mensuales. La porción no cofinanciada la deberá asumir el empresario entregado equipos e insumos directamente vinculados con el proyecto y recursos financieros líquidos.

3.1.3 Servicio nacional de Aprendizaje. Sena

Objetivo:

Eje fundamental para modernizar la formación profesional, mecanismo articulador y potenciador de recursos físicos, humanos y financieros del Sistema nacional de Ciencia y Tecnología y apoyo fundamental para el desarrollo de la economía. Apoyo a la Competitividad y a la productividad empresarial. El Sena contribuirá de manera directa el fortalecimiento del sector empresarial y en especial al sector exportador. Facilitando el acceso de las empresas y las organizaciones a las herramientas y mecanismos necesarios para abrir mercados y elevar la Competitividad de los bienes y servicios colombianos en el exterior.

Proyectos Financiables:

- Desarrollo y mejoramiento de productos
- Diseño
- Rediseño
- Diseño de estrategias de diferenciación
- Mejoramiento de procesos productivos y de gestión

- Implementación de sistemas / técnicas de mejoramiento (reingeniería, justo a tiempo, calidad total, gestión integral etc.)
- Gestión de la producción
- Gestión de los esquemas de logística
- Desintegración vertical
- Diseño y adopción de modelos integrales de gestión basados en el conocimiento
- Asesoría para la implementación de sistemas CAD, CAM y herramientas especificas de software aplicado a la producción
- Aplicación de herramientas para el mejoramiento de la calidad
- Referenciación competitiva (benchmarking) que se divide en practicas de mejoramiento continuo

Rubros Financiables:

- Expertos nacionales e internacionales definidos como participantes en el proyecto
- Honorarios de técnicos requeridos para el proyecto
- Documentación y bibliografía requeridos exclusivamente en el proyecto que eran de propiedad del Sena
- Capacitación especializada correspondiente al proyecto
- Transferencia de resultados

Rubros no financiables:

- Alquiler de fotocopias, útiles de oficina.
- Adquisición de equipos y software
- Compra de lotes, construcciones, adecuación de infraestructura física, conexión a redes telemáticas

- Informática básica, a menos que e demuestre incapacidad de ofrecerlo por parte del Sena
- Asistencia a seminarios o formación académica
- Misiones al exterior y pasantías empresariales dentro y fuera del país
- Pago de deudas, dividendos o recuperaciones de capital del operador o del beneficiario
- Capital de trabajo para la producción corriente (actividades y servicios del portafolio del operador)
- Inversiones en centros y / o empresas
- Inversiones de plantas de producción
- Compras de acciones, derechos de empresas, bonos y otros valores mobiliarios
- Instalación llave en mano
- Pago de regalías, impuestos causados en el desarrollo del proyecto, aportes parafiscales, aportes de pensión, salud o riesgos profesionales, nacionales o de tecnologías
- Gastos de funcionamiento del operador o la beneficiaria
- Refrigerios, desayunos, almuerzos, comidas, atenciones sociales, gastos de legalización.

Beneficiarios:

Empresa de todos los sectores y regiones del país, aprobadas por el comité directivo del programa y seleccionados mediante la aplicación de la metodología diseñada por la Secretaria Técnica.

Tipos de financiación:

1. Programa Nacional de Mejoramiento Continuo

Monto: se apoyara económicamente a las empresas que sean seleccionadas como beneficiarias del programa. En el costo total del proyecto debe ir incluido

el costo de gestión, formulación y administración del proyecto el cual no puede exceder el 15 % del monto total. Este 15% tiene el impuesto a las ventas incluido, en el caso en que el operador sea responsable del régimen común.

Contrapartida: La cancelación del aporte será mínimo de 50% ene le cual se aceptara como contrapartida en especie el salario del personal calificado que interviene de manera directa en el proyecto. En todos los casos, esta contrapartida en especie no puede superar el 25% del valor total del proyecto. Para la contrapartida que no es en especie, se debe demostrar la erogación en efectivo por parte de la empresa que el pago de los rubros que no pueden ser financiados por el aporte del Sena.

Tiempo: La terminación del proyecto depende de la dinámica desarrollada en cada uno, sin embargo, ningún proyecto debe durar mas de 12 meses. Si una empresa beneficiaria no termina el programa satisfactoriamente y de acuerdo con el plan de trabajo, debe reintegrar los dineros aportados por el Sena, de acuerdo con los términos establecidos en los contratos que haya suscrito el operador responderá solidariamente con las empresas, en la eventualidad que esto suceda.

2. Programa de Apoyo al Fondo de Productividad
3. Programa Nacional para la Implantación del Aseguramiento y Certificación de Claridad en Empresas.

3.1.4. Fondo nacional de Garantías

Objetivos:

Contribuir con el desarrollo sostenible del proyecto a través del otorgamiento de garantías para facilitar el acceso al crédito a las micros y PYMES (pueden ser personas naturales o jurídicas) que tengan programas viables y no cuenten con garantías suficientes, con el animo de estimular la competitividad empresarial.

Beneficiarios:

Las empresas cuyos activos totales no son superiores a $3.050 millones a diciembre 31 de 1998, que presenten proyectos financiera y económicamente viables y no cuenten con garantías suficientes y pertinentes al sector industrial, agroindustrial, comercio, servicios y, en general cualquier actividad empresarial. Se excluye el agropecuario. Las son las entidades que aceptan garantías: bancos, cooperativas, compañías de financiamiento. Compañías de leasing, ONG, otras entidades de vivienda de interés social.

Tipos de Garantía:

Todas las garantías cubren capital e intereses corrientes. Empresas con activos totales inferiores a 15.000 salarios mínimos mensuales vigentes.

1. Global
    a) Automática: Garantiza automáticamente el crédito sin consulta previa

Monto: Crédito hasta de $50.000.000

Cobertura: El 50%

Características: La cobertura de la garantía se otorga con remisión mensual de créditos desembolsables. Reestructuración automática de créditos.

    b) Semiautomática: Garantiza el crédito previa consulta al fondo quien responde en 10 días hábiles. Su silencio implica la aprobación de la garantía.

Monto: Créditos superiores a $ 50.000.000 y hasta $ 110.000.000

Cobertura: El 50%.

Características: La cobertura de la garantía se otorga con remisión mensual de créditos desembolsables. Requiere autorización del FNG para reestructuración de créditos.

2. Garantía IFI Automática: Se garantiza automáticamente la operación de crédito sin consulta previa al FNG o FRG.

Monto: Cubre hasta $ 200.000.000 de garantía
Cobertura: Hasta el 50%.
Características: Se expide certificado de garantía individual automática.

3. Garantía Bancoldex
    a) Instantánea: se garantiza automáticamente la operación de crédito sin consulta previa al FNG o FRG

Monto: Cubre hasta US $100.000 o su equivalente en pesos de garantía
Cobertura: Hasta el 50%
Características: Se expide certificado de garantía individual instantánea

    b) Semiautomática: Garantiza el crédito previa consulta al fondo quien responde en 10 días hábiles. Su silencio implica la aprobación de la garantía.

Monto: Cubre hasta US $100.000 o su equivalente en pesos de garantía.
Cobertura: Hasta el 70%
Características: Se expide certificado de garantía individual semiautomática.

4. Individual: se garantiza la operación previo estudio y aprobación individual por parte del FNG o FRG de cada caso.

Monto: Cubre hasta $700.000.000 de garantía siempre y cuando no supere el 70% del crédito
Cobertura: Hasta el 70%
Características: Se expide certificado de garantía por operación. Requiere autorización del FNG para reestructuración de créditos.

3.1.5. Fondo financiero de proyectos de desarrollo. FONADE

Objetivo:
Entidad técnica al servicio del Estado que tiene como función agenciar las políticas de desarrollo del Gobierno nacional y de los niveles territoriales mediante financiación, administración y la estructuración y promoción de estudios preparación, ejecución y evaluación) y de proyectos en todos los sectores, realizando la etapa de preparación, incentivando la participación y vinculación del sector privado.

Proyectos Financiables:

- Estudios de pre – factibilidad
- Estudios de factibilidad
- Dirección de obras
- Gerencia e interventoría de proyectos y recursos
- Asesoría para la estructuración y promoción de proyectos viables.

Beneficiarios:

- Entidades de orden nacional, ministerios, institutos descentralizados, empresas industriales y comerciales del Estado y empresas de economía mixta; territoriales del nivel municipal, departamental, y el sector privado.
- Sectores: Transporte, agua potable, saneamiento básico, agricultura y desarrollo rural, industria, minas y energía, educación y recreación, desarrollo institucional, medio ambiente y comunicaciones, entre otros.

Tipos de Financiación:

1. Preinversión, Capital de Trabajo, Gestión en Calidad, Capitalización Empresarial y Activos Fijos (Empresas Privadas)

Especificación de la garantía:

Aval Bancario: Para desembolso se requiere certificación de la entidad avalista de la disponibilidad de cupo o carta de intención de la entidad financiera. La garantía debe constituirse por el 130% del valor de la obligación con una vigencia superior en 90 días a la vigencia del pagaré

Hipoteca Abierta en primer grado y por cuantía indeterminada: Anexar:

- Certificado de tradición y libertad del inmueble, no mayor de 30 días
- Copias de las escrituras relacionadas con el certificado
- Avaluó realizado por persona autorizada por la lonja de propiedad raíz, una vez haya sido aprobado el crédito. Debe tener una cobertura mínima del 150%.

Fiducia de garantía: Debe anexar copia del contrato de fiducia con cobertura mínima del 150%.

Endoso Títulos Valores: Expedidos, garantizados o aceptados por otras entidades financieras, a satisfacción de FONADE, con cobertura mínima del 150%

Certificado del fondo Nacional de Garantías: Tiene una cobertura del 50% por lo cual es necesario una garantía adicional para cubrir totalmente el crédito más el 80%

3.1.6. Fondo colombiano de modernización y desarrollo tecnológico de las micros, pequeñas y medianas empresas. FOMIPYME

Objetivo:

Cuenta adscrita al Ministerio de Desarrollo económico, manejado por encargo fiduciario, cuyo objeto es la financiación de proyectos, programas y actividades para el desarrollo de las MIPYMES y la aplicación de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción.

El FOMIPYME, realizara todas las operaciones de cofinanciación necesarias para el cumplimiento de sus objetos.

Proyectos Financiables:

Programas y actividades para el desarrollo tecnológico de las MIPYMES y la aplicación de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento.

Beneficiarios:

Micro, pequeñas y medianas empresas colombianas.

Tipos de Financiación:

El FOMIPYME tendrá las siguientes subcuentas:

- Subcuenta para las microempresas para las microempresas cuya fuente será los recursos provenientes del Presupuesto Nacional.
- Subcuenta para las pequeñas y medianas empresas, cuyas fuentes será el Fondo de Productividad y Competitividad y los recursos provenientes del Presupuesto Nacional. De igual forma, estas subcuentas se podrán nutrir con aportes o créditos de organismos multilaterales de desarrollo, así como de donaciones, herencias o legados.

Condiciones de los Créditos:

Recursos disponibles: Durante los 10 años siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se asignara, de los recursos del presupuesto nacional, una suma anual equivalente a $20.000.000.000, con el fin de destinatarios al FOMIPYME. A partir del 2002, la partida se indexara según el salario mínimo legal vigente.

3.1.7. Banco de Comercio Exterior de Colombia. BANCOLDEX.

Objetivo:

Opera en Colombia como un banco de redescuento, ofreciendo productos y servicios financieros a las empresas que forman parte de la cadena exportadora de bienes y servicios colombianos. En le exterior, por conducto de bancos previamente calificados, financiación para el importador de bienes y servicios colombianos.

Su visión es la de contribuir significativamente a la expansión sostenida a la creciente competitividad de as exportaciones colombianas, mediante la oferta y prestación de servicios que satisfagan las necesidades de financiación de los sectores vinculados a l proceso exportador.

Proyectos Financiables.

- Atender costos y gastos operativos
- Invertir en propiedad, planta y equipo.
- Modificar la estructura de endeudamiento de su empresa
- Crear, capitalizar o adquirir una empresa
- Comprador nacional o del exterior.

Rubros no Financiables:

- Adquisición de terrenos
- Intereses pre – operativos

Beneficiarios:

- Exportadores directos
- Exportadores indirectos
- Importadores de productos y servicios colombianos
- Empresas concesionarias que desarrollen proyectos de infraestructura de transporte que contribuyan a mejorar la competitividad de los bienes exportables
- Intermediarios financieros que canalizan recursos

Condiciones de los Créditos:

Financieras: Los recursos de Bancoldex se otorgan a tasas competitivas; contemplan amplios plazos, periodos de gracias para capital y diferentes formas de pago, que le permitan ajustas la amortización del crédito al fijo de caja de la empresa.

Compromisos. La utilización de las diferentes modalidades de crédito genera compromisos de exportación de acuerdo con la modalidad de crédito respectiva.

Tipos de Financiación:

1. Capital de Trabajo: Condiciones Financieras:

    a) Financiación en pesos:

Plazo: Hasta 3 años. Si el crédito se solicita a un año la amortización es al vencimiento

Tasa Base de Redescuento: La vigente en la fecha del desembolso.

Margen de Intermediación: pactado libremente entre el intermediario financiero y el beneficiario

Amortización de Capital: Semestral

b) Financiación en dólares:

Plazo: Hasta un año con un año de gracias.

Tasa Base de Redescuento: Hasta 6 meses

Margen de intermediación: Pactado libremente entre el intermediario financiero y el beneficiario

Amortización de Capital. Al vencimiento

2. Inversión Fija
3. consolidación de Pasivos
4. Leasing
5. Creación, capitalización y adquisición de empresas
6. Infraestructura y transporte

a) Financiación en pesos:

Plazo: Hasta 7 años, incluidos hasta 3 años de gracia

Plazos superiores: De acuerdo con la disponibilidad de recursos

Margen de intermediación: Pactado libremente entre el intermediario financiero y el beneficiario

Amortización de Capital: Semestral

b) Financiación en dólares:

Plazos: Hasta 5 años, incluidos hasta 2 años de gracia (con posibilidades de plazo superior)

Tasa base de redescuento: De acuerdo con la disponibilidad de recursos

Margen de intermediación: Pactado libremente entre el intermediario financiero y el beneficiario.

Amortización de capital: Semestral

7. Liquides pesos – dólares
8. Crédito comprado
9. Operación banca internacional
10. Garantías para pymes

3.1.8. Instituto Colombiano para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. COLCIENCIAS.

Objetivo:

Financiar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, con crédito de largo plazo, a empresas y entidades radicadas en el país, a fin de fortalecer la competitividad de los productos y servicios del mercado mundial.

Proyectos Financiables:

- Proyectos de investigación, innovación para el desarrollo tecnológico

- Proyectos de gestión y modernización empresarial y fortalecimiento de la capacitación tecnológica de la empresa.
- Proyectos de sistemas de información y desarrollo de software
- Proyectos de capacitación en nuevas tecnologías.

Rubros no financiables:

- Financiación de prototipos y plantas piloto
- Insumos para el primer lote de prueba de mercado
- Desarrollo y / o adquisición de software
- Contratación de servicios tecnológicos
- Contratación de consultoria especializada
- Capacitación y actualización de persona
- Asistencia a seminarios y a cursos especializados
- Misiones y pasantías empresariales dentro y fuera del país
- Conexión a redes telemáticas
- Adecuación de infraestructura física con destinación especifica para plantas piloto o centros tecnológicos, por valor que no supere el 30% del valor del proyecto
- Gastos de patentamiento o de registro de la propiedad intelectual
- Gastos de participación en ferias y eventos para promover la innovación
- Documentación y bibliografía
- Materia para la promoción y la difusión de los resultados del proyecto
- Personal técnico nacional e internacional participante
- Adquisición o arrendamiento de equipos de investigación y control de la calidad
- Diseño y construcción de bienes de capital que incluyan innovación tecnológica.

Rubros no Financiables:

- Compra de maquinaria y equipo e producción corriente
- Pagos de pasivos, pago de dividendos, aumento de capital de la empresa
- Pagos de dividendos o recuperaciones de capital de la empresa
- Capital de trabajo para la producción corriente
- Inversión en otras empresas
- Inversiones en plantas de producción a escala industrial
- Compra de acciones, derechos de empresas, bonos y otros valores mobiliarios
- Instalaciones llave en mano
- Impuestos causados en el desarrollo del proyecto

Beneficiarios:

Para acuicultura, empresas agropecuarias, agroindustriales, mineras, industriales, de eléctricos, electrónicas, telecomunicaciones, informática, manufactureras, construcción, comerciales y de servicios; centros de desarrollo tecnológico; centros regionales de productividad y desarrollo empresarial; gremios de la producción y de los servicios; firmas de ingeniería y de consultaría; que ejecutan proyectos de innovación y desarrollo tecnológico y obtengan el incentivo a la innovación tecnológica, otorgada por COLCIENCIAS.

Tipos de financiación:

1. Préstamo de reembolso obligatorio, línea IFI – COLCIENCIAS

2. Cofinanciación

Características: Se puede aplicar cuando en un programa de innovación y desarrollo tecnológico, la entidad responsable del proyecto y beneficio del crédito (empresas, gremio o cooperativas) contrata con una universidad o con

un centro de desarrollo tecnológico o de investigación debidamente reconocido, la ejecución del programa o de un aparte de él, en este caso COLCIENCIAS podrá aportar, con carácter contingente (no se reembolsa si el proyecto se desarrolla a cabalidad de acuerdo con el plan aprobado), hasta la totalidad de la porción correspondiente a los gastos realizados en la universidad o centro, teniendo como limite el cincuenta por ciento (50%) del costo del proyecto para el caso de empresas grandes y hasta setenta por ciento (70%) para las empresas consideradas como PYMES, el beneficiario deberá aportar el porcentaje restante (mínimo 50% o 30% dependiendo del tamaño de las empresas) en recursos financieros efectivos (frescos).
Es requisito indispensable la existencia de un contrato entre las partes (empresas beneficiarias y entidad ejecutora). A su vez las dos partes firmarán un contrato con COLCIENCIAS.

Preferencia a proyecto de: Investigación aplicada en el laboratorio y en planta piloto para la generación de nuevos productos y procesos; investigación aplicada de nuevos materiales; desarrollo de cultivos experimentales con variedades mejoradas o nuevas, en el sector agropecuario; servicios tecnológicos que mejoren la productividad o la competitividad de un sector o cadena productiva; actividades de extensión de divulgación y transferencia de tecnología.

Póliza de cumplimiento: sobre los dineros aportados por COLCIENCIAS los beneficiarios deben suscribir una póliza de cumplimiento.

3.1.8.1 Capital Semilla para apoyo a Centros de Desarrollo Tecnológico:

Asimismo COLCIENCIAS apoya la creación de centros de desarrollo tecnológico a través del Capital semilla. Sus principales características son:

Objetivo:

Apoyar el desarrollo institucional de la Red Nacional de Centros de Desarrollo Tecnológico, con el fin de incrementar las inversiones en formación de recursos humanos, realización de los planes estratégicos, formulación del portafolio de servicios, elaboración de la cartera de proyectos, diseño de los sistemas de información y establecimiento de redes nacionales e internacionales.

Condiciones de la financiación**:**

El capital semilla se otorga sobre bases competitivas a la Red Nacional de Centros de Desarrollo Tecnológico del Sistema Nacional de Innovación, de acuerdo con los indicadores de gestión y del compromiso y aporte empresarial en cada uno de ellos.

Rubros financiables:

Están relacionados con el desarrollo institucional, de acuerdo con planes de trabajo aprobados por COLCIENCIAS. Se financia la formación de los recursos humanos de los centros, las actividades de la planeación estratégica, los estudios sectoriales y prospectivos del sector, el diseño del portafolio de servicios, el marketing de los servicios tecnológicos, la formulación de la cartera de proyectos, el diseño e implementación de los sistemas de información y el establecimiento de las redes nacionales e internacionales de los centros.

No se financia:

La construcción o compra de edificios, los cuales deben ser aportados por la contraparte. Además, no se financian otros rubros ya especificados en la línea de reembolso obligatorio.

Las solicitudes deben enviarse directamente a COLCIENCIAS (Subdirección de Programas de Innovación y Desarrollo Empresarial), con el siguiente contenido mínimo: Identificación de la situación y las tendencias de futuro de las tecnologías del respectivo sector o área a atender con la creación del centro tecnológico, definición de las limitantes tecnológicas y las demandas empresariales del sector, elaboración de una cartera preliminar de proyectos de Investigación y Desarrollo para el sector, evaluación de la oferta científica y tecnológica que atiende el sector, identificación de los empresarios que apoyan financieramente el montaje del centro y estudio de la sostenibilidad del centro a cinco años

3.1.9. FINDETER

FINDETER, ofrece una fuente de financiación para proyectos de desarrollo regional a través de créditos redescontables; opera bajo el régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.

Beneficiarios:

- Entidades territoriales
- Entidades descentralizadas del orden municipal y departamental
- Áreas metropolitanas
- Asociaciones de municipios
- Entidades privadas y de economía mixta, acorde con la ley 142 de 194 de servicios Público, ley 30 de01992 de Educación Superior y ley 115 de 1994 general de la Educación, y potras entidades relacionadas con la ley 11 de1986

Proyectos Financiables:

- Conservación y recuperación de microcuencas
- Acueductos
- Alcantarillado

- Aseo Urbano
- Puestos de salud
- Centros de atención al anciano
- Establecimientos educativos PATRA los niveles preescolar, básica, media y superior, de carácter publico o privado
- Mercados minoritarios y mayoristas
- Centros de acopio
- Reubicación de vendedores ambulantes
- Centrales de telefónica y red externa del servicio de telefonía pública de carácter fijo básico conmutado.
- Vías urbanas (incluye soluciones de trafico, semaforización)
- Vías no urbanas
- Terminales de transporte terrestre, de pasajeros y de carga
- Muelles fluviales y embarcaderos marítimos
- Aeropuertos
- Unidades deportivas
- Mejoramiento integral de asentamientos subnormales.
- Infraestructura para nuevos asentamientos de vivienda de interés social
- Preinversión.

3.2 ORGANISMOS INTERNACIONALES

3.2.1 Banco Interamericano de Desarrollo. BID

Es una institución financiera internacional creada en 1959 con el propósito básico de acelerar el desarrollo económico y social de sus países miembros de América Latina y el Caribe. También son miembros algunos países externos a la región, pero los pertenecientes a ésta son sus accionistas mayoritarios.

Las entidades públicas de los países miembros latinoamericanos, incluyendo los gobiernos, organismos autónomos, nacionales, regionales y municipales, son elegibles para préstamos del BID. Entre sus principales estrategias destaca el otorgamiento de cooperación técnica para la preparación, financiación e implementación de planes, programas y proyectos de desarrollo.

En 1995 el Banco introdujo nuevos programas encaminados a financiar y apoyar actividades del sector privado en América Latina y el Caribe, sin garantías gubernamentales y siempre que el gobierno local respectivo no objete la operación. Los recursos son utilizados para apoyar, y nunca sustituir, la inversión privada garantizando la adicionalidad con su presencia y la concurrencia de fondos procedentes de patrocinadores y prestamistas privados.

Objetivo:

Institución financiera internacional creada para contribuir a acelerar el progreso económico y social de América latina y el Caribe. Para ello, trabaja con prestamos y operaciones de cooperación técnica los cuales complementan el programa de prestamos mediante transferencia de conocimientos técnicos a países miembros prestatarios.

Proyectos Financiables:

Obras de infraestructura, proyectos que contribuyan a construir carreteras y caminos, ampliar la oferta de servicios eléctricos, abrir clínicas y hospitales, proveer agua potable, promover pequeñas empresas y modernizar las instituciones encargadas del desarrollo del país. El financiamiento de emergencia tiene por objeto la recuperación de los países tras el daño generado por desastres naturales y mantener la estabilidad económica y las reformas. También otorga cooperación técnica para fortalecer instituciones regionales de desarrollo, y contribuir a identificar futuros proyectos de inversión.

Beneficiarios:

Entidades publican de los países miembros latinoamericanos, incluyendo los gobiernos organismos autónomos, nacionales, regionales y municipales. La Corporación Andina de Fomento, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco de Desarrollo del Caribe y el Fondo para el desarrollo del a Cuenca de la Plata también pueden obtener prestamos del BID para proyectos en sus países miembros.

El Banco financia programas globales de crédito y capacitación para microempresas que tienen acceso a fuentes convencionales de crédito. Los fondos del BID son canalizados por medio de entidades publicas y privadas sin fines de lucro, las cuales administran programas de crédito que ayudan a los microempresarios a emprender o ampliar sus negocios.

Tipos de Financiación:

Formulación de Proyecto: El ciclo comienza con las misiones de programación a países prestatarios. Funcionarios y expertos locales se suman a los especialistas del BID para examinar los planes de desarrollo y programas de inversión del país y ayuda a identificar proyectos. De este proceso de análisis

y consultas surgen las solicitudes de préstamos específicos y, después de detalladas negociaciones, el documento del préstamo es sometido al Directorio Ejecutivo. Una vez aprobado, comienza la ejecución y supervisión del proyecto. La fase de evaluación, diseñada para mejorar futuros proyectos, complementa el ciclo.

Evaluación de la solicitud: Ela análisis institucional, que determina si el eventual prestatario tienes capacidad para ejecutar eficientemente el proyecto, otorga especial atención a su organización financiera, contable, administrativa y operativa. El análisis técnico, se concentra en los aspectos de ingeniería y factibilidad practica del proyecto, planes, especificaciones, proyecciones, estimaciones de costos, aplicación de tecnología y, disponibilidad de materias primas y recursos humanos. El análisis socioeconómico abarca consultas con las comunidades afectadas por la operación propuesta y determina los costos y beneficios del proyecto y su impacto en la generación de empleos, la distribución de ingresos, la productividad y el comercio. También se estudia el posible impacto ambiental del proyecto. El análisis financiero examina la rentabilidad del proyecto la capacidad del prestatario para aportar fonos de la contrapartida, y asegurar que, una vez completado, el proyecto se autofinancie.

Términos:

Para proyectos otorgados con recursos de capital ordinario, los periodos de amortización varían entre 15 y 25 años. Las tasas de interés sobre estos prestamos, que se ajustan semestralmente, reflejan el coto de los empréstitos obtenidos por la institución en los mercados mundiales de capital mas los cargos sobre el préstamo y el margen de financiamiento suficiente para cumplir con los objetivos financieros.

Las tasas de interés sobre los préstamos provenientes del Fondo para Operaciones especiales para amortización de 25 a 40 años oscilan entre el 1 y

el 4% según el grado de desarrollo del país y la naturaleza del proyecto, con periodos de gracias de 5 a 10 años. Los prestamos otorgados con recursos de los diversos fondos que el banco administra tiene los términos y condiciones estipulados en los acuerdos celebrados entre el banco y los países donantes.

Ejecución de proyectos: Tras la firma del contrato del préstamo por parte del prestatario, el Banco y el garante, si lo hubiere, comienzan los desembolsos del préstamo, a medida que el proyecto evoluciona y se incurre en gastos. El prestatario debe proporcionar al banco, antes del primer desembolso, un candelario de los gastos de inversión del proyecto, así como mantener una contabilidad detallada de los costos y de los servicios. Los pedidos de desembolso deben estar debidamente documentados y los funcionarios del banco deben verificar su objeto. Además, el prestatario debe someter informes periódicos de evolución del proyecto del BID.

Cooperación Técnica – BID

El BID brinda cooperación técnica para ayudar a los países prestatarios a preparar, financiar y ejecutar proyectos nacionales o regionales y a capacitar personal especializado. Esta cooperación puede proporcionarse a organismos públicos y empresas privadas, así como a instituciones subregionales y ONGs. Normalmente las instituciones encargadas de los programas de cooperación técnica son las que contratan los servicios de consultoría, aunque también pueden ser contratados por el Banco.

La cooperación técnica puede ser no reembolsable, reembolsable o de recuperación contingente, según las condiciones de cada país y proyecto específico.

El BID financia la cooperación técnica a través de:

- Fondo de Operaciones Especiales –FOE-, constituido con contribuciones especiales de los países miembros. Sus utilidades han sido la principal fuente para financiar la cooperación técnica no reembolsable.

- Fondos en Fideicomiso, que corresponden a recursos administrados por el Banco, de acuerdo con los parámetros fijados por los países donantes, en relación con sectores económicos, países beneficiarios, consultores y tipo de asistencia a ser financiada. Estos fondos son utilizados para la preparación, financiación y ejecución de planes de desarrollo e inversión, estudios económicos, análisis sectoriales e identificación de proyectos tanto a nivel nacional como regional, estudios de prefactibilidad, estudios de proyectos en ejecución que tienen dificultades y evaluación de proyectos.

- Fondo Multilateral de Inversiones -FOMIN-. Fondo especial del BID que promueve el desarrollo del sector privado y las inversiones privadas en América Latina y el Caribe. Este Fondo colabora con ONGs, asociaciones empresariales, instituciones financieras y fundaciones, que tengan una sólida trayectoria en la región. Adicionalmente ofrece asistencia principalmente en forma de operaciones no reembolsables, en su mayoría dirigidas a los países más necesitados de la región.

Las áreas prioritarias del FOMIN son: Microempresa (Programa de Pequeños Proyectos y Programas Globales de Crédito), Pequeña y mediana empresa, Infraestructura básica (energía, agua y saneamiento, telecomunicaciones y transporte), capacitación para trabajadores del sector privado.

- Corporación Interamericana de Inversiones (CII). Entidad autónoma del BID, creada en 1989, que promueve el establecimiento, la ampliación y la modernización de empresas privadas de pequeña y mediana escala. También

respalda a empresas con participación accionaría parcial de entidades públicas, cuyas actividades fortalecen al sector privado.

Además de otorgar préstamos, la Corporación efectúa inversiones directas como compra de acciones o pagarés convertibles. Promueve asimismo la participación de fuentes adicionales de recursos mediante cofinanciamiento, sindicación de préstamos, empresas conjuntas y otros medios. También provee asistencia técnica, financiera y gerencial y puede celebrar arreglos de licencias, comercialización o administración con empresas individuales.

- Cooperación técnica intrarregional -CT/INTRA-. Promueve el intercambio de expertos como también las actividades de capacitación entre los países miembros.

3.2.2 Banco Mundial (BM)[73]

Las operaciones de cooperación internacional no reembolsable que realiza el Banco Mundial se materializan y ejecutan a través del Programa de Donaciones pequeñas –PDP- y de los Fondos en Fideicomiso.

El PDP apoya instituciones o actividades en países en vía de desarrollo, prefiriendo instituciones sin ánimo de lucro, ONGs y no académicas. Sus actividades más frecuentes son conferencias, seminarios, publicaciones especiales y material audiovisual. Financia actividades orientadas al alivio de la pobreza, protección del medio ambiente, desarrollo de recursos humanos y desarrollo del sector privado.

[73] Plan de Acción en gestión tecnológica e innovación para el Distrito Capital. Estrategia Financiera. Anexo Nº 3

Los Fondos en Fideicomiso son acuerdos entre el BM y el donante de acuerdo con los términos de este último, utilizados para apoyar las operaciones, programas de investigación e iniciativas de desarrollo del Banco. El Departamento de Cofinanciación y Financiación de Proyectos del Banco -CAP- es el responsable de facilitar y coordinar la, movilización de los fondos; así como de manejar y dirigir el Programa de Consultores.

Áreas prioritarias de cooperación

Los fondos del BM han sido utilizados principalmente para cofinanciación de proyectos, estudios de preinversión, asistencia técnica, estudios sectoriales y económicos, investigación y capacitación. En 1995 las áreas prioritarias de apoyo fueron: multisectorial, medio ambiente, recursos humanos, agricultura, infraestructura, industria y sector financiero, energía; y administración pública.

3.2.3 Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo Industrial (ONUDI)[74]

En 1966, la Asamblea General de la Naciones Unidas creó la ONUDI al interior de su Secretaría; a partir 1986 se convirtió en un organismo especializado y autónomo de las Naciones Unidas. La oficina de ONUDI en Colombia fue establecida enero de 1991 y también cubre a Panamá. Trabaja bajo tres enfoques: modernización del sector productivo del país, interacción del sector público y la industria y la cooperación inter-agencial.

La ONUDI tiene por mandato “promover el desarrollo industrial y la cooperación tecnológica apoyando actividades de asistencia técnica, capacitación, intercambio de información, planificación nacional y regional en la transferencia de tecnología”.

[74] Ibíd., Pág. 16

Las modalidades de cooperación que utiliza son:

- Expertos para asistencia y asesoramiento
- Empresas consultoras que participan en el establecimiento de empresas industriales
- Becas, individuales o colectivas
- Asistencia para equipar instalaciones
- Servicios de ensayo y desarrollo así como plantas experimentales
- Seminarios

Los servicios ofrecidos responden a criterios de promoción de una economía competitiva, creación de empleos productivos y protección del medio ambiente. Estos servicios, diseñados para los sectores público y privado, dirigen la acción de la ONUDI hacia las siguientes áreas:

- Planeación industrial gubernamental
- Generación de capacidades para las exportaciones industriales
- Redes de información industrial
- Asociaciones industriales internacionales
- Calidad y certificación para la competitividad industrial
- Producción limpia y medio ambiente
- Desarrollo de eficiencia energética
- Desarrollo de industrias agro-relacionadas
- Desarrollo industrial local
- Desarrollo de mujeres empresarias

<u>Áreas prioritarias de cooperación</u>

- Agroindustria
- Industria mecánica, metalúrgica y química

- Planificación e introducción de incentivos industriales
- Refuerzo de instituciones nacionales que sirven al sector industrial
- Desarrollo de tecnología local y adaptación de tecnología extranjera
- Promoción de inversiones

Las iniciativas son presentadas, a través de la ACCI, ante la representación de la ONUDI en Colombia.

3.2.4 Cooperación técnica entre Países en desarrollo - CTPD[75]

Se institucionalizó en 1978 en la Conferencia de las Naciones Unidas en Buenos Aires. Esta modalidad de cooperación técnica consiste en el intercambio de experiencias, conocimientos y habilidades entre países ene desarrollo, como apoyo al logro de sus objetivos económicos y sociales.

Las modalidades de cooperación más utilizadas por la CTPD son: Proyectos de desarrollo, estudios e investigación, pasantías y capacitación.

Las principales características de la CTPD son: se comparten experiencias más homogéneas en cuanto al nivel de desarrollo, pertenencia regional e idiosincrasia; los países en desarrollo pueden ser simultáneamente oferentes y demandantes de cooperación técnica, la cual es concertada; se comparten los costos y se posibilita su reducción; admite la realización de ajustes durante la ejecución; existe la posibilidad de adelantar acciones puntuales de corta duración.

Las entidades públicas de todos los órdenes; nacional, departamental y municipal, del nivel central o descentralizado, pueden ser oferentes y

[75] Ibíd., Pág.18

demandantes de CTPD. Los proyectos deben ser formulados siguiendo las metodologías que se definan para tal fin, y enviados para su estudio a la Subdirección de CTPD de la ACCI.

3.2.5 Instrumentos para el financiamiento del desarrollo tecnológico existentes a nivel mundial[76]

3.2.5.1 Instrumentos y mecanismos de subsidio directo (grants).

a. Crédito de reembolso obligatorio (con mayores o menores niveles de subsidio)

Préstamos de largo plazo a tasas de interés de mercado (o muy cercanas) para financiamiento de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Si hay garantías suficientes no requiere evaluación ex-ante detallada. Puede aplicarse como "primer piso" (directamente a través de la banca comercial – estatal y/o privada); o mediante redescuento automático a bancos comerciales, como "segundo piso" (con intermediación de un banco estatal de segundo piso entre el banco comercial y el usuario del crédito). Cabe resaltar que a nivel mundial existe una elevada aversión de los bancos a la incertidumbre/riesgo, a los proyectos de largo plazo y a los temas desconocidos.

b. Crédito de recuperación contingente
Financiamiento de proyectos empresariales de innovación y desarrollo tecnológico en el cual las condiciones de reembolso se pactan sujetas al éxito o fracaso que se pueda tener en el futuro proyecto.

c. Crédito mixto

[76] Ibíd., Anexo Nº 1, Pág. 1

Financiamiento de proyectos empresariales de innovación y desarrollo tecnológico, mediante créditos reembolsables y créditos de recuperación contingente, previo cumplimiento de condiciones similares a las establecidas para la cofinanciación.

d. Becas, misiones, pasantías

A veces se combina con crédito, para el envío de personal de la empresa a capacitación o postgrados, etc. en el país o en el extranjero.

e. Cofinanciación (apoyo directo)

Asignación parcial de dinero, no reembolsable, al costo de un proyecto de innovación, sea de I & D, de infraestructura, estudios, etc. Por cada peso en efectivo que invierta el sector productivo en proyectos de innovación, el gobierno financia una suma igual, de carácter no reembolsable, previo cumplimiento de determinadas condiciones.

f. Riesgo compartido

Inversión de recursos en fondos de **capital de riesgo**, con destino específico a financiar la creación de empresas de base tecnológica. Este tema se detalla en otro anexo.

g. Capital semilla

Financiamiento, mediante **crédito de recuperación contingente**, de Centros Tecnológicos Sectoriales o Regionales, Incubadoras de Empresas, Organismos de Fomento o de Servicios Tecnológicos y Asociaciones de Gestión Tecnológica sin Animo de Lucro.

3.2.5.2 Instrumentos y mecanismos de apoyo indirecto [77]

a. Garantías

Respaldo que facilita el acceso al crédito a empresas u organizaciones (sin posibilidad de otorgar garantías reales) con proyectos de desarrollo tecnológico de alta calidad y factibilidad, mediante otorgamiento parcial de garantías bancarias, previo pago de una prima de seguro.

b. Beneficios fiscales

Para la adopción de mecanismos por esta vía, es importante tener en cuenta el nivel de cultura y conciencia tributaria de los empresarios y la capacidad de control fiscal del Estado. Igualmente, es necesario mencionar que para un gran numero de países resulta difícil la medición del impacto que estos mecanismos tienen sobre el sistema tributario (determinación del costo fiscal) y por ende la determinación del costo/beneficio de las mismas frente a otras opciones (como la inversión directa).

3.2.5.3 Otros mecanismos de apoyo y financiamiento[78]

Esquemas de **colaboración,** a través de los cuales el Estado facilita la existencia de infraestructura, tales como:

- Centros público de investigación
- Centros de Desarrollo Tecnológico
- Entidades promotoras de inversión (fondos de capital de riesgo, incubadoras de empresas)
- Otros organismos de apoyo (Calidad y Metrología, Diseño, Normalización, Promoción Comercial, etc.)
- Apoyo a la demanda

[77] Ibíd., Pág., 2
[78] Ibíd., Pág., 2

Apoyo financiero no-reembolsable, automático y parcial, al valor de la adquisición de servicios de I & D, capacitación o asistencia técnica en instituciones previa y periódicamente certificadas por el gobierno en cuanto a su calidad, reputación y honorabilidad.

- Esquemas normativos orientados a facilitar la actividad productiva y el desarrollo tecnológico, mediante el otorgamiento de condiciones especiales a quienes desarrollen actividades con contenido tecnológico:
  - Zonas francas
  - Zonas especiales para el DT
  - Parques tecnológicos/industriales
  - Regímenes especiales en materia de importación de insumos y exportación de bienes

a. Fondos de Desarrollo Tecnológico

En atención al bajo interés y capacidad técnica mostrados por el sistema financiero para destinar recursos a los emprendimientos de innovación y desarrollo tecnológico, en la mayor parte de países, reflejo de su elevada propensión a aplicar a los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico los mismos criterios aplicables a los proyectos de inversión tradicionales, los gobiernos vienen patrocinando la creación de fondos especiales para tal fin. Estos, con alta participación y apoyo del Estado, pretenden apalancar en mejor forma los proyectos que impliquen altos riesgos tecnológicos y comerciales, que normalmente requieren financiamiento a largo plazo y en condiciones más favorables que las usuales en la banca comercial normal.

b. Cooperación Técnica Internacional

c. Líneas de crédito y cooperación de la banca multilateral (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, OEA, OEI, etc.)

d. Mercado internacional de capitales

e. Facilitación de la Inversión Extranjera Directa en el país, como mecanismo para optimizar la transferencia tecnológica.

3.2.6 La cooperación técnica internacional[79]

La Agencia Colombiana de Cooperación Internacional –ACCI- creada mediante Ley 318 de septiembre 20/96, que inició operaciones en diciembre de 1997, es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Departamento Nacional de Planeación, cuya misión es ordenar y coordinar la cooperación técnica y financiera no reembolsable, orientada a la transferencia de tecnologías y de capacidades internacionales que permitan un fortalecimiento de las diferentes regiones y sectores del país. Funciona como entidad de canalización forzosa de la totalidad de los programas y proyectos que el país presente ante los cooperantes internacionales.

La ACCI actúa bajo las directrices de su Junta Directiva, conformada así: Director o Subdirector del DNP, quien la preside; el Ministro o Viceministro de Relaciones Exteriores; el Ministro o Viceministro del Interior, quien actuará como vocero de las instancias territoriales; un representante del Presidente de la República y el Director de Colciencias.

[79] Ibíd., Anexo Nº 3, Pág., 8

El campo de la cooperación internacional tiene una dinámica que hace que las condiciones, áreas y modalidades estén en constante cambio y que exista una especificidad de las políticas de cooperación de cada fuente bilateral o multilateral, una variedad de los mecanismos de negociación, evaluación y ejecución de los proyectos y una diversidad de temas en los cuales se ofrece cooperación internacional y asistencia técnica.

A continuación se mencionan las principales fuentes de cooperación disponibles para Colombia en general y el distrito en particular, que de alguna manera prevén apoyo para el desarrollo sostenible del sector productivo.

3.2.6.1 Fuentes Bilaterales[80]

a. Canadá

La cooperación entre Colombia y Canadá se fundamenta legalmente en el Convenio General Sobre Cooperación Técnica, firmado en Bogotá el 17 de noviembre de 1972, el cual se ejecuta a través de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI).

Actualmente las áreas prioritarias de cooperación son Telecomunicaciones, Minas y energía, medio ambiente; y Derechos humanos y justicia.

Para los temas de interés del presente trabajo, la cooperación se desarrolla por medio de las modalidades de:

- Cooperación financiera para proyectos de medio ambiente y desarrollo sostenible
- Cooperación financiera no reembolsable para pequeños proyectos en comunidades locales.

[80] Ibíd., Pág., 8

Se celebran Comisiones Mixtas cada cuatro años. La siguiente negociación de proyectos se realizará en el 2000, una vez se terminen de ejecutar los proyectos en desarrollo.

b. Francia

El Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre Colombia y Francia fue firmado el 18 de septiembre de 1963. Esta modalidad de cooperación se traduce en intercambio de expertos, apoyo logístico, becas y pasantías. En la Comisión Mixta de 1995, se acordó cooperar en las áreas de ciencia y tecnología, agricultura y agroindustria, salud, desarrollo técnico e industrial, medio ambiente, energía y minería, entre otras.

La cooperación financiera consiste en créditos blandos formalizados mediante los llamados "Protocolos Financieros" suscritos entre ambas naciones, destinados a grandes proyectos de exportación y sujetos a las reglas de la Organización de Cooperación y desarrollo Económico (OCDE). El 35% de estos créditos es condonado y en su mayoría son a largo plazo. Algunas veces pueden incluir componentes de asistencia técnica, generalmente asociada a equipos y maquinaria adquiridas con tales recursos.

La negociación de proyectos se realiza en Comisiones Mixtas cada tres años. La más reciente se realizó en 1999.

c. Japón

Japón, a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), apoya actividades para promover el desarrollo económico en los países en vía de desarrollo. En Bogotá el 22 de diciembre de 1976 se firmó el Convenio Referente a Cooperación Técnica. La AOD opera bajo tres líneas principales:

Donaciones bilaterales: utilizadas en programas de cooperación técnica, ejecutados en su mayoría a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón –JICA-

Préstamos bilaterales: generalmente se refiere a créditos blandos, ejecutados a través del Fondo de Cooperación Económica con Ultramar –OECF-.

Contribuciones de capital a las Organizaciones Multilaterales

Las modalidades de cooperación son, entre otras:

- Becas, para instrucción técnica
- Expertos japoneses, para optimizar la transferencia de tecnología y conocimientos
- Donación de equipos
- Cooperación Tipo proyecto, la cual integra las tres anteriores y se caracteriza por brindar asistencia técnica para la planificación, implementación y evaluación de proyectos de investigación y desarrollo de tecnologías limpias, entre otros.
- Jóvenes voluntarios (entre 20 y 39 años), con habilidades profesionales en algún campo específico.
- Estudios para el desarrollo. Se realiza mediante el envío de un grupo de especialistas para trabajar en un tema específico. Entre otros, los campos de acción para los cuales aplica esta modalidad son: infraestructura, planificación y administración, agricultura, medio ambiente, minería e industria.

Estos informes son indispensables para los países industrializados y para los bancos internacionales en el estudio de las solicitudes de crédito de los países en vía de desarrollo.

Específicamente para Colombia, en la actualidad son áreas prioritarias de cooperación: Competitividad y Desarrollo Empresarial, Medio ambiente, entre otras.

La negociación de proyectos es anual. La fecha prevista por la JICA para el inicio de la presentación de las solicitudes es en el período agosto-septiembre.

d. Reino Unido

El 11 de mayo de 1966 se firmó el Convenio Marco de Cooperación Técnica entre Colombia y el reino Unido.

América Latina no está clasificada como región prioritaria dentro de la actual política de desarrollo internacional británica.

Desde 1997 la cooperación bilateral británica se canaliza por conducto del Departamento para el Desarrollo Internacional –DFID- y consiste en cooperación financiera, técnica, asistencia bilateral a través del Consejo Británico y ONGs, la cooperación para el desarrollo de la Mancomunidad e inversiones directas y préstamos. La modalidad es cooperación técnica no reembolsable, para lo cual el DFID destina expertos y capacitación; y en casos muy específicos ofrece asistencia financiera para equipos y otros costos locales relacionados con los proyectos.

Los programas de capacitación y de transferencia de tecnologías y conocimientos cuentan con visitas de expertos, elaboración de estudios, desarrollo de pasantías, otorgamiento de becas y donación de equipos. Entre las áreas prioritarias se cuenta Medio ambiente y desarrollo rural.

La más reciente Comisión Mixta para negociación de proyectos se realizó en octubre de 1999.

e. España

Su apoyo para el desarrollo científico y tecnológico, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional -AECI-, se realiza en el marco del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre Colombia y España, suscrito el 20 de junio de 1979, y el Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República de Colombia, firmado el 29 de octubre de 1992.

Dentro de las prioridades del convenio se encuentran las siguientes áreas:

- Ciencia y tecnología, educación, capacitación y formación de recursos humanos
- Gestión del medio ambiente, industria agroalimentaria y manufacturera, cooperativas, turismo, gestión municipal, gestión hospitalaria, informática aplicada a la empresa, gestión comercial, organización y gestión bancaria, gestión aduanera y; finanzas, hacienda pública y finanzas internacionales.
- Modernización de los sectores productivos y de infraestructura
- Fortalecimiento de los sectores productivos básicos, especialmente el agrícola; fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa; modernización de los sistemas financieros

Las principales modalidades de cooperación española son: Becas, Expertos, Jóvenes voluntarios, Convocatorias a ONGs, Pasantías y Proyectos de Desarrollo.

La negociación de los proyectos se realiza en Comisión Mixta cada dos años. La última se realizó en 1999.

f. Reino de los Países Bajos (Holanda)

Los vínculos de cooperación Colombia-Holanda datan de 1965. A partir de 1996 Colombia dejó de recibir cooperación oficial de Holanda bajo el esquema bilateral que venía funcionando, sin embargo se aceptó la continuación de los proyectos en desarrollo. A futuro, para acceder a los programas de cooperación para el desarrollo financiados por Holanda, Colombia deberá optar "proyecto por proyecto" dentro de los siguientes programas:

Programa Especial para el medio ambiente (selva tropical, biodiversidad, pueblos indígenas), Programas Especiales de Investigación en Biotecnología, Programas de Asistencia técnica Suplementaria, Programa Holandés de Promoción de Exportaciones (ORET/MILIEV), Compañías de Financiamiento de Inversiones en países en Vía de Desarrollo (FMO), Programa Especial de Asistencia Gerencial a Empresas (PUM), Centro de Promoción de <Importaciones (CBI), Programa de Becas en Holanda.

Los proyectos se pueden presentar en cualquier época del año, a través de la ACCI, a la Embajada de Holanda.

g. República Federal de Alemania

Colombia y Alemania suscribieron el 2 de marzo de 1965 el Convenio de Cooperación Económica, modificándolo el 4 de agosto de 1973. El 26 de mayo de 1996 firmaron un nuevo documento bajo el nombre de Convenio General de Cooperación Técnica, que reemplazó al de 1965.

La Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica –GTZ- es la entidad encargada de ejecutar la política de cooperación técnica no reembolsable de tal país. Existen, además, otras entidades alemanas que dan cooperación a Colombia: La Fundación Alemana para el desarrollo Internacional (DSE), la Sociedad Carl Duisberg (CDG), el servicio Alemán de Intercambio Académico

(DAAD), el servicio de Expertos Jubilados (SES), los Expertos Integrados (CIM), la Sociedad Alemana de Inversiones y desarrollo (DEG), la Asociación de Cooperación para el desarrollo (AGEN).

Estas instituciones se dedican a brindar capacitación dentro y fuera de Alemania, a enviar expertos, a otorgar becas educativas y a promover iniciativas de investigación en los países en desarrollo. Para acceder a sus servicios, se debe proceder a través de la Embajada Alemana.

La cooperación alemana al desarrollo se realiza bajo la modalidad de cooperación técnica, la cual se fundamenta en el envío de expertos y equipos para la realización de los proyectos.

La cooperación financiera consiste en préstamos blandos. Actualmente Colombia no es elegible para recibir nuevos recursos de cooperación financiera no reembolsable, debido al nivel de desarrollo medio alcanzado por el país.

Los sectores prioritarios de la cooperación alemana hacia Colombia son, entre otros: Recursos naturales y desarrollo regional, que incluye fortalecimiento institucional, ecosistemas estratégicos, manejo integral de cuencas, producción limpia y biodiversidad.

La negociación de proyectos se realiza cada dos años. La última se llevó a cabo en 1999.

h. Estados Unidos

La cooperación internacional Colombia-EUA se realiza en virtud del Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afín, firmado el 23 de julio de 1962, el cual se encuentra vigente pero inactivo. El área prioritaria es la lucha

antidrogas en todas sus formas. La última negociación se realizó en junio de 1999.

3.2.6.2 Fuentes Multilaterales[81]

Destaca la participación de las instituciones financieras internacionales como el Banco Interamericanos de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, de las Agencias de las Naciones Unidas, así como la Comisión Europea, una de las principales fuentes multilaterales de cooperación para Colombia.

a. Comisión Europea (CE)

La Unión Europea decidió, en junio de 1993, establecer la Delegación de la Comisión Europea –CE- para Colombia y Ecuador en Bogotá, haciendo efectivo el acuerdo firmado en 1992. Cuenta con dos modalidades de cooperación:

- **Cooperación Directa de la CE con Colombia**

La CE aprueba una Nota Estratégica de país para 2 o 3 años. En tal documento se establecen las modalidades, sectores prioritarios y los montos a financiar hacia el país. Los lineamientos se fundamentan en los siguiente aspectos, entre otros:

- Apoyo a la modernización del aparato productivo colombiano
- Se busca reforzar la posición colombiana en el continente y la optimización del Sistema General de Preferencias Andino –SGP- con la Unión Europea, para lo cual se deberá contra con alta participación del sector privado. Para esto se pretende realizar:
- Apoyo a la definición de políticas sectoriales y de desarrollo institucional, definición de marcos jurídicos adecuados para la

[81] Ibíd., Pág., 13

Inversión Extranjera, promoción del SGP, estadísticas comerciales, etc.

- Apoyo directo para reforzar la competitividad de las empresas: formación profesional, transferencia de tecnología, actividades de mercadeo, financiación, etc.
- Modernización de infraestructura, especialmente en sistema de transporte.

Se prevé la opción de realizar estudios de factibilidad con miras a ser financiados por el banco europeo de Inversiones.

La protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales

- **Cooperación Descentralizada**

Es la que realiza la Comisión Europea con ciudades, institutos de tecnología, empresas de energía, pequeñas y medianas empresas y universidades, entidades que presentan proyectos conjuntamente con instituciones europeas para acceder a recursos de cooperación. Entre sus programas, los que más interesan a los objetivos del presente trabajo son:

Programa INCO, enfocado a la investigación y el desarrollo tecnológico, con las siguientes modalidades:

- Proyectos de investigación
- Coordinación de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico ya financiados por autoridades públicas u organismos privados
- Medidas de acompañamiento y fomento a las acciones de investigación

- Acciones “Keep in touch” (mantenerse en contacto)

Programa AL INVEST, que es un acercamiento del empresario latinoamericano con el europeo, principalmente para PYMES. Se realiza a través de:

- Encuentros sectoriales
- Instrumentos de seguimiento
- Jornadas de asociación

Programa ALFA, ejecutado a través de redes interuniversitarias de Europa y América Latina, se basa en:

- Mejoramiento estructural de la educación superior
- Cooperación entre instituciones de educación superior y empresas.
- Preparación de actividades para entrenamiento científico y tecnológico
- Invención de proyectos conjuntos

Los proyectos de cooperación directa son presentados oficialmente por la ACCI a la delegación de la Comisión Europea.

Para acceder a la cooperación descentralizada la institución interesada deberá asociarse con instituciones homólogas europeas y latinoamericanas y presentar las propuestas directamente a la Comisión Europea de acuerdo con los términos de referencia de cada convocatoria.

3.2.7. Corporación andina de fomento. CAF.

Objetivo:

Institución financiera internacional creada para contribuir a acelerar el progreso económico y social del Pacto Andino.

Tipos de Financiación:

Monto y plazos: Se establecen de acuerdo a la magnitud y los requerimientos de cada proyecto.

Moneda: El crédito se otorga en dólares únicamente.

Cuantía: En la actualidad, la CAF financia proyectos, cuyos requerimientos económicos no superen los US $ 5.000.000, pero vale aclarar que en este momento, se esta contemplando la posibilidad de ampliar el mercado, aumentando las posibilidades de financiar proyectos a gran escala.

4. PROPUESTA DE UN NUEVO MARCO NORMATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD

Proyecto de ley No. ____ por medio del cual se establecen políticas e incentivos para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación con miras a generar mayor competitividad

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

INTRODUCCIÓN

Frente al proceso de innovación internacional que se avecina con el ALCA y para poder estructurar una plataforma competitiva frente al comercio internacional y la competencia interna, Colombia no tiene hoy, otra alternativa que buscar el avance acelerado de su desarrollo Científico y Tecnológico[82] ya que la innovación, la ciencia y la tecnología son indispensables para asegurar el desarrollo y crecimiento económico a largo plazo de un país. Del mismo modo, la capacidad competitiva de una nación depende de una política transparente y clara impulsada por el Estado, en donde se fijen las condiciones necesarias para el desarrollo competitivo de la misma. Adicionalmente se requiere una sólida y comprometida alianza entre los sectores publico, privado

[82] COLCIENCIAS. Junio de 2001 Véase documento Base para la definición de una política científica y tecnológica con función social para Colombia en la página 1.

y las instituciones de educación para fomentar el crecimiento de la innovación, la ciencia y la tecnología.

Es por este motivo, que el principal reto que enfrenta el país en estas materias, es lograr que las mismas se consoliden como una política de Estado que trascienda los distintos gobiernos, involucrando a toda la sociedad y desarrollando un adecuado sistema de evaluación de sus resultados e impacto.

¿ Que es la innovación, la ciencia y la tecnología?

Innovación: Introducción de una técnica, producto o proceso en el ámbito productivo, con frecuencia seguido de un proceso de difusión. Dos características de la innovación son la novedad y el beneficio generado. Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado[83]
Encontramos varias clases de innovación:

- Innovación de procesos: La adquisición, asimilación o imitación de nuevas tecnologías para mejorar tecnológicamente procesos productivos existentes en la empresa, para comenzar a utilizar nuevos procesos, y/o innovar procesos inexistentes en el mercado. Un proceso es considerado una innovación tecnológica si pone en marcha nuevas técnicas, tanto para la fabricación de nuevos productos, como para la elaboración de productos existentes dentro de la gama de producción de la empresa.

[83] CHICA, Ricardo. El Crecimiento de la Productividad en Colombia. Colciencias. 1996

- Innovación de productos: Es la adquisición, asimilación o imitación de nuevas tecnologías para mejorar productos existentes o fabricar nuevos productos para la empresa o el mercado. Un producto es considerado como una innovación si da lugar a la creación de un nuevo mercado o si puede distinguirse sustancialmente de los productos fabricados con anterioridad, ya sea desde el punto de vista tecnológico o por los servicios que proporciona a los usuarios. Para que sea considerado como innovación el producto necesariamente debe haber sido incorporado al mercado.

- Innovación tecnológica: Resultado de una serie de actividades cuya finalidad es la introducción de un nuevo producto o la mejora significativa desde un punto de vista tecnológico de un producto existente (innovación de producto), o la introducción de un nuevo proceso de producción o la mejora sustancial de un proceso productivo aceptado a través del mercado (innovación de proceso).

Ciencia: empresa autónoma, objetiva, neutral y basada en la aplicación de un código de racionalidad ajeno a cualquier tipo de interferencia externa. Conjunto de conocimientos y doctrinas metódicamente ordenado, relativo a una materia determinada

Tecnología: Conjunto de procedimientos que permiten la aplicación de los conocimientos propios de las ciencias naturales a la producción industrial, quedando la técnica limitada a los tiempos anteriores al uso de los conocimientos científicos como base del desarrollo tecnológico industrial. Conjunto de teorías, hipótesis y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico.

¿Qué es Competitividad?

Es la capacidad y la disposición para competir. Capacidad o habilidad de un sujeto o colectivo económico, como un país, región, tejido empresarial o sector, de explotar los factores económicos que dependen de él en mejores condiciones que sus rivales (países, sectores de otros países o empresas) de manera sustentable y con rentabilidad en el tiempo a través de la innovación, con el objetivo de lograr mejores resultados en la calidad de vida.

Es la capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico.

Este término es muy utilizado en los medios empresariales, políticos y socioeconómicos en general. A ello se debe la ampliación del marco de referencia de nuestros agentes económicos que han pasado de una actitud auto protectora a un planteamiento más abierto, expansivo y proactivo.

La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier iniciativa de negocios, lo que está provocando obviamente una evolución en el modelo de empresa y empresario.

El uso de estos conceptos supone una continua orientación hacia el entorno y una actitud estratégica por parte de las empresas grandes como en las pequeñas, en las de reciente creación o en las maduras y en general en cualquier clase de organización. Por otra parte, el concepto de competitividad nos hace pensar en la idea "excelencia", o sea, con características de eficiencia y eficacia de la organización.[84]

---

[84] RESTREPO PUERTA, Luis Fernando. Competitividad Sistémica. Centro de Investigación de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado. Bogotá, Colombia. 2002

Necesidad de contar con una infraestructura científica sólida y de controlar los cambios tecnológicos modernos[85]

Existen pruebas contundentes que demuestran la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo social y económico de los países y las comunidades. Los Ministros de Relaciones Exteriores y de Finanzas, reunidos en el contexto de la OCDE, reconocieron formalmente este hecho en su declaración sobre un "programa tecnológico y económico", emitido en 1991./ Casi al mismo tiempo, la CEPAL, en su importante informe "Igualdad social y cambios en las modalidades de producción: un criterio integral"/ expresó una idea fundamental similar acerca de la función de los cambios tecnológicos en el fomento de un crecimiento económico sostenible. En la reunión de Ministros de Industria de América Latina y el Caribe, celebrada en septiembre de 1995 con el auspicio de UNIDO, en Montevideo, entre los temas considerados se incluían fundamentalmente los que se refieren a las esferas que exigen mayores insumos científicos y tecnológicos, como la aplicación de tecnologías no contaminantes competitivas y actividades que requieren una estrecha interacción con metodologías científicas y tecnológicas tales como el control de calidad, la normalización y la metrología. La OCDE resume este consenso mundial:

a) El "cambio tecnológico" constituye el factor que más incide en el crecimiento económico.

b) La investigación y el desarrollo están decisivamente vinculados al crecimiento de la productividad en las empresas.

[85] ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. OEA. Documento : La ciencia , la tecnología y el Área de Libre Comercio de las Américas.

c) Los sectores que crecen con mayor rapidez en la economía mundial y las categorías del comercio mundial que más rápidamente se expanden presentan un uso intensivo de la tecnología.

d) La participación en el comercio mundial está correlacionada con la actividad innovadora.

Kenwood y Lougheed en 1990 en su obra The grouth of international economy, explican a partir del crecimiento del comercio internacional, las diferencias tecnológicas existentes entre los países como uno de os factores estructurales.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) afirma que en un mundo en que el manejo de la tecnología es la clave para la competitividad, "el desafío de los países de la región será adquirir y mantener el manejo de los cambios tecnológicos contemporáneos.

Necesidad de un Sistema Nacional de Innovación SNI[86]

El BID señala que, a fin de absorber y manejar los cambios tecnológicos contemporáneos, controlar algunas tecnologías no basta. Es necesario contar con un "sistema institucional" o "sistema nacional de innovación". La esencia de "toda estrategia eficiente será, pues, el fortalecimiento de las competencias sistémicas". Esto se refiere no sólo a las actividades del sector público, sino a la cooperación de este sector con otros, a fin de liberar y respaldar las fuerzas creativas de la sociedad, generando un contexto global que facilite y favorezca la innovación. Este sistema va de los servicios tecnológicos al sector productivo y de servicios tales como la metrología, la normalización y el control de calidad, a la capacidad para adaptar tecnologías y resolver problemas técnicos con soluciones nuevas.

[86] Idibem. Pág. 4.

La CEPAL en su Informe sobre Globalización y Desarrollo (2002), señala que el desafío de la globalización implica la necesidad de articular los SNI con los sistemas integrales de producción internacional con el objetivo de hacer tránsito hacia redes de producción internacional cada vez más dispersas geofísicamente en el mundo y de ésta forma facilitar un vínculo con el comercio internacional.

Para lograr este objetivo, es necesario establecer una sólida infraestructura científica y tecnológica y contar con una comunidad de investigación que conozca el nivel de desarrollo actual de amplias esferas científicas y tecnológicas. También es necesario desarrollar una cultura sostenible de investigación y desarrollo y esta capacidad en áreas prioritarias. Es esencial también contar con un sistema educativo de alta calidad que responda a las necesidades del sector productivo para satisfacer las necesidades de personal de un sector productivo moderno.

Por otro lado, la existencia de una base de investigación y desarrollo adecuada no necesariamente da lugar al desarrollo social y económico. Pero, no obstante, éste era el criterio prevaleciente cuando se creó el programa de desarrollo científico y tecnológico regional de la OEA. La opinión prevaleciente en esa época se basaba en el modelo lineal del proceso innovador, que partía de la hipótesis de que si uno hacía "buena" ciencia, el desarrollo tecnológico vendría automáticamente. Pero este modelo simplista ya no es aceptado. "La comprensión de las innovaciones tecnológicas ha cambiado recientemente en forma extraordinaria. Los modelos interactivos, que difieren muchísimo del antiguo enfoque lineal, ponen ahora el acento en la función primordial del diseño industrial, sus efectos en el mercado y en la propia tecnología entre las distintas fases de la innovación y las numerosas interacciones entre la ciencia,

la tecnología y otras actividades vinculadas a la innovación en las empresas y entre ellas".

Los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, en la Cumbre de Miami, y los ministros responsables de la ciencia y la tecnología, en su Declaración de Cartagena, reconocieron "la función estratégica que cumple la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico y social y en la protección ambiental" y la necesidad de enfocar el tema en forma sistémica.

También reconocieron que "el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica en el continente es un objetivo que requiere una inversión sustancial de todos los países".

Política e Incentivos en el campo de la ciencia la tecnología y la innovación en Colombia

- Ley 29 de febrero de 1990. Ley marco de Ciencia y tecnología. Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias.
- Decreto 393 de 1991. Por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías**.**
- Decreto 584 de 1991: Por el cual se reglamentan los viajes de estudio al exterior de los investigadores nacionales.
- Decreto 585 de 1991. Por el cual se crea el consejo nacional de ciencia y tecnología, se reorganiza el instituto colombiano para el desarrollo de la ciencia y la tecnología - Colciencias – y se dictan otras disposiciones.

- Decreto 589 de 1991. Por el cual se modifica el estatuto orgánico del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo – FONADE.
- Decreto 590 de 1991. Por el cual se reorganiza la administración y manejo de FONDANE.
- Decreto 591 de 1991. Por el cual se regulan las modalidades especificas de contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas.
- Ley 30 de 1992: Por la cual se organiza el servicio publico de la educación superior en Colombia.
- Ley 99 de 1993: Por la cual se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables,
- Decreto No. 117 de 1994: Por el cual se reglamenta la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
- Ley 115 de 1994:por la cual se expide la ley general de educación decreto 1742 de 1994: por el cual se crean estímulos especiales para investigadores y se reglamenta parcialmente el parágrafo único del articulo 185 de la ley 115 de 1994.
- Decreto 2934 de 1994: Por el cual se establece la estructura interna del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas", COLCIENCIAS y se determinan las funciones de sus dependencias.
- Ley 344 de 1996: Mediante la cual el SENA asigna el 20% de su presupuesto para el financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico productivo.
- Ley 383 de 1997: Estatuto Tributario. Sobre estímulos fiscales para el fomento de la ciencia y la tecnología; deducciones por inversiones directas que hagan las empresas en proyectos de innovación y desarrollo tecnológico; Deducciones por donaciones que hagan las empresas a asociaciones, corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto social corresponda al desarrollo de la investigación

científica y tecnológica; exenciones del IVA en las importaciones de elementos y equipos realizadas por instituciones de educación superior y centros de investigación y altos estudios; deducción tributaria para proyectos ambientales.

- Ley 397 de 1997: Por la cual se desarrollan los artículos, 70, 71 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.
- Artículo 12 de la Ley 633 del 2000. Modifica el Estatuto Tributario en lo relativo a la deducción por inversiones en desarrollo científico y tecnológico.
- Artículo 30 de la Ley 633 del 2000. Modifica el Estatuto Tributario en lo relativo a las importaciones de activos por instituciones de educación superior.
- Resolución Interna 0084: Por la cual se regula lo relativo al reconocimiento de los Centros de Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico y Centros y Grupos de Investigación de Instituciones de Educación Superior para los efectos previstos en los artículos 12 y 30 de la Ley 633 del 29 de diciembre de 2000.
- Acuerdo N º 4 de 2002: Por el cual se reconocen como comisiones regionales de ciencia y tecnología, a los consejos, comités o comisiones de ciencia y tecnología de orden departamental creadas por las autoridades territoriales competentes.

Razones constitucionales

Los artículos de carácter constitucional que hacen referencia al tema de estudio son varios y por ser de orden constitucional podríamos decir que son los pilares y el marco regulatorio en que se debe encuadrar y desarrollar toda la normatividad al respecto.

El preámbulo de la constitución de 1991 colombiana establece ¨ El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice el orden político…….¨ (Sin resaltar el original)

En relación con el preámbulo la Corte Constitucional en la sentencia C-479 de agosto 13 de 1992, con ponencia de los H. Magistrados José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero en uno de sus apartes dijo:

“ El Preámbulo de la Constitución incorpora, mucho mas allá de un simple mandato especifico, los fines hacia los cuales tiende el ordenamiento jurídico; los principios que inspiraron al constituyente para diseñar de una determinada manera la estructura fundamental del Estado; la motivación política de toda la normatividad; los valores que esa Constitución aspira a realizar y que trasciende la pura literalidad de sus artículos.”

Por tal razón el Preámbulo señala el camino a seguir de todos los preceptos constitucionales y otorga al conocimiento entendido como un derecho un estatus que debe ser garantizado por el Estado.

A continuación enumeramos los artículos de la Constitución Política que hacen referencia al tema

- Artículos 2, 27, 44 y 61. La obligación del Estado es Garantizar las libertades de pensamiento, creación, expresión y comunicación, asegurando en todo momento la vigencia de un orden justo.

- Artículos 67 y 70. Derecho y garantía del Estado para crear, disfrutar y acceder a los bienes y valores de la cultura, en sus diferentes expresiones y manifestaciones culturales.

- Artículos 7 y 70. Derecho de las minorías a generar conocimiento según sus propias tradiciones y a beneficiarse de una educación que asegure este derecho.

- Artículo 95 num. 4. Los logros científicos de ninguna manera pueden utilizarse en detrimento de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad e la persona humana. Articulo que se relaciona íntimamente con los artículos 1 y 2 de nuestra carta en donde se establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad Humana
- Artículo 70. Es quizás de los artículos que merece un mayor análisis ya que establece la obligación por parte del Estado a fomentar la educación, las artes, la ciencia la tecnología y las demás expresiones culturales, promoviendo la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. Además establece la importancia de la promoción estatal del desarrollo y de la apropiación social de la ciencia y la tecnología.
- Articulo 71. Creación de incentivos especiales para quienes desarrollen, apoyen, fomenten o financien la creación artística, la ciencia, la tecnología, la educación la conservación del patrimonio cultural y sus manifestaciones populares.

Nota:

1. La participación de los artistas, educadores y científicos en la formulación y definición de políticas y asignación de recursos para el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y demás manifestaciones de cultura se recogió en la Ley General de Educación, La ley de Educación Superior y la Ley del Plan de Desarrollo.
De acuerdo con el análisis realizado se puede ver que son varias las normas constitucionales que se refieren al tema en cuestión.

Conclusiones

- Colombia requiere que de manera sistemática, articulada y eficiente, el conocimiento se convierta en elemento que sirva, no solamente para responder al entendimiento de la realidad y su entorno, sino también y fundamentalmente, para que se convierta en motor de desarrollo y en factor dinamizador del cambio social[87]
- Es necesario y determinante que los ministerios formalicen y asuman la responsabilidad que les corresponde dentro de la política nacional en Ciencia y Tecnología ejerciendo de manera activa y compartida con Colciencias la secretaría técnica de los Consejos de los programas nacionales.[88]
- Se debe fortalecer los Programas Nacionales de Investigación en temáticas complejas y prioritarias para el país, a través del apoyo a la investigación. Resaltamos prioritarias, ya que consideramos que para empezar a ser más competitivos a nivel internacional, debemos

[87] CONPES. Documento N 3080pag 2
[88] Ibíd.., Pág. 7

solucionar primero los diferentes problemas que impiden que el país lo sea.

- Generación de mecanismos específicos que aseguren la apropiación social de conocimiento interno y externo, es decir la aplicación total del concepto “transferencia de tecnología”.
- Ampliar los estímulos financieros y la financiación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Como la Exención en el Impuesto de renta a las empresas que se asocien en los llamados “clusters” o que demuestren resultados en la generación de nuevo conocimiento en temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación.
- Fortalecimiento de programas de Doctorado: Esta propuesta tienen dos variantes:
    1. Nuevos recursos para la financiación de estudios de doctorado en el exterior en temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación.
    2. Estímulos tales como la Cofinanciación para la puesta en marcha de nuevos programas de doctorado en las instituciones de educación superior del país, en temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación.

- El Estado debe promover y apoyar la existencia de Centros de Investigación y Centros de Desarrollo Tecnológico en las instituciones de educación.

- Los Gobiernos Departamentales y municipales deberán incluir en sus planes y presupuestos los programas necesarios para el desarrollo de proyectos en ciencia, tecnología e innovación.

DISPOSICIONES LEGALES

Considerando que el gobierno nacional esta obligado a impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica y tecnológica, que realicen personas o instituciones de los sectores publico, social y privado, determinando los instrumentos mediante los cuales la comunidad científica y académica se vinculen, establece:

Capitulo I

Disposiciones generales

Articulo 1

El gobierno Colombiano apoyará el fortalecimiento de las actividades de investigación científica, tecnológica y de innovación, que lleven a cabo las instituciones publicas y privadas, así como instituciones de educación primaria, secundaria y de educación superior publicas y privadas que deberán desarrollarse de acuerdo a los principios constitucionales y a los consagrados en la presente ley.

Articulo 2

Principios

Los principios que el fomento y actividades relacionadas con la investigación científica y tecnológica, serán:

Planeación: la investigación científica y tecnológica objeto de la presente norma deberá acoplarse a los procesos generales de planeación aquí establecidos.

Participación: la determinación de políticas generales y presupuéstales en materia de ciencia y tecnología deberá adelantarse con la participación de las comunidades científica, académica y empresarial.

Socialización: se determinarán la manera en que los aportes de recursos públicos y privados difundan y hagan conocer los proyectos de investigación científica y tecnológica con el propósito de ampliar y fortalecer la cultura científica y tecnológica en el país.

Transparencia: la selección de personas instituciones, proyectos y programas, destinatarios de los apoyos que trata la presente ley se realizará con base en meritos y calidad prestada buscando el bienestar general, a través de procedimientos públicos, competitivos y eficientes, en igualdad de condiciones.

Oportunidad y suficiencia: los apoyos a las actividades científicas y tecnológicas deberán ser oportunos y suficientes de manera que garanticen la continuidad de las investigaciones.

Evaluación: los resultados de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico objeto de la presente serán evaluados en los términos expuestos.

Capitulo II

Instrumentos de Apoyo a la investigación científica y tecnológica

Articulo 3

El gobierno Colombiano apoyará la investigación científica y tecnológica mediante:

La sistematización y recopilación de la información acerca de las actividades de investigación científica y tecnológica que se lleven a cabo en el país.

La creación de un registro nacional de entidades y personas de cualquier índole dedicadas sistemáticamente al desarrollo de actividades científicas y tecnológicas

La integración del presupuesto destinado a investigación en ciencia y tecnología, que se destine para tales fines.

La creación de un fondo para la ciencia y la tecnología

Artículo 4

Sistema de Información

El sistema de información sobre investigación científica y tecnológica estará a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien en virtud del Decreto 583 de 26 de febrero de 1991, es el órgano de dirección y coordinación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y asesor principal del Gobierno Nacional en estas materias. El Consejo deberá administrar dicho sistema, el cual comprenderá los datos que suministren las entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, las Universidades, las empresas privadas y en general cualquier institución de orden público o privado que desarrolle proyectos de investigación científica y/ ó tecnológica.

Articulo 5

Del mismo modo, las personas o instituciones publicas o privadas que reciban apoyo de cualquiera de los fondos mencionados en la presente ley, suministrarán al Consejo la información básica que se les requiera.

Articulo 6

Registro nacional de instituciones

El sistema de información incluirá el registro nacional de instituciones y empresas científicas y tecnológicas. Para tal efecto, deberán inscribirse en el registro anteriormente mencionado las instituciones, centros, organismos y empresas publicas que sistemáticamente realicen actividades de investigación científica y tecnológica.

Articulo 7

La manera en que dicho registro esté organizado y su funcionamiento, se determinará por el Consejo, para que dicho registro favorezca la vinculación entre la investigación y sus formas de aplicación. Para tal fin, no solo suministrará datos relacionados a nombre o razón social de la entidad, actividades científicas y tecnológicas que realice, entre otros, según disposición del Consejo, sino que, además, deberá proveer una lista de sus necesidades a nivel científico y tecnológico de manera que puedan establecerse enlaces entre el sector público, privado y académico, nacional ó internacional acerca de lo que podría denominarse como una oferta y demanda de ciencia y tecnología. A medida que vaya constituyéndose el mismo, será divulgado entre quienes lo conformen.

Articulo 8

Financiamiento

Para el cumplimiento de los objetivos previstos en el desarrollo de la presente Ley, el Gobierno Nacional deberá incluir en la Ley Anual de Presupuesto, una asignación que deberá aprobar el honorable Congreso de la República de Colombia, equivalente al 1,0% (uno por ciento) como mínimo, de sus ingresos totales, para el fomento, desarrollo y coordinación de los planes que en ciencia

y tecnología e innovación se realicen en el país: todo ello sin perjuicio de los ingresos que reciba el sector proveniente de los demás entes del poder público, así como los que se deriven de convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales.

Articulo 9

Los Gobiernos departamentales deberán incluir dentro de su Presupuesto Anual una asignación del 0,50 como mínimo, de sus ingresos totales, para el fomento, desarrollo y coordinación de los planes que en ciencia y tecnología e innovación se realicen en el departamento; todo ello sin perjuicio de los ingresos que reciba el sector proveniente de los demás entes del poder público, así como los que se deriven de convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales.

Artículo 10

Los porcentajes establecidos en los artículos 8 y 9, serán ampliados en la medida del crecimiento de la demanda del sector Científico y Tecnológico en su natural desarrollo e incremento de responsabilidades.

Artículo 11

Deducción por inversiones o donaciones para proyectos de investigación o desarrollo científico o tecnológico.

Las empresas extranjeras que se asocien con empresas nacionales que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta que realicen inversiones o hagan donaciones para proyectos de investigación o desarrollo de actividades calificadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como de carácter científico o tecnológico, tendrán derecho a deducir de su renta el ciento

veinticinco por ciento (125%) del valor invertido o donado, en el periodo gravable en que se realizó la inversión o donación.

Artículo 12

Una parte de los recursos asignados para el desarrollo de la Innovación, la Ciencia y la Tecnología se destinará a la capacitación de recursos humanos en las áreas prioritarias para el desarrollo nacional y regional. Corresponderá al Ministerio de Desarrollo determinar anualmente las áreas y sectores productivos a partir de los mecanismos de las regiones y sectores productivos, que sean dinámicas relevantes y promisorias.

Artículo 13

En los convenios que el Estado y los departamentos celebren con Organismos Internacionales de derecho privado o publico para la ejecución de planes conjuntos, se incluirá una cláusula de riesgo técnico según la cual en caso que se produzca un fracaso en el proyecto, los organismos nacionales quedarán relevados de la obligación de devolver la cantidad aportada hasta en un 50%.

Artículo 14

La Contraloría General de la Nación, conjuntamente con la Dirección de Planeación Nacional coordinará lo referente a la elaboración, distribución, ejecución, control y evaluación del Presupuesto y nacional regional para el desarrollo científico y tecnológico

Artículo 15

De los premios y estímulos a la investigación científica y tecnológica

A los fines de estimular las actividades de Investigación Científica y Tecnológica en el país se crean los siguientes premios: Honor al Mérito

Científico, Honor al Mérito Tecnológico y Honor al Mérito Innovador para premiar a la institución y al investigador o investigadores cuyos desempeños en este sector dentro del territorio nacional, departamental y distrital deban ser reconocidos.

Artículo 16

Los premios a los que se refiere el artículo anterior serán entregados por el Presidente de la Republica y el Gobernador del Departamento, anualmente, y su otorgamiento se regirá por el Reglamento que para tal efecto dicte el Ejecutivo de cada región, con el asesoramiento de las Comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología o en su defecto, al faltar estas, por Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Artículo 17

Se crean los premios de estímulo para los mejores proyectos de ciencia, tecnología e innovación que realicen estudiantes de los distintos niveles de la Educación completados por la Ley 30 de 1992. Los montos, así como las normas que regirán su otorgamiento, se fijarán en el Reglamento que al efecto dicte el Ejecutivo de cada región con el asesoramiento de las comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología o en su defecto al faltar estas, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Articulo 18

Fondo de Ciencia y Tecnología

Con miras apoyar la investigación científica y tecnológica, se constituirá un fondo del Consejo que operara según lo dispuesto por este ordenamiento.

Artículo 19

Los beneficiarios de estos fondos serán las empresas públicas o privadas, las universidades publicas y privadas, y las instituciones centros laboratorios, y personas dedicadas a la investigación científica y tecnológica y desarrollo tecnológico.

Artículo 20

Los recursos del fondo provendrán de la parte que del presupuesto nacional se destine para tal fin y de los rendimientos que dichos recursos produzcan. Así mismo, el fondo podrá recibir aportes del gobierno nacional y de terceras personas como por ejemplo del sector privado.

Artículo 21

El fondo tendrá por objeto la concesión de apoyos y financiación para becas, estímulos y reconocimientos a investigadores y tecnólogos y centros de investigación, actividades y proyectos relacionados con el desarrollo de la investigación científica y tecnológica y divulgación de la ciencia y la tecnología.

Artículo 22

Solamente las personas mencionadas en el artículo sexto de la presente que se encuentren inscritos en el registro nacional podrán ser beneficiarios del fondo en mención.

Artículo 23

Los apoyos se concederán por un tiempo determinado, de acuerdo con el contenido y los objetivos del cada proyecto y se sostendrán hasta el momento en que se demuestre o no la viabilidad del mismo.

Artículo 24

Los asuntos no tratados en la presente ley relacionados con los instrumentos en mención, serán regulados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con las funciones y competencias determinadas en esta ley y en el Decreto 583 de 26 de febrero de 1991.

Artículo 25

Comisión Científica y Tecnológica

El Congreso de la republica deberá crear una comisión interna en donde se debatirán y en donde constantemente se forjaran proyectos de ley sobre temas relacionados con la Ciencia y la Tecnología.

Articulo 26
Cuerpo asesor del presidente en materia científica y tecnológica.

Tendrá por objeto asesorar todas las decisiones presidenciales que se tomen sobre el tema. El grupo asesor estará conformado de la siguiente manera:

- Un científico Colombiano con alto reconocimiento mundial por sus labores en investigación.
- Un miembro nombrado por COLCIENCIAS, pero que en todo caso será ajeno a la entidad
- Y finalmente un representante del sector productivo elegido por el Comité Intergremial

PARÁGRAFO PRIMERO.- En todo caso COLCIENCIAS seguirá con la calidad de grupo asesor en la materia.

Artículo 27
División Tecnológica en la Contraloría

Créase la nueva división tecnológica dentro de la Contraloría General de la Nación, dedicada a vigilar y controlar todos los trámites, procesos y contratos que lleven a cabo las empresas que reporten beneficios por desarrollar proyectos en las materias de la innovación la ciencia y la tecnología.

Capitulo V
Disposiciones reglamentarias
Artículo 28

Adicionase as artículo 7 de la ley 80 de 1993 con el siguiente parágrafo:

PARAGRAFO SEGUNDO: El gobierno autoriza a las entidades estatales para que al momento de la calificación de las ofertas que se le presenten, se contemple un mayor puntaje a los proponentes que se presenten bajo la modalidad de "Uniones Temporales o Consorcios" conformadas por entidades del sector empresarial y educativo, siempre y cuando, dichas propuestas estén basadas en aplicaciones y diseños que desarrollen la innovación, la ciencia y la tecnología.

Artículo 29

Adicionase la ley general de presupuesto con el siguiente artículos:

Artículo ___: De acuerdo con los planes y presupuestos presentados por las entidades oficiales y por las que prestan servicios propios del estado, se podrá

asignar recursos (parafiscales) a estas para elaborar concursos o proyectos que generen la publicidad y desarrollo de las regiones

Fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación

Artículo 30

Adicionase la ley 29 de 1990 con los siguientes artículos:

Artículo____: Las entidades que cooperan y tiene dentro de sus funciones el fortalecimiento y el desarrollo de la educación nacional (Colciencias, Icetex, Icfes, etc), deberán crear un paquete de "Becas institucionales" en materias especificas de Innovación, Ciencia y Tecnología, ya sea a nivel nacional o internacional.

Artículo 31

Artículo____: En materia de impuestos, tasas y contribuciones el estado reglamentará los mecanismos tributarios para las empresas nacionales y extranjeras que decidan contratar con tecnología eminentemente nacional. Así mismo, en este aspecto se deberá por medio de las Asambleas Departamentales y los Consejos Municipales, mecanismos que implican la disminución en el pago de contribuciones y tasas, a las empresas que implementen dentro del giro normal de sus negocios planes y proyectos para mejorar la productividad de la región, que tengan como requisito su comprobación a corto plazo de los resultados obtenidos de acuerdo al objetivo planteado.

Artículo 32

La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

CONCLUSIONES

- La capacidad competitiva de un país depende, de una política transparente y clara impulsada por el Estado, en donde se fijen las condiciones necesarias para el desarrollo competitivo de la nación. Además se necesita una sólida y comprometida alianza entre los sectores publico, privado y las instituciones de educación para fomentar el crecimiento, no solo en materia de ciencia, tecnología e innovación, sino de los diferentes factores que llevan a ser a un país más competitivo.
- Colombia cuenta con una de legislación suficiente que la hace pionera en materia jurídica, en Latinoamérica, en el campo regulatorio de la ciencia, la tecnología y la innovación; sin embargo, y a pesar de la gran cantidad de leyes existentes, el principal reto que enfrenta el país en materia de política, científica, tecnológica y de innovación, es lograr que esta se consolide como una política de Estado eficiente, que transcienda los distintos gobiernos e involucre a toda la sociedad.
- Es problema mayor que nos aqueja, es precisamente aquello que mencionó hace unos meses el Ministro del Interior Fernando Londoño con respectó a que padecemos de “inflación legislativa. Acorde con el presente trabajo, en Colombia se han expedido un sin número de normas relativas a la innovación, la ciencia y la tecnología que no son conocidas en su totalidad y que se encuentran dispersas.
- Bien podría afirmarse, que no solo en materia de este trabajo sino en un plano legislativo general, afrontamos una fragmentación del derecho. Esto genera que exista un desconocimiento de las mismas normas, que quienes son sujetos pasivos no puedan aprovecharlas en su totalidad. Por ejemplo, en el caso de los estímulos tributarios, es conveniente que

cada vez que se expidan nuevas normas, se tienda a repetir la regulación de aquellos asuntos que ya se encontraban regulados

- Frente a este problema, nuestro trabajo de grado otorga una herramienta para que el Estado, las universidades y la empresa privada conozcan la historia y el desarrollo legislativo que en Colombia, la innovación, la ciencia y la tecnología ha tenido, al igual que una revisión de aquellos consejos y normas que otros países tienen en estos asuntos en materia de competitividad.
- De este modo, Bogotá y Cundinamarca como región a partir del Consejo Regional de Competitividad podrá, conocer sus falencias y sus grandes avances en materia científica y tecnológica y lo que otras naciones han propuesto, de manera que pueda proponer una revisión integral de toda la legislación existente en ciencia y tecnología y así integrar la disgregación de temas que deberían tener una unidad sistemática, al mismo tiempo, que proponer se vayan derogando normas para que el cuerpo legislativo logre reducirse. Adicionalmente, cuando se expidan leyes nuevas, debe hacerse mediante el consenso de quienes realmente manejan los respectivos temas que la norma regulará, estudiándola en foros en donde se conozca el tema y debatiéndola entre expertos.
- El proyecto de ley aquí planteado, no busca engrosar el gran cuerpo jurídico existente, sino antes bien llenar ciertos vacíos existentes. Sin embargo, un último análisis vale la pena traer a colación: el derecho debe ir acorde con las necesidades humanas y servirnos de herramienta, no como obstáculo. Es por esta razón, que también se requieren procesos educativos que tiendan a crear y desarrollar una adecuada cultura ciudadana. En este caso, las universidades, los investigadores, los estudiantes, los científicos, los empresarios deben conocer las normas que existen en materia de innovación, ciencia y tecnología. En este objetivo bien podría el Consejo Regional de Competitividad a través de los medios de información existentes, de

manera clara, fácil y precisa dar a conocer las políticas existentes, los beneficios, las ventajas que proponen las normas, a través de un programa de socialización de la normatividad.

- Así mismo, Bogota y Cundinamarca al no tener normatividad que trate este tema, deben aprovechar lo que ya existe y estructurar y recoger en una Ordenanza de la Asamblea departamental y en un Acuerdo del Consejo Municipal respectivamente, un verdadero y consistente sistema de innovación, ciencia y tecnología.en donde se codifiquen las bases para trabajar conjuntamente con el Consejo Regional de Competitividad el desarrollo científico, tecnológico e innovativo de la ciudad – región.
- Para que el bloque jurídico existente en Colombia sobre ciencia, tecnología e innovación, se aplique totalmente, es necesario que el gobierno colombiano apoye el fortalecimiento de las actividades de investigación científica, tecnológica y de innovación, que lleven a cabo las instituciones públicas y privadas, así como instituciones de educación primaria, secundaria y de educación superior publicas y privadas. A través, por ejemplo, del apoyo del Estado a la existencia de Centros de Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico e Incubadoras de Empresas en las instituciones de educación, para que los estudiantes, desde el inicio de su formación, adquieran la costumbre de investigar y fortalecer su espíritu competitivo empresarial.
- La tecnología no es solo un objeto que se ofrece en el mercado, sino también un proceso de aprendizaje social, en el que se van abriendo nuevas posibilidades. Así, el cambio tecnológico no consiste solo en la adquisición de nuevos bienes y servicios sino que constituye un proceso de instrucción colectivo
- En la economía moderna, las ventajas comparativas no son determinantes del desarrollo socio – económico de una nación o región, como si lo son aquellas que se adquieren a través de la creación, aplicación, fomento, estímulo del conocimiento; por este motivo el

desarrollo económico, social, cultural y político de Bogotá, Cundinamarca y de Colombia, además de tener una legislación suficiente , depende de su capacidad para generar conocimiento e incorporar productivamente el conocimiento creado por otras sociedades. En consideración a lo anterior se deben generar de mecanismos específicos que aseguren la apropiación social de conocimiento interno y externo, es decir la aplicación total del concepto "transferencia de tecnología".

- A partir del recuento que realizamos sobre el aporte a la vida científica mundial de los científicos colombianos (ver anexo Nº 24), podemos concluir que las deficiencias no radican en la imposibilidad de desarrollar proyectos relacionados con innovación, ciencia y tecnología. El talento y los recursos humanos están presentes; lo que se necesita es el apoyo decidido las investigaciones emprendidas mediante políticas coherentes de financiación, personal investigador e infraestructuras.
- También es pertinente reasaltar, que el tema que desarrolla este trabajo debe ser abordado interdisciplinariamente a través de una línea de investigación, desde las instituciones de educación superior, para lograr consolidar en verdadero sistema de innovación, ciencia y tecnología.
- Consideramos que la conclusión fundamental de esta investigación, es haber consolidado un documento en el que se abarca si no en su totalidad la gran mayoría del material existente sobre el tema, aventurándonos a sugerir y a plantear elementos jurídicos nuevos que con seguridad contribuirán al avance acelerado de la sociedad en sus dimensiones económicas, sociales culturales y políticas. que tanto necesitamos. Estamos convencidos, que este trabajo servirá como documento base para que los diferentes actores involucrados en el fomento y uso de la ciencia, la tecnología y la innovación y en general en el desarrollo competitivo de la cuidad – región, lo enriquezcan con sus observaciones y comentarios y de esta manera lleguemos a un

documento final que responda de la mejor manera a las necesidades que se tiene en este maravilloso campo de la Ciencia y la Tecnología.

GLOSARIO

Actividades de innovación: Actividades involucradas en la aparición de innovaciones. Se incluyen el diseño, la adquisición de tecnología incorporada al capital (maquinaria y equipo) y no incorporada al capital, la adaptación y mejora no sistemática de productos y procesos, y la comercialización de nuevos productos elaborados por la empresa. Se excluyen los proyectos de investigación y desarrollo y la capacitación tecnológica.

Adquisición de tecnologías incorporadas al capital: Se trata de la incorporación a la firma de conceptos, ideas y métodos, a través de la compra de nuevos bienes de capital (plantas, máquinas, equipos y componentes), que impliquen tecnologías nuevas.

Cambios organizacionales: Se trata de la introducción de cambios a la organización del proceso productivo tendientes a reducir tiempos muertos, desechos, tiempos de proceso u otros similares, todo ello con la línea de producción existente. Esto implica modificaciones en el “dibujo o diseño” de la línea de producción, pero con las mismas máquinas y equipos existentes. Por ejemplo, mejoras en la organización física de la planta, desverticalización del proceso productivo (outsourcing), métodos justo a tiempo (JIT), círculos de calidad.

Cambio Tecnológico: Un avance en la tecnología, un incremento en el conocimiento técnico o en la tecnología misma. Implica un cambio dentro de las

relaciones técnicas de producción, un proceso estrechamente relacionado con la investigación tecnológica.[89]

Capacitación tecnológica: Comprende la capacitación en temas estrechamente relacionados con las tecnologías centrales en el proceso productivo de la empresa. Estas tecnologías pueden ser "blandas" (gestión y administración) o "duras" (tecnología de procesos productivos), que involucran un grado de complejidad significativo (no evidente). Requiere, entonces, de un personal capacitador altamente especializado.

Ciencia: empresa autónoma, objetiva, neutral y basada en la aplicación de un código de racionalidad ajeno a cualquier tipo de interferencia externa. Conjunto de conocimientos y doctrinas metódicamente ordenado, relativo a una materia determinada

CIIU: Código industrial internacional uniforme. El número de dígitos nos da el nivel de especificidad con el que se trabaja. El dígito inicial 3 corresponde al sector manufacturero, y el siguiente especifica la cadena productiva.

Competitividad: Capacidad y disposición para competir. Capacidad o habilidad de un sujeto o colectivo económico, como un país, región, tejido empresarial o sector, de explotar los factores económicos que dependen de él en mejores condiciones que sus rivales (países, sectores de otros países o empresas.)

Es la capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico.

[89] Bases para la estructuración de Ciencia y Tecnología del distrito capital

Este término es muy utilizado en los medios empresariales, políticos y socioeconómicos en general. A ello se debe la ampliación del marco de referencia de nuestros agentes económicos que han pasado de una actitud auto protectora a un planteamiento más abierto, expansivo y proactivo.

La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier iniciativa de negocios, lo que está provocando obviamente una evolución en el modelo de empresa y empresario.

El uso de estos conceptos supone una continua orientación hacia el entorno y una actitud estratégica por parte de las empresas grandes como en las pequeñas, en las de reciente creación o en las maduras y en general en cualquier clase de organización. Por otra parte, el concepto de competitividad nos hace pensar en la idea "excelencia", o sea, con características de eficiencia y eficacia de la organización.[90]

Desarrollo: Acrecentar, mejorar un producto, negocio, país, etcétera, a través del esfuerzo, la investigación y la combinación de los recursos disponibles de forma más eficiente. Se distingue del puro crecimiento por estar mejor organizado y ser más global.

Desarrollo experimental: Es el trabajo sistemático que se vale del conocimiento existente obtenido de la investigación y la experiencia práctica con el propósito de producir nuevos materiales, productos o dispositivos, instalar nuevos procesos, sistemas o servicios, o de mejorar de forma sustancial aquellos ya instalados o producidos.

---

[90] RESTREPO PUERTA, Luis Fernando. Competitividad Sistémica. Centro de Investigación de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado. Bogotá, Colombia. 2002

Eficiencia Institucional: Establecer una gestión publica en todas sus instancias para promover una administración Eficiente y respetuosa del ciudadano.

Empleo calificado: Es el personal profesional de la empresa, el cual incluye profesionales y postgraduados.

Empleo no calificado: Es el personal no profesional de la empresa, es decir operarios, técnicos y personal de apoyo.

Empresas innovadoras en sentido estricto: Son las empresas que han desarrollado productos y/o procesos tecnológicamente nuevos o mejorados

Empresas innovadoras en sentido amplio: Son las empresas que han desarrollado productos y/o procesos nuevos o mejorados tecnológicamente pero la actividad no está formalizada en I+D.

Estudios CTS: Campo de carácter critico e interdisciplinario, donde se estudia la dimensión social de la ciencia y la tecnología, tanto en lo que respecta a sus antecedentes sociales como en lo que atañe a sus consecuencias sociales y ambientales. Una diversidad de orientaciones académicas, como la sociología del conocimiento científico o la historia de la tecnología, y de ámbitos d reflexión y propuestas de cambio institucional[91]

Industrialización: Proceso de creación de industrias y aumento del tejido productivo de una nación

[91] Plan de acción en Gestión Tecnológica e Innovación para el Distrito capital.

Innovación: Introducción de una técnica, producto o proceso en el ámbito productivo, con frecuencia seguido de un proceso de difusión. Dos características de la innovación son la novedad y el beneficio generado. Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado[92]

Innovación de procesos: La adquisición, asimilación o imitación de nuevas tecnologías para mejorar tecnológicamente procesos productivos existentes en la empresa, para comenzar a utilizar nuevos procesos, y/o innovar procesos inexistentes en el mercado. Un proceso es considerado una innovación tecnológica si pone en marcha nuevas técnicas, tanto para la fabricación de nuevos productos, como para la elaboración de productos existentes dentro de la gama de producción de la empresa.

Innovación de productos: Es la adquisición, asimilación o imitación de nuevas tecnologías para mejorar productos existentes o fabricar nuevos productos para la empresa o el mercado. Un producto es considerado como una innovación si da lugar a la creación de un nuevo mercado o si puede distinguirse sustancialmente de los productos fabricados con anterioridad, ya sea desde el punto de vista tecnológico o por los servicios que proporciona a los usuarios. Para que sea considerado como innovación el producto necesariamente debe haber sido incorporado al mercado.

Innovación tecnológica: Resultado de una serie de actividades cuya finalidad es la introducción de un nuevo producto o la mejora significativa desde un punto de vista tecnológico de un producto existente (innovación de producto), o la introducción de un nuevo proceso de producción o la mejora sustancial de un proceso productivo aceptado a través del mercado (innovación de proceso).

---

[92] CHICA, Ricardo. El Crecimiento de la Productividad en Colombia. Colciencias. 1996

Investigación aplicada: Es la investigación original desarrollada para adquirir nuevos conocimientos. Sin embargo, esta orientada a la consecución de un logro u objetivo práctico determinado. Sus resultados tienen por finalidad principal ser válidos para un producto, operación, método o sistema o para una cantidad limitada de ellos. La investigación aplicada desarrolla ideas de forma operativa. El conocimiento o la información obtenida se puede patentar.

Investigación básica: Se trata del trabajo teórico o experimental emprendido principalmente para analizar propiedades, estructuras y relaciones con el fin de formular y comprobar hipótesis, teorías o leyes. Si bien los resultados de ésta no suelen comercializarse, se publican en revistas científicas o se divulgan entre colegas interesados.

Investigación Tecnológica: Llamada tradicionalmente " investigación aplicada y desarrollo experimental ". Es una actividad orientada a la generación de nuevo conocimiento tecnológico, que puede ser aplicado directamente a la producción de bienes y servicios; puede conducir a una innovación.[93]

Interacción Social: Mejorar significativamente los niveles de calidad y cobertura en la oferta de los servicios sociales.[94]

Participación Ciudadana: En la mayoría de las sociedades actuales _ Si podemos hablar de sociedades como algo distinto a la sociedad global o mundializada_ existen formas de gobierno democráticas. Prescindiendo de valoraciones sobre el funcionamiento de las democracias actuales, hay que señalar que uno de los ámbitos donde los ciudadanos de una democracia tenían y tienen mas dificultades para participar es en el de controversias

[93] Bases para la estructuración de Ciencia y Tecnología del distrito Capital Pág. 2
[94] Ibíd. Pág. 2

tecnocientíficas. El movimiento CTS propone una participación mas activa de los ciudadanos en esas cuestiones, una articulación democrática que permita esa participación mediante nuevos mecanismos que van mas allá de las soluciones políticas tradicionales[95]

Política Científica y Tecnológica: La política científica y tecnológica es una función pública encaminada al direccionamiento, la regulación y la articulación de la actividad científica y tecnológica de la sociedad en función de los objetivos de desarrollo integral de las personas y de los grupos humanos. [96]

Productividad: Se puede entender como la minimización del desperdicio o el manejo eficiente de los recursos de una nación o también el cociente de la relación PIB sobre población económicamente activa. En líneas generales y sobre el concepto anterior los organismos internacionales y de investigación desarrollan mediciones, de otro lado, en nuestro país hay investigaciones muy serias sobre el particular[97] que demuestran el deterioro constante de esta variable y lo poco importante que ha sido cuando se trata de definir la forma de lograr desarrollo económico.[98]

Proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D): Comprende el trabajo creativo emprendido sistemáticamente para incrementar el acervo de conocimientos, y el uso de este conocimiento para concebir nuevas aplicaciones. Puede incluir el desarrollo de prototipos y plantas piloto. Un proyecto de investigación y desarrollo puede ser de investigación básica, aplicada o de desarrollo experimental.

---

[95] Ibíd. Pág. 7
[96] Ibíd. Pág. 8.
[97] CHICA, Op cit.
[98] Bases para la estructuración de Ciencia y Tecnología del distrito capital

Sistema Distrital de Ciencia y Tecnología SIDICYT: Se entiende como una estructura institucional y organizacional conformada por los poderes públicos, la infraestructura científica y tecnológica y los agentes demandantes de ciencia y tecnología al servicio de los objetivos del desarrollo de la sociedad [99]

Sistema Social: Acciones de varias personas que se interrelacionan significativamente, siendo delimitable por ello, como conjunto, respecto de un ambiente que no pertenece al mismo.[100]

Sociedad Civil: Instituciones sin ánimo de lucro, cuya función primordial es complementar la gestión de los diferentes servicios que tradicionalmente han sido competencia del Estado. Las Universidades y Centros de Desarrollo Tecnológico están dentro de este concepto.

Subsistema Económico: Comprende el aparato productivo existente en el Distrito Capital y su zona de influencia; de él hacen parte la economía formal e informal. A través de su desarrollo se pretende la eliminación de la economía subterránea, el aumento del capital productivo distrital y la mejor distribución del ingreso.[101]

Tecnología: Conjunto de procedimientos que permiten la aplicación de los conocimientos propios de las ciencias naturales a la producción industrial, quedando la técnica limitada a los tiempos anteriores al uso de los

[99] Documento del Sistema Distrital de Ciencia y tecnología. Pág. 4
[100] Ibíd. Pág. 3
[101] Bases para la estructuración de Ciencia y Tecnología del distrito capital.

conocimientos científicos como base del desarrollo tecnológico industrial. Conjunto de teorías, hipótesis y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico.

Transferencia de tecnología. La transferencia de tecnología es el proceso mediante el cual los resultados de la investigación que han sido aplicados con buen efecto en determinado lugar para crear nuevos productos o para aumentar la eficiencia en la producción de bienes y servicios existentes, se aplican y se usan en otro lugar. El proceso de transferencia es tan complejo como la difusión del conocimiento.

Uno de los medios más eficaces de acelerar el proceso de desarrollo es incrementando la transferencia de conocimientos técnicos y su aplicación en los países de vías de desarrollo. El proceso de crecimiento es complejo y el rezago puede atribuirse a varias causas cuya atenuación solo puede lograrse atacándolas simultáneamente por diversos medios.

La transferencia de tecnología se efectúa por los siguientes medios, entre otros:

a) Adquisición de máquinas, instrumentos y equipos de todas clases, que contienen una cantidad considerable de información tecnológica. Su compra implica un traslado importante de tecnología y el precio pagado incluye el de la innovación tecnológica que encierra la pieza. El carácter de la transferencia tecnológica que se hace depende del equipo y su selección es uno de los medios de optar por determinada tecnología.
b) Uso de diseños y de procedimientos de producción existentes. Se puede lograr con la adquisición de patentes, licencias o planos y especificaciones de la industria que desarrolló el proceso y lo

aplicó en escala comercial o de consultores especialistas en el diseño de estos procesos.

c) Traspaso de información sobre el diseño de un producto ya fabricado. La información debe obtenerse en forma de licencias, patentes o planos y especificaciones, y si no está patentada, del análisis y estudio del producto y con la lectura de documentos o publicaciones de circulación irrestricta.
d) Utilización de publicaciones técnicas y científicas, que incluyen información tecnológica de uso irrestricto. Las transferencias representadas por el canje de profesores, por becas, por la preparación de proyectos conjuntos de investigación entre instituciones de los países industrializados y naciones en desarrollo y el intercambio entre universidades, grupos empresariales o entidades de gobierno, son evidentes y están implícitos en los alcances anteriores.
e) Inversiones directas de empresas extranjeras que se asocien con firmas locales, representan otro instrumento de transferencia tecnológica sobre todo cuando la inversión trae aparejada la introducción de nuevos métodos avanzados y ayuda para el desarrollo de actividades locales de investigación industrial.

La debida formación de administradores e ingenieros, la existencia de centros de investigación científica y tecnológica y la disponibilidad de información constituyen elementos indispensables para obtener el máximo de beneficios del traspaso tecnológico a los países en desarrollo. Aún la imitación requiere la habilidad de idear, evaluar y adaptar las alternativas: requiere creatividad, buena preparación profesional e iniciativa empresarial[102]

[102] Banco Interamericano de Desarrollo. BID. Políticas Operativas en Ciencia y Tecnología. En www.bid.org

BIBLIOGRAFÍA

Legislación Nacional:

- COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: Bogotá: Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Constitucional Nº 114 de julio 7, 1991.

- COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. **LEY 29 DE 1990**. "Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias".

- COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. **LEY 30 de 1992** por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.

- COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. **LEY 80 DE 1993**. "Por el cual se expide el Estatuto General de la contratación con la Administración Pública". Reglamentada por los Decretos: 393 de 2002, 327 de 2002, 281 de 2002, 280 de 2002, 2504 de 2001, 626 de 2001, 1425 de 2000, 1436 de 1998, 1029 de 2000, 165 de 1997, 2343 de 1996, 287 de 1996, 2326 de 1995, 1550 de 1995, 1448 de 1995, 1447 de 1995, 1446 de 1995, 1445 de 1995, 229 de 1995, 194 de 1995, 1898 de 1994, 1697 de 1994, 1695 de 1994, 1480 de 1994, 856 de 1994, 855 de 1994, 679 de 1994, 313 de 1994, 2681 de 1994, 2681 de 1993, y 2251 de 1993.

- COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. **LEY 99 DE 1993** Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

- COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. **LEY 115 DE 1994**. "Por el cual se expide la Ley General de Educación". Reglamentada

(desarrollada) por los Decretos: 301 de 2002, 230 de 2002, 2425 de 2001, 1286 de 2001, 644 de 2001, 642 de 2001, 2807 de 2000, 2078 de 2000, 1605 de 2000, 808 de 2000, 620 de 2000, 2279 de 1999, 3011 de 1997, 2246 de 1997, 709 de 1996, 707 de 1996, 135 de 1996, 114 de 1996, 1236 de 1995, 827 de 1995, 196 de 1995, 1092 de 1994, 1900 de 1994, 1860 de 1994, 1857 de 1994, 1742 de 1994, 921 de 1994.

- COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. **LEY 344 DE 1996** por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.

- COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. **LEY 383 DE 1997** por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones.

- COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. **LEY 397 DE 1997** Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias

- COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. **LEY 633 DE 2000**
- COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. **LEY 666 DE 2001** Por medio de la cual se modifica el artículo 38 de la Ley 397 de 1997 y se dictan otras disposiciones

- COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. **DECRETO 0393 DE 1991**. “Por el cual se dictan normas sobre asociación de actividades

científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías".

- COLOMBIA. MINISTERIO DE GOBIERNO. **DECRETO 0584 DE 1991.** "Por el cual se reglamentan los viajes de estudio de los investigadores nacionales".

- COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. **DECRETO 0585 DE 1991**. "Por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se reorganiza el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología – Colciencias- y se dictan otras disposiciones". Reglamentado por el Decreto 774 de 2001.

- COLOMBIA. MINISTERIO DE GOBIERNO. **DECRETO 0589 DE 1991** Por el cual se modifica el decreto 3068 de 1968, estatuto orgánico del fondo nacional de proyectos de desarrollo – fonade

- COLOMBIA. MINISTERIO DE GOBIERNO. **DECRETO 0590 DE 1991** Por el cual se reorganiza la administración y manejo del fondo rotatorio del departamento administrativo nacional de estadística, fondane.

- COLOMBIA. MINISTERIO DE GOBIERNO. **DECRETO 0591 DE 1991**. "Por el cual se regulan las modalidades específicas de contrato de fomento de actividades científicas y tecnológicas".
- COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. **DECRETO 117 DE 1994**. Por el cual se reglamenta la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

- COLOMBIA. PRSIDENCIA DE LA REPÚBLICA. **DECRETO 1742 DE 1994**. POR EL CUAL SE CREAN ESTIMULOS ESPECIALES PARA

INVESTIGADORES Y SE REGLAMENTA PARCIALMENTE EL PARAGRAFO UNICO DEL ARTICULO 185 DE LA LEY 115 DE 1994.

- COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. **DECRETO 2934 DE 1994.** Por el cual se aprueba el Acuerdo número 0021 de 1994 que establece la estructura interna del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas", Colciencias y se determinan las funciones de sus dependencias.

- COLOMBIA. EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. **ACUERDO Nº 4**. Por el cual se reconocen como Comisiones Regionales de CyT, a los Consejos, Comités o Comisiones de Ciencia y Tecnología del orden departamental creadas por las autoridades territoriales competentes

- COLOMBIA. COLCIENCIAS. **RESOLUCIÓN INTERNA No. 0084**. Por la cual se regula lo relativo al reconocimiento de los Centros de Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico y Centros y Grupos de Investigación de Instituciones de Educación Superior para los efectos previstos en los artículos 12 y 30 de la Ley 633 del 29 de diciembre de 2000.

Legislación Internacional:

Chile:

- Constitución Política de la República de Chile
- Ley 16.746 de 1968
- Ley 18.681 de 1987

- Ley 19.039 de 1991
- Ley 18.989 de 1990
- Ley 19.041 de 1991
- Ley 19.107 de 1991
- Ley 19.284 de 1994
- Ley 19.300 de 1994
- Ley 19.372 de 1995
- Decreto 82 de 1979
- Decreto 33 de 1982
- Decreto 266 de 1991
- Decreto 425 de 1991
- Decreto 20 de 1995

España:

- Constitución Española
- Ley 13 de 1986
- Ley 43 de 1995
- Real decreto 1887 de 1996
- Resolución de 21 de septiembre de 1995

Venezuela:

- Ley 13 de 1967
- Decreto 190 de 1994
- Decreto 879 de 1985

Doctrina

- BAZARRU, Sergio Pablo y otros. Recopilación normativa sobre ciencia y tecnología nacional en Chile. Convenio Andrés Bello

- CHICA, Ricardo. El crecimiento de la Productividad en Colombia. Colciencias. 1996

- Documento: Bases para la estructuración de Ciencia y Tecnología del Distrito capital

- Documento: Plan de Acción de Ciencia y Tecnología. Junio de 2000

- Documento: Plan de Acción en gestión tecnológica e innovación para el Distrito Capital. Estrategia Financiera. Anexo 1, 2 y 3

- Documento: Base para la definición de una política y tecnología con función social para Colombia. Colciencias. 2001

- Documento: Estado Actual de la educación medica en Colombia. Ascofame. Asociación Colombiana de Facultades de Medicina.

- RESTREPO PUERTA, Luis Fernando. Buscando el Camino, Capitulo Primero: Competitividad. Centro de Investigación de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado. Bogotá, Colombia. Julio 16 de 2001

- RESTREPO PUERTA, Luis Fernando. Competitividad Sistémica. Centro de Investigación de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado. Bogotá, Colombia. 2002

Paginas en Internet

- Página web del Consejo Regional de Competitividad: www.empresario.com.co/portal/informes/competitividad

- Página web del Instituto de Fomento Industrial - IFI:: www.ifi.gov.co

- Página web del Fondo Nacional de Productividad y Competitividad - FNPC: www.bancoldex.com

- Página web del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA: www.sena.gov.co

- Página web del Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG: www.fng.gov.co

- Página web Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo: www.fonade.gov.co

- Página web Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas. www.mindesa.gov.co

- Página web Corporación Andina Fomento: www.caf.com

- Página web banco Comercio Exterior de Colombia: www.bancoldex.com

- Página web Banco Interamericano de Desarrollo – BID www.iadb.exr/espanol/index_espanol.htm

- Página web Instituto Colombiano para el desarrollo de la Ciencia y La Tecnología “Francisco José Caldas” – COLCIENCIAS www.colciencias.gov.co

- Página web: Gobierno en línea: www.gobiernoenlinea.gov.co

- Página web del Ministerio de Ciencia y Tecnología de España: www.mcyt.es

- Página web Ministerio de Comercio Exterior www.mincomex.gov.co/competitividad

- Página web Cámara de Comercio de Bogotá. www.ccb.org

- Página web Convenio Andrés Bello www.cab.int.co

- Página web Ministerio de Ciencia y tecnología de Venezuela. www.mct.gov.ve

- Página web Office of strategic industries and economic security. www.docbxa.bmpcoe.org

- Página web Empire state development. www.empire.state.ny.us

- Página web Chicago's technology development iniciative. www.chicagotechtoday.com

- Página web Technology trade and commerce agency. www.commerce.ca.gov

- Página web Enterprise Florida. www.eflorida.com

- Página web Florida`s economic development strategy: Public – Private Partnership www.state.fill.us

- Página web The beacon council. www.beaconcouncil.com

- Página web London development agency www.ida.govuk

- Página web Economic development corporation. www.frankurtbusiness.de

- Página web The National competitiveness council. www.forfas.ie

- Página web Corporation - Economic Development www.dublincorp.ie

- Página web The industry council. www.vn.fi

- Página web Economic Development office. www.city.toronto.on.ca

- Página web Economic Development Commission. www.vancouvereconomic.com

- Página web visión 2020 Malasia. www.mida.gov.my

- Página web Economic Development Board. www.sedb.com.sg

- Página web Productivity council. www.hkpc.org

- Página web Corporación de Fomento de la Producción. www.corfo.cll

Entrevistas:

Entrevista con Miguel Ángel Cadena. Asesor de Educación de tecnología, Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá

Entrevista con la Dra. Claudia Forero. Coordinadora Mesa de Biotecnología Bogotá- Cundinamarca

Entrevista con el Dr. Juan Carlos Gallego. Profesor del Área de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana.

Entrevista con el Dr. Fernando Lizcano Lozada . Medico Universidad del Norte. Endocrinólogo Universidad de Navarra (Pamplona – España). PHD en Biología Molecular y Genética Universidad de Harvard (Boston- Estados Unidos)

Entrevista con Dr. Florentino Malaver. Pontifica Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Entrevista con el Dr. Álvaro Mendoza Ramírez. Rector de la Universidad de La Sabana.

Entrevista con el Dr. Jorge Oviedo Albán. Profesor del Área de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana.

Entrevista con Dr. Juan Carlos Ramírez. Vicepresidente de Apoyo Empresarial. Cámara de Comercio de Bogota.

Entrevista con la Dra. Sandra Tolosa Castañeda. Secretaria Administrativa de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana.

Entrevista con el Dr. Obdulio C. Velásquez Posada. Ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana

Entrevista con Dr. José Luis Villaveces. Director del Observatorio Colombiano de ciencia y tecnología.

ANEXOS

ANEXO Nº 1

LEY 29 DE 1990
(febrero 27)

Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias.

El Congreso de Colombia,

En ejercicio de las facultades legales que le otorga el artículo 76 de la Constitución,

DECRETA:

Artículo 1o. Corresponde al Estado promover y orientar el adelanto científico y tecnológico y, por lo mismo, está obligado a incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas de desarrollo económico y social del país y a formular planes de ciencia y tecnología tanto para el mediano como para el largo plazo. Así mismo, deberá establecer los mecanismos de relación entre sus actividades de desarrollo científico y tecnológico y las que, en los mismos campos, adelanten la universidad, la comunidad científica y el sector privado colombianos.

Artículo 2o. La acción del Estado en esta materia se dirigirá a crear condiciones favorables para la generación de conocimiento científico y tecnología nacionales; a estimular la capacidad innovadora del sector productivo; a orientar la importación selectiva de tecnología aplicable a la producción nacional; a fortalecer los servicios de apoyo a la investigación científica y al desarrollo tecnológico; a organizar un sistema nacional de información científica y tecnológica; a consolidar el sistema institucional respectivo y, en general, a dar incentivos a la creatividad, aprovechando sus producciones en el mejoramiento de la vida y la cultura del pueblo.

Artículo 3o. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público incluirá en el proyecto de ley anual de presupuesto las sumas necesarias para financiar el pago de los impuestos de importaciones y de ventas que se liquiden a cargo de las universidades estatales, cuando correspondan a importación de bienes y equipos destinados a actividades científicas y tecnológicas, previa evaluación del proyecto de investigación y de la necesidad de la importación respectiva, hecha por el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", Colciencias.

Artículo 4o. El Consejo Nacional de Política Económica y Social determinará, en cada vigencia fiscal, a propuesta del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", Colciencias, las entidades descentralizadas que deberán destinar recursos y su cuantía, para actividades de investigación y desarrollo tecnológico. Las inversiones a que se refiere este artículo se administrarán mediante contratos inter-administrativos con dicho fondo.

Artículo 5o. En todos los contratos que celebre la administración pública con personas naturales o compañías extranjeras se estipularán los medios conducentes a la transferencia de la tecnología correspondiente.

Artículo 6o. El otorgamiento de exenciones, descuentos tributarios y demás ventajas de orden fiscal reconocidos por la ley para fomentar las actividades científicas y tecnológicas, requerirá la calificación previa favorable hecha por el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", Colciencias, y deberá sujetarse a la celebración de contratos que permitan a esta entidad verificar los resultados de las correspondientes investigaciones.

Artículo 7o. La inclusión de apropiaciones presupuestarias para planes y programas de desarrollo científico y tecnológico, por parte de establecimientos públicos del orden nacional, se hará en consulta con el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", Colciencias, con el fin de racionalizar el gasto público destinado a este efecto.

Artículo 8o. Autorízase al Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", Colciencias, para proponer al Gobierno, el cual dictará la correspondiente reglamentación, el otorgamiento de premios y distinciones a las instituciones e investigaciones sobresalientes, así como para conceder apoyos que faciliten a los investigadores profesionales su trabajo.

Artículo 9o. El Gobierno reglamentará la forma como las representaciones diplomáticas y consulares de Colombia en el exterior contribuirán a la actualización de metodologías y técnicas de la investigación científica y tecnológica y a la incorporación del país al contexto científico y tecnológico mundial.

Artículo 10. El Gobierno asignará los espacios permanentes en los medios de comunicación de masas de propiedad del Estado para la divulgación científica y tecnológica.

Artículo 11. De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución, revístese al Gobierno, por el término de un año contado a partir de la sanción de la presente Ley, de facultades extraordinarias para:

1o. Modificar los estatutos de las entidades oficiales que cumplen funciones de ciencia y tecnología, incluyendo las de variar sus adscripciones y vinculaciones y las de crear los entes que sean necesarios.

2o. Dictar las normas a que deban sujetarse la Nación y sus entidades descentralizadas para asociarse con los particulares en actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnología.

3o. Reglamentar los viajes de estudio al exterior de los investigadores nacionales ofreciéndoles las ventajas y facilidades que les permita su mejor aprovechamiento.

4o. Regular las modalidades específicas de contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas.

Artículo 12. Esta Ley regirá desde la fecha de su promulgación.

ANEXO Nº 2

DECRETO 393 DE 1991

(febrero 8)

POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE ASOCIACION PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y CREACION DE TECNOLOGIAS.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y, en especial, de las facultades extraordinarias conferidas por el articulo 11 de la Ley 29 de 1990,

DECRETA:

Artículo 1. MODALIDEDES DE ASOCIACION. Para adelantar actividades científicas y tecnológicas proyectos de investigación y creación de tecnologías, la Nación y sus entidades descentralizadas podrán asociarse con los particulares bajo dos modalidades.

1.Mediante la creación y organización de sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones.

2. Mediante la celebración de convenios especiales de cooperación.

Articulo 2. PROPOSITOS DE LA ASOCIACION. Bajo cualquiera de las modalidades previstas en el artículo anterior, la asociación podrá tener entre otros, los siguientes propósitos.

a) Adelantar proyectos de investigación científica.
b) Apoyar la creación, el fomento, el desarrollo y el financiamiento de empresas que incorporen innovaciones científicas o tecnológicas aplicables a la producción nacional, al manejo del medio ambiente o al aprovechamiento de los recursos naturales.
c) Organizar centros científicos y tecnológicos, parques tecnológicos, e incubadoras de empresas.
d) Formar y capacitar recursos humanos para el avance y la gestión de la ciencia y la tecnología.
e) Establecer redes de información científica y tecnológica.
f) Crear, fomentar, difundir e implementar sistemas de gestión de calidad.
g) Negociar, aplicar y adaptar tecnologías nacionales o extranjeras.
h) Asesorar la negociación, aplicación y adaptación de tecnologías nacionales y extranjeras.
i) Realizar actividades de normalización y metrología.

j) Crear fondos de desarrollo científico y tecnológico a nivel nacional y regional, fondos especiales de garantías, y fondos para la renovación y el mantenimiento de equipos científicos.
k) Realizar seminarios, cursos y eventos nacionales o internacionales de ciencia y tecnología.
l) Financiar publicaciones y el otorgamiento de premios y distinciones a investigadores, grupos de investigación e investigaciones.

Artículo 3ø AUTORIZACION ESPECIAL Y APORTES. Autorízase a la Nación y a sus entidades descentralizadas para crear y organizar con los particulares sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones, con el objeto de adelantar las actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías para los propósitos señalados en el artículo anterior. Los aportes podrán ser en dinero, en especie o de industria, entendiéndose por aportes en especie o de industria, entre otros conocimiento, patentes, material bibliográfico, instalaciones, equipos, y trabajo de científicos, investigadores, técnicos y demás personas que el objeto requiera.

Articulo 4. COMPRA Y VENTA DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES. La Nación y sus entidades descentralizadas están igualmente autorizadas para adquirir acciones, cuotas o partes de interés en sociedades civiles y comerciales o personas jurídicas sin ánimo de lucro ya existentes, cuyo objeto sea acorde con los propósitos señalados en este Decreto. De igual manera, estas entidades y los particulares podrán ofrecer sus acciones, cuotas o partes de interés de que sean titulares a otras personas públicas o privadas, sean socias o no.

Artículo 5. REGIMEN LEGAL APLICABLE. Las sociedades civiles y comerciales y las personas jurídicas sin ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones, que se creen u organicen o en las cuales se participe con base en la autorización de que tratan los artículos precedentes, se regirán por las normas pertinentes del Derecho Privado.

Artículo 6. CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION. Para adelantar actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías, la Nación y sus entidades descentralizadas podrán celebrar con los particulares convenios especiales de cooperación, que no darán lugar al nacimiento de una nueva persona jurídica. En virtud de estos convenios las personas que los celebren aportan recursos de distinto tipo para facilitar fomentar, desarrollar y alcanzar en común algunos de los propósitos contemplados en el artículo segundo.

Artículo 7. REGLAS DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION. El convenio especial de cooperación está sometido a las siguientes reglas:

1. No existirá régimen de solidaridad entre las personas que lo celebren, pues cada una responderá por las obligaciones que específicamente asume en virtud del convenio.
2. Se precisará la propiedad de todos los resultados que se obtengan y los derechos de las partes sobre los mismos.

3. Se definir n las obligaciones contractuales, especialmente de orden laboral, que asumen cada una de las partes.

4. El manejo de recursos aportados para la ejecución del convenio podrá efectuarse mediante encargo fiduciario o cualquier otro sistema de administración.

5. Estos convenios se regirán por las normas del Derecho Privado.

Artículo 8. REQUISITOS. El convenio especial de cooperación, que siempre deberá constar por escrito, contendrá como mínimo cláusulas que determinen: su objeto, término de duración, mecanismos de administración, sistemas de contabilización, causales de terminación y cesión.

Parágrafo. El convenio especial de cooperación no requiere para su celebración y validez requisitos distintos de los propios de la contratación entre particulares, pero exige su publicación en el DIARIO OFICIAL, pago del impuesto de timbre nacional, y apropiación y registro presupuestal si implica erogación de recursos públicos.

Artículo 9. De conformidad con las normas generales la Nación y sus entidades descentralizadas podrán asociarse con otras entidades públicas de cualquier orden, para adelantar actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías, bajo las modalidades previstas en este Decreto.

Articulo 10. VIGENCIA. Las normas del presente Decreto modifican en lo pertinente las disposiciones legales de las entidades oficiales, y derogan todas aquéllas que le sean contrarias, y en especial, las normas sobre esta materia contenidas en el Decreto 1767 de 1990.

Publíquese y cúmplase.

ANEXO Nº 3

DECRETO NUMERO 584 DE 1991 (Febrero 26)

Por el cual se reglamentan los viajes de estudio al exterior de los investigadores nacionales.

El Ministro de Gobierno de la República de Colombia, delegatario de funciones Presidenciales, en desarrollo del Decreto 522 de 1991 y en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 11 de la Ley 29 de 1990,

DECRETA:
Artículo 1.:Para efectos del presente Decreto se entiende por viaje de estudio al exterior, el desplazamiento a otro país para desarrollar actividades que impliquen formación, capacitación, adiestramiento o perfeccionamiento, que pueden ser, entre otras, programas de formación avanzada, cursos, pasantías, visitas de observación a centros de investigación, laboratorios, parques tecnológicos o afines, seminarios, foros, congresos, simposios y talleres.

Artículo 2: Podrán realizar los viajes de estudio al exterior de que trata el presente Decreto quienes, a juicio del Ministro, Jefe de Departamento Administrativo o representante legal de la entidad:

a) Cumplan funciones de ciencia o tecnología en entidades públicas o privadas;
b) Se desempeñen como docentes en instituciones de educación superior y estén vinculados o participen en proyectos de investigación científica o tecnológica;
c) Gestionen o administren investigación;
d) Aspiren a optar un título de formación avanzada con componente de investigación;
e) Hayan hecho una contribución significativa a la ciencia o a la tecnología con sus publicaciones, individuales o en grupo, o
f) Hayan obtenido reconocimientos nacionales o internacionales como investigadores.

Artículo 3 :Los viajes de estudio al exterior de los investigadores nacionales que ostenten la calidad de empleados oficiales serán autorizados por el Ministro, Jefe de Departamento Administrativo o representante legal de la entidad respectiva, mediante resolución motivada.

Parágrafo. El representante legal de la entidad descentralizada presentará un informe a la respectiva Junta o Consejo sobre la expedición de las resoluciones de que trata este artículo, en la sesión siguiente a la fecha de su expedición.

Artículo 4 : Los investigadores nacionales que ostenten la calidad de empleados oficiales a quienes se autorice un viaje de estudio al exterior cuyo término sea de seis (6) meses o más de duración, deberán llenar además los requisitos y cumplir las obligaciones que se establecen a continuación:

1. Haber prestado como mínimo seis (6) meses de servicios a la entidad que autoriza el viaje.
2. A su regreso prestar sus servicios a la entidad que autoriza el viaje por el doble del tiempo del que permaneció en el exterior. El Ministro, Jefe de Departamento Administrativo o la Junta o Consejo de la entidad respectiva, podrá eximir al investigador, total o parcialmente, del cumplimiento de esta obligación, o autorizar el cumplimiento de la misma en otra entidad pública o en las entidades de participación mixta que se constituyan o estén constituidas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
3. Garantizar el cumplimiento de la obligación de que trata el numeral anterior, constituyendo una póliza por el diez por ciento (10%) del valor de los salarios, viáticos, pasajes y auxilios de viaje, que se causen a su favor durante o con ocasión del viaje.

Artículo 5: Las entidades que autoricen viajes de estudio al exterior de los investigadores contabilizarán el tiempo del viaje como tiempo de servicio.

Artículo 6: Los investigadores nacionales que realicen viajes de estudio al exterior, gozarán de las siguientes ventajas y facilidades:

1. Prelación por parte del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez", Icetex, especialmente a través de la Comisión Nacional de Becas, en todo lo relativo al crédito educativo, los servicios educativos por convenios internacionales, becas por cooperación internacional, y servicios especiales tales como expedición de carnés, certificados para obtención de visas, descuentos en pasajes y autorización de divisas.
2. Derecho a solicitar a las representaciones diplomáticas y consulares de Colombia en el exterior, colaboración para los fines relacionados con el viaje, en especial para establecer contactos con entidades dedicadas a la ciencia y la tecnología.

Artículo 7: Para el otorgamiento de las ventajas y facilidades de que trata el artículo anterior, los empleados oficiales presentarán ante la autoridad competente, copia de la resolución que autoriza el viaje de estudio al exterior.

Artículo 8: Las personas de que trata el artículo 3 del presente Decreto, que se encuentren vinculadas a una entidad del sector privado cuyo objeto social sea el desarrollo de actividades de ciencia o tecnología, podrán gozar de las ventajas y facilidades otorgadas en este Decreto, presentando ante las autoridades competentes una certificación expedida por el representante legal en la que conste que se dan las condiciones de los artículos 2 y 3. Dicha certificación deberá ser aprobada por el Consejo de programa de ciencia y tecnología en el cual se pueda ubicar la actividad de formación, capacitación, adiestramiento o perfeccionamiento que van a realizar.

Artículo 9: Las entidades del sector público que hubieren otorgado comisiones de estudio con anterioridad a la vigencia del presente Decreto, podrán ajustarlas a lo señalado en el mismo, a solicitud del interesado, si se satisfacen las exigencias de los artículos 1 y 2.

Artículo 10.: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial las contenidas en el Título III del Decreto 1767 de 1990.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 26 de febrero de 1991

ANEXO Nº 4

DECRETO NUMERO 585 DE 1991 (febrero 26)

Por el cual se crea el consejo nacional de ciencia y tecnología, se reorganiza el instituto colombiano para el desarrollo de la ciencia y la tecnología - Colciencias - y se dictan otras disposiciones.

El Ministro de Gobierno de la República de Colombia Delegatario de Funciones Presidenciales, en desarrollo del Decreto 522 de 1991 y en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 11 de la Ley 29 de 1990,

DECRETA:
TITULO I

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Artículo 1° Créase el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con carácter permanente, como organismo de dirección y coordinación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y como asesor principal del Gobierno Nacional en estas materias.

Artículo 2° El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología actuará bajo la dirección del Presidente de la República y estará integrado en la siguiente forma:

1. El Jefe del Departamento Nacional de Planeación o el Subjefe.

2. Los Ministros de Educación, Desarrollo Económico y Agricultura, o los respectivos Viceministros.

3. El rector de la Universidad Nacional o su suplente quien será el rector de una universidad pública designado por el Presidente de la República.

4. Un rector de una universidad privada con suplencia de otro rector de universidad privada, designados por el Presidente de la República.

5. Un miembro de la comunidad científica y un miembro del sector privado, con sus respectivos suplentes, designados por el Presidente de la República.

6. Un representante rotatorio de las Comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología o su suplente, elegidos para períodos de un año por los coordinadores regionales de ciencia y tecnología.

7. El Director de Colciencias con voz y sin voto. El Presidente de la República podrá delegar la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el Jefe del Departamento Nacional de Planeación. La Secretaría Técnica y Administrativa del Consejo será ejercida por el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas, Colciencias.

Parágrafo. Participarán igualmente en el Consejo con derecho a voz y voto los demás Ministros, cuando sean convocados en razón de que se considerarán los planes específicos de los programas de ciencia y tecnología en los cuales participan los respectivos Ministerios o sus entidades adscritas o vinculadas.

Artículo 3° El Consejo podrá sesionar válidamente con la asistencia de cinco de sus miembros permanentes o convocados y sus decisiones se tomarán por la mayoría absoluta de los miembros presentes.

Artículo 4° El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología es un sistema abierto, no excluyente, del cual forman parte todos los programas, estrategias y actividades de ciencia y tecnología, independientemente de la institución pública o privada o de la persona que los desarrolle.

Artículo 5° El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología se organiza en programas de ciencia y tecnología. Se entiende por Programa de Ciencia y Tecnología un ámbito de preocupaciones científicas y tecnológicas estructurado por objetivos, metas y tareas fundamentales, que se materializa en proyectos y otras actividades complementarias que realizarán entidades públicas o privadas, organizaciones comunitarias o personas naturales.

Los programas de ciencia y tecnología podrán ser nacionales o regionales. Son programas nacionales de ciencia y tecnología:

a) El Programa de Ciencias Básicas;

b) El Programa de Ciencias Sociales y Humanas;

c) El Programa de Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad;

d) El Programa de Ciencia y Tecnologías Agropecuarias;

e) El Programa de Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat;

f) El Programa de Estudios Científicos de la Educación;

g) El Programa de Ciencia y Tecnología de la Salud, y

h) Los demás programas que cree el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los programas regionales de ciencia y tecnología podrán crearse cuando las prioridades regionales no hayan sido aún incorporadas en los programas nacionales.

Artículo 6° Los programas de ciencia y tecnología se desarrollarán mediante proyectos. Estos podrán originarse en la iniciativa de los investigadores y de personas jurídicas públicas o privadas, o en demandas de cualquiera de las instancias del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

Artículo 7° Los organismos de dirección y coordinación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología son los siguientes:

1. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuya secretaría técnica y administrativa será ejercida por el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Francisco José de Caldas, Colciencias.

2. Los consejos de programas nacionales, cada uno de los cuales contará con una secretaría técnica y administrativa, uno o varios comités científicos y comités regionales, y podrá tener un gestor.

3. Las comisiones regionales de ciencia y tecnología, que tendrán un coordinador y una secretaría técnica y administrativa.

4. Los consejos de programas regionales.

5. El Comité de Formación de Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnología y otros comités que cree el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de estrategias.

Parágrafo. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los consejos de programa, las comisiones regionales de ciencia y tecnología, los comités y las secretarías técnicas y administrativas de los programas y de las comisiones regionales se establecen como mecanismos de coordinación y, por lo tanto, no constituyen estructuras administrativas independientes ni tendrán planta de personal propia. Su organización tampoco dará lugar a ampliaciones de planta de personal en las entidades del Estado. Cuando los Consejos de Programa designen gestores éstos serán funcionarios del Estado comisionados para ello o contratados para desempeñar esta función.

Artículo 8° El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ejercerá las siguientes funciones:

1. Actuar como organismo asesor principal del Gobierno Nacional en ciencia y tecnología.

2. Proponer al Gobierno Nacional estrategias para incorporar la ciencia y la tecnología en los planes de desarrollo económico y social; para estimular la capacidad innovadora del sector productivo y para dar incentivos a la creatividad aprovechando sus producciones en el mejoramiento de la vida y la cultura de los colombianos.

3. Aprobar las políticas, estrategias, planes de mediano y largo plazo y desarrollar, por intermedio de su secretaría técnica y administrativa, las estrategias permanentes de: consolidación de las comunidades científicas, información científica y tecnológica, comunicación y difusión, planeación y prospectiva, regionalización, estímulo a los investigadores y apoyo al desarrollo institucional.

4. Aprobar las políticas y mecanismos de cooperación con otros países y organismos internacionales en aspectos relacionados con ciencia y tecnología, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Departamento Nacional de Planeación.

5. Crear nuevos programas nacionales de ciencia y tecnología, definir su nombre y sus reglas de organización, modificar los existentes, diseñar las pautas para su incorporación en los planes de las entidades vinculadas con su ejecución o suprimir los que haya creado.

6. Definir las reglas de organización, funcionamiento y manejo financiero de los consejos de programas nacionales.

7. Crear las comisiones regionales de ciencia y tecnología, adoptar los criterios generales que las orientan en el ejercicio de sus funciones, designar su secretaría técnica y administrativa, y definir su cobertura.

8. Crear programas regionales y autorizar su organización a la comisión regional respectiva.

9. Integrar el Comité de Formación de Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnología y disponer la creación y organización de comités para el desarrollo de estrategias de ciencia y tecnología, y modificar o suprimir los ya creados.

10. Establecer, por medio de su secretaría técnica y administrativa, los mecanismos de relación, cooperación y coordinación entre las actividades científicas y tecnológicas que desarrollen las entidades oficiales y las que, en los mismos campos, adelanten las instituciones de educación superior, la comunidad científica y el sector privado.

11. Disponer todas las medidas indispensables para el cumplimiento, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, planes y gestión de ciencia y tecnología, por intermedio de su secretaría técnica y administrativa y de otros organismos.

12. Fijar las políticas para asegurar la transferencia de tecnología que deben ser previstas por la administración pública en los contratos que celebre con personas naturales o compañías extranjeras, según lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 29 de 1990.

13. Fijar criterios para la asignación de recursos destinados a los programas nacionales y regionales de ciencia y tecnología, y señalar las pautas generales conforme a las cuales Colciencias cumplirá las funciones indicadas en los artículos 4° y 7° de la Ley 29 de 1990.

14. Orientar la destinación de los recursos disponibles para programas y regionalización de la ciencia y la tecnología. Estos recursos serán:

a) Aportes del presupuesto nacional para los programas de ciencia y tecnología;

b) Los mencionados en el artículo 4° de la Ley 29 de 1990;

c) Aportes de Colciencias para el apoyo a programas y comisiones regionales de ciencia y tecnología;

d) Recursos de cooperación técnica internacional otorgados para el desarrollo de los programas, y

e) Donaciones, auxilios y aportes de entidades públicas o privadas y personas naturales nacionales o extranjeras.

15. Crear premios y distinciones a las instituciones, grupos de investigación e investigadores por sus investigaciones sobresalientes.

16. Preparar, con el apoyo de su secretaría técnica y administrativa, proyectos de ley y de decretos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

17. Reunir periódicamente, por intermedio de su secretaría técnica y administrativa, a los grupos científicos y a las empresas innovadoras, con el fin de estudiar, canalizar y apoyar sus propuestas de políticas de ciencia y tecnología.

18. Adoptar su propio reglamento. Parágrafo. Según su carácter sea general o particular, las decisiones del Consejo se denominarán Acuerdos o Resoluciones y serán de obligatorio cumplimiento.

Artículo 9° Los Consejos de Programas Nacionales estarán integrados por el Jefe del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, el Director de Colciencias o su delegado, uno o más investigadores y miembros del sector privado, y las demás personas que determine el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Artículo 10. Además de las funciones que les asigne el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los Consejos de Programa Nacionales tendrán las siguientes:

1. Aprobar las políticas de investigación, fomento, información, comunicación, capacitación, regionalización, promoción y financiación del programa, dentro de las directrices fijadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

2. Orientar, previo un amplio proceso de consulta a nivel regional y nacional, la elaboración de los planes del programa y aprobarlos.

3. Promover la consecución de recursos públicos y privados para el programa y asignarlos entre los distintos proyectos de investigación, transferencia, apropiación y demás actividades, previo estudio evaluativo de su calidad adelantado por la secretaría técnica y administrativa del programa.

4. Responder por la adecuada ejecución del programa.

5. Integrar comités científicos asesores del programa, comités regionales del programa y otros que considere convenientes.

6. Designar cuando lo considere conveniente el gestor del programa y definir sus atribuciones.

7. Definir responsables de la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos y actividades del programa.

8. Elegir de su seno a su presidente.

9. Adoptar su propio reglamento.

Artículo 11. El gestor del programa será una persona de altas calidades, con experiencia en investigación o administración de la investigación, comisionado o especialmente contratado, para desempeñar esta función y liderar el desarrollo del programa. Le corresponde: convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Nacional de Programa, en coordinación con la secretaría técnica y administrativa, promover el desarrollo de proyectos de investigación en los temas prioritarios del programa, asegurar la consecución de recursos para actividades del programa, impulsar criterios de calidad y pertinencia

en la evaluación de los proyectos, rendir informes sobre la marcha del plan al Consejo del Programa y las demás funciones que le asignen los reglamentos y el Consejo del Programa.

Artículo 12. La secretaría técnica y administrativa de cada programa será ejercida por Colciencias o conjuntamente por este instituto con otra u otras entidades que determinará el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta secretaría apoyará el trabajo del Consejo y del gestor, cuando éste sea nombrado, y atenderá sus solicitudes para garantizar el funcionamiento y la consolidación del programa.

Artículo 13. Son funciones de las Secretarías Técnicas y Administrativas de los Consejos de Programa Nacionales:

1. Levantar las actas de las sesiones del Consejo Nacional de Programa y mantener actualizada la documentación relacionada con él.

2. Convocar las sesiones del Consejo de Programa Nacional para los programas en los cuales no haya sido comisionado o contratado el gestor.

3. Administrar la información sobre las solicitudes y proyectos en ejecución del respectivo programa, asegurando su inclusión oportuna en el sistema nacional de información científica y tecnológica.

4. Seleccionar evaluadores para los proyectos y apoyar sus labores.

5. Hacer el seguimiento de los proyectos financiados dentro del programa y participar en la evaluación del mismo.

6. Las demás que le asigne el Consejo de Programa Nacional y las que les correspondan en desarrollo de sus funciones legales y reglamentarias.

Artículo 14. Para la realización de los proyectos las entidades ejecutoras podrán:

a) Constituir fondos especiales o cuenta, con base en las disposiciones legales vigentes; cada fondo podrá administrar los recursos de uno o varios proyectos, y

b) Asociarse, celebrar convenios especiales de cooperación, o celebrar contratos dentro de las modalidades específicas de fomento previstas en las normas especiales que regulan la materia.

Parágrafo. Las entidades que a la fecha de vigencia de este Decreto tienen constituidos fondos especiales o cuenta para adelantar actividades de investigación científica o tecnológica los ajustarán a lo previsto en este artículo.

Artículo 15. La composición de las comisiones regionales de ciencia y tecnología será definida en cada caso por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e incluirá, entre otros: representantes de los Corpes o de las administraciones seccionales, de la comunidad científica, del sector privado y de las universidades de la región, el director de Colciencias o su delegado, y el coordinador regional de ciencia y tecnología con voz y sin voto.

Artículo 16. Conforme a las orientaciones y criterios generales señalados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las comisiones regionales de ciencia y tecnología ejercerán las siguientes funciones:

1. Aprobar el Plan Regional de Ciencia y Tecnología.

2. Promover la creación y apoyar la gestión de los comités regionales de programas nacionales de ciencia y tecnología.

3. Proponer y organizar programas regionales de ciencia y tecnología.

4. Hacer el seguimiento y la evaluación de los programas nacionales que operan en la región y de los programas regionales.

5. Organizar su propio manejo financiero y autorizar la celebración de contratos de administración de proyectos para facilitar el funcionamiento ágil de los proyectos inscritos en programas nacionales y de los programas regionales, cuando éstos sean creados.

6. Recomendar a los Consejos Regionales de Planificación, Corpes, la asignación de recursos con cargo a los respectivos fondos de inversiones para el desarrollo regional, para la ejecución del plan, los programas, los proyectos y demás actividades.

7. Promover la consecución de recursos públicos y privados que sirvan de contrapartida a las asignaciones y aportes que, conforme a los criterios fijados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, deban destinarse a actividades de ciencia y tecnología en la respectiva región. Dichas asignaciones y aportes estarán condicionados a la destinación de contrapartidas por las correspondientes regiones.

8. Orientar la asignación de recursos a los proyectos regionales inscritos en programas nacionales y a los programas, proyectos o actividades regionales de desarrollo y promoción de ciencia y tecnología.

9. Definir los criterios, mecanismos y responsables del desarrollo de las actividades de ejecución, seguimiento, control y evaluación de los planes y programas en la región.

10. Colaborar con la secretaría técnica y administrativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la ejecución, seguimiento, control y evaluación de los planes, estrategias y programas nacionales, así como garantizar el suministro inmediato de la información sobre propuestas, proyectos y actividades de ciencia y tecnología al sistema estadístico de ciencia y tecnología, y la integración de la región al sistema nacional de información científica y tecnológica.

11. Promover las actividades de ciencia y tecnología en la región, y procurar su coordinación e incorporación en los planes de desarrollo regionales, seccionales y locales.

12. Designar un coordinador regional de ciencia y tecnología, quien será una persona de altas calidades, con experiencia en investigación o administración de programas de ciencia y tecnología y podrá ser un empleado oficial en comisión o especialmente contratado. Al coordinador le corresponde convocar las reuniones de la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología, promover el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica en la región, asegurar la consecución de recursos y contrapartidas para las actividades regionales de ciencia y tecnología, proponer mecanismos de coordinación con procesos científicos y tecnológicos de otras regiones y nacionales, impulsar las orientaciones de la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología y las demás funciones que ésta le asigne.

13. Elegir de su seno a su presidente.

14. Adoptar su propio reglamento.

Parágrafo. La secretaría técnica y administrativa de cada comisión regional podrá ser ejercida por una entidad pública o privada sin ánimo de lucro, o conjuntamente por varias entidades. Son funciones de la secretaría técnica y administrativa las mismas que le corresponden a las secretarías técnicas y administrativas de los consejos de programas nacionales y las que le señale la comisión regional de ciencia y tecnología.

Artículo 17. Con el objeto de promover la competencia en la prestación de servicios de transferencia tecnológica y asistencia técnica, las asociaciones de municipios que incluyan estas actividades como parte de su objeto podrán prestar estos servicios directamente, contratarlos con entidades públicas o personas privadas, o asociarse con éstas.

TITULO II

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA FRANCISCO JOSE DE CALDAS, COLCIENCIAS.

Artículo 18. El Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología - Colciencias - que, a partir de la vigencia del presente Decreto, se denominará Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas, Colciencias, es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento Nacional de Planeación, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

Parágrafo. La sigla Colciencias podrá ser utilizada por la entidad para todos los efectos a que haya lugar, sin necesidad de emplear la denominación completa del Instituto.

Artículo 19. Además de las funciones que le corresponden conforme a la Ley 29 de 1990 y como establecimiento público del orden nacional, son funciones de Colciencias:

1. Asesorar al Gobierno Nacional en todos los aspectos relacionados con la ciencia y la tecnología.

2. Proponer al Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, las entidades descentralizadas que deberán destinar recursos y su cuantía, para actividades de investigación y desarrollo tecnológico, y celebrar con ellas los contratos interadministrativos de que trata el artículo 4° de la Ley 29 de 1990.

3. De acuerdo con el artículo 3° de la Ley 29 de 1990, evaluar previamente los proyectos de investigación y las necesidades de importación de bienes y equipos para actividades científicas y tecnológicas que adelanten las universidades estatales, con el fin de que el Ministerio de Hacienda incluya en el proyecto de ley anual de presupuesto, las sumas necesarias para financiar el pago de los respectivos impuestos de importación y de ventas.

4. Calificar en forma previa la naturaleza científica y tecnológica de las actividades para las cuales se solicita el otorgamiento de exenciones, descuentos tributarios y demás ventajas de orden fiscal de que trata el artículo 6° de la Ley 29 de 1990 y celebrar los contratos que le permitan verificar los resultados de las investigaciones realizadas por quienes reciben dichas ventajas.

5. De acuerdo con el artículo 7° de la Ley 29 de 1990, atender las consultas para la determinación de las apropiaciones presupuestales para planes y programas de desarrollo científico y tecnológico que deban incluirse en el presupuesto.

6. Proponer al Gobierno Nacional la reglamentación para el otorgamiento de premios y distinciones conforme al artículo 8° de la Ley 29 de 1990.

7. Conceder los apoyos de que trata el artículo 8° de la Ley 29 de 1990.

8. Actuar como secretaría técnica y adminitrativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en desarrollo de lo cual tendrá las siguientes funciones:

a) Cumplir y hacer cumplir las decisiones Consejo.

b) Proponer y ejecutar las políticas, estrategias y planes de mediano y largo plazo aprobados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

c) Promover, coordinar, gestionar y evaluar el cumplimiento de los programas nacionales y regionales de investigación y desarrollo tecnológico, en armonía con los consejos de programa, gestores, comisiones regionales y coordinadores regionales de ciencia y tecnología, y tomar las medidas que estime necesarias para garantizarlo.

d) Coordinar el trabajo de las comisiones regionales entre sí y con los programas nacionales de ciencia y tecnología, y convocar periódicamente a reuniones de coordinadores regionales y gestores de programas.

e) Promover, apoyar y coordinar un sistema nacional de información científica y tecnológica, y proponer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología normas que garanticen su funcionamiento. Administrar un banco de proyectos de ciencia y tecnología al que deberán ingresar todas las propuestas y proyectos de investigación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Promover la divulgación de los resultados de los proyectos.

f) Organizar un sistema estadístico de ciencia y tecnología, que se integrará al Sistema Estadístico Nacional del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

g) Apoyar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en la preparación de proyectos de ley y de decretos para el desarrollo de la ciencia y tecnología.

h) Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de conformidad con el reglamento.

i) Las demás que, en su calidad de secretaría técnica y administrativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, le asignen este Decreto o el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

9. Asesorar al Gobierno Nacional y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la adopción de reglamentos y directrices necesarios para que las representaciones diplomáticas y consulares de Colombia en el exterior contribuyan al desarrollo de la investigación científica y tecnológica y a la incorporación del país en el contexto científico y tecnológico mundial, de acuerdo con el artículo 9° de la Ley 29 de 1990.

10. Financiar total o parcialmente los proyectos que le indiquen los consejos de programa nacionales y regionales de ciencia y tecnología. Financiar proyectos especiales que no estén considerados en los programas nacionales o regionales o cuando, después de la correspondiente evaluación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establezca su conveniencia.

11. Ejercer por sí misma o conjuntamente la secretaría técnica y administrativa de los consejos de programa.

12. Diseñar, impulsar y ejecutar estrategias para la incorporación de la ciencia y la tecnología en la cultura colombiana.

13. Diseñar, impulsar y ejecutar estrategias permanentes de: consolidación de las comunidades científicas y tecnológicas; comunicación entre científicos y personas involucradas en investigación y desarrollo; fomento y auspicio del intercambio nacional e internacional de investigaciones, investigadores y recursos de investigación; regionalización de las actividades científicas y tecnológicas, y establecimiento de redes de cooperación entre grupos de investigación.

14. Coordinar con el sector educativo estrategias para impulsar la incorporación de la ciencia en todas las ramas y niveles de la educación; promover la formación y capacitación de investigadores de alto nivel, y contribuir en la financiación de los programas doctorales prioritarios para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

15. Promover y realizar estudios prospectivos y teóricos sobre la ciencia y la tecnología y su papel en la sociedad, como base para el diseño de políticas, planes y estrategias.

16. Administrar depósitos especiales de terceros para actividades de ciencia y tecnología.

17. Promover y participar en actividades de cooperación internacional relacionadas con ciencia y tecnología.

18. Delegar, con el voto favorable del Presidente de la Junta Directiva, algunas de sus funciones en otras entidades descentralizadas territorialmente o por servicios.

Artículo 20. Los órganos superiores de dirección y administración del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas, Colciencias, son su Junta Directiva y el Director.

Artículo 21. La Junta Directiva de Colciencias estará integrada por:

1. El Jefe del Departamento Nacional de Planeación o el Subjefe, quien la presidirá.

2. El Ministro de Desarrollo Económico o el Viceministro.

3. El Ministro de Agricultura o el Viceministro.

4. El Ministro de Educación o su delegado.

5. Un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con su suplente, escogidos de entre sus miembros.

6. El Director de Colciencias con voz y sin voto.

Artículo 22. Son funciones de la Junta Directiva de Colciencias:

1. Formular la política general del Instituto.

2. Recomendar a los organismos decisorios pertinentes las políticas, planes y programas nacionales de ciencia y tecnología.

3. Adoptar y modificar, con la aprobación del Gobierno Nacional, la estructura interna, planta global de personal y estatutos de la entidad.

4. Presentar a consideración del Gobierno Nacional el proyecto anual de presupuesto del Instituto.

5. Aprobar la financiación y el apoyo a programas y proyectos de investigación y demás actividades de ciencia y tecnología que sean de su competencia.

6. Expedir todos los actos administrativos de carácter general o particular para el ejercicio de las funciones que le competen conforme a la ley o a los estatutos.

7. Disponer la forma y modalidades como continuarán desarrollándose y funcionando los proyectos de que tratan los Decretos 2733 de 1973, 1444 de 1974, 924 de 1985, 415 y 416 de 1983, 267 de 1984, 1096 de 1988 y 578 de 1990.

8. Autorizar a Colciencias, previo concepto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para crear o participar en sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin ánimo de lucro con personas públicas o privadas.

9. Darse su propio reglamento.

10. Las demás que asigne la ley a las Juntas Directivas de los establecimientos públicos.

Artículo 23. El Director de Colciencias será agente del Presidente de la República, de su libre nombramiento y remoción, ejercerá la representación legal de la entidad, y tendrá las funciones que le competan conforme a la ley y a los estatutos.

Artículo 24. El patrimonio de Colciencias estará constituido por:

1. Todos los bienes y rentas que en la fecha pertenezcan al Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", Colciencias, y al Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Colciencias, cuya propiedad se subroga por el presente Decreto.

2. Las sumas correspondientes a las apropiaciones que se incluyan anualmente en el Presupuesto General de la Nación y las que las entidades territoriales destinen al Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas, Colciencias.

3. Los ingresos que obtenga por cualquier concepto en desarrollo de sus funciones y por la prestación de servicios, y el producto o utilidad de las operaciones que realice.

4. Los bienes muebles e inmuebles, los recursos originados en créditos que adquiera a cualquier título y el producto de la colocación de los bonos de ciencia y tecnología que emita, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Artículo 25. El Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas, Colciencias, se subroga en todos los derechos y obligaciones del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Colciencias, y en todos los derechos y obligaciones del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales " Francisco José de Caldas", Colciencias, en la fecha de publicación de este Decreto.

Artículo 26. Los estatutos, siempre y cuando no contravengan las disposiciones expedidas en desarrollo de la Ley 29 de 1990, la estructura interna y la planta de personal del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", Colciencias, continuarán vigentes, y se

irán sustituyendo a medida que se adopten las nuevas normas que regulen estas materias.

Artículo 27. En todo lo no regulado en este Decreto, se aplicarán las disposiciones de los Decretos 1050 y 3130 de 1968 y demás normas complementarias y concordantes relativas a las entidades descentralizadas del orden nacional.

TITULO III

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 28. Corresponde a las entidades oficiales cumplir las funciones relacionadas con la ciencia y la tecnología de conformidad con las normas establecidas en el presente Decreto. Las siguientes entidades cumplirán además las que a continuación se señalan:

1. Al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, en su condición de organismo auxiliar del Gobierno Nacional en materia de educación post-secundaria, corresponde, además de las funciones previstas en el Decreto Extraordinario 81 de 1980, difundir el conocimiento científico y tecnológico; organizar y coordinar redes de información; impulsar la formación de investigadores; recopilar y divulgar los resultados de las investigaciones; fomentar la actividad científica y tecnológica en las instituciones de educación superior oficiales y privadas; velar por el cumplimiento de los límites porcentuales de que trata el artículo 82 del Decreto Extraordinario número 80 de 1980 y por la sujeción de las instituciones de educación superior y sus programas curriculares a los planes de desarrollo económico y social, y a las políticas, estrategias, planes de mediano y largo plazo y programas específicos de investigación científica y desarrollo tecnológico aprobados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 137 del Decreto Extraordinario 80 de 1980, artículos 3, 13, 49 y 50 del Decreto Extraordinario 82 de 1980 y artículo 12 de la Ley 25 de 1987.

2. Al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez", Icetex, corresponde apoyar los programas de ciencia y tecnología dirigiendo sus acciones relativas al otorgamiento de crédito educativo, becas, servicios educativos por convenios internacionales y aportes para el desarrollo nacional, a la satisfacción de las necesidades de recursos humanos calificados para la investigación, según las prioridades de los planes y programas de ciencia y tecnología.

3. Al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, corresponde:

a) Adelantar actividades de formación profesional de conformidad con las normas vigentes, dirigida a transferir tecnología de utilización inmediata en el sector productivo; realizar programas y proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, y orientar la creatividad de los trabajadores colombianos.

El Consejo Directivo Nacional del Sena podrá crear y organizar centros de servicios tecnológicos e investigación aplicada y reorientar los existentes.

Estos centros manejarán separadamente tanto los recursos de que trata el ordinal 6° del artículo 21 del Decreto 3123 de 1968, como todos aquellos que se les asignen en virtud de sus programas y proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, y tendrán autonomía para unirse, para aplicarlos a la ejecución de los mismos y a los contratos de fomento previstos en la Ley 29 de 1990, en los términos de la delegación que el Director General del Sena les confiera.

b) Cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o el Comité de Formación de Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnología así lo determinen, se autoriza al Sena para celebrar convenios especiales de cooperación con los empleadores obligados a hacer aportes en los términos de la Ley 21 de 1982, con el fin de que el Sena pueda destinar hasta un cincuenta por ciento (50%) del valor de los aportes que recibe de estos empleadores al desarrollo de programas de capacitación laboral, orientados y coordinados académicamente por el Sena.

El Sena contratará la ejecución de estos programas con gremios, grupos de empresarios, instituciones de educación superior o centros tecnológicos. Los empleadores participantes en estos convenios deberán destinar para el mismo efecto, valores adicionales como contrapartida a los aportados por el Sena. La suscripción de estos convenios y contratos requerirá la autorización previa del Consejo Directivo Nacional del Sena.

Artículo 29. Las disposiciones del presente Decreto modifican en lo pertinente todas las disposiciones legales de las entidades oficiales, en lo relativo a sus funciones en materia de ciencia y tecnología.

Artículo 30. El Gobierno Nacional ejecutará las operaciones financieras y hará las apropiaciones, adiciones, créditos y contracréditos al presupuesto nacional indispensables para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.

Artículo 31. (Transitorio). Mientras se integran el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Junta Directiva del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas, Colciencias, ejercerá las funciones de aquellos la Junta Directiva establecida en el Decreto 1767 de 1990. Así mismo Colciencias asumirá las funciones de los organismos de dirección y

coordinación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, hasta tanto estos se integren.

Artículo 32. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Título I del Decreto extraordinario 1767 de 1990.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 26 de febrero de 1991.

ANEXO Nº 5

DECRETO NUMERO 0589 DE 1991 (febrero 26)

Por el cual se modifica el decreto 3068 de 1968, estatuto organico del fondo nacional de proyectos de desarrollo - fonade -.

El Ministro de Gobierno de la República de Colombia, Delegatario de funciones presidenciales, en desarrollo del Decreto 522 de 1991 y en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por la Ley 29 de 1990,

DECRETA:
Artículo 1:El Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo - Fonade -, establecimiento público del orden nacional, creado por el Decreto - ley 3068 de 1968, adscrito al Departamento Nacional de Planeación, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cumplirá las siguientes funciones:

a) Financiar, racionalizar, organizar y coordinar la consultoría nacional, para lo cual desarrollará, entre otras, las siguientes acciones:

    1. Organizar, actualizar y divulgar el registro de consultores.
    2. Promover el intercambio nacional e internacional de experiencias con las distintas personas, públicas o privadas, cuyas actividades se relacionan con la consultoría.
    3. Fomentar el desarrollo de las firmas consultoras nacionales a través de la financiación reembolsable de sus actividades.

b) Financiar total o parcialmente, a través de sus diferentes Fondos, a personas de derecho público o privado, los siguientes estudios

    1. Estudios de factibilidad técnico - económica de proyectos y programas específicos.
    2. ¡Estudios complementarios de proyectos cuya factibilidad técnico - económica haya sido demostrada, incluyendo aquellos de ingeniería que fueren necesarios y que requieran mayores elementos de juicio para su evaluación, o ser adicionados con nuevos requisitos para gestionar su financiación.
    3. Estudios de prefactibilidad sectorial y subsectorial que tengan por finalidad la preparación de proyectos específicos o la cuantificación de inversiones en un sector de la economía nacional.
    4. Estudios generales, cuyo objeto sea la identificación de proyectos o de programas específicos.

5. Estudios de proyectos o programas específicos comprendidos dentro de los programas y convenios de integración económica y fronteriza.
6. Estudios de adaptación y/o implantación de procesos, actividades, planes y programas de desarrollo tecnológico, teniendo en cuenta las directrices que expida el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Parágrafo. Los estudios complementarios de proyectos específicos cuya factibilidad haya sido demostrada, y los estudios de factibilidad técnico - económica de proyectos específicos, tendrán prelación sobre los estudios de carácter general y de prefactibilidad.

Artículo 2:. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica el artículo 1 del Decreto 3068 de 1968 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 26 de febrero de 1991.

ANEXO Nº 6

DECRETO NUMERO 0590 DE 1991 (febrero 26)

Por el cual se reorganiza la administración y manejo del fondo rotatorio del departamento administrativo nacional de estadística, fondane.

El Ministro de Gobierno de la República de Colombia Delegatario de funciones presidenciales, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 11, de la Ley 29 de 1990 y en desarrollo del Decreto 522 del 22 de febrero de 1991,

DECRETA:

Artículo 8º REGIMEN JURIDICO DE SUS OPERACIONES. Para facilitar el ejercicio de sus funciones el régimen jurídico del Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Fondane, en sus operaciones se regirá por las normas aplicables a los establecimientos públicos, con excepción de las modalidades de contratos para el fomento de la ciencia y la tecnología, conforme a las reglas que se adopten en desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 29 de 1990.

ANEXO Nº 7

DECRETO NUMERO 0591 DE 1991(febrero 26)

Por el cual se regulan las modalidades especificas de contratos de fomento de actividades científicas y tecnologicas.

El Ministro de Gobierno de la República de Colombia, Delegatario de funciones presidenciales, en desarrollo del Decreto 522 de 1991 y en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 11 de la Ley 29 de 1990,

DECRETA:

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1:El presente Decreto regula las modalidades específicas de contratos que celebren la Nación y sus entidades descentralizadas para el fomento de actividades científicas y tecnológicas.

Artículo 2: Para los efectos del presente Decreto, entiéndese por actividades científicas y tecnológicas las siguientes:

1. Investigación científica y desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos productos y procesos, creación y apoyo a centros científicos y tecnológicos y conformación de redes de investigación e información.
2. Difusión científica y tecnológica, esto es, información, publicación, divulgación y asesoría en ciencia y tecnología.
3. Servicios científicos y tecnológicos que se refieren a la realización de planes, estudios, estadísticas y censos de ciencia y tecnología; a la homologación, normalización, metrología, certificación y control de calidad; a la prospección de recursos, inventario de recursos terrestres y ordenamiento territorial; a la promoción científica y tecnológica; a la realización de seminarios, congresos y talleres de ciencia y tecnología, así como a la promoción y gestión de sistemas de calidad total y de evaluación tecnológica.
4. Proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, generación, apropiación y adaptación de la misma, así como la creación y el apoyo a incubadoras de empresas, a parques tecnológicos y a empresas de base tecnológica.
5. Transferencia tecnológica que comprende la negociación, apropiación, desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías nacionales o extranjeras.

6. Cooperación científica y tecnológica nacional e internacional.

Artículo 3: Los contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas a que se refiere el artículo anterior, que celebren la Nación y sus entidades descentralizadas, se regirán por las normas de derecho privado y por las especiales previstas en este Decreto, y en sus efectos estarán sujetos a las normas civiles, comerciales y laborales, según la naturaleza de los mismos.

Artículo 4: Los contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas a que se refiere el artículo 2° de este Decreto, se celebrarán directamente y sólo se requerirá para su validez el cumplimiento de los requisitos propios de la contratación entre particulares y de los especiales previstos en este Decreto y además apropiación y
registro presupuestal, publicación en el DIARIO OFICIAL y pago del impuesto de timbre nacional, cuando a éste haya lugar.

Artículo 5: Los contratos de financiamiento, administración de proyectos, fiducia, arrendamiento, compraventa y permuta de bienes inmuebles y los convenios especiales de cooperación, constarán siempre por escrito, independientemente de su cuantía.

Los demás contratos sólo se celebrarán por escrito cuando su cuantía exceda doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales.

Artículo 6: Salvo disposición en contrario, en los contratos a que se refiere el presente Decreto, se estipularán las cláusulas propias o usuales conforme a su naturaleza y la de sujeción a la ley colombiana, cuando a ello hubiere lugar.

TITULO II

MODALIDADES DE CONTRATOS DE FOMENTO DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS.

Artículo 7: Las modalidades específicas de contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas que se regulan en este Decreto son las siguientes:

1. Financiamiento.
2. Admiinistración de proyectos.
3. Fiducia.
4. Prestación de servicios científicos o tecnológicos.
5. Consultoría científica o tecnológica.
6. Obra pública, consultoría e interventoría en obra pública.
7. Arrendamiento, compraventa y permuta de bienes inmuebles.
8. Arrendamiento, compraventa, permuta y suministro de bienes muebles;
9. Donación, y
10. Convenios especiales de cooperación.

Artículo 8: La Nación y sus entidades descentralizadas podrán celebrar contratos de financiamiento destinados a actividades científicas y tecnológicas, que tengan por objeto proveer de recursos al particular contratista o a otra entidad pública, en una cualquiera de las siguientes formas:

a) Reembolso obligatorio. El contratista beneficiario del financiamiento deberá pagar los recursos en las condiciones de plazo e intereses que se hayan pactado;
b) Reembolso condicional. La entidad contratantes podrá eximir parcial o totalmente la obligación de pago de capital y/o intereses cuando, a su juicio, la actividad realizada por el contratista ha tenido éxito. Esta decisión se adoptará mediante resolución motivada;
c) Reembolso parcial. Para inversiones en actividades precompetitivas, de alto riesgo tecnológico, de larga maduración o de interés general, la entidad contratante podrá determinar en el contrato la cuantía de los recursos reembolsables y la de los que no lo son;
d) Recuperación contingente. La obligación de pago del capital e intereses sólo surge cuando, a juicio de la entidad contratante, se determine que se ha configurado una de las causales específicas de reembolso que se señalen en el contrato. La existencia de la obligación será establecida mediante resolución motivada.

Artículo 9: Para el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas previstas en este Decreto, la Nación y sus entidades descentralizadas podrán celebrar con personas públicas o privadas contratos de administración de proyectos.

Artículo 10: Para adelantar proyectos específicos de ciencia y tecnología conforme a las actividades científicas y tecnológicas previstas en este Decreto, la Nación y sus
entidades descentralizadas podrán celebrar contratos de fiducia con entidades públicas o privadas sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria.

Artículo 11: La Nación y sus entidades descentralizadas podrán celebrar contratos que tengan por objeto la prestación de servicios científicos o tecnológicos, como: asesorías técnicas o científicas; evaluación de proyectos de ciencia o tecnología; rendición de conceptos científicos o tecnológicos; publicidad de actividades científicas o tecnológicas; implantación y operación de sistemas de información y servicios de procesamiento de datos de ciencia o

tecnología; agenciamiento de aduanas de equipos necesarios para el desarrollo de la ciencia o la tecnología; mantenimiento y reparación de maquinaria, equipos, instalaciones y similares afectos al desarrollo de actividades de ciencia o tecnología, y diagramación, edición, coedición, impresión, publicación y distribución de libros, revistas, folletos y similares de ciencia o tecnología. Estos últimos no exigirán el trámite previsto en el Decreto 657 de 1974.

Artículo 12: Entiéndese por contratos de consultoría científica o tecnológica los que se refieren a estudios requeridos previamente para la ejecución de un proyecto de inversión o para el diseño de planes y políticas de ciencia o tecnología, a estudios de diagnóstico, prefactibilidad y factibilidad para programas o proyectos científicos o tecnológicos, a la evaluación de proyectos de ciencia o tecnología, así como el diseño de sistemas de información y servicios de procesamiento de datos de ciencia o tecnología y las asesorías técnicas y de coordinación de proyectos y programas de ciencia o tecnología.

Artículo 13: La Nación y sus entidades descentralizadas podrán celebrar directamente contratos de obra pública, consultoría e interventoría en obra pública, destinados al fomento de actividades científicas y tecnológicas, para la construcción montaje, instalación, mejoras, adiciones, conservación, mantenimiento y restauración de bienes inmuebles destinados al funcionamiento de laboratorios, bibliotecas, hemerotecas, centros de investigación, museos de ciencia o tecnología, observatorios, parques tecnológicos, incubadoras de empresas, instalaciones científicas, estaciones experimentales e infraestructura de redes de información, comunicación y telecomunicaciones.

Artículo 14: Las entidades a que se refiere el presente Decreto podrán celebrar directamente contratos que tengan por objeto dar o recibir en arrendamiento y adquirir, enajenar o permutar bienes inmuebles destinados a los mismos fines previstos en el artículo anterior.

Los valores correspondientes a la compraventa y a la permuta de bienes inmuebles se determinaran mediante avalúo practicado conforme a las normas del Código de Comercio.

Artículo 15: Podrán celebrarse directamente contratos de arrendamiento, compraventa, permuta y suministro de los bienes muebles que sean indispensables para el desarrollo e implementación de las actividades científicas y tecnológicas previstas en e] artículo 2° de este Decreto.

Parágrafo. Se aplica lo dispuesto en este artículo a los bienes muebles que resulten de la realización de dichas actividades.

Artículo 16: Las entidades a que se refiere el presente Decreto podrán aceptar donaciones y donar bienes muebles e inmuebles, siempre y cuando en este último evento los donatarios sean entidades públicas. Además, podrán celebrar contratos de comodato sobre bienes muebles e inmuebles con entidades de participación mixta. En todo caso, las entidades beneficiarios de las donaciones o de los comodatos deberán adelantar actividades científicas y tecnológicas y destinar a éstas los bienes recibidos. La donación o el comodato de inmuebles requerirán, además, autorización previa de la Junta o Consejo, cuando la realicen entidades descentralizadas.

Parágrafo. Las donaciones de que trata este artículo no requieren insinuación judicial.

Artículo 17: Para adelantar actividades científicas o tecnológicas la Nación y sus entidades descentralizadas podrán celebrar con los particulares y con otras entidades públicas de cualquier orden convenios especiales de cooperación. En virtud de estos convenios, las personas que los celebran aportan recursos en dinero, en especie o de industria, para facilitar, fomentar o desarrollar alguna de las actividades científicas o tecnológicas previstas en el artículo 2° de este Decreto.

Artículo 18: El convenio especial de cooperación contendrá como mínimo cláusulas que determinen su objeto, término de duración, mecanismos de administración, sistemas de contabilización, causales de terminación y cesión y estará sometido a las siguientes reglas:

1. No existirá régimen de solidaridad entre las personas que lo celebren, pues cada una responderá por las obligaciones que específicamente asume en virtud del convenio.
2. Se precisará la propiedad de todos los resultados que se obtengan y los derechos de las partes sobre los mismos
3. Se definirán las obligaciones contractuales, especialmente de orden laboral, que asume cada una de las partes.
4. El manejo de recursos aportados para la ejecución del convenio podrá efectuarse mediante encargo fiduciario o cualquier otro sistema de administración.

Artículo 19: Cuando la naturaleza del contrato así lo exija, se pactarán las medidas conducentes para los efectos de la transferencia tecnológica, conforme a los lineamientos que defina el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Artículo 20: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica en lo pertinente las disposiciones legales de las entidades oficiales y

deroga aquellas que le sean contrarias, en especial las contenidas en el Título II del Decreto 1767 de 1990 y en el Decreto 3079 de 1990.

Publíquese y cúmplase. Dado en Bogotá, D. E., a 26 de febrero de 1991.

ANEXO Nº 8

LEY 30 DE DICIEMBRE 28 DE 1992

por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. El Congreso de Colombia,

DECRETA:

TITULO PRIMERO

Fundamentos de la Educación Superior

CAPITULO I

Principios
Artículo 1° La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional.

Artículo 2° La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado.

Artículo 3° El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la presente Ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior.

Articulo 4° La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra.

Artículo 5° La Educación Superior será accesible a quienes demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en cada caso.

CAPITULO II

Objetivos.

Artículo 6° Son objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones:

a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país.
b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país.
c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución.
d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político v ético a nivel nacional y regional.
e) Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas.
f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de sus correspondientes fines.
g) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades.
h) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus homólogas a nivel internacional.
i) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura ecológica.
j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.

CAPITULO III

Campos de acción y programas académicos.

Artículo 7° Los campos de acción de la Educación Superior, son: El de la técnica, el de la ciencia el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía.

Artículo 8° Los programas de pregrado y de postgrado que ofrezcan las instituciones de Educación Superior, harán referencia a los campos de acción anteriormente señalados, de conformidad con sus propósitos de formación.

Artículo 9° Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía. También son programas de pregrado aquellos de naturaleza

multidisciplinaria conocidos también como estudios de artes liberales, entendiéndose como los estudios generales en ciencias, artes o humanidades, con énfasis en algunas de las disciplinas que hacen parte de dichos campos.

Artículo 10. Son programas de postgrado las especializaciones, las maestrías los doctorados y los postdoctorados.

Artículo 11. Los programas de especialización son aquellos que se desarrollan con posterioridad a un programa de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas afines o complementarias.

Artículo 12. Los programas de maestría, doctorado y post-doctorado tienen a la investigación como fundamento y ámbito necesarios de su actividad. Las maestrías buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área específica de las ciencias o de las tecnologías o que le permitan profundizar teórica y conceptualmente en un campo de la filosofía, de las humanidades y de las a artes.

Parágrafo. La maestría no es condición para acceder a los programas de doctorado. Culmina con un trabajo de investigación.

Artículo 13. Los programas de doctorado se concentran en la formación de investigadores a nivel avanzado tomando como base la disposición, capacidad y conocimientos adquiridos por la persona los niveles anteriores de formación. El doctorado debe culminar con una tesis.

Artículo 14. Son requisitos para el ingreso a los diferentes programas de Educación Superior, además de los que señale dada institución, los siguientes:

a) Para todos los programas de pregrado, poseer título de bachiller o su equivalente en el exterior y haber presentado del Examen de Estado para el ingreso a la Educación Superior.
b) Para los programas de especialización referidos a ocupaciones, poseer el título en la correspondiente ocupación u ocupaciones afines.
c) Para los programas de especialización, maestría y doctorado, referidos al campo de la tecnología, la ciencia, las humanidades, las artes y la filosofía, poseer título profesional o título en una disciplina académica.

Parágrafo. Podrán igualmente ingresar a los programas de formación técnica profesional en las instituciones de Educación Superior facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental, quienes reúnan los siguientes requisitos:

a) Haber cursado y aprobado la Educación Básica Secundaria en su totalidad.

b) Haber obtenido el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y
c) Haber laborado en el campo específico de dicha capacitación por un período no inferior a dos (2) años, con posterioridad a la capacitación del SENA.
Artículo 15. Las instituciones de Educación Superior podrán adelantar programas en la metodología de educación abierta y a distancia, de conformidad con la presente Ley.

CAPITULO IV

De las instituciones de Educación Superior.

Artículo 16. Son instituciones de Educación Superior:
a) Instituciones Técnicas Profesionales.
b) Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas.
c) Universidades.

Artículo 17. Son instituciones técnicas profesionales, aquellas facultadas legalmente para ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de especialización en su respectivo campo de acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel.

Artículo 18. Son instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, aquellas facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica en profesiones o disciplinas y programas de especialización.

Artículo 19. Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: La investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional.
Estas instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados, de conformidad con la presente Ley.

Artículo 20. El Ministro de Educación Nacional previo concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), podrá reconocer como universidad, a partir de la vigencia de la presente Ley, a las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas que dentro de un proceso de acreditación demuestren tener:
a) Experiencia en investigación científica de alto nivel.

b) Programas académicos y además programas en Ciencias Básicas que apoyen los primeros.
c) Facúltase al Gobierno Nacional, para que dentro del término de seis (6) meses, establezca los otros requisitos
que se estimen necesarios para los fines del presente artículo. Estos requisitos harán referencia, especialmente, al número de programas, número de docentes, dedicación y formación académica de los mismos e infraestructura.

Artículo 21. Solamente podrán ser autorizadas por el Ministro de Educación Nacional para ofrecer programas de maestría, doctorado y post-doctorado y otorgar los respectivos títulos, previo concepto favorable de] Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), aquellas universidades que satisfagan los requisitos contemplados en los artículos 19 y 20. Parágrafo. Podrán también ser autorizadas por el Ministro de Educación Nacional para ofrecer programas de maestrías y doctorados y expedir los títulos correspondientes, las universidades, las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, que sin cumplir con el requisito establecido en el literal b) del artículo 20, cumplan con los requisitos de calidad según el Sistema Nacional de Acreditación, en los campos de acción afines al programa propuesto, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).

Artículo 22. El Ministro de Educación Nacional, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), podrá aprobar el funcionamiento de nuevas instituciones de Educación Superior y determinará el campo o campos de acción en que se puedan desempeñar, su carácter académico y de conformidad con la presente Ley.

Artículo 23. Por razón de su origen, las instituciones de Educación Superior se clasifican en: Estatales u Oficiales, Privadas y de Economía Solidaria.

CAPITULO V

De los títulos y exámenes de estado.

Artículo 24. El título, es el reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la culminación de un programa, por haber adquirido un saber determinado en una Institución de Educación Superior.
Tal reconocimiento se hará constar en un diploma. El otorgamiento de títulos en la Educación Superior es de competencia exclusiva de las instituciones de ese nivel de conformidad con la presente Ley. Parágrafo. En los títulos que otorguen las instituciones de Educación Superior se dejará constancia de su correspondiente Personería Jurídica.

Artículo 25. Los programas académicos de acuerdo con su campo de acción, cuando son ofrecidos por una Institución Técnica Profesional, conducen al título en la ocupación o área correspondiente. Al título deberá anteponerse la denominación de: "Técnico Profesional en . . ".
Los ofrecidos por las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, o por una universidad, conducen al título en la respectiva ocupación, caso en el cual deberá anteponerse la denominación de" Técnico Profesional en...".
Si hacen relación a profesiones o disciplinas académicas, al título podrá anteponerse la denominación de: "Profesional en . . . " o "Tecnólogo en . . . ".
Los programas de pregrado en Artes conducen al título de: "Maestro en...". Los programas de especialización conducen al título de especialista en la ocupación, profesión, disciplina o área afín respectiva. Los programas de maestría, doctorado y post-doctorado, conducen al título de magíster, doctor o al título correspondiente al post-doctorado adelantado, los cuales deben referirse a la respectiva disciplina
o a un área interdisciplinaria del conocimiento. Parágrafo 1° Los programas de pregrado en Educación podrán conducir al titulo de "Licenciado en...".
Estos programas se integrarán y asimilarán progresivamente a los programas académicos que se ofrecen en el resto de instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y en las universidades.

Parágrafo 2° El Gobierno Nacional, de acuerdo a las leyes que rigen la materia, reglamentará la expedición de los títulos de que trata este artículo, previo concepto favorable del Consejo Nacional para la Educación Superior (CESU).

Artículo 26. La nomenclatura de los títulos estará en correspondencia con las clases de instituciones, los campos de acción, la denominación, el contenido, la duración de sus programas y niveles de pregrado y postgrado.
El Ministro de Educación Nacional, con la asesoría del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), reglamentará esta materia.

Artículo 27. Los Exámenes de Estado son pruebas académicas de carácter oficial que tienen por objeto:
a) Comprobar niveles mínimos de aptitudes y conocimientos.
b) Verificar conocimientos y destrezas para la expedición de títulos a los egresados de programas cuya aprobación no esté vigente.
c) Expedir certificación sobre aprobación o desaprobación de cursos que se hayan adelantado en instituciones en disolución cuya personería jurídica ha sido suspendida o cancelada.
d) Homologar y convalidar títulos de estudios de Educación Superior realizados en el exterior, cuando sea pertinente a juicio del Consejo Nacional para la Educación Superior (CESU).

CAPITULO VI

Autonomía de las Instituciones de Educación Superior.

Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar
sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.

Artículo 29. La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos:
a) Darse y modificar sus estatutos.
b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.
c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos.
d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión.
e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos.
f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.
g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.

Parágrafo.
Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y e) se requiere notificación al Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) .

Artículo 30. Es propio de las instituciones de Educación Superior la búsqueda de la verdad, el ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra y del aprendizaje de acuerdo con la presente Ley.

CAPITULO VII

Del fomento, de la inspección y vigilancia.

Artículo 31. De conformidad con los artículos 67 y 189, numerales 21,22 y 26 de la Constitución Política de Colombia y de acuerdo con la presente Ley, el

fomento, la inspección y vigilancia de la enseñanza que corresponde al Presidente de la República, estarán orientados a:

a) Proteger las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.
b) Vigilar que se cumpla e impere plena e integralmente la garantía constitucional de la autonomía universitaria.
c) Garantizar el derecho de los particulares a fundar establecimientos de Educación Superior conforme a la ley.
d) Adoptar medidas para fortalecer la investigación en las instituciones de Educación Superior y ofrecer las condiciones especiales para su desarrollo.
e) Facilitar a las personas aptas el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, al arte y a los demás bienes de la cultura, así como los mecanismos financieros que lo hagan viable.
f) Crear incentivos para las personas e instituciones que desarrollen y fomenten la técnica, la ciencia, la tecnología, las humanidades, la filosofía y las artes.
g) Fomentar la producción del conocimiento y el acceso del país al dominio de la ciencia, la tecnología y la cultura.
h) Propender por la creación de mecanismos de evaluación de la calidad de los programas académicos de las instituciones de Educación Superior.
i) Fomentar el desarrollo del pensamiento científico y pedagógico en Directivos y docentes de las instituciones de Educación Superior.

Artículo 32. La suprema inspección y vigilancia a que hace relación el artículo anterior, se ejercerá indelegablemente, salvo lo previsto en el artículo 33 de la presente Ley, a través del desarrollo de un proceso de evaluación que apoye, fomente y dignifique la Educación Superior, para velar por:
a) La calidad de la Educación Superior dentro del respeto a la autonomía universitaria y a las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.
b) El cumplimiento de sus fines.
c) La mejor formación moral, intelectual y física de los educandos.
d) El adecuado cubrimiento de los servicios de Educación Superior.
e) Que en las instituciones privadas de Educación Superior, constituidas como personas jurídicas de utilidad común, sus rentas se conserven y se apliquen debidamente y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de sus fundadores. Por consiguiente, quien invierta dineros de propiedad de las entidades aquí señaladas, en actividades diferentes a las propias y exclusivas de cada institución será incurso en Peculado por Extensión.
f) Que en las instituciones oficiales de Educación Superior se atienda a la naturaleza de servicio público cultural y a la función social que les es inherente, se cumplan las disposiciones legales y estatutarias que las rigen y que sus rentas se conserven y se apliquen debidamente.
El ejercicio de la suprema inspección y vigilancia implica la verificación de que en la actividad de las instituciones de Educación Superior se cumplan los objetivos previstos en la presente Ley y en sus propios estatutos, así como los

pertinentes al servicio público cultural y a la función social que tiene la educación.

Artículo 33. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política de Colombia, el Presidente de la República podrá delegar en el Ministro de Educación Nacional todas las funciones señaladas en los artículos 31 y 32 de la presente Ley.
La suprema inspección y vigilancia de las instituciones de Educación Superior será ejercida por el Gobierno Nacional con la inmediata asesoría del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley y con la cooperación de las comunidades académicas, científicas y profesionales, de las entidades territoriales y de aquellas agencias del Estado para el desarrollo de la Ciencia, de la Tecnología, del Arte y de la Cultura.

TITULO SEGUNDO

Del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes).

CAPITULO I

Del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).

Artículo 34. Créase el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), de carácter permanente, como organismo del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría.

Artículo 35. El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), estará integrado así:
a) El Ministro de Educación Nacional, quien lo preside.
b) El Jefe del Departamento Nacional de Planeación.
c) El Rector de la Universidad Nacional de Colombia.
d) El Director del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", Colciencias.
e) Un Rector de la universidad estatal u oficial.
f) Dos Rectores de universidades privadas.
g) Un Rector de universidad de economía solidaria.
h) Un Rector de una institución universitaria o escuela tecnológica, estatal u oficial.
i) Un Rector de institución técnica profesional estatal u oficial.
j) Dos representantes del sector productivo.

k) Un representante de la comunidad académica de universidad estatal u oficial.
l) Un profesor universitario.
m) Un estudiante de los últimos años de universidad.
n) El Director del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), con voz pero sin voto.

Parágrafo. Para la escogencia de los representantes establecidos en los literales e), f), g), h), i), j), k), l) y m), el Gobierno Nacional establecerá una completa reglamentación que asegure la participación de cada uno de los estamentos representados, los cuales tendrán un período de dos años. Esta reglamentación será expedida dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente Ley.

Artículo 36. Son funciones del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) proponer al Gobierno Nacional:
a) Políticas y planes para la marcha de la Educación Superior.
b) La reglamentación y procedimientos para:
1. Organizar el Sistema de Acreditación.
2. Organizar el Sistema Nacional de Información.
3. Organizar los exámenes de estado.
4. Establecer las pautas sobre la nomenclatura de títulos.
5. La creación de las instituciones de Educación Superior.
6. Establecer los requisitos de creación y funcionamiento de los programas académicos.
c) La suspensión de las personerías jurídicas otorgadas a las instituciones de Educación Superior.
d) Los mecanismos para evaluar la calidad académica de las instituciones de Educación Superior y de sus programas.
e) Su propio reglamento de funcionamiento.
f) Las funciones que considere pertinentes en desarrollo de la presente Ley.

Parágrafo. El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), reglamentará la representación de las instituciones de Educación Superior de Economía Solidaria en los comités asesores contemplados en el artículo 45 de la presente Ley, de conformidad con su crecimiento y desarrollo académico.

CAPITULO II

Del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes).

Artículo 37. E] Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Educación Nacional.

Artículo 38. Las funciones del Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), son:
a) Ejecutar las políticas que en materia de Educación Superior trace el Gobierno Nacional, lo mismo que ejercer la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) .
b) Constituirse en centro de información y documentación de la Educación Superior. para lo cual las instituciones suministrarán los informes académicos, financieros y administrativos que se les soliciten.
c) Realizar los estudios de base de la Educación Superior.
d) Estimular la cooperación entre las instituciones de Educación Superior y de éstas con la comunidad internacional.
e) Colaborar con las instituciones de Educación Superior para estimular y perfeccionar sus procedimientos de autoevaluación.
f) Fomentar la preparación de docentes, investigadores, directivos y administradores de la Educación Superior.
g) Promover el desarrollo de la investigación en las instituciones de Educación Superior.
h) Estimular el desarrollo de las instituciones de Educación Superior en las regiones, así como su integración y cooperación.
i) Homologar y convalidar títulos de estudios cursados en el exterior.
j) Definir las pautas sobre la nomenclatura de los programas académicos de Educación Superior.
k) Realizar los exámenes de estado de conformidad con la presente Ley.

Artículo 39. La dirección y administración del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), estarán a cargo de una Junta Directiva y de un Director General, quien es el representante legal del Instituto.

Artículo 40. La Junta Directiva del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), estará integrada de la siguiente manera:
a) El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien la preside.
b) El Ministro de Hacienda o su delegado.
c) Un delegado del Presidente de la República.
d) Un ex-rector de universidad estatal u oficial.
e) Un ex-rector de universidad privada.
f) Un ex-rector de universidad de economía solidaria.
g) El Director General del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), con voz pero sin voto.

Parágrafo. El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), reglamentará la elección de los exrectores de las universidades estatal u oficial, privada y de economía solidaria, para períodos de dos (2) años.

Artículo 41. Son funciones de la Junta Directiva del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes):
a) Expedir los actos de carácter administrativo para el cumplimiento de las funciones del Instituto.
b) Darse su propio reglamento.
c) Las demás que el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y el Gobierno Nacional le señale.

Artículo 42. El Director General del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), es agente del Presidente de la República de su libre nombramiento y remoción.
Para ser Director del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), se requiere:
Poseer título universitario haber sido Rector, Vicerrector o Decano en propiedad o haber estado vinculado al cuerpo académico de una Institución de Educación Superior al menos durante cinco (5) años consecutivos.
Tendrá las funciones señaladas en el artículo 27 del Decreto 1050 de 1968 y las que le fijen los estatutos y demás disposiciones legales.

Artículo 43. Son bienes y recursos financieros del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes):
a) Todos los bienes que a la fecha le pertenecen.
b) Las partidas que con destino a él se incluyan en el presupuesto nacional.
c) Cualquier renta o donación que perciba de personas naturales o jurídicas, de conformidad con las leyes.
d) El dos por ciento (2%) de los aportes que por cualquier concepto reciban del presupuesto nacional las instituciones de Educación Superior, tanto estatales u oficiales como privadas y de economía solidaria. El Ministerio de Hacienda con cargo al presupuesto nacional apropiará las partidas que por este concepto deben
efectuar las instituciones de Educación Superior estatales u oficiales. Este porcentaje será deducido y girado al Instituto Colombiano para la Educación Superior (Icfes) por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o por el Ministerio de Educación Nacional, según el caso, al ordenar y efectuar el pago a las mencionadas instituciones.
Los recursos recibidos por este concepto serán destinados al funcionamiento del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) y a las actividades de fomento de la Educación Superior que para estos efectos programe el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).

CAPITULO III

De los comités asesores.

Artículo 44. El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), contarán con tres comités asesores que constituirán espacio permanente de reflexión para el estudio y sugerencia de políticas apropiadas que permitan el logro de los objetivos de la Educación Superior y el de los específicos de las instituciones que agrupan.

Artículo 45. Los comités asesores para efectos de su funcionamiento se denominarán e integrarán de la siguiente manera:
a) Comité para estudio y análisis de los temas relativos a las instituciones técnicas profesionales. Estará integrado por:
- Un rector de institución técnica profesional de carácter estatal u oficial.
- Un rector de institución técnica profesional de carácter privado.
- Un representante de las comunidades académicas.
- Dos representantes del sector productivo.
- El Director General del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), quien lo presidirá.
b) Comité para estudio y análisis de los temas relativos a las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas. Estará integrado por:
- Un rector de institución universitaria o escuela tecnológica de carácter estatal u oficial.
- Un rector de institución universitaria o escuela tecnológica de carácter privado.
- Un representante de las comunidades académicas.
- Dos representantes del sector productivo.
- El Director General del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), quien lo presidirá.
c) Comité para estudio y análisis de los temas relativos a las universidades. Estará integrado por:
- Un rector de universidad estatal u oficial.
- Un rector de universidad privada.
- Un representante de las comunidades académicas.
- Dos representantes del sector productivo.
- El Director General del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) quien lo presidirá.

Artículo 46. Los rectores integrantes de los comités señalados en el artículo anterior serán elegidos para períodos de dos años, en asamblea de rectores de cada modalidad de instituciones, convocada para tal efecto por el Director Genera] del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes).
Los representantes académicos a que se refiere el artículo anterior deberán ser profesores de instituciones de Educación Superior con título de postgrado y serán elegidos por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), de hojas de vida que le remitirán las instituciones de Educación Superior de la

modalidad respectiva, al Director General del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes).
Los representantes del sector productivo a que se refiere el artículo anterior serán elegidos por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), de terna presentada por cada comité al Director General del Instituto Colombiano par a el Fomento de la Educación Superior (Icfes).

Artículo 47. Serán funciones de los comités a que hace relación el artículo 45, de conformidad con el ámbito de acción correspondiente a cada uno de ellos, las siguientes:
a) Proponer al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) políticas que orienten el desarrollo de las instituciones de Educación Superior y de sus programas.
b) Emitir concepto previo sobre las solicitudes de creación de nuevas instituciones estatales u oficiales y privadas de educación Superior.
c) Recomendar al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) las condiciones académicas que se deben exigir a las instituciones de Educación Superior para ofrecer programas de postgrado.
d) Conceptuar sobre los procesos de recuperación o de liquidación de instituciones de Educación Superior.
e) Las demás que les asigne el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).

CAPITULO IV

Sanciones.

Artículo 48. El incumplimiento de las disposiciones consagradas en la presente Ley por parte de las instituciones de Educación Superior según lo previsto en el artículo siguiente, dará lugar a la iniciación de las acciones administrativas correspondientes y previa observancia del debido proceso, a la imposición de las sanciones que a continuación se indican:
a) Amonestación privada.
b) Amonestación pública.
c) Multas sucesivas hasta de cien (100) veces el salario mínimo legal mensual vigente en el país.
d) Suspensión de programas académicos y de admisiones por el término hasta de un (1) año.
e) Cancelación de programas académicos.
f) Suspensión de la personería jurídica de la institución.
g) Cancelación de la personería jurídica de la institución.

Parágrafo. A los representantes legales, a los rectores y a los directivos de las instituciones de Educación Superior les podrán ser aplicadas las sanciones previstas en los literales a), b) y c) del presente artículo, las cuales serán impuestas por el Ministro de Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), mediante resolución motivada, una vez adelantado y concluido el correspondiente proceso administrativo, con observancia de la plenitud de sus formas propias.

Artículo 49. Las sanciones a que se refieren los literales d), e), f) y g) del artículo anterior, sólo podrán imponerse previo concepto del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) por el Ministro de Educación Nacional, mediante resolución motivada en los siguientes casos:
a) Por desconocer, incumplir o desviarse de los objetivos señalados a la Educación Superior en el artículo 6° de la presente Ley.
b) Por incumplir o entorpecer las facultades de inspección y vigilancia que corresponden al Gobierno Nacional.
c) Por ofrecer programas sin el cumplimiento de las exigencias legales. Contra los actos administrativos impositivos de sanciones procederá el recurso de reposición que deberá interponerse en la forma y términos previstos por el Código Contencioso Administrativo.

Artículo 50. El Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), podrá ordenar la apertura de investigación preliminar con el objeto de comprobar la existencia o comisión de los actos constitutivos de falta administrativa señalados en el artículo anterior.
Corresponde al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), llevar el registro de las sanciones impuestas y adoptar las medidas conducentes para que ellas se hagan efectivas.

Artículo 51. Cuando en el desarrollo de la investigación se establezca que una institución o su representante legal pudo incurrir en una de las faltas administrativas tipificadas en esta Ley, el investigador que designe el Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), le formulará mediante oficio que le será entregado personalmente, pliego de cargos que contendrá una relación de los hechos y de las pruebas, la cita de las disposiciones legales infringidas y los términos para que rinda descargos para lo cual dispondrá de un término de treinta (30) días.
Tanto la Institución de Educación Superior a través de su representante legal, como el investigado, tendrán derecho a conocer el expediente y sus pruebas; a que se practiquen pruebas aún durante la etapa preliminar; a ser representado por un apoderado y las demás que consagren la Constitución y las leyes.

Rendidos los descargos se practicarán las pruebas solicitadas por la parte investigada o las que de oficio decrete el investigador.
Concluida la investigación el funcionario investigador rendirá informe detallado al Ministro de Educación Nacional a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), según el caso, sugiriendo la clase de sanción que deba imponerse, o el archivo del expediente si es el caso.

Artículo 52. La acción y la sanción administrativa caducarán en el término de tres (3) años, contados a partir del último acto constitutivo de la falta.

CAPITULO V
De los sistemas nacionales de acreditación e información.

Artículo 53. Créase el Sistema Nacional de Acreditación para las instituciones de Educación Superior cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del Sistema cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos.
Es voluntario de las instituciones de Educación Superior acogerse al Sistema de Acreditación. La acreditación tendrá carácter temporal. Las instituciones que se acrediten, disfrutarán de las prerrogativas que para ellas establezca la ley y las que señale el Consejo Superior de Educación Superior (CESU).

Artículo 54. El Sistema previsto en el artículo anterior contará con un Consejo Nacional de Acreditación integrado, entre otros, por las comunidades académicas y científicas y dependerá del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), el cual definirá su reglamento, funciones e integración.

Artículo 55. La autoevaluación institucional es una tarea permanente de las instituciones de Educación Superior y hará parte del proceso de acreditación.
El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), cooperará con tales entidades para estimular y perfeccionar los procedimientos de autoevaluación institucional.

Artículo 56. Créase el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior el cual tendrá como objetivo fundamental divulgar información para orientar a la comunidad sobre la calidad, cantidad y características de las instituciones y programas del Sistema.
La reglamentación del Sistema Nacional de Información corresponde al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).

TITULO TERCERO

Del régimen especial de las Universidades del Estado y de las otras instituciones de Educación Superior
estatales u oficiales.

CAPITULO I

Naturaleza Jurídica.

Artículo 57. Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo.
Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características: Personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden.
El carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales comprenderá la organización y elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen financiero y el régimen de contratación y control fiscal, de acuerdo con la presente Ley.

Parágrafo. Las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior que no tengan el carácter de universidad según lo previsto en la presente Ley, deberán organizarse como Establecimientos Públicos del orden Nacional, Departamental, Distrital o Municipal.

Artículo 58. La creación de universidades estatales u oficiales y demás instituciones de Educación Superior corresponde al Congreso Nacional, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales o a los Concejos Municipales, o a las entidades territoriales que se creen, con el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.
Al proyecto de creación debe acompañarse por parte del Gobierno un estudio de factibilidad socioeconómico aprobado por el Ministro de Educación Nacional previo concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).

Artículo 59. A partir de la vigencia de la presente Ley, la creación de universidades estatales u oficiales o de seccionales y demás instituciones de Educación Superior estatales u oficiales debe hacerse previo convenio entre la Nación y la entidad territorial respectiva, en donde se establezca el monto de los aportes permanentes de una y otra. Este convenio formará parte del estudio de factibilidad requerido.

Artículo 60. El estudio de factibilidad a que se refiere el artículo 58 de la presente Ley, deberá demostrar entre otras cosas, que la nueva institución dispondrá de personal docente idóneo con la dedicación específica necesaria; organización académica y administrativa adecuadas; recursos físicos y financieros suficientes, de tal manera que tanto el nacimiento de la institución como el de los programas que proyecta ofrecer garanticen la calidad académica. Este estudio deberá demostrar igualmente, que la creación de la institución está acorde con las necesidades regionales y nacionales.

Artículo 61. Las disposiciones de la presente Ley relativas a las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior, constituyen el estatuto básico u orgánico y las normas que deben aplicarse para su creación, reorganización y funcionamiento. A ellas deberán ajustarse el estatuto general y los reglamentos internos que debe expedir cada institución.
Aquellos establecerán cuáles de sus actos son administrativos y señalarán los recursos que proceden contra los mismos.

CAPITULO II

Organización y elección de directivas.

Artículo 62. La dirección de las universidades estatales u oficiales corresponde al Consejo Superior Universitario, al Consejo Académico y al Rector.
Cada universidad adoptará en su estatuto general una estructura que comprenda entre otras, la existencia de un Consejo Superior Universitario y un Consejo Académico, acordes con su naturaleza y campos de acción.
Parágrafo. La dirección de las demás instituciones estatales u oficiales de Educación Superior que no tengan el carácter de universidad, corresponde al Rector, al Consejo Directivo y al Consejo Académico. La integración y funciones de estos Consejos serán las contempladas en los artículos 64, 65, 68 y 69 de la presente Ley.

Artículo 63. Las universidades estatales u oficiales y demás instituciones estatales u oficiales de Educación Superior se organizarán de tal forma que en sus órganos de dirección estén representados el Estado y la comunidad académica de la universidad.

Artículo 64. El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad y estará integrado por:
a) El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá en el caso de las instituciones de orden nacional.
b) El Gobernador, quien preside en las universidades departamentales.
c) Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido vínculos con el sector universitario.

d) Un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de los egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo y un ex-rector universitario.
e) El Rector de la institución con voz y sin voto.

Parágrafo 1° En las universidades distritales y municipales tendrán asiento en el Consejo Superior los respectivos alcaldes quienes ejercerán la presidencia y no el Gobernador.

Parágrafo 2° Los estatutos orgánicos reglamentarán las calidades, elección y período de permanencia en el Consejo Superior, de los miembros contemplados en el literal d) del presente artículo.

Artículo 65. Son funciones del Consejo Superior Universitario:
a) Definir las políticas académicas y administrativas y la planeación institucional.
b) Definir la organización académica, administrativa y financiera de la Institución.
c) Velar porque la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones legales, el estatuto general y las políticas institucionales.
d) Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución.
e) Designar y remover al rector en la forma que prevean sus estatutos.
f) Aprobar el presupuesto de la institución.
g) Darse su propio reglamento.
h) Las demás que le señalen la ley y los estatutos.

Parágrafo. En los estatutos de cada universidad se señalarán las funciones que puedan delegarse en el Rector.

Artículo 66. El Rector es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la universidad estatal u oficial y será designado por el Consejo Superior Universitario. Su designación, requisitos y calidades se reglamentarán en los respectivos estatutos.

Parágrafo. La designación del Rector de las instituciones estatales u oficiales que no tienen el carácter de universidades de conformidad con la presente Ley se efectuará por parte del Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde según el caso, de ternas presentadas por el Consejo Directivo. El Estatuto General
determinará los requisitos y calidades que deben reunir los candidatos y los procedimientos para la integración de esta terna, en los cuales deberá preverse la participación democrática de la comunidad académica.

Artículo 67. Los integrantes de los Consejos Superiores o de los Consejos Directivos, según el caso, que tuvieren la calidad de empleados públicos y el

Rector, estarán sujetos a los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la ley y los estatutos así como las disposiciones aplicables a los miembros de juntas o conejos directivos de las instituciones estatales u oficiales. Todos los integrantes del Consejo Superior
Universitario o de los Consejos Directivos, en razón de las funciones públicas que desempeñan, serán responsables de las decisiones que se adopten.

Artículo 68. El Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la institución, estará integrado por el Rector, quien lo presidirá, por una representación de los decanos de facultades, de los directores de programa, de los profesores y de los estudiantes. Su composición será determinada por los estatutos de cada institución.

Artículo 69. Son funciones del Consejo Académico en concordancia con las políticas trazadas por el Consejo Superior Universitario:
a) Decidir sobre el desarrollo académico de la institución en lo relativo a docencia, especialmente en cuanto se refiere a programas académicos, a investigación, extensión y bienestar universitario.
b) Diseñar las políticas académicas en lo referente al personal docente y estudiantil.
c) Considerar el presupuesto preparado por las unidades académicas y recomendarlo al Consejo Superior Universitario.
d) Rendir informes periódicos al Consejo Superior Universitario.
e) Las demás que le señalen los estatutos.

CAPITULO III

Del personal docente y administrativo.

Artículo 70. Para ser nombrado profesor de universidad estatal u oficial se requiere como mínimo poseer título profesional universitario. Su incorporación se efectuará previo concurso público de méritos cuya reglamentación corresponde al Consejo Superior Universitario.
El Consejo Superior Universitario reglamentará los casos en que se pueda eximir del título a las personas que demuestren haber realizado aportes significativos en el campo de la técnica, el arte o las humanidades.

Artículo 71. Los profesores podrán ser de dedicación exclusiva, de tiempo completo, de medio tiempo y de cátedra.
La dedicación del profesor de tiempo completo a la universidad será de cuarenta horas laborales semanales.

Artículo 72. Los profesores de dedicación exclusiva, tiempo completo y medio tiempo están amparados por el régimen especial previsto en esta Ley y aunque son empleados públicos, no son de libre nombramiento y remoción, salvo

durante el período de prueba que establezca el reglamento docente de la universidad para cada una de las categorías previstas en el mismo.

Artículo 73. Los profesores de cátedra no son empleados públicos ni trabajadores oficiales; son contratistas y su vinculación a la entidad se hará mediante contrato de prestación de servicios, el cual se celebrará por períodos académicos.
Los contratos a que se refiere este artículo no estarán sujetos a formalidades distintas a las que se acostumbran entre particulares. El régimen de estipulaciones será el determinado por la naturaleza del servicio y el contrato podrá darse por terminado sin indemnización alguna en los casos de incumplimiento de los deberes previstos en la ley o en el contrato.
Estos contratos requieren, para su perfeccionamiento, el registro presupuestal correspondiente.

Artículo 74. Serán profesores ocasionales aquellos que con dedicación de tiempo completo o de medio tiempo, sean requeridos transitoriamente por la entidad para un período inferior a un año.
Los docentes ocasionales no son empleados públicos ni trabajadores oficiales, sus servicios serán reconocidos mediante resolución y no gozarán del régimen prestacional previsto para estos últimos.

Artículo 75. El estatuto del profesor universitario expedido por el Consejo Superior Universitario, deberá contener, entre otros, los siguientes aspectos:
a) Régimen de vinculación, promoción, categorías, retiro y demás situaciones administrativas.
b) Derechos, obligaciones, inhabilidades, incompatibilidades, distinciones y estímulos.
c) Establecimiento de un sistema de evaluación del desempeño del profesor universitario.
d) Régimen disciplinario.

Artículo 76. El escalafón del profesor universitario comprenderá las siguientes categorías:
a) Profesor Auxiliar.
b) Profesor Asistente.
c) Profesor Asociado.
d) Profesor Titular.
Para ascender a la categoría de Profesor Asociado, además del tiempo de permanencia determinado por la universidad para las categorías anteriores, el profesor deberá haber elaborado y sustentado ante homólogos de otras instituciones, un trabajo que constituya un aporte significativo a la docencia, a las ciencias, a las artes o a las humanidades.
Para ascender a la categoría de Profesor Titular, además del tiempo de permanencia como Profesor Asociado, determinado por la universidad, el

profesor deberá haber elaborado y sustentado ante homólogos de otras instituciones, trabajos diferentes que constituyan un aporte significativo a la docencia, a las ciencias, a las artes o a las humanidades.

Artículo 77. El régimen salarial y prestacional de los profesores de las universidades estatales u oficiales se regirá por la Ley 4a de 1992, los Decretos Reglamentarios y las demás normas que la adicionan y complementan.

Artículo 78. Lo dispuesto en este capítulo se aplicará sin perjuicio de las situaciones jurídicas individuales consolidadas conforme a derecho.

Artículo 79. El estatuto general de cada universidad estatal u oficial deberá contener como mínimo y de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, los derechos, obligaciones, inhabilidades, situaciones administrativas y régimen disciplinario del personal administrativo.

Artículo 80. El régimen del personal docente y administrativo de las demás instituciones estatales u oficiales que no tienen el carácter de universidades de acuerdo con la presente Ley, será establecido en el Estatuto General y reglamentos respectivos, preservando exigencias de formación y calidad académica, lo mismo que la realización de concursos para la vinculación de los docentes.

CAPITULO IV

Del sistema de universidades estatales u oficiales.

Artículo 81. Créase el Sistema de Universidades del Estado, integrado por todas las universidades estatales u oficiales el cual tendrá los siguientes objetivos:
a) Racionalizar y optimizar los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros.
b) Implementar la transferencia de estudiantes, el intercambio de docentes, la creación o fusión de programas académicos y de investigación, la creación de programas académicos conjuntos, y
c) Crear condiciones para la realización de evaluación en las instituciones pertenecientes al sistema.

Artículo 82. El Ministro de Educación Nacional reglamentará el funcionamiento de este sistema, según las recomendaciones del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).

Artículo 83. Las universidades estatales u oficiales deberán elaborar planes periódicos de desarrollo institucional, considerando las estrategias de planeación regional y nacional.

CAPITULO V

Del régimen financiero.

Artículo 84. El gasto público en la educación hace parte del gasto público social de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 350 y 366 de la Constitución Política de Colombia.

Artículo 85. Los ingresos y el patrimonio de las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior, estará constituido por:
a) Las partidas que se le sean asignadas dentro del presupuesto nacional, departamental, distrital o municipal.
b) Los bienes muebles e inmuebles que actualmente posean y los que adquieran posteriormente, así como sus frutos y rendimientos.
c) Las rentas que reciban por concepto de matrículas, inscripciones y demás derechos.
d) Los bienes que como personas jurídicas adquieran a cualquier título.

Artículo 86. Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución.
Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993.

Artículo 87. A partir del sexto año de la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional incrementará sus aportes para las universidades estatales u oficiales, en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto.
Este incremento se efectuará en conformidad con los objetivos previstos para el Sistema de Universidades estatales u oficiales y en razón al mejoramiento de la calidad de las instituciones que lo integran.

Parágrafo. El incremento al que se refiere el presente artículo se hará para los sistemas que se creen en desarrollo de los artículos 81 y 82 y los dineros serán distribuidos por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), previa reglamentación del Gobierno Nacional.

Artículo 88. Con el objeto de hacer una evaluación y posteriormente sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las universidades estatales u oficiales, éstas en un término no mayor a seis meses deberán presentar a

través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) la información satisfactoria correspondiente.
El Gobierno Nacional en un término no mayor a dos años y con la asesoría del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), adoptará las medidas necesarias para garantizar los aportes correspondientes del Presupuesto Nacional de los entes territoriales y de los esfuerzos de las mismas universidades.

Parágrafo. Facúltase a las universidades estatales u oficiales para adoptar el régimen de cesantías previsto en la Ley 50 de l990. Este se podrá acoger como obligatorio para quienes se vinculen laboralmente a la universidad a partir de la vigencia de la presente ley.
Con respecto a quienes ya estuvieran vinculados. el traslado al nuevo régimen quedará al criterio exclusivo del docente o funcionario.

Artículo 89. Créase el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (Fodesep), con domicilio en la capital de la República. como una entidad de economía mixta organizada bajo los principios de la economía solidaria. En el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (Fodesep) podrán participar todas aquellas instituciones deEducación Superior. tanto privadas como estatales u oficiales, que así lo deseen.
El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (Fodesep), tendrá las siguientes funciones:
1. Servir como entidad promotora de financiamiento para proyectos específicos de las instituciones de Educación Superior.
2. Plantear y promover programas y proyectos económicos en concordancia con el desarrollo académico para beneficio de las instituciones de Educación Superior
3. Las demás que le sean asignadas por la ley. Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento de este fondo, de conformidad con las disposiciones legales relativas a las instituciones de economía solidaria.

Artículo 90. El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (Fodesep), se conformará con las instituciones de Educación Superior que voluntariamente deseen participar en él.
Los ingresos de este fondo se integrarán como sigue:
1. Con aportes que el Gobierno Nacional destine anualmente en el Presupuesto Nacional.
2. Con los aportes voluntarios de las instituciones de Educación Superior afiliadas al Fondo.

Artículo 91. El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (Fodesep), se conformará con las instituciones de Educación Superior que voluntariamente deseen participar en él. Los ingresos de este fondo se integrarán como sigue:

1. Con aportes que el Gobierno Nacional destine anualmente en el presupuesto nacional.
2. Con los aportes voluntarios de las instituciones de Educación Superior afiliadas al Fondo.

Artículo 92. Las instituciones de Educación Superior, los Colegios de Bachillerato y las instituciones de Educación
No Formal, no son responsables del IVA. Adicionalmente, las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior tendrán derecho a la devolución del IVA que paguen por los bienes, insumos y servicios que adquieran, mediante liquidaciones periódicas que se realicen en los términos que señale el reglamento.

CAPITULO VI

Del régimen de contratación y control fiscal.

Artículo 93. Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos.

Parágrafo. Se exceptúan de lo anterior los contratos de empréstito, los cuales se someterán a las reglas previstas para ellos por el Decreto 222 de 1983 y demás disposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

Artículo 94. Para su validez, los contratos que celebren las universidades estatales u oficiales, además del cumplimiento de los requisitos propios de la contratación entre particulares, estarán sujetos a los requisitos de aprobación y registro presupuestal, a la sujeción de los pagos según la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicación en el Diario Oficial y pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar.

Artículo 95. En razón de su régimen especial, autorízase a las universidades estatales u oficiales para contratar con empresas privadas colombianas los servicios de control interno a que se refiere el artículo 269 de la Constitución Política de Colombia.

Parágrafo. La anterior autorización se hará extensiva a las demás instituciones estatales u oficiales de Educación Superior que de conformidad con la presente ley no tienen el carácter de universidad.

TITULO CUARTO

De las instituciones de Educación Superior de carácter privado y de economía solidaria.

Artículo 96. Las personas naturales y jurídicas de derecho privado pueden, en los términos previstos en la presente ley, crear instituciones de Educación Superior.

Artículo 97. Los particulares que pretendan fundar una institución de Educación Superior, deberán acreditar ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), que están en capacidad de cumplir la función que a aquéllas corresponde v que la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética, académica, científica y pedagógica.

Artículo 98. Las instituciones privadas de Educación Superior deben ser personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria.

Artículo 99. El reconocimiento y la cancelación de la personería jurídica de las instituciones privadas de Educación Superior corresponden exclusivamente al Ministro de Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).

Parágrafo. Las personas que ocasionen la cancelación de la Personería Jurídica de una institución de Educación Superior serán responsables legalmente, previo el cumplimiento del debido proceso.

Artículo 100. A la solicitud de reconocimiento de personería jurídica, deberán acompañarse los siguientes documentos:
a) Acta de constitución y hojas de vida de sus fundadores.
b) Los estatutos de la institución.
c) El estudio de factibilidad socioeconómica.
d) Los documentos que acrediten la efectividad y seriedad de los aportes de los fundadores.
e) El régimen del personal docente.
f) El régimen de participación democrática de la comunidad educativa en la dirección de la institución.
g) El reglamento estudiantil.
El contenido, la forma y requisitos que deberán reunir los anteriores documentos serán señalados por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).

Parágrafo. La efectividad de los aportes se acreditará mediante acta de recibo suscrita por quienes hayan sido designados para ejercer las funciones de representante legal v revisor fiscal de la institución. La seriedad de los aportes de derechos reales mediante promesa de transferencia de dominio, estará

condicionada únicamente al reconocimiento de la personería jurídica de la institución.

Artículo 101.. El Ministro de Educación con base en el estudio de factibilidad socio-económica presentado por la institución. previo concepto del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), determinará el monto mínimo de capital que garantice su adecuado y correcto funcionamiento. Para esta determinación se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, la ubicación de la institución, el número de estudiantes y las características y naturaleza de los programas que proyecten ofrecer las instituciones.

Artículo 102. El estudio de factibilidad deberá demostrar igualmente que el funcionamiento de la institución que se pretende crear estará financiado con recursos diferentes a los que se puedan obtener por concepto de matrículas, al menos por un tiempo no menor a la mitad de la terminación de su primera promoción. Los costos de funcionamiento deberán estimarse según los costos por alumno y por programa.

Artículo 103. Las reformas estatutarias de estas instituciones deberán notificarse para su ratificación al Ministerio de Educación Nacional por intermedio del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes).

Artículo 104. Las instituciones privadas de Educación Superior se disolverán en los siguientes casos:
a) Cuando transcurridos dos años contados a partir de la fecha de la providencia que le otorgó la personería jurídica, la institución no hubiere iniciado reglamentariamente sus activi dades académicas.
b) Cuando se cancele su personería jurídica.
c) Cuando ocurra alguno de los hechos previstos en los estatutos para su disolución.
d) Cuando se entre en imposibilidad definitiva de cumplir el objeto para el cual fue creada.

Artículo 105. Las instituciones de Educación Superior creadas por la Iglesia Católica se regirán por los términos del Concordato vigente y por las demás normas de la presente ley.

Artículo 106. Las instituciones privadas de Educación Superior podrán vincular profesores por horas cuando su carga docente sea inferior a la de un profesor de medio tiempo en la misma universidad, bien sea mediante contratos de trabajo o mediante contratos de servicios, según los períodos del calendario académico y su
remuneración en cuanto a honorarios se refiere, corresponderá a lo pactado por las partes; pero que en ningún caso podrá ser inferior al valor de cómputo

hora resultante del valor total de ocho (8) salarios mínimos dividido por el número de horas laborables mes.

TITULO QUINTO

Del régimen estudiantil.

CAPITULO I De los estudiantes.

Artículo 107. Es estudiante de una institución de Educación Superior la persona que posee matrícula vigente para un programa académico.

Artículo 108. Las instituciones de Educación Superior tendrán la obligación de proporcionar a los estudiantes servicios adecuados y actualizados de bibliotecas.

Artículo 109. Las instituciones de Educación Superior deberán tener un reglamento estudiantil que regule al menos los siguientes aspectos: Requisitos de inscripción, admisión y matrícula, derechos y deberes, distinciones e incentivos, régimen disciplinario y demás aspectos académicos.

Artículo 110. El Gobierno Nacional establecerá en las instituciones financieras oficiales líneas de crédito destinadas a estudiantes de Educación Superior.

Artículo 111. Con el fin de facilitar el ingreso a las instituciones de Educación Superior a las personas de escasos ingresos económicos, la Nación, las entidades territoriales y las propias instituciones de este nivel de educación, establecerán una política general de becas, ayudas y créditos para los mencionados estudiantes. Su ejecución corresponderá al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), entidad que determinará las modalidades de subsidio parcial o total del pago que, por concepto de derechos pecuniarios, hagan efectivos las instituciones de Educación Superior.

CAPITULO II

Del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).

Artículo 112. Para proveer y mantener un adecuado financiamiento de las matrículas y sostenimiento de los estudiantes, se fortalece el fondo de crédito educativo del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex). Este fondo contará con los recursos provenientes de:
a) Rentas propias del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).

b) Aportes del Presupuesto Nacional.
c) Recursos del Ahorro Educativo.
d) El producto de las multas a que hace relación el artículo 48 de la presente ley.
e) Líneas de crédito nacional.
f) Líneas de crédito internacional con el aval de la Nación.

Artículo 113. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), a través de un fondo creado con recursos del Presupuesto Nacional, será garante de los préstamos. otorgados por el sector financiero a los estudiantes de Educación Superior de escasos recursos económicos.

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará esta materia y establecerá las comisiones que pueda cobrar el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) por este concepto.

Artículo 114. Los recursos fiscales de la Nación, destinados a becas, o a créditos educativos universitarios en Colombia, deberán ser girados exclusivamente al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) y a él corresponde su administración.
Esta entidad adjudicará los créditos y las becas teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes parámetros:
a) Excelencia académica.
b) Escasez de recursos económicos del estudiante.
c) Distribución regional en proporción al número de estudiantes.
d) Distribución adecuada para todas las áreas del conocimiento. Parágrafo. Los recursos, que por cualquier concepto, reciban las distintas entidades del Estado, para ser utilizados como becas, subsidios o créditos educativos, deberán ser trasladados al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
exterior (Icetex), para que éste los adjudique de conformidad a los criterios expresados en este artículo.

Artículo 115. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), será la entidad encargada de seleccionar los beneficiarios de las becas de cooperación internacional, becas de intercambio y las demás becas internacionales que se ofrezcan a los colombianos a través de las distintas entidades públicas del orden oficial. Se exceptúan del anterior régimen, las becas que las instituciones de Educación Superior obtengan en forma directa. Los representantes de las entidades que reciban las ofertas de becas internacionales estarán obligados a hacerlas llegar al Icetex.
El desconocimiento de esta norma será causal de destitución del funcionario.

Artículo 116. Los contribuyentes que donen al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) los bonos de financiamiento especial y los de desarrollo social y seguridad interna emitidos en 1992, podrán deducir el valor nominal de los mismos, de la renta gravable del año en que los donen.
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), destinará el monto de estos recursos exclusivamente para créditos educativos de Educación Superior.

CAPITULO III

Del bienestar universitario.

Artículo 117. Las instituciones de Educación Superior deben adelantar programas de bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo.
El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), determinará las políticas de bienestar universitario.
Igualmente, creará un fondo de bienestar universitario con recursos del Presupuesto Nacional y de los entes territoriales que puedan hacer aportes.
El fondo señalado anteriormente será administrado por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes).

Artículo 118. Cada institución de Educación Superior destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio bienestar universitario.

Artículo 119. Las instituciones de Educación Superior garantizarán campos y escenarios deportivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de estas actividades en forma permanente.

TITULO SEXTO

Disposiciones generales, especiales y transitorias.

CAPITULO I
Disposiciones generales.

Artículo 120 La extensión comprende los programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad.

Artículo 121. Las instituciones de Educación Superior que proyecten establecer seccionales, además de prever expresamente esa posibilidad en sus normas estatutarias, deberán obtener autorización del Ministerio de Educación Nacional, previa consulta ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), que señalará previamente los requisitos y procedimientos para tal efecto.

Artículo 122. Los derechos pecuniarios que por razones académicas pueden exigir las instituciones de Educación Superior, son los siguientes:
a) Derechos de Inscripción.
b) Derechos de Matrícula.
c)Derechos por realización de exámenes de habilitación, supletorios y preparatorios.
d) Derechos por la realización de cursos especiales y de educación permanente.
e) Derechos de Grado.
f) Derechos de expedición de certificados y constancias.

Parágrafo l° Las instituciones de Educación Superior legalmente probadas fijarán el valor de todos los derechos pecuniarios de que Trata este artículo y aquellos destinados a mantener un servicio médico asistencial para los estudiantes, los cuales deberán informarse al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) para efectos de la inspección y vigilancia, de conformidad con la presente ley.

Parágrafo 2° Las instituciones de Educación Superior estatales u oficiales podrán además de los derechos contemplados en este artículo, exigir otros derechos denominados derechos complementarios, los cuales no pueden exceder del 20% del valor de la matrícula.

Artículo 123. El régimen del personal docente de Educación Superior será el consagrado en los estatutos de cada institución.
Dicho régimen deberá contemplar al menos los siguientes aspectos: Requisitos de vinculación, sistemas de evaluación y capacitación, categorías, derechos y deberes, distinciones e incentivos y régimen disciplinario.

Artículo 124. Las personas naturales y jurídicas que financien los estudios de sus trabajadores en instituciones de Educación Superior, para efectos tributarios podrán deducir dicho monto de sus costos de operación.

Artículo 125. Las instituciones dedicadas exclusiva o primordialmente a la investigación, podrán ofrecer previo convenio con universidades y conjuntamente con éstas, programas de formación avanzada.

Artículo 126. El Gobierno Nacional destinará recursos presupuestales para la promoción de la investigación científica y tecnológica de las universidades estatales u oficiales, privadas y demás instituciones de Educación Superior, los cuales serán asignados con criterios de prioridad social y excelencia académica.

Artículo 127. El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) colaborará con el Estado en su función de promover y orientar el desarrollo científico y tecnológico, de acuerdo con lo establecido por la Ley 29 de 1990.

Artículo 128. En todas las instituciones de Educación Superior, estatales u oficiales, privadas y de economía solidaria, serán obligatorios el estudio de la Constitución Política y la instrucción cívica en un curso de por lo menos un semestre. Así mismo, se promoverán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana.

Artículo 129. La formación ética profesional debe ser elemento fundamental obligatorio de todos los programas de formación en las instituciones de Educación Superior.

Artículo 130. La Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter), a través de la Banca Comercial y del Banco Central Hipotecario, establecerá líneas de crédito especiales para las instituciones de Educación Superior, con destino a programas de construcción de planta física, de instalaciones deportivas y dotación de las mismas.

Artículo 131. Las instituciones de Educación Superior podrán celebrar contratos para prestación del servicio de la Educación Superior con las entidades territoriales. Estos contratos tendrán vigilancia especial por las entidades competentes.

Artículo 132. Para dar cumplimiento a los objetivos de educación cooperativa establecidos en la Ley 79 de 1988, a partir del l° de enero de 1993, por lo menos la mitad de los recursos previstos para educación, en el artículo 54 de la precitada ley, deben ser invertidos en programas académicos de Educación Superior, ofrecidos por instituciones de economía solidaria de Educación Superior autorizados legalmente.

Artículo 133. De acuerdo con la política de descentralización consagrada por la Constitución Política de Colombia, créanse los Comités Regionales de Educación Superior (CRES), como organismos asesores del Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), con las siguientes funciones:
1a. la Coordinar los esfuerzos regionales para el desarrollo de la Educación Superior regional.

2a Actuar como interlocutor válido para efectos de discusión y diseño de políticas, planes y proyectos de Educación Superior regional.
3a Contribuir en la Evaluación Compartida de programas académicos.

Artículo 134. Los Comités Regionales de Educación Superior (CRES), estarán conformados por los Rectores o sus delegados, de las instituciones de Educación Superior debidamente reconocidas como tales. Se reunirán en Comité Regional según la clasificación de regionalización que señale el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes). Cada Comité Regional se dará su propio reglamento y forma de funcionamiento.

CAPITULO II

Disposiciones especiales.

Artículo 135. La Universidad Nacional de Colombia se regirá por las normas de la presente ley, salvo en lo previsto en su régimen orgánico especial.

Artículo 136. La Universidad Pedagógica Nacional será la institución asesora del Ministerio de Educación Nacional en la definición de las políticas relativas a la formación y perfeccionamiento de docentes no universitarios.

Artículo 137. La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el Instituto Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones (ITEC), el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad Militar Nueva Granada, las Escuelas de Formación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que adelanten programas de Educación Superior y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), continuarán adscritas a las entidades respectivas. Funcionarán de acuerdo con su naturaleza jurídica y su régimen académico lo ajustarán conforme lo dispuesto en la presente ley.

Parágrafo. El Ministro de Educación Nacional, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), reglamentará el régimen de equivalencias correspondientes a los títulos otorgados por las instituciones señaladas en el presente artículo.

CAPITULO III

Disposiciones transitorias.

Artículo 138. Mientras se dictan los nuevo, estatutos generales de las instituciones de Educación Superior, continuarán vigentes sus actuales normas estatutarias.
Dentro de los quince días siguientes a la expedición de los estatutos de cada institución, el Consejo Superior Universitario o el organismo que haga sus

veces, deberá enviar al Ministerio de Educación Nacional, por conducto del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), copia auténtica de los mismos para efectos de su inspección y vigilancia.

Artículo 139. Las instituciones clasificadas actualmente en las modalidades de: Universitarias, instituciones tecnológicas y las técnicas profesionales, tendrán un plazo hasta de tres (3) años para transformarse en universidades o en instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, siempre y cuando llenen los requisitos establecidos en la presente ley y aquellos que fije el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) para este propósito.

Artículo 140. Las instituciones de Educación Superior creadas por ley, ordenanza o acuerdo municipal que estén funcionando en la actualidad conservarán su personería jurídica y atribuciones y deberán ajustarse en lo sucesivo a las disposiciones de la presente ley.

Artículo 141. En las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior, los Consejos Superiores actualmente existentes, fijarán transitoriamente los requisitos y procedimientos para la elección de los miembros de los Consejos Superiores a que hace relación el literal d) del artículo 64 de la presente ley.

Artículo 142. Se faculta al Gobierno Nacional para que en un plazo de seis (6) meses, reestructure al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) y a la Universidad Nacional de Colombia y expida las normas reglamentarias de la presente ley.

Parágrafo. Mientras se dicta el nuevo estatuto del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) y el de la Universidad Nacional de Colombia, continuarán vigentes sus actuales normas estatutarias.

Artículo 143. Hasta tanto el Gobierno Nacional reglamente el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y reestructure el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), todos los trámites que en la actualidad surten ante esta última entidad, las instituciones de Educación Superior culminarán su proceso de conformidad con las normas vigentes.

Artículo 144. Esta Ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, especialmente los Decretos-leyes 80 y 81 de 1980.

ANEXO Nº 9

LEY 99 DE 1993 (diciembre 22)

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

TITULO I

FUNDAMENTOS DE LA POLITICA AMBIENTAL COLOMBIANA

ARTICULO 1o. Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales:

1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Rio de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial.

5 . En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso.

6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.

7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables.

8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido.

9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento.

10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad. las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones.

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial.

12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será descentralizado, democrático y participativo.

13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional Ambiental, SINA, cuyos componentes y su interrelación definen los mecanismos de actuación del Estado y la sociedad civil.

14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica, social y física.

TITULO II

DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL.

ARTICULO 2o. Creación y Objetivos del Ministerio del Medio Ambiente. Créase el Ministerio del Medio Ambiente como organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los términos de la presente ley, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible.

El Ministerio del Medio Ambiente formulará, junto con el Presidente de la República y garantizando la participación de la comunidad, la política nacional ambiental y de recursos naturales renovables, de manera que se garantice el derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y se proteja el patrimonio natural y la soberanía de la Nación.

Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente coordinar el Sistema Nacional Ambiental, SINA, que en esta Ley se organiza, para asegurar la adopción y ejecución de las políticas y de los planes, programas y proyectos respectivos, en orden a garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y de los particulares en relación con el medio ambiente y con el patrimonio natural de la Nación.

ARTICULO 3o. Del Concepto de Desarrollo Sostenible. Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.

ARTICULO 4o. Sistema Nacional Ambiental, SINA. El Sistema Nacional Ambiental, SINA. es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en esta Ley. Estará integrado por los siguientes componentes:

1) Los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución Nacional, en esta Ley y en la normatividad ambiental que la desarrolle.

2) La normatividad específica actual que no se derogue por esta Ley y la que se desarrolle en virtud de la ley.

3) Las entidades del Estado responsables de la política y de la acción ambiental, señaladas en la ley.

4) Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la problemática ambiental.

5) Las fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del medio ambiente.

6) Las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades de producción de información, investigación científica y desarrollo tecnológico en el campo ambiental.

El Gobierno Nacional reglamentará la organización y funcionamiento del Sistema Nacional Ambiental, SINA.

PARAGRAFO. Para todos los efectos la jerarquía en el Sistema Nacional Ambiental, SINA, seguirá el siguiente orden descendente: Ministerio del Medio Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales, Departamentos y Distritos o Municipios.

ARTICULO 5o. Funciones del Ministerio. Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente:

1) Formular la política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente;

2) Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural;

3) Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los planes, programas y proyectos que en materia ambiental, o en relación con los recursos naturales renovables y el ordenamiento ambiental del territorio, deban incorporarse a los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones que el Gobierno someta a consideración del Congreso;

4) Dirigir y coordinar el proceso de planificación y la ejecución armónica de las actividades en materia ambiental, de las entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA);

5) Establecer los criterios ambientales que deben ser incorporados en la formulación de las políticas sectoriales y en los procesos de planificación de los demás Ministerios y entidades, previa su consulta con esos organismos;

6) Formular, conjuntamente con el Ministerio de Salud, la política nacional de población; promover y coordinar con éste programas de control al crecimiento demográfico y hacer evaluación y seguimiento de las estadísticas demográficas nacionales;

7) Formular, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Económico la política nacional de asentamientos humanos y expansión urbana, con el

Ministerio de Agricultura las políticas de colonización y con el Ministerio de Comercio Exterior, las políticas de comercio exterior que afecten los recursos naturales renovables y el medio ambiente.

8) Evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales, su incorporación al valor de mercado de bienes y servicios y su impacto sobre el desarrollo de la economía nacional y su sector externo; su costo en los proyectos de mediana y grande infraestructura, así como el costo económico del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables y realizar investigaciones, análisis y estudios económicos y fiscales en relación con los recursos presupuestales y financieros del sector de gestión ambiental y con los impuestos, tasas, contribuciones, derechos, multas e incentivos con él relacionados;

9) Adoptar, conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional, a partir de enero de 1995, los planes y programas docentes y el pénsum que en los distintos niveles de la educación nacional se adelantarán en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, promover con dicho ministerio programas de divulgación y educación no formal y reglamentar la prestación del servicio ambiental;

10) Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos y las actividades mineras, industriales, de transporte y en general todo servicio o actividad que pueda generar directa o indirectamente daños ambientales;

11) Dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir las contaminaciones geosférica, hídrica, del paisaje, sonora y atmosférica, en todo el territorio nacional;

12) Expedir y actualizar el estatuto de zonificación de usó adecuado del territorio para su apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales y fijar las pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas de manejo especial;

13) Definir la ejecución de programas y proyectos que la Nación, o ésta en asocio con otras entidades públicas, deba adelantar para el saneamiento del medio ambiente o en relación con el manejo, aprovechamiento, conservación, recuperación o protección de los recursos naturales renovables y del medio ambiente;

14) Definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y

determinar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales de las actividades económicas;

15) Evaluar los estudios ambientales y expedir, negar o suspender la licencia ambiental correspondiente, en los casos que se señalan en el Título VIII de la presente Ley.

16) Ejercer discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias lo ameriten, sobre los asuntos asignados a las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación y control preventivo, actual o posterior, de los efectos de deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de desarrollo, así como por la exploración, explotación, transporte, beneficio y utilización de los recursos naturales renovables y no renovables y ordenar la suspensión de los trabajos o actividades cuando a ello hubiese lugar;

17) Contratar, cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones, la elaboración de estudios de investigación y de seguimiento de procesos ecológicos y ambientales y la evaluación de estudios de impacto ambiental;

18) Reservar, alinderar y sustraer las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales y las reservas forestales nacionales, y reglamentar su uso y funcionamiento;

19) Administrar las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales, velar por la protección del patrimonio natural y la diversidad biótica de la Nación, así como por la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica;

20) Coordinar, promover y orientar las acciones de investigación sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables, establecer el Sistema de Información Ambiental, y organizar el inventario de la biodiversidad y de los recursos genéticos nacionales; promover la investigación de modelos alternativos de desarrollo sostenible; ejercer la Secretaría Técnica y Administrativa del Consejo del Programa Nacional de Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat;

21) Regular, conforme a la ley, la obtención, uso, manejo, investigación, importación, exportación, así como la distribución y el comercio de especies y estirpes genéticas de fauna y flora silvestres; regular la importación, exportación y comercio de dicho material genético, establecer los mecanismos y procedimientos de control y vigilancia, y disponer lo necesario para reclamar el pago o reconocimiento de los derechos y regalías que se causen a favor de la Nación por el uso de material genético;

22) Participar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la formulación de la política internacional en materia ambiental y definir con éste los instrumentos y procedimientos de cooperación en la protección de los ecosistemas de las zonas fronterizas; promover las relaciones con otros países en asuntos ambientales y la cooperación multilateral para la protección de los recursos naturales y representar al Gobierno Nacional en la ejecución de Tratados y Convenios Internacionales sobre medio ambiente y recursos naturales renovables;

23) Adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección de las especies de flora y fauna silvestres; tomar las previsiones que sean del caso para defender especies en extinción o en peligro de serlo; y expedir los certificados a que se refiere la Convención Internacional de Comercio de Especies de Fauna y Flora Silvestre Amenazadas de Extinción (CITES);

24) Regular la conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras, y coordinar las actividades de las entidades encargadas de la investigación, protección y manejo del medio marino, de sus recursos vivos, y de las costas y playas; así mismo, le corresponde regular las condiciones de conservación y manejo de ciénagas, pantanos, lagos, lagunas y demás ecosistemas hídricos continentales;

25) Establecer los límites máximos permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de substancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que pueda afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables; del mismo modo, prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Los límites máximos se establecerán con base en estudios técnicos, sin perjuicio del principio de precaución;

26) Expedir las regulaciones ambientales para la distribución y el uso de substancias químicas o biológicas utilizadas en actividades agropecuarias;

27) Adquirir para el Sistema de Parques Nacionales Naturales o para los casos expresamente definidos por la presente Ley, bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho público; adelantar ante la autoridad competente la expropiación de bienes por razones de utilidad pública o interés social definidas por la ley. e imponer las servidumbres a que hubiese lugar;

28) Llevar el registro de las entidades sin ánimo de lucro que se creen con el objeto de proteger o colaborar en la protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables;

29) Fijar el monto tarifario mínimo de las tasas por el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales renovables a las que se refieren el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto-ley 2811 de 1974, la presente Ley y las normas que los modifiquen o adicionen;

30) Determinar los factores de cálculo de que trata el artículo 19 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto-ley 2811 de 1974, sobre cuya base han de fijarse los montos y rangos tarifarios de las tasas creadas por la ley;

31) Dirimir las discrepancias entre entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, que se susciten con motivo del ejercicio de sus funciones y establecer criterios o adoptar decisiones cuando surjan conflictos entre ellas en relación con la aplicación de las normas o con las políticas relacionadas con el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables o del medio ambiente;

32) Establecer mecanismos de concertación con el sector privado para ajustar las actividades de éste a las metas ambientales previstas por el Gobierno; definir los casos en que haya lugar a la celebración de convenios para la ejecución de planes de cumplimiento con empresas públicas o privadas para ajustar tecnologías y mitigar o eliminar factores contaminantes y fijar las reglas para el cumplimiento de los compromisos derivados de dichos convenios. Promover la formulación de planes de reconversión industrial ligados a la implantación de tecnologías ambientalmente sanas y a la realización de actividades de descontaminación, de reciclaje y de reutilización de residuos;

33) Promover, en coordinación con las entidades competentes y afines, la realización de programas de sustitución de los recursos naturales no renovables, para el desarrollo de tecnologías de generación de energía no contaminantes ni degradantes;

34) Definir, conjuntamente con las autoridades de turismo, las regulaciones y los programas turísticos que puedan desarrollarse en áreas de reserva o de manejo especial; determinar las áreas o bienes naturales protegidos que puedan tener utilización turística, las reglas a que se sujetarán los convenios y concesiones del caso, y los usos compatibles con esos mismos bienes;

35) Hacer evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y de los que puedan incidir en la ocurrencia de desastres naturales y coordinar con las demás autoridades las acciones tendientes a prevenir la emergencia o a impedir la extensión de sus efectos;

36) Aprobar los estatutos de las Corporaciones Autónomas Regionales y las reformas que los modifiquen o adicionen y ejercer sobre ellas la debida inspección y vigilancia;

37) Administrar el Fondo Nacional Ambiental (FONAM) y el Fondo Ambiental de la Amazonia;

38) Vigilar que el estudio, exploración e investigación de nacionales o extranjeros con respecto a nuestros recursos naturales renovables respete la soberanía nacional y los derechos de la Nación colombiana sobre sus recursos genéticos;

39) Dictar regulaciones para impedir la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos o subproductos de los mismos;

40) Fijar, con carácter prioritario, las políticas ambientales para la Amazonia colombiana y el Chocó Biogeográfico, de acuerdo con el interés nacional de preservar estos ecosistemas;

41) Promover en coordinación con el Ministerio de Gobierno, la realización de programas y proyectos de gestión ambiental para la prevención de desastres, de manera que se realicen coordinadamente las actividades de las entidades del Sistema Nacional Ambiental y las del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, creado por la Ley 46 de 1988 y reglamentado mediante el Decreto-ley 919 de 1989;

42) Fijar los cupos globales y determinar las especies para el aprovechamiento de bosques naturales y la obtención de especímenes de flora y fauna silvestres, teniendo en cuenta la oferta y la capacidad de renovación de dichos recursos, con base en los cuales las Corporaciones Autónomas Regionales otorgarán los correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones de aprovechamiento;

43) Establecer técnicamente las metodologías de valoración de los costos económicos del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables;

44) Realizar investigaciones y estudios económicos conducentes a la identificación de prioridades de inversión para la gestión ambiental como base para orientar el gasto público del sector;

45) Fijar, de común acuerdo con el Ministerio de Agricultura y con base en la mejor evidencia científica e información estadística disponibles, las especies y

los volúmenes de pesca susceptibles de ser aprovechados en las aguas continentales y en los mares adyacentes, con base en los cuales el INPA expedirá los correspondientes permisos de aprovechamiento.

PARAGRAFO 1. En cuanto las actividades reguladas por el Ministerio del Medio Ambiente puedan afectar la salud humana, esta función será ejercida en consulta con el Ministerio de Salud; y con el Ministerio de Agricultura, cuando pueda afectarse la sanidad animal o vegetal.

PARAGRAFO 2. El Ministerio del Medio Ambiente, en cuanto sea compatible con las competencias asignadas por la presente Ley, ejercerá en adelante las demás funciones que, en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, venían desempeñando el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, INDERENA, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Minas y Energía y el Departamento Nacional de Planeación. El Ministro del Medio Ambiente sustituirá al Gerente del INDERENA en las Juntas y Consejos Directivos de que éste haga parte en virtud de lo dispuesto por la ley, los reglamentos o los estatutos.

PARAGRAFO 3. La política de cultivos forestales con fines comerciales, de especies introducidas o autóctonas, será fijada por el Ministerio de Agricultura con base en la Política Nacional Ambiental y de Recursos Naturales Renovables que establezca el Ministerio del Medio Ambiente.

PARAGRAFO 4. El Ministerio del Medio Ambiente coordinará la elaboración del proyecto del Plan Nacional de desarrollo Forestal de que trata la Ley 37 de 1989. Igualmente, corresponde al Ministerio del Medio Ambiente estructurar, implementar y coordinar el Servicio Forestal Nacional creado por la ley.

Para los efectos del presente parágrafo, el Gobierno Nacional, dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de la presente Ley, deberá presentar al Congreso de la República las adiciones, modificaciones o actualizaciones que considere pertinente efectuar a la Ley 37 de 1989, antes de iniciar el cumplimiento de sus disposiciones.

PARAGRAFO 5. Todos los programas y proyectos que el Departamento Nacional de Planeación adelante en materia de recursos naturales renovables y del medio ambiente, incluyendo los referentes al área forestal, y los que adelante en estas áreas con recursos del crédito externo, o de Cooperación Internacional. serán transferidos al Ministerio del Medio Ambiente y a las Corporaciones Autónomas Regionales de acuerdo con las competencias definidas en esta Ley y a partir de la vigencia de la misma.

PARAGRAFO 6. Cuando mediante providencia administrativa del Ministerio del Medio Ambiente u otra autoridad ambiental, se restrinja el uso de los recursos naturales no renovables, se ordenará oficiar a las demás autoridades que efectúen el registro inmobiliario, minero y similares a fin de unificar la información requerida.

ARTICULO 6o. Cláusula General de Competencia. Además de las otras funciones que le asignen la ley o los reglamentos, el Ministerio del Medio Ambiente ejercerá, en lo relacionado con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, las funciones que no hayan sido expresamente atribuidas por la ley a otra autoridad.

ARTICULO 7o. Del Ordenamiento Ambiental del Territorio. Se entiende por ordenamiento ambiental del territorio para los efectos previstos en la presente Ley, la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible.

ARTICULO 8o. De la Participación en el CONPES. El Ministro del Medio Ambiente será miembro, con derecho a voz y a voto, del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES.

ARTICULO 9o. Orden de Precedencia. El Ministerio del Medio Ambiente que se crea por la presente Ley seguirá en orden de precedencia al Ministerio de Educación Nacional.

TITULO III

DE LA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

ARTICULO 10. Estructura Administrativa del Ministerio. El Ministerio del Medio Ambiente tendrá la siguiente estructura administrativa básica:

- Despacho del Ministro

- Consejo de Gabinete

- Despacho del Viceministro
- Oficina de Análisis Económico

- Oficina de Cooperación Internacional

- Oficina de Información Nacional Ambiental

- Oficina de Investigación y Tecnología Ambiental

- Despacho del Secretario General

- Oficina Jurídica

- División Administrativa

- División de Finanzas y Presupuesto

- División de Personal

- Direcciones Generales

1. Dirección General de Asentamientos Humanos y Población

1.1. Subdirección de Medio Ambiente Urbano, Asentamientos Humanos y Población

1.2. Subdirección de Educación Ambiental

2. Dirección General de Medio Ambiente Físico

2.1. Subdirección de Aguas Continentales

2.2. Subdirección de Zonas Marinas y Costeras

2.3. Subdirección de Suelos

2.4. Subdirección de Subsuelos

2.5. Subdirección de Atmósfera, Meteorología y Clima

3. Dirección General Forestal y de Vida Silvestre

3.1. Subdirección de Planificación y Administración de Bosques y Flora

3.2. Subdirección de Fauna

3.3. Subdirección de Ecosistemas no Boscosos

4. Dirección General de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio

4.1. Subdirección de Zonificación y Planificación Territorial

4.2. Subdirección de Evaluación, Seguimiento y Asesoría Regional

4.3. Subdirección de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad

5. Dirección Ambiental Sectorial

5.1. Subdirección de Ordenación y Evaluación Ambiental Sectorial.

5.2. Subdirección de Seguimiento y Monitoreo

- Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

- Fondo Nacional Ambiental, FONAM.

- Fondo Ambiental de la Amazonia.

ARTICULO 11. Del Consejo de Gabinete. Estará integrado por el Ministro, quien lo presidirá, el Viceministro, el Secretario General, quien actuará como su secretario, y los Directores Generales del Ministerio y el Jefe de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Es función principal del Consejo armonizar los trabajos y funciones de las distintas dependencias, recomendar al Ministro la adopción de decisiones y permitir la adecuada coordinación en la formulación de las políticas, expedición de las normas y orientación de las acciones institucionales del Ministerio, o para el cumplimiento de sus demás funciones.

PARAGRAFO 1. Del Consejo Técnico Asesor de Política Ambiental. Créase el Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambientales, adscrito al Despacho del Ministro del Medio Ambiente. El Consejo estará presidido por el Viceministro, integrado por dos representantes de las universidades, expertos en asuntos científicos y tecnológicos, y sendos representantes de los gremios de la producción industrial, agraria, y de minas e hidrocarburos, a razón de uno por cada sector, escogidos conforme al reglamento que expida el Gobierno Nacional. Este Consejo contará con una secretaría técnica integrada por dos profesionales de alto nivel técnico y amplia experiencia, los cuales serán nombrados por el Ministro del Medio Ambiente. El Consejo Asesor tendrá como función principal asesorar al Ministro sobre la viabilidad ambiental de proyectos de interés nacional, de los sectores público y privado, y sobre la formulación de políticas y la expedición de normas ambientales.

ARTICULO 12. De las Funciones de las Dependencias del Ministerio. Los reglamentos distribuirán las funciones entre las distintas dependencias del ministerio, de acuerdo con su naturaleza y en desarrollo de las funciones que se le atribuyen por la presente Ley.

TITULO IV

DEL CONSEJO NACIONAL AMBIENTAL

ARTICULO 13. El Consejo Nacional Ambiental. Para asegurar la coordinación intersectorial a nivel público de las políticas, planes y programas en materia ambiental y de recursos naturales renovables, créase el Consejo Nacional Ambiental, el cual estará integrado por los siguientes miembros:

- El Ministro del Medio Ambiente, quien lo presidirá.

- El Ministro de Agricultura.

- El Ministro de Salud.

- El Ministro de Desarrollo Económico.

- El Ministro de Minas y Energía.

- El Ministro de Educación Nacional.

- El Ministro de Obras Públicas y Transporte.

- El Ministro de Defensa Nacional.

- El Ministro de Comercio Exterior.

- El Director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional.

- El Defensor del Pueblo.

- El Contralor General de la República.

- Un representante de los gobernadores.

- Un alcalde representante de la Federación Colombiana de Municipios.

- El Presidente del Consejo Nacional de Oceanografía.

- Un representante de las comunidades Indígenas.

- Un representante de las comunidades Negras.

- Un representante de los gremios de la producción agrícola.

- Un representante de los gremios de la producción industrial.

- El Presidente de ECOPETROL o su delegado.

- Un representante de los gremios de la producción minera.

- Un representante de los gremios de exportadores.

- Un representante de las organizaciones ambientales no gubernamentales.

- Un representante de la Universidad elegido por el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU.

- Un representante de los gremios de la actividad forestal.

La participación del Ministro del Medio Ambiente en el Consejo Nacional del Ambiente es indelegable. Los demás Ministros integrantes sólo podrán delegar su representación en los Viceministros; el Director del Departamento Nacional de Planeación en el Jefe de la Unidad de Política Ambiental.

El Consejo deberá reunirse por lo menos una vez cada seis meses.

A las sesiones del Consejo Nacional Ambiental podrán ser invitados, con voz pero sin voto, los funcionarios públicos y las demás personas que el Consejo considere conveniente, para la mejor ilustración de los diferentes temas en los cuales éste deba tomar decisiones y formular recomendaciones.

El Consejo creará consejos a nivel de las diferentes entidades territoriales con fines similares a los que cumple en el orden nacional y respetando en su integración los criterios establecidos por el presente artículo, de manera que se dé participación a los distintos sectores de la sociedad civil y del Gobierno.

El Gobierno Nacional reglamentará la periodicidad y la forma en que serán elegidos los representantes de las entidades territoriales, de los gremios, de las etnias, de las Universidades y de las Organizaciones no Gubernamentales al Consejo Nacional Ambiental.

ARTICULO 14. Funciones del Consejo. El Consejo Nacional Ambiental tendrá a su cargo las siguientes funciones:

1) Recomendar la adopción de medidas que permitan armonizar las regulaciones y decisiones ambientales con la ejecución de proyectos de desarrollo económico y social por los distintos sectores productivos, a fin de asegurar su sostenibilidad y minimizar su impacto sobre el medio;

2) Recomendar al Gobierno Nacional la política y los mecanismos de coordinación de las actividades de todas las entidades y organismos públicos y privados cuyas funciones afecten o puedan afectar el medio ambiente y los recursos naturales renovables;

3) Formular las recomendaciones que considere del caso para adecuar el uso del territorio y los planes, programas y proyectos de construcción o ensanche de infraestructura pública a un apropiado y sostenible aprovechamiento del medio ambiente y del patrimonio natural de la Nación;

4) Recomendar las directrices para la coordinación de las actividades de los sectores productivos con las de las entidades que integran el Sistema Nacional Ambiental (SINA);

5) Designar comités técnicos intersectoriales en los que participen funcionarios de nivel técnico de las entidades que correspondan, para adelantar tareas de coordinación y seguimiento;

6) Darse su propio reglamento, el cual deberá ser aprobado por el Gobierno Nacional.

ARTICULO 15. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional Ambiental será ejercida por el Viceministro del Medio Ambiente.

Las funciones de la Secretaría Técnica, además de las incorporadas dentro del reglamento del Consejo Nacional Ambiental, serán las siguientes:

1) Actuar como Secretario en las reuniones del Consejo y de sus comisiones y suscribir las actas;

2) Convocar a las sesiones del Consejo conforme al reglamento y a las instrucciones impartidas por su presidente;

3) Presentar al Consejo los informes, estudios y documentos que deban ser examinados;

4) Las que el Consejo le asigne.

TITULO V

DEL APOYO CIENTIFICO Y TECNICO DEL MINISTERIO

ARTICULO 16. De las Entidades Científicas Adscritas y Vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio del Medio Ambiente tendrá las siguientes entidades científicas adscritas y vinculadas:

a) El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM;

b) El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andreis", INVEMAR;

c) El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt";

d) El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "Sinchi";

e) El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "John von Neumann".

PARAGRAFO. El Ministerio del Medio Ambiente contará además con el apoyo científico y técnico de los centros de investigaciones ambientales y de las universidades públicas y privadas y en especial del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional y de la Universidad de la Amazonia.

ARTICULO 17. Del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Créase el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, el cual se organizará como un establecimiento público de carácter nacional adscrito al Ministerio del Medio Ambiente, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente, encargado del levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país, así como de establecer las bases técnicas para clasificar y zonificar el uso del territorio nacional para los fines de la planificación y el ordenamiento del territorio.

El IDEAM deberá obtener, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información básica sobre hidrología, hidrogeología, meteorología, geografía básica sobre aspectos biofísicos, geomorfología. suelos y cobertura vegetal para el manejo y aprovechamiento de los recursos biofísicos de la Nación y tendrá a su cargo el establecimiento y funcionamiento de infraestructuras meteorológicas e hidrológicas nacionales para proveer informaciones, predicciones, avisos y servicios de asesoramiento a la comunidad.

Corresponde a este instituto efectuar el seguimiento, de los recursos biofísicos de la nación especialmente en lo referente a su contaminación y degradación, necesarios para la toma de decisiones de las autoridades ambientales;

PARAGRAFO 1. Trasládense al IDEAM las funciones que sobre producción, procesamiento y análisis de información geográfica básica de aspectos biofísicas viene desempeñando la Subdireccíon de Geografía del Instituto

Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, junto con sus archivos, instalaciones, laboratorios y demás bienes relacionados;

PARAGRAFO 2. Trasládense al IDEAM las funciones que en materia de hidrología y meteorología tiene actualmente asignadas el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, HIMAT, el cual en lo sucesivo se denominará Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT. Trasládense al IDEAM toda la información, archivos, laboratorios, centros de procesamiento de información, medios de transporte, infraestructura y equipos hidrológicos y meteorológicos, instalaciones y demás elementos de que actualmente dispone el HIMAT relacionados con sus actividades hidrológicas y meteorológicas;

PARAGRAFO 3. Trasládense al IDEAM las funciones que sobre investigación básica general sobre recursos naturales viene efectuando el INDERENA y de forma específica las investigaciones que sobre recursos forestales y conservación de suelos desempeñan las Subgerencias de Bosques y Desarrollo;

PARAGRAFO 4. Trasládense al IDEAM las funciones que en materia de aguas subterraneas tiene asignadas el Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química, INGEOMINAS, sin perjuicio de las actividades que el INGEOMINAS continuará adelantando dentro de los programas de exploración y evaluación de los recursos del subsuelo.

El INGEOMINAS deberá suministrar al IDEAM toda la información disponible sobre aguas subterraneas, y la información existente en el Banco Nacional de Datos Hidrogeológicos.

La estructura básica del IDEAM será establecida por el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO 5. El IGAC prestará al IDEAM y al Ministerio del Medio Ambiente el apoyo que tendrá todos los requerimientos en lo relacionado con la información agrológica por ese Instituto.

ARTICULO 18. Del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andreis", INVEMAR. El Instituto de Investigaciones Marinas de Punta Betín "José Benito Vives de Andreis", INVEMAR, establecimiento público adscrito mediante Decreto 1444 de 1974 al Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales Francisco José de Caldas, COLCIENCIAS, se denominará en adelante Instituto de investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andreis", INVEMAR, cuya sede principal será la ciudad de Santa Marta, y establecerá una sede en Coveñas, Departamento de Sucre, y otra en la ciudad de Buenaventura, en el Litoral Pacífico. El INVEMAR se reorganizará como una Corporación sin ánimo de

lucro, de acuerdo a los términos establecidos por la Ley 29 de 1990 y el Decreto 393 de 1991, vinculada al Ministerio del Medio Ambiente, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio. Podrán asociarse al Instituto entidades públicas y privadas, corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro de carácter privado y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales así como las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción sobre los litorales y las zonas insulares.

El INVEMAR tendrá como encargo principal la investigación ambiental básica y aplicada de los recursos naturales renovables y el medio ambiente y los ecosistemas costeros y oceánicos de los mares adyacentes al territorio nacional. El INVEMAR emitirá conceptos técnicos sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos, y prestará asesoría y apoyo científico y técnico al Ministerio, a las entidades territoriales y a las Corporaciones Autónomas Regionales.

El Ministerio del Medio Ambiente promoverá y creará una red de centros de investigación marina, en la que participen todas las entidades que desarrollen actividades de investigación en los litorales colombianos, propendiendo por el aprovechamiento racional de toda la capacidad científica de que ya dispone el país en ese campo.

PARAGRAFO 1. La Nación apropiará anualmente en el capítulo correspondiente al Ministerio del Medio Ambiente los recursos y transferencias necesarios para atender los gastos de funcionamiento e inversión del INVEMAR.

PARAGRAFO 2. El Gobierno Nacional fijará los aportes que las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción sobre los litorales y áreas marítimas del territorio nacional deberán hacer a la constitución del INVEMAR como Corporación Civil.

ARTICULO 19. Del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt". Créase el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt", el cual se organizará como una Corporación Civil sin ánimo de lucro, de carácter público pero sometida a las reglas de derecho privado, vinculada al Ministerio del Medio Ambiente, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio, organizada según lo dispuesto en la Ley 29 de 1990 y el Decreto 393 de 1991, encargada de realizar investigación básica y aplicada sobre los recursos genéticos de la flora y la fauna nacionales y de levantar y formar el inventario científico de la biodiversidad en todo el territorio nacional.

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt" tendrá a su cargo la investigación científica y aplicada de los recursos bióticos y de los hidrobiológicos en el territorio continental de la Nación. El Instituto deberá crear, en las regiones no cubiertas por otras entidades especializadas de investigación de que trata la presente Ley, estaciones de investigación de los macroecosistemas nacionales y apoyar con asesoría técnica y transferencia de tecnología a las Corporaciones Autónomas Regionales, los Departamentos, los Distritos, los Municipios y demás entidades encargadas de la gestión del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Las investigaciones que el Instituto adelante y el banco de información que de ellas resulte, serán la base para el levantamiento y formación del inventario nacional de la biodiversidad.

Trasládense al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt" las funciones que en investigación sobre recursos bióticos venía ejerciendo el INDERENA, así como la información, instalaciones, archivos, laboratorios y demás elementos con esta relacionados.

PARAGRAFO . La Nación apropiará anualmente en el capítulo correspondiente al Ministerio del Medio Ambiente los recursos y transferencias necesarios para atender los gastos de funcionamiento e inversión del Instituto.

ARTICULO 20. El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "SINCHI". Transfórmase la Corporación Colombiana para la Amazonia, Araracuara, COA, en el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "Sinchi" el cual se organizará como una Corporación Civil sin ánimo de lucro, de carácter público pero sometida a las reglas de derecho privado, organizada en los términos establecidos por la Ley 29 de 1990 y el Decreto 393 de 1991, vinculada al Ministerio del Medio Ambiente, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio. Podrán asociarse al Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "Sinchi" las entidades públicas, corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, universidades y centros de investigación científica, interesados en la investigación del medio amazónico.

El Instituto tendrá por objeto la realización y divulgación de estudios e investigaciones científicas de alto nivel relacionados con la realidad biológica, social y ecológica de la región Amazónica.

Trasládense al Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "Sinchi" las instalaciones, bienes muebles e inmuebles y demás derechos y obligaciones patrimoniales de la Corporación Araracuara, COA.

El Instituto tendrá su sede principal en la ciudad de Leticia y establecerá una subsede en el Departamento del Vaupés.

El Instituto asociará a la Universidad de la Amazonia en sus actividades de investigación científica.

PARAGRAFO. La Nación apropiará anualmente en el capítulo correspondiente al Ministerio del Medio Ambiente los recursos y transferencias necesarios para atender los gastos de funcionamiento e inversión del Instituto.

ARTICULO 21. El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "John von Neumann". Créase el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "John von Neumann" el cual se organizará como una Corporación Civil sin ánimo de lucro. de carácter público pero sometida a las reglas de derecho privado, organizada en los términos establecidos por la Ley 29 de 1990 y el Decreto 393 de 1991, vinculada al Ministerio del Medio Ambiente, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio. Podrán asociarse al Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico las entidades públicas, corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, universidades y centros de investigación científica, interesados en la investigación del medio ambiente del Litoral Pacífico y del Chocó Biogeográfico.

El instituto tendrá su sede principal en la ciudad de Quibdó en el Departamento del Chocó.

El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "John von Neumann" asociará en sus investigaciones al Instituto de Estudios del Pacífico de la Universidad del Valle.

PARAGRAFO 1. La Nación apropiará anualmente en el capítulo correspondiente al Ministerio del Medio Ambiente los recursos y transferencias necesarios para atender los gastos de funcionamiento e inversión del Instituto.

PARAGRAFO 2. A partir de la vigencia de esta Ley, el Instituto "John Von Neuman" se hará cargo del proyecto BIOPACIFICO hoy a cargo del INDERENA.

ARTICULO 22. Fomento y Difusión de la Experiencia Ambiental de las Culturas Tradicionales. El Ministerio y los Institutos de carácter científico fomentarán el desarrollo y difusión de los conocimientos, valores y tecnologías sobre el manejo ambiental y de recursos naturales, de las culturas indígenas y demás grupos étnicos.

TITULO VI

DE LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES

ARTICULO 23. Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.

Exceptúase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la ley.

ARTICULO 24. De los Organos de Dirección y Administración. Las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán tres órganos principales de dirección y administración a saber: a. La Asamblea Corporativa; b. El Consejo Directivo; y c. El Director General.

ARTICULO 25. De la Asamblea Corporativa. Es el principal órgano de dirección de la Corporación y estará integrada por todos los representantes legales de las entidades territoriales de su jurisdicción.

Los miembros de la Asamblea Corporativa de una Corporación Autónoma Regional tendrán en sus deliberaciones y decisiones un derecho a voto proporcional a los aportes anuales de rentas o a los que por cualquier causa o concepto hayan efectuado a la Corporación, la entidad territorial a la que representan, dentro del año anterior a la fecha de la sesión correspondiente. Si tales aportes superan el 25% del total recibido por la Corporación, este derecho a voto se limitará al 25% de los derechos representados en la Asamblea.

Son funciones de la Asamblea Corporativa: a. Elegir el Consejo Directivo de que tratan los literales d, y e, del artículo 26 de la presente Ley; b. Designar el revisor fiscal o auditor interno de la Corporación; c. Conocer y aprobar el informe de gestión de la administración; d. Conocer y aprobar las cuentas de resultados de cada período anual; e. Adoptar los estatutos de la Corporación y las reformas que se le introduzcan y someterlos a la aprobación del Ministerio del Medio Ambiente; f. Las demás que le fijen los reglamentos.

ARTICULO 26. Del Consejo Directivo. Es el órgano de administración de la Corporación y estará conformado por:

a. El gobernador o los gobernadores de los departamentos sobre cuyo territorio ejerza jurisdicción la Corporación Autónoma Regional, o su delegado o delegados. Corresponderá al gobernador o a su delegado presidir el Consejo Directivo. Si fuesen varios los gobernadores, los estatutos definirán lo relativo a la presidencia del Consejo Directivo;

b. Un representante del Presidente de la República;

c. Un representante del Ministro del Medio Ambiente;

d. Hasta cuatro (4) alcaldes de los municipios comprendidos dentro del territorio de la jurisdicción de la Corporación, elegidos por la Asamblea Corporativa, para períodos de un (1) año por el sistema de cuociente electoral, de manera que queden representados todos los departamentos o regiones que integran la Corporación. Si el territorio de la Corporación comprendiese un número plural de departamentos, la participación será definida en forma equitativa de acuerdo con el reglamento que al efecto expida el Gobierno Nacional;

e. Dos (2) representantes del sector privado;

f. Un (1) representante de las comunidades indígenas o etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción de la Corporación, elegido por ellas mismas;

g. Dos (2) representantes de las entidades sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio en el área de jurisdicción de la Corporación y cuyo objeto principal sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, elegido por ellas mismas.

PARAGRAFO 1. Los representantes de los literales f, y g, se elegirán de acuerdo a la reglamentación que sobre el particular expida el Ministerio del Medio Ambiente.

PARAGRAFO 2. En la conformación de los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, se tendrán en cuenta las disposiciones de la Ley 70 de 1993.

ARTICULO 27. De las Funciones del Consejo Directivo. Son funciones del Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales: a. Proponer a la Asamblea Corporativa la adopción de los estatutos y de sus reformas; b. Determinar la planta de personal de la Corporación; c. Disponer la participación de la Corporación en la constitución y organización de sociedades o

asociaciones y fundaciones o el ingreso a las ya existentes; d. Dictar normas adicionales, a las legalmente establecidas, sobre el estatuto de contratación de la entidad; e. Disponer la contratación de créditos externos: f. Determinar la estructura interna de la Corporación para lo cual podrá crear, suprimir y fusionar dependencias y asignarles responsabilidades conforme a la ley; g. Aprobar la incorporación o sustracción de áreas de que trata el numeral 16 del artículo 31 de esta Ley; h. Autorizar la delegación de funciones de la entidad; i. aprobar el plan general de actividades y el presupuesto anual de inversiones; j. Nombrar de acuerdo al artículo siguiente o remover de conformidad con los estatutos, al Director General de la Corporación.

ARTICULO 28. Del Director General. El Director General será el representante legal de la Corporación y su primera autoridad ejecutiva. Será designado por el Consejo Directivo para un período de tres (tres) años, contados a partir del 1° enero de 1995, siendo reelegible.

PARAGRAFO TRANSITORIO. El Presidente de la República nombrará o ratificará a los Directores Generales de las Corporaciones Autónomas Regionales para el año de 1994.

ARTICULO 29. Funciones del Director General. Son funciones de los Directores Generales las señaladas en las leyes, en los reglamentos y en los estatutos respectivos. En particular les corresponde:

1. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y ejercer su representación legal;

2. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos del Consejo Directivo;

3. Presentar para estudio y aprobación del Consejo Directivo los planes y programas que se requieran para el desarrollo del objeto de la Corporación, el proyecto de presupuesto, así como los proyectos de organización administrativa y de planta de personal de la misma;

4. Presentar al Consejo Directivo los proyectos de reglamento interno;

5. Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y convenios que se requieran para el normal funcionamiento de la entidad;

6. Constituir mandatarios o apoderados que representen a la Corporación en asuntos judiciales y demás de carácter litigioso;

7. Delegar en funcionarios de la entidad el ejercicio de algunas funciones, previa autorización del Consejo Directivo;

8. Nombrar y remover el personal de la Corporación;

9. Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituyen el patrimonio de la Corporación;

10. Rendir informes al Ministro del Medio Ambiente, en la forma que éste lo determine, sobre el estado de ejecución de las funciones que corresponden a la Corporación y los informes generales y periódicos o particulares que solicite, sobre las actividades desarrolladas y la situación general de la entidad;

11. Presentar al Consejo Directivo los informes que le sean solicitados sobre la ejecución de los planes y programas de la Corporación, así como sobre su situación financiera, de acuerdo con los estatutos;

12. Las demás que los estatutos de la Corporación le señalen y que no sean contrarias a la Ley.

ARTICULO 30. Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

ARTICULO 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones:

1) Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción;

2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;

3) Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables;

4) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su

jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales;

5) Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten;

6) Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no correspondan al ejercicio de funciones administrativas;

7) Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA), estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables;

8) Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme a las directrices de la política nacional;

9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva;

10) Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente.

11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con

exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley.

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;

13) Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente;

14) Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la movilización de recursos naturales renovables;

15) Administrar, bajo la tutela del Ministerio del Medio Ambiente las áreas del Sistema de Parques Nacionales que ese Ministerio les delegue. Esta administración podrá hacerse con la participación de las entidades territoriales y de la sociedad civil.

16) Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen la Ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción.

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados;

18) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales;

19) Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes;

Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo con las normas y los reglamentos requieran de Licencia Ambiental, esta deberá ser expedida por el Ministerio del Medio Ambiente.

20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables;

21) Adelantar en coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas y con las autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente por comunidades negras, a que se refiere la Ley 70 de 1993, programas y proyectos de desarrollo sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y conservación de los recursos naturales renovables y del medio ambiente;

22) Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;

23) Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación;

24) Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que forman parte del Sistema Nacional Ambiental, SINA, y prestar asistencia técnica a entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de los recursos naturales renovables y la preservación del

medio ambiente, en la forma que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el Ministerio del Medio Ambiente;

25) Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que haya de gravarse la propiedad inmueble, por razón de la ejecución de obras públicas por parte de la Corporación; fijar los demás derechos cuyo cobro pueda hacer conforme a la ley;

26) Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías o con otros de destinación semejante;

27) Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho público y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes, una vez surtida la etapa de negociación directa, cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de obras o proyectos requeridos para el cumplimiento de las mismas, e imponer las servidumbres a que haya lugar, conforme a la ley;

28) Promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua a las comunidades indígenas y negras tradicionalmente asentadas en el área de su jurisdicción, en coordinación con las autoridades competentes;

29) Apoyar a los concejos municipales, a las asambleas departamentales y a los consejos de las entidades territoriales indígenas en las funciones de planificación que les otorga la Constitución Nacional;

30) Las demás que anteriormente estaban atribuidas a otras autoridades, en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, en cuanto no pugnen con las atribuidas por la Constitución Nacional a las entidades territoriales, o sean contrarias a la presente Ley o a las facultades de que ella inviste al Ministerio del Medio Ambiente.

31) Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la zonificación y el uso del suelo, de conformidad por lo establecido en el artículo 313 numeral séptimo de la Constitución Nacional, las Corporaciones Autónomas Regionales establecerán las normas generales y las densidades máximas a las que se sujetarán los propietarios de vivienda en áreas sub-urbanas y en cerros y montañas, de manera que se protejan el medio ambiente y los recursos naturales. No menos del 70% del área a desarrollar en dichos proyectos se destinará a la conservación de la vegetación nativa existente.

PARAGRAFO 1. Las Corporaciones Autónomas Regionales que en virtud de esta Ley se transforman, continuarán ejerciendo las funciones atribuidas por las

leyes que dispusieron su creación y organización, hasta cuando se defina o constituya el ente que asumirá aquellas funciones que abarquen actividades u objetos distintos de los previstos por la presente Ley. A partir de ese momento, las corporaciones autónomas regionales sólo podrán ejercer las funciones que esta Ley les atribuye;

PARAGRAFO 2. Previa declaratoria favorable de viabilidad ambiental por la Corporación Autónoma Regional de la respectiva jurisdicción la Dirección General Marítima y Portuaria del Ministerio de Defensa, DIMAR, como autoridad marítima nacional tiene la función de otorgar autorizaciones, permisos y concesiones para la ocupación temporal de las playas y terrenos de bajamar;

PARAGRAFO 3. Cuando una Corporación Autónoma Regional tenga por objeto principal la defensa y protección del medio ambiente urbano, podrá adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación; así mismo podrá administrar, manejar, operar y mantener las obras ejecutadas o aquellas que le aporten o entreguen los municipios o distritos para esos efectos;

PARAGRAFO 4. Las Corporaciones Autónomas Regionales realizarán sus tareas en estrecha coordinación con las entidades territoriales y con los organismos a las que éstas hayan asignado responsabilidades de su competencia;

PARAGRAFO 5. Salvo lo estipulado en el numeral 45 del artículo 5 y el numeral 9 del presente artículo, el ordenamiento, manejo y todas las demás actividades relacionadas con la actividad pesquera y sus recursos, continuarán siendo de responsabilidad del Ministerio de Agricultura y del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA, de conformidad con lo establecido por la Ley 13 de 1990 y el Decreto Reglamentario 2256 de 1991;

PARAGRAFO 6. Las Corporaciones Autónomas Regionales que por virtud de la nueva distribución Jurisdiccional pierdan competencia sobre uno o varios municipios, continuarán adelantando los proyectos en ejecución hasta su terminación en un plazo máximo de tres años.

ARTICULO 32. Delegación de Funciones. Los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, podrán delegar en otros entes públicos o en personas jurídicas privadas, constituidas como entidades sin ánimo de lucro, el ejercicio de funciones siempre que en este último caso no impliquen el ejercicio de atribuciones propias de la autoridad administrativa. La facultad sancionatoria es indelegable.

ARTICULO 33. Creación y Transformación de las Corporaciones Autónomas Regionales. La administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables estará en todo el territorio nacional a cargo de Corporaciones Autónomas Regionales.

Las siguientes Corporaciones conservarán su denominación, sedes y jurisdicción territorial actual:

- Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER)

- Corporación Autónoma Regional de Nariño (CORPONARIÑO)

- Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR)

- Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA)

- Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ)

- Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Rionegro y Nare (CORNARE)

- Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS)

Créanse las siguientes corporaciones autónomas regionales:

- Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, CORPORINOQUIA: su jurisdicción comprenderá los Departamentos de Arauca, Vichada, Casanare, Meta; los Municipios del Departamento de Cundinamarca, a saber: Guayabetal, Quetame, Une. Paratebueno, Chipaque, Cáqueza. Fosca, Gutiérrez, Choachí y Ubaque; y los municipios de Pajarito, Labranzagrande, Paya, Pisba y Cubará del Departamento de Boyacá, ion la excepción del territorio de jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena. Tendrá su sede principal en la ciudad de Yopal y subsedes en los Municipios de Arauca en el Departamento de Arauca, Villavicencio en el Departamento del Meta y la Primavera en el Departamento del Vichada. Las subsedes entrarán a funcionar seis meses después de la sede principal. Los recursos percibidos por CORPORINOQUIA se distribuirán equitativamente entre la sede principal y las subsedes.

- Corporación Autónoma Regional de Sucre, CARSUCRE: tendrá su sede principal en la ciudad de Sincelejo; su jurisdicción comprende el territorio del Departamento de Sucre, con excepción de los municipios que están dentro de la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y del San Jorge, CORPOMOJANA.

- Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM: tendrá su sede principal en la ciudad de Neiva; su jurisdicción comprenderá el Departamento del Huila;

- Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA: tendrá su sede principal en la ciudad de Medellín; su jurisdicción comprenderá los municipios del Departamento de Antioquia, con exclusión del territorio de los municipios que hacen parte de la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá, CORPOURABA, y de la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Ríonegro y Nare, CORNARE;

- Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA: con sede principal en la ciudad de Barranquilla; su jurisdicción comprenderá el Departamento de Atlántico;

- Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS: tendrá su sede principal en la ciudad de San Gil; su jurisdicción comprenderá el Departamento de Santander, con exclusión de los municipios que hacen parte de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. CDMB;

- Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA tendrá su sede principal en la ciudad de Tunja; su jurisdicción comprenderá el Departamento de Boyacá con excepción de los municipios de Chiquinquirá, Saboyá, San Miguel de Sema, Caldas, Buenavista y Ráquira que hacen parte de la CAR; los municipios de Pajarito. Labranzagrande, Paya, Pisba y Cubará que hacen parte de CORPORINOQUIA; y los municipios que pertenecen a la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR.

- Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR: tendrá su sede principal en la cuidad de Garagoa y su Jurisdicción comprenderá los municipios de Ventaquemada, Boyacá, Tunmequé, Nuevo Colón, Viracachá, Ciénega, Ramiriquí, Jenesano, Tibaná, Umbita, Chinavita, Pachavita, Garagoa, La Capilla, Tenza, Sutatenza, Guateque, Guayatá, Somondoco, Almeida, Chivor, Macanal, Santa María, San Luis de Gaceno y Campohermoso;

- Corporación Autónoma Regional del Guavio, CORPOGUAVIO: tendrá jurisdicción en los municipios de Gachalá, Medina, Ubalá, Gama, Junín, Gachetá, Fómeque, Mámbita y Guasca en el Departamento de Cundinamarca. Su sede estará en el municipio de Gachalá;

- Corporación Autónoma Regional del Canal del Diqué, CARDIQUE: tendrá su sede principal en el Distrito de Cartagena de Indias y su jurisdicción comprenderá al Distrito de Cartagena de Indias y los municipios de Turbaco, Turbaná, Arjona, Mahates, San Estanislao de Koztka, Villanueva, Santa Rosa,

Santa Catalina, Soplaviento, Calamar, Guamo, Carmen de Bolívar, San Juan, San Jacinto, Zambrano, Córdoba, Maríalabaja en el Departamento de Bolívar;

- Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, CSB: tendrá su sede principal en Magangué y su jurisdicción comprenderá el territorio del Departamento de Bolívar con excepción de los municipios incluidos en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regiónal del Canal del Dique (CARDIQUE).

Las siguientes corporaciones modifican su jurisdicción o su denominación actual:

- Corporación Autónoma Regional del Magdalena, CORPAMAG: su jurisdicción comprende el territorio del Departamento del Magdalena con excepción de las áreas incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta;

- Corporación Autónoma Regional del Cesar, CORPOCESAR: su jurisdicción comprende el territorio del Departamento del Cesar con excepción de las áreas incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta;

- Corporación Autónoma Regional de la Guajira, CORPOGUAJIRA: su jurisdicción comprende el territorio del Departamento de Guajira con excepción de las áreas incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desanrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta;

- Corporación Autónoma Regional de Caldas, CORPOCALDAS: tendrá su sede principal en la ciudad de Manizales; su jurisdicción comprenderá el territorio del Departamento de Caldas;

- Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC: tendrá su sede principal en la ciudad de Popayán; su jurisdicción comprenderá el territorio del Departamento del Cauca;

- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC: tendrá su sede principal en la ciudad de Cali; su jurisdicción comprenderá el territorio del Departamento del Valle del Cauca;

- Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Bogotá, Ubaté y Suárez (CAR): se denominará Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y tendrá jurisdicción en el Distrito Capital de Santafé de Bogotá y el territorio del Departamento de Cundinamarca, con excepción de los municipios incluidos en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Guavio y los municipios del Departamento de Cundinamarca que hacen parte

de la jurisdicción de CORPORINOQUIA. Su jurisdicción incluye los Municipios de Chiquinquirá, Saboyá, San Miguel de Sema, Caldas, Buenavista y Ráquira en el Departamento de Boyacá. Tendrá su sede principal en la Ciudad de Santafé de Bogotá, y establecerá una sub-sede en la ciudad de Fusagasugá;

- Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB): tendrá su sede en la ciudad de Bucaramanga y además de su actual jurisdicción la tendrá sobre el Municipio de El Playón.

PARAGRAFO 1. De las Regiones con Régimen Especial. La administración de los recursos naturales y el medio ambiente en la Región Amazónica, en el Chocó, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la Serranía de la Macarena, en la Región de Urabá, en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y en la Región de la Mojana y del San Jorge, estará a cargo de Corporaciones para el Desanrollo Sostenible de las respectivas regiones, las cuales se organizarán como Corporaciones Autónomas Regionales, con las características especiales que la presente ley para su caso establece;

PARAGRAFO 2. De las Corporaciones Autónomas Regionales de la Cuenca del Río Magdalena. Las Corporaciones Autónomas Regionales en cuya jurisdicción se encuentren municipios ribereños del Río Magdalena, ejercerán sus funciones en coordinación con la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada por el artículo 331 de la Constitución Política, y serán delegatarias suyas para garantizar el adecuado aprovechamiento y preservación del medio ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables en la cuenca fluvial;

PARAGRAFO 3. Del Manejo de Ecosistemas Comunes por varias Corporaciones Autónomas Regionales. En los casos en que dos o más Corporaciones Autónomas Regionales tengan jurisdicción sobre un ecosistema o sobre una cuenca hidrográfica comunes, constituirán de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, una comisión conjunta encargada de concertar, armonizar y definir políticas para el manejo ambiental correspondiente.

El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos de concertación para el adecuado y armónico manejo de áreas de confluencia de jurisdicciones entre las Corporaciones Autónomas Regionales y el Sistema de Parques Nacionales o Reservas.

Cuando dos o más Corporaciones Autónomas Regionales tengan a su cargo la gestión de ecosistemas comunes, su administración deberá efectuarse mediante convenios, conforme a los lineamientos trazados por el Ministerio del Medio Ambiente;

PARAGRAFO 4. Los Municipios de Manta, Tibirita, Machetá, Chocontá y Sesquile que pertenecen a la CAR, y los municipios de Tunja y Samacá que pertenecerán a CORPOBOYACA, tendrán derecho a que por intermedio de la CAR y de CORPOBOYACA, a recibir de CORPOCHIVOR y para su inversión los recursos a que se refieren los artículos 43 y 45 de la presente Ley, correspondientes al aporte hídrico que dan a la represa del Chivor.

ARTICULO 34. De la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, CDA. Créase la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonia, CDA, la cual estará organizada como una Corporación Autónoma Regional sujeta al régimen de que trata el presente artículo.

La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonia, CDA, además de las funciones propias de las Corporaciones Autónomas Regionales, tendrá como encargo principal promover el conocimiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente de la región del Norte y Oriente Amazónico y su utilización; ejercer actividades de promoción de investigación científica y transferencia de tecnología; dirigir el proceso de planificación regional de uso del suelo para mitigar o desactivar presiones de explotación inadecuadas del territorio; fomentar la integración de las comunidades tradicionales que habitan la región y de sus métodos ancestrales de aprovechamiento de la naturaleza al proceso de conservación, protección, y aprovechamiento sostenible de los recursos, y de propiciar con la cooperación de entidades nacionales e internacionales, la generación de tecnologías apropiadas, para la utilización y conservación de los recursos de la Amazonia colombiana.

La jurisdicción de CDA comprenderá el territorio de los departamentos de Vaupés, Guainía y Guaviare: tendrá su sede en la ciudad de Puerto Inírida, y subsedes en San José del Guaviare y Mitú. Las subsedes serán instaladas dentro de los seis (6) meses siguientes a la organización de la Corporación. Los recursos percibidos por CDA se distribuirán por partes iguales entre la sede principal y las subsedes.

El Consejo Directivo estará integrado por:

a. El Ministro del Medio Ambiente, quien lo presidirá, o su delegado;

b. Los gobernadores de los departamentos comprendidos dentro de la jurisdicción de la Corporación, o sus delegados;

c. Tres representantes de las comunidades indígenas, uno por cada departamento de la jurisdicción de la Corporación CDA, escogidos por las organizaciones indígenas de la región;

d. Un representante del Presidente de la República;

e. Un representante de los alcaldes de los municipios capitales comprendidos dentro del territorio de su jurisdicción;

f. El Director del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "SINCHI", o su delegado;

g. El Director del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos «Alexander von Humboldt»;

h. El Rector de la Universidad de la Amazonia;

i. Un representante de una organización no gubernamental de carácter ambiental dedicada a la protección de la Amazonia.

Los miembros del consejo directivo de que tratan los literales e, e i, serán elegidos por la Asamblea Corporativa por el sistema de mayoría simple de listas que presenten las respectivas entidades u organizaciones según el caso.

El Gobierno garantizará los recursos necesarios para el normal funcionamiento de la Corporación, de los recursos del Presupuesto Nacional, lo mismo que para el cumplimiento de las funciones especiales descritas en el presente artículo, destinará un porcentaje de los recursos del Fondo Nacional de Regalías destinados a la preservación ambiental.

Las licencias ambientales para explotaciones mineras y de construcción de infraestructura vial y los permisos y concesiones de aprovechamiento forestal, serán otorgados por el Director Ejecutivo de la Corporación con el conocimiento previo del Consejo Directivo y la aprobación del Ministro del Medio Ambiente.

Trasládense a CDA los bienes patrimoniales del INDERENA, existentes en el área del territorio de su jurisdicción.

ARTICULO 35. De la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, CORPOAMAZONIA. Créase la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, CORPOAMAZONIA, como una Corporación Autónoma Regional, la cual estará organizada como una Corporación Autónoma Regional sujeta al régimen de que trata el presente artículo.

La jurisdicción de CORPOAMAZONIA comprenderá el territorio de los departamentos de Amazonas, Putumayo y Caquetá. La sede principal de CORPOAMAZONIA será la ciudad de Mocoa en el Departamento del Putumayo y establecerá subsedes en las ciudades de Leticia y Florencia.

Fusiónase la Corporación Autónoma Regional del Putumayo, CAP, con la nueva Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, CORPOAMAZONIA, a cuya seccional Putumayo se transferirán todos sus activos y pasivos. Las regalías departamentales que actualmente recibe la CAP, serán destinadas por CORPOAMAZONIA exclusivamente para ser invertidas en el Departamento del Putumayo.

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, CORPOAMAZONIA, además de las funciones propias de las Corporaciones Autónomas Regionales, tendrá como encargo principal promover el conocimiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente del área de su jurisdicción y su utilización, fomentar el uso de tecnología apropiada y dictar disposiciones para el manejo adecuado del ecosistema Amazónico de su jurisdicción y el aprovechamiento sostenible y racional de sus recursos naturales renovables y del medio ambiente, así como asesorar a los municipios en el proceso de planificación ambiental y reglamentación de los usos del suelo y en la expedición de la normatividad necesaria para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural de las entidades territoriales de su jurisdicción.

Es función principal de la Corporación proteger el medio ambiente del Sur de la Amazonia colombiana como área especial de reserva ecológica de Colombia, de interés mundial y como recipiente singular de la mega-biodiversidad del trópico húmedo. En desarrollo de su objeto deberá fomentar la integración de las comunidades indígenas que tradicionalmente habitan la región, al proceso de conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos y propiciar la cooperación y ayuda de la comunidad internacional para que compense los esfuerzos de la comunidad local en la defensa de ese ecosistema único.

El Consejo Directivo estará integrado por:

a. El Ministro del Medio Ambiente, quien lo presidirá, o el Viceministro;

b. Los gobernadores de los Departamentos comprendidos dentro de la jurisdicción de la Corporación, o sus delegados;

c. El Director del Instituto de Hidrología, Meteorología e Investigaciones Ambientales -IDEAM;

d. Dos alcaldes municipales;

e. Dos representantes de las comunidades indígenas asentadas en su área de jurisdicción, escogidos por las organizaciones indígenas de la región;

f. El Director del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "SINCHI", o su delegado;

g. Un representante de las organizaciones ambientalistas no gubernamentales de carácter ambiental dedicadas a la protección de la amazonia;

h. El Director del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos «Alexander von Humboldt»;

i. El rector de la Universidad de la Amazonia.

Los miembros del consejo directivo de que tratan los literales d, y g, serán elegidos por la Asamblea Corporativa por el sistema de mayoría simple de listas que presenten las respectivas entidades u organizaciones según el caso.

El Gobierno garantizará los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones especiales descritas en el presente artículo con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Regalías destinados a la preservación ambiental.

Las licencias ambientales para explotaciones mineras y de construcción de infraestructura vial y los permisos y concesiones de aprovechamiento forestal, serán otorgados por el Director Ejecutivo de la Corporación con el conocimiento previo del Consejo Directivo y la aprobación del Ministro del Medio ambiente.

Trasládense a CORPOAMAZONIA los bienes patrimoniales del INDERENA en el área del territorio de su jurisdicción.

ARTICULO 36. De la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta, CSN. Créase la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta, CSN, como una Corporación Autónoma Regional que además de sus funciones administrativas en relación con los recursos naturales y el medio ambiente de la Sierra Nevada de Santa Marta, ejercerá actividades de promoción de la investigación científica y transferencia de tecnología, sujeta al régimen especial previsto en esta Ley y en sus estatutos, encargada principalmente de promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente, dirigir el proceso de planificación regional de uso del suelo para mitigar o desactivar presiones de explotación inadecuada del territorio, fomentar la integración de las comunidades tradicionales que habitan la región y de sus métodos ancestrales de aprovechamiento de la naturaleza al proceso de

conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos y de propiciar, con la cooperación de entidades nacionales e internacionales, la generación de tecnologías apropiadas para la utilización y conservación de los recursos y el entorno de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta comprenderá el territorio contenido dentro de la "Línea Negra" y será definido mediante reglamentación del Gobierno Nacional. Su sede será la ciudad de Valledupar y establecerá una subsede en la ciudad de Riohacha.

La Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta CSN, ejercerá las funciones especiales que le asigne el Ministerio del Medio Ambiente y las que dispongan sus estatutos y se abstendrá de cumplir aquellas que el Ministerio se reserve para sí, aunque estén atribuidas de manera general a las Corporaciones Autónomas Regionales.

La Nación tendrá en la Asamblea Corporativa una representación no inferior al 35% de los votos y estará representada en ella por el Ministro del Medio Ambiente, o su delegado.

El Consejo Directivo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta estará integrado por:

a. El Ministro del Medio Ambiente o su delegado, quien lo presidirá;

b. Los gobernadores de los Departamentos de Guajira, Magdalena y Cesar, o sus delegados;

c. Los directores generales de las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en dichos departamentos;

d. Sendos representantes de las étnias Kogis, Arzarios, Arhuacos, Wayú y Kancuamos; escogidos por las organizaciones indígenas de la región;

e. El Jefe de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio del Medio Ambiente;

f. Un representante del Presidente de la República;

g. Un representante de las organizaciones campesinas; y

h. Un representante de una organización no gubernamental o persona jurídica sin ánimo de lucro cuyo objeto principal sea la defensa y protección de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Los miembros del consejo directivo de que tratan los literales g y h, serán elegidos por la Asamblea Corporativa por el sistema de mayoría simple de listas que presenten las respectivas entidades u organizaciones según el caso.

ARTICULO 37. De la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, CORALINA. Créase la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, CORALINA, con sede en San Andrés (Isla), como una Corporación Autónoma Regional que además de sus funciones administrativas en relación con los recursos naturales y el medio ambiente del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ejercerá actividades de promoción de la investigación científica y transferencia de tecnología, sujeta al régimen especial previsto en esta Ley y en sus estatutos, encargada principalmente de promover la conservación y el aprovechamiento ostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente del Archipiélago de San Andrés Providencia, y Santa Catalina, dirigirá el proceso de planificación regional del uso del suelo y de los recursos del mar para mitigar o desactivar presiones de explotación inadecuada de los recursos naturales, fomentar la integración de las comunidades nativas que habitan las islas y de sus métodos ancestrales de aprovechamiento de la naturaleza al proceso de conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente y de propiciar, con la cooperación de entidades nacionales e internacionales, la generación de tecnologías apropiadas para la utilización y conservación de los recursos y el entorno del Archipiélago.

La jurisdicción de CORALINA comprenderá el territorio del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el mar territorial y la zona económica de explotación exclusiva generadas de las porciones terrestres del archipiélago, y ejercerá, además de las funciones especiales que determine la ley, las que le asigne el Ministerio del Medio Ambiente, y las que dispongan sus estatutos.

El Consejo Directivo estará integrado por:

a. El Ministro del Medio Ambiente, o su delegado;

b. El Gobernador del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, quien la presidirá;

c. Un representante del Presidente de la República; d. El Director de INVEMAR

e. Un representante de los gremios económicos organizados en el Archipiélago;

f. Un representante de los gremios de la producción artesanal agropecuaria y pesquera debidamente constituidos en el archipiélago;

g. El Director de la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa;

h. Los miembros de la Junta Para la Protección de los Recursos Naturales y Ambientales del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina creada por la Ley 47 de 1993.

Este Consejo Directivo reemplaza a la Junta para la Protección de los Recursos Naturales y Ambientales del Departamento de San Andrés y Providencia creada por el artículo 23 de la Ley 47 de 1993, y asume además de las funciones definidas en esta Ley las asignadas en el capítulo V de la Ley citada.

Los miembros de este Consejo serán elegidos para períodos de tres años.

La Junta Departamental de Pesca y Acuicultura creada por la Ley 47 de 1993, continuará ejerciendo sus funciones.

El Gobierno garantizará los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones especiales descritas en el presente artículo con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Regalías destinados a la preservación ambiental.

Trasládense a CORALINA los bienes patrimoniales del INDERENA, existentes en el área del territorio de su jurisdicción.

PARAGRAFO 1. A partir de la vigencia de esta Ley se prohíbe el otorgamiento de licencias y permisos conducentes a la construcción de nuevas instalaciones comerciales, hoteleras e industriales en el Municipio de Providencia y se suspenden las que están en trámite, hasta tanto se apruebe, por parte del municipio de Providencia, del Consejo Directivo de CORALINA y del Ministerio del Medio Ambiente, un plan de ordenamiento de uso del suelo y un plan de desarrollo, para la isla.

PARAGRAFO 2. El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se constituye en reserva de la biosfera. El Consejo Directivo de CORALINA coordinará las acciones a nivel nacional e internacional para darle cumplimiento a esta dispocición.

ARTICULO 38. De la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena. Crease la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Area de Manejo Especial La Macarena, CORMACARENA, como una Corporación Autónoma Regional que además de sus funciones administrativas en relación con los recursos naturales y el medio ambiente del área de Manejo Especial La

Macarena, reserva de la biosfera y santuario de fauna y flora, ejercerá actividades de promoción de la investigación científica y transferencia de tecnología, sujeta al régimen especial previsto en esta Ley y en sus estatutos, encargada principalmente de promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente del área de Manejo Especial La Macarena, dirigir el proceso de planificación regional de uso del suelo para mitigar y desactivar presiones de explotación inadecuada del territorio, y propiciar con la cooperación de entidades nacionales e internacionales, la generación de tecnologías apropiadas para la utilización y la conservación de los recursos y del entorno del área de Manejo Especial La Macarena.

La jurisdicción de CORMACARENA comprenderá el territorio del Area de Manejo Especial La Macarena, delimitado en el Decreto 1989 de 1989, con excepción de las incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Oriente Amazónico, CDA y CORPORINOQUIA.

Su sede será la ciudad de Villavicencio y tendrá una subsede en el municipio de Granada, Departamento del Meta.

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Area de Manejo Especial La Macarena, ejercerá las funciones especiales que le asigne el Ministerio del Medio Ambiente y las que dispongan sus estatutos, y se abstendrá de cumplir aquellas que el Ministerio se reserve para sí, aunque estén atribuidas de manera general a las Corporaciones Autónomas Regionales.

La Nación tendrá en la Asamblea Corporativa una representación no inferior al 35% de los votos y estará representada en ella por el Ministro del Medio Ambiente, o su delegado.

El Consejo Directivo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Area de Manejo Especial La Macarena, estará integrado por:

a. El Ministerio del Medio Ambiente o su delegado, quien lo presidirá;

b. El Gobernador del Meta o su delegado;

c. El Jefe de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio del Medio Ambiente;

d. Un representante del Presidente de la República;

e. Dos representantes de los alcaldes de los municipios que hacen parte del área de manejo especial;

f. Un representante de las organizaciones no gubernamentales o personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyo objeto principal sea la defensa y protección del área de manejo especial La Macarena;

g. Un representante de la asociación de colonos de la Macarena;

h. Un representante de las comunidades indígenas asentadas en área de manejo especial, escogido por ellas mismas;

i. El Director del Instituto Amazónico de Investigaciones Científica, "SINCHI", o su delegado;

j. El Director del Instituto de Investigación de Recursos biológicos "Alexander von Humbolt", o su delegado;

k. Los rectores de las Universidades de la Amazonia y Tecnológica de los Llanos Orientales.

Los miembros del Consejo Directivo de que tratan los literales e y f, serán elegidos por la Asamblea Corporativa por el sistema de mayoría simple de listas que presenten las respectivas entidades u organizaciones según el caso.

ARTICULO 39. De la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, CODECHOCO. Transfórmase la Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó, CODECHOCO, en la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, CODECHOCO, la cual estará organizada como una Corporación Autónoma Regional sujeta al régimen de que trata el presente artículo.

La jurisdicción de CODECHOCO comprenderá el territorio del Departamento del Chocó.

La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, CODECHOCO, además de las funciones propias de las Corporaciones Autónomas Regionales, tendrá como encargo principal promover el conocimiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente de la región chocoana y su utilización, fomentar el uso de tecnología apropiada y dictar disposiciones para el manejo adecuado del singular ecosistema chocoano y el aprovechamiento sostenible racional de sus recursos naturales renovables y no renovables, así como asesorar a los municipios en el proceso de planificación ambiental y reglamentación de los usos del suelo y en la expedición de la normatividad necesaria para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural de las entidades territoriales.

Es función principal de la Corporación proteger el medio ambiente chocoano como área especial de reserva ecológica de Colombia, de interés mundial y como recipiente singular de la mega-biodiversidad del trópico húmedo. En desarrollo de su objeto deberá fomentar la integración de las comunidades indígenas y negras que tradicionalmente habitan la región, al proceso de conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos y propiciar la cooperación y ayuda de la comunidad internacional para que compense los esfuerzos de la comunidad local en la defensa de ese ecosistema único.

La Corporación tendrá como sede principal la ciudad de Quibdó.

El Consejo Directivo estará integrado por:

a. El Ministro del Medio Ambiente, quien lo presidirá o el Viceministro;

b. El Gobernador del Departamento del Chocó;

c. El Director del Instituto de Hidrología, Meteorología e Investigaciones Ambientales, IDEAM;

d. Cuatro alcaldes municipales, a razón de uno por cada subregión a saber: Atrato, San Juan, Costa Pacífica-Baudó y Urabá Chocoano;

e. Un representante de las comunidades negras, escogido por ellas mismas;

f. Un representante de las comunidades indígenas, escogido por ellas mismas;

g. Un representante de la Asociación Departamental de usuarios campesinos;

h. Un representante de las organizaciones ambientalistas no gubernamentales;

i. El director del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos «Alexander von Humboldt»;

j. El director del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "John von Neumann";

k. el Rector de la Universidad del Chocó "Diego Luis Córdoba". La representación en el consejo directivo es indelegable y sus reuniones se celebrarán en el territorio de su jurisdicción.

Los miembros del consejo directivo de que tratan los literales d y h, serán elegidos por la Asamblea Corporativa por el sistema de mayoría simple de listas que presenten las respectivas entidades u organizaciones.

El Gobierno garantizará los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones especiales descritas en el presente artículo con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Regalías destinados a la preservación ambiental.

Las licencias ambientales para explotaciones mineras y de construcción de infraestructura vial y los permisos y concesiones de aprovechamiento forestal, serán otorgados por el Director Ejecutivo de la Corporación con el conocimiento previo del consejo directivo y la aprobación del Ministro del Medio ambiente.

ARTICULO 40. De la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, CORPOURABA. Transfórmase la actual Corporación Autónoma Regional del Urabá, CORPOURABA, en la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, CORPOURABA, la cual se organizará como una Corporación Autónoma Regional que además de sus funciones administrativas en relación con los recursos naturales y el medio ambiente de la región del Urabá, ejercerá actividades de planeación global, promoción de la investigación científica y transferencia de tecnología, sujeta al régimen especial previsto en esta Ley y en sus estatutos, encargada principalmente de promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos bióticos y abióticos de la región del Urabá, dirigir el proceso de planificación regional de uso del suelo para mitigar o desactivar presiones de explotación inadecuada del territorio, fomentar la integración de las comunidades tradicionales que habitan la región y de sus métodos ancestrales de aprovechamiento de la naturaleza al proceso de conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos y de propiciar, con la cooperación de entidades nacionales e internacionales, la generación de tecnologías apropiadas para la utilización y conservación de los recursos y el entorno de la cuenca del bajo Atrato, en los límites de su jurisdicción.

La jurisdicción de CORPOURABA comprende el territorio de los municipios de San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Arboletes, Necoclí, Turbo, Vigía el Fuerte, Murindó, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Uramita, Dabeiba, Frontino, Peque, Cañasgordas, Abriaquí, Giraldo, y Urrao en el Departamento de Antioquia. Tendrá su sede principal en el Municipio de Apartadó, pero podrá establecer las subsedes que considere necesarias.

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, CORPOURABA, ejercerá las funciones especiales que le asigne el Ministerio del Medio Ambiente y las que dispongan sus estatutos y se abstendrá de cumplir aquellas que el Ministerio se reserve para sí, aunque estén atribuidas de manera general a las Corporaciones Autónomas Regionales.

La Nación tendrá en la Asamblea Corporativa una representación no inferior al 35% de los votos y estará representada en ella por el Ministro del Medio Ambiente, o su delegado.

El Consejo Directivo estará integrado por:

a. El Ministro del Medio Ambiente, quien lo presidirá, o su delegado;

b. El Ministro de Agricultura o su delegado;

c. El Gobernador del Departamento de Antioquia;

d. Un representantes de las comunidades indígenas tradicionales de la región, escogido por ellos mismos;

e. Un representante de las comunidades negras tradicionales que habitan la región, escogido por ellos mismos;

f. Dos representantes de los gremios agropecuarios de la región;

g. Un representante del Presidente de la República;

h. Dos representantes de los alcaldes de los municipios;

i. Un representante de las organizaciones no gubernamentales comprendidas dentro del territorio de la jurisdicción.

Los miembros del Consejo Directivo de que tratan los literales f, h e i, serán elegidos por la Asamblea Corporativa por el sistema de mayoría simple de listas que presenten las respectivas entidades u organizaciones.

ARTICULO 41. De la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge. CORPOMOJANA. Créase la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge -CORPOMOJANA, como una Corporación Autónoma Regional que además de sus funciones administrativas en relación con los recursos naturales y el medio ambiente en la zona de la Mojana y del Río San Jorge. ejercerá actividades de promoción de la investigación científica y transferencia de tecnología, sujeta al régimen especial previsto en esta Ley y en sus estatutos, encargada principalmente de promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, del ecosistema de las cuencas hidrográficas del Río Magdalena, Río Cauca y Río San Jorge en esta región, dirigir el proceso de planificación regional de uso del suelo para mitigar y desactivar presiones de explotación inadecuada del territorio y propiciar, con la cooperación de entidades nacionales e internacionales, la generación de

tecnologías apropiadas para la utilización y conservación de los recursos de la Mojana y el San jorge.

La jurisdicción de CORPOMOJANA comprenderá el territorio de los municipios de Majagual, Sucre, Guaranda, San Marcos, San Benito, La Unión y Caimito del Departamento de Sucre. Tendrá su sede en el municipio de San Marcos.

El Consejo Directivo estará integrado por:

a. El Ministro del Medio Ambiente o su delegado, quien lo presidirá,

b. El Gobernador de Sucre o su delegado

c. Dos alcaldes municipales

d. El Director del Instituto de Hidrología Meteorología e Investigaciones Ambientales, IDEAM o su delegado

e. Un representante de las organizaciones campesinas

h. Un representante de las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto sea la conservación y el manejo de los recursos naturales

i. Un representante de los gremios de la producción agropecuaria y pesquera debidamente constituidos en la zona.

TITULO VII

DE LAS RENTAS DE LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES

ARTICULO 42. Tasas Retributivas y Compensatorias. La utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas.

También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda así subrogado el artículo 18 del Decreto número 2811 de 1974.

Para la definición de los costos y beneficios de que trata el inciso 2° del artículo 338 de la Constitución Nacional, sobre cuya base hayan de calcularse las tasas retributivas y compensatorias a las que se refiere el presente artículo, creadas

de conformidad con lo dispuesto por el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974, se aplicará el sistema establecido por el conjunto de las siguientes reglas:

a) La tasa incluirá el valor de depreciación del recurso afectado;

b) El Ministerio del Medio Ambiente teniendo en cuenta los costos sociales y ambientales del daño, y los costos de recuperación del recurso afectado, definirá anualmente las bases sobre las cuales se hará el cálculo de la depreciación;

c) El cálculo de la depreciación incluirá la evaluación económica de los daños sociales y ambientales causados por la respectiva actividad. Se entiende por daños sociales, entre otros, los ocasionados a la salud humana, el paisaje, la tranquilidad pública, los bienes públicos y privados y demás bienes con valor económico directamente afectados por la actividad contaminante. Se entiende por daño ambiental el que afecte el normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y componentes;

d) El cálculo de costos así obtenido, será la base para la definición del monto tarifario de las tasas.

Con base en el conjunto de reglas establecidas en el sistema de que trata el inciso anterior, el Ministerio del Medio Ambiente aplicará el siguiente método en la definición de los costos sobre cuya base hará la fijación del monto tarifario de las tasas retributivas y compensatorias:

a) A cada uno de los factores que incidan en la determinación de una tasa, se le definirán las variables cuantitativas que permitan la medición del daño;

b) Cada factor y sus variables deberá tener un coeficiente que permita ponderar su peso en el conjunto de los factores y variables considerados;

c) Los coeficientes se calcularán teniendo en cuenta la diversidad de las regiones, la disponibilidad de los recursos, su capacidad de asimilación, los agentes contaminantes involucrados, las condiciones socioeconómicas de la población afectada y el costo de oportunidad del recurso de que se trate;

d) Los factores, variables y coeficientes así determinados serán integrados en fórmulas matemáticas que permitan el cálculo y determinación de las tasas correspondientes.

PARAGRAFO. Las tasas retributivas y compensatorias solamente se aplicarán a la contaminación causada dentro de los límites que permite la ley, sin perjuicio de las sanciones aplicables a actividades que excedan dichos límites.

ARTICULO 43. Tasas por Utilización de Aguas. La utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos por el artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El Gobierno Nacional calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas.

El sistema y método establecidos por el artículo precedente para la definición de los costos sobre cuya base se calcularán y fijarán las tasas retributivas y compensatorias, se aplicarán al procedimiento de fijación de la tasa de que trata el presente artículo.

PARAGRAFO. Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, recreación, riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria, deberá destinar no menos de un 1% del total de la inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. El propietario del proyecto deberá invertir este 1% en las obras y acciones de recuperación, preservación y conservación de la cuenca que se determinen en la licencia ambiental del proyecto.

ARTICULO 44. Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble. Establécese, en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2° del artículo 317 de la Constitución Nacional, y con destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9% . El porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo Concejo a iniciativa del alcalde municipal.

Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso anterior por establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial.

Los municipios y distritos podrán conservar las sobretasas actualmente vigentes, siempre y cuando éstas no excedan el 25.9% de los recaudos por concepto de impuesto predial.

Dichos recursos se ejecutarán conforme a los planes ambientales regionales y municipales, de conformidad con las reglas establecidas por la presente ley.

Los recursos que transferirán los municipios y distritos a las Corporaciones Autónomas Regionales por concepto de dichos porcentajes ambientales y en los términos de que trata el numeral 1° del artículo 46, deberán ser pagados a éstas por trimestres, a medida que la entidad territorial efectúe el recaudo y, excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de marzo de cada año subsiguiente al período de recaudación.

Las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los recursos de que trata el presente artículo a la ejecución de programas y proyectos de protección o restauración del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. Para la ejecución de las inversiones que afecten estos recursos se seguirán las reglas especiales sobre planificación ambiental que la presente ley establece.

PARAGRAFO 1. Los municipios y distritos que adeudaren a las Corporaciones Autónomas Regionales de su jurisdicción, participaciones destinadas a protección ambiental con cargo al impuesto predial, que se hayan causado entre el 4 de julio de 1991 y la vigencia de la presente Ley, deberán liquidarlas y pagarlas en un término de 6 meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley, según el monto de la sobretasa existente en el respectivo municipio o distrito al 4 de julio de 1991.

PARAGRAFO 2. El 50% del producto correspondiente al recaudo del porcentaje o de la sobretasa del impuesto predial y de otros gravámenes sobre la propiedad inmueble, se destinará a la gestión ambiental dentro del perímetro urbano del municipio, distrito, o área metropolitana donde haya sido recaudado el impuesto, cuando la población municipal, distrital o metropolitana, dentro del área urbana, fuere superior a 1'000.000 habitantes. Estos recursos se destinarán exclusivamente a inversión.

ARTICULO 45. Transferencia del Sector Eléctrico. Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 6% de las ventas brutas de energía por generación propia, de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación Energética, de la manera siguiente:

1. El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en el área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y el embalse, que será destinado a la protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto.

2. El 3% para los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica, distribuidos de la siguiente manera:

a) El 1.5% para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que surte el embalse, distintos a los que trata el literal siguiente.

b) El 1.5% para los municipios y distritos donde se encuentra el embalse.

Cuando los municipios sean a la vez cuenca y embalse, participarán proporcionalmente en las transferencias de que hablan los literales a y b del numeral segundo del presente artículo.

Estos recursos sólo podrán ser utilizados por los municipios en obras previstas en el plan de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental.

3. En el caso de centrales térmicas la transferencia de que trata el presente artículo será del 4% que se distribuirá así:

a) 2.5% para la Corporación Autónoma Regional para la protección del medio ambiente del área donde está ubicada la planta.

b) 1.5% para el municipio donde está situada la planta generadora.

Estos recursos sólo podrán ser utilizados por el municipio en obras previstas en el plan de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental.

PARAGRAFO 1. De los recursos de que habla este artículo sólo se podrá destinar hasta el 10% para gastos de funcionamiento.

PARAGRAFO 2. Se entiende por saneamiento básico y mejoramiento ambiental la ejecución de obras de acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos de aguas y manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos.

PARAGRAFO 3. En la transferencia a que hace relación este artículo, está comprendido el pago, por parte del sector hidroenergético, de la tasa por utilización de aguas de que habla el artículo 43.

ARTICULO 46. Patrimonio y Rentas de las Corporaciones Autónomas Regionales. Constituyen el patrimonio y rentas de las Corporaciones Autónomas Regionales:

1) El producto de las sumas que, por concepto de porcentaje ambiental del impuesto predial, les transferirán los municipios y distritos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la presente Ley.

2) Los recursos que le transfieran las entidades territoriales con cargo a sus participaciones en las regalías nacionales.

3) El porcentaje de los recursos que asigne la ley, con destino al medio ambiente y a la protección de los recursos naturales renovables, provenientes del Fondo Nacional de Regalías.

4) Los recursos provenientes de derechos, contribuciones, tasas, tarifas, multas y participaciones, que perciban, conforme a la ley y las reglamentaciones correspondientes; y en especial el producto de las tasas retributivas y compensatorias de que trata el Decreto ley 2811 de 1974, en concordancia con lo dispuesto en la presente Ley;

5) Los ingresos causados por las contribuciones de valorización que se establezcan, conforme a la ley, para la financiación de obras de beneficio común ejecutadas en ejercicio de sus funciones legales.

6) Un porcentaje hasta del 10% del producto del impuesto de timbre a los vehículos que autónomamente decidan fijar los Departamentos, como retribución del servicio de reducción del impacto o de control de las emisiones de sustancias tóxicas o contaminantes del parque automotor.

7) El 50% de las indemnizaciones, distintas a la recompensa que beneficiará en su totalidad al actor, impuestas en desarrollo de los procesos instaurados en ejercicio de las acciones populares de que trata el artículo 88 de la Constitución Política. Estos valores corresponderán a la Corporación que tenga jurisdicción en el lugar donde se haya producido el daño ambiental respectivo. En caso de que corresponda a varias Corporaciones, el juez competente determinará la distribución de las indemnizaciones.

8) El 50% del valor de las multas o penas pecuniarias impuestas, por las autoridades de las entidades territoriales que forman parte de la jurisdicción de la respectiva Corporación, como sanciones por violación a las leyes, reglamentos o actos administrativos de carácter general en materia ambiental.

9) Los recursos que se apropien para serles transferidos en el presupuesto nacional.

10) Las sumas de dinero y los bienes y especies que a cualquier título le transfieran las entidades o personas públicas o privadas, los bienes muebles e inmuebles que actualmente posean y los que adquieran y les sean transferidos en el futuro a cualquier título.

11) Los derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y salvoconductos, de acuerdo a la escala tarifaria que para el efecto expida el Ministerio del Medio Ambiente.

PARAGRAFO. Los recursos y rentas previstos en este artículo ingresarán al Fondo Nacional Ambiental en aquellas regiones del país donde no se hayan organizado corporaciones autónomas regionales, hasta el momento en que éstas se creen. Estas rentas deberán asignarse a programas y proyectos que se ejecuten en las regiones respectivas.

ARTICULO 47. Carácter Social del Gasto Público Ambiental. Los recursos que por medio de esta Ley se destinan a la preservación y saneamiento ambiental se consideran gasto público social.

ARTICULO 48. Del Control Fiscal de las Corporaciones Autónomas Regionales. La Auditoría de las Corporaciones Autónomas Regionales creadas mediante la presente Ley, estará a cargo de la Contraloría General de la República, por lo cual se autoriza al Contralor General de la República para que, conforme a la Ley 42 de 1992, realice los ajustes estructurales necesarios en la estructura administrativa de dicha institución.

TITULO VIII

DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES

ARTICULO 49. De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una Licencia Ambiental.

ARTICULO 50. De La Licencia Ambiental. Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.

ARTICULO 51. Competencia. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley.

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva.

ARTICULO 52. Competencia del Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio del Medio Ambiente otorgará de manera privativa la Licencia Ambiental en los siguientes casos:

1. Ejecución de obras y actividades de exploración, explotación, transporte, conducción y depósito de hidrocarburos y construcción de refinerías.

2. Ejecución de proyectos de gran minería.

3. Construcción de presas, represas o embalses con capacidad superior a doscientos millones de metros cúbicos, y construcción de centrales generadoras de energía eléctrica que excedan de 100.000 Kw de capacidad instalada así como el tendido de las líneas de transmisión del sistema nacional de interconexión eléctrica y proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa virtualmente contaminantes.

4. Construcción o ampliación de puertos marítimos de gran calado.

5. Construcción de aeropuertos internacionales.

6. Ejecución de obras públicas de las redes vial, fluvial y ferroviaria nacionales.

7. Construcción de distritos de riego para más de 20.000 hectáreas.

8. Producción e importación de pesticidas, y de aquellas sustancias, materiales o productos sujetos a controles por virtud de tratados, convenios y protocolos internacionales.

9. Proyectos que afecten el Sistema de Parques Nacionales Naturales.

10. Proyectos que adelanten las Corporaciones Autónomas Regionales a que hace referencia el numeral 19 del artículo 31 de la presente Ley.

11. Transvase de una cuenca a otra de corrientes de agua que excedan de 2 mt3/segundo durante los períodos de mínimo caudal.

12. Introducción al país de parentales para la reproducción de especies foráneas de fauna y flora silvestre que puedan afectar la estabilidad de los ecosistemas o de la vida salvaje.

13. Generación de energía nuclear.

PARAGRAFO 1. La facultad de otorgar licencias ambientales para la construcción de puertos se hará sin perjuicio de la competencia legal de la Superintendencia General de Puertos de otorgar concesiones portuarias. No obstante la licencia ambiental es prerrequisito para el otorgamiento de concesiones portuarias.

PARAGRAFO 2. El Ministerio del Medio Ambiente otorgará una Licencia Ambiental Global para la explotación de campos petroleros y de gas, sin perjuicio de la potestad de la autoridad ambiental para adicionar o establecer condiciones ambientales específicas requeridas en cada caso, dentro del campo de producción autorizado.

ARTICULO 53. De la Facultad de las Corporaciones Autónomas Regionales para Otorgar Licencias Ambientales. El Gobierno Nacional por medio de reglamento establecerá los casos en que las Corporaciones Autónomas Regionales otorgarán Licencias Ambientales y aquellos en que se requiera Estudio de Impacto Ambiental y Diagnóstico Ambiental de Alternativas.

ARTICULO 54. Delegación. Las Corporaciones Autónomas Regionales podrán delegar en las entidades territoriales el otorgamiento de licencias, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda expedir, salvo para la realización de obras o el desarrollo de actividades por parte de la misma entidad territorial.

ARTICULO 55. De las Competencias de las Grandes Ciudades. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a 1.000.000 habitantes serán competentes, dentro de su perímetro urbano, para el otorgamiento de licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones cuya expedición no esté atribuida al Ministerio del Medio Ambiente.

ARTICULO 56. Del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. En los proyectos que requieran Licencia Ambiental, el interesado deberá solicitar en la etapa de factibilidad a la autoridad ambiental competente, que ésta se pronuncie sobre la necesidad de presentar o no un Diagnóstico Ambiental de Alternativas. Con base en la información suministrada, la autoridad ambiental decidirá sobre la necesidad o no del mismo y definirá sus términos de referencia en un plazo no mayor de 30 días hábiles.

El Diagnóstico Ambiental de Alternativas incluirá información sobre la localización y características del entorno geográfico, ambiental y social de las alternativas del proyecto, además de un análisis comparativo de los efectos y

riesgos inherentes a la obra o actividad, y de las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada una de las alternativas.

Con base en el Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado, la autoridad elegirá, en un plazo no mayor de 60 días, la alternativa o las alternativas sobre las cuales deberá elaborarse el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental antes de otorgarse la respectiva licencia.

ARTICULO 57. Del Estudio de Impacto Ambiental. Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental el conjunto de la información que deberá presentar ante la autoridad ambiental competente el peticionario de una Licencia Ambiental.

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto, y los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y la evaluación de los impactos que puedan producirse. Además, incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad.

La autoridad ambiental competente para otorgar la Licencia Ambiental fijará los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental en un término que no podrá exceder de 60 días hábiles contados a partir de la solicitud por parte del interesado.

ARTICULO 58. Del Procedimiento para Otorgamiento de Licencias Ambientales. El interesado en el otorgamiento de una Licencia Ambiental presentará ante la autoridad ambiental competente la solicitud acompañada del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente para su evaluación. La autoridad competente dispondrá de 30 días hábiles para solicitar al interesado información adicional en caso de requerirse. Allegada la información requerida, la autoridad ambiental dispondrá de 15 días hábiles adicionales para solicitar a otras entidades o autoridades los conceptos técnicos o informaciones pertinentes, que deberán serle remitidos en un plazo no mayor de 60 días hábiles. Recibida la información o vencido el término del requerimiento de informaciones adicionales, la autoridad ambiental decidirá mediante resolución motivada sobre la viabilidad ambiental del proyecto o actividad y otorgará o negará la respectiva licencia ambiental en un término que no podrá exceder de 60 días hábiles.

PARAGRAFO. El Ministerio del Medio Ambiente dispondrá hasta de 120 días hábiles para otorgar la Licencia Ambiental Global y las demás de su competencia, contados a partir del acto administrativo de trámite que reconozca que ha sido reunida toda la información requerida, según el procedimiento previsto en este artículo.

ARTICULO 59. De la Licencia Ambiental Unica. A solicitud del peticionario, la autoridad ambiental competente incluirá en la Licencia Ambiental, los permisos, concesiones y autorizaciones necesarias para adelantar la obra o actividad.

En los casos en que el Ministerio del Medio Ambiente sea competente para otorgar la Licencia Ambiental, los permisos, concesiones y autorizaciones relacionados con la obra o actividad para cuya ejecución se pide la licencia, serán otorgados por el Ministerio del Medio Ambiente, teniendo en cuenta la información técnica suministrada por las Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades territoriales correspondientes y demás entidades del Sistema Nacional del Ambiente.

ARTICULO 60. En la explotación minera a cielo abierto se exigirá, la restauración o la sustitución morfológica y ambiental de todo el suelo intervenido con la explotación, por cuenta del concesionario o beneficiario del título minero, quien la garantizará con una póliza de cumplimiento o con garantía bancaria. El Gobierno reglamentará el procedimiento para extender la póliza de cumplimiento o la garantía bancaria.

ARTICULO 61. Declárase la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal.

El Ministerio del Medio Ambiente determinará las zonas en las cuales exista compatibilidad con las explotaciones mineras, con base en esta determinación, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), otorgará o negará las correspondientes licencias ambientales.

Los municipios y el Distrito Capital, expedirán la reglamentación de los usos del suelo, teniendo en cuenta las disposiciones de que trata este artículo y las que a nivel nacional expida el Ministerio del Medio Ambiente.

ARTICULO 62. De la Revocatoria y Suspensión de las Licencias Ambientales. La autoridad ambiental, salvo los casos de emergencia, podrá mediante resolución motivada, sustentada en concepto técnico, revocar o suspender la Licencia Ambiental, los permisos, autorizaciones o concesiones para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente, cuandoquiera que las condiciones y exigencias por ella establecidas no se estén cumpliendo conforme a los términos definidos en el acto de su expedición.

La revocatoria o suspensión de una Licencia Ambiental no requerirá consentimiento expreso o escrito del beneficiario de la misma.

La suspensión de obras por razones ambientales, en los casos en que lo autoriza la ley, deberá ser motivada y se ordenará cuando no exista licencia o cuando, previa verificación del incumplimiento, no se cumplan los requisitos exigidos en la Licencia Ambiental correspondiente.

Quedan subrogados los artículos 18,27,28 y 29 del Decreto legislativo 2811 de 1974.

TITULO IX

DE LAS FUNCIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y DE LA PLANIFICACION AMBIENTAL

ARTICULO 63. Principios Normativos Generales. A fin de asegurar el interés colectivo de un medio ambiente sano y adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte de las entidades territoriales, se sujetará a los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario definidos en el presente artículo.

Principio de Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a las que la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del patrimonio natural de la nación.

Principio de Gradación Normativa. En materia normativa las reglas que dicten las entidades territoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables respetarán el carácter superior y la preeminencia jerárquica de las normas dictadas por autoridades y entes de superior jerarquía o de mayor ámbito en la comprensión territorial de sus competencias. Las funciones en materia ambiental y de recursos naturales renovables, atribuidas por la Constitución Política a los Departamentos, Municipios y Distritos con régimen constitucional especial, se ejercerán con sujeción a la ley, los reglamentos y las políticas del Gobierno Nacional, el Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales.

Principio de Rigor Subsidiario. Las normas y medidas de policía ambiental, es decir, aquellas que las autoridades medioambientales expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables, o para la preservación del medio ambiente natural, bien

sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas para la preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o municipal, en la medida en que se desciende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las circunstancias locales especiales así lo ameriten, en concordancia con el artículo 51 de la presente Ley.

Los Actos Administrativos así expedidos deberán ser motivados, serán por su naturaleza apelables ante la autoridad superior, dentro del Sistema Nacional Ambiental (SINA), y tendrán una vigencia transitoria no superior a 60 días mientras el Ministerio del Medio Ambiente decide sobre la conveniencia de prorrogar su vigencia o de darle a la medida carácter permanente.

Los Actos Administrativos expedidos por las Corporaciones Autónomas Regionales que otorguen o nieguen licencias ambientales, serán apelables ante el Ministerio del Medio Ambiente, en los términos y condiciones establecidos por el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO 64. Funciones de los Departamentos. Corresponde a los Departamentos en materia ambiental, además de las funciones que le sean delegadas por la ley o de las que se le deleguen a los Gobernadores por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales:

1) Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

2) Expedir, con sujeción a las normas superiores, las disposiciones departamentales especiales relacionadas con el medio ambiente.

3) Dar apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo a las Corporaciones Autónomas Regionales, a los municipios y a las demás entidades territoriales que se creen en el ámbito departamental, en la ejecución de programas y proyectos y en las tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

4) Ejercer, en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y

de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho a un ambiente sano.

5) Desarrollar, con la asesoría o la participación de las Corporaciones Autónomas Regionales, programas de cooperación e integración con los entes territoriales equivalentes y limítrofes del país vecino, dirigidos a fomentar la preservación del medio ambiente común y los recursos naturales renovables binacionales.

6) Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua. para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas hidrográficas.

7) Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables.

ARTICULO 65. Funciones de los Municipios, de los Distritos y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones que les sean delegadas por la ley o de las que se deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales:

1) Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los planes programas y proyectos ambientales municipales articulados a los planes, programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales.

2) Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio.

3) Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a nivel regional, conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la presente Ley.

4) Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel departamental.

5) Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales, en la elaboración de los planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarios para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

6) Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.

7) Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo.

8) Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones superiores, las normas de ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones sobre usos del suelo.

9) Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos del municipio, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire.

10) Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y micro-cuencas hidrográficas.

PARAGRAFO. Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria a Pequeños Productores, Umatas, prestarán el servicio de asistencia técnica y harán transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales renovables.

ARTICULO 66. Competencias de Grandes Centros Urbanos. Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.

Los municipios, distritos o áreas metropolitanas de que trata el presente artículo asumirán ante las Corporaciones Autónomas Regionales la obligación de trasferir el 50% del recaudo de las tasas retributivas o compensatorias causadas dentro del perímetro urbano y de servicios, por el vertimiento de efluentes contaminantes conducidos por la red de servicios públicos y arrojados fuera de dicho perímetro, según el grado de materias contaminantes no eliminadas con que se haga el vertimiento.

ARTICULO 67. De las Funciones de los Territorios Indígenas. Los Territorios Indígenas tendrán las mismas funciones y deberes definidos para los municipios en materia ambiental.

ARTICULO 68. De la Planificación Ambiental de las Entidades Territoriales. Para garantizar la planificación integral por parte del Estado, del manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Nacional, los planes ambientales de las entidades territoriales estarán sujetos a las reglas de armonización de que trata el presente artículo.

Los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, elaborarán sus planes, programas y proyectos de desarrollo, en lo relacionado con el medio ambiente, los recursos naturales renovables, con la asesoría y bajo la coordinación de las Corporaciones Autónomas Regionales a cuya jurisdicción pertenezcan, las cuales se encargarán de armonizarlos.

TITULO X

DE LOS MODOS Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

ARTICULO 69. Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales. Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin

necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.

ARTICULO 70. Del Trámite de las Peticiones de Intervención. La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria.

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite.

ARTICULO 71. De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y se le dará también la publicidad en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo anterior.

ARTICULO 72. De las Audiencias Públicas Administrativas sobre Decisiones Ambientales en Trámite. El Procurador General de la Nación o el Delegado para Asuntos Ambientales, el Defensor del Pueblo, el Ministro del Medio Ambiente, las demás autoridades ambientales, los gobernadores, los alcaldes o por lo menos cien (l00) personas o tres (3) entidades sin ánimo de lucro, cuando se desarrolle o pretenda desarrollarse una obra o actividad que pueda causar impacto al medio ambiente o a los recursos naturales renovables, y para la cual se exija permiso o licencia ambiental conforme a la ley o a los reglamentos, podrán solicitar la realización de una audiencia pública que se celebrará ante la autoridad competente para el otorgamiento del permiso o la licencia ambiental respectiva.

La audiencia de que trata el presente artículo se celebrará con anticipación al acto que le ponga término a la actuación administrativa, bien sea para la expedición, la modificación o la cancelación de un permiso o licencia ambiental.

La audiencia pública será convocada por la autoridad administrativa ante la cual se solicita, mediante edicto, con una anticipación de por lo menos 30 días a la toma de la decisión a debatir. El edicto comunicará la fecha, lugar y hora de celebración y el objeto de la audiencia. Será presidida por el jefe de la entidad competente o su delegado. El edicto permanecerá fijado en secretaría por 10 días, dentro de los cuales deberá ser publicado en un diario de circulación nacional y en el Boletín de la respectiva entidad.

En la audiencia pública podrán intervenir un representante de los peticionarios, los interesados, las autoridades competentes, expertos y organizaciones sin ánimo de lucro que hayan registrado con anterioridad escritos pertinentes al debate, y de la misma se levantará un acta. En la audiencia podrán recibirse las informaciones y pruebas que se consideren conducentes. La decisión administrativa deberá ser motivada, teniendo en cuenta las intervenciones y pruebas recogidas durante la audiencia.

La celebración de la audiencia suspende los términos del procedimiento administrativo para el otorgamiento de licencias o permisos y se hace sin perjuicio de las facultades atribuidas a la autoridad competente para expedir el acto administrativo correspondiente.

También podrá celebrarse una audiencia pública, durante la ejecución de una obra que haya requerido permiso o licencia ambiental, cuando fuere manifiesta la violación de los requisitos exigidos para su otorgamiento o de las normas ambientales.

ARTICULO 73. De la conducencia de la Acción de Nulidad. La acción de nulidad procede contra los actos administrativos mediante los cuales se expide, modifica o cancela un permiso, autorización, concesión o Licencia Ambiental de una actividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente.

ARTICULO 74. Del Derecho de Petición de Informaciones. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a formular directamente petición de información en relación con los elementos susceptibles de producir contaminación y los peligros que el uso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud humana de conformidad con el artículo 16 de la Ley 23 de 1973. Dicha petición debe ser respondida en 10 días hábiles. Además, toda persona podrá invocar su derecho a ser informada sobre el monto y utilización de los recursos financieros, que están destinados a la preservación del medio ambiente.

ARTICULO 75. De la Intervención del Ministro del Medio Ambiente en los Procedimientos Judiciales por Acciones Populares. Las acciones populares de que trata el artículo 8° de la Ley 9ª. de 1989 y el artículo 118 del Decreto 2303 de 1989 deberán ser notificadas al Ministro del Medio Ambiente. Este o su apoderado emitirán concepto sobre cualquier proyecto de transacción sometido

por las partes procesales para su aprobación al Juez competente, en audiencia pública que se celebrará previamente a esta decisión.

Recibido el proyecto en el Despacho el Juez ordenará la celebración de audiencia pública dentro de los 30 días siguientes mediante edicto que se fijará en la secretaría por 10 días, durante los cuales se publicará en un periódico de circulación nacional. El edicto contendrá un extracto de las cláusulas referentes a las pretensiones de la demanda relacionadas con la protección del medio ambiente.

En la audiencia podrán intervenir las partes, el Ministerio del Medio Ambiente, la entidad responsable del recurso, las personas naturales o jurídicas que hayan registrado comentarios escritos sobre el proyecto, y en ella el juez podrá decretar y recibir pruebas. La aprobación o rechazo del proyecto de transacción se proferirá al término de la audiencia.

El Juez conservará competencia para verificar el cumplimiento de las transacciones y podrá en cualquier momento darle curso a las acciones populares originadas en el incumplimiento de la transacción. Salvo lo dispuesto en este artículo, en el trámite de acciones populares se observará el procedimiento señalado en el Decreto 2651 de 1991, el cual se adopta como norma legal permanente. Los Jueces Municipales serán competentes en primera instancia si los procesos son de mínima cuantía y los Jueces del Circuito lo serán si son de mayor cuantía.

ARTICULO 76. De las Comunidades Indígenas y Negras. La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Nacional, y las decisiones sobre la materia se tomarán, previa consulta a los representantes de tales comunidades.

TITULO XI

DE LA ACCION DE CUMPLIMIENTO EN ASUNTOS AMBIENTALES

ARTICULO 77. Del Procedimiento de la Acción de Cumplimiento. El efectivo cumplimiento de las leyes o actos administrativos que tengan relación directa con la protección y defensa del medio ambiente podrá ser demandado por cualquier persona natural o jurídica, a través del procedimiento de ejecución singular regulado en el Código de Procedimiento Civil.

ARTICULO 78. Competencia. Si el cumplimiento proviniere de una autoridad del orden nacional, será competente para conocer del proceso de ejecución, en

primera instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca; en los demás casos, el Tribunal Administrativo correspondiente a la jurisdicción de la autoridad demandada.

ARTICULO 79. Requerimiento. Para librar el mandamiento de Ejecución, el Juez del conocimiento requerirá al jefe o director de la entidad demandada para que por escrito manifieste la forma como se está cumpliendo con las leyes y actos administrativos invocados.

ARTICULO 80. Mandamiento de Ejecución. Pasados ocho días hábiles, sin que se obtenga respuesta del funcionario se procederá a decretar la ejecución. En el mandamiento de ejecución se condenará en costas al funcionario renuente y a la entidad que pertenezca, quienes serán solidariamente responsables de su pago.

ARTICULO 81. Desistibilidad. En ningún caso podrá el actor desistir de sus pretensiones.

ARTICULO 82. Imprescriptibilidad. La ejecución del cumplimiento es imprescriptible.

TITULO XII

DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE POLICIA

ARTICULO 83. Atribuciones de Policía. El Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, además de los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables según el caso.

ARTICULO 84. Sanciones y Denuncias. Cuando ocurriere violación de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo de recursos naturales renovables, el Ministerio del Medio Ambiente o las Corporaciones Autónomas Regionales impondrán las sanciones que se prevén en el artículo siguiente, según el tipo de infracción y la gravedad de la misma. Si fuere el caso, denunciarán el hecho ante las autoridades competentes para que se inicie la investigación penal respectiva.

ARTICULO 85. Tipos de Sanciones. El Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales impondrán al infractor de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos

naturales renovables, mediante resolución motivada y según la gravedad de la infracción, los siguientes tipos de sanciones y medidas preventivas:

1) Sanciones:

a) Multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios mínimos mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución;

b) Suspensión del registro o de la licencia, la concesión, permiso o autorización;

c) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo y revocatoria o caducidad del permiso o concesión;

d) Demolición de obra, a costa del infractor, cuando habiéndose adelantado sin permiso o licencia, y no habiendo sido suspendida, cause daño evidente al medio ambiente o a los recursos naturales renovables;

e) Decomiso definitivo de individuos o especímenes de fauna o flora o de productos o implementos utilizados para cometer la infracción.

2) Medidas preventivas:

a) Amonestación verbal o escrita;

b) Decomiso preventivo de individuos o especímenes de fauna o flora o de productos e implementos utilizados para cometer la infracción;

c) Suspensión de obra o actividad, cuando de su prosecución pueda derivarse daño o peligro para los recursos naturales renovables o la salud humana, o cuando la obra o actividad se haya iniciado sin el respectivo permiso, concesión, licencia o autorización;

d) Realización dentro de un término perentorio, los estudios y evaluaciones requeridas para establecer la naturaleza y características de los daños, efectos e impactos causados por la infracción, así como las medidas necesarias para mitigarlas o compensarlas.

PARAGRAFO 1. El pago de las multas no exime al infractor de la ejecución de las obras o medidas que hayan sido ordenadas por la entidad responsable del control, ni de la obligación de restaurar el medio ambiente y los recursos naturales renovables afectados;

PARAGRAFO 2. Las sanciones establecidas por el presente artículo se aplicarán sin perjuicio del ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar;

PARAGRAFO 3. Para la imposición de las medidas y sanciones a que se refiere este artículo se estará al procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984 o al estatuto que lo modifique o sustituya;

PARAGRAFO 4. En el caso del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las sanciones contempladas en los artículos 28, 29 y 35 de la Ley 47 de 1993, se aplicarán, sin perjuicio de las previstas en este artículo.

ARTICULO 86. Del Mérito Ejecutivo. Las resoluciones que impongan multas y sanciones pecuniarias expedidas por las corporaciones, a que hacen referencia estas disposiciones, y que cumplan con la ley y disposiciones reglamentarias, prestarán mérito ejecutivo.

TITULO XIII

DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL Y DEL FONDO AMBIENTAL DE LA AMAZONIA

ARTICULO 87. Creación, Naturaleza y Jurisdicción. Créase el Fondo Nacional Ambiental, en adelante FONAM, como un sistema especial de manejo de cuentas del Ministerio del Medio Ambiente, con personería jurídica, patrimonio independiente, sin estructura administrativa ni planta de personal y con jurisdicción en todo el territorio nacional.

ARTICULO 88. Objetivos. El FONAM será un instrumento financiero de apoyo a la ejecución de las políticas ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables. Como tal estimulará la descentralización, la participación del sector privado y el fortalecimiento de la gestión de los entes territoriales, con responsabilidades en estas materias. Para el efecto, podrá financiar o cofinanciar, según el caso, a entidades públicas y privadas en la realización de proyectos, dentro de los lineamientos de la presente Ley y de manera que se asegure la eficiencia y coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental y se eviten duplicidades.

EL FONAM financiará la ejecución de actividades, estudios, investigaciones, planes, programas y proyectos, de utilidad pública e interés social, encaminados al fortalecimiento de la gestión ambiental, a la preservación, conservación, protección, mejoramiento y recuperación del medio ambiente y al manejo adecuado de los recursos naturales renovables y de desarrollo sostenible.

PARAGRAFO. El FONAM tendrá una subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que se asignen a la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales. El Ministro del Medio Ambiente podrá delegar en el Jefe de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales la función de ordenador del gasto de esta subcuenta.

ARTICULO 89. Dirección y Administración del FONAM. Las funciones de dirección y administración del FONAM estarán a cargo del Ministro del Medio Ambiente. quien podrá delegarlas en el Viceministro. El Consejo de Gabinete, hará las veces de organismo decisorio en materia de dirección y administración del Fondo en él se tomarán las decisiones pertinentes, conforme al estatuto reglamentario que al efecto expida el Gobierno Nacional.

Como principal criterio para la financiación de proyectos a nivel regional con recursos del FONAM, el Consejo de Gabinete deberá tener en cuenta el ingreso per cápita de las poblaciones beneficiarias de manera que las zonas mas pobres sean prioritariamente beneficiadas.

El Ministro del Medio Ambiente será el representante legal del FONAM y el ordenador del gasto.

ARTICULO 90. Recursos. El FONAM contará para su operación con los recursos humanos, físicos y técnicos del Ministerio del Medio Ambiente.

Los recursos financieros de que podrá disponer el FONAM para el cumplimiento de sus deberes, tendrán origen en las siguientes fuentes:

1) Las partidas que le sean asignadas en la ley de apropiaciones;

2) Los rendimientos obtenidos por los créditos que otorgue en cumplimiento de sus objetivos, así como la recuperación de los mismos;

3) Los recursos provenientes de los empréstitos externos que celebre, previo el cumplimiento de las disposiciones que regulan esta clase de endeudamiento para las entidades de derecho público;

4) Los rendimientos financieros obtenidos sobre sus excesos transitorios de liquidez;

5) Los recursos provenientes de la administración del Sistema de Parques Nacionales Naturales;

6) Los recursos provenientes del canje de la deuda externa por actividades o proyectos sobre protección, mejoramiento y recuperación del medio ambiente y adecuado manejo de los recursos naturales renovables;

7) El 50% del monto de las indemnizaciones impuestas y recaudadas como consecuencia de las acciones instauradas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución Nacional, por daños ocasionados al medio ambiente y a otros de similar naturaleza que se definan en la ley que regule esta materia;

8) Los recursos que, por donación o a cualquier título, reciba de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

PARAGRAFO 1. Los recursos del crédito externo contratados por la nación con el Banco Interamericano de Desarrollo para la financiación del Fondo Nacional del Ambiente, serán administrados por éste a partir de la vigencia de esta Ley;

PARAGRAFO 2. No más del 20% de los recursos del Fondo Nacional del Ambiente, distintos a los que se hace referencia en el artículo 91, se destinarán a la financiación de proyectos en el área de jurisdicción de las diez (10) Corporaciones Autónomas de mayores ingresos totales en la vigencia anterior;

ARTICULO 91. De los Recursos para el Medio Ambiente del Fondo Nacional de Regalias. Los recursos destinados al medio ambiente por el Fondo Nacional de Regalias, se distribuiran de la siguiente manera: no menos del quince por ciento (15%) deben canalizarce hacia la financiación del saneamiento ambiental en la Amazonia y el Chocó y el desarrollo sustentable de tierras de resguardos indígenas ubicadas en zonas de especia significación ambiental. No menos del veinte por ciento (20%) deben destinarse a la recuperación y conservación de las cuencas hidrográficas en todo el país. No menos de cuatro por ciento (4%) se transferirá a los municipios que tengan jurisdicción en el Macizo Colombiano, para preservación, reconstrucción y protección ambiental de sus recurso naturales renovables.

El sesenta y uno por ciento (61%) restante se asignará a la financiación de proyectos ambientales que adelanten entidades territoriales, con la asesoria obligatoria de las respectivas Corporaciones Autónomas Regionales, y serán distribuidos de la siguiente manera: no menos del 48 % de los recursos entre los municipios de la jurisdicción de las 15 Corporaciones Autónomas Regionales de menores ingresos totales en la vigencia anterior; no menos del 32 % entre los municipios de las Corporaciones Autónomas Regionales con régimen especial.

En ningún caso se podrá destinar para funcionamiento mas del 20% de los recursos de que trata este artículo.

ARTICULO 92. Creación y Naturaleza del Fondo Ambiental de la Amazonia. Créase el Fondo Ambiental de la Amazonia, como mecanismo para la negociación, canalización y distribución de los recursos de la cooperación técnica y financiera internacional destinada a la ejecución de proyectos ambientales en la zona geográfica de la Amazonia por parte de las corporaciones que tienen jurisdicción en esa zona y del Instituto "SINCHI". Este Fondo constituye un sistema especial de manejo de cuentas del Ministerio del Medio Ambiente, con personería jurídica, patrimonio independiente, sin estructura administrativa ni planta de personal.

ARTICULO 93. Objetivos. El Fondo Ambiental de la Amazonia será un instrumento financiero de apoyo a la ejecución de las políticas ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables en la Amazonia Colombiana. Como tal estimulará la descentralización, la participación del sector privado y el fortalecimiento de la gestión de los entes territoriales, con responsabilidades en estas materias. Para el efecto, podrá financiar o cofinanciar, según el caso, a entidades públicas y privadas en la realización de proyectos, dentro de los lineamientos de la presente Ley y de manera que se asegure la eficiencia y coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental y se eviten duplicidades.

El Fondo Ambiental de la Amazonia financiará la ejecución de actividades, estudios, investigaciones, planes, programas y proyectos, de utilidad pública e interés social, encaminados al fortalecimiento de la gestión ambiental, a la preservación, conservación, protección, mejoramiento y recuperación del medio ambiente y al manejo adecuado de los recursos naturales renovables Amazonia Colombiana.

ARTICULO 94. Dirección y Administración del Fondo. Las funciones de dirección y administración del Fondo Ambiental de la Amazonia estarán a cargo del Ministro del Medio Ambiente, quien podrá delegarlas en el Viceministro. El Consejo de Gabinete y los directores de CORPOAMAZONIA, CDA y el Director del Instituto "SINCHI", conformarán un consejo decisorio en materia de dirección y administración del Fondo, en él se tomarán las decisiones pertinentes, conforme al estatuto reglamentario que al efecto expida el Gobierno Nacional.

El Ministro del Medio Ambiente será el representante legal del FAMAZONICO y el ordenador del gasto.

ARTICULO 95. Recursos. Fondo Ambiental de la Amazonia contará para su operación con los recursos humanos, físicos y técnicos del Ministerio del Medio Ambiente.

Los recursos financieros de que podrá disponer el Fondo Ambiental de la Amazonia para el cumplimiento de sus deberes, tendrán origen en las siguientes fuentes:

1) Las partidas que le sean asignadas en la ley de apropiaciones;

2) Los rendimientos obtenidos por los créditos que otorgue en cumplimiento de sus objetivos, así como la recuperación de los mismos;

3) Los recursos provenientes de los empréstitos externos que celebre, previo el cumplimiento de las disposiciones que regulan esta clase de endeudamiento para las entidades de derecho público;

4) Los rendimientos financieros obtenidos sobre sus excesos transitorios de liquidez;

5) Los recursos provenientes del canje de la deuda externa por actividades o proyectos sobre protección, mejoramiento y recuperación del medio ambiente y adecuado manejo de los recursos naturales renovables;

6) Los recursos que, por donación o a cualquier título, reciba de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

ARTICULO 96. Restricción de Destino de los Recursos del Fondo Ambiental de la Amazonia y del FONAM. En ningún caso se podrán destinar los recursos del estos fondos para cubrir los costos que deban asumir los usuarios públicos o privados en la restauración, restitución o reparación de daños ambientales ocasionados por ellos, ni en la ejecución de obras o medidas que deban adelantar tales usuarios por orden de la entidad responsable del control.

PARAGRAFO 1. El Fondo Ambiental de la Amazonia y el FONAM, no podrán financiar gastos de funcionamiento ni servicio de la deuda;

PARAGRAFO 2. Para el cumplimiento de los objetivos de que trata este artículo y con el propósito de lograr complementariedad de esfuerzos y procurar el uso racional y eficiente de los recursos destinados a actividades y proyectos ambientales y de manejo adecuado de recursos naturales renovables y de desarrollo sostenible, el Fondo Ambiental de la Amazonia y el FONAM podrán establecer niveles y mecanismos de coordinación con las diferentes entidades públicas y privadas, que participen en la ejecución de actividades relacionadas con estas materias;

PARAGRAFO 3. El proyecto de Cooperación Técnica Internacional suscrito entre el Gobierno Colombiano y la Comunidad Europea, en enero de 1993,

conocido como Fondo Amazonia, no formará parte del Fondo Ambiental de la Amazonia de que tratan estos artículos.

TITULO XIV

DE LA PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBENTALES

ARTICULO 97. Funciones. Créase, dentro de la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, la cual ejercerá las siguientes funciones:

1) Velar por la defensa del medio ambiente de acuerdo con lo previsto en el artículo 277 de la Constitución Política y demás normas concordantes;

2) Intervenir en las actuaciones administrativas y de policía, en defensa del medio ambiente o de los recursos naturales renovables, y del derecho de la comunidad a un ambiente sano;

3) Velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes, los reglamentos, las decisiones judiciales y demás normas superiores referentes a la defensa del medio ambiente y los recursos naturales renovables;

4) Interponer directamente, o a través del Defensor del Pueblo, las acciones previstas por la Constitución Política y la ley para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

PARAGRAFO. La Procuraduría General de la Nación procederá, en el término de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de esta Ley a reorganizar su estructura interna para incorporar en ella la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales. Para el efecto se destinarán o reubicarán las partidas presupuestales que sean necesarias.

Los concejos distritales o municipales podrán crear personerías delegadas en materia ambiental, en las cuales la Procuraduría General podrá delegar funciones.

TITULO XV

DE LA LIQUIDACION DEL INDERENA Y DE LAS GARANTIAS LABORALES

ARTICULO 98. Liquidación del Inderena. Ordénase la supresión y liquidación del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, INDERENA, creado mediante Decreto-ley 2460 de 1968, dentro del plazo de

dos (2) años contados a partir de la vigencia de la presente Ley. El Gobierno Nacional nombrará un liquidador quien actuará bajo la supervisión del Ministro del Medio Ambiente.

Facúltase al Gobierno Nacional para suprimir la planta de personal y los empleos de dicho Instituto y para trasladar, o indemnizar en caso de retiro, a su personal, conforme a las disposiciones de esta Ley y a la reglamentación que al efecto expida.

PARAGRAFO 1. El INDERENA continuará cumpliendo las funciones que su ley de creación le encomendó en todo el territorio nacional hasta cuando las Corporaciones Autónomas Regionales creadas y/o transformadas puedan asumir plenamente las funciones definidas por la presente Ley.

Este proceso deberá cumplirse dentro de un término máximo de dos (2) años contados a partir de la vigencia de la presente Ley.

Las actividades, estructura y planta de personal de INDERENA se irán reduciendo progresivamente hasta desaparecer en el momento en que finalice la liquidación;

PARAGRAFO 2. A partir de la vigencia de esta Ley, adscríbese el INDERENA al Ministerio del Medio Ambiente, el cual será el responsable de, en un período no mayor a dos años, asegurar la transferencia de las funciones del INDERENA a las entidades que la Ley define como competentes. Las Corporaciones Autónomas Regionales asumirán gradualmente, y durante un período no mayor a tres años todas las funciones que esta Ley les asigna.

ARTICULO 99. Garantías al Personal de INDERENA. El Gobierno Nacional garantizará, en desarrollo del ajuste institucional dispuesto por la presente Ley, el traslado, reubicación o retiro compensado de los empleados y trabajadores que hacen parte de la planta de personal del INDERENA al momento de vigencia de la presente Ley.

Sin perjuicio de la evaluación sobre su capacidad y eficiencia, ni de la discrecionalidad para la designación de funcionarios que no pertenezcan a la carrera administrativa, los actuales empleados y trabajadores del INDERENA serán considerados con prioridad para su vinculación como servidores públicos del Ministerio del Medio Ambiente y demás entidades y organismos del Sistema Nacional Ambiental.

En los concursos que se realicen para la provisión de cargos de carrera administrativa, se reconocerá a los empleados del INDERENA un puntaje básico que reglamentará el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO. Los funcionarios del INDERENA adscritos a la División de Parques Nacionales Naturales serán reubicados en la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, de acuerdo con las necesidades de planta de personal de la Unidad Administrativa del Sistema de Parques Naturales.

ARTICULO 100. Prestaciones y Pensiones. La Nación, a través del Ministerio del Medio Ambiente, asumirá el reconocimiento y pago de todas las prestaciones, pensiones o cuotas partes de ellas, causadas o que se causen a favor de los empleados, trabajadores, o pensionados del INDERENA, para lo cual se le autoriza a tomar las medidas necesarias y hacer los traslados presupuéstales a que hubiese lugar.

Los pensionados del INDERENA conservarán los mismos derechos de que disfrutan a la vigencia de la presente Ley.

TITULO XVI

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 101. Del Cuerpo Especializado de Policía Ambiental y de los Recursos Naturales de la Policía Nacional. La Policía Nacional tendrá un cuerpo especializado de Policía Ambiental y de los Recursos Naturales, encargado de prestar apoyo a las autoridades ambientales, a los entes territoriales y a la comunidad, en la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y en las funciones y acciones de control y vigilancia previstas por la ley. El Gobierno Nacional procederá a tomar las medidas necesarias para la creación del cuerpo especialmente entrenado en asuntos ambientales de que trata el presente artículo, para lo cual dispone de un (1) año contado a partir de la vigencia de esta Ley.

El cuerpo especializado de Policía de que trata este artículo prestará su servicio con prioridad en las zonas de reserva, parques nacionales y en las áreas de especial importancia ecosistémica y colaborará en las tareas educativas, promocionales y de prevención para el buen cuidado y respeto de la naturaleza.

ARTICULO 102. Del Servicio Ambiental. Un 20% de los bachilleres seleccionados para prestar el Servicio Militar Obligatorio, prestarán servicio ambiental, preferiblemente entre quienes acrediten capacitación en las áreas de que trata esta Ley.

El servicio ambiental tiene por objeto prestar apoyo a las autoridades ambientales, a las entidades territoriales y a la comunidad en la defensa y

protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Tendrá las siguientes funciones:

(a) educación ambiental;

(b) organización comunitaria para la gestión ambiental;

(c) prevención, control y vigilancia sobre el uso del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

El servicio ambiental estará dirigido por el Ministerio de Defensa en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente, será administrado por las entidades territoriales y se validará como prestación del Servicio Militar Obligatorio.

ARTICULO 103. Del Apoyo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas velarán en todo el territorio nacional por la protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales renovables y por el cumplimiento de las normas dictadas con el fin de proteger el patrimonio natural de la nación, como elemento integrante de la soberanía nacional.

La Armada Nacional tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones de control y vigilancia en materia ambiental y de los recursos naturales, en los mares y zonas costeras, así como la vigilancia, seguimiento y evaluación de los fenómenos de contaminación o alteración del medio marino.

ARTICULO 104. De la Comisión Colombiana de Oceanografía. La Comisión Colombiana de Oceanografía, creada por Decreto 763 de 1969 y reestructurada por el Decreto 415 de 1983, tendrá el carácter de organismo asesor del Ministerio del Medio Ambiente en los asuntos de su competencia.

ARTICULO 105. De las Funciones de INGEOMINAS en Materia Ambiental. El Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química, Ingeominas, establecimiento público de investigación y desarrollo adscrito al Ministerio de Minas y Energía. complementará y apoyará la labor del IDEAM, en las investigaciones y estudios del medio ambiente físico que tengan por objeto conocer la Tierra, su evolución, su dinámica, sus componentes y recursos, el agua subterránea, la exploración y aprovechamiento de los recursos del subsuelo y la evaluación de los riesgos e impactos geológicos y de obras de infraestructura.

En estos aspectos, el INGEOMINAS orientará su gestión de acuerdo con las políticas y directrices del Ministerio del Medio Ambiente.

ARTICULO 106. Del Reconocimiento de Personería Jurídica a Entidades Ambientalistas. Corresponde a los Alcaldes Municipales o Distritales el reconocimiento de la personería jurídica de entidades sin ánimo de lucro que tengan por objeto la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y su correspondiente registro como "Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales".

Los alcaldes que reconozcan la personería jurídica y ordenen el registro de que trata este artículo, deberán comunicar su decisión al Ministerio del Medio Ambiente dentro de los treinta (30) días siguientes a su ejecutoria.

ARTICULO 107. Utilidad Pública e Interés Social, Función Ecológica de la Propiedad. Decláranse de utilidad pública e interés social la adquisición por negociación directa o por expropiación de bienes de propiedad privada, o la imposición de servidumbres, que sean necesarias para la ejecución de obras públicas destinadas a la protección y manejo del medio ambiente y los recursos naturales renovables, conforme a los procedimientos que establece la ley.

Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.

En los términos de la presente Ley el Congreso, las Asambleas y los Concejos municipales y distritales, quedan investidos de la facultad de imponer obligaciones a la propiedad en desarrollo de la función ecológica que le es inherente

Son motivos de utilidad pública e interés social para la adquisición, por enajenación voluntaria o mediante expropiación, de los bienes inmuebles rurales o urbanos, patrimoniales de entidades de derecho público o demás derechos que estuvieren constituidos sobre esos mismos bienes; además de los determinados en otras leyes, los siguientes:

- La ejecución de obras públicas destinadas a la protección y manejo del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

- La declaración y alinderamiento de áreas que integren el Sistema de Parques Nacionales Naturales.

- La ordenación de cuencas hidrográficas con el fin de obtener un adecuado manejo de los recursos naturales renovables y su conservación

Para el procedimiento de negociación directa y voluntaria así como el de expropiación se aplicarán las prescripciones contempladas en las normas

vigentes sobre reforma agraria para predios rurales y sobre reforma urbana para predios urbanos.

PARAGRAFO. Tratándose de adquisición por negociación directa o por expropiación de bienes inmuebles de propiedad privada relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, el precio será fijado por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", entidad esta que al hacer sus avalúos y con el objeto de evitar un enriquecimiento sin causa, no tendrá en cuenta aquella acciones o intenciones manifiestas y recientes del Estado que hayan sido susceptibles de producir una valorización evidente de los bienes avaluados, tales como:

- La adquisición previa por parte de una entidad con funciones en materia de administración y manejo de los recursos naturales renovables y de protección al ambiente, dentro de los cinco (5) años anteriores, de otro inmueble en la misma área de influencia.

- Los proyectos anunciados, las obras en ejecución o ejecutadas en los cinco (5) años anteriores por la entidad adquiriente o por cualquier otra entidad pública en el mismo sector, salvo en el caso en que el propietario haya pagado o esté pagando la contribución de valorización respectiva.

- El simple anuncio del proyecto de la entidad adquiriente o del Ministerio del Medio Ambiente de comprar inmuebles en determinado sector, efectuado dentro de los cinco (5) años anteriores.

- Los cambios de uso, densidad y altura efectuados por el Plan Integral de Desarrollo, si existiere, dentro de los tres (3) años anteriores a la autorización de adquisición, compraventa, negocio, siempre y cuando el propietario haya sido la misma persona durante dicho período o, habiéndolo enajenado, haya readquirido el inmueble para le fecha del avalúo administrativo especial.

En el avalúo que se practique no se tendrá en cuenta las mejoras efectuadas con posterioridad a la declaratoria del área como Parque Nacional Natural.

ARTICULO 108. Adquisición por la Nación de Areas o Ecosistemas de Interés Estratégico para la Conservación de los Recursos Naturales. Las Corporaciones Autónomas Regionales en coordinación y con el apoyo de las entidades territoriales adelantarán los planes de cofinanciación necesarios para adquirir áreas o ecosistemas estratégicos para la conservación, preservación, y recuperación de los recursos naturales.

La definición de estas áreas y los procesos de adquisición, conservación y administración deberán hacerse con la activa participación de la sociedad civil.

ARTICULO 109. De las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Denomínase Reserva Natural de la Sociedad Civil la parte o el todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales, cuyas actividades y usos se establecerán de acuerdo a reglamentación, con la participación de las organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental.

PARAGRAFO. Para efectos de este artículo se excluyen las áreas en que se exploten industrialmente recursos maderables, admitiéndose sólo la explotación maderera de uso doméstico y siempre dentro de parámetros de sustentabilidad.

ARTICULO 110. Del Registro de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Toda persona natural, jurídica o colectiva propietaria de un área denominada Reserva Natural de la Sociedad Civil deberá obtener registro o matrícula ante el Ministerio del Medio Ambiente, de acuerdo con la reglamentación que se expida, la solicitud puede ser elevada directamente o por intermedio de organizaciones sin ánimo de lucro.

Una vez obtenido el registro, además de lo contemplado en el Artículo precedente, deberá ser llamada a participar, por sí o por intermedio de una organización sin ánimo de lucro, en los procesos de planeación de programas de desarrollo que se van a ejecutar en el área en donde se encuentre ubicado el bien. El Estado no podrá ejecutar inversiones que afecten una o varias reservas naturales de la sociedad civil, debidamente registradas, sin el previo consentimiento del titular de ella.

El Estado promoverá y facilitará la adquisición, establecimiento y libre desarrollo de áreas de reservas naturales por la sociedad civil en ecosistemas o zonas estratégicas.

ARTICULO 111. Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales. Decláranse de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales.

Los departamentos y municipios dedicarán durante quince años un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos, de tal forma que antes de concluido tal período, haya adquirido dichas zonas.

La administración de estas zonas corresponderá al respectivo distrito o municipio en forma conjunta con la respectiva Corporación Autónoma Regional y con la opcional participación de la sociedad civil.

PARAGRAFO. Los proyectos de construcción de distritos de riego deberán dedicar un porcentaje no inferior al 3% del valor de la obra a la adquisición de áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos que los surten de agua.

ARTICULO 112. Comisión Revisora de la Legislación Ambiental. El Gobierno Nacional integrará una comisión de expertos y juristas, de la que formarán parte un Senador de la República y un representante a la Cámara miembros de las Comisiones Quintas de las respectivas corporaciones, así como un Representante del movimiento indígena, encargada de revisar los aspectos penales y policivos de la legislación relacionada con el medio ambiente y los recursos naturales renovables y en particular el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974, el Código Sanitario Nacional y el Código de Minas y de presentar ante el Congreso de la República, dentro de los diez y ocho (18) meses siguientes a la vigencia de esta Ley y acorde con sus disposiciones, sendos proyectos de ley tendientes a su modificación, actualización o reforma.

ARTICULO 113. Reestructuración de la CVC. Facúltase al Presidente de la República por el término de seis meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley para reestructurar la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CVC, y transferir y aportar a un nuevo ente, cuya creación se autoriza, las funciones de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como los activos y pasivos relacionados con dicha actividad.

En desarrollo de estas facultades, el Gobierno Nacional procederá a organizar el nuevo ente encargado del ejercicio de las funciones relacionadas con la generación, transmisión y distribución de energía, el cual podrá constituirse como empresa industrial o comercial del Estado, o como sociedad de economía mixta con la participación de las entidades públicas, privadas o mixtas del orden nacional, regional, departamental o municipal.

PARAGRAFO 1. Las facultades conferidas en este artículo, incluyen la definición del régimen laboral de los actuales empleados y trabajadores de la CVC sin perjuicio de sus derechos adquiridos.

PARAGRAFO 2. El Presidente de la República oirá el concepto previo de una Comisión asesora integrada para el efecto, de la que formarán parte los gobernadores de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, el Ministro de Minas y Energía, el Director General de la CVC, el Gerente General de las Empresas Municipales de Cali, un representante de los empleados del sector eléctrico de la CVC y dos miembros del actual Consejo Directivo de la CVC que representen en él al sector privado regional.

ARTICULO 114. Reestructuración de la CDMB. La Corporación Autónoma Regional de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, adquiere todos los derechos y asume todas las obligaciones que estaban radicadas en cabeza de la actual Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB.

ARTICULO 115. Garantías Laborales a los Funcionarios de Entidades del Orden Nacional que se Reforman. El Gobierno Nacional garantizará, en desarrollo del ajuste institucional dispuesto por la presente Ley, el traslado, reubicación o retiro compensado de los empleados y trabajadores que hacen parte de la planta de personal del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", IGAC, del Instituto de Hidrología Meteorología y Adecuación de Tierras, HIMAT, al momento de vigencia de la presente Ley.

Sin perjuicio de la evaluación sobre su capacidad y eficiencia, ni de la discrecionalidad para la designación de funcionarios que no pertenezcan a la carrera administrativa, los actuales empleados y trabajadores del IGAC y del HIMAT serán considerados con prioridad para su vinculación como servidores públicos del IDEAM.

En los concursos que se realicen para la provisión de cargos de carrera administrativa, se reconocerá a los empleados del IGAC y del HIMAT un puntaje básico que reglamentará el Gobierno Nacional.

ARTICULO 116. Autorizaciones. El Presidente de la República, en ejercicio de sus funciones constitucionales y para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, procederá a:

a) Dictar, con sujeción a las disposiciones de la presente Ley, las normas necesarias para poner en funcionamiento el Ministerio del Medio Ambiente, complementar su estructura orgánica interna, distribuir las funciones de sus dependencias y crear y proveer su planta de personal;

b) Suprimir, modificar, fusionar o redistribuir las funciones de los Ministerios o entidades que han tenido competencia en materia de protección ambiental y administración de los recursos naturales renovables, con sujeción a los dispuesto en la presente Ley;

c) Modificar la estructura y funciones del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", IGAC, y de la División Especial de Política Ambiental y Corporaciones Autónomas Regionales, DEPAC, y de la Unidad de Estudios Agrarios, UDA, del Departamento Nacional de Planeación, conforme a lo establecido en la presente Ley;

d) Modificar la estructura orgánica y funciones del Instituto de Adecuación de Tierras, INAT, antes Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de

Tierras, HIMAT, conforme a lo establecido en la presente Ley y dentro de los seis (6) meses siguientes a su vigencia;

e) Organizar y reestructurar el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andreis", INVEMAR; dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente Ley y conforme a sus disposiciones. Para esto el Presidente podrá crear una Comisión Técnica asesora en que participen entre otros los investigadores y directivos del INVEMAR, representantes de la Comisión Colombiana de Oceanografía y del Programa Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar. La Corporación INVEMAR tendrá aportantes de capital público, privado y mixto. Las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción sobre los litorales participarán en su fundación;

f) Organizar y establecer el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt", el Instituto Amazónico de Investigaciones "SINCHI" y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "John von Neumann", dentro del término de un (1) año, a partir de la vigencia de la presente Ley. El Gobierno Nacional definirá los aportantes de carácter público para la constitución de estas Corporaciones, e incluirá entre ella a las Corporaciones Autónomas Regionales;

g) Establecer un régimen de incentivos, que incluya incentivos económicos, para el adecuado uso y aprovechamiento del medio ambiente y de los recursos naturales renovables y para la recuperación y conservación de ecosistemas por parte de propietarios privados;

h) Dictar las medidas necesarias para el establecimiento, organización o reforma y puesta en funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales y de las Corporaciones de régimen especial, creadas o transformadas por la presente Ley y de conformidad con lo en ella dispuesto; y proveer lo necesario para la transferencia de bienes e instalaciones de la entidades que se transforman o liquidan; para lo cual contará con diez y ocho (18) meses contados a partir de la vigencia de esta Ley.

i) Reestructurar dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de esta Ley la Comisión Colombiana de Oceanografía.

j) Efectuar los traslados presupuestales y tomar las demás medidas fiscales que correspondan para el cumplimiento de lo preceptuado en la presente Ley.

k) Proferir las disposiciones necesarias, en un tiempo no mayor de tres (3) meses, relacionadas con la transición institucional originada por la nueva estructura legal bajo la cual funcionará el nuevo Sistema Nacional del Ambiente.

l) Reglamentar lo pertinente a la naturaleza jurídica del patrimonio de las Corporaciones Autónomas Regionales.

m) Organizar y establecer el IDEAM dentro del término de seis (6) meses a partir de la vigencia de la presente Ley.

ARTICULO 117. Transición de Procedimientos. Los permisos y licencias concedidos continuarán vigentes por el tiempo de su expedición. Las actuaciones administrativas iniciadas continuarán su trámite ante las autoridades que asuman su competencia en el estado en que se encuentren. Las normas y competencias establecidas en la presente Ley, son de vigencia inmediata y se aplicarán una vez se expidan los correspondientes reglamentos, cuando sean necesarios.

ARTICULO 118. Vigencia. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, especialmente el artículo 12 de la Ley 56 de 1981, y los artículos 18, 27, 28 y 29 del Decreto Legisalativo 2811 de 1974 y el artículo 23 de la Ley 47 de 1993.

Publíquese y ejecútese.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., 22 de diciembre de 1993.

ANEXO Nº 10

DECRETO NUMERO 0117 DE 1994 (enero 14)

Por el cual se reglamenta la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial de las que le confieren el ordinal 11 del artículo 189 de la Constitución Política, los artículos 618 y 2035 del Código de Comercio y en desarrollo de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

DECRETA:
CAPITULO I
De las patentes de Invención
Artículo 1° Cesión de beneficios económicos. En los términos del artículo 10 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cada entidad pública podrá establecer el porcentaje de los beneficios económicos sobre las innovaciones que cederá a sus empleados inventores y el procedimiento para otorgar ese estímulo.

Artículo 2° Financiación estatal de investigaciones Para los efectos previstos en el inciso 2 del artículo 10 de la Decisión 344, las entidades estatales establecerán en el documento en que se consignen las condiciones de financiación la parte de las regalías por la comercialización de las invenciones, que deberán reinvertirse para generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores.

Artículo 3° Para efectos del artículo 13, literal b) de la Decisión 344 el título o nombre de la invención debe reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y reivindicada.

Artículo 4° Requisitos adicionales de la solicitud. Los requisitos a los que se refiere el literal c) del artículo 14 de la Desición 344 son:

a) Si el poder indicado en el literal a) del artículo 14 de la Decisión 344 está protocolizado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la mención del número de protocolo;
b) Una tarjeta para el archivo temático y una tarjeta para el archivo de propietarios, de acuerdo con los formatos establecidos por la Superintendencia de Industria y Comercio;
c) El extracto de la publicación, diligenciado en el formato establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual debe contener; la identificación del inventor, el título de la invención, lo más revelante de

las reivindicaciones, el arte final del dibujo o figuras más características, si las hubiere, en duplicado, en una dimensión de 6 x 5 centímetros;

d) Para la interpretación de la invención, los dibujos, planos o figuras que sean necesarios, numerados individual y consecutivamente, elaborados de acuerdo con las reglas del dibujo técnico, sobre papel tamaño oficio, por una sola cara, en tinta negra indeleble, empleando números y/o signos de referencia, los cuales deben estar definidos en el texto de la descripción.Se considerara como figuras a las fórmulas químicas o matemáticas que no sean mecanografiadas o impresas dentro del texto de la descripción;
e) En el evento en que se reivindique prioridad la traducción oficial de las reivindicaciones de la primera solicitud de patente, si fuere necesaria;
f) En el evento en que se reivindique prioridad sobre solicitudes provenientes de países no miembros del Acuerdo de Cartagena, la indicación de la fuente normativa de la reciprocidad de que trata el artículo 12 de la Decisión 344;
g) Los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la persona jurídica peticionaria.

Artículo 5° Prorroga. Para efectos del artículo 22 de la Decisión 344, la petición de prórroga deberá presentarse antes del vencimiento del término, acompañando el comprobante de pago de la tasa correspondiente a la prórroga. Se entenderá que esta comenzará al día siguiente del vencimiento del término inicial, sin necesidad de pronunciamiento alguno.

Articulo 6° Cambio de modalidad. Para que se realice el cambio de modalidad de que tratan los artículos 17 a 20 de la Decisión 344, el peticionario deberá allegar, dentro del término concedido, el comprobante de pago de la tasa correspondiente, cumplido lo cual se procederá a efectuar el examen a que se refiere el artículo 21 de la misma Decisión, de acuerdo con la nueva modalidad.

Artículo 7° Publicación. La publicación a que se refiere el artículo 23 de la Decisión 344 contendrá la información relacionada en el extracto de que trata el literal c) del articulo 4° del presente Decreto.

Artículo 8º Presentación de observaciones. La Superintendencia de Industria y Comercio no tramitara las observaciones que no cumplan los siguientes requisitos:

a) Nombre y dirección de la persona que presenta observaciones; tratándose de una persona jurídica deberán acompañarse los documentos que acrediten su existencia y representación legal;
b) Si fuere del caso. poder debidamente otorgado o mención de su protocolización ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y la dirección del apoderado;

c) Escrito en original y copia, en que se precise el legítimo interés que le asiste y los motivos en que se fundamenta la observación;
d) Las pruebas tendientes a desvirtuar la patentabilidad de la invención;
e) La identificación correcta del expediente y el de la gaceta en que fue publicada la solicitud;
f) Presentarse dentro del plazo establecido;
g) Comprobante de pago de la tasa de presentación: establecida.

Artículo 9º Registro de cesión, licencias, cambio de nombre y de domicilio del titular. Estas solicitudes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Nombre, dirección y domicilio del peticionario y de su apoderado, si fuere del caso;
b) Indicación del número del expediente o del certificado del privilegio concedido;
c) Si fuere del caso, poder debidamente otorgado o mención de su protocolización ante la Superintendencia de Industria y Comercio;
d) Los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la persona jurídica peticionaria;
e) Documento debidamente otorgado que acredite la licencia, cesión, cambio de nombre o de domicilio;
f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

CAPITULO II
De los modelos de utilidad

Artículo 10. Tramites. Las solicitudes de patentes de modelo de utilidad y demás trámites relacionados con ellos se regirán por lo establecido para las patentes de invención en la Decisión 344 y en el presente reglamento, en lo que fuere pertinente.

Artículo 11. Clasificación. En las patentes de modelo de utilidad se utilizará la clasificación internacional de patentes de invención.

CAPITULO III
De los diseños industriales

Artículo 12 Requisitos. La solicitud a que se refiere el artículo 61 de la Decisión 344 deberá comprender un solo diseño y cumplir los siguientes requisitos:

a) Si el poder indicado en el artículo 61 de la Decisión 344 esta protocolizado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la mención del número de protocolo;
b) Una tarjeta para el archivo temático y otra para el archivo de propietarios, de acuerdo con; los formatos establecidas por la Superintendencia de Industria y Comercio;

c) El extracto de la publicación, diligenciado en el formato establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual debe contener: la identificación del diseñador, la denominación del diseño industrial, el arte final del diseño o figuras más características, en triplicado, en una dimensión de 6 x 6 centímetros;
d) Cuando se trate de un diseño Industrial tridimensional, la representación gráfica del diseño que incluya las vistas, cortes. proyecciones ortogonales (superior, inferior, posterior, anterior y laterales) o fotografías que resulten necesarias, así como la perspectiva general o de conjunto. Cuando se trate de un diseño bidimensional de combinación de líneas y colores se adjuntaran las gráficas o planos necesarios. Las gráficas serán elaboradas técnicamente, en papel oficio, con tinta negra indeleble y estar debidamente numeradas.
e) En el evento en que se reivindique prioridad, copia de la primera solicitud, con traducción oficial, si ella fuere necesaria;
f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida;
g) Los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la persona jurídica peticionaria.

Artículo 13. Tramites. Las solicitudes de registro de diseños industriales y demás trámites relacionados con ellos se regirán por lo establecido para las patentes de invención en la Decisión 344 y en el presente reglamento, en lo que fuere pertinente.

CAPITULO IV
De las marcas

Artículo 14. Requisitos adicionales de la solicitud. Los requisitos a los que se refiere el literal e) del artículo 88 de la Decisión 344 son:

a) Si el poder indicado en el literal a) del artículo 88 de la Decisión 344 esta protocolizado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la mención del número de protocolo;
b) El extracto de publicación, diligenciado en el formato establecido por la Superintendencia de industria y Comercio, el cual debe contener; la marca, la clase, el nombre del solicitante, su domicilio, el nombre del apoderado, el tipo de marca, los productos o servicios para los cuales se solicita el registro y el arte final, en triplicado, en una dimensión de 6 x 6 centímetros;
c) En el evento que se reivindique prioridad, la traducción oficial de la primera solicitud de marca si ella fuere necesaria;.
d) En el evento en que se reivindique prioridad sobre solicitudes provenientes de países no miembros del Acuerdo de Cartagena, la: indicación de la fuente normativa de la reciprocidad de que trata el artículo 103 de la Decisión;

e) Los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la persona Jurídica peticionaria;
f) La indicación de los productos o servicios de la clase en que se solicita el registro de la marca. de acuerdo con la Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuenta sus actualizaciones y modificaciones.

Artículo 15. Presentación de observaciones. La Superintendencia de Industria y Comercio no tramitará las observaciones que están comprendidas en los casos indicados en el artículo 94 de la Decisión 344 así como las que no cumplan los siguientes requisitos:

a) Nombre y dirección de la persona que presenta observaciones; tratándose de una persona jurídica deberán acompañarse los documentos que acrediten su existencia y representación legal;
b) Si fuere del caso, poder debidamente otorgado o mención de su protocolización ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la dirección del apoderado;
c) Escrito, en original y copia, en que se precise el legítimo interés que le asiste y los motivos en que se fundamenta la observación:
d) Las pruebas tendientes a desvirtuar la registrabilidad del signo.
e) Cuando la observación se base en signos distintivos figurativos o mixtos deberá adjuntarse una reproducción exacta y nítida de los mismos, tal como fueron registrados, depositados o solicitados;
f) f) La identificación correcta del expediente y el número de la gaceta en que fue ublicada la solicitud.

Artículo 16. Requisitos de la solicitud de renovación. La solicitud de renovación de una marca deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Nombre. dirección y domicilio del peticionario y de su apoderado. si fuere del caso;
b) Si fuere del caso, poder debidamente otorgado o mención de su protocolización ante la Superintendencia de Industria y Comercio;
c) La identificación precisa de la marca que se pretende renovar, indicando: la clase y el número del certificado, o la copia de la providencia contentiva de la concesión del registro marcario o de su última renovación, según sea el caso.
d) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida;
e) Los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la persona jurídica peticionaria.

Artículo 17. Requisitos de la solicitud de registro de cesión, cambio de domicilio, de nombre del titular, licencia de uso y acuerdos. Además de cumplir los requisitos indicados en el artículo anterior que resulten pertinentes, al momento de su presentación ante la Superintendencia de Industria y Comercio se deberá acompañar copia autentica del documento en que conste la cesión,

la licencia de uso, el cambio de nombre o de domicilio o del acuerdo de que trata el artículo 107 de la Decisión 344, según fuere el caso.

Artículo 18. Requisitos de la solicitud de cancelación. La solicitud de cancelación de registro de una marca deberá presentarse por escrito, en original y copia, y cumplir los siguientes requisitos:

a) Nombre, dirección y domicilio del peticionario y de su apoderado, si fuere del caso;
b) Si fuere del caso, poder debidamente otorgado o mención de su protocolización ante la Superintendencia de Industria y Comercio;
c) Identificación precisa de la marca cuya cancelación se pretende, especificando: la marca, la clase y el número de certificado;
d) Los motivos en que se fundamente la solicitud de cancelación;
e) Las pruebas que pretenda hacer valer;
f) Los documentos que a acrediten la existencia y representación legal de la persona Jurídica peticionaria.

Artículo 19. Requisitos de las solicitudes relacionadas con temas comerciales. La solicitud de registro de un tema comercial deberá cumplir los requisitos previstos para el registro de marcas tanto en la Decisión 344 como en el presente reglamento, identificando además, la marca con la cual se usará el lema, la clase y el número de certificado o el número de expediente en que se tramita la solicitud, según corresponda. Los demás trámites relacionados con los lemas comerciales se regirán por lo establecido para las marcas en la Decisión 344 y en el presente reglamento, en lo que fuere pertinente.

CAPITULO V
De los nombres comerciales y las enseñas

Artículo 20. Solicitud de depósito de nombre comercial o de enseña. La solicitud de depósito de un nombre comercial o de una enseñanza deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Nombre, dirección y domicilio del peticionario y de su apoderado, si fuere el caso;
b) Si fuere el caso, poder debidamente otorgado o mención de su protocolización ante la Superintendencia de Industria y Comercio;
c) La descripción clara y completa del nombre o enseña que se pretende depositar;
d) La indicación de las actividades que desarrolle el empresario o que se adelanten a través del establecimiento de comercio, conforme a la clasificación marcaria, en cuanto fuere compatible;
e) Si el nombre o la enseña contienen elementos figurativos, el arte final, en triplicado, en una dimensión de 6 x 6 centímetros:

f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida;
g) Los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la persona jurídica peticionaria.

CAPITULO VI
De las denominaciones de origen

Artículo 21. Requisitos a adicionales de la solicitud. Los requisitos a que se refiere el literal e) del artículo 134 de la Decisión 344 son:

a) Nombre, dirección y domicilio del apoderado, si fuere del caso;
b) Si fuere del caso, poder debidamente otorgado o mención de su protolización ante la Superintendencia de Industria y Comercio;
c) Las pruebas que demuestren que las cualidades o características del producto se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos;
d) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

Artículo 22. Trámites. Los trámites vinculados con denominaciones de origen, se regirán por lo dispuesto en materia de marcas en la Desición 344 y en el presente reglamento, en lo que fuere pertinente.

CAPITULO VII
Disposiciones complementarias.

Artículo 23. Notificación. La notificación a que se refieren los artículos 22, 26, 27, 91 y 95 de la Decisión 344 y la de los requerimientos efectuados en aplicación del artículo 12 del Código Contencioso Administrativo, se surtirá mediante estado que contendrá:

a) Tipo de trámite;
b) Número del expediente;
c) Número del auto;
d) Nombre del solicitante y del apoderado, si fuere el caso;
e) La fecha del estado y la firma del funcionario designado para el efecto.

El gestado se fijará en un lugar visible atención al público de la entidad y permanecerá allí fijado durante las horas hábiles de servicio del respectivo día.

Artículo 24. Publicación. La Superintendencia de Industria y Comercio publicará en la Gaceta de la Propiedad Industrial el extracto de los actos relativos a la propiedad industrial previstos en la Decisión 344 y en el presente reglamento, previo el pago de los derechos correspondientes.

Artículo 25. Caducidad. La Superintendencia de Industria y Comercio declarara la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, traspasos, prorrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular otorgados a

partir de la fecha de publicación del presente Decreto, cuyo pago no se acredite ante dicha entidad dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo. Para las patentes de invención el plazo será de seis meses.
Así mismo, se declarara la caducidad de los títulos enunciados en el inciso anterior, concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación del presente Decreto, cuyo pago no se acredite ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto.

Artículo 26. Extensión de la patente. Los titulares de las patentes concedidas con anterioridad al 1° de enero de 1994 deberán acompañar a la solicitud de la extensión de las mismas la prueba de su explotación.

Artículo 27. Artes finales. Los artes finales a que se refieren los artículos 4°, literal c); 12, literal c), y 141 literal b) del presente Decreto deberán presentarse en unas dimensiones de 12 x 12 centímetros a partir del 1° de marzo de 1994, observando las demás condiciones establecidas en los mencionados artículos.

Artículo 28. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Decreto 575 de 1992, a excepción de su articulo 33, y las demás disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.

ANEXO Nº 11

LEY 115 DE 1994 (febrero 8)

Diario Oficial No. 41.214, de 8 de febrero de 1994- Por la cual se expide la ley general de educación

EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:

TÍTULO I.
DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTÍCULO 1: OBJETO DE LA LEY. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.
La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social.
La Educación Superior es regulada por ley especial, excepto lo dispuesto en la presente Ley.

ARTÍCULO 2: SERVICIO EDUCATIVO. El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación.

ARTÍCULO 3: PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. El servicio educativo será prestado en las instituciones educativas del Estado. Igualmente

los particulares podrán fundar establecimientos educativos en las condiciones que para su creación y gestión establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno Nacional.
De la misma manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones educativas de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro.

ARTÍCULO 4: CALIDAD Y CUBRIMIENTO DEL SERVICIO. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento.
El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo.

ARTÍCULO 5: FINES DE LA EDUCACIÓN. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones.

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con latinoamérica y el Caribe.

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo.

ARTÍCULO 6:COMUNIDAD EDUCATIVA. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, la comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos educativos, en los términos de la presente Ley.

La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo.

ARTÍCULO 7:LA FAMILIA. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría

de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde:

a) Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus expectativas, para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional;

b) Participar en las asociaciones de padres de familia;

c) Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, participar en las acciones de mejoramiento;

d) Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos;

e) Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la adecuada prestación del servicio educativo;

f) Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus hijos, y

g) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral.

ARTÍCULO 8: LA SOCIEDAD. La sociedad es responsable de la educación con la familia y el Estado. Colaborará con éste en la vigilancia de la prestación del servicio educativo y en el cumplimiento de su función social. La sociedad participará con el fin de:

a) Fomentar, proteger y defender la educación como patrimonio social y cultural de toda la Nación;

b) Exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades con la educación;

c) Verificar la buena marcha de la educación, especialmente con las autoridades e instituciones responsables de su prestación;

d) Apoyar y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas;

e) Fomentar instituciones de apoyo a la educación, y

f) Hacer efectivo el principio constitucional según el cual los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

ARTÍCULO 9: EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. El desarrollo del derecho a la educación se regirá por ley especial de carácter estatutario.

TÍTULO II.
ESTRUCTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO

CAPÍTULO I.
EDUCACIÓN FORMAL

SECCIÓN I.
DISPOSICIONES COMUNES

ARTÍCULO 10: DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN FORMAL. Se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.

ARTÍCULO 11: NIVELES DE LA EDUCACIÓN FORMAL. La educación formal a que se refiere la presente Ley, se organizará en tres (3) niveles:
a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio;
b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y
c) La educación media con una duración de dos (2) grados.
La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente.

ARTÍCULO 12: ATENCIÓN DEL SERVICIO. El servicio público educativo se atenderá por niveles y grados educativos secuenciados, de igual manera mediante la educación no formal y a través de acciones educativas informales teniendo en cuenta los principios de integralidad y complementación.

ARTÍCULO 13: OBJETIVOS COMUNES DE TODOS LOS NIVELES. Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a:
a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes;
b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos;
c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad;

d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y responsable;
e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional;
f) Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional;
g) Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y
h) Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos.

ARTÍCULO 14: ENSEÑANZA OBLIGATORIA. En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y media, cumplir con:
a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política;
b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo;
c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política;
d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos, y
e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad.

PARÁGRAFO 1o. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo los numerales a) y b), no exige asignatura específica. Esta formación debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios.

PARÁGRAFO 2o. Los programas a que hace referencia el literal b) del presente artículo serán presentados por los establecimientos educativos estatales a las Secretarías de Educación del respectivo municipio o ante el organismo que haga sus veces, para su financiación con cargo a la participación en los ingresos corrientes de la Nación, destinados por la ley para tales áreas de inversión social.

SECCIÓN II.
EDUCACIÓN PREESCOLAR

ARTÍCULO 15: DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los

aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas.

ARTÍCULO 16: OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR. Son objetivos específicos del nivel preescolar:
a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición de su identidad y autonomía;
b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas;
c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de su capacidad de aprendizaje;
d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria;
e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia;
f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos;
g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social;
h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento;
i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida de los niños en su medio, y
j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud.

ARTÍCULO 17: GRADO OBLIGATORIO. El nivel de educación preescolar comprende, como mínimo, un (1) grado obligatorio en los establecimientos educativos estatales para niños menores de seis (6) años de edad.
En los municipios donde la cobertura del nivel de educación preescolar no sea total, se generalizará el grado de preescolar en todas las instituciones educativas estatales que tengan primer grado de básica, en un plazo de cinco (5) años contados a partir de la vigencia de la presente Ley, sin perjuicio de los grados existentes en las instituciones educativas que ofrezcan más de un grado de preescolar.

ARTÍCULO 18: AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN. El nivel de educación preescolar de tres grados se generalizará en instituciones educativas del Estado o en las instituciones que establezcan programas para la prestación de este servicio, de acuerdo con la programación que determinen las entidades territoriales en sus respectivos planes de desarrollo.
Para tal efecto se tendrá en cuenta que la ampliación de la educación preescolar debe ser gradual a partir del cubrimiento del ochenta por ciento (80%) del grado obligatorio de preescolar establecido por la Constitución y al

menos del ochenta por ciento (80%) de la educación básica para la población entre seis (6) y quince (15) años.

SECCIÓN III.
EDUCACIÓN BASICA
ARTÍCULO 19. DEFINICIÓN Y DURACIÓN. La educación básica obligatoria corresponde a la identificada en el artículo 356 de la Constitución Política como educación primaria y secundaria; comprende nueve (9) grados y se estructurará en torno a un currículo común, conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana.

ARTÍCULO 20: OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BASICA. Son objetivos generales de la educación básica:
a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo;
b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente;
c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana;
d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua;
e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y
f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano.

ARTÍCULO 21: OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA EN EL CICLO DE PRIMARIA. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:
a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista;
b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico;
c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura;

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética;
e) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos;
f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad;
g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad;
h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente;
i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico;
j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre;
k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana;
l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura;
m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera;
n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y
ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad.

ARTÍCULO 22: OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA EN EL CICLO DE SECUNDARIA. Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:
a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos, oral y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de lengua;
b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo;
c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana;

d) El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la observación experimental;
e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza y el ambiente;
f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de problemas;
g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil;
h) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las condiciones actuales de la realidad social;
i) El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división y organización política, del desarrollo económico de los países y de las diversas manifestaciones culturales de los pueblos;
j) La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución Política y de las relaciones internacionales;
k) La apreciación artística, la comprensión estética la creatividad, la familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valorización y respeto por los bienes artísticos y culturales;
l) La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera;
m) La valorización de la salud y de los hábitos relacionados con ella;
n) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo, y
ñ) La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre.

ARTÍCULO 23. ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES. Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes:
1. Ciencias naturales y educación ambiental.
2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.
3. <Numeral modificado por el artículo 65 de la Ley 397 de 1997. El nuevo texto es el siguiente:> Educación artística y cultural.

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.
8. Matemáticas.
9. Tecnología e informática.

PARÁGRAFO. La educación religiosa se ofrecerá en todos los establecimientos educativos, observando la garantía constitucional según la cual, en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibirla.

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-555-94 del 6 de diciembre de 1994, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

ARTÍCULO 24. EDUCACIÓN RELIGIOSA. Se garantiza el derecho a recibir educación religiosa; los establecimientos educativos la establecerán sin perjuicio de las garantías constitucionales de libertad de conciencia, libertad de cultos y el derecho de los padres de familia de escoger el tipo de educación para sus hijos menores, así como del precepto constitucional según el cual en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa.
<Jurisprudencia - Vigencia>

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-554-94 del 6 de diciembre de 1994, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

En todo caso la educación religiosa se impartirá de acuerdo con lo establecido en la ley estatutaria que desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos.

ARTÍCULO 25. FORMACIÓN ÉTICA Y MORAL. La formación ética y moral se promoverá en el establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del comportamiento honesto de directivos, educadores, y personal administrativo, de la aplicación recta y justa de las normas de la institución, y demás mecanismos que contemple el Proyecto Educativo Institucional.

ARTÍCULO 26. SERVICIO ESPECIAL DE EDUCACIÓN LABORAL. El estudiante que haya cursado o validado todos los grados de la educación básica, podrá acceder al servicio especial de educación laboral proporcionado por instituciones educativas o instituciones de capacitación laboral, en donde podrá obtener el título en el arte u oficio o el certificado de aptitud ocupacional correspondiente.
El Gobierno Nacional reglamentará lo relativo a la organización y funcionamiento de este servicio que será prestado pro el Estado y por los particulares.

PARÁGRAFO. El Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA y el sector productivo, establecerá un Sistema de Información y Orientación Profesional y Ocupacional que contribuya a la racionalización en la formación de los recursos humanos, según los requerimientos del desarrollo nacional y regional.

SECCIÓN IV.
EDUCACIÓN MEDIA

ARTÍCULO 27. DURACIÓN Y FINALIDAD. La educación media constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y comprende dos grados, el décimo (10o) y el undécimo (11o). Tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la educación superior y al trabajo.

ARTÍCULO 28. CARÁCTER DE LA EDUCACIÓN MEDIA. La educación media tendrá el carácter de académica o técnica. A su término se obtiene el título de bachiller que habilita al educando para ingresar a la educación superior en cualquiera de sus niveles y carreras.

ARTÍCULO 29. EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA. La educación media académica permitirá al estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar en un campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la educación superior.

ARTÍCULO 30. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA. Son objetivos específicos de la educación media académica:
a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con los intereses y capacidades del educando;
b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales;
c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social;
d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento, de acuerdo con las potencialidades e intereses;
e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno;
f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en acciones cívicas y de servicio social;
g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad, y

h) El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los literales b) del artículo 20, c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), ñ) del artículo 22 de la presente Ley.

ARTÍCULO 31. ÁREAS FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA. Para el logro de los objetivos de la educación media académica serán obligatorias y fundamentales las mismas áreas de la educación básica en un nivel más avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y la filosofía.
PARÁGRAFO. Aunque todas las áreas de la educación media académica son obligatorias y fundamentales, las instituciones educativas organizarán la programación de tal manera que los estudiantes puedan intensificar, entre otros, en ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, arte o lenguas extranjeras, de acuerdo con su vocación e intereses, como orientación a la carrera que vayan a escoger en la educación superior.

ARTÍCULO 32. EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA. La educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación en la educación superior.
Estará dirigida a la formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el sector productivo y de servicios. Debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia.
Las especialidades que ofrezcan los distintos establecimientos educativos, deben corresponder a las necesidades regionales.

PARÁGRAFO. Para la creación de instituciones de educación media técnica o para la incorporación de otras y para la oferta de programas, se deberá tener una infraestructura adecuada, el personal docente especializado y establecer una coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA u otras instituciones de capacitación laboral o del sector productivo.

ARTÍCULO 33. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA. Son objetivos específicos de la educación media técnica:
a) La capacitación básica inicial para el trabajo;
b) La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de formación que éste ofrece, y
c) La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que permita al educando el ingreso a la educación superior.

ARTÍCULO 34. ESTABLECIMIENTOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de esta Ley, la educación media podrá ofrecerse en los mismos establecimientos que imparten educación básica o en establecimientos específicamente aprobados para tal fin, según normas que establezca el Ministerio de Educación Nacional.

ARTÍCULO 35. ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Al nivel de educación media sigue el nivel de la Educación Superior, el cual se regula por la Ley 30 de 1992 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Este último nivel se clasifica así:
a) Instituciones técnicas profesionales;
b) Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, y
c) Universidades.

CAPÍTULO II.
EDUCACIÓN NO FORMAL

ARTÍCULO 36: DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN NO FORMAL. La educación no formal es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el Artículo 11 de esta Ley.

ARTÍCULO 37:FINALIDAD. La educación no formal se rige por los principios y fines generales de la educación establecidos en la presente ley. Promueve el perfeccionamiento de la persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los valores nacionales, la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y técnico, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria.

ARTÍCULO 38: OFERTA DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL. En las instituciones de educación no formal se podrán ofrecer programas de formación laboral en artes y oficios, de formación académica y en materias conducentes a la validación de niveles y grados propios de la educación formal, definidos en la presente Ley.
Para la validación de niveles y grados de la educación formal, el Gobierno Nacional expedirá la reglamentación respectiva.

ARTÍCULO 39: EDUCACIÓN NO FORMAL COMO SUBSIDIO FAMILIAR. Los estudios que se realicen en las instituciones de educación no formal que según la reglamentación del Gobierno Nacional lo ameriten, serán reconocidos para efectos de pago del subsidio familiar, conforme a las normas vigentes.

ARTÍCULO 40: PROGRAMAS DE EDUCACIÓN NO FORMAL A MICROEMPRESAS. El Plan Nacional para el desarrollo de la microempresa

será el encargado de aprobar los programas de capacitación y asesoría a las microempresas, al igual que los programas de apoyo microempresarial.
Las instituciones capacitadoras aprobadas para adelantar estos programas tendrán carácter de instituciones de educación no formal.
El Ministerio de Educación Nacional formará parte de las directivas del plan.

ARTÍCULO 41: FOMENTO DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL. El Estado, apoyará y fomentará la educación no formal, brindará oportunidades para ingresar a ella y ejercerá un permanente control para que se ofrezcan programas de calidad.

ARTÍCULO 42: REGLAMENTACIÓN. La creación, organización y funcionamiento de programas y de establecimientos de educación no formal y la expedición de certificados de aptitud ocupacional, se regirá por la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
PARÁGRAFO. El tiempo de servicio que presten los docentes en los Centros de Educación de Adultos, es válido para ascenso en el Escalafón Nacional Docente, siempre y cuando reúna los requisitos del Decreto-ley 2277 de 1979.

CAPÍTULO III.
EDUCACIÓN INFORMAL

ARTÍCULO 43: DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN INFORMAL. Se considera educación informal todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados.

ARTÍCULO 44: MISIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. El Gobierno Nacional fomentará la participación de los medios de comunicación e información en los procesos de educación permanente y de difusión de la cultura, de acuerdo con los principios y fines de la educación definidos en la presente Ley, sin perjuicio de la libertad de prensa y de la libertad de expresión e información.
Así mismo, adoptará mecanismos y estímulos que permitan la adecuada y eficaz utilización de los medios de comunicación masivos como contribución al mejoramiento de la educación de los colombianos.

ARTÍCULO 45: SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MASIVA. Créase el Sistema Nacional de Educación Masiva con el fin de satisfacer la demanda de educación continuada, de validación para la educación formal y de difusión artística y cultural. El programa se ejecutará con el uso de medios electrónicos de comunicación o transmisión de datos, tales como la radiodifusión, la televisión, la telemática o cualquier otro que utilice el espectro electromagnético.

El sistema incluye las acciones directas o indirectas cumplidas por medio de contratos o convenios, conducentes al diseño, producción, emisión y recepción de programas educativos, así como las demás complementarias y conexas necesarias para el buen cumplimiento de los fines de la educación.
Sin perjuicio de lo que disponga la Ley que desarrolla los mandatos constitucionales sobre planes y programas del Estado en el servicio de televisión, autorízase al Gobierno Nacional para participar en la constitución de una sociedad de economía mixta, encargada de administrar el Sistema.

TÍTULO III.
MODALIDADES DE ATENCIÓN EDUCATIVA A POBLACIONES

CAPÍTULO I.
EDUCACIÓN PARA PERSONAS CON LIMITACIONES O CAPACIDADES EXCEPCIONALES

ARTÍCULO 46: INTEGRACIÓN CON EL SERVICIO EDUCATIVO. La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo.
Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de dichos educandos.
El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente.

PARÁGRAFO 1o. Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales podrán contratar con entidades privadas los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para la atención de las personas a las cuales se refiere este artículo, sin sujeción al artículo 8o. de la Ley 60 de 1993 hasta cuando los establecimientos estatales puedan ofrecer este tipo de educación.

PARÁGRAFO 2o. Las instituciones educativas que en la actualidad ofrecen educación para personas con limitaciones, la seguirán prestando, adecuándose y atendiendo los requerimientos de la integración social y académica, y desarrollando los programas de apoyo especializado necesarios para la adecuada atención integral de las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o mentales. Este proceso deberá realizarse en un plazo no mayor de seis (6) años y será requisito esencial para que las instituciones particulares o sin ánimo de lucro puedan contratar con el Estado.

ARTÍCULO 47: APOYO Y FOMENTO. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 68 de la Constitución Política y con sujeción a los planes y programas de desarrollo nacionales y territoriales, el Estado apoyará a las instituciones y fomentará programas y experiencias orientadas a la adecuada

atención educativa de aquellas personas a que se refiere el artículo 46 de esta Ley.
Igualmente fomentará programas y experiencias para la formación de docentes idóneos con este mismo fin.
El reglamento podrá definir los mecanismos de subsidio a las personas con limitaciones, cuando provengan de familias de escasos recursos económicos.

ARTÍCULO 48: AULAS ESPECIALIZADAS. Los Gobiernos Nacional, y de las entidades territoriales incorporarán en sus planes de desarrollo, programas de apoyo pedagógico que permitan cubrir la atención educativa a las personas con limitaciones.
El Gobierno Nacional dará ayuda especial a las entidades territoriales para establecer aulas de apoyo especializadas en los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción que sean necesarios para el adecuado cubrimiento, con el fin de atender, en forma integral, a las personas con limitaciones.

ARTÍCULO 49: ALUMNOS CON CAPACIDADES EXCEPCIONALES. El Gobierno Nacional facilitará en los establecimientos educativos la organización de programas para la detección temprana de los alumnos con capacidades o talentos excepcionales y los ajustes curriculares necesarios que permitan su formación integral.
El reglamento definirá las formas de organización de proyectos educativos institucionales especiales para la atención de personas con talentos o capacidades excepcionales, el apoyo a los mismos y el subsidio a estas personas, cuando provengan de familias de escasos recursos económicos.

CAPÍTULO II.
EDUCACIÓN PARA ADULTOS

ARTÍCULO 50. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS. La educación de adultos es aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público educativo, que deseen suplir y completar su formación, o validar sus estudios.
El Estado facilitará las condiciones y promoverá especialmente la educación a distancia y semipresencial para los adultos.

ARTÍCULO 51. OBJETIVOS ESPECIFICOS. Son objetivos específicos de la educación de adultos:
a) Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles educativos;
b) Erradicar el analfabetismo;
c) Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación, y
d) Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social, cultural y comunitaria.

ARTÍCULO 52. VALIDACIÓN. El Estado ofrecerá a los adultos la posibilidad de validar la educación básica o media y facilitará su ingreso a la educación superior, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley.
Las instituciones educativas autorizadas podrán reconocer y validar los conocimientos, experiencias y prácticas de los adultos, sin la exigencia de haber cursado determinado grado de escolaridad formal, o los programas de educación no formal del arte u oficio de que se trate, cumpliendo los requisitos que para tal fin establezca el Gobierno Nacional, y con sujeción a la Ley 30 de 1992, o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

ARTÍCULO 53. PROGRAMAS SEMIPRESENCIALES PARA ADULTOS. Los establecimientos educativos de acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional, podrán ofrecer programas semipresenciales de educación formal o de educación no formal de carácter especial, en jornada nocturna, dirigidos a personas adultas, con propósitos laborales. El Gobierno Nacional reglamentará tales programas.

ARTÍCULO 54. FOMENTO A LA EDUCACIÓN NO FORMAL PARA ADULTOS. El Ministerio de Educación Nacional fomentará programas no formales de educación de adultos, en coordinación con diferentes entidades estatales y privadas, en particular los dirigidos al sector rural y a las zonas marginadas o de difícil acceso.
Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales fomentarán la educación para grupos sociales con carencias y necesidades de formación básica, de conformidad con lo establecido en el artículo 8o. de la Ley 60 de 1993. Lo harán con recursos de sus respectivos presupuestos y a través de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad.

CAPÍTULO III.
EDUCACIÓN PARA GRUPOS ÉTNICOS

ARTÍCULO 55. DEFINICIÓN DE ETNOEDUCACIÓN. Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos.
Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones.

PARÁGRAFO. En funcionamiento las entidades territoriales indígenas se asimilarán a los municipios para efectos de la prestación del servicio público educativo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 60 de 1993 y de conformidad con lo que disponga la ley de ordenamiento territorial.

ARTÍCULO 56. PRINCIPIOS Y FINES. La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la presente ley y tendrá en cuenta además los criterios de integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura.

ARTÍCULO 57. LENGUA MATERNA. En sus respectivos territorios, la enseñanza de los grupos étnicos con tradición lingüística, propia será bilingüe, tomando como fundamento escolar la lengua materna del respectivo grupo, sin detrimento de lo dispuesto en el literal c) del artículo 21 de la presente ley.

ARTÍCULO 58. FORMACIÓN DE EDUCADORES PARA GRUPOS ÉTNICOS. El Estado promoverá y fomentará la formación de educadores en el dominio de las culturas y lenguas de los grupos étnicos, así como programas sociales de difusión de las mismas.

ARTÍCULO 59. ASESORÍAS ESPECIALIZADAS. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional y en concertación con los grupos étnicos prestará asesoría especializada en el desarrollo curricular, en la elaboración de textos y materiales educativos y en la ejecución de programas de investigación y capacitación etnolinguística.

ARTÍCULO 60. INTERVENCIÓN DE ORGANISMOS INTERNACIONALES. No podrá haber injerencia de organismos internacionales, públicos o privados en la educación de los grupos étnicos, sin la aprobación del Ministerio de Educación Nacional y sin el consentimiento de las comunidades interesadas.

ARTÍCULO 61. ORGANIZACIONES EDUCATIVAS EXISTENTES. Las organizaciones de los grupos étnicos que al momento de entrar en vigencia esta Ley se encuentren desarrollando programas o proyectos educativos, podrán continuar dicha labor directamente o mediante convenio con el gobierno respectivo, en todo caso ajustados a los planes educativos regionales y locales.

ARTÍCULO 62. SELECCIÓN DE EDUCADORES. Las autoridades competentes, en concertación con los grupos étnicos, seleccionarán a los educadores que laboren en sus territorios, preferiblemente, entre los miembros de las comunidades en ellas radicados. Dichos educadores deberán acreditar formación en etnoeducación, poseer conocimientos básicos del respectivo grupo étnico, en especial de su lengua materna, además del castellano.

La vinculación, administración y formación de docentes para los grupos étnicos se efectuará de conformidad con el estatuto docente y con las normas especiales vigentes aplicables a tales grupos.
El Ministerio de Educación Nacional, conjuntamente con las entidades territoriales y en concertación con las autoridades y organizaciones de los grupos étnicos establecerá programas especiales para la formación y profesionalización de etnoeducadores o adecuará los ya existentes, para dar cumplimiento a lo dispuesto en esta ley y en la Ley 60 de 1993.

ARTÍCULO 63. CELEBRACIÓN DE CONTRATOS. Cuando fuere necesaria la celebración de contratos para la prestación del servicio educativo para las comunidades de los grupos étnicos, dichos contratos se ajustarán a los procesos, principios y fines de la etnoeducación y su ejecución se hará en concertación con las autoridades de las entidades territoriales indígenas y de los grupos étnicos.

CAPÍTULO IV.
EDUCACIÓN CAMPESINA Y RURAL

ARTÍCULO 64. FOMENTO DE LA EDUCACIÓN CAMPESINA. Con el fin de hacer efectivos los propósitos de los artículos 64 y 65 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales promoverán un servicio de educación campesina y rural, formal, no formal, e informal, con sujeción a los planes de desarrollo respectivos.
Este servicio comprenderá especialmente la formación técnica en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales que contribuyan a mejorar las condiciones humanas, de trabajo y la calidad de vida de los campesinos y a incrementar la producción de alimentos en el país.

ARTÍCULO 65. PROYECTOS INSTITUCIONALES DE EDUCACIÓN CAMPESINA. Las secretarías de educación de las entidades territoriales, o los organismos que hagan sus veces en coordinación con las secretarías de Agricultura de las mismas, orientarán el establecimiento de Proyectos Institucionales de Educación Campesina y Rural, ajustados a las particularidades regionales y locales.
Los organismos oficiales que adelanten acciones en las zonas rurales del país estarán obligados a prestar asesoría y apoyo a los proyectos institucionales.

ARTÍCULO 66. SERVICIO SOCIAL EN EDUCACIÓN CAMPESINA. Los estudiantes de establecimientos de educación formal en programas de carácter agropecuario, agroindustrial o ecológico prestarán el servicio social obligatorio capacitando y asesorando a la población campesina de la región.
Las entidades encargadas de impulsar el desarrollo del agro colaborarán con dichos estudiantes para que la prestación de su servicio sea eficiente y productiva.

ARTÍCULO 67. GRANJAS INTEGRALES. Según lo disponga el plan de desarrollo municipal o distrital, en los corregimientos o inspecciones de policía funcionará una granja integral o una huerta escolar anexa a uno o varios establecimientos educativos, en donde los educandos puedan desarrollar prácticas agropecuarias y de economía solidaria o asociativa que mejoren su nivel alimentario y sirvan de apoyo para alcanzar la autosuficiencia del establecimiento.

CAPÍTULO V.
EDUCACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN SOCIAL

ARTÍCULO 68. OBJETO Y ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN SOCIAL. La educación para la rehabilitación social comprende los programas educativos que se ofrecen a personas y grupos cuyo comportamiento individual y social exige procesos educativos integrales que le permitan su reincorporación a la sociedad.

ARTÍCULO 69. PROCESOS PEDAGÓGICOS. La educación para la rehabilitación social es parte integrante del servicio educativo; comprende la educación formal, no formal e informal y requiere métodos didácticos, contenidos y procesos pedagógicos acordes con la situación de los educandos.

PARÁGRAFO. En el caso de los establecimientos carcelarios del país se debe tener en cuenta para los planes y programas educativos, las políticas y orientaciones técnico-pedagógicas y administrativas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.

ARTÍCULO 70. APOYO A LA CAPACITACIÓN DE DOCENTES. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 68 de la Constitución Política, es deber del Estado apoyar y fomentar las instituciones, programas y experiencias dirigidos a formar docentes capacitados e idóneos para orientar la educación para la rehabilitación social, y así garantizar la calidad del servicio para las personas que por sus condiciones las necesiten.

ARTÍCULO 71. FOMENTO DE LA EDUCACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN SOCIAL. Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales fomentarán la educación para la rehabilitación y reinserción de personas y de grupos sociales con carencias y necesidades de formación. Lo harán con recursos de sus respectivos presupuestos, directamente y a través de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad.

TÍTULO IV.
ORGANIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

CAPÍTULO I.
NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 72. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO. El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, preparará por lo menos cada diez (10) años el Plan Nacional de Desarrollo Educativo que incluirá las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo.
Este Plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales de desarrollo.

PARÁGRAFO. El primer Plan decenal será elaborado en el término de dos (2) años a partir de la promulgación de la presente Ley, cubrirá el período de 1996 a 2005 e incluirá lo pertinente para que se cumplan los requisitos de calidad y cobertura.

ARTÍCULO 73. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.
El Gobierno Nacional establecerá estímulos e incentivos para la investigación y las innovaciones educativas y para aquellas instituciones sin ánimo de lucro cuyo Proyecto Educativo Institucional haya sido valorado como excelente, de acuerdo con los criterios establecidos por el Sistema Nacional de Evaluación. En este último caso, estos estímulos se canalizarán exclusivamente para que implanten un proyecto educativo semejante, dirigido a la atención de poblaciones en condiciones de pobreza, de acuerdo con los criterios definidos anualmente por el CONPES Social.

PARÁGRAFO. El Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable.

ARTÍCULO 74. SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN. El Ministerio de Educación Nacional con la asesoría de la Junta Nacional de Educación, JUNE, establecerá y reglamentará un Sistema Nacional de Acreditación de la calidad de la educación formal y no formal y de los programas a que hace referencia la presente ley, con el fin de garantizar al Estado, a la sociedad y a la familia que las instituciones educativas cumplen con los requisitos de calidad y desarrollan los fines propios de la educación.

El Sistema Nacional de Acreditación deberá incluir una descripción detallada del proyecto educativo institucional.

ARTÍCULO 75. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN. El Ministerio de Educación Nacional con la asesoría de la Junta Nacional de Educación, JUNE, establecerá y reglamentará un Sistema Nacional de Información de la educación formal, no formal e informal y de la atención educativa a poblaciones de que trata esta ley. El Sistema operará de manera descentralizada y tendrá como objetivos fundamentales:
a) Divulgar información para orientar a la comunidad sobre la calidad, cantidad y características de las instituciones, y
b) Servir como factor para la administración y planeación de la educación y para la determinación de políticas educativas a nivel nacional y territorial.

CAPÍTULO II.
CURRÍCULO Y PLAN DE ESTUDIOS

ARTÍCULO 76. CONCEPTO DE CURRÍCULO. Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.

ARTÍCULO 77. AUTONOMÍA ESCOLAR. Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional.

PARÁGRAFO. Las Secretarías de Educación departamentales o distritales o los organismos que hagan sus veces, serán las responsables de la asesoría para el diseño y desarrollo del currículo de las instituciones educativas estatales de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la presente ley.

ARTÍCULO 78. REGULACIÓN DEL CURRÍCULO. El Ministerio de Educación Nacional diseñará los lineamientos generales de los procesos curriculares y, en la educación formal establecerá los indicadores de logros para cada grado de los niveles educativos, tal como lo fija el artículo 148 de la presente ley.
Los establecimientos educativos, de conformidad con las disposiciones vigentes y con su Proyecto Educativo Institucional, atendiendo los lineamientos

a que se refiere el inciso primero de este artículo, establecerán su plan de estudios particular que determine los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración.
Cuando haya cambios significativos en el currículo, el rector de la institución educativa oficial o privada lo presentará a la Secretaría de Educación Departamental o Distrital o a los organismos que hagan sus veces, para que ésta verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley.

ARTÍCULO 79. PLAN DE ESTUDIOS. El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos.
En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y con las disposiciones legales vigentes.

CAPÍTULO III.
EVALUACIÓN

ARTÍCULO 80. EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de velar por la calidad, por el cumplimiento de los fines de la educación y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, establecerá un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación que opere en coordinación con el Servicio Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, y con las entidades territoriales y sea base para el establecimiento de programas de mejoramiento del servicio público educativo.
El Sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del docente y de los docentes directivos, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos y materiales empleados, la organización administrativa y física de las instituciones educativas y la eficiencia de la prestación del servicio.
Las instituciones que presenten resultados deficientes deben recibir apoyo para mejorar los procesos y la prestación del servicio. Aquéllas cuyas deficiencias se deriven de factores internos que impliquen negligencias y/o responsabilidad darán lugar a sanciones por parte de la autoridad administrativa competente.
El Gobierno Nacional reglamentará todo lo relacionado con este artículo.

ARTÍCULO 81. EXÁMENES PERÍODICOS. Además de la evaluación anual de carácter institucional a que se refiere el artículo 84 de la presente ley, los educadores presentarán un examen de idoneidad académica en el área de su

especialidad docente y de actualización pedagógica y profesional, cada seis (6) años según la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
El educador que no obtenga el puntaje requerido en el examen, tendrá la oportunidad de presentar un nuevo examen. Si presentado este segundo examen en el tiempo máximo de un año no obtiene el puntaje exigido, el educador incurrirá en causal de ineficiencia profesional y será sancionado de conformidad con el estatuto docente.

ARTÍCULO 82. EVALUACIÓN DE DIRECTIVOS DOCENTES ESTATALES. <Artículo derogado por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001>.

ARTÍCULO 83. EVALUACIÓN DE DIRECTIVOS DOCENTES PRIVADOS. La evaluación de los directivos docentes en las instituciones educativas privadas será coordinada entre la Secretaría de Educación respectiva o el organismo que haga sus veces, y la asociación de instituciones educativas privadas debidamente acreditada, a que esté afiliado el establecimiento educativo.
La evaluación será realizada directamente por la Secretaría de Educación, en el caso de no estar afiliado el establecimiento en el que se hallen prestando el servicio los docentes directivos.

ARTÍCULO 84. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL ANUAL. En todas las instituciones educativas se llevará a cabo al finalizar cada año lectivo una evaluación de todo el personal docente y administrativo, de sus recursos pedagógicos y de su infraestructura física para propiciar el mejoramiento de la calidad educativa que se imparte. Dicha evaluación será realizada por el Consejo Directivo de la institución, siguiendo criterios y objetivos preestablecidos por el Ministerio de Educación Nacional.
Las instituciones educativas cuya evaluación esté en el rango de excelencia, serán objeto de estímulos especiales por parte de la Nación y las que obtengan resultados negativos, deberán formular un plan remedial, asesorado y supervisado por la Secretaría de Educación, o el organismo que haga sus veces, con prioridad en la asignación de recursos financieros del municipio para su ejecución, si fuere el caso.

CAPÍTULO IV.
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO

ARTÍCULO 85. JORNADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. El servicio público educativo se prestará en las instituciones educativas en una sola jornada diurna.
Cuando las necesidades del servicio educativo lo requieran, podrán ofrecer dos jornadas escolares, una diurna y otra nocturna bajo la responsabilidad de una misma administración.

La jornada escolar nocturna se destinará, preferentemente, a la educación de adultos de que trata el Título III de la presente Ley.
PARÁGRAFO. El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, hará una evaluación de las jornadas existentes en los establecimientos educativos de sus respectivas jurisdicciones, con el fin de reglamentar el programa y los plazos dentro de los cuales deberán ajustarse a lo dispuesto en este artículo.

ARTÍCULO 86. FLEXIBILIDAD DEL CALENDARIO ACADÉMICO. Los calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las tradiciones de las instituciones educativas. El calendario académico en la educación básica secundaria y media se organizará por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestrales de 20 semanas mínimo.
La educación básica (primaria y secundaria) y media comprende un mínimo de horas efectivas de clase al año, según el reglamento que expida el Ministerio de Educación Nacional.

PARÁGRAFO. El Ministerio de Educación Nacional, dentro del plazo máximo de cinco (5) años, reglamentará los calendarios académicos de tal manera que contemplen dos (2) períodos vocacionales uniformes que amplíen las posibilidades de formación integral escolarizada o desescolarizada y, además faciliten el aprovechamiento del tiempo libre y la recreación en familia.

ARTÍCULO 87. REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA. Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo.

ARTÍCULO 88. TÍTULO ACADÉMICO. El título es el reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una persona natural por haber recibido una formación en la educación por niveles y grados y acumulado los saberes definidos por el Proyecto Educativo Institucional. Tal reconocimiento se hará constar en un diploma.
El otorgamiento de títulos en la educación es de competencia de las instituciones educativas y de las instituciones del Estado señaladas para verificar, homologar o convalidar conocimientos.

ARTÍCULO 89. REGLAMENTACIÓN DE TITULOS. El Gobierno Nacional reglamentará el sistema de títulos y validaciones de la educación por niveles y grados a que se refiere la presente Ley. Además establecerá el sistema de validación de estudios y homologación de títulos académicos obtenidos en otros países, en los mismos niveles y grados.

ARTÍCULO 90. CERTIFICADOS EN LA EDUCACIÓN NO FORMAL. Las instituciones de educación no formal podrán expedir certificados de técnico en los programas de artes y oficios y de formación vocacional que acrediten al titular para ejercer la actividad laboral correspondiente.

TÍTULO V.
DE LOS EDUCANDOS

CAPÍTULO I.
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

ARTÍCULO 91. EL ALUMNO O EDUCANDO. El alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe participar activamente en su propia formación integral. El Proyecto Educativo Institucional reconocerá este carácter.

ARTÍCULO 92. FORMACIÓN DEL EDUCANDO. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país.
Los establecimientos educativos incorporarán en el Proyecto Educativo Institucional acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los educandos, en especial las capacidades para la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, la asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las habilidades para la comunicación, la negociación y la participación.

ARTÍCULO 93. REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES. En los Consejos Directivos de los establecimientos de educación básica y media del Estado habrá un representante de los estudiantes de los tres (3) últimos grados, escogido por ellos mismos, de acuerdo con el reglamento de cada institución.
Los mecanismos de representación y la participación de los estudiantes en los establecimientos educativos privados se regirán por lo dispuesto en el artículo 142 de esta Ley.

ARTÍCULO 94. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES. En todos los establecimientos de educación básica y de educación media y en cada año lectivo, los estudiantes elegirán a un alumno del último grado que ofrezca el establecimiento, para que actúe como personero de los estudiantes y promotor de sus derechos y deberes.
El personero de los estudiantes tendrá las siguientes funciones:

a) Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como miembros de la comunidad educativa, y
b) Presentar ante el rector del establecimiento las solicitudes que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.

PARÁGRAFO. Las decisiones respecto a las solicitudes del personero de los estudiantes serán resueltas en última instancia por el Consejo directivo el organismo que haga las veces de suprema autoridad del establecimiento.

ARTÍCULO 95. MATRÍCULA. La matrícula es el acto que formaliza la vinculación del educando al servicio educativo. Se realizará por una sola vez, al ingresar el alumno a un establecimiento educativo, pudiéndose establecer renovaciones para cada período académico.

ARTÍCULO 96. PERMANENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. El reglamento interno de la institución educativa establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión.
La reprobación por primera vez de un determinado grado por parte del alumno, no será causal de exclusión del respectivo establecimiento, cuando no esté asociada a otra causal expresamente contemplada en el reglamento institucional o manual de convivencia.

ARTÍCULO 97. SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO. Los estudiantes de educación media prestarán un servicio social obligatorio durante los dos (2) grados de estudios, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

CAPÍTULO II.
BENEFICIOS ESTUDIANTILES

ARTÍCULO 98. CARNÉ ESTUDIANTIL. El servicio público educativo deberá facilitar a los estudiantes la asistencia y su participación en eventos de carácter científico, cultural, artístico, deportivo y recreativo. La forma de facilitar este acceso y los beneficios especiales para tal efecto serán reglamentados por el Gobierno Nacional.
Las entidades oficiales, y las privadas que así lo establezcan, otorgarán descuentos en las tarifas de precios o tasas de servicios culturales, artísticos, de transporte y de recreación a los estudiantes de la educación formal. Para tal efecto los estudiantes acreditarán su condición con el carné estudiantil que expedirá el respectivo establecimiento educativo.

ARTÍCULO 99. PUNTAJES ALTOS EN LOS EXÁMENES DE ESTADO. A los cincuenta (50) estudiantes del último grado de educación media que anualmente obtengan los más altos puntajes en los exámenes de Estado

realizados por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, se les garantizará el ingreso a programas de educación superior en instituciones del Estado. De igual beneficio gozarán los estudiantes de último grado de educación media que ocupen los dos primeros lugares en cada uno de los departamentos, según las mismas pruebas.
De todos éstos, quienes comprueben escasos recursos económicos serán, además, beneficiarios de subsidios educativos especiales, otorgados por la Nación.

ARTÍCULO 100. SEGURO DE SALUD ESTUDIANTIL. Los estudiantes que no se hallen amparados por algún sistema de seguridad social, en todos los niveles de la educación formal, estarán protegidos por un seguro colectivo que ampare su estado físico, en caso de accidente.
El Gobierno Nacional reglamentará lo relacionado con la gradualidad en los aportes correspondientes y presentará un plan para lograr la paulatina cobertura.

ARTÍCULO 101. PREMIO AL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL. Los estudiantes de las instituciones educativas estatales que obtengan en cada grado los dos primeros lugares en rendimiento académico, serán exonerados del pago de matrículas y pensiones correspondientes al siguiente grado.

ARTÍCULO 102. TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS.

ARTÍCULO 103. OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Y CRÉDITOS. <Artículo derogado por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001>.

TÍTULO VI.
DE LOS EDUCADORES

CAPÍTULO I.
GENERALIDADES

ARTÍCULO 104. EL EDUCADOR. El educador es el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad.
Como factor fundamental del proceso educativo:
a) Recibirá una capacitación y actualización profesional;
b) No será discriminado por razón de sus creencias filosóficas, políticas o religiosas;
c) Llevará a la práctica el Proyecto Educativo Institucional, y
d) Mejorará permanentemente el proceso educativo mediante el aporte de ideas y sugerencias a través del Consejo Directivo, el Consejo Académico y las Juntas Educativas.

ARTÍCULO 105. VINCULACIÓN AL SERVICIO EDUCATIVO ESTATAL. La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial.
Unicamente podrán ser nombrados como educadores o funcionarios administrativos de la educación estatal, dentro de la planta de personal, quienes previo concurso, hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales.

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo 1o. derogado por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001>.

PARÁGRAFO 2o. Los educadores de los servicios educativos estatales tienen el carácter de servidores públicos de régimen especial.

PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo INEXEQUIBLE>
ARTÍCULO 106. NOVEDADES DE PERSONAL. Los actos administrativos de nombramientos, traslados, permutas y demás novedades del personal docente y administrativo de la educación estatal se harán por los gobernadores y por los alcaldes de los distritos o municipios que estén administrando la educación conforme a lo establecido en la Ley 60 de 1993.
Todo nombramiento deberá ajustarse a los plazos y procedimientos legales y a a disponibilidad presupuestal.

PARÁGRAFO. Los alcaldes municipales pueden nombrar educadores con cargo a los recursos propios del municipio, cumpliendo los requisitos exigidos por la ley.

ARTÍCULO 107. NOMBRAMIENTOS ILEGALES EN EL SERVICIO EDUCATIVO ESTATAL. Es ilegal el nombramiento o vinculación de personal docente o administrativo que se haga por fuera de la planta aprobada por las entidades territoriales o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 105 de la presente Ley. Los nombramientos ilegales no producen efecto alguno y el nominador que así lo hiciere, incurrirá en causal de mala conducta sancionable con la destitución del cargo. Los costos ilegales que se ocasionen por tal proceder generarán responsabilidad económica personal imputable al funcionario o funcionarios que ordene y ejecute dicho nombramiento.

ARTÍCULO 108. EXCEPCIÓN PARA EJERCER LA DOCENCIA. En las áreas de la educación media técnica para las cuales se demuestre la carencia de personas licenciadas o escalafonadas con experiencia en el área, podrán ejercer la docencia los profesionales egresados de la educación superior en

campos afines. Para el ingreso posterior al Escalafón Nacional Docente, se exigirá el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

CAPÍTULO II.
FORMACIÓN DE EDUCADORES

ARTÍCULO 109. FINALIDADES DE LA FORMACIÓN DE EDUCADORES. La formación de educadores tendrá como fines generales:
a) Formar un educador de la más alta calidad científica y ética;
b) Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del educador;
c) Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico, y
d) Preparar educadores a nivel de pregrado y de posgrado para los diferentes niveles y formas de prestación del servicio educativo.

ARTÍCULO 110. MEJORAMIENTO PROFESIONAL. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad moral, ética, pedagógica y profesional. El Gobierno Nacional creará las condiciones necesarias para facilitar a los educadores su mejoramiento profesional, con el fin de ofrecer un servicio educativo de calidad.
La responsabilidad de dicho mejoramiento será de los propios educadores, de la Nación, de las entidades territoriales y de las instituciones educativas.

ARTÍCULO 111. PROFESIONALIZACIÓN. La formación de los educadores estará dirigida a su profesionalización, actualización, especialización y perfeccionamiento hasta los más altos niveles de posgrado. Los títulos obtenidos y los programas de perfeccionamiento que se adelanten dentro del marco de la ley, son válidos como requisitos para la incorporación y ascenso en el Escalafón Nacional Docente, conforme con lo establecido en la presente ley.
Los programas para ascenso en el escalafón docente deberán ser ofrecidos por una institución de educación superior o, al menos, bajo su tutoría. Estos programas tendrán que estar relacionados con las áreas de formación de los docentes o ser de complementación para su formación pedagógica.
En cada departamento y distrito se creará un comité de capacitación de docentes bajo la dirección de la respectiva secretaría de educación al cual se incorporarán representantes de las universidades, de las facultades de educación, de los centros experimentales piloto, de las escuelas normales y de los centros especializados en educación. Este comité tendrá a su cargo la organización de la actualización, especialización e investigación en áreas de conocimiento, de la formación pedagógica y de proyectos específicos, para lo cual el respectivo departamento o distrito, arbitrará los recursos necesarios provenientes del situado fiscal, las transferencias y de los recursos propios, de conformidad con la Ley 60 de 1993.

ARTÍCULO 112. INSTITUCIONES FORMADORAS DE EDUCADORES. Corresponde a las universidades y a las demás instituciones de educación superior que posean una facultad de educación u otra unidad académica dedicada a la educación, la formación profesional, la de posgrado y la actualización de los educadores.

PARÁGRAFO. Las escuelas normales debidamente reestructuradas y aprobadas, están autorizadas para formar educadores en el nivel de preescolar y en el ciclo de educación básica primaria. Estas operarán como unidades de apoyo académico para la formación inicial de docentes y, mediante convenio celebrado con instituciones de educación superior, podrán ofrecer formación complementaria que conduzca al otorgamiento del título de normalista superior.

ARTÍCULO 113. PROGRAMAS PARA LA FORMACIÓN DE EDUCADORES. Con el fin de mantener un mejoramiento continuo de la calidad de los docentes, todo programa de formación de docentes debe estar acreditado en forma previa, de acuerdo con las disposiciones que fije el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, o el Ministerio de Educación Nacional, para el caso de las Normales Superiores.

ARTÍCULO 114. FUNCIÓN ASESORA DE LAS INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DE EDUCADORES. Las universidades, los centros de investigación y las demás instituciones que se ocupan de la formación de educadores cooperarán con las Secretarías de Educación, o con los organismos que haga sus veces, las asesorarán en los aspectos científicos y técnicos y presentarán propuestas de políticas educativas al Ministerio de Educación Nacional.

CAPÍTULO III.
CARRERA DOCENTE

ARTÍCULO 115. RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS EDUCADORES ESTATALES. El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del Estatuto Docente y por la presente Ley. El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente ley.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política, el estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones y salarios legales.
En ningún caso se podrán desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los educadores.

ARTÍCULO 116. TÍTULO EXIGIDO PARA EJERCICIO DE LA DOCENCIA. Para ejercer la docencia en el servicio educativo estatal se requiere título de licenciado en educación o de posgrado en educación, expedido por una

universidad o por una institución de educación superior nacional o extranjera, o el título de normalista superior expedido por las normales reestructuradas, expresamente autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, y además estar inscrito en el Escalafón Nacional Docente, salvo las excepciones contempladas en la presente Ley y en el Estatuto Docente.

PARÁGRAFO 1o. Para ejercer la docencia en educación primaria, el título de educación a que se refiere el presente artículo, deberá indicar, además, el énfasis en un área del conocimiento de las establecidas en el artículo 23 de la presente Ley.

PARÁGRAFO 2o. Quienes en el momento de entrar en vigencia la presente Ley, se encuentren cursando estudios en programas ofrecidos por instituciones de educación superior conducentes al título de Tecnólogo en educación, podrán ejercer la docencia en los establecimientos educativos estatales al término de sus estudios, previa obtención del título e inscripción en el Escalafón Nacional Docente.

ARTÍCULO 117. CORRESPONDENCIA ENTRE LA FORMACIÓN Y EL EJERCICIO PROFESIONAL DE EDUCADOR. El ejercicio de la profesión de educador corresponderá a la formación por él recibida. Para el efecto, las instituciones de educación superior certificarán el nivel y área del conocimiento en que hizo énfasis el programa académico.

PARÁGRAFO. El título de normalista superior sólo acredita para ejercer la docencia en el nivel de preescolar y en el ciclo de educación básica primaria, en los términos de la presente Ley.

ARTÍCULO 118. EJERCICIO DE LA DOCENCIA POR OTROS PROFESIONALES. Por necesidades del servicio, quienes posean título expedido por las instituciones de educación superior, distinto al de profesional en educación o licenciado, podrán ejercer la docencia en la educación por niveles y grados, en el área de su especialidad o en un área afín. Estos profesionales podrán también ser inscritos en el Escalafón Nacional Docente, siempre y cuando acrediten estudios pedagógicos en el país o en el extranjero, en una facultad de educación o en otra unidad académica responsable de la formación de educadores, con una duración no menor de un año.

PARÁGRAFO. El personal actualmente vinculado en las anteriores condiciones, tiene derecho a que se le respete la estabilidad laboral y a incorporarse al Escalafón Nacional Docente, siempre y cuando llene los requisitos indicados en este artículo.

ARTÍCULO 119. IDONEIDAD PROFESIONAL. Para los educadores, el título, el ejercicio eficiente de la profesión y el cumplimiento de la Ley serán prueba de

idoneidad profesional. El cumplimiento de los deberes y obligaciones, la no violación de las prohibiciones y el no incurrir en las causales de mala conducta establecidas en el Estatuto Docente, darán lugar a presunción de idoneidad ética.

CAPÍTULO IV.
ESCALAFON DOCENTE

ARTÍCULO 120. JUNTA NACIONAL DE ESCALAFÓN. <Artículo derogado por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001>.
ARTÍCULO 121. OFICINA DE ESCALAFÓN. <Artículo derogado por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001>.
ARTÍCULO 122. DELEGADO ANTE LA JUNTA SECCIONAL DE ESCALAFÓN. <Artículo derogado por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001>.
ARTÍCULO 123. INSCRIPCIÓN EN EL ESCALAFÓN. <Artículo derogado por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001>.
ARTÍCULO 124. PROCESOS DISCIPLINARIOS. <Artículo derogado por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001>.
ARTÍCULO 125. ACOSO SEXUAL. <Artículo derogado por el Código Disciplinario Unico>
CAPÍTULO V.
DIRECTIVOS DOCENTES

ARTÍCULO 126. CARÁCTER DE DIRECTIVO DOCENTE. Los educadores que ejerzan funciones de dirección, de coordinación, de supervisión e inspección, de programación y de asesoría, son directivos docentes.

ARTÍCULO 127. AUTORIDAD NOMINADORA DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES. Los rectores o directores, vicerrectores, coordinadores, supervisores, directores de núcleo y demás directivos docentes de las instituciones educativas estatales a que se refiere el Estatuto Docente, serán nombrados por los gobernadores, los alcaldes de distritos o municipios que hayan asumido dicha competencia, previo concurso convocado por el departamento distrito.

ARTÍCULO 128. REQUISITOS DE LOS CARGOS DE DIRECCIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO. Los cargos de dirección del sector educativo en las entidades territoriales, serán ejercidos por licenciados o profesionales de reconocida trayectoria en materia educativa.
El nominador que contravenga esta disposición será sancionado disciplinariamente de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

ARTÍCULO 129. CARGOS DIRECTIVOS DOCENTES. Las entidades territoriales que asuman la prestación directa de los servicios educativos

estatales podrán crear cargos directivos docentes, siempre y cuando las instituciones educativas lo requieran, con las siguientes denominaciones:
1. Rector o director de establecimiento educativo.
2. Vicerrector.
3. Coordinador.
4. Director de Núcleo de Desarrollo Educativo.
5. Supervisor de Educación.

PARÁGRAFO. En las instituciones educativas del Estado, los cargos directivos docentes deben ser provistos con docentes escalafonados y de reconocida trayectoria en materia educativa. Mientras ejerzan el cargo tendrán derecho a una remuneración adicional y cumplirán funciones, según la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

ARTÍCULO 130. FACULTADES SANCIONATORIAS. Los rectores o directores de
las instituciones educativas del Estado tienen la facultad de sancionar disciplinariamente a los docentes de su institución de conformidad con el Estatuto Docente y la presente Ley y a los funcionarios administrativos de acuerdo con lo establecido en la carrera administrativa.

PARÁGRAFO. Los gobernadores y los alcaldes que asuman el nombramiento de los educadores, tienen la facultad de sancionarlos cuando a ello hubiere lugar, de conformidad con el Estatuto Docente y la presente Ley.

ARTÍCULO 131. ENCARGO DE FUNCIONES. En caso de ausencias temporales o definitivas de directivos docentes o de educadores en un establecimiento educativo estatal, el rector o director encargará de sus funciones a otra persona calificada vinculada a la institución, mientras la autoridad competente suple la ausencia o provee el cargo.
El rector o director informará inmediatamente por escrito a la autoridad competente para que dicte el acto administrativo necesario en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, momento a partir del cual se producen los efectos laborales correspondientes.
El funcionario que debe dictar el acto administrativo arriba señalado, incurrirá en causal de mala conducta si no lo hace oportunamente.

ARTÍCULO 132. FACULTADES DEL RECTOR PARA SANCIONAR Y OTORGAR DISTINCIONES. El rector o director del establecimiento educativo podrá otorgar distinciones o imponer sanciones a los estudiantes según el reglamento o manual de convivencia de éste, en concordancia con lo que al respecto disponga el Ministerio de Educación Nacional.

CAPÍTULO VI.
ESTÍMULOS PARA DOCENTES

ARTÍCULO 133. AÑO SABATICO. Anualmente los veinte (20) educadores estatales de la educación por niveles y grados mejor evaluados del país y que además hayan cumplido 10 años de servicio, tendrán por una (1) sola vez, como estímulo, un (1) año de estudio sabático, por cuenta del Estado, según la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

ARTÍCULO 134. INCENTIVO ESPECIAL PARA ASCENSO EN EL ESCALAFON. <Artículo derogado por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001>.
ARTÍCULO 135. APOYO DEL ICETEX. Créase el programa de crédito educativo para la profesionalización y perfeccionamiento del personal docente del servicio educativo estatal. El programa será administrado por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo, Icetex, y operará mediante el sistema de cofinanciación, con los aportes que le destinen el Gobierno Nacional y los de las entidades territoriales.

ARTÍCULO 136. VIVIENDA SOCIAL. El uno por ciento (1%) de los proyectos de vivienda social, será adjudicado prioritariamente a solicitantes que sean educadores o administradores educativos de establecimientos públicos o privados y que reúnan las condiciones del proyecto respectivo.

ARTÍCULO 137. FINANCIACIÓN DE PREDIOS RURALES PARA DOCENTES. Con el fin de facilitar el arraigo de los docentes en las zonas rurales en donde laboran, el Gobierno Nacional organizará un programa especial para financiarles la adquisición de predios rurales, a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora.

TÍTULO VII.
DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CAPÍTULO I.
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

ARTÍCULO 138. NATURALEZA Y CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. Se entiende por establecimiento educativo o institución educativa, toda institución de carácter estatal, privada o de economía solidaria organizada con el fin de prestar el servicio público educativo en los términos fijados por esta Ley.
El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos:
a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial;
b) Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados, y
c) Ofrecer un proyecto educativo institucional.
Los establecimientos educativos por niveles y grados, deben contar con la infraestructura administrativa y soportes de la actividad pedagógica para

ofrecer al menos un grado de preescolar y los nueve grados de educación básica. El Ministerio de Educación Nacional definirá los requisitos mínimos de infraestructura, pedagogía, administración, financiación y dirección que debe reunir el establecimiento educativo para la prestación del servicio y la atención individual que favorezca el aprendizaje y la formación integral del niño.

PARÁGRAFO. El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales y teniendo en cuenta la infraestructura educativa actual, establecerá el programa y los plazos para que los actuales establecimientos educativos se ajusten a lo dispuesto en este artículo. Cumplidos estos plazos, no podrán existir establecimientos educativos que ofrezcan exclusivamente educación básica, en uno sólo de sus ciclos de primaria o secundaria.
Mientras ofrezcan un nivel de educación de manera parcial, deberán establecer convenios con otros establecimientos que desarrollen un proyecto educativo similar o complementario, para garantizar la continuidad del proceso educativo de sus alumnos.

ARTÍCULO 139. ORGANIZACIONES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. En cada establecimiento educativo se promoverá por parte del Consejo Directivo la organización de asociaciones de padres de familia y de estudiantes vinculados a la respectiva institución educativa que dinamicen el proceso educativo institucional.

ARTÍCULO 140. ASOCIACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Con el fin de prestar un servicio más eficiente, los establecimientos educativos, tanto oficiales como privados, podrán asociarse en núcleos o instituciones asociadas. Así mismo, los municipios podrán asociarse para crear instituciones educativas de carácter asociativo.
El Gobierno Nacional fomentará con estímulos especiales, la conformación de estos núcleos o instituciones asociadas.

ARTÍCULO 141. BIBLIOTECA O INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y DEPORTIVA. Los establecimientos educativos que ofrezcan el servicio por niveles y grados, contarán con una biblioteca, infraestructura para el desarrollo de actividades artísticas y deportivas y un órgano de difusión de carácter académico.
Los planes de desarrollo nacionales y territoriales, definirán para los establecimientos educativos estatales, las inversiones y plazos en que se deberá hacer efectivo lo dispuesto en este artículo.
Los establecimientos educativos privados dispondrán del plazo que para el efecto establezca la respectiva entidad territorial, de acuerdo con los criterios que defina el Gobierno Nacional.

PARÁGRAFO. En el caso de municipios con una población igual o menor de veinte mil (20.000) habitantes, la obligación de contar con biblioteca y la

infraestructura de que trata el presente artículo, podrá ser cumplida a través de convenios con la biblioteca municipal o con una institución sin ánimo de lucro que posea instalaciones apropiadas para el uso escolar, siempre y cuando estén ubicadas en la vecindad del establecimiento educativo.

CAPÍTULO II.
GOBIERNO ESCOLAR

ARTÍCULO 142. CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR. Cada establecimiento educativo del Estado tendrá un gobierno escolar conformado por el rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico.
Las instituciones educativas privadas establecerán en su reglamento, un gobierno escolar para la participación de la comunidad educativa a que hace referencia el artículo 68 de la Constitución Política. En el gobierno escolar serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los administradores y de los padres de familia en aspectos tales como la adopción y verificación del reglamento escolar, la organización de las actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y comunitarias, la conformación de organizaciones juveniles y demás acciones que redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar.
Los voceros de los estamentos constitutivos de la comunidad educativa, podrán presentar sugerencias para la toma de decisiones de carácter financiero, administrativo y técnico-pedagógico.
Tanto en las instituciones educativas públicas como privadas, la comunidad educativa debe ser informada para permitir una participación seria y responsable en la dirección de las mismas.

ARTÍCULO 143. CONSEJO DIRECTIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES. En cada establecimiento educativo del Estado existirá un Consejo Directivo integrado por:
a) El rector del establecimiento educativo, quien lo convocará y presidirá;
b) Dos representantes de los docentes de la institución;
c) Dos representantes de los padres de familia;
d) Un representante de los estudiantes que debe estar cursando el último grado de educación que ofrezca la institución;
e) Un representante de los ex alumnos de la institución, y
f) Un representante de los sectores productivos del área de influencia del sector productivo.
Para la elección de los representantes a que se refiere este artículo, el Gobierno Nacional establecerá la reglamentación correspondiente que asegure la participación de cada uno de los estamentos que lo integran y fije el período para el cual se elegirán.
PARÁGRAFO. Los establecimientos educativos con escaso número de docentes o de alumnos y que se hayan acogido al régimen de asociación

previsto en los artículos 138 y 140 de esta ley, contarán con un consejo directivo común elegido de manera democrática.

ARTÍCULO 144. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. Las funciones del consejo Directivo serán las siguientes:
a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución y que no sean competencia de otra autoridad;
b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con los alumnos del plantel educativo;
c) Adoptar el reglamento de la institución, de conformidad con las normas vigentes;
d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles;
e) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado;
f) Aprobar el plan anual de actualización del personal de la institución presentado por el rector;
g) Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces para que verifique el cumplimiento de los requisitos;
h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa;
i) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno;
j) Participar en la evaluación anual de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la institución;
k) Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas;
l) Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa;
m) Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas;
n) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y la forma de recolectarlos, y
ñ) Darse su propio reglamento.

ARTÍCULO 145. CONSEJO ACADÉMICO. El Consejo Académico, convocado y presidido por el rector o director, estará integrado por los directivos docentes y un docente por cada área o grado que ofrezca la respectiva institución. Se reunirá periódicamente para participar en:
a) El estudio, modificación y ajustes al currículo, de conformidad con lo establecido en la presente ley;
b) La organización del plan de estudio;
c) La evaluación anual e institucional, y

d) Todas las funciones que atañen a la buena marcha de la institución educativa.

TÍTULO VIII.
DIRECCION, ADMINISTRACION, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

CAPÍTULO I.
DE LA NACIÓN

ARTÍCULO 146. COMPETENCIA DEL CONGRESO. Corresponde al Congreso de la República dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular la educación como un servicio público con función social, conforme a los artículos 150, numerales 19 y 23, y 365 de la Constitución Política.

ARTÍCULO 147. NACIÓN Y ENTIDADES TERRITORIALES. La Nación y las entidades territoriales ejercerán la dirección y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución Política, la Ley 60 de 1993, la presente ley y las demás que expida el Congreso Nacional.

ARTÍCULO 148. FUNCIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. El Ministerio de Educación Nacional, en cuanto al servicio público educativo, tiene las siguientes funciones:
1. De Política y Planeación:
a) Formular las políticas, establecer las metas y aprobar los planes de desarrollo del sector a corto, mediano y largo plazo, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política;
b) Diseñar los lineamientos generales de los procesos curriculares;
c) Proponer el ajuste del situado fiscal, conforme a la evaluación anual de recursos financieros;
d) <Literal derogado por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001>.
e) Fomentar las innovaciones curriculares y pedagógicas;
f) Promover y estimular la investigación educativa, científica y tecnológica;
g) Evaluar y controlar los resultados de los planes y programas educativos;
h) Elaborar el Registro Unico Nacional de docentes estatales, e
i) Proponer los programas de inversión del sector educativo que se deben desarrollar a través del Fondo de Inversión Social, FIS y coordinar su ejecución.
2. De Inspección y Vigilancia:
a) Velar por el cumplimiento de la ley y de los reglamentos sobre educación;
b) Asesorar y apoyar a los departamentos, a los distritos y a los municipios en el desarrollo de los procesos curriculares pedagógicos;
c) Evaluar en forma permanente la prestación del servicio educativo;
d) Fijar los criterios para evaluar el rendimiento escolar de los educandos y para su promoción a niveles superiores, y

e) Cumplir y hacer cumplir lo establecido por el Escalafón Nacional Docente y por el Estatuto Docente, de acuerdo con lo establecido en la presente ley.
3. De Administración:
a) Dirigir la actividad administrativa en el sector educativo y ejecutar la ley;
b) Coordinar a través de las Secretarías de Educación, o de los organismos que hagan sus veces, la ejecución de los planes de desarrollo educativo en los departamentos, distritos y municipios;
c) Establecer el sistema descentralizado de información para la adecuada planeación y administración de la educación y para ofrecer información oportuna a la sociedad y a los padres de familia para que puedan elegir la mejor educación para sus hijos, y
d) Coordinar todas las acciones educativas del Estado y de quienes presten el servicio público en todo el territorio nacional.
4. Normativas:
a) Fijar criterios técnicos para la aprobación de las plantas de personal del servicio educativo estatal por parte de las entidades territoriales;
b) Fijar los criterios técnicos para el diseño de la canasta educativa;
c) Establecer los criterios para la actualización y el perfeccionamiento del personal docente y administrativo;
d) Fijar los criterios técnicos para los concursos de selección, vinculación, ascenso y traslado del personal docente y directivo docente que deberán realizarse en cada uno de los departamentos y distritos, de conformidad con el Estatuto Docente y la presente ley;
e) Definir criterios pedagógicos que sirvan de guía para la construcción y dotación de instituciones educativas;
f) Preparar los actos administrativos y los contratos del Ministerio de Educación Nacional, y
g) Elaborar y presentar al Congreso de la República proyectos de ley que permitan mejorar la legislación educativa.

PARÁGRAFO. El Ministerio de Educación Nacional podrá delegar en las secretarías de educación departamentales y distritales las funciones administrativas de expedición de la tarjeta profesional del secretariado, la expedición y registro de los títulos de bachiller por desaparición de la institución educativa y los procedimientos que se relacionan con el otorgamiento de personería jurídica para las asociaciones de padres de familia de las instituciones educativas, previa evaluación que permita establecer la eficacia, economía y celeridad para el cumplimiento de estas funciones, por dichos entes territoriales.

ARTÍCULO 149. REPRESENTANTE DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAL. El Ministerio de Educación Nacional tendrá un representante de su libre nombramiento y remoción ante cada uno de los departamentos, y ante el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, que lo representará ante las juntas departamentales y distritales de educación. Ejercerá la coordinación ordenada

por el artículo 148 de esta ley y cumplirá las demás funciones que le asigne el Ministro de Educación.

CAPÍTULO II.
DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES

ARTÍCULO 150. COMPETENCIAS DE ASAMBLEAS Y CONCEJOS. Las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales, respectivamente, regulan la educación dentro de su jurisdicción, en los términos de la Ley 60 de 1993 y la presente ley.
Los gobernadores y los alcaldes ejercerán, en relación con la educación, las facultades que la Constitución Política y las leyes les otorgan.

ARTÍCULO 151. FUNCIONES DE LAS SECRETARIAS DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES DE EDUCACIÓN. Las secretarías de educación departamentales y distritales o los organismos que hagan sus veces, ejercerán dentro del territorio de su jurisdicción, en coordinación con las autoridades nacionales y de conformidad con las políticas y metas fijadas para el servicio educativo, las siguientes funciones:
a) Velar por la calidad y cobertura de la educación en su respectivo territorio;
b) Establecer las políticas, planes y programas departamentales y distritales de educación, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional;
c) Organizar el servicio educativo estatal de acuerdo con las prescripciones legales y reglamentarias sobre la materia y supervisar el servicio educativo prestado por entidades oficiales y particulares;
d) Fomentar la investigación, innovación y desarrollo de currículos, métodos y medios pedagógicos;
e) Diseñar y poner en marcha los programas que se requieran para mejorar la eficiencia, la calidad y la cobertura de la educación;
f) Dirigir y coordinar el control y la evaluación de calidad, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y aplicar los ajustes necesarios;
g) Realizar los concursos departamentales y distritales para el nombramiento del personal docente y de directivos docentes del sector estatal, en coordinación con los municipios;
h) Programar en coordinación con los municipios, las acciones de capacitación del personal docente y administrativo estatal;
i) Prestar asistencia técnica a los municipios que la soliciten, para mejorar la prestación del servicio educativo;
j) Aplicar, en concurrencia con los municipios, los incentivos y sanciones a las instituciones educativas, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones de calidad y gestión;
k) Evaluar el servicio educativo en los municipios;

l) Aprobar la creación y funcionamiento de las instituciones de educación formal y no formal, a que se refiere la presente ley;
m) Consolidar y analizar la información de los municipios y remitirla al Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con los estándares fijados por éste, y
n) Establecer un sistema departamental y distrital de información en concordancia con lo dispuesto en los artículos 148 y 75 de esta ley.

ARTÍCULO 152. FUNCIONES DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN MUNICIPALES. Las secretarías de educación municipales ejercerán las funciones necesarias para dar cumplimiento a las competencias atribuidas por la Ley 60 de 1993, la presente ley y las que le delegue el respectivo departamento.
En los municipios donde no exista secretaría de educación municipal, estas funciones serán ejercidas por el alcalde, asesorado por el Director del Núcleo respectivo.

ARTÍCULO 153. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA EDUCACIÓN. Administrar la educación en los municipios es organizar, ejecutar, vigilar y evaluar el servicio educativo; nombrar, remover, trasladar, sancionar, estimular, dar licencias y permisos a los docentes, directivos docentes y personal administrativo; orientar, asesorar y en general dirigir la educación en el municipio; todo ello de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, el Estatuto Docente y en la Ley 60 de 1993.

ARTÍCULO 154. NUCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO. <Artículo derogado por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001>.
CAPÍTULO III.
DE LAS JUNTAS Y FOROS

SECCIÓN I.
DE LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN

ARTÍCULO 155. JUNTA NACIONAL DE EDUCACION, JUNE. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Créase la Junta Nacional de Educación, JUNE, que funcionará como órgano científico, con el carácter de consultor permanente del Ministerio de Educación Nacional, para la planeación y diseño de las políticas educativas del Estado.
ARTÍCULO 156. MIEMBROS Y PERÍODO DE LA JUNTA. La Junta Nacional de Educación, June, estará integrada así:
a) El Ministro de Educación Nacional, quien la preside;
b) Un delegado de entidad territorial departamental y distrital, designado por la asociación que los agrupa o represente;
c) Un delegado de las entidades territoriales municipales, designado por la asociación que los agrupa o represente;

d) Dos (2) investigadores en el campo educativo, uno postulado por el sector oficial y el otro por el sector privado de la educación que serán designados por el Presidente de la República de ternas presentadas por las organizaciones de cada sector que demuestren tener el mayor número de afiliados;
e) Un representante de las instituciones dedicadas a la investigación educativa, designado por el Presidente de la República, de terna presentada por dichos organismos, según lo disponga el reglamento.
Los miembros de la Junta Nacional de Educación, June, indicados en los literales b), c), d) y e), serán elegidos para un período de cuatro (4) años prorrogables y percibirán los honorarios que determine el reglamento. La primera Junta termina su período el 31 de diciembre de 1995.

PARÁGRAFO. <Parágrafo subrogado por el artículo 130 del Decreto 2150 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> La Junta Nacional de Educación, JUNE, contará con una Unidad Técnica Operativa de carácter permanente y estará dedicada al estudio, análisis y formulación de propuestas que le permita cumplir con sus funciones y coordine sus actividades.
La organización, la composición y las funciones específicas de la Unidad Técnica, serán reglamentadas por la JUNE.
ARTÍCULO 157. FUNCIONES DE LA JUNTA NACIONAL DE EDUCACIÓN. La Junta Nacional de Educación, June, tiene las siguientes funciones generales:
a) Ser órgano consultivo permanente en materias relacionadas con la prestación y organización del servicio público de la educación;
b) Proponer al Gobierno Nacional políticas, programas y proyectos conducentes al mejoramiento de la calidad, cobertura y gestión del servicio educativo;
c) Formular propuestas al Gobierno Nacional sobre proyectos de ley y reglamentaciones que faciliten el cabal desarrollo de la educación;
d) Plantear acciones de investigación que promuevan el desarrollo científico del proceso educativo nacional;
e) Presentar periódicamente al Gobierno Nacional, con base en los resultados de investigaciones estadísticas, informes de evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos del servicio público de la educación;
f) Darse su propio reglamento, y
g) Las demás que el Gobierno Nacional considere pertinentes en desarrollo de la presente ley.

ARTÍCULO 158. JUNTAS DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES DE EDUCACIÓN. En cada uno de los departamentos y distritos se conformará una Junta de Educación con las siguientes funciones:
a) Verificar que las políticas, objetivos, metas y planes que trace el Ministerio de Educación Nacional, con la asesoría de la Junta Nacional de Educación, June, se cumplan cabalmente en el departamento o en el distrito;
b) Verificar que los currículos que presenten las instituciones educativas, individualmente o por asociaciones de instituciones, se ajusten a los criterios

establecidos por la presente ley, previo estudio y recomendación de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces;
c) Proponer las plantas de personal docente y administrativo estatal, para las instituciones educativas, con base en las solicitudes presentadas por los municipios y con ajuste a los recursos presupuestales y a la Ley 60 de 1993;
d) Aprobar planes de profesionalización, especialización, actualización y perfeccionamiento para el personal docente y administrativo que presente la Secretaría de Educación, o el organismo que haga sus veces, de acuerdo con las necesidades de la región;
e) Presentar a la Secretaría de Educación o al organismo que haga sus veces, criterios para fijar el calendario académico de las instituciones educativas del departamento o distrito;
f) Vigilar que los Fondos Educativos Regionales, FER, cumplan correcta y eficientemente con los objetivos y funciones señalados en la presente Ley y en la Ley 60 de 1993;
g) <Literal derogado por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001>.
h) Presentar anualmente un informe público sobre su gestión, e
i) Darse su propio reglamento.

ARTÍCULO 159. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, JUNE. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Las Juntas Departamentales de Educación estarán conformadas por:
1. El Gobernador del departamento o su delegado quien la presidirá.
2. El Secretario de Educación Departamental.
3. El Secretario de Hacienda Departamental o su delegado.
4. El Director de la Oficina de Planeación Departamental o del organismo que haga sus veces.
5. El Representante del Ministro de Educación Nacional.
6. Un alcalde designado por los alcaldes del mismo departamento.
7. Dos representantes de los educadores designados por la organización sindical de educadores que acredite el mayor número de afiliados en el departamento.
8. Un representante de los directivos docentes del departamento designado por la organización de directivos docentes que acredite el mayor número de afiliados.
9. Un representante de las instituciones educativas privadas designado por la asociación que acredite el mayor número de afiliados.
10. Un representante de las comunidades indígenas o campesinas o uno de las comunidades negras o raizales, si las hubiere, escogido por las respectivas organizaciones, y
11. Un representante del sector productivo.
ARTÍCULO 160. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DISTRITAL DE EDUCACION, JUDI. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> En cada uno de los distritos habrá una Junta Distrital de Educación conformada por:
1. El Alcalde del Distrito quien la presidirá.

2. El Secretario de Educación Distrital.
3. El Secretario de Hacienda Distrital o su delegado.
4. El Director de la Oficina de Planeación Distrital o del organismo que haga sus veces.
5. El Representante del Ministerio de Educación Nacional.
6. Dos (2) representantes de los educadores designados por la organización sindical de educadores que acredite el mayor número de afiliados en el distrito.
7. Un representante de las instituciones educativas privadas designado por la asociación que acredite el mayor número de afiliados.
8. Un representante de los directivos docentes del distrito designado por la organización de directivos docentes que acredite el mayor número de afiliados.
9. Un representante del sector productivo, y
10. Un representante de las comunidades negras, si las hubiere, escogido por las respectivas organizaciones.

ARTÍCULO 161. JUNTA MUNICIPAL DE EDUCACION, JUME. En cada uno de los municipios se conformará una Junta de Educación con las siguientes funciones:

a) Verificar que las políticas, objetivos, planes y programas educativos nacionales y departamentales se cumplan cabalmente en los municipios;
b) Fomentar, evaluar y controlar el servicio educativo en su municipio;
c) Coordinar y asesorar a las instituciones educativas para la elaboración y desarrollo del currículo;
d) Proponer al departamento la planta de personal docente y administrativa de la educación, de acuerdo con sus planes, necesidades y recursos;
e) <Literal e) derogado por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001>.
f) Contribuir al control a la inspección y vigilancia de las instituciones educativas del municipio conforme a la ley;
g) Recomendar la construcción, dotación y mantenimiento de las instituciones educativas estatales que funcionen en su municipio;
h) Presentar anualmente un informe público sobre su gestión, e
i) Darse su propio reglamento.

ARTÍCULO 162. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE EDUCACION, JUME. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Las Juntas Municipales de Educación estarán conformadas por:
1. El Alcalde, quien la presidirá.
2. El Secretario de Educación Municipal o el funcionario que haga sus veces.
3. Un Director de Núcleo designado por la asociación regional de directores de núcleo o quien haga sus veces.
4. Un representante del Concejo Municipal o de las juntas administradoras locales, donde existan.
5. Dos (2) representantes de los educadores, uno de los cuales será directivo docente, designados por las respectivas organizaciones de educadores y de directivos docentes que acrediten el mayor número de afiliados.
6. Un representante de los padres de familia.

7. Un representante de las comunidades indígenas, negras o campesinas, si las hubiere, designado por las respectivas organizaciones.
8. Un representante de las instituciones educativas privadas del municipio, si las hubiere, designado por la asociación que acredite el mayor número de afiliados.
ARTÍCULO 163. REGLAMENTACIÓN. El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento de las Juntas creadas en este capítulo, y en especial lo relativo a las inhabilidades e incompatibilidades de sus miembros.

SECCIÓN II.
DE LOS FOROS EDUCATIVOS

ARTÍCULO 164. OBJETO Y ORGANIZACIÓN PERÍODICA. Créanse los Foros Educativos municipales, distritales, departamentales y nacional con el fin de reflexionar sobre el estado de la educación y hacer recomendaciones a las autoridades educativas respectivas para el mejoramiento y cobertura de la educación. Serán organizados anualmente por las respectivas autoridades y reunirán a las comunidades educativas de su jurisdicción.
Los foros se iniciarán en el primer trimestre del año en cada uno de los municipios y distritos, de manera que sus recomendaciones sean estudiadas posteriormente por los foros departamentales y las de éstos, por el Foro Nacional.
El Gobierno Nacional, dictará la reglamentación respectiva.

ARTÍCULO 165. FOROS EDUCATIVOS DISTRITALES Y MUNICIPALES. Los foros educativos distritales y municipales serán convocados y presididos por los alcaldes y en ellos participarán los miembros de la Junta Municipal de Educación, Jume, y de la Junta Distrital de Educación, Judi, por derecho propio, las autoridades educativas de la respectiva entidad territorial y los representantes de la comunidad educativa seleccionados por sus integrantes.

PARÁGRAFO. El Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá, Distrito Capital, convocará un foro por cada alcaldía menor que será presidido por el respectivo alcalde menor. El Alcalde Mayor reglamentará la participación y el funcionamiento de los foros de las alcaldías menores.

ARTÍCULO 166. FOROS EDUCATIVOS DEPARTAMENTALES. Los foros educativos departamentales serán convocados y presididos por los gobernadores y en ellos participarán además:
- El Secretario de Educación Departamental o el funcionario que haga sus veces.
- Un delegado de la Asamblea Departamental que no sea diputado.
- El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el departamento.
- El Director Regional del Sena en el departamento.

- Dos representantes de los municipios elegidos por la asociación de municipios.
- Un representante de la iglesia.
- Un rector de universidad estatal, si la hubiere.
- Un rector de universidad privada, si la hubiere.
- Un representante de las instituciones educativas privadas.
- Un representante de los educadores, designado por la asociación sindical de educadores que acredite mayor número de afiliados.
- Un representante de los directivos docentes, designado por la asociación de directivos docentes que acredite mayor número de afiliados.
- Un representante de los gremios económicos.
- Un representante de las filiales de cada una de las centrales obreras.
- Un representante de las asociaciones de padres de familia de las instituciones educativas, designado por las organizaciones que los agrupen.
- Un representante de los supervisores de educación.
- Un representante de los grupos étnicos, si los hubiere.
- Un representante de los funcionarios administrativos, designado por la organización que demuestre tener el mayor número de afiliados, y
- Un representante de los estudiantes elegido por las organizaciones que los agrupen.

PARÁGRAFO. Los miembros de la Junta Departamental de Educación, Jude, asistirán a estos foros por derecho propio. Podrán participar representantes de las organizaciones que tengan relación con la educación en el departamento, por invitación de la Junta.

ARTÍCULO 167. FORO EDUCATIVO NACIONAL. El Ministerio de Educación Nacional convocará y presidirá anualmente un Foro Educativo Nacional que agrupe las recomendaciones de los foros departamentales y elabore propuestas a la Junta Nacional de Educación, June y a las autoridades nacionales.
En estos foros participarán:
- El Ministro de Educación Nacional.
- El Ministro de Salud, o su delegado.
- Un gobernador, nombrado por la Conferencia de Gobernadores.
- Un alcalde nombrado por la Federación Colombiana de Municipios.
- Los Presidentes de las Comisiones Sexta Constitucionales de Senado y Cámara.
- Un ex Ministro de educación nombrado por el Ministro de Educación.
- El Director de Colciencias.
- El Director del ICFES.
- El Director del Sena.
- El rector de la Universidad Nacional.
- El rector de la Universidad Pedagógica Nacional.
- El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

- Un rector representante de las demás universidades públicas.
- Un rector representante de las universidades privadas.
- Un rector de establecimiento educativo estatal.
- Un rector de establecimiento educativo privado.
- Un representante de la iglesia.
- Un representante de los educadores, designado por la asociación sindical de educadores que acredite mayor número de afiliados.
- Un representante de los directivos docentes, designado por la asociación de directivos docentes que acredite mayor número de afiliados.
- Un secretario de Educación Departamental o el funcionario que haga sus veces.
- Un representante de los profesores universitarios.
- Un representante de las centrales obreras.
- Un representante de los gremios económicos.
- Un representante de las organizaciones de padres de familia.
- Un representante de las organizaciones nacionales de los grupos étnicos.
- Un representante de los estudiantes, elegido por las organizaciones de reconocida representación de la educación por niveles y grados y la educación superior.
- Un representante de los funcionarios administrativos del servicio educativo designado por la organización que tenga el mayor número de afiliados, y
- Un representante del Comité de Linguística Aborigen.

PARÁGRAFO. Los miembros de la Junta Nacional de Educación, June, asistirán a este foro por derecho propio. Podrán participar representantes de las organizaciones que tengan relación con la educación a nivel nacional, por invitación de la Junta.

CAPÍTULO IV.
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

ARTÍCULO 168. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA EDUCACIÓN. En cumplimiento de la obligación constitucional, el Estado ejercerá a través del Presidente de la República, la suprema inspección y vigilancia de la Educación y velará por el cumplimiento de sus fines en los términos definidos en la presente ley. Ejecutará esa función a través de un proceso de evaluación y un cuerpo técnico que apoye, fomente y dignifique la educación.
Igualmente, velará y exigirá el cumplimiento de las disposiciones referentes a áreas obligatorias y fundamentales, actividades curriculares y extracurriculares y demás requerimientos fijados en la presente ley; adoptará las medidas necesarias que hagan posible la mejor formación ética, moral, intelectual y física de los educandos, así como su acceso y permanencia en el servicio público educativo.
El Presidente de la República o su delegado, en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero

del artículo 80 de la presente ley podrá aplicar a los establecimientos educativos, previo el correspondiente proceso y cuando encuentre mérito para ello, las sanciones de amonestación pública, suspensión o cancelación del reconocimiento oficial.

ARTÍCULO 169. DELEGACIÓN DE FUNCIONES. En los términos del artículo 211 de la Constitución Política, el Presidente de la República podrá delegar en el Ministro de Educación Nacional, en los Gobernadores y en los Alcaldes, el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia previstas en esta Ley.

ARTÍCULO 170. FUNCIONES Y COMPETENCIAS. Las funciones de inspección, vigilancia, control y asesoría de la educación y administración educativa serán ejercidas por las autoridades del nivel nacional sobre las del nivel departamental y del Distrito Capital, por las autoridades del nivel departamental sobre las de orden distrital y municipal y por estas últimas sobre las instituciones educativas.

ARTÍCULO 171. EJERCICIO DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A NIVEL LOCAL. Los gobernadores y los alcaldes podrán ejercer la inspección y vigilancia a través de las respectivas secretarías de Educación o de los organismos que hagan sus veces.
En los municipios donde no exista Secretaría de Educación, el Alcalde podrá delegar la función de inspección y vigilancia en los directores de núcleo del correspondiente municipio.
El Gobierno Nacional reglamentará el ámbito de competencia de cada nivel de supervisión o inspección en los establecimientos educativos de tal manera que ésta sea realizada en forma coordinada y con la periodicidad adecuada.

ARTÍCULO 172. CUERPO TÉCNICO DE SUPERVISORES. <Artículo derogado por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001>.
TÍTULO IX.
FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN

CAPÍTULO I.
RECURSOS FINANCIEROS ESTATALES

ARTÍCULO 173. FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN ESTATAL. La educación estatal se financia con los recursos del situado fiscal, con los demás recursos públicos nacionales dispuestos en la ley, más el aporte de los departamentos, los distritos y los municipios, según lo dispuesto en la Ley 60 de 1993.

ARTÍCULO 174. NATURALEZA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. Los recursos financieros que se destinen a la educación se consideran gasto público social.

ARTÍCULO 175. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES DE LA EDUCACIÓN ESTATAL. Con los recursos del situado fiscal y demás que se determinen por ley, se cubrirá el gasto del servicio educativo estatal, garantizando el pago de salarios y prestaciones sociales del personal docente, directivo docente y administrativo de la educación estatal en sus niveles de educación preescolar, básica (primaria y secundaria) y media. Estos recursos aumentarán anualmente de manera que permitan atender adecuadamente este servicio educativo.

PARÁGRAFO. El régimen salarial de los educadores de los servicios educativos
estatales de los órdenes departamental, distrital o municipal se regirá por el Decreto-ley 2277 de 1979, la Ley 4a. de 1992 y demás normas que los modifiquen y adicionen.

ARTÍCULO 176. AFILIACIÓN AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES. Los docentes que laboran en los establecimientos públicos educativos oficiales en los niveles de preescolar, de educación básica en los ciclos de primaria y secundaria y de educación media, podrán ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

ARTÍCULO 177. APORTES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Los departamentos y distritos que durante los cinco años anteriores a junio de 1993 hayan invertido en promedio en educación una cuantía superior al quince por ciento (15%) de su presupuesto ordinario, recibirán prioridad y apoyo financiero adicional de la Nación para cofinanciar los gastos que realicen en educación. Los recursos se asignarán y administrarán de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
Los departamentos y distritos que en el mismo lapso hayan invertido en educación menos del quince por ciento (15%) de su presupuesto ordinario, incrementarán su aporte hasta alcanzar este porcentaje, siempre y cuando las metas de cobertura establecidas en Plan de Desarrollo así lo exijan.
El Ministerio de Hacienda hará los ajustes presupuestales necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.

ARTÍCULO 178. PAGO DE EDUCADORES POR LOS MUNICIPIOS. A partir de 1994, los municipios podrán, entre otros gastos, pagar educadores que en el momento de entrar en vigencia la presente Ley, estén financiados con recursos de su presupuesto ordinario, con cargo al incremento de los recursos recibidos por concepto de transferencias de la Nación.

ARTÍCULO 179. FONDOS EDUCATIVOS REGIONALES, FER. Los Fondos Educativos Regionales, FER, harán parte de la estructura de las Secretarías de Educación de las entidades territoriales respectivas, o de los organismos que

hagan sus veces en los términos establecidos en la Ley 60 de 1993 y tendrán las siguientes funciones:
a) Pagar los salarios del personal docente y administrativo de la educación;
b)Administrar financieramente los recursos del situado fiscal previstos en la Ley 60 de 1993 y los demás recursos que convengan con la Nación y las entidades territoriales;
c) Mantener actualizado el sistema de información de personal docente y administrativo y el sistema contable que estará a disposición del Ministerio de Educación Nacional, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de las Secretarías de Educación, o de los organismos que hagan sus veces, y
d) Atender y tramitar las solicitudes de prestaciones sociales del personal docente del servicio educativo estatal para que sean pagadas con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con la Ley 91 de 1989 y sus normas reglamentarias.

ARTÍCULO 180. RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por intermedio del Representante del Ministerio de Educación Nacional ante la entidad territorial, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará, además, la firma del Coordinador Regional de prestaciones sociales.
ARTÍCULO 181. MANEJO DE LOS RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES PARA LA EDUCACIÓN. Con destino al pago de la planta de personal de los servicios educativos estatales a cargo de los recursos propios, los municipios establecerán una cuenta especial o podrán hacer convenios con los fondos educativos regionales, FER, para el manejo de los recursos correspondientes.

ARTÍCULO 182. FONDO DE SERVICIOS DOCENTES. En los establecimientos educativos estatales habrá un Fondo de Servicios Docentes para atender los gastos distintos a salarios y prestaciones.
El Consejo Directivo del establecimiento educativo administrará los recursos de estos fondos. El rector o director será el ordenador del gasto que apruebe el Consejo Directivo y responderá fiscalmente por el adecuado uso de los fondos.

ARTÍCULO 183. DERECHOS ACADÉMICOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES. El Gobierno Nacional regulará los cobros que puedan hacerse por concepto de derechos académicos en los establecimientos educativos estatales. Para tales efectos definirá escalas que tengan en cuenta el nivel socioeconómico de los educandos, las variaciones en el costo de vida, la composición familiar y los servicios complementarios de la institución educativa.
Las secretarías de educación departamentales, distritales o los organismos que hagan sus veces, y las de aquellos municipios que asuman la prestación del

servicio público educativo estatal, ejercerán la vigilancia y control sobre el cumplimiento de estas regulaciones.

ARTÍCULO 184. MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. Los distritos y los municipios, en concurrencia con los departamentos, financiarán la construcción, mantenimiento, y dotación de las instituciones educativas estatales de conformidad con la ley sobre distribución de competencias y recursos.

PARÁGRAFO. Para dar cumplimiento con lo dispuesto en este artículo les corresponderá a las instituciones educativas estatales, bajo la vigilancia de la respectiva autoridad distrital o municipal, garantizar que en la construcción de estas instituciones se respeten las normas de accesibilidad previstas en la Ley 12 de 1987. El Gobierno Nacional en un término no mayor de dos (2) años reglamentará el régimen sancionatorio que corresponda por el incumplimiento de esta disposición.

CAPÍTULO II.
ESTIMULOS ESPECIALES

ARTÍCULO 185. LÍNEAS DE CRÉDITO, ESTÍMULOS Y APOYO. El Estado establecerá líneas de crédito, estímulos y apoyos para los establecimientos educativos estatales y privados con destino a programas de ampliación de cobertura educativa, construcción, adecuación de planta física, instalaciones deportivas y artísticas, material y equipo pedagógico.
El Gobierno Nacional a través del sistema financiero y de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter, establecerá estas líneas de crédito.
El Estado estimulará por dichos mecanismos, entre otras, a las instituciones educativas de carácter solidario, comunitario y cooperativo.

PARÁGRAFO. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política, la Nación y las entidades territoriales podrán otorgar estímulos a personas, sean éstas particulares o vinculadas al sector público, lo mismo que a instituciones estatales o del sector privado que desarrollen actividades de investigación en la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura.
El Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Educación Nacional y con la participación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas", Colciencias, creará los estímulos y reglamentará los requisitos y las condiciones para acceder a ellos.

ARTÍCULO 186. ESTUDIO GRATUITO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES. <Artículo INEXEQUIBLE>
ARTÍCULO 187. COFINANCIACIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR. El Fondo de Cofinanciación para la Inversión Social, FIS, podrá cofinanciar, con los

municipios, programas de adquisición de buses u otros vehículos de transporte para la movilización de estudiantes, así como los costos necesarios para la prestación del servicio de transporte escolar.

ARTÍCULO 188. PLAZAS DOCENTES EN COMISIÓN. El subsidio a las instituciones educativas privadas sin ánimo de lucro que cubren matrículas y pensiones de acuerdo con las tarifas establecidas para las instituciones educativas estatales, podrá ser también en plazas de docentes en comisión, mediante contrato.
El subsidio no implica la pérdida de autonomía de la institución de carácter privado para la administración de los recursos humanos, físicos y financieros de la respectiva institución.

ARTÍCULO 189. DEDUCCIÓN POR PROGRAMAS DE APRENDICES. Los empleadores podrán deducir anualmente de su renta gravable, hasta el 130% de los gastos por salarios y prestaciones sociales de los trabajadores contratados como aprendices, adicionales a los previstos legalmente, en programas de formación profesional previamente aprobados por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

ARTÍCULO 190. CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. Las cajas de compensación familiar tendrán la obligación de contar con programas de educación básica y educación media en forma directa o contratada. En estos programas participarán prioritariamente los hijos de los trabajadores beneficiarios del subsidio familiar.

ARTÍCULO 191. ESTÍMULO A LA CONFORMACIÓN DE ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO. Para asegurar la universalidad de la educación básica, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales podrán estimular la conformación de asociaciones sin ánimo de lucro o de economía solidaria, formadas por padres de familia y educadores cuya finalidad sea crear establecimientos educativos que se financien con los aportes y pagos de los padres de familia y ayuda del Estado en dinero, especies o servicios a través de los contratos autorizados por el artículo 355 de la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 192. INCENTIVOS DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN. La Nación y las entidades territoriales podrán crear incentivos de capacitación, profesionalización y otros para los docentes y directivos docentes, cuyas instituciones y educandos se destaquen en los procesos evaluativos que se convoquen para el efecto.

TÍTULO X.
NORMAS ESPECIALES PARA LA EDUCACIÓN IMPARTIDA POR PARTICULARES

CAPÍTULO I.
GENERALIDADES

ARTÍCULO 193. REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS. De conformidad con el artículo 68 de la Constitución Política, los particulares podrán fundar establecimientos educativos con el lleno de los siguientes requisitos:
a) Tener licencia de funcionamiento que autorice la prestación del servicio educativo, expedida por la Secretaría de Educación departamental o distrital, o el organismo que haga sus veces, según el caso, y
b) Presentar ante la Secretaría de Educación respectiva un proyecto educativo institucional que responda a las necesidades de la comunidad educativa de la región de acuerdo con el artículo 73 de esta Ley.
PARÁGRAFO. Los funcionarios del Ministerio de Educación Nacional, de las secretarías de Educación departamentales, distritales y municipales o de los organismos que hagan sus veces, que ejerzan funciones de carácter administrativo, de inspección y de vigilancia, no podrán crear establecimientos educativos de carácter privado ni desempeñarse como directivos de ellos mientras ocupen un cargo en la administración educativa estatal.

ARTÍCULO 194. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS YA APROBADOS. Todos los establecimientos educativos privados aprobados con antelación a la presente Ley, podrán continuar funcionando y tendrán un plazo de tres (3) años para elaborar y comenzar a aplicar su proyecto educativo institucional.
Los establecimientos fundados con base en acuerdos internacionales estarán sujetos a lo establecido en la presente Ley, sin perjuicio del cumplimiento de lo previsto en tales acuerdos.

ARTÍCULO 195. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS. Los establecimientos educativos privados estarán sometidos a la suprema inspección y vigilancia del Presidente de la República o de su delegado en los términos establecidos en la presente Ley, con el fin de garantizar la calidad del proceso educativo y la sujeción de la educación a las prescripciones constitucionales y legales.

CAPÍTULO II.
RÉGIMEN LABORAL Y DE CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 196. RÉGIMEN LABORAL DE LOS EDUCADORES PRIVADOS. El régimen laboral legal aplicable a las relaciones laborales y a las prestaciones sociales de los educadores de establecimientos educativos privados será el del Código Sustantivo del Trabajo.

ARTÍCULO 197. GARANTÍA DE REMUNERACIÓN MÍNIMA PARA EDUCADORES PRIVADOS. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El salario que

devenguen los educadores en establecimientos privados no podrá ser inferior al ~~ochenta por ciento (80%) del~~ señalado para igual categoría a quienes laboren en el sector oficial. La misma proporción regirá para los educadores por horas.
PARÁGRAFO. Los establecimientos educativos privados que se acojan a los regímenes de libertad vigilada o controlado de que trata el artículo 202 de esta Ley y que al ser evaluados sus servicios sean clasificados por el Ministerio de Educación Nacional en las categorías de base, se sujetarán a lo dispuesto por el reglamento que expida el Gobierno Nacional para la aplicación de la presente norma.

ARTÍCULO 198. CONTRATACIÓN DE EDUCADORES PRIVADOS. Los establecimientos educativos privados, salvo las excepciones previstas en la ley, sólo podrán vincular a su planta docente personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica, con título en educación, expedido por una universidad o una institución de educación superior.

PARÁGRAFO. Los establecimientos educativos privados podrán contratar profesionales con título universitario para que dicten cátedras relacionadas con su profesión o especialidad en la educación básica y media, siendo responsabilidad de dichas instituciones la correspondiente preparación pedagógica. También podrán contratar educadores que provengan del exterior, si reúnen las mismas calidades exigidas para el ejercicio de la docencia en el país. Estos últimos no tendrán que homologar el título para ejercer la cátedra.

ARTÍCULO 199. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BILINGÜES. Los establecimientos educativos bilingües privados podrán contratar personas nacionales o extranjeras, que posean título universitario distinto al de profesional en educación para la enseñanza del segundo idioma o de asignaturas en dicho idioma, siempre y cuando el establecimiento educativo se comprometa a proveer los medios para la preparación pedagógica de este personal.

ARTÍCULO 200. CONTRATOS CON LAS IGLESIAS Y CONFESIONES RELIGIOSAS. El Estado podrá contratar con las iglesias y confesiones religiosas que gocen de personería jurídica, para que presten servicios de educación en los establecimientos educativos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8o. de la Ley 60 de 1993, los demás requisitos de estos contratos no serán distintos de los exigidos para la contratación entre particulares.

PARÁGRAFO. Autorízase al Ministerio de Educación Nacional para revisar los contratos vigentes para la prestación del servicio educativo con las iglesias, comunidades religiosas y confesiones religiosas con el fin de ajustarse a las normas de la presente Ley, especialmente en lo relativo a la autonomía para la vinculación de docentes y directivos docentes.

CAPÍTULO III.
DERECHOS ACADEMICOS

ARTÍCULO 201. MATRÍCULA DE ALUMNOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 de la presente Ley, los establecimientos educativos privados podrán renovar la matrícula de los alumnos o educandos para cada período académico, mediante contrato que se regirá por las reglas del derecho privado.
El contrato deberá establecer, entre otros, los derechos y obligaciones de las partes, las causales de terminación y las condiciones para su renovación.
Serán parte integrante del contrato, el proyecto educativo institucional y el reglamento interno o manual de convivencia del establecimiento educativo.
En ningún caso este contrato podrá incluir condiciones que violen los derechos fundamentales de los educandos, de los padres de familia, de los establecimientos educativos o de las personas naturales o jurídicas propietarias de los mismos.

ARTÍCULO 202. COSTOS Y TARIFAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS. Para definir las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos originados en la prestación del servicio educativo, cada establecimiento educativo de carácter privado deberá llevar los registros contables necesarios para establecer los costos y determinar los cobros correspondientes.
Para el cálculo de tarifas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) La recuperación de costos incurridos en el servicio se hará mediante el cobro de matrículas, pensiones y cobros periódicos que en su conjunto representen financieramente un monto igual a los gastos de operación, a los costos de reposición, a los de mantenimiento y reservas para el desarrollo futuro y, cuando se trate de establecimientos con ánimo de lucro, una razonable remuneración a la actividad empresarial. Las tarifas no podrán trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente;
b) Las tarifas podrán tener en cuenta principios de solidaridad social o redistribución económica para brindar mejores oportunidades de acceso y permanencia en el servicio a los usuarios de menores ingresos;
c) Las tarifas establecidas para matrículas, pensiones y cobros periódicos deberán ser explícitas, simples y con denominación precisa. Deben permitir una fácil comparación con las ofrecidas por otros establecimientos educativos que posibilite al usuario su libre elección en condiciones de sana competencia, y
d) Las tarifas permitirán utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional y atendiendo los anteriores criterios, reglamentará y autorizará el establecimiento

o reajuste de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos dentro de uno de los siguientes regímenes:
1. Libertad regulada, según el cual los establecimientos que se ajusten a los criterios fijados por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, sólo requieren para poner en vigencia las tarifas, comunicarlas a la autoridad competente con sesenta (60) días calendario de anticipación, acompañadas del estudio de costos correspondiente. Las tarifas así propuestas podrán aplicarse, salvo que sean objetadas.
2. Libertad vigilada, según el cual los diferentes servicios que ofrece un establecimiento serán evaluados y clasificados en categorías por el Ministerio de Educación Nacional, en cuyo caso las tarifas entrarán en vigencia sin otro requisito que el de observar los rangos de valores preestablecidos para cada categoría de servicio, por la autoridad competente.
3. Régimen controlado, según el cual la autoridad competente fija las tarifas al establecimiento educativo privado, bien por sometimiento voluntario de éste o por determinación del Ministerio de Educación Nacional, cuando lo considere necesario para evitar abusos del régimen de libertad.
El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, hará evaluaciones periódicas que permitan la revisión del régimen que venga operando en el establecimiento educativo para su modificación total o parcial.

ARTÍCULO 203. CUOTAS ADICIONALES. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Los establecimientos educativos no podrán exigir por sí mismos, ni por medio de las asociaciones de padres de familia, ni de otras organizaciones, cuotas, bonos o tarifas adicionales a las aprobadas por concepto de matrículas, pensiones y cobros periódicos,

TÍTULO XI.
DISPOSICIONES VARIAS
CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES ESPECIALES
ARTÍCULO 204. EDUCACIÓN EN EL AMBIENTE. El proceso educativo se desarrolla en la familia, en el establecimiento educativo, en el ambiente y en la sociedad.
La educación en el ambiente es aquella que se practica en los espacios pedagógicos diferentes a los familiares y escolares mediante la utilización del tiempo libre de los educandos.
Son objetivos de esta práctica:
a) Enseñar la utilización constructiva del tiempo libre para el perfeccionamiento personal y el servicio a la comunidad;
b) Fomentar actividades de recreación, arte, cultura, deporte y semejantes, apropiados a la edad de los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, y

c) Propiciar las formas asociativas para que los educandos complementen la educación ofrecida en la familia y en los establecimientos educativos.

ARTÍCULO 205. ASESORÍA DE LAS ACADEMIAS. La Nación y las entidades territoriales utilizarán la asesoría de las diferentes academias con personería jurídica y que ejerzan funciones consultivas, para el cumplimiento de los requerimientos que le señala la presente Ley.

ARTÍCULO 206. COLABORACIÓN ENTRE ORGANISMOS DEL SECTOR EDUCATIVO. El Ministerio de Educación Nacional establecerá los mecanismos para que el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas", Colciencias; el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, y el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, Coldeportes, diseñen programas especiales con el fin de desarrollar su función en la educación formal, no formal e informal.
El Plan Nacional Decenal de Desarrollo Educativo contará con la participación activa de estos organismos del Estado.

ARTÍCULO 207. ACCESO A LAS REDES DE COMUNICACIÓN. Las empresas que presten el servicio de telefonía local o de larga distancia nacional o internacional, incluida la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, darán prioridad en la utilización de sus redes a las instituciones del servicio público educativo, estatales o privadas para que puedan acceder a las bases de datos y sistemas de información de bibliotecas, nacionales e internacionales.
La comisión de regulación del Ministerio de Comunicaciones fijará tarifas especiales por este servicio.

ARTÍCULO 208. INSTITUTOS TÉCNICOS Y EDUCACIÓN MEDIA DIVERSIFICADA. Los institutos técnicos y los institutos de educación media diversificada, INEM, existentes en la actualidad, conservarán su carácter y podrán incorporar a la enseñanza en sus establecimientos la educación media técnica, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su reglamentación.

ARTÍCULO 209. DOCENTES VINCULADOS EN LA ACTUALIDAD. En los establecimientos educativos estatales, los bachilleres pedagógicos y demás educadores escalafonados que en la fecha de la promulgación de la presente Ley, no posean el título de licenciado, podrán seguir ejerciendo la docencia, con el solo requisito del Escalafón Nacional Docente.
En los establecimientos educativos privados, los docentes que a la promulgación de la presente Ley no posean el título exigido, podrán continuar ejerciendo la docencia, mientras permanezcan vinculados a la misma institución.

ARTÍCULO 210. DIRECTIVOS DOCENTES ESTATALES. Los directivos docentes estatales que actualmente laboran como tales, continuarán en sus cargos. El Ministerio de Educación Nacional fijará los procedimientos y plazos para su evaluación, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

ARTÍCULO 211. DOCENTES CON DERECHO A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN. Los docentes nacionales y nacionalizados que adquirieron el derecho a la pensión de jubilación antes de la expedición de la Ley 91 de 1989 y que acreditaron este derecho, quedarán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, siempre y cuando tal calidad no haya sido reconocida por otra entidad de previsión social.

ARTÍCULO 212. CESIÓN DE BIENES. Los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la empresa Puertos de Colombia (en liquidación) ubicados en los terminales marítimos de Buenaventura, Cartagena de Indias, Barranquilla, Santa Marta y Tumaco, destinados o construidos para la prestación de servicios educativos y de capacitación, al igual que los auditorios públicos de la misma empresa, serán cedidos a título gratuito a los municipios o distritos donde se hallen ubicados para la prestación de servicios educativos, artísticos y culturales.
Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo, aquellos bienes que ya hayan sido objeto de cualquier tipo de cesión por leyes, pactos o convenios anteriores a la vigencia de la presente Ley.

PARÁGRAFO. Estos bienes y aquellos a que se refieren los artículos 5o. y 15 de la Ley 60 de 1993, deberán dedicarse con exclusividad a la prestación del servicio educativo estatal, de tal manera que no pueden ser enajenados ni utilizados con destinación distinta, so pena de regresar los mismos al patrimonio de la Nación.

ARTÍCULO 213. INSTITUCIONES TECNOLÓGICAS. Las actuales instituciones tecnológicas y las que se reconozcan con arreglo a la ley son instituciones de educación superior.
Estas instituciones están facultadas legalmente para ofrecer programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica en disciplinas y programas de especialización en sus respectivos campos de acción.
A los títulos que expidan por los programas ofrecidos se les antepondrá la denominación de "Técnico Profesional en...", si se refiere a ocupaciones. Si hacen relación a disciplinas académicas, al título se le antepondrá la denominación de "Tecnólogo en...".
Las instituciones tecnológicas tendrán un representante en el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, que será escogido de acuerdo con lo dispuesto por el reglamento que expida el Gobierno Nacional.
Para todos los efectos de la carrera administrativa se tendrá en cuenta el cargo y el título de tecnólogo.

Se deroga el artículo 139 de la Ley 30 de 1992.

ARTÍCULO 214. RECONOCIMIENTO. Las instituciones de educación superior creadas por ordenanza departamental con anterioridad a la expedición de la Ley 30 de 1992 y que vienen funcionando como universidades, serán reconocidas como tales, siempre y cuando dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente Ley, presenten un plan de desarrollo institucional que contemple los aspectos académicos, administrativos y financieros. Este plan deberá ser aprobado por el Ministro de Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU.

ARTÍCULO 215. CÓDIGO EDUCATIVO. <Artículo INEXEQUIBLE>
CAPÍTULO II.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y VIGENCIA
ARTÍCULO 216. REESTRUCTURACIÓN DE LAS NORMALES. El Gobierno Nacional dentro del término de un (1) año contado a partir de la promulgación de la presente Ley, determinará los procedimientos para reestructurar las normales que, por necesidad del servicio educativo, pueden formar educadores a nivel de normalista superior.
Las normales que no sean reestructuradas ajustarán sus programas para ofrecer, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo, preferiblemente programas de la educación media técnica u otros de la educación por niveles y grados, según las necesidades regionales o locales.
La Nación y las entidades territoriales crearán las condiciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.

ARTÍCULO 217. CENSO EDUCATIVO. Se autoriza al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para que realice un censo educativo nacional antes del 31 de diciembre de 1995.

ARTÍCULO 218. LISTA DE ELEGIBLES. Las entidades territoriales darán prioridad al nombramiento de docentes y directivos docentes que aún figuren en las listas de elegibles de los concursos realizados por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, y que no hayan sido incorporados a las plantas de personal docente, en el momento de entrar en vigencia la presente Ley. Tales nombramientos se harán en estricto orden según el puntaje obtenido en dichos concursos, siempre y cuando se llenen los requisitos del Estatuto Docente.
ARTÍCULO 219. JEFES DE DISTRITO EDUCATIVO. Los Jefes de Distrito Educativo que cesen en sus cargos, en razón de las disposiciones y reglamentaciones de la presente Ley y de la Ley 60 de 1993, tendrán prelación para ser reubicados en otros cargos del servicio público educativo estatal, en todo caso sin detrimento de sus condiciones laborales y salariales.

ARTÍCULO 220. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. El Gobierno Nacional, en el plazo de seis (6) meses a partir de la expedición de la presente Ley, adaptará la estructura y procedimientos administrativos del Ministerio de Educación Nacional y de sus entidades adscritas o vinculadas y hará las modificaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley.

ARTÍCULO 221. DIVULGACIÓN DE ESTA LEY. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional coordinará la realización de foros, seminarios, debates y encuentros de discusión académica que permitan dar a conocer a todo el país, la naturaleza y alcances de la presente Ley.

ARTÍCULO 222. VIGENCIA. Esta Ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le sean contrarias.

ANEXO Nº 12

DECRETO NUMERO 1742 DE 1994

(AGOSTO 3)

POR EL CUAL SE CREAN ESTIMULOS ESPECIALES PARA INVESTIGADORES Y SE REGLAMENTA PARCIALMENTE EL PARAGRAFO UNICO DEL ARTICULO 185 DE LA LEY 115 DE 1994.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 189, NUMERAL 11 DE LA CONSTITUCION POLITICA NACIONAL Y EN ESPECIAL EL ARTICULO 185 DE LA LEY 115 DE 1994, Y

C0NSIDERANDO:

Que según el artículo 71 de la Constitución Política, el Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades;

Que en desarrollo de lo dispuesto en el precepto constitucional antes mencionado, en el parágrafo único del artículo 185 de la Ley 115 de 1994, se consagra que la Nación y las entidades territoriales podrán otorgar dichos estímulos y se faculta al Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Educación Nacional y con la participación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas", Colciencias, para crearlos y reglamentar los requisitos y las condiciones para acceder a ellos;

Que se hace necesario reglamentar parcialmente el parágrafo único del artículo 185 de la citada ley, en relación con los estímulos a personas, sean éstas particulares o vinculadas al sector público, que desarrollen actividades de investigación en la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura.

DECRETA

ARTICULO 1º. Créanse los estímulos especiales para investigadores, a que se refiere el artículo 185 de la Ley 115 de 1994, los cuales serán otorgados por el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, "Francisco José de Caldas", Colciencias, en los términos del presente Decreto.

ARTICULO 2º. Las normas reglamentarias contenidas en el presente Decreto se aplicarán a personas naturales sean éstas particulares o vinculadas al

sector público que acrediten la calidad de investigadores activos, en los términos que estipula la presente reglamentación.

ARTICULO 3º. Los estímulos se calcularán con base en el salario mínimo mensual legalmente vigente en el momento de publicarse los resultados de la convocatorias se pagarán en una o varias cuotas, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y de tesorería de Colciencias, para un período de doce (12) meses. Su monto dependerá de la categoría en que quede clasificado el investigador como resultado de su participación en la convocatoria y de la selección de candidatos que realice el Comité de Selección y Clasificación.

ARTICULO 4º. Para efectos del reconocimiento de los estímulos, los investigadores, independientemente de que desarrollen su actividad en el sector público o privado y dentro de criterios de búsqueda de la excelencia, serán seleccionados y clasificados en las siguientes categorías:

I. CATEGORIA A.

En esta categoría, se seleccionarán y clasificarán los más destacados investigadores activos que, a juicio del Comité de Selección y Clasificación, individualmente o, preferiblemente, liderando un grupo de investigación hayan demostrado su capacidad de liderazgo científico a través de publicaciones recientes de reconocimiento internacional, o quienes en el campo de la técnica, la educación o la cultura hayan logrado patentes o registrado cualquier otra forma de propiedad intelectual, de reconocida importancia comercial o social. Además deberán haber formado discípulos destacados, lo que documentarán certificando la dirección de tesis de pre y posgrado, y las realizaciones de estos.

II. CATEGORIA B.

En esta categoría se seleccionarán y clasificarán los más destacados investigadores activos que, a juicio del Comité de Selección y Clasificación, trabajando preferiblemente en grupos de investigación hayan logrado un sólido prestigio nacional o internacional en su campo, demostrando a través de publicaciones recientes de reconocimiento internacional, o quienes en el campo de la técnica, la educación o la cultura hayan logrado desarrollos e innovaciones útiles, demostrables preferiblemente a través de patentes o de cualquier otra forma de propiedad intelectual. Además que hayan dirigido tesis de pregrado o posgrado o que tengan discípulos con realizaciones.

III. CATEGORIA C.

En esta categoría se seleccionarán y clasificarán los investigadores activos más destacados que, a juicio del Comité de Selección y Clasificación, haciendo parte, preferiblemente, de grupos de investigación estén en vías de consolidar un prestigio investigativo, que tengan publicaciones recientes de reconocimiento internacional o comiéncen a producir innovaciones o desarrollos útiles demostrables a través de solicitud de patente o de cualquier forma de derechos de propiedad intelectual y que preferiblemente hayan dirigido proyectos de grado.

IV. CATEGORIA D.

En esta categoría se seleccionarán y clasificarán los más destacados estudiantes, o los profesionales que hayan recibido su título en el último año, que, a juicio del Comité de Selección y Clasificación, hayan mostrado un alto potencial como investigadores activos, a través de la calidad de sus publicaciones o desarrollos investigativos en el campo de la ciencia, la técnica, la educación o la cultura.

PARAGRAFO. Para los estímulos de que trata el presente Decreto se entenderá como investigador activo, aquel que acredite producción investigativa en el campo de la ciencia, la tecnología la educación o la cultura, en los tres (3) años anteriores a la convocatoria.

ARTICULO 5º. Un Comité nombrado por la Junta Directiva de Colciencias hará la clasificación y selección de los investigadores. Los nombres de los miembros de este Comité de Selección y Clasificación se divulgarán sólo en el momento de presentar los resultados de la convocatoria. El Comité se asesorará de investigadores nacionales o extranjeros reconocidos internacionalmente por la comunídad de investigadores, en los procesos de clasificación y selección. Podrá además solicitar, cuando lo considere necesario, evaluaciones internacionales de las hojas de vida que sean presentadas.

El Comité tendrá en cuenta como criterios principales, entre otros, los siguientes:

La calidad de la producción científica, especialmente la realizada en forma cooperativa;

La contribución reciente a la formación de otros investigadores;

Los esfuerzos dedicados a la formación de grupos y redes de ciencia y tecnología;

El impacto social de su actividad, y

El plan de trabajo científico o tecnológico que se propone realizar en el año de vigencia de su clasificación.

Para la evaluación de las publicaciones se tendrá en cuenta, cuando estén disponibles, los índices internacionales de publicaciones, de citación y de impacto, según documentación aportada por el candidato o la consultada de oficio por el Comité de Selección y Clasificación.

PARAGRAFO. En la convocatoria se harán públicos los criterios que se tendrán en cuenta para la clasificación y selección de los investigadores, así como los factores de ponderación de cada uno de ellos.

ARTICULO 6º. Los estímulos a que se refiere el artículo primero del presente Decreto se otorgarán para cada categoría, en las cuantías que a continuación se indican:

a) Categoría A: el equivalente a 120 salarios mínimos mensuales legales;

b) Categoría B: el equivalente a 84 salarios mínimos mensuales legales;

c) Categoría C: el equivalente a 48 salarios mínimos mensuales legales, y

d) Categoría D: el equivalente a 24 salarios mínimos mensuales legales,

PARAGRAFO 1. Cuando el investigador resida y trabaje en un municipio de menos de dos millones de habitantes, los estímulos se aumentarán en un 10%.

PARAGRAFO 2. Para ningún efecto legal los estímulos especiales a que se refiere este Decreto constituyen salario.

ARTICULO 7º. Colciencias hará los pagos mencionados en el marco de un convenio con el investigador o con la entidad a la cual se encuentre vinculado, o de un contrato para la financiación de un proyecto aprobado por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

En virtud de este contrato o convenio el investigador se obliga a realizar durante cada año de vigencia de su clasificación actividades que estén dentro de las siguientes clases:

l. Publicación de artículos en revistas arbitradas de circulación y reconocido prestigio internacional, o libros resultantes del trabajo de investigación;

2. Presentación de solicitudes de registro de patentes dentro o fuera del país;

3. Culminación y aprobación de tesis doctorales por parte del investigador distinguido o de tesis de postgrado o pregrado por estudiantes dirigidospor él;

4. Demostración de capacidad de gestión de ciencia y tecnología a través del aseguramiento de financiación internacional a un proyecto de investigación de su grupo, o

5.. Demostración de méritos científicos a través de la obtención de una o más distinciones científicas o académicas.

PARAGRAFO 1. Los investigadores de la categoría A deberán realizar al menos tres actividades comprendidas en una o varias de las clases establecidas en este artículo, los de las categorías B y C dos, y los de la categoría D una.

PARAGRAFO 2. Cuando el investigador de categoría A o B esté vinculado a una universidad, deberá mantener alguna forma de actividad docente de alta calidad.

ARTICULO 8º. Podrán presentarse a la convocatoria los investigadores activos colombianos residentes en Colombia, los investigadores activos extranjeros residentes en Colombia y los investigadores activos colombianos residentes en el exterior. Estos últimos recibirán los estímulos sólo en proporción al tiempo que permanezcan en Colombia dentro de la vigencia de la respectiva convocatoria.

PARAGRAFO. El investigador podrá ser presentado por una entidad, por un grupo de investigación o por él mismo. No podrán someter su candidatura para participar en la convocatoria, investigadores que para la fecha de apertura de la misma, tengan vínculo laboral con Colciencias o lo hubieren tenido dentro del año anterior.

ARTICULO 9º. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la vigencia del presente Decreto, Colciencias y el Ministerio de Educación Nacional elaborarán y harán público un reglamento específico para la primera convocatoria. Las convocatorias subsiguientes deberán abrirse anualmente de conformidad con lo que disponga la Junta Directiva de Colciencias y se entenderá vigente el reglamento adoptado para la convocatoria anterior, salvo que Colciencias y el Ministerio de Educación Nacional hayan acordado modificaciones con antelación.

ARTICULO 10º. Colciencias expedirá los actos administrativos que desarrollen los procedimientos de la convocatoria.

ARTICULO llº. Para la adecuada financiación de los estímulos que se otorgan a los investigadores, el Gobierno asignará anualmente una partida del Presupuesto General de la Nación al Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, "Francisco José de Caldas", Colciencias, quien tendrá la función de distribuir y administrar dichos recursos.

ARTICULO 12º. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C. el 3 de agosto de 1994

ANEXO Nº 13

DECRETO NUMERO 2934 DE 1994
(diciembre 31)

Por el cual se aprueba el Acuerdo número 0021 de 1994 que establece la estructura interna del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas", Colciencias y se determinan las funciones de sus dependencias.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el artículo 26 del Decreto-ley 1050 de 1968,

DECRETA:

Artículo 1o. :Apruébase en todas sus partes el Acuerdo número 0021 del 20 de diciembre de 1994, emanado de la Junta Directiva del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas", Colciencias, cuyo texto es el siguiente:

ACUERDO NUMERO 0021 DE 1994
(diciembre 20)
por el cual se establece la estructura interna del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas", Colciencias y se determinan las funciones de sus dependencias**.**

La Junta Directiva del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas", Colciencias, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias que le confiere el Decreto 1905 de 1969,

ACUERDA:

CAPITULO I

DE LA ESTRUCTURA INTERNA
Artículo 1o. Establécese la estructura interna del Instituto Colombiano para la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas", Colciencias, así:

1. Junta Directiva
2. Dirección General
2.1 Secretaría General
2.2 Oficina de Control Interno
2.3 Oficina de Regionalización

2.4 Oficina de Registro de Proyectos.
3. Subdirección de Programas Estratégicos
3.1 División de Internacionalización de la Ciencia
3.2 División de Sistemas de Información Científica y Tecnológica
3.3 División de Planeación Estratégica y Evaluación
3.4 División de Recursos Humanos y Fortalecimiento de la Comunidad Científica
3.5 División de Ciencia, Cultura y Comunicación.
4. Subdirección de Programas de Desarrollo Científico y Tecnológico
4.1 Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología
5. Subdirección de Programas de Innovación y Desarrollo Empresarial.
5.1 Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología en Innovación y Desarrollo Empresarial
5.2 Oficina de Relaciones con el sector productivo.
6. Subdirección Financiera y Administrativa
6.1 División de Coordinación de Crédito Externo
6.2 División Financiera
6.3 División de Personal
6.4 División de Servicios Generales.
7. Organos de Asesoría y Coordinación
7.1 Comité de Dirección
7.2 Comisión de Personal.
El Director mediante resolución, establecerá la conformación de otros comités técnicos, para el estudio y aprobación de los planes y programas que adelante el Instituto.

CAPITULO II
DE LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS

1. Junta Directiva

Artículo 2: La Junta Directiva cumplirá las funciones señaladas en los estatutos del Instituto y en las demás disposiciones legales y reglamentarias.

Parágrafo. Si el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en uso de sus facultades legales crease o modificase uno de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología ya existentes, la Junta Directiva hará las modificaciones correspondientes, de tal manera que para cada programa exista una dependencia.

2. Dirección General

Artículo 3o.

El objetivo básico de la Dirección de Colciencias será dirigir, orientar, supervisar y controlar todas las operaciones de la entidad, con miras al mejor cumplimiento de la misión de la entidad y de las funciones asignadas por la ley.

Artículo 4o.
Son funciones de la Dirección General:

1. Representar legalmente a Colciencias; cumplir y hacer cumplir las funciones asignadas a la entidad por la ley y los estatutos.
2. Representar al Gobierno Nacional en materia de Ciencia y Tecnología en las instancias y eventos nacionales e internacionales, salvo aquellos en los cuales participen directamente el Presidente de la República, los Ministros del Despacho o el Jefe del Departamento Nacional de Planeación.
3. Definir, con la asesoría del cuerpo directivo de la entidad, las propuestas de política y estrategias que deberán presentarse al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
4. Dirigir y, con la colaboración del cuerpo directivo, planear, coordinar y controlar el desarrollo de las funciones del Instituto, tanto en lo que se refiere a sus operaciones directas como en las que debe realizar en relación con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
5. Organizar el Instituto en sus diferentes dependencias, con el propósito de lograr el cumplimiento de sus funciones, dentro de un marco de excelencia que promueva la eficacia y la eficiencia crecientes.
6. Delegar las funciones que considere necesarias para la buena marcha y eficiente administración del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y del Instituto.
7. Configurar espacios de planeación participativa, de elaboración colegiada de propuestas de políticas, de reflexión sobre el papel de la ciencia en la sociedad, y de actividad prospectiva sobre su desarrollo.
8. Convocar a la realización de investigaciones y estudios necesarios para el cumplimiento de la misión.
9. Establecer por intermedio del Director General, la conformación de otros comités técnicos y sus funciones, para el estudio y aprobación de los planes y programas que adelante el Instituto.
10. Definir una estrategia integral de regionalización de la Ciencia y la Tecnología y velar por su adecuada implantación a través de la División de Regionalización.
11. Formular políticas sobre evaluación y seguimiento de proyectos y velar por su aplicación y cumplimiento a través de las Oficinas de Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología.
12. Coordinar el trabajo de las Comisiones Regionales y de éstas con los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología.
13. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

2.1 Secretaría General
Artículo 5o.
El objetivo básico de la Secretaría General es registrar los actos y custodiar los documentos provenientes de la gestión del Instituto y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, incluidos los convenios y contratos, así como las decisiones tomadas por los Consejos. Igualmente, asesorará al Director de Colciencias en todos los asuntos jurídicos que demande el cumplimiento de las funciones de la entidad, y desarrollará las actividades necesarias para garantizar que todas las operaciones de la entidad y del sistema se enmarquen dentro de la normatividad vigente.

Artículo 6o.
Son funciones de la Secretaría General:

1. Registrar, custodiar y dar fe sobre los actos jurídicos de los organismos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y en particular del Instituto. Ejercer el control del cumplimiento de todos los compromisos que de estos actos se deriven.
2. Ejercer las funciones de Secretaría de la Junta Directiva de Colciencias y demás órganos de asesoría y coordinación que le indique el Director.
3. Refrendar los actos administrativos emanados de la Junta Directiva y de la Dirección de la entidad.
4. Velar por el cumplimiento de las disposiciones, normas y reglamentos emanados por la Junta Directiva y la Dirección.
5. Autenticar las copias de los actos administrativos y demás documentos oficiales que se requieran por parte de la entidad o por parte de terceros debidamente autorizados.
6. Asesorar al Director y a los organismos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en todas las materias relativas a la suscripción de contratos, convenios y demás actos jurídicos, y asegurar el cumplimiento de los compromisos que de ellos se deriven.
7. Asesorar al Director de Colciencias en la definición de todos los requisitos de carácter legal que deban satisfacer las distintas operaciones realizadas por la entidad.
8. Asesorar a Colciencias, y por su intermedio al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sobre todos los aspectos legales que deban contemplarse en la definición de las políticas de promoción de las actividades científicas y tecnológicas, incluyendo lo relativo a la negociación y transferencia de tecnología, la contratación, la propiedad intelectual y el uso de recursos disponibles en la sociedad civil.
9. Asistir a las dependencias de la entidad, en todo lo relativo al cumplimiento y diligenciamiento de trámites legales asociados con el desarrollo de sus funciones.
10. Apoyar a la Dirección y a las Subdirecciones de Colciencias en la interacción continua con los Consejos Nacionales y Comisiones Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico.

11. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

2.2 Oficina de Control Interno
Artículo 7o.
El objetivo básico de la Oficina de Control Interno es evaluar críticamente el desarrollo operativo y financiero del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en general, implementando indicadores de seguimiento de Control Interno y de las operaciones de Colciencias en particular, recomendando a la Dirección los correctivos necesarios para optimizar el funcionamiento de la entidad y dentro de estrictas normas de eficacia, eficiencia y calidad.

Artículo 8o. Son funciones de la Oficina de Control Interno:

1. Diseñar, adoptar y mantener un sistema de Control Interno para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología como un todo, para cada uno de los Programas que lo conforman y para el Instituto, estableciendo, en coordinación con las distintas dependencias, el conjunto de indicadores básicos que deberán analizarse, con el fin de realizar el seguimiento de sus operaciones.
2. Colaborar con las distintas entidades que realizan actividades de ciencia y tecnología en el diseño e implantación de las estrategias e instrumentos derivados del Sistema de Control Interno, prestando la asesoría necesaria para que tales entidades realicen su propia autoevaluación en forma permanente.
3. Ejercer una labor de control interno sobre todas las operaciones de Colciencias, verificando que los procedimientos se cumplan, informando periódicamente al Director de los resultados obtenidos y haciendo las recomendaciones necesarias para superar los problemas detectados.
4. Promover políticas de calidad total al interior de Colciencias orientadas al mejoramiento del desempeño de los funcionarios de la entidad.
5. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

2.3 Oficina de Regionalización
Artículo 9o.
El objetivo básico de la Oficina de Regionalización es la implantación, coordinación y seguimiento de la estrategia de regionalización de la ciencia y la tecnología, definida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Artículo 10. Son funciones de la Oficina de Regionalización:

1. Asesorar a la Dirección y Subdirecciones de la entidad en el diseño y desarrollo de la estrategia de regionalización y coordinar, supervisar y controlar, su implantación a través de los Programas Nacionales y Regionales y de las Comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología.

2. 2. Adelantar estudios dirigidos a analizar la problemática regional de la ciencia y la tecnología, y utilizar los resultados obtenidos para proponer las acciones pertinentes para el logro de los objetivos de política en esta materia.
3. Realizar y actualizar conjuntamente con las Comisiones y Programas Regionales, el diagnóstico de la situación regional en materia de ciencia y tecnología.
4. Definir las estrategias y acciones particulares que cada Programa deberá adelantar, buscando en todo momento su conformidad y coherencia con la política global de regionalización.
5. Asesorar a las directivas de Colciencias en la conformación del presupuesto anual de ciencia y tecnología, de acuerdo con los lineamientos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
6. Evaluar la evolución de la estrategia de regionalización y el cumplimiento de las actividades por parte de los Programas Nacionales y Regionales y de las Comisiones de Ciencia y Tecnología.
7. Fomentar y promover planes, programas y proyectos regionales en Investigación y Desarrollo Tecnológico y la participación de grupos regionales en su ejecución.
8. Coordinar el apoyo financiero a las Comisiones Regionales, con el fin de fortalecer la infraestructura científico - tecnológica de sus respectivas regiones.
9. Coordinar con la División de Ciencia, Cultura y Comunicación la divulgación de los resultados de las actividades de ciencia y tecnología realizadas a nivel regional.
10. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

2.4 Oficina de Registro de Proyectos

Artículo 11.
El objetivo básico de esta Oficina es registrar los proyectos que ingresan a Colciencias, organizar y asegurar el funcionamiento de los bancos de evaluadores y constituir el banco de proyectos financiados por la entidad.

Artículo 12.
Son funciones de la Oficina de Registro de Proyectos:
1. Diseñar y coordinar los procesos de registro de los proyectos puestos a consideración de Colciencias y orientar las actividades de los Programas Nacionales de las respectivas Subdirecciones relacionadas con la evaluación de estos proyectos.
2. Proponer y actualizar los procesos, normas y criterios que orienten la conformación y el trabajo de los bancos de evaluadores de los proyectos.

3. Diseñar, implantar y actualizar una base de datos sobre los proyectos recibidos por Colciencias.
4. Las demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

3. Subdirección de Programas Estratégicos
Artículo 13.
El objetivo básico de la Subdirección de Programas Estratégicos es impulsar y coordinar estrategias de desarrollo científico y tecnológico que apoyen el desarrollo de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología y los Programas Nacionales de Innovación y Desarrollo Empresarial. Por medio de estas estrategias se busca consolidar la comunidad científica colombiana, incorporar la ciencia y la tecnología a la cultura nacional, lograr una adecuada comunicación de los resultados obtenidos por los programas del Instituto, fomentar la internacionalización de las actividades científicas y tecnológicas que se desarrollan en el país, y facilitar el acceso a información científica y tecnológica que sea relevante para el desarrollo nacional.
Para lograr lo anterior, la Subdirección elaborará planes estratégicos de mediano y largo plazo que puedan orientar el desarrollo del país en este campo.

Artículo 14.
Son funciones de la Subdirección de Programas Estratégicos:

1. Asesorar al Director en la formulación de las políticas y estrategias que Colciencias presente a consideración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en lo relacionado a las áreas de su competencia.
2. Ejecutar las políticas y estrategias definidas por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y la Dirección de Colciencias, en lo atinente a sus objetivos.
3. Impulsar y coordinar la ejecución de las siguientes estrategias:

3.1 Promover el desarrollo y consolidación de la comunidad científica, sus lazos con el exterior, la multiplicación y consolidación de grupos de investigación, y la creación y desarrollo de redes que vinculen a esos grupos.
3.2 Impulsar la incorporación de los valores de la ciencia en la cultura nacional.
3.3 Promover y ejecutar planes de formación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología.
3.4 Diseñar, desarrollar y promover sistemas de información y bases estadísticas para orientar las actividades científicas y tecnológicas.

4. Ejercer la Secretaría Técnica y Administrativa del Comité para Formación de los Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnología.

5. Promover las relaciones científicas internacionales y la cooperación técnica internacional en coordinación con las instancias pertinentes del Estado.

6. Proponer y ejecutar políticas integrales de apoyo e incentivos a las actividades científicas y tecnológicas y desarrollar criterios para la asignación de becas complementarias de investigación, premios, distinciones y demás estímulos a las actividades científicas y tecnológicas.

7. Proponer estrategias de Ciencia, Cultura y Comunicación Científica y Tecnológica.

8. Diseñar, desarrollar y adelantar todas las actividades de cienciometría que permitan medir mediante indicadores la actividad científica - tecnológica orientada al conocimiento de los avances en la ciencia nacional e internacional.

9. Adelantar estudios e investigaciones de prospectiva científica y tecnológica.

10. Apoyar a los diversos programas nacionales y regionales en lo referente a planeación estratégica y a metodologías de evaluación de los programas de investigación.

11. Definir los indicadores de desarrollo científico y tecnológico, en estrecha cooperación con grupos universitarios que estén trabajando en este campo.

12. Asesorar al Director, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Subdirección de Programas de Ciencia y Tecnología, de la Subdirección de Programas de Innovación y Desarrollo Empresarial y de los respectivos Consejos Nacionales, en la conformación de la propuesta que será presentada anualmente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sobre la asignación presupuestal que para Ciencia y Tecnología deberán hacer las Entidades públicas.

13. Planificar y coordinar la ejecución de las actividades propias de los programas a su cargo, buscando la obtención de economías de escala y los mayores niveles de productividad en el uso de los recursos humanos, técnicos y financieros de Colciencias y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

14. Presentar oficialmente a las directivas de Colciencias las propuestas sobre creación, fusión o supresión de programas en su área de

influencia, sustentando la presentación tanto en términos retrospectivos como proyectivos.

15. Proponer e implantar políticas que estimulen la cooperación entre investigadores colombianos residentes en el exterior y grupos de investigación nacionales.

16. Promover la participación activa de los programas a su cargo en los Comités y Seminarios promovidos por Colciencias.

17. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

3.1 División de Internacionalización de la Ciencia.
Artículo 15.
El objetivo básico de esta División es promover la internacionalización de las actividades científicas y tecnológicas y ejecutar las políticas y estrategias definidas por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y la Dirección de Colciencias.

Artículo 16.
Son funciones de la División de Internacionalización de la Ciencia:

1. Presentar a las directivas de Colciencias y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología propuestas para la definición de políticas y estrategias que conlleven a desarrollar relaciones internacionales que fortalezcan las actividades de ciencia y tecnología en el país.
2. Proponer mecanismos que permitan la adecuada inversión de los recursos de la cooperación técnica internacional para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, en coordinación con la División Técnica del Departamento Nacional de Planeación y demás unidades especializadas en las entidades del Estado.
3. Mantener actualizado el registro de los convenios internacionales y demás acuerdos existentes en el área de la ciencia y la tecnología, coordinando con los sectores interesados en ellos todos lo relativo al manejo de los programas y proyectos derivados de tales convenios y acuerdos.
4. Promover el establecimiento de nuevas relaciones internacionales, mediante la canalización oportuna a las autoridades de, Colciencias de la información pertinente y realizar los contactos necesarios para que las posibilidades de cooperación se materialicen en acuerdos formales.
5. Diseñar, impulsar y ejecutar estrategias de incorporación de la actividad científica y tecnológica colombiana en el contexto mundial. En particular:
    a) Proponer los reglamentos y directrices de que trata el artículo 9º de la Ley 29 de 1990;

b) Mantener relaciones de cooperación estrecha entre Colciencias y los organismos directores de ciencia y tecnología de otros países;
c) Mantener las relaciones de cooperación de Colciencias con las organizaciones multinacionales - gubernamentales y no gubernamentales - que tengan entre sus objetivos el apoyo a actividades de ciencia y tecnología.

6. Desarrollar todas las actividades de apoyo logístico, informático y de documentación que se requieran para que los funcionarios de Colciencias y quienes desarrollan actividades de ciencia y tecnología en el país puedan llevar a cabo las actividades inherentes al desarrollo de los convenios y acuerdos internacionales.
7. Coordinar con la Secretaría General de Colciencias, con la Subdirección de Programas de Ciencia y Tecnología y con la Subdirección de Innovación y Desarrollo Empresarial la formalización de los convenios y acuerdos internacionales.
8. Mantener contacto con las delegaciones diplomáticas y consulares de Colombia en el exterior y de los otros países en Colombia, con el fin de realizar el intercambio de información sobre desarrollo tecnológico y científico con otros países y propiciar a través de ellas los acuerdos y programas de cooperación en ciencia y tecnología.
9. Elaborar propuestas y programas sobre medios e instrumentos que faciliten la cooperación técnica entre países, incluida la transferencia de recursos financieros, de tecnología y de conocimientos en sus diversas formas.
10. Consolidar la información sobre los recursos derivados de los acuerdos y convenios de cooperación técnica internacional e informar a los Programas para la elaboración del presupuesto respectivo.
11. Efectuar el seguimiento y registrar el desarrollo de las actividades derivadas de los convenios y acuerdos de cooperación científica y técnica entre países e informar a las autoridades de Colciencias y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología sobre los resultados de este seguimiento.
12. Asistir y participar, en representación de Colciencias, a las reuniones de los organismos de coordinación, orientación o definición de políticas y acciones interinstitucionales relacionadas con la política internacional de Colombia en ciencia y tecnología.
13. Coordinar, preparar y realizar los eventos de carácter internacional relacionados directamente con el campo de la ciencia y la tecnología, con organismos internacionales o escenarios bilaterales o multilaterales.
14. Promover y coordinar las actividades de cooperación entre investigadores colombianos residentes en el exterior y grupos de investigación nacionales a través de mecanismos como la Red Caldas.
15. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

3.2 División de Sistemas de Información para la ciencia y la Tecnología
Artículo 17.
El objetivo de esta División es promover el desarrollo de mecanismos e instrumentos de captación, procesamiento y difusión de información que sirva de soporte al avance del conocimiento, así como disponer la organización requerida para que el sistema de información sea conocido por la comunidad científica.

Parágrafo. Para desarrollar sus funciones la División cuenta con el apoyo del grupo de sistemas.

Artículo 18.
Son funciones de la División de Sistemas de Información Científica y Tecnológica:

1. Promover el desarrollo e interconexión, de redes de información científica y tecnológica.
2. Fomentar la capacitación y los servicios de soporte requeridos para el uso y la extensión de las redes nacionales e internacionales de información científica y tecnológica.
3. Asesorar a los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología en el desarrollo de estrategias de información para la investigación y la aplicación del conocimiento.
4. Apoyar a las Comisiones Regionales en la definición y puesta en práctica de sus políticas de información.
5. Convocar a acuerdos para la normalización de los instrumentos de manejo de la información científica y tecnológica.
6. Promover y apoyar la conexión de los grupos nacionales a las redes internacionales de información.
7. Diseñar, administrar y controlar el sistema de información interno de Colciencias y adecuarlo a las necesidades de la Entidad y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, velando porque todas dependencias e instancias reporten oportuna y completamente la información pertinente sobre el desarrollo de sus operaciones.
8. Coordinar el funcionamiento del centro de documentación y biblioteca de la Entidad, velando porque en ella se encuentre actualizada la información sobre ciencia y tecnología a nivel nacional e internacional, con el fin de brindar un apoyo oportuno y adecuado a las diferentes dependencias.
9. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

3.3 División de Planeación Estratégica y Evaluación
Artículo 19.

El objetivo básico de la División de Planeación Estratégica y Evaluación es brindar apoyo a los diversos programas nacionales y regionales en lo referente a la planeación estratégica, al análisis prospectivo, a la metodología de evaluación de los programas de investigación, a la generación de indicadores de desarrollo científico y tecnológico, y a la evaluación del impacto que están logrando los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que adelanta el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

Artículo 20.
Son funciones de la División de Planeación Estratégica y Evaluación:

1. Adelantar estudios y formular recomendaciones tendientes a lograr una planeación integral del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a mediano y largo plazo.
2. Desarrollar e implementar en el conjunto de sectores que componen el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología las metodologías de planeación estratégica.
3. Diseñar e implementar metodologías de evaluación en Ciencia y Tecnología. Generar indicadores de desarrollo científico y tecnológico.
4. Diseñar y desarrollar un Sistema Estadístico Nacional de la Ciencia y la Tecnología, normalizando los instrumentos de recolección y consulta de información estadística a nivel nacional y regional, y promoviendo la generación de indicadores sobre el desarrollo de la Ciencia y Tecnología en el país.
5. Realizar estudios comparativos sobre la evolución y el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología a nivel internacional, y divulgar esta información junto con las recomendaciones derivadas del análisis correspondiente, encaminadas al fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
6. Evaluar el impacto que sobre el desarrollo del país han tenido los programas de Ciencia y Tecnología.
7. Orientar la asignación de recursos entre los diferentes programas nacionales con base en las prioridades establecidas por los respectivos Consejos de Programas y de acuerdo con los lineamientos definidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

3.4 División de Recursos Humanos y Fortalecimiento de la Comunidad Científica

Artículo 21.
El objetivo básico de la División de Recursos Humanos y Fortalecimiento de la Comunidad Científica es el diseño de los planes y programas de formación de recursos humanos en materia de ciencia y tecnología que se deberán impulsar en el país, en los distintos niveles educativos, velando porque su adecuada

ejecución asegure el fortalecimiento creciente de la comunidad científica y tecnológica nacional.

Artículo 22.
Son funciones de la División de Recursos Humanos y Fortalecimiento de la Comunidad Científica:

1. Mantener actualizado el inventario de investigadores y científicos existentes en el país y de los residentes en el exterior que tengan vínculos con Colombia.
2. Disponer de la información actualizada sobre los recursos humanos en ciencia y tecnología tanto a nivel internacional, como nacional y regional.
3. Proponer y recomendar planes y programas de formación de recurso humano, con base en el análisis de las fortalezas y debilidades detectadas a nivel nacional en el campo de la ciencia y la tecnología.
4. Diseñar y proponer mecanismos e instrumentos dirigidos a estimular la investigación y el desarrollo al interior de la comunidad científica nacional, incluyendo el establecimiento de premios y distinciones para el reconocimiento de investigaciones y trabajos sobresalientes.
5. Diseñar y proponer un sistema de incentivos a la creatividad, que se constituya en parte de la cultura y el actuar de los colombianos.
6. Diseñar, proponer e implantar programas orientados al estímulo de los investigadores del país y a la consolidación de la comunidad científica nacional.
7. Diseñar, proponer e implantar los mecanismos de relación, cooperación y coordinación entre las actividades científicas y tecnológicas que desarrollen las entidades oficiales y las que, en los mismos campos, adelanten las instituciones de educación superior, la comunidad científica y el sector productivo.
8. Administrar los programas de becas nacionales e internacionales y demás estímulos establecidos para los científicos e investigadores, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
9. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

3.5 División de Ciencia, Cultura y Comunicación

Artículo 23.
El objetivo básico de la División de Ciencia, Cultura y Comunicación, es la adopción y desarrollo de la estrategia de Ciencia, Cultura y Comunicación definida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y las autoridades de Colciencias, buscando la conformación y consolidación de una cultura científica y tecnológica en el país.

Artículo 24.

Son funciones de la División de Ciencia, Cultura y Comunicación:

1. Proponer políticas y estrategias de comunicación y difusión de la ciencia y la tecnología, ejecutar las actividades tendientes a materializar la política de comunicaciones de Colciencias, estimular y apoyar la participación de las organizaciones en estas actividades.
2. Preparar y ejecutar el plan operativo anual de Comunicaciones, con especificación completa de los medios y modalidades a ser utilizados e incluyendo el presupuesto requerido, previa coordinación con las dependencias de Colciencias y con los Consejos de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología.
3. Organizar, supervisar y controlar las actividades internas o externas requeridas para cumplir los objetivos y metas establecidos por las autoridades de Colciencias y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, incluyendo la contratación de entidades o personas especializadas en labores propias de comunicación y divulgación.
4. Diseñar, coordinar e implantar mecanismos para la captura y organización de la información relacionada con el resultado de las investigaciones científicas y avances tecnológicos llevados a cabo en el país y en el exterior.
5. Realizar, estudios e investigaciones tendientes a determinar poblaciones objetivo para alcanzar las metas de la política de comunicaciones, así como el mayor desarrollo y consolidación de una cultura científica y tecnológica nacional.
6. Evaluar la evolución del país en el contexto internacional, en el campo de la ciencia y la tecnología y divulgar los resultados de este trabajo a través de los medios nacionales e internacionales que se consideren más apropiados a la luz de la política del Estado colombiano.
7. Promover la participación de científicos, investigadores y empresarios en las actividades de divulgación y difusión y coordinar con los medios de comunicación nacionales e internacionales la publicación de informes, documentales y artículos sobre los adelantos en Ciencia y Tecnología, así como de las distinciones y premios otorgados a científicos e investigadores tanto a nivel nacional como internacional.
8. Mantener actualizada la información sobre los artículos y declaraciones que aparezcan en los distintos medios de comunicación, que involucren a la entidad.
9. Dirigir y coordinar la elaboración de boletines y publicaciones institucionales.
10. Desarrollar actividades de promoción y difusión para la integración del sector productivo al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
11. Promover e invitar a las entidades innovadoras y grupos de investigadores privados para que participen en el estudio y canalización de las políticas definidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

12. Establecer estrategias de cooperación entre centros de investigación, universidades y sector productivo y apoyar las iniciativas específicas que surjan de la implantación de las estrategias.
13. Las demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

4. Subdirección de Programas de Desarrollo Científico y Tecnológico
Artículo 25.
El objetivo básico de la Subdirección de Programas de Desarrollo Científico y Tecnológico es coordinar y supervisar el desarrollo de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología, velando porque todas sus actividades estén dirigidas a contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, dentro del marco de políticas y estrategias establecido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Artículo 26.
Son funciones de la Subdirección de Desarrollo Científico y Tecnológico:

1. Asesorar al Director en la formulación de políticas y estrategias que Colciencias presentará para aprobación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
2. Asesorar al Director en la toma de decisiones tendientes a desarrollar y ejecutar las políticas y estrategias definidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, velando por su adecuado cumplimiento tanto a nivel de Colciencias como de los diversos órganos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
3. Planificar y coordinar la ejecución de las actividades propias de los programas a su cargo, de acuerdo con los lineamientos definidos por la Dirección de Colciencias y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
4. Proponer la creación, fusión o supresión de programas en su área de influencia.
5. Coordinar la evaluación de los proyectos presentados a consideración de Colciencias, de conformidad con el artículo 3□de la Ley 29 de 1990.
6. Proponer y recomendar las pautas, normas y medidas que regulen la transferencia y asimilación de tecnología en su área de competencia.
7. Velar porque las actividades de los programas a su cargo estén en concordancia con el Plan de Desarrollo del Programa y con los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
8. Coordinar los mecanismos e instrumentos de seguimiento del desarrollo de los proyectos de investigación, aprovechando el apoyo de la Oficina de Registro de Proyectos y las facilidades brindadas por el Sistema Nacional de Información Científica y Tecnológica.

9. Coordinar con la Oficina de Regionalización la estrategia integral de regionalización de los programas de innovación y desarrollo tecnológico y empresarial.
10. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

4.1. Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología

Artículo 27.
El objetivo básico de los programas es implantar la política y las estrategias definidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el ámbito específico de sus programas.

Artículo 28.
Son funciones de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología:

1. Elaborar y actualizar el diagnóstico sobre el estado de desarrollo del programa correspondiente y proponer la formulación y actualización del respectivo plan.
2. Proponer las prioridades y acciones específicas para cada uno de ellos, y presentarlas a consideración de las directivas de Colciencias y de los respectivos Consejos Nacionales para su aprobación.
3. Desarrollar, en coordinación con la Subdirección de Programas Estratégicos, las estrategias del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en su área de competencia.
4. Ejercer la Secretaría Técnica y Administrativa del respectivo programa en coordinación con la entidad que determine el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
5. Coordinar y velar por la consecución de los recursos necesarios para el desarrollo de los planes, proyectos y actividades del respectivo programa.
6. Identificar las entidades públicas que deberán destinar recursos para actividades de ciencia y tecnología relacionadas con el programa, especificando la cuantía de los mismos, de conformidad con el artículo 4□de la Ley 29 de 1990.
7. Coordinar el proceso de evaluación por pares de los proyectos de investigación presentados a consideración de Colciencias o del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con arreglos a estrictos criterios de calidad y pertinencia.
8. Diseñar indicadores de desempeño para los evaluadores externos, con el fin de conformar y consolidar bancos y redes de evaluadores.
9. Promover estudios y eventos sobre planeación y prospectiva referentes al ámbito del programa.
10. Fomentar actividades tales como: Proyectos especiales de científicos colombianos en el exterior, becas, publicaciones y comunicaciones

científicas y tecnológicas y la cooperación técnica internacional en el ámbito del respectivo programa.
11. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

5. Subdirección de Programas de Innovación y Desarrollo Empresarial

Artículo 29.
El objetivo básico de la Subdirección de Programas de Innovación y Desarrollo Empresarial es fortalecer la competitividad del sector productivo, fomentar procesos de innovación en este último, y coordinar y supervisar el desarrollo de los programas nacionales a su cargo, velando por asegurar una estrecha interacción entre el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sector Productivo.

Artículo 30. Son funciones de la Subdirección de Programas de Desarrollo Empresarial.
1. Asesorar al Director en la formulación de políticas y estrategias de fomento a la innovación y al desarrollo tecnológico y empresarial en concordancia con las políticas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
2. Asesorar al Director en la toma de decisiones tendientes a desarrollar y ejecutar las políticas y estrategias definidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para la innovación y el desarrollo tecnológico y empresarial y velar por su adecuado cumplimiento.
3. Formular y proponer planes, proyectos y actividades de desarrollo subsectoriales, para mejorar la competitividad de los sectores productivos.
4. Asesorar a los agentes económicos en la formulación de proyectos susceptibles de ser financiados por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
5. Orientar las políticas sobre evaluación y seguimiento de proyectos del sector productivo para la innovación y el desarrollo tecnológico y empresarial.
6. Coordinar con la Oficina de Regionalización la estrategia integral de regionalización de los programas de innovación y desarrollo tecnológico y empresarial.
7. Coordinar la interacción de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología con el Sector Productivo.
8. Asesorar a las empresas en la presentación de proyectos y solicitudes de conformidad con el artículo 6□ de la Ley 29 de 1990.
9. Proponer y recomendar las pautas, normas y medidas que regulen la transferencia y asimilación de tecnología en su área de competencia.
10. Proponer la creación, fusión o supresión de programas en su área de influencia.

11. Velar porque las actividades de los programas a su cargo estén en concordancia con el plan de desarrollo del programa y con los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
12. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

5.1. Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología en Innovación y Desarrollo Empresarial

Artículo 31.
El objetivo básico de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología en Innovación y Desarrollo Empresarial es desarrollar la política y las estrategias definidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el ámbito específico de los respectivos programas, para mejorar la competitividad del Sector Productivo Nacional.

Artículo 32.
Son funciones de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología en Innovación y Desarrollo Empresarial:

1. Elaborar y actualizar el diagnóstico sobre el estado de desarrollo del Programa de Desarrollo Empresarial correspondiente y proponer la formulación y actualización del respectivo plan.
2. Proponer las prioridades y acciones específicas para cada uno de ellos, y presentarlas a consideración de las directivas de Colciencias y de los respectivos Consejos Nacionales para su aprobación.
3. Desarrollar, en coordinación con la Subdirección de Programas Estratégicos, las estrategias del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en su área de competencia.
4. Ejercer la Secretaría Técnica y Administrativa del respectivo Programa de Desarrollo Empresarial en coordinación con la entidad que determine el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
5. Coordinar y velar por la consecución de los recursos necesarios para el desarrollo de los planes, proyectos y actividades del respectivo Programa de Desarrollo Empresarial.
6. Identificar las entidades públicas que deberán destinar recursos para actividades de ciencia y tecnología relacionadas con el programa, especificando la cuantía de los mismos, de conformidad con el artículo 4□de la Ley 29 de 1990.
7. Coordinar el proceso de evaluación por pares de los proyectos de investigación presentados a consideración de Colciencias o del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con arreglo a estrictos criterios de calidad, eficiencia y pertinencia.
8. Diseñar indicadores de desempeño para los evaluadores externos, con el fin de conformar y consolidar bancos y redes de evaluadores.

9. Promover estudios y eventos sobre planeación y prospectiva referentes al ámbito del programa.
10. Promover la vinculación de los empresarios a los Programas de Innovación y Desarrollo Empresarial, identificando necesidades y posibles cooperaciones relacionadas con el respectivo programa de desarrollo empresarial.
11. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

5.2. Oficina de Relaciones con el Sector Productivo
Artículo 33.
El objetivo básico de la Oficina de Relaciones con el Sector Productivo es identificar y recomendar a las directivas de la entidad en el establecimiento de vínculos con el Sector Productivo para la identificación de sus necesidades y limitantes tecnológicos y de oportunidades de acción conjuntas.

Artículo 34.
Son funciones de la Oficina de Relaciones con el Sector Productivo:

1. Asesorar a la Dirección de Colciencias y a las demás autoridades del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en la definición de políticas y estrategias de acercamiento al Sector Productivo, en el marco de los lineamientos definidos por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología y el Consejo Nacional de Competitividad.
2. Diseñar e implantar mecanismos e instrumentos de interacción con el Sector Productivo, con miras a identificar sus limitantes y plantear las acciones para superarlas.
3. Promover la presentación de proyectos de innovación tecnológica y desarrollo empresarial por parte del Sector Productivo.
4. Promover el trabajo entre el Sector Productivo y el Sector Académico, a través de la realización de proyectos de investigación conjuntos en innovación y desarrollo tecnológico y empresarial.
5. Actuar como interlocutor permanente entre los empresarios y las diferentes dependencias de la entidad, con el fin de garantizar un ágil y oportuno trámite de las propuestas que sean presentadas por el Sector Productivo.
6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

6. Subdirección Financiera y Administrativa
Artículo 35.
El objetivo básico de la Subdirección Financiera y Administrativa es la planeación, manejo y control integral de los recursos financieros y administrativos de Colciencias, y el desarrollo de las actividades de apoyo requeridas por el Instituto, todo ello dentro de una política de mejoramiento continuo y calidad total.

Artículo 36.
Son funciones de la Subdirección Financiera y Administrativa:

1. Asesorar a la Dirección en la formulación e implementación de los planes, políticas y procesos para la administración y control de los recursos humanos, físicos y financieros del Instituto.
2. Ejecutar las políticas y estrategias definidas a nivel administrativo por la Dirección de Colciencias y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
3. Gestionar, aplicar y controlar los recursos financieros confiados a Colciencias, independientemente de su fuente, velando porque los procesos de presupuesto, registro, contabilidad y giro se realicen de conformidad con las normas vigentes sobre control fiscal.
4. Coordinar con las dependencias de la entidad la elaboración del plan de compras para garantizar el cumplimiento de las funciones de la entidad.
5. Proponer y recomendar estrategias de financiamiento para el fomento de Programas de Ciencia y Tecnología.
6. Elaborar y presentar informes de los estados financieros de la entidad, proponer recomendaciones y establecer indicadores de gestión financiera del Instituto.
7. Dirigir y controlar las actividades relacionadas con la adquisición de elementos, materiales y equipos, así como la contratación de servicios generales.
8. Preparar en colaboración con la División Financiera, el proyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión de la entidad de acuerdo con la Ley 29 de 1990, para cada vigencia.
9. Presentar las propuestas al Consejo Nacional de Política Económica y Social en cada vigencia fiscal sobre las entidades descentralizadas que deben destinar recursos y su cuantía, para actividades de investigación y desarrollo tecnológico.
10. Estudiar las diferentes posibilidades de financiamiento que existen para el desarrollo de las actividades de ciencia y tecnología.
11. Elaborar, conjuntamente con los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología los respectivos presupuestos.
12. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

6.1 División de Coordinación de Crédito Externo
Artículo 37.
El objetivo básico de la División de Coordinación de Crédito Externo es el registro, administración y control de los recursos de crédito externo, velando porque éstos fluyan de manera consistente con los planes y programas establecidos por las autoridades de Colciencias y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

Artículo 38.

Son funciones de la División de Crédito Externo:

1. Asesorar a la Dirección en la preparación de solicitudes para la contratación de crédito externo e interno.
2. Planear los requerimientos del Instituto para la contratación de créditos externos y hacer el seguimiento del servicio de la deuda de los programas de ciencia y tecnología.
3. Registrar y controlar las operaciones de crédito externo de la entidad, así como mantener actualizado el sistema de información de operaciones de crédito.
4. Coordinar con la Secretaría General de Colciencias las actividades necesarias para garantizar que los contratos de crédito cumplan con todas las normas legales de formalización y registro y que las condiciones pactadas sean las mejores posibles para la institución.
5. Gestionar ante las autoridades nacionales el trámite de las autorizaciones y demás requisitos exigidos para la contratación de crédito público.
6. Diseñar, desarrollar e implantar los sistemas, métodos y procedimientos requeridos para asegurar el cumplimiento de las condiciones pactadas.
7. Tramitar la documentación e instructivos requeridos por los interesados en realizar actividades de ciencia y tecnología para que éstos puedan acceder a los recursos de crédito.
8. Diseñar, desarrollar e implantar los sistemas de seguimiento y control de las operaciones de crédito, a nivel agregado y a nivel de los programas y proyectos.
9. Coordinar con la División Financiera los sistemas, métodos y procedimientos que deberán seguirse para la adecuada incorporación presupuestal de los recursos de crédito y el registro presupuestal y contable de su ejecución.
10. Coordinar con la División Financiera y los usuarios, los sistemas, métodos y procedimientos necesarios para garantizar que los desembolsos de recursos provenientes del crédito se realicen ágilmente y con el cumplimiento de los requisitos establecidos de control.
11. Coordinar con la Subdirección Financiera y Administrativa y la Oficina de Control Interno, los sistemas, métodos y procedimientos de control a los cuales deberán sujetarse todas las operaciones de crédito.
12. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

6.2 División Financiera

Artículo 39.

Su objetivo básico es garantizar la adecuada programación de los recursos para el desarrollo de los planes y programas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, así como el correcto y oportuno registro de operaciones presupuestales y contables.

Artículo 40.
Son funciones de la División Financiera:

1. Proponer a la Subdirección Financiera y Administrativa políticas que permitan un eficiente control de las operaciones financieras de la entidad.
2. Mantener actualizados y desarrollar los procesos contables de la entidad, así como los procesos de ejecución presupuestal de conformidad con las normas establecidas por el Estatuto Orgánico de Presupuesto.
3. Elaborar los informes periódicos de la ejecución presupuestal, contable y resultados financieros, presentar los informes requeridos por el Director, la Junta Directiva y demás órganos que lo requieran, así como establecer las recomendaciones sobre la evolución de los presupuestos de las dependencias.
4. Llevar la contabilidad del Instituto y coordinar las acciones de registro de las distintas dependencias velando por un adecuado cumplimiento de la función contable.
5. Consolidar el presupuesto anual del Instituto de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y los criterios definidos por la Dirección, realizando las actividades necesarias para su presentación a las autoridades nacionales.
6. Velar por la adecuada aplicación de los recursos financieros de la entidad, a fin de optimizar los rendimientos, así como garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con terceros y personal del Instituto.
7. Administrar y custodiar los valores, documentos y demás instrumentos negociables y en garantía que haya recibido bajo su responsabilidad de acuerdo con las normas establecidas.
8. Elaborar periódicamente el flujo de caja de la entidad, tanto a nivel agregado como por fuentes y reportar oportunamente a la Subdirección Financiera y Administrativa sobre las desviaciones detectadas.
9. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Parágrafo. La División Financiera contará con un funcionario que ejercerá las funciones de tesorero de la entidad.

6.3 División de Personal
Artículo 41.
El objetivo básico de la División de Personal es el mejoramiento de las personas que laboran en Colciencias, la planeación de las necesidades de formación e incorporación de personal, la promoción del bienestar, el desarrollo de las potencialidades individuales y la administración de la relación entre Colciencias y sus colaboradores.

Artículo 42.
Son funciones de la División de Personal:

1. Ejecutar las políticas y desarrollar iniciativas para la calificación del personal de Colciencias.
2. Programar la capacitación y la formación e incorporación de las personas que requiera el Instituto.
3. Promover el bienestar del personal, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad.
4. Coordinar y ejecutar los procesos de convocatoria, selección, inducción, contratación, evaluación del desempeño, capacitación y promoción de acuerdo con las disposiciones legales del Instituto y las políticas fijadas por la Dirección.
5. Supervisar el trámite y control de novedades de personal, en lo relacionado con las actividades propias de la dependencia.
6. Elaborar la nómina y liquidar las prestaciones sociales de los empleados del Instituto.
7. Velar por el cumplimiento de los regímenes administrativo y disciplinario y demás normas que regulen las actividades del Instituto.
8. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

6.4 División de Servicios Generales
Artículo 43.
El objetivo básico de la División de Servicios Generales es garantizar el suministro oportuno de bienes y servicios a todas las dependencias del Instituto.

Artículo 44.
Son funciones de la División de Servicios Generales:

1. Elaborar y ejecutar el plan de compras de la entidad y suministrar en forma oportuna y adecuada los servicios administrativos requeridos para la buena marcha de las diferentes dependencias de la institución.
2. Efectuar las adquisiciones, custodia, almacenamiento y suministro de materiales y elementos para las dependencias del Instituto.
3. Velar por el correcto manejo y mantener actualizado el inventario de bienes y materiales de la entidad.
4. Prestar oportunamente los servicios de apoyo logístico como transporte, viajes, archivo, aseo, cafetería, correspondencia y reparaciones locativas que requieran las dependencias del Instituto.
5. Programar, organizar y efectuar todos los trámites relacionados con los viajes nacionales e internacionales de los funcionarios del Instituto y de los investigadores colombianos, así como los de asesores e investigadores invitados, manteniendo actualizado un inventario de rutas, precios, horarios, condiciones, hoteles, salas de convenciones y demás información necesaria para el uso óptimo de los recursos destinados a este fin.

6. Efectuar todos los trámites necesarios para contratar y ejecutar los servicios de mantenimiento de equipos, enseres y locativos que requieren las dependencias del Instituto.
7. Efectuar la interventoría de los servicios administrativos que sean contratados, incluyendo los de aseo, cafetería y demás que se estimen necesarios.
8. Organizar, supervisar y controlar el servicio de mensajería interna y externa a las dependencias del Instituto.
9. Organizar, actualizar y manejar el archivo del Instituto.
10. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

7. Organos de asesoría y coordinación
Artículo 45.
El Comité de Dirección estará integrado por:

a) El Director, quien lo presidirá;
b) El Secretario General, quien desempeñará la Secretaría del Comité;
c) Los Subdirectores;
d) El Jefe de la Oficina de Control Interno;
e) El Asesor Jurídico.

Artículo 46. Son funciones del Comité de Dirección:

1. Asesorar al Director en la definición de políticas y toma de decisiones para el manejo del Instituto.
2. Armonizar los programas y actividades de las distintas dependencias.
3. Evaluar y recomendar lo concerniente a adjudicaciones, de acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos vigentes, en procesos de contratación y adquisición.
4. Evaluar los informes que presente la Oficina de Control de Gestión y formular recomendaciones para el cumplimiento de los planes, programas y metas.
5. Adoptar medidas para garantizar el mejoramiento de los procesos internos del Instituto, así como la eficacia y eficiencia de los funcionarios del Instituto
6. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

Parágrafo. El Comité de Dirección ejercerá además las funciones propias del Comité de Control Interno, de acuerdo con lo establecido en la Ley 87 de 1993 y actuará como Secretario en dicho caso el Jefe de la Oficina de Control Interno.

Artículo 47. La Comisión de Personal se integrará y cumplirá sus funciones de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

CAPITULO III
DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 48. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación por decreto del Gobierno Nacional y deroga el Acuerdo número 34 de 1991 y demás disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese y cúmplase.

ANEXO Nº 14

LEY 344 DE 1996
(diciembre 27)

por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

Artículo 1º. Por medio de esta Ley se adoptan medidas tendientes a racionalizar y disminuir el gasto público, garantizar su financiamiento y reasignar recursos hacia sectores deficitarios de la actividad estatal, como condición fundamental para mantener el equilibrio financiero y garantizar el cumplimiento de los principios de economía, eficacia y celeridad en el uso de los recursos públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política.

Artículo 16. De los ingresos correspondientes a los aportes sobre las nóminas de que trata el numeral cuarto del artículo 30 de la Ley 119 de 1994, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, destinará un 20% de dichos ingresos para el desarrollo de programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo.

El SENA ejecutará directamente estos programas a través de sus centros de formación profesional o podrá realizar convenios en aquellos casos en que se requiera la participación de otras entidades o centros de desarrollo tecnológico.

Parágrafo. El Director del Sena hará parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Director de Colciencias formará parte del Consejo Directivo del SENA.

ANEXO Nº 15

LEY 383 DE 1997 (julio 10)

por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 57. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:
"Artículo 126-3. Deducción por inversiones o donaciones para proyectos de investigación o desarrollo científico o tecnológico: Las personas jurídicas, contribuyentes del impuesto sobre la renta que realicen inversiones o hagan donaciones para proyectos de investigación o desarrollo de actividades calificadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como de carácter científico o tecnológico, tendrán derecho a deducir de su renta el ciento veinticinco por ciento (125%) del valor invertido o donado, en el periodo gravable en que se realizó la inversión o donación.
Para gozar de este beneficio, se deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 125-1, 125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario, y los demás que establezca el reglamento."

ANEXO N º 16

LEY 397 DE 1997 (agosto 7)

Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:

TITULO I.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y DEFINICIONES

ARTICULO 1o. DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y DEFINICIONES DE ESTA LEY. La presente ley está basada en los siguientes principios fundamentales y definiciones:
1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.
2. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la identidad y la cultura colombianas.
3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana.
4. En ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales.
5. Es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el Patrimonio Cultural de la Nación.
6. El Estado garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y raizales y a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, a generar el conocimiento de las mismas según sus propias tradiciones y a beneficiarse de una educación que asegure estos derechos.
El Estado colombiano reconoce la especificidad de la cultura caribe y brindará especial protección a sus diversas expresiones.
7. El Estado protegerá el castellano como idioma oficial de Colombia y las lenguas de los pueblos indígenas y comunidades negras y raizales en sus territorios. Así mismo, impulsará el fortalecimiento de las lenguas amerindias y

criollas habladas en el territorio nacional y se comprometerá en el respeto y reconocimiento de éstas en el resto de la sociedad.
8. El desarrollo económico y social deberá articularse estrechamente con el desarrollo cultural, científico y tecnológico. El Plan Nacional de Desarrollo tendrá en cuenta el Plan Nacional de Cultura que formule el Gobierno. Los recursos públicos invertidos en actividades culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público social.
9. El respeto de los derechos humanos, la convivencia, la solidaridad, la inter-culturalidad, el pluralismo y la tolerancia son valores culturales fundamentales y base esencial de una cultura de paz.
10. El Estado garantizará la libre investigación y fomentará el talento investigativo dentro de los parámetros de calidad, rigor y coherencia académica.
11. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura artística y cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma.
12. El Estado promoverá la interacción de la cultura nacional con la cultura universal.
13. El Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor como al receptor de la cultura y garantizará el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas limitadas física, sensorial y síquicamente, de la tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales más necesitados.

ARTICULO 2o. DEL PAPEL DEL ESTADO EN RELACION CON LA CULTURA. Las funciones y los servicios del Estado en relación con la cultura se cumplirán en conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la política estatal sobre la materia son la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional.

ARTICULO 3o. El Ministerio de Cultura coordinará la acción del Estado para la formación del nuevo ciudadano según lo establecido por los artículos 1o. al 18 de la Ley 188 de 1995, Plan Nacional de Desarrollo.

TITULO II.
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION

ARTICULO 4o. DEFINICION DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION. El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano,

arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular.
Las disposiciones de la presente ley y de su futura reglamentación serán aplicadas a los bienes y categorías de bienes que siendo parte del Patrimonio Cultural de la Nación pertenecientes a las épocas prehispánicas, de la Colonia, la Independencia, la República y la Contemporánea, sean declarados como bienes de interés cultural, conforme a los criterios de valoración que para tal efecto determine el Ministerio de Cultura.

PARAGRAFO 1o. Los bienes declarados monumentos nacionales con anterioridad a la presente ley, así como los bienes integrantes del patrimonio arqueológico, serán considerados como bienes de interés cultural.
También podrán ser declarados bienes de interés cultural, previo concepto del Ministerio de Cultura, aquellos bienes que hayan sido objeto de reconocimiento especial expreso por las entidades territoriales.

ARTICULO 5o. OBJETIVOS DE LA POLITICA ESTATAL EN RELACION CON EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION. La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación, tendrá como objetivos principales la protección, la conservación, la rehabilitación y la divulgación de dicho patrimonio, con el propósito de que éste sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.

ARTICULO 6o. PATRIMONIO ARQUEOLOGICO. Son bienes integrantes del patrimonio arqueológico aquellos muebles o inmuebles que sean originarios de culturas desaparecidas, o que pertenezcan a la época colonial, así como los restos humanos y orgánicos relacionados con esas culturas. Igualmente, forman parte de dicho patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes.
También podrán formar parte del patrimonio arqueológico, los bienes muebles e inmuebles representativos de la tradición e identidad culturales pertenecientes a las comunidades indígenas actualmente existentes, que sean declarados como tal por el Ministerio de Cultura, a través del Instituto Colombiano de Antropología, y en coordinación con las comunidades indígenas.
El particular que encuentre bienes arqueológicos deberá dar aviso inmediato a las autoridades civiles o policivas más cercanas, las cuales tendrán como obligación informar del hecho al Ministerio de Cultura, durante las veinticuatro (24) horas siguientes.
El Ministerio de Cultura determinará técnica y científicamente los sitios en que puede haber bienes arqueológicos o que sean contiguos a áreas arqueológicas, hará las declaratorias respectivas y elaborará el Plan Especial de Protección a que se refiere el artículo 10, numeral 3 de esta ley, en

colaboración con las demás autoridades y organismos del nivel nacional y de las entidades territoriales.
En el proceso de otorgamiento de las licencias ambientales sobre áreas declaradas como Patrimonio Arqueológico, las autoridades ambientales competentes, consultarán con el Ministerio de Cultura, sobre la existencia de áreas arqueológicas y los planes de protección vigentes, para efectos de incorporarlos en las respectivas licencias.
El Ministerio de Cultura dará su respuesta en un plazo no superior a 30 días calendario.

ARTICULO 7o. CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES. El Consejo de Monumentos Nacionales es el órgano encargado de asesorar al Gobierno Nacional en cuanto a la protección y manejo del patrimonio cultural de la Nación.
El Gobierno Nacional reglamentará lo relativo a la composición, funciones y régimen de sesiones del Consejo de Monumentos Nacionales.

ARTICULO 8o. DECLARATORIA Y MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y previo concepto del Consejo de Monumentos Nacionales, es el responsable de la declaratoria y del manejo de los monumentos nacionales y de los bienes de interés cultural de carácter nacional.
A las entidades territoriales, con base en los principios de descentralización, autonomía y participación, les corresponde la declaratoria y el manejo del patrimonio cultural y de los bienes de interés cultural del ámbito municipal, distrital, departamental, a través de las alcaldías municipales y las gobernaciones respectivas, y de los territorios indígenas, previo concepto de los centros filiales del Consejo de Monumentos Nacionales allí donde existan, o en su defecto por la entidad delegada por el Ministerio de Cultura.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de que los bienes antes mencionados puedan ser declarados bienes de interés cultural de carácter nacional.
Para la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural se aplicará el principio de coordinación entre los niveles nacional, departamental, distrital y municipal y de los territorios indígenas.
Los planes de desarrollo de las entidades territoriales tendrán en cuenta los recursos para la conservación y la recuperación del patrimonio cultural.

PARAGRAFO 1o. Se reconoce el derecho de las iglesias y confesiones religiosas de ser propietarias del patrimonio cultural que hayan creado, adquirido con recursos o que estén bajo su legítima posesión. Igualmente, se protegen la naturaleza y finalidad religiosa de dichos bienes, las cuales no podrán ser obstaculizadas ni impedidas por su valor cultural.
Al tenor del artículo 15 de la Ley 133 de 1994, el Estado celebrará con las correspondientes iglesias y confesiones religiosas, convenios para establecer el régimen de estos bienes, incluyendo las restricciones a su enajenación y

exportación y las medidas para su inventario, conservación, restauración, estudio y exposición.

ARTICULO 9o. DEL PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO. Pertenecen al patrimonio cultural o arqueológico de la Nación, por su valor histórico o arqueológico, que deberá ser determinado por el Ministerio de Cultura, las ciudades o cementerios de grupos humanos desaparecidos, restos humanos, las especies náufragas constituidas por las naves y su dotación, y demás bienes muebles yacentes dentro de éstas, o diseminados en el fondo del mar, que se encuentren en el suelo o subsuelo marinos de las aguas interiores, el mar territorial, la plataforma continental o zona económica exclusiva, cualesquiera que sea su naturaleza o estado y la causa o época del hundimiento o naufragio. Los restos o partes de embarcaciones, dotaciones o bienes que se encuentren en circunstancias similares, también tienen el carácter de especies náufragas.

PARAGRAFO 1o. Toda exploración y remoción del patrimonio cultural sumergido, por cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, requiere autorización previa del Ministerio de Cultura, y de la Dirección General Marítima, DIMAR, del Ministerio de Defensa Nacional, la cual será temporal y precisa.
Si en ejercicio de la autorización se produjere un hallazgo, deberá denunciarse el mismo ante tal Dirección, con el fin de que ésta acredite como denunciante a quien lo haya hecho, mediante acto reservado y debidamente motivado.
Si como consecuencia de la denuncia se produce el rescate en las coordenadas geográficas indicadas por el denunciante, éste tendrá derecho a un porcentaje del valor bruto de las especies náufragas que será reglamentado por el Gobierno Nacional, oído el concepto del Consejo Nacional de Cultura.
Para los contratos de rescate, el denunciante debe ofrecer primero a la Nación los objetos que por derecho le pertenezcan, y sólo después a otras entidades.

PARAGRAFO 2o. Los métodos utilizados para la exploración y remoción del patrimonio cultural sumergido deben evitar su destrucción, con el fin de otorgar la mayor claridad sobre el posible hallazgo y preservar la información cultural del mismo, aun si esto implicara dejarlo en su sitio en espera de otros métodos y tecnologías que permitan su rescate o estudio sin daño alguno. En cualquier caso, debe estar presente como supervisor, un grupo de arqueólogos submarinos debidamente acreditados por el Ministerio de Cultura.
Para efectos de lo previsto en este artículo, la Comisión de Especies Náufragas de que trata el Decreto 29 de 1984, rendirá concepto previo a la Dirección General Marítima, DIMAR, y obrará como organismo asesor del Gobierno en la materia.
Corresponderá al Ministerio de Cultura determinar el destino o uso de las especies náufragas rescatadas, pudiendo celebrar convenios de administración

con entidades públicas o privadas que tengan como una de sus actividades principales la ejecución de programas culturales abiertos al público.
El Gobierno Nacional reglamentará lo dispuesto en este artículo.
ARTICULO 10. INEMBARGABILIDAD, IMPRESCRIPTIBILIDAD E INALIENABILIDAD. Los bienes de interés cultural que conforman el patrimonio cultural de la Nación que sean propiedad de entidades públicas, son inembargables, imprescriptibles e inalienables.

PARAGRAFO. El Ministerio de Cultura autorizará, en casos excepcionales, la enajenación o el préstamo de bienes de interés cultural entre entidades públicas.

ARTICULO 11. REGIMEN PARA LOS BIENES DE INTERES CULTURAL. Los bienes de interés cultural públicos y privados estarán sometidos al siguiente régimen:
1. Demolición, desplazamiento y restauración. Ningún bien que haya sido declarado de interés cultural podrá ser demolido, destruido, parcelado o removido, sin la autorización de la autoridad que lo haya declarado como tal.
2. Intervención. Entiéndese por intervención todo acto que cause cambios al bien de interés cultural o que afecte el estado del mismo.
Sobre el bien de interés cultural no se podrá efectuar intervención alguna sin la correspondiente autorización del Ministerio de Cultura.
La intervención de bienes de interés cultural deberá realizarse bajo la supervisión de profesionales en la materia debidamente acreditados ante el Ministerio de Cultura.
Por virtud de lo dispuesto en el artículo 5o. de esta ley, para los bienes de interés cultural que pertenezcan al patrimonio arqueológico de la Nación, dicha autorización estará implícita en las licencias ambientales de los proyectos de minería, hidrocarburos, embalses o macroproyectos de infraestructura. En estos casos, se dispondrá que la supervisión será ejercida en cualquier tiempo por los profesionales acreditados ante el Ministerio de Cultura.
El propietario de un predio que se encuentre en el área de influencia o que sea colindante con un bien inmueble de interés cultural, que pretenda realizar obras que puedan afectar las características de éste, deberá obtener autorización para dichos fines de parte de la autoridad que efectuó la respectiva declaratoria.
3. Plan especial de protección. Con la declaratoria de un bien como de interés cultural se elaborará un plan especial de protección del mismo por parte de la autoridad competente.
El plan especial de protección indicará el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de intervención y las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes, en coordinación con las entidades territoriales correspondientes.
Para el caso específico del patrimonio arqueológico reconocido y prospectado en desarrollo de la construcción de redes de transporte de hidrocarburos se

entenderá como "Plan Especial de Protección" el Plan de Manejo Arqueológico que hace parte del Plan de Manejo Ambiental presentado al Ministerio del Medio Ambiente dentro del proceso de obtención de la licencia ambiental.
4. Salida del país y movilización. Queda prohibida la exportación de los bienes muebles de interés cultural. Sin embargo, el Ministerio de Cultura podrá autorizar su salida temporal, por un plazo que no exceda de tres (3) años, con el único fin de ser exhibidos al público o estudiados científicamente.
La salida del país de cualquier bien mueble que se considere como integrante del patrimonio cultural de la Nación requerirá del permiso previo de los organismos territoriales encargados del cumplimiento de la presente ley o del Ministerio de Cultura.
El bien objeto de la exportación o sustracción ilegal será decomisado y puesto a órdenes del Ministerio de Cultura.
Así mismo, el Ministerio de Cultura y demás instituciones públicas, realizarán todos los esfuerzos tendientes a repatriar los bienes de interés cultural que hayan sido extraídos ilegalmente del territorio colombiano.

ARTICULO 12. DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO, HEMEROGRAFICO, DOCUMENTAL Y DE IMAGENES EN MOVIMIENTO. El Ministerio de Cultura y el Ministerio del Interior, a través de la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, respectivamente, son las entidades responsables de reunir, organizar, incrementar, preservar, proteger, registrar y difundir el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental de la Nación, sostenido en los diferentes soportes de información. Así mismo, las bibliotecas departamentales y regionales, y los archivos municipales, distritales y departamentales, podrán ser depositarios de su patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental.

PARAGRAFO. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, velará por la recuperación, conservación y preservación del patrimonio colombiano de imágenes en movimiento.

ARTICULO 13. DERECHOS DE GRUPOS ETNICOS. Los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica conservarán los derechos que efectivamente estuvieren ejerciendo sobre el patrimonio arqueológico que sea parte de su identidad cultural, para lo cual contarán con la asesoría y asistencia técnica del Ministerio de Cultura.
Con el fin de proteger lenguas, tradiciones, usos y costumbres y saberes, el Estado garantizará los derechos de autoría colectiva de los grupos étnicos, apoyará los procesos de etnoeducación, y estimulará la difusión de su patrimonio a través de los medios de comunicación.

ARTICULO 14. REGISTRO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. La Nación y las entidades territoriales estarán en la obligación de realizar el registro del patrimonio cultural. Las entidades territoriales remitirán

periódicamente al Ministerio de Cultura, sus respectivos registros, con el fin de que sean contemplados en el Registro Nacional del Patrimonio Cultural.
El Ministerio de Cultura reglamentará lo relativo al registro y definirá las categorías de protección aplicables a los diversos tipos de bienes registrados, en coordinación con las entidades territoriales.

ARTICULO 15. DE LAS FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION. Las personas que vulneren el deber constitucional de proteger el patrimonio cultural de la Nación, incurrirán en las siguientes faltas:
1. Si la falta constituye hecho punible por la destrucción o daño de los bienes de interés cultural, o por su explotación ilegal, de conformidad con lo establecido en los artículos 242, 246, 349, 370, 371 y 372 del Código Penal, es obligación colocar la respectiva denuncia penal y, si hubiere flagrancia, colocar inmediatamente al retenido a órdenes de la autoridad de policía más cercana, sin perjuicio de imponer las sanciones patrimoniales aquí previstas.
2. Si la falta consiste en la construcción, ampliación, modificación, reparación o demolición de un bien de interés cultural, sin la respectiva licencia, se impondrán las sanciones previstas en el artículo 66 de la Ley 9a de 1989, aumentadas en un ciento por ciento (100%).
3. Si la falta consiste en la movilización de un bien mueble de interés cultural sin autorización de la autoridad que lo declaró como tal, se impondrá una multa de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4. Si la falta consistiere en adelantar exploraciones o excavaciones no autorizadas de bienes arqueológicos, se impondrá multa de doscientos (200) a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
5. Si la falta contra un bien de interés cultural fuere realizada por un servidor público, ella será tenida por falta gravísima, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 200 de 1995.

PARAGRAFO 1o. El Ministerio de Cultura, o la autoridad que éste delegue para la ejecución de la presente Ley, estará facultado para la imposición y cobro de las sanciones patrimoniales previstas en el artículo anterior.

PARAGRAFO 2o. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, además de las entidades territoriales quedan investidos de funciones policivas para la imposición y ejecución de medidas, multas y demás sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables según el caso.

ARTICULO 16. DE LA ACCION DE CUMPLIMIENTO SOBRE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL. El efectivo cumplimiento de las leyes o actos administrativos que tengan relación directa con la protección y defensa de los bienes de interés cultural, podrá ser demandado por cualquier persona a través del procedimiento de ejecución singular regulado en el Código de Procedimiento Civil.

Si el incumplimiento proviniere de una autoridad de orden nacional, será competente para conocer del proceso de ejecución en primera instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca; en los demás casos, el Tribunal Administrativo correspondiente a la jurisdicción de la autoridad demandada.
Para librar el mandamiento de ejecución, el juez del conocimiento requerirá al jefe o director de la entidad demandada para que por escrito señale la forma como se está dando acatamiento a lo dispuesto en las leyes y actos administrativos que sustentan la acción de cumplimiento.
Pasados ocho (8) días hábiles sin que se obtenga respuesta del funcionario, el juez procederá a decretar la ejecución. En el mandamiento de ejecución, se condenará en costas al funcionario renuente, y a la entidad que pertenezca, salvo justa causa comprobada, quienes serán solidariamente responsables del pago.
En ningún caso se podrá desistir de la acción interpuesta y la ejecución del cumplimiento será imprescriptible.

TITULO III.
DEL FOMENTO Y LOS ESTIMULOS A LA CREACION, A LA INVESTIGACION Y A LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL

ARTICULO 17. DEL FOMENTO. El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacífica.

ARTICULO 18. DE LOS ESTIMULOS. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo en cada una de las siguientes expresiones culturales:
a) Artes plásticas;
b) Artes musicales;
c) Artes escénicas;
d) Expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor, las artesanías, la narrativa popular y la memoria cultural de las diversas regiones y comunidades del país;

e) Artes audiovisuales;
f) Artes literarias;
g) Museos (Museología y Museografía);
h) Historia;
i) Antropología;
j) Filosofía;
k) Arqueología;
l) Patrimonio;
m) Dramaturgia;
n) Crítica;
ñ) Y otras que surjan de la evolución sociocultural, previo concepto del Ministerio de Cultura.

ARTICULO 19. REGIMEN ADUANERO PARA EL INTERCAMBIO CULTURAL. Con el fin de favorecer el intercambio cultural, señálase como criterios generales, a los que debe sujetarse el Gobierno Nacional para la fijación del régimen aduanero, la supresión de aranceles del ingreso temporal de bienes culturales o la adopción de medidas que faciliten su entrada al país y la exención de impuestos de aduana y nacionalización a bienes de interés cultural que sean adquiridos a cualquier título o recuperados por una entidad pública.

ARTICULO 20. DIFUSION Y PROMOCION. Según el caso, el Ministerio de Cultura organizará y promoverá sin distingos de ninguna índole la difusión y promoción nacional de las expresiones culturales de los colombianos, la participación en festivales internacionales y otros eventos de carácter cultural.
Así mismo, el Ministerio de Cultura en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, promoverá la difusión, promoción y comercialización de las expresiones de los colombianos en el exterior, sin distingos de ninguna índole.

ARTICULO 21. DERECHO PREFERENCIAL A LA RADIO Y LA TELEVISION PUBLICAS. El Ministerio de Cultura, como socio de Inravisión, tendrá por derecho propio como mínimo, diez horas semanales para la difusión de actividades artísticas y culturales.

ARTICULO 22. INFRAESTRUCTURA CULTURAL. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, definirá y aplicará medidas concretas conducentes a estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos para la realización de actividades culturales y, en general propiciará la infraestructura que las expresiones culturales requieran.
Se tendrán en cuenta en los proyectos de infraestructura cultural la eliminación de barreras arquitectónicas que impidan la libre circulación de los discapacitados físicos y el fácil acceso de la infancia y la tercera edad.

PARAGRAFO 1o. El Fondo de Cofinanciación para la Inversión Social, FIS, cofinanciará con los municipios programas y proyectos de infraestructura cultural orientados hacia los grupos étnicos de población más pobres y vulnerables, de acuerdo con la Constitución Política, la Ley 115 de 1994 y el Decreto 2132 de 1992.

PARAGRAFO 2o. Los establecimientos que ofrezcan los servicios de educación por niveles y grados contarán con infraestructura para el desarrollo de actividades artísticas y culturales, en cumplimiento del artículo 141 de la Ley 115 de 1994.
El Ministerio de Cultura podrá cofinanciar las estructuras de carácter artístico y cultural, determinar los criterios para su adecuada y racional utilización con fines de fomento y participación comunitaria y prestar la asesoría técnica.

PARAGRAFO 3o. Las instituciones de educación superior públicas y privadas deberán contar con infraestructura para el desarrollo de actividades artísticas y culturales, propia o garantizada mediante convenios, adecuada a la población estudiantil a la que prestan el servicio educativo, en un plazo no mayor de cinco (5) años, para lo cual podrán utilizar las líneas de crédito establecidas por el artículo 130 de la Ley 30 de 1992.
PARAGRAFO 4o. De conformidad con lo establecido en el Capítulo III de la Ley 9a de 1989, el Ministerio de Cultura podrá adelantar en forma directa o a través de las entidades territoriales o la entidad pública beneficiaria o vinculada, el proceso de enajenación voluntaria o de expropiación de inmuebles para efectos de los literales c) y f) del artículo 10 de la misma ley.

PARAGRAFO 5o. Los proyectos de renovación urbana a que se refiere el artículo 39 de la Ley 9a de 1989 y los nuevos proyectos de urbanización que se aprueben a partir de la vigencia de la presente ley, deberán contemplar infraestructura para el desarrollo de actividades artísticas y culturales, que obedezca a las necesidades y tendencias de la comunidad en su zona de influencia según los concejos municipales.

ARTICULO 23. CASAS DE LA CULTURA. <Artículo derogado por el artículo 96 de la Ley de 2000>
ARTICULO 24. BIBLIOTECAS. Los gobiernos nacional, departamental, distrital y municipal consolidarán y desarrollarán la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, coordinada por el Ministerio de Cultura, a través de la Biblioteca Nacional, con el fin de promover la creación, el fomento y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas y mixtas y de los servicios complementarios que a través de éstas se prestan. Para ello, incluirán todos los años en su presupuesto las partidas necesarias para crear, fortalecer y sostener el mayor número de bibliotecas públicas en sus respectivas jurisdicciones.

El Ministerio de Cultura, a través de la Biblioteca Nacional, es el organismo encargado de planear y formular la política de las bibliotecas públicas y la lectura a nivel nacional y de dirigir la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

ARTICULO 25. RECURSOS DE LEY 60 DE 1993 PARA ACTIVIDADES CULTURALES. Los municipios asignarán a las actividades culturales, prioritariamente casas de la cultura y bibliotecas públicas, al menos un dos por ciento (2%), de los recursos regulados en el artículo 22 numeral 4o., de la Ley 60 de 1993.

ARTICULO 26. DE LOS CONVENIOS. El Ministerio de Cultura orientará y apoyará a las gobernaciones, las alcaldías municipales y distritales y a los cabildos indígenas en la realización de convenios con instituciones culturales sin ánimo de lucro que fomenten el arte y la cultura, con el objeto de rescatar, defender y promover el talento nacional, democratizar el acceso de las personas a los bienes, servicios y manifestaciones de la cultura y el arte con énfasis en el público infantil y juvenil, tercera edad y discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales; así como consolidará las instituciones culturales y contribuirá a profundizar su relación interactuante con la comunidad.

ARTICULO 27. EL CREADOR. Se entiende por creador cualquier persona o grupo de personas generadoras de bienes y productos culturales a partir de la imaginación, la sensibilidad y la creatividad.
Las expresiones creadoras, como expresión libre del pensamiento humano, generan identidad, sentido de pertenencia y enriquecen la diversidad cultural del país.

ARTICULO 28. EL GESTOR CULTURAL. Impulsa los procesos culturales al interior de las comunidades y organizaciones e instituciones, a través de la participación, democratización y descentralización del fomento de la actividad cultural.
Coordina como actividad permanente las acciones de administración, planeación, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos de las entidades y organizaciones culturales o de los eventos culturales comunitarios.

ARTICULO 29. FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentará la formación y capacitación técnica y cultural, del gestor y el administrador cultural, para garantizar la coordinación administrativa y cultural con carácter especializado. Así mismo, establecerá convenios con universidades y centros culturales para la misma finalidad.
El Ministerio de Cultura establecerá convenios con universidades públicas y privadas para la formación y especialización de los creadores en todas las expresiones a que se hace referencia en el artículo 16 de la presente ley.

El Ministerio de Cultura, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, promoverá en las universidades estatales, en los términos de la Ley 30 de 1992, la creación de programas académicos de nivel superior en el campo de las artes, incluyendo la danza-ballet y las demás artes escénicas.

ARTICULO 30. SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y DEL GESTOR CULTURAL. Las entidades territoriales competentes afiliarán al Régimen Subsidiado en Salud a los artistas, autores y compositores de escasos recursos.
Para tal efecto los consejos departamentales y municipales de cultura, harán el reconocimiento de la calidad de artista y trabajador de la cultura.
Una vez entre en vigencia la presente ley, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud deberá expedir la reglamentación que garantice la afiliación referida en el presente artículo.

ARTICULO 31. PENSION VITALICIA PARA LOS CREADORES Y GESTORES DE LA CULTURA. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Cuando un creador o gestor cultural cumpliere los 65 años y no acredite los requisitos mínimos de cotización para acceder a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, el Ministerio de Cultura con sujeción a sus disponibilidades presupuestales hará las apropiaciones a la entidad administradora de pensiones donde se encuentre afiliado el creador o gestor cultural, hasta completar con las cotizaciones ya recaudadas, el monto requerido para cumplir la cotización mínima exigida por la ley.
En el caso de que el creador o gestor cultural no esté afiliado, el Ministerio de Cultura lo afiliará al Sistema General de Pensiones.
Para efectos de cumplir lo aquí dispuesto, el Ministerio de Cultura constituirá un fondo cuenta de seguridad social.
ARTICULO 32. PROFESIONALIZACION DE LOS ARTISTAS. El Ministerio de Cultura, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, definirá los criterios, requisitos y procedimientos y realizará las acciones pertinentes para reconocer el carácter de profesional titulado a los artistas que a la fecha de la aprobación de la presente ley, tengan la tarjeta profesional otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, con base en el Decreto 2166 de 1985.

PARAGRAFO. El Ministro de Cultura o su delegado participará en el Consejo Asesor para la Profesionalización del Artista, establecido según el Decreto 2166 de 1985.

ARTICULO 33. DERECHOS DE AUTOR. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Los derechos de autor y conexos morales y patrimoniales de autores, actores, directores y dramaturgos, se consideran de carácter inalienable por las implicaciones que éstos tienen para la seguridad social del artista.

ARTICULO 34. PARTICIPACION EN REGALIAS. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Los actores, directores, dramaturgos, libretistas, guionistas tendrán derecho ~~irrenunciable~~ a la participación de regalías por reproducción de la obra en que actúen, conforme a la reglamentación de la presente ley.

ARTICULO 35. DEL INTERCAMBIO, LA PROYECCION INTERNACIONAL Y LAS FRONTERAS. El Estado, a través del Ministerio de Cultura, financiará sin distingos de ninguna índole el intercambio internacional con los demás países como medio de cualificación de los artistas nacionales y de la ciudadanía en general.
El Estado, a través del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Relaciones Exteriores, promoverá y financiará el establecimiento de programas específicos de desarrollo cultural en el ámbito internacional, con un tratamiento especial en las fronteras colombianas, que permitan la afirmación, el intercambio y la integración de las culturas.

ARTICULO 36. CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CULTURALES. Para el cabal cumplimiento de las funciones relativas al fomento y el estímulo a la creación, investigación y a la actividad artística y cultural a que se refiere el Título III, así como las asignadas respecto al patrimonio cultural de la Nación, el Ministerio de Cultura podrá celebrar las modalidades de contratos o convenios previstos en los Decretos 393 y 591 de 1991, con sujeción a los requisitos establecidos en la citada normatividad.

ARTICULO 37. FINANCIACION DE ACTIVIDADES CULTURALES A TRAVES DEL IFI. A través del Instituto de Fomento Industrial, IFI, y mediante la realización de operaciones de crédito a sociedades y entidades sin ánimo de lucro, o de descuento a través del sistema financiero, se podrán financiar actividades culturales y artísticas.
Para lograr este objetivo, y de conformidad con el artículo 253 numeral 3o., del Decreto-ley 663 de 1993, el Gobierno Nacional incluirá anualmente en los proyectos de ley de presupuesto nacional los recursos necesarios para financiar el diferencial entre las tasas de colocación de los préstamos de fomento, a proyectos y empresas de la cultura y las artes en todas sus manifestaciones, y las tasas de captación de recursos del Instituto de Fomento Industrial, IFI, el cual realizará las operaciones una vez haya recibido los recursos.
La Junta Directiva del Instituto de Fomento Industrial, IFI, en coordinación con el Ministerio de Cultura, reglamentará las condiciones de las operaciones referidas en este artículo.
En todo caso, el Instituto de Fomento Industrial, IFI, establecerá condiciones preferenciales de acceso a estos créditos, teniendo en cuenta la capacidad conómica de los solicitantes.

ARTICULO 38. ESTAMPILLA PROCULTURA. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 666 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Autorízase a las asambleas departamentales, a los concejos distritales y a los concejos municipales para que ordenen la emisión de una estampilla "Procultura" cuyos recursos serán administrados por el respectivo ente territorial, al que le corresponda, el fomento y el estímulo de la cultura, con destino a proyectos acordes con los planes nacionales y locales de cultura.

ARTÍCULO 38-1. <Artículo adicionado por el artículo 2 de la Ley 666 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> El producido de la estampilla a que se refiere el artículo anterior, se destinará para:

1. Acciones dirigidas a estimular y promocionar la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales de que trata el artículo 18 de la Ley 397 de 1997.

2. Estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos para la realización de actividades culturales, participar en la dotación de los diferentes centros y casas culturales y, en general propiciar la infraestructura que las expresiones culturales requieran.

3. Fomentar la formación y capacitación técnica y cultural del creador y del gestor cultural.

4. Un diez por ciento (10%) para seguridad social del creador y del gestor cultural.

5. Apoyar los diferentes programas de expresión cultural y artística, así como fomentar y difundir las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas de que trata el artículo 17 de la Ley 397 de 1997.

ARTÍCULO 38-2. <Artículo adicionado por el artículo 2 de la Ley 666 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Autorízase a las asambleas departamentales, a los concejos distritales y a los concejos municipales para que determinen las características, el hecho generador, las tarifas, las bases gravables y los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla "Procultura" en todas las operaciones que se realicen en su respectiva entidad territorial.

PARÁGRAFO. Las ordenanzas y acuerdos que expidan las asambleas departamentales, los concejos distritales y los concejos municipales en desarrollo de lo dispuesto en la presente ley, deberán ser remitidas para el conocimiento del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Apoyo Fiscal.

ARTÍCULO 38-3. <Artículo adicionado por el artículo 2 de la Ley 666 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> La tarifa con que se graven los diferentes actos sujetos a la estampilla "Procultura" no podrá ser inferior al cero punto cinco por ciento (0.5%), ni exceder el dos por ciento (2%) del valor del hecho sujeto al gravamen.

ARTÍCULO 38-4. <Artículo adicionado por el artículo 2 de la Ley 666 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Responsabilidad. La obligación de adherir y anular la estampilla física a que se refiere esta Ley quedará a cargo de los funcionarios departamentales, distritales y municipales que intervengan en los actos o hechos sujetos al gravamen determinados por la ordenanza departamental o por los acuerdos municipales o distritales que se expidan en desarrollo de la presente ley. El incumplimiento de esta obligación se sancionará por la autoridad disciplinaria correspondiente.

ARTÍCULO 38-5. <Artículo adicionado por el artículo 2 de la Ley 666 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> El control sobre el recaudo y la inversión de lo producido por la estampilla "Procultura" será ejercido en los departamentos por las contralorías departamentales, en los distritos por las contralorías distritales y en los municipios por las contralorías municipales o por la entidad que ejerza sobre ellos el respectivo control fiscal.

ARTICULO 39. IMPUESTOS DE ESPECTACULOS PUBLICOS E IMPUESTOS SOBRE VENTAS. A las exenciones consagradas en el artículo 75 de la Ley 2a de 1976, se le adicionan las siguientes:
a) Compañías o conjuntos de danza folclórica;
b) Grupos corales de música contemporánea;
c) Solistas e instrumentistas de música contemporánea y de expresiones musicales colombianas;
d) Ferias artesanales.

ARTICULO 40. IMPORTANCIA DEL CINE PARA LA SOCIEDAD. El Estado, a través del Ministerio de Cultura, de Desarrollo Económico, y de Hacienda y Crédito Público, fomentará la conservación, preservación y divulgación, así como el desarrollo artístico e industrial de la cinematografía colombiana como generadora de una imaginación y una memoria colectiva propias y como medio de expresión de nuestra identidad nacional.

ARTICULO 41. DEL ASPECTO INDUSTRIAL Y ARTISTICO DEL CINE. Para lograr el desarrollo armónico de nuestra cinematografía, el Ministerio de Cultura, en desarrollo de las políticas que trace, podrá otorgar:
1. Estímulos especiales a la creación cinematográfica en sus distintas etapas.
2. Estímulos e incentivos para las producciones y las coproducciones cinematográficas colombianas.

3. Estímulos e incentivos para la exhibición y divulgación de la cinematografía colombiana.
4. Estímulos especiales a la conservación y preservación de la memoria cinematográfica colombiana y aquella universal de particular valor cultural.
5. Estímulos especiales a la infraestructura física y técnica que permita la producción, distribución y exhibición de obras cinematográficas.

ARTICULO 42. DE LAS EMPRESAS CINEMATOGRAFICAS COLOMBIANAS. Considérase como empresas cinematográficas colombianas aquellas cuyo capital suscrito y pagado nacional sea superior al cincuenta y uno por ciento (51%) y cuyo objeto sea la narración hecha con imágenes y sonidos, impresa por medio de procesos ópticos sobre un soporte de celulosa, de impresión electrónica y otros que se inventen n el futuro con el mismo fin.

ARTICULO 43. DE LA NACIONALIDAD DE LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA. Se entiende por producción cinematográfica colombiana de largometraje, la que reúna los siguientes requisitos:
1. Que el capital colombiano invertido no sea inferior al 51%.
2. Que su personal técnico sea del 51% mínimo y el artístico no sea inferior al 70%.
3. Que su duración en pantalla sea de 70 minutos o más y para televisión 52 minutos o más.
PARAGRAFO 1o. De la totalidad de los recursos destinados al fomento de la producción cinematográfica, por lo menos el 50% deberá ser destinado a producciones cinematográficas colombianas, y el resto para los proyectos de coproducciones.

ARTICULO 44. DE LA COPRODUCCION COLOMBIANA. Se entiende por coproducción cinematográfica colombiana de largometraje la que reúna los siguientes requisitos:
1. Que sea producida conjuntamente por empresas cinematográficas colombianas y extranjeras.
2. Que la participación económica nacional no sea inferior al veinte por ciento (20%).
3. Que la participación artística colombiana que intervenga en ella sea equivalente al menos al 70% de la participación económica nacional y compruebe su trayectoria o competencia en el sector cinematográfico.

ARTICULO 45. INCENTIVOS A LOS LARGOMETRAJES COLOMBIANOS. El Estado, a través del Ministerio de Cultura, otorgará incentivos industriales económicos a las producciones y coproducciones cinematográficas de largometrajes colombianos, mediante los convenios previstos en la ley, de acuerdo con los resultados de asistencia y taquilla que hayan obtenido después de haber sido comercialmente exhibidos dentro del territorio nacional en salas

de cine abiertas al público o a través de la televisión local, regional, nacional o internacional.

ARTICULO 46. FONDO MIXTO DE PROMOCION CINEMATOGRAFICA. Autorízase al Ministerio de Cultura para crear el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica, y para aportar recursos del presupuesto.
El fondo funcionará como entidad autónoma, con personería jurídica propia, y en lo referente a su organización, funcionamiento y contratación, se regirá por el derecho privado.
Siempre y cuando la participación pública sea mayoritaria, entendiendo por tal un porcentaje superior al cincuenta por ciento (50%) del fondo social, el fondo será presidido por el Ministro de Cultura. En este evento la aprobación de los gastos de funcionamiento para la vigencia fiscal respectiva, la decisión sobre su disolución, la compraventa de bienes inmuebles, así como la aprobación de proyectos de inversión cuya cuantía exceda el diez por ciento (10%) del presupuesto del fondo, deberá contar con el voto favorable del Ministro de Cultura. El resto de su composición, estructura, dirección y administración, será determinado en el acto de creación y en sus estatutos.
El fondo tendrá como principal objetivo el fomento y la consolidación de la preservación del patrimonio colombiano de imágenes en movimiento, así como de la industria cinematográfica colombiana, y por tanto sus actividades están orientadas hacia la creación y desarrollo de mecanismos de apoyo, tales como: incentivos directos, créditos y premios por taquilla o por participación en festivales según su importancia. El fondo no ejecutará directamente proyectos, salvo casos excepcionales, que requieran del voto favorable del representante del Ministerio de Cultura, en la misma forma se deberá proceder cuando los gastos de funcionamiento superen el veinte por ciento (20%) del presupuesto anual de la entidad.
La renta que los industriales de la cinematografía (productores, distribuidores y exhibidores) obtengan, y que se capitalice o reserve para desarrollar nuevas producciones o inversiones en el sector cinematográfico, será exenta hasta del cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto sobre la renta.

ARTICULO 47. FOMENTO CINEMATOGRAFICO. Trasládase al Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica los bienes que pertenecieron al Fondo de Fomento Cinematográfico, Focine, con todos los rendimientos económicos hasta la fecha.

ARTICULO 48. FOMENTO DEL TEATRO COLOMBIANO. Con el fin de salvaguardar, conservar y difundir el patrimonio teatral colombiano y las obras maestras del repertorio del arte dramático universal, el Ministerio de Cultura convocará anualmente a directores, dramaturgos, autores y actores profesionales pertenecientes a distintas agrupaciones del país, quienes desarrollarán proyectos teatrales que serán difundidos en los órdenes nacional e internacional.

ARTICULO 49. FOMENTO DE MUSEOS. Los museos del país, son depositarios de bienes muebles, representativos del Patrimonio Cultural de la Nación. El Ministerio de Cultura, a través del Museo Nacional, tiene bajo su responsabilidad la protección, conservación y desarrollo de los Museos existentes y la adopción de incentivos para la creación de nuevos Museos en todas las áreas del Patrimonio Cultural de la Nación. Así mismo estimulará el carácter activo de los Museos al servicio de los diversos niveles de educación como entes enriquecedores de la vida y de la identidad cultural nacional, regional y local.

ARTICULO 50. INVESTIGACION CIENTIFICA E INCREMENTO DE LAS COLECCIONES. El Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, crearán programas de estímulo a la investigación y catalogación científica de los bienes muebles de patrimonio cultural existentes en todos los museos del país, a través de convenios con las universidades e institutos dedicados a la investigación histórica, científica y artística nacional e internacional, y fomentará el incremento de las colecciones mediante la creación y reglamentación de incentivos a las donaciones, legados y adquisiciones.

ARTICULO 51. ESPECIALIZACION Y TECNIFICACION. El Ministerio de Cultura, mediante convenios internacionales en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, impulsará la especialización de los recursos humanos encargados de los museos del país y la tecnificación de las exhibiciones permanentes y temporales, así como la creación de programas de intercambio y cooperación técnica internacional en esta área.

ARTICULO 52. PROTECCION Y SEGURIDAD DE LOS MUSEOS. El Gobierno Nacional reglamentará la aplicación de normas mínimas de seguridad para la protección y resguardo del patrimonio cultural que albergan los museos en todo el territorio nacional, con el fin de fortalecer las disposiciones regionales y municipales que sean implantadas en esta área.

ARTICULO 53. CONSERVACION Y RESTAURACION DE LAS COLECCIONES Y SEDES DE LOS MUSEOS. El Ministerio de Cultura fomentará y apoyará programas de conservación y restauración de las colecciones que albergan los museos del país, así como en los casos que sea necesario, programas de conservación, restauración, adecuación o ampliación de los inmuebles que les sirven de sede, a través de los organismos especializados en el área. Para ello creará y reglamentará las instancias de consulta, aprobación y control necesarias para su desarrollo y procurará la vinculación de entidades y gobiernos departamentales y municipales.

ARTICULO 54. CONTROL DE LAS COLECCIONES Y GESTION DE LOS MUSEOS PUBLICOS Y PRIVADOS. El Ministerio de Cultura, a través del

Museo Nacional, reglamentará la sistematización y el control de los inventarios de las colecciones de todos los museos del país. Así mismo, desarrollará programas permanentes de apoyo a la gestión de los museos, y procurará la creación de incentivos a las donaciones y contribuciones de mecenazgo para el funcionamiento y desarrollo de los museos públicos y privados.

ARTICULO 55. GENERACION DE RECURSOS. El Estado, a través del Ministerio de Cultura, estimulará y asesorará la creación de planes, programas y proyectos de carácter comercial, afines con los objetivos de los museos, que puedan constituirse en fuentes de recursos autónomos para la financiación de su funcionamiento.
Así mismo, el Ministerio de Cultura podrá adquirir y comercializar bienes y servicios culturales para fomentar la difusión del patrimonio y la identidad cultural dentro y fuera del territorio nacional.

ARTICULO 56. ESTIMULOS AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION. Los propietarios de bienes muebles e inmuebles de interés cultural podrán deducir la totalidad de los gastos en que incurran para el mantenimiento y conservación de estos bienes, aunque no guarden relación de causalidad con la actividad productora de renta.
Para tener derecho a este beneficio, las personas interesadas deberán presentar para aprobación del Ministerio de Cultura, un proyecto de adecuación del respectivo inmueble.

TITULO IV.
DE LA GESTION CULTURAL

ARTICULO 57. SISTEMA NACIONAL DE CULTURA. Conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificación e información articulados entre sí, que posibilitan el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales según los principios de descentralización, participación y autonomía.
El Sistema Nacional de Cultura estará conformado por el Ministerio de Cultura, los consejos municipales, distritales y departamentales de cultura, los fondos mixtos de promoción de la cultura y las artes y, en general, por las entidades públicas y privadas que desarrollen, financien, fomenten o ejecuten actividades culturales.
El Sistema Nacional de Cultura estará coordinado por el Ministerio de Cultura, para lo cual fijará las políticas generales, dictará normas técnicas y administrativas a las que deberán sujetarse las entidades de dicho sistema.

ARTICULO 58. CONSEJO NACIONAL DE CULTURA. Créase el Consejo Nacional de Cultura como órgano asesor del Ministerio de Cultura. Sus funciones son:

1. Promover y hacer las recomendaciones que sean pertinentes para el cumplimiento de los planes, políticas y programas relacionados con la cultura.
2. Sugerir al Gobierno Nacional las medidas adecuadas para la protección del patrimonio cultural de la Nación y el estímulo y el fomento de la cultura y las artes.
3. Conceptuar sobre los aspectos que le solicite el Gobierno Nacional en materia de cultura.
4. Asesorar el diseño, la formulación e implementación del Plan Nacional de Cultura.
5. Vigilar la ejecución del gasto público invertido en cultura.

ARTICULO 59. INTEGRACION DEL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA. El Consejo Nacional de Cultura estará integrado por los siguientes miembros:
1. El Ministro de Cultura, quien lo presidirá, o en su defecto el Viceministro.
2. El Ministro de Educación Nacional, o en su defecto el Viceministro.
3. El Director del Departamento de Planeación Nacional, o su delegado.
4. Dos personalidades del ámbito artístico y cultural, nombradas por el señor Presidente de la República, quienes serán sus representantes.
5. Los presidentes de los Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura en cada una de las manifestaciones artísticas y culturales.
6. Un representante de la comunidad educativa designado por la Junta Nacional de Educación.
7. Un representante de los fondos mixtos departamentales, distritales y municipales de promoción de la cultura y las artes.
8. Un representante de las asociaciones de casas de la cultura.
9. Un representante de los secretarios técnicos de los consejos departamentales y distritales de cultura.
10. Un representante de los pueblos o comunidades indígenas, y/o autoridades tradicionales.
11. Un representante de las comunidades negras.
12. Un representante del colegio máximo de las academias.
13. Un representante de las agremiaciones culturales de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales.
14. Un representante de cada una de las expresiones culturales a que hace referencia el artículo 16 de la presente Ley, elegido por sus organizaciones.
15. Un representante de la Fundación Manuel Cepeda Vargas para la Paz, la Justicia Social y la Cultura.
La elección de los representantes mencionados de los numerales 7 al 11 se efectuará según reglamentación que para tal efecto formule el Gobierno Nacional.
Salvo los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, los demás miembros tendrán un período fijo de dos años.
El Consejo Nacional de Cultura será convocado por el Ministro de Cultura una vez cada semestre.

ARTICULO 60. CONSEJOS DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y MUNICIPALES DE CULTURA. Son las instancias de concertación entre el Estado y la sociedad civil encargadas de liderar y asesorar a los gobiernos departamentales, distritales y municipales y de los territorios indígenas en la formulación y ejecución de las políticas y la planificación de los procesos culturales.

La Secretaría Técnica de los consejos departamentales, distritales y municipales de cultura es ejercida por la entidad cultural oficial de mayor jerarquía de los respectivos entes territoriales.

Los consejos departamentales, distritales y municipales de cultura tienen la representación de sus respectivas jurisdicciones ante los consejos de planeación respectivos.

La conformación de los consejos departamentales de cultura estará integrada así:

1. El Gobernador, o su delegado.
2. El Director de la Institución Departamental de Cultura.
3. El representante del Ministerio de Cultura.
4. Un representante de la Asociación Nacional de Alcaldes.
5. Representantes de los Consejos Municipales de Cultura según subre-gionalización departamental.
6. Un representante de los sectores de la producción y los bienes y servicios.
7. Un representante de la educación superior (preferiblemente de programas de formación cultural).
8. Un representante de los consejos de los territorios indígenas.
9. Un representante de la comunidad educativa designado por la junta departamental de educación.
10. Un representante de los Consejos de áreas artísticas.
11. Un representante de la Asociación Departamental de las Casas de la Cultura.
12. Un representante de la Filial del Consejo de Monumentos Nacionales.
13. Un representante de ONG culturales con cobertura departamental.
14. Un representante de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas.
15. Un representante de las agremiaciones culturales de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales.

La conformación de los consejos distritales de cultura estará integrada así:

1. El alcalde, o su delegado.
2. El Director de la Institución Distrital de Cultura.
3. El representante del Ministerio de Cultura.
4. Representantes de las comunas y corregimientos, de conformidad con la distribución administrativa del Distrito.
5. Un representante de las agremiaciones o asociaciones de los comunicadores.
6. Un representante de los sectores de la producción, y los bienes y servicios.
7. Un representante de la Educación Superior (preferiblemente de programas de formación cultural).

8. Un representante de los artesanos en donde tengan presencia y sean representativos.
9. Un representante de los consejos de los territorios indígenas.
10. Un representante de la comunidad educativa designado por la Junta Distrital de Educación.
11. Un representante de la filial del Consejo de Monumentos Nacionales.
12. Un representante de cada uno de los sectores artísticos y culturales.
13. Un representante de las organizaciones cívicas o comunitarias.
14. Un representante de las ONG culturales.
15. Un representante de las asociaciones juveniles en donde tengan presencia y sean significativas.
16. Un representante de las agremiaciones culturales de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales.

La conformación de los Consejos Municipales de Cultura estará integrada así:
1. El alcalde, o su delegado.
2. El Director de la Institución Cultural del Municipio.
3. Un representante del Ministerio de Cultura.
4. Un jefe de Núcleo.
5. Un representante de cada uno de los sectores artísticos y culturales.
6. Representantes de las comunas y corregimientos, de conformidad con la distribución administrativa del municipio.
7. Un representante de la filial de los monumentos en donde tengan presencia y sean representativos.
8. Un representante de los consejos territoriales indígenas.
9. Un representante de la comunidad educativa designado por la Junta Municipal de Educación.
10. Un representante de los artesanos en donde tengan presencia y sean representativos.
11. Un representante de las organizaciones cívicas o comunitarias.
12. Un representante de las ONG culturales.
13. Un representante de las agremiaciones y asociaciones de los comunicadores.
14. Un representante de los sectores de la producción y los bienes y servicios.
15. Un representante de las asociaciones juveniles en donde tengan presencia y sean representativos.
16. Un representante de los personeros estudiantiles en donde tengan presencia y sean representativos.
17. Un representante de las agremiaciones culturales de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales.

La elección de los integrantes de los Consejos Departamentales, Distritales y Municipales de Cultura -excepto aquellos que por derecho propio o designación contemplada en esta ley sean parte de los mismos-, así como la periodicidad de sus sesiones se realizará según reglamentación que para tal efecto formulen los gobiernos territoriales respectivos.

ARTICULO 61. OBJETIVOS DE LOS CONSEJOS. Los consejos municipales, distritales y departamentales desarrollan los siguientes objetivos dentro de su respectiva jurisdicción:
1. Estimular el desarrollo cultural y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en sus respectivos entes territoriales.
2. Actuar como entes articuladores de las actividades relacionadas con el fomento, la promoción y la difusión del patrimonio cultural y artístico de las entidades territoriales.
3. Promover y hacer las recomendaciones que sean pertinentes para la formulación, cumplimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos culturales.
4. Vigilar la ejecución del gasto público invertido en cultura.

ARTICULO 62. DE LOS CONSEJOS NACIONALES DE LAS ARTES Y LA CULTURA. El Estado a través del Ministerio de Cultura, creará y reglamentará los consejos nacionales de las artes y la cultura, en cada una de las manifestaciones artísticas y culturales.
PARAGRAFO. Los consejos nacionales de las artes y la cultura, serán entes asesores del Ministerio de Cultura para las políticas, planes y programas en su área respectiva. El Gobierno Nacional determinará su composición y funciones.

ARTICULO 63. FONDOS MIXTOS DE PROMOCION DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES. Con el fin de promover la creación, la investigación y la difusión de las diversas manifestaciones artísticas y culturales, créase el Fondo Mixto Nacional de Promoción de la Cultura y las Artes.
Autorízase al Ministerio de Cultura, para participar en la creación de los fondos mixtos departamentales, distritales, municipales y de los territorios indígenas conforme a la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional, así como para realizar aportes y celebrar convenios de fomento y promoción de las artes y la cultura con dichos fondos.
Los fondos mixtos son entidades sin ánimo de lucro, dotadas de personería jurídica, constituidas por aportes públicos y privados y regidas en su dirección, administración y contratación por el Derecho Privado sin perjuicio del control fiscal que ejercen las respectivas Contralorías sobre los dineros públicos.
ARTICULO 64. DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL. Corresponde al Ministerio de Cultura, la responsabilidad de orientar, coordinar y fomentar el desarrollo de la educación artística y cultural no formal como factor social, así como determinar las políticas, planes y estrategias para su desarrollo.
Para tal efecto, créase el Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural, que tendrá como objetivos, estimular la creación, la investigación, el desarrollo, la formación, y la transmisión del conocimiento artístico y cultural.

ARTICULO 65. FORMACION CULTURAL OBLIGATORIA. Se modifica el numeral 3o. del artículo 23 de la Ley 115 de 1994, el cual quedará así:

3o. Educación artística y cultural.

ARTICULO 66. MINISTERIO DE CULTURA. Créase el Ministerio de Cultura como organismo rector de la cultura, encargado de formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en la materia, en concordancia con los planes y programas de desarrollo, según los principios de participación contemplados en esta ley.
El Ministerio de Cultura tendrá a su cargo, además de las funciones previstas en la presente ley, el ejercicio de las atribuciones generales que corresponde ejercer a los Ministerios, de conformidad con el Decreto 1050 de 1968.
El Ministerio de Cultura seguirá en orden de precedencia al Ministerio de Transporte.
El Ministerio de Cultura será miembro, con derecho a voz y voto, del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES.

ARTICULO 67. DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL MINISTERIO DE CULTURA. El Ministerio de Cultura tendrá la siguiente estructura administrativa básica:
Despacho del Ministro.
Despacho del Viceministro.
Despacho del Secretario General.
Direcciones Nacionales.
Dirección de Patrimonio.
Dirección de Artes.
Dirección de Comunicaciones.
Dirección de Cinematografía.
Dirección de Fomento y Desarrollo Regional.
Dirección de Museos.
Dirección de la Infancia y la Juventud.
Unidades Administrativas Especiales.
Instituto Colombiano de Antropología.
Biblioteca Nacional.
Museo Nacional.
Oficinas.
Oficina Jurídica.
Oficina de Planeación.
Oficina de Control Interno.
Oficina de Sistemas.
Oficina de Relaciones Internacionales.
Oficina de Prensa.
Divisiones.
División Administrativa.
División Financiera.
División de Recursos Humanos.

PARAGRAFO 1o. El Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para que pueda operar la estructura básica del Ministerio de Cultura. Para tal efecto, creará los empleos que demande la administración, señalará sus funciones, fijará sus dotaciones y emolumentos y desarrollará dicha estructura con sujeción a la presente ley, respetando las políticas de modernización del Estado y racionalización del gasto público, y estableciendo para su cumplimiento mecanismos de control que aseguren su máxima productividad.

PARAGRAFO 2o. El Gobierno al establecer y reglamentar la estructura orgánica del Ministerio de Cultura creará la Dirección Nacional de Etnocultura con las respectivas seccionales en las entidades territoriales.

ARTICULO 68. La estructura administrativa del Ministerio de Cultura no podrá exceder o incrementar el valor actual de la nómina de funcionarios, directamente o a través de contratos o asesorías paralelas de Colcultura, el Instituto Colombiano de Antropología, ICAN; la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional y el Instituto de Cultura Hispánica.
Solamente podrá el Gobierno Nacional aumentar anualmente porcentajes correspondientes teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor decretado por el DANE.
PARAGRAFO TRANSITORIO. El congelamiento de la nómina de la estructura del Ministerio de Cultura, incluyendo sus órganos adscritos y vinculados, cesará sólo a partir del tercer año, posterior a la promulgación de la presente ley.

ARTICULO 69. DEL PATRIMONIO DE RENTAS DEL MINISTERIO DE CULTURA. El patrimonio y rentas del Ministerio de Cultura estará conformado por:
1. Las sumas que se apropien en el Presupuesto Nacional.
2. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título.
3. Los bienes, derechos y obligaciones que pertenecían al Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, y los saldos del presupuesto de inversión del Instituto, existentes a la fecha de entrar a regir la presente ley.
4. Las sumas y los bienes muebles e inmuebles que le sean donados o cedidos por entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.

ARTICULO 70. DE LA SUPRESION Y FUSION DE ENTIDADES Y ORGANISMOS CULTURALES. Autorízase al Gobierno Nacional para suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales que cumplan funciones culturales afines a las del Ministerio de Cultura, así como para reasignar las funciones de dichas entidades u organismos en este ministerio. Para estos efectos, y para las adscripciones de las Entidades a que se refiere el siguiente artículo, el Gobierno Nacional efectuará los traslados presupuestales y adoptará las medidas fiscales necesarias para que el Ministerio de Cultura pueda asumir a cabalidad las funciones que se le asignen.

ARTICULO 71. DE LA ADSCRIPCION DE ENTIDADES AL MINISTERIO DE CULTURA. Como entidad descentralizada adscrita al Ministerio de Cultura funcionará a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, el cual, sin modificar su naturaleza jurídica, se trasladará del Ministerio de Educación.
El Organismo que en virtud de lo dispuesto en esta ley se traslade a la estructura orgánica del Ministerio de Cultura pasará al mismo con el patrimonio, saldos presu-puestales, así como con el personal de la actual planta de personal que a juicio del Gobierno Nacional fuere indispensable para el desarrollo de sus funciones.
Para los efectos de la tutela correspondiente, el Ministro de Cultura o su delegado, ejercerá la presidencia de la junta directiva de dichas entidades.
PARAGRAFO. Mientras se cumple con los trámites tendientes a perfeccionar el traslado de la entidad a que se refiere el presente artículo, la dirección y administración de la misma estará a cargo de las personas que designe el Ministro de Cultura.

ARTICULO 72. DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA. Para el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio de Cultura tendrá una planta de personal global, que será distribuida mediante resolución, atendiendo a la estructura orgánica, las necesidades del servicio y la naturaleza de los cargos.
Los empleados del Ministerio de Cultura serán empleados públicos, de régimen especial, adscritos a la carrera administrativa, excepto aquellos que sean de libre nombramiento y remoción determinados en la estructura del Ministerio, así como los cargos actuales de la estructura del Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, ocupados por trabajadores oficiales, sin perjuicio de los derechos adquiridos convencionalmente.
Así mismo formarán parte del Ministerio de Cultura la Orquesta Sinfónica de Colombia y la Banda Sinfónica Nacional.
Los profesores integrantes de la Orquesta Sinfónica de Colombia y la Banda Sinfónica Nacional se vincularán a la administración pública mediante contrato de trabajo.

ARTICULO 73. DE LA PARTICIPACION DEL MINISTERIO DE CULTURA EN LOS FONDOS MIXTOS DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES. A partir de la vigencia de la presente ley, el Ministerio de Cultura será el representante de la Nación en los actuales fondos mixtos de promoción de la cultura y las artes, de los cuales forma parte el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, sin perjuicio de lo previsto en el régimen de transición. Igualmente autorízase (sic) al Ministerio para participar en la creación de nuevos fondos mixtos.

ARTICULO 74. DE LA SUPRESION Y LIQUIDACION DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA, COLCULTURA. Suprímase el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura. En consecuencia, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, dicho instituto entrará en liquidación, la cual deberá concluir en un plazo máximo de un (1) año contado a partir de su vigencia.

ARTICULO 75. DEL LIQUIDADOR. El Gobierno Nacional designará el Liquidador del Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, que deberá reunir las mismas calidades exigidas para el director del instituto, tendrá su remuneración y estará sujeto al mismo régimen de inhabilidades, incompatibilidades y demás disposiciones legales aplicables.
El liquidador del Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, ejercerá las funciones prescritas para el director de la entidad en cuanto no fueren incompatibles con la liquidación, y actuará bajo la supervisión del Ministro de Cultura o la persona que éste designe.

ARTICULO 76. DEL PROCESO DE REDUCCION DE LA ENTIDAD. Las actividades, estructura y planta de personal del Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, y los cargos correspondientes se irán reduciendo progresivamente hasta desaparecer en el plazo previsto para que finalice la liquidación de la entidad. Los cargos que queden vacantes no podrán ser provistos, salvo las excepciones que determine el Gobierno Nacional.

ARTICULO 77. DE LA PRIORIDAD EN LA VINCULACION DEL MINISTERIO DE CULTURA. Sin perjuicio de la evaluación sobre su capacidad y eficiencia, ni de la debida discreción para la designación de funcionarios que no pertenezcan a la carrera administrativa, los actuales empleados de carrera del Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, tendrán derecho preferencial a ser vinculados como servidores públicos del Ministerio de Cultura y demás entidades y organismos del sistema nacional de cultura, de acuerdo con las necesidades del servicio.
La misma prioridad tendrán los trabajadores oficiales que tengan contrato de trabajo vigente, siempre que en la planta de personal del ministerio existan cargos con funciones equivalentes a las que vienen desarrollando en la entidad que se suprime.
En todo caso, los empleados de carrera administrativa y trabajadores oficiales que hacen parte de la planta de personal del instituto, que no sean incorporados al Ministerio de Cultura, tendrán derecho a optar por la indemnización o una nueva vinculación, conforme a las disposiciones legales pertinentes.

ARTICULO 78. DEL REGIMEN PRESTACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL. El Ministerio de Cultura asumirá el reconocimiento y pago de las pensiones o cuotas partes de ellas causadas o que se causen, a favor de los empleados y trabajadores oficiales que se incorporen al ministerio, así como las demás

prestaciones sociales y de seguridad social conforme a las disposiciones legales, sin perjuicio de los derechos adquiridos en convenciones.
Los empleados públicos y trabajadores oficiales que no sean vinculados al Ministerio de Cultura o reubicados en otra entidad, se les reconocerá las prestaciones sociales a que tengan derecho, de conformidad con las disposiciones legales pertinentes, así como las convencionales vigentes a la fecha de entrar a regir la presente ley, para el caso de los trabajadores oficiales.

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.
ARTICULO 79. CONTRATOS Y ACTOS EN TRAMITE. Autorízase al Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, para continuar con los trámites contractuales que se hubiesen iniciado antes de la publicación de esta ley, y a perfeccionar y ejecutar los contratos que resulten de ellos, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la entrega de recursos del presupuesto del Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, a los fondos mixtos de promoción de la cultura y las artes. Si los contratos no alcanzan a ejecutarse y liquidarse durante la liquidación de la entidad, o si quedare un litigio pendiente, el Ministerio de Cultura sustituirá al Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, en todos los derechos y obligaciones contractuales.
Igualmente Colcultura continuará ejerciendo las funciones relacionadas con la expedición de los actos administrativos referentes a la salida de bienes del país, la definición de los eventos culturales susceptibles o no de la exención del impuesto de espectáculos públicos y los que expida determinando si los bienes a que se refiere la Ley 98 de 1993 son de interés cultural o científico. Con la ejecutoria de los actos administrativos en mención, se cumplen las exigencias que se requiere acreditar por Colcultura, de acuerdo con las normas legales, sin que la entidad requiera expedir ningún acto adicional. Debidamente perfeccionados no se requiere del cumplimiento de ningún otro requisito ante Colcultura o la entidad que haga sus veces. Las funciones antes señaladas las continuará desarrollando el Ministerio de Cultura a la liquidación de Colcultura, y los actos en trámite que no sea posible resolver antes de la fecha de liquidación de la citada entidad, se trasladarán al Ministerio para su resolución.

ARTICULO 80. DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE SENTENCIAS. El Ministerio de Cultura asumirá el reconocimiento y pago de las sentencias condenatorias ejecutoriadas o que se ejecutoríen, a cargo del Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, con posterioridad al vencimiento del plazo de liquidación del citado organismo, para lo cual se autoriza al Gobierno Nacional a tomar las medidas necesarias y hacer los traslados presupuestales a que hubiese lugar.

ARTICULO 81. SOBRE LA TRANSFERENCIA DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES. La transferencia de los bienes inmuebles pertenecientes al Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, se

realizará mediante acta suscrita por los representantes legales de las entidades mencionadas. Copia auténtica se publicará en el Diario Oficial y se inscribirá en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la ubicación de cada uno de los inmuebles.
Para la transferencia de los bienes muebles bastará la suscripción de las correspondientes actas por los representantes legales del Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura.
La transferencia de los bienes a que se refiere el presente artículo se efectuará progresivamente, en la medida en que se supriman las dependencias del Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, pero en todo caso deberá quedar perfeccionado al finalizar el plazo previsto, para la liquidación del ontrato del citado organismo.

ARTICULO 82. SOBRE LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES VIGENTES EN FAVOR DE LOS FONDOS MIXTOS DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES. Hasta tanto se expidan los actos que permitan poner en funcionamiento el Ministerio de Cultura, las apropiaciones presupuestales previstas en la respectiva vigencia fiscal en favor de los fondos mixtos de promoción de la cultura y las artes, serán entregadas al respectivo fondo, por el Ministro de Cultura o por la persona que señale el Gobierno Nacional, en el caso de que aún no se hubiere nombrado el Ministro, para lo cual se suscribirán los correspondientes actos o contratos. Una vez expedida la planta de personal del Ministerio y provisto los cargos de dirección del Ministerio, éste sustituirá íntegramente al Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, en todos sus derechos y obligaciones existentes.

ARTICULO 83. VIGENCIA. Esta Ley rige a partir de la fecha de su sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y ejecútese.
Dada en Barranquilla, a los 7 días del mes de agosto de 1997.
ERNESTO SAMPER PIZANO
El Viceministro de Hacienda y Crédito Público,
encargado de las funciones del despacho
del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
EDUARDO FERNANDEZ DELGADO.
El Ministro de Educación Nacional,
JAIME NIÑO DIEZ

ANEXO N º 17

Artículo 12 Ley 633 de 2.000

Artículo 12º.
Modifícase el artículo 158-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:

"**Artículo 158-1. Deducción por inversiones en desarrollo científico y tecnológico**. Las personas que realicen inversiones directamente o a través de Centros de Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico, constituidos como entidades sin ánimo de lucro, o Centros y Grupos de Investigación de Instituciones de Educación Superior, reconocidos por Colciencias, en proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico o de innovación tecnológica, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o en proyectos de formación profesional de instituciones de educación superior estatales u oficiales y privadas, reconocidas por el Ministro de Educación Nacional, que sean entidades sin ánimo de lucro y que en un proceso voluntario hayan sido acreditadas u obtenido acreditación de uno o varios programas, tendrán derecho a deducir de su renta el ciento veinticinco por ciento (125%) del valor invertido en el período gravable en que se realizó la inversión. Los proyectos de inversión deberán desarrollarse en áreas estratégicas para el país tales como ciencias básicas, ciencias sociales y humanas, desarrollo industrial, ciencias agropecuarias, medio ambiente, hábitat, educación, salud, electrónica, telecomunicaciones, informática, biotecnología, minería y energía. Esta deducción no podrá exceder del veinte por ciento (20%) de la renta líquida, determinada antes de restar el valor de la inversión.

Cuando la inversión se realice en proyectos de formación profesional desarrollados por Instituciones de Educación Superior señaladas en el inciso anterior, estas deberán demostrar que la inversión se destinó al programa o programas acreditados.

También recibirán los mismos beneficios los contribuyentes que realicen donaciones e inversión para adelantar proyectos de inversión agroindustrial calificados por la entidad gubernamental competente, siempre y cuando sean desarrollados por entidades sin ánimo de lucro, reconocidos como tales por el Ministerio de Agricultura.

Esta deducción no podrá exceder del 20% de la renta líquida determinada antes de restar el valor de la inversión.

El Gobierno reglamentará los procedimientos de control, seguimiento y evaluación de los proyectos calificados.

Parágrafo 1º: Las personas podrán optar por la alternativa de deducir el ciento veinticinco por ciento (125%) del valor de las donaciones efectuadas a centros o grupos a que se refiere este artículo, siempre y cuando se destinen exclusivamente a proyectos calificados previamente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los proyectos a los cuales se dirija la donación deberán desarrollarse igualmente en áreas estratégicas para el país tales como ciencias básicas, ciencias sociales y humanas, desarrollo industrial, ciencias agropecuarias, medio ambiente, hábitat, educación, salud, electrónica, telecomunicaciones, informática, biotecnología, minería, energía, o formación profesional de instituciones de educación superior estatales u oficiales y privadas, reconocidas por el Ministro de Educación Nacional, que sean entidades sin ánimo de lucro y que en un proceso voluntario hayan sido acreditadas u obtenido acreditación de uno o varios programas. Esta deducción no podrá exceder del veinte por ciento (20%) de la renta líquida, determinada antes de restar el valor de la donación. Serán igualmente exigibles para la deducción de donaciones los demás requisitos establecidos en los artículos 125-1, 125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario.

Cuando la donación se realice a proyectos de formación profesional desarrollados por Instituciones de Educación Superior señaladas en el inciso anterior, estas deberán demostrar que la donación se destinó al programa o programas acreditados.

Parágrafo 2º: Para que proceda la deducción de que trata el presente artículo y el parágrafo 1º, al calificar el proyecto, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología deberá evaluar igualmente su impacto ambiental. En ningún caso el contribuyente podrá deducir simultáneamente de su renta bruta, el valor de las inversiones y donaciones de que trata el presente artículo".

ANEXO Nº 18

Artículo 30 Ley 633 de 2.000

Artículo 30º.
Modifíquese el artículo 428-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:

"**Artículo 428-1. Importaciones de activos por instituciones de educación superior.** Los equipos y elementos que importen los Centros de Investigación y los Centros de Desarrollo Tecnológico reconocidos por Colciencias, así como las instituciones de educación superior, y que estén destinados al desarrollo de proyectos previamente calificados como de investigación científica o de innovación tecnológica por Colciencias, estarán exentos del impuesto sobre las ventas (IVA).

Los proyectos deberán desarrollarse en las áreas correspondientes a los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología que formen parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

El Gobierno reglamentará lo relacionado con esta exención.

Parágrafo: Para que proceda la exención de que trata el presente artículo, la calificación deberá evaluar el impacto ambiental del proyecto".

ANEXO Nº 19
LEY 666 DE 2001 (julio 30)

Por medio de la cual se modifica el artículo 38 de la Ley 397 de 1997 y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

Artículo 1°. Modifícase el artículo 38 de la Ley 397 de 1997, el cual quedará así:

"Artículo 38. Autorízase a las asambleas departamentales, a los concejos distritales y a los concejos municipales para que ordenen la emisión de una estampilla "Procultura" cuyos recursos serán administrados por el respectivo ente territorial, al que le corresponda, el fomento y el estímulo de la cultura, con destino a proyectos acordes con los planes nacionales y locales de cultura".

Artículo 2°. Adiciónase los siguientes artículos nuevos al Título III de la Ley 397 de 1997:

Artículo 38-1. El producido de la estampilla a que se refiere el artículo anterior, se destinará para:

1. Acciones dirigidas a estimular y promocionar la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales de que trata el artículo 18 de la Ley 397 de 1997.

2. Estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos para la realización de actividades culturales, participar en la dotación de los diferentes centros y casas culturales y, en general propiciar la infraestructura que las expresiones culturales requieran.

3. Fomentar la formación y capacitación técnica y cultural del creador y del gestor cultural.

4. Un diez por ciento (10%) para seguridad social del creador y del gestor cultural.

5. Apoyar los diferentes programas de expresión cultural y artística, así como fomentar y difundir las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas de que trata el artículo 17 de la Ley 397 de 1997.

Artículo 38-2. Autorízase a las asambleas departamentales, a los concejos distritales y a los concejos municipales para que determinen las características, el hecho generador, las tarifas, las bases gravables y los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla “Procultura” en todas las operaciones que se realicen en su respectiva entidad territorial.

Parágrafo. Las ordenanzas y acuerdos que expidan las asambleas departamentales, los concejos distritales y los concejos municipales en desarrollo de lo dispuesto en la presente ley, deberán ser remitidas para el conocimiento del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Apoyo Fiscal.

Artículo 38-3. La tarifa con que se graven los diferentes actos sujetos a la estampilla “Procultura” no podrá ser inferior al cero punto cinco por ciento (0.5%), ni exceder el dos por ciento (2%) del valor del hecho sujeto al gravamen.

Artículo 38-4. *Responsabilidad*. La obligación de adherir y anular la estampilla física a que se refiere esta Ley quedará a cargo de los funcionarios departamentales, distritales y municipales que intervengan en los actos o hechos sujetos al gravamen determinados por la ordenanza departamental o por los acuerdos municipales o distritales que se expidan en desarrollo de la presente ley. El incumplimiento de esta obligación se sancionará por la autoridad disciplinaria correspondiente.

Artículo 38-5. El control sobre el recaudo y la inversión de lo producido por la estampilla “Procultura” será ejercido en los departamentos por las contralorías departamentales, en los distritos por las contralorías distritales y en los municipios por las contralorías municipales o por la entidad que ejerza sobre ellos el respectivo control fiscal.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,

ANEXO Nº 20

RESOLUCIÓN INTERNA No. 0084

Por la cual se regula lo relativo al reconocimiento de los Centros de Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico y Centros y Grupos de Investigación de Instituciones de Educación Superior para los efectos previstos en los artículos 12 y 30 de la Ley 633 del 29 de diciembre de 2000.

La Directora General del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas" Colciencias, en ejercicio de facultades legales y,

CONSIDERANDO
Que es necesario regular el reconocimiento de Colciencias a los Centros de Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico y Centros y Grupos de Investigación de Instituciones de Educación Superior, para los efectos previstos en los artículos 12 y 30 de la Ley 633 del 29 de diciembre de 2000.

RESUELVE
Artículo primero.- Para los efectos previstos en los artículos 12 y 30 de la Ley 633 de 2000 Colciencias tendrá en cuenta las siguientes definiciones:

Centro de Investigación: Es una organización dotada de administración propia y de recursos financieros, humanos y logísticos, dedicada a adelantar investigación, o ésta y otras actividades, en el campo de la ciencia y la tecnología.

Grupo de Investigación: Es una unidad básica de generación de conocimiento científico y de desarrollo tecnológico, conformada por un equipo de investigadores de una o varias disciplinas o instituciones, comprometidos con un tema de investigación en el cual han probado tener capacidad de generar resultados tangibles de demostrada calidad y pertinencia, representados en productos tales como publicaciones científicas, diseños o prototipos industriales, patentes, registro de software, normas, trabajos de maestría o tesis de doctorado.

Centros de Desarrollo Tecnológico: Son aquellos organismos con personería jurídica y sin ánimo de lucro en cuyo objeto social se contempla la ejecución de actividades científicas y tecnológicas, particularmente la realización de proyectos de investigación, cuya orientación sea el dominio, la generación y difusión de conocimientos especializados en tecnologías relevantes para un sector o actividad económica, para lo cual establece vínculos directos con empresas, universidades, centros de investigación, entidades gubernamentales y organizaciones que persigan fines similares o complementarios.

Instituciones de Educación Superior: Son aquellas definidas como tales por la autoridad competente.

Artículo Segundo. - Reconocimiento automático: Se entenderán reconocidos por Colciencias los Centros de Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico y Centros y Grupos de Investigación de Instituciones de Educación Superior, que estén activos y hayan sido evaluados, calificados y clasificados en desarrollo de las convocatorias nacionales realizadas por este Instituto o hayan sido objeto de apoyo financiero y estén productivamente activos.

Artículo Tercero.- Reconocimiento expreso: Colciencias expedirá reconocimiento expreso a los Centros de Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico y Centros y Grupos de Investigación de Instituciones de Educación Superior, que no estando dentro de alguna de las situaciones contempladas en el artículo anterior, demuestren calidad y pertinencia, de acuerdo con los indicadores que Colciencias determine en el respectivo formulario de evaluación.

Artículo Cuarto.- Para demostrar las condiciones señaladas en el artículo anterior, los interesados deberán enviar a Colciencias el formulario debidamente diligenciado que para el efecto éste establezca, acompañado de la documentación que soporte la información correspondiente, la cual Colciencias se reserva el derecho de verificar.

Artículo Quinto.- El reconocimiento automático se entenderá vigente durante el término de dos (2) años contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución, salvo que antes de expirar el mencionado plazo Colciencias lleve a cabo una nueva convocatoria nacional en cuyo caso, respecto de los participantes evaluados, calificados y clasificados, los dos (2) años de vigencia del reconocimiento se reiniciarán a partir de la fecha de publicación de los resultados de la convocatoria.

El reconocimiento expreso tendrá una vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de la comunicación en virtud de la cual se expida, salvo que se presente reconocimiento automático por efecto de convocatoria nacional realizada antes de expirar el plazo previsto, en cuyo caso los dos (2) años de vigencia del reconocimiento se reiniciarán a partir de la fecha de publicación de los resultados de la convocatoria.
Colciencias revocará los reconocimientos, sin perjuicio de las demás acciones que sean pertinentes de acuerdo con la ley, cuando compruebe que la información allegada como soporte para su expedición es falsa, u obtenida o utilizada con violación de normas jurídicas.

ANEXO Nº 21

ACUERDO No. 4 DE 2002

Por el cual se reconocen como Comisiones Regionales de CyT, a los *Consejos, Comités o Comisiones de Ciencia y Tecnología* del orden departamental creadas por las autoridades territoriales competentes

EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

En uso de las atribuciones legales conferidas por el Decreto 585 de 1991

CONSIDERANDO:

- Que los resultados de la consulta a las regiones sobre la reestructuración de las Comisiones Regionales de CyT, señalaron la necesidad de adecuar esta instancia de coordinación y dirección del SNCyT para lograr mayor representatividad y participación de los diversos ámbitos territoriales
- Que en tal consulta alas regiones se recomendó reconocer los procesos y esquemas de coordinación departamental de la ciencia y la tecnología que autónomamente se han definido y organizado en los últimos años en este ámbito territorial;
- Que en el actual ordenamiento territorial del estado colombiano y hasta tanto se apruebe la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, con el consecuente impulso a la conformación de regiones, el departamento es la instancia administrativa y territorial que según la Constitución Nacional tiene entre sus funciones la coordinación y fomento de los procesos de competitividad y de desarrollo científico y tecnológico a nivel regional
- Que se hace necesario reconocer el papel de los esquemas de coordinación departamental de la ciencia y la tecnología, como miembros activos y participantes del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología;

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. - Reconocer como Comisiones Regionales de CyT, a los *Consejos, Comités o Comisiones de Ciencia y Tecnología* del orden departamental creados formalmente por la autoridad territorial competente.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La composición de los *Comités, Consejos o Comisiones* departamentales de ciencia y tecnología, se define según lo establecido en el decreto 585 de 1991, Artículo 15° e incluirá como miembro a un representante del SENA. En caso de requerirse, se deberán ajustar los decretos u ordenanzas correspondientes, para cumplir con tal disposición.

ARTÍCULO TERCERO.- Las funciones que deberán ejercer los *Comités, Consejos o Comisiones* departamentales de Ciencia y Tecnología, se definen según decreto 585 de 1991, Artículo 16°.

PARAGRAFO: Para el cabal cumplimento de sus funciones, las instancias mencionadas en el Artículo primero, procurarán su articulación con: sus homólogos en otros departamentos, los Consejos Territoriales de Planificación, los CARCES, los CRES y otras instancias del nivel nacional o regional de coordinación de políticas de desarrollo.

ARTICULO CUARTO.- El nombramiento del representante de las Comisiones Regionales de CyT ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, homologadas a *los Comités, Consejos o Comisiones* departamentales de Ciencia y Tecnología, se efectuará tal como se establece en el Decreto No 585 de 1991, Artículo 2° Numeral 6. Colciencias convocará para el efecto.

ARTÍCULO QUINTO.-. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga el Acuerdo No. 4 de 1994.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogotá D.C., a 09 Jul 2002

ANEXO Nº 22

Cuestionario Nº :1

1) ¿Considera Usted viable el mecanismo del Consejo Regional de Competitividad, que actualmente esta adoptando la región de Bogotá y Cundinamarca para ser más competitivos en los campos específicos de la ciencia, la tecnología y la innovación?

2) ¿Conoce Usted de otros modelos implementados en materias como las ya mencionadas que hayan arrojado exitosos resultados en otras regiones del mundo? ¿Si los conoce cual a sido su aporte y desde que punto de vista?

3) ¿Cuales considera Usted que hayan sido los problemas para que en la región de Bogotá y Cundinamarca no se haya evolucionado más rápidamente en los campos de la ciencia, la tecnología y la innovación?

4) ¿Para Usted quien o quienes deben ser las instituciones que a nivel regional y nacional tienen la obligación de promover políticas prácticas para el desarrollo de la competitividad en los campos específicos de la ciencia, la tecnología y la innovación?

5) ¿En el evento de considerar viable una unión entre actores públicos, el actor empresarial y las universidades, cual cree Usted que debería ser el papel y el procedimiento a seguir de cada uno de estos para un acelerado crecimiento de la competitividad de la región?

6) ¿Cree Usted que un desarrollo legislativo en áreas especificas que creen beneficios e incentivos para la Competitividad en ciencia, tecnología e innovación sería el núcleo para que la región de Bogotá y Cundinamarca se convierta en un ejemplo a seguir en los próximos años?

Cuestionario Nº 2:

Respetado doctores:

Habiendo sido alumna de usted y encontrándome ya en la etapa final de mi carrera decido escribirle por lo siguiente: junto con tres alumnos más estamos haciendo un proyecto de grado acerca del análisis y desarrollo legislativo en ciencia, tecnología e innovación en Bogotá y Cundinamarca.

Ya a punto de finalizar el trabajo antes de entregarlo a la Universidad, nuestra propuesta final consiste en la redacción de un proyecto de ley que logre abarcar los aspectos más importantes al respecto, a igual que los vacíos legislativos.

Nos hemos dado cuenta (y no es nada nuevo) que el problema que tenemos en Colombia con relación a las leyes es que existen demasiadas! Encontramos que no es tan necesaria la redacción de dicho proyecto de ley.... ya existen las normas que regulan lo que se requiere, el problema es que hay muchas y que no se aplican. Cómo lograr crear una "cultura cuidadana" al respecto, conciencia en el Estado, como crear lazos entre la Nación, las entidades, la universidad y la empresa privada para desarrollar proyectos de investigación?

Por estos motivos le escribo, quisiera conocer su opinión con respecto al problema legislativo que nos agobia, la promulgación excesiva de normas, la inoperancia de las leyes, la falta de mecanismos efectivos que apliquen los instrumentos y herramientas en ellas plasmados.

Muchísimas gracias por su atención y quedo a la espera de su respuesta.

Cordialmente,

ANEXO Nº 23

Entrevista N º 1:
Dr. Fernando Lizcano Lozada. Medico Universidad del Norte. Endocrinólogo Universidad de Navarra (Pamplona – España). PHD en Biología Molecular y Genética Universidad de Harvard (Boston- Estados Unidos)

Esta entrevista tiene como objetivo determinar los principales problemas que ha tenido el Dr. Frenando Lizcano, en al consecución de sus investigación. Así mismo se hará referencia a las experiencias que el Dr. Lizcano ha tenido en diferentes países.

Principales problemas:

- El presupuesto de las entidades encargadas de financiar proyectos de investigación es un reducido
- Las entidades exigen resultados a corto o mediano plazo. Las investigaciones no se deben hacer contra el reloj.
- No hay mucha comunicación por parte de las entidades con relación a los proyectos que van a financiar.
- El Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital no tiene metas fijas relacionadas al tema de ciencia y tecnología

Experiencias con otros países:
España:

- Cada área de investigación tiene un fondo propio de donde se sacan los recursos necesarios. (Ej. Fondo de Investigación Sanitaria)

Estados Unidos:

- Buena parte de los recursos vienen de filántropos
- Las universidades apoyan 100% la investigación de sus estudiantes sea en pregrado, maestría o doctorado.
- Los investigadores tienen su propio grupo, el cual consigue los recursos directamente.

Propuestas:

- Tomar un pequeño porcentaje de impuestos, multas de transito, etc, los cuales sean destinados a la investigación
- Crear como en Estados Unidos grupos propios de investigadores.

Entrevista Nº 2:

Miguel Ángel Cadena. Ingeniero Industrial, Universidad de Los Andes. Especialización en Gestión de tecnología, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Asesor de Educación de tecnología, Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá.

1. Consejo Regional de Competitividad:

Hasta el momento el Consejo Regional de Competitividad, esta en una etapa de concertación de actores y de estrategias. Aunque los resultados aun no son evidentes en un futuro seguramente, si lo serán.

2. Modelos exitosos

El señor Cadena, nos recomienda la consulta de la pagina web de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde se encuentran modelos exitosos sobre el tema.

Asimismo, menciona el ejemplo de la India

3. Problemas

- Falta de presupuesto. No se aumenta el presupuesto para investigación en ciencia y tecnología, ante se disminuye.
- Los actores privados deben pensar , en primer instancia, que la investigación no es lucrativa.
- En Colombia no hay uno verdadera transferencia de tecnología:

4. Instituciones:

- El SENA debe contribuir mucho más con la capacitación en ciancia y tecnología.
- Los diferentes actores del Consejo Regional de Competitividad deben mirar la investigación en ciencia y tecnología como algo bueno para el futuro y no solamente como un negocio.

5. Soluciones:

- Una fuerte legislación sobre acreditación de programas en educación superior en donde la investigación sea el factor más importante.

Entrevista No 3: Juan Carlos Ramírez. Vicepresidente de Apoyo Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá.

R/ Es viable, pero el proceso está caminando muy lentamente. Es un campo que requiere una institución doliente (la CCB no lo es) que ejecute las acciones necesarias para avanzar y ponga a funcionar el equipo de trabajo, el cual es un muy buen orientador a manera de junta directiva. En resumen, ya tenemos junta, ahora falta la empresa.

R/ No.

R/ Al sector privado, empresarial. No se le ha vendido el tema, dependemos del sector público y allí los programas no tienen continuidad, no hay visión de largo plazo y dependen del responsable de turno.

R/ Colciencias debe descentralizarse regionalmente. La Alcaldía debe invertir y estimular este campo, la administración Mockus no lo ha hecho.

R/ La asociatividad debe hacerse alrededor de proyectos empresariales con resultados de negocio concretos. Debe buscarse una aproximación y desarrollo importante en esta dirección. No más disertaciones, no más documentos, proyectos concretos, al principio pequeños, con resultados y luego se evoluciona paso a paso.

Entrevista No 4: Florentino Malaver. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

¿Cree Usted que un desarrollo legislativo en áreas especificas que creen beneficios e incentivos para la Competitividad en ciencia, tecnología e

innovación sería el núcleo para que la región de Bogotá y Cundinamarca se convierta en un ejemplo a seguir en los próximos años?

R/ No, no es el punto de partida. Es un requisito, necesario más no suficiente, lo que hace falta son proyectos, no más leyes. Los incentivos deben hacerse, ojalá contra resultados.

¿Considera Usted viable el mecanismo del Consejo Regional de Competitividad, que actualmente esta adoptando la región de Bogotá y Cundinamarca para ser más competitivos en los campos específicos de la ciencia, la tecnología y la innovación?

R/ Es viable, en la medida en que efectivamente se logren desarrollar vínculos y redes de trabajo conjunto entre los diferentes sectores empresarial, educativo y gubernamental, a través del desarrollo de proyectos concretos y se consiga el compromiso de todos los actores con una visión compartida de ciudad y con el rol que cada uno debe desempeñar.

¿Conoce Usted de otros modelos implementados en materias como las ya mencionadas que hayan arrojado exitosos resultados en otras regiones del mundo? ¿Si los conoce cual ha sido su aporte y desde que punto de vista?

R/ Conozco los casos analizados por Monitor en el Estudio que realizó para la Cámara de Comercio de Bogotá en 1997, “La Bogotá que Todos Soñamos”.

¿Cuales considera Usted que hayan sido los problemas para que en la región de Bogotá y Cundinamarca no se haya evolucionado más rápidamente en los campos de la ciencia, la tecnología y la innovación?

R/

- En primer lugar, no ha existido en la ciudad-región una política pública fuerte en materia de desarrollo de la innovación, la ciencia y la tecnología, lo cual se ve reflejado en la inexistencia de una oficina de la administración distrital y departamental dedicada exclusivamente a este tema. Adicionalmente, esto crea un divorcio entre la implementación de la política nacional (a cargo de Colciencias y Ministerios), y los esfuerzos que deben desarrollarse exclusivamente en el ámbito regional, es decir, parafraseando una de las principales conclusiones del Estudio Monitor de Competitividad, Bogotá adolece de la enfermedad de ser la Capital, en la medida en que la ciudad centra sus acciones en los proyectos de carácter nacional, minimizando los recursos que se pueden destinar a la región.

- De la misma manera, se da un divorcio entre el sector conocimiento (Instituciones Educativas, Centros de Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico, etc.) y el sector empresarial, el cual se expresa dramáticamente en el desconocimiento mutuo, el bajo nivel de proyectos conjuntos y la preferencia de los empresarios de contratar tecnologías extranjeras.

- En el trasfondo de esta problemática se encuentra una cultura empresarial conservadora, lo cual se ve reflejado en los “Modelos Mentales” de los empresarios de la ciudad-región, quienes han asumido tímidamente la inversión en el área de innovación y desarrollo tecnológico, especialmente en cuanto a la investigación y creación de nuevas tecnologías, concepto que todavía sigue muy ligado al de “máquina” y poco ha evolucionado al de “conocimiento aplicado”.

¿Para Usted quien o quienes deben ser las instituciones que a nivel regional y nacional tienen la obligación de promover políticas prácticas para el desarrollo

de la competitividad en los campos específicos de la ciencia, la tecnología y la innovación?

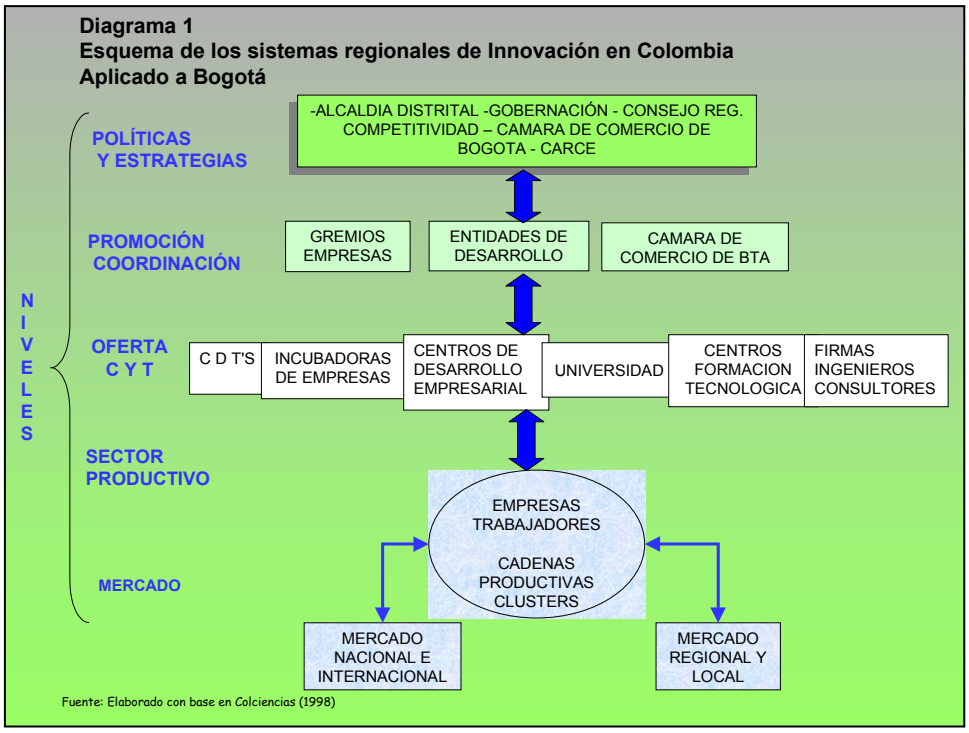
R/ Debe ser a mi juicio, los gobiernos locales, las Cámaras de Comercio y los Gremios, cumpliendo cada uno el rol que le corresponda.

De acuerdo con un Estudio contratado por la Cámara de Comercio de Bogotá el año pasado sobre el Sistema Regional de Innovación SRI[103], se logró identificar tres principales escenarios que constituyen el eje fundamental para el desarrollo de un SRI aplicado a Bogotá.

A continuación me permito transcribir los principales apartes del Estudio con respecto a esta materia:

"En el país, los SRI se han definido mediante la arquitectura institucional que ilustra el Diagrama 1 (Colciencias, 1998).

[103] Malaver, Florentino. La Cámara de Comercio de Bogotá y el Sistema Regional de Innovación: Una perspectiva Estratégica. Bogotá, Enero de 2002.



Esta composición señala que en el primer nivel se hallan los arreglos institucionales conducentes a la formulación de políticas y estrategias de CyT e innovación. Su función fundamental es, entonces, definir el marco de políticas y directrices estratégicas que articulan, dan coherencia y consistencia al conjunto de recursos y acciones desplegadas para el desarrollo tecnológico de la región. Debido a las características (mostradas arriba) del cambio técnico y la innovación, que impiden que estos sean fruto del devenir espontáneo de la actividad productiva, la existencia de estas políticas activas es decisiva para el avance de los mismos.

Por el carácter político de esta instancia del sistema, en ella están llamados a concurrir los actores más representativos del **gobierno regional y distrital, de los sectores empresarial y educativo, de la CyT, así como de las organizaciones sociales**. A su vez, la legitimidad, capacidad decisoria y de liderazgo estratégico de estos actores define en gran medida el papel que

puedan desarrollar. No obstante lo anterior, la efectividad y la viabilidad del SRI depende de su articulación con las políticas y problemas estratégicos de la región, pues, solo en la medida en que muestre su capacidad para contribuir a solucionar los problemas más acuciantes de la región, a materializar sus potencialidades económicas, a elevar los niveles de competitividad y de calidad de vida de su población, ganará la legitimidad, los espacios y recursos que garanticen la sostenibilidad del sistema.

El segundo nivel del Sistema lo conforman las instituciones encargadas de la promoción y coordinación de las actividades de CyT[104]. Por definición los entes llamados a jugar un papel vital en esta función son las Comités Regionales de CyT (una vez acabadas las Comisiones Regionales de CyT), o los entes creados por los Departamentos para tal fin. Pero también se encuentran los gremios (de carácter sectorial), instituciones tales como las Cámaras de Comercio (que tienen un carácter más transversal), o entidades de desarrollo regional (tales como Proantioquia, o la Fundación para el Desarrollo Integral del Valle, FDI),

Las instituciones ubicadas en este nivel cumplen, ante todo, el papel de articular el sistema, y esto va a depender en gran medida de su capacidad de convocatoria, especialmente frente a los empresarios, que como se verá, constituyen los eslabones más difíciles de integrar al mismo. Estas instituciones son las llamadas a convocar a los actores y a liderar los procesos conducentes a la formulación de las políticas y planes de CyT. Están llamados a velar por el cumplimiento de dichos planes y políticas, sobre todo, en lo relacionado con los recursos y partidas presupuestales que garanticen su realización; también, con la coordinación de las actividades de las entidades encargadas de su ejecución.

[104] Cabe advertir, que autores como Garay, et al. (1998), al analizar la evolución de las políticas y acciones en materia de CyT en el país, consideran que dentro de este segundo nivel se encuentran también las instituciones (como COLCIENCIAS) encargadas de su financiamiento.

En el tercer nivel se encuentran las entidades e instituciones encargadas de la ejecución de las políticas y planes de CyT. Esto, en su doble dimensión: la oferta y la demanda de investigación, de desarrollo y servicios tecnológicos. Por el lado de la oferta, se encuentra toda la institucionalidad que el país en su desarrollo, y los avances de los Sistemas Nacionales de CyT y de Innovación, en particular, han venido construyendo. Entre ellos se destacan, los Centros y grupos de investigación; los centros de Desarrollo Tecnológico de carácter sectorial, CTD's; los Centros de Desarrollo Empresarial; los centros de Productividad Nacional y Regionales; las incubadoras de empresas de base tecnológica; los centros tecnológicos del SENA; organizaciones de profesionales con una marcada orientación hacia el desarrollo tecnológico, como la Asociación Colombiana de Ingenieros Electrónicos, ASESEL; las universidades, especialmente aquellas que además de contar con centros y grupos de investigación también ofrecen programas de maestrías orientadas a la investigación, programas de doctorado, o especializaciones en gestión tecnológica; o las firmas de ingeniería o de consultoría tecnológica.

Además de la calidad de sus programas, la eficacia de las actividades desplegadas por estas instituciones está supeditada a su articulación a las necesidades estratégicas de la región bien sea desde la perspectiva productiva, social o de problemas específicos más apremiantes. Esto está relacionado con su articulación a las políticas y planes de CyT e innovación regional. Pero el aspecto que quizá más influye en la eficacia de sus acciones está relacionado con los niveles de articulación, de coordinación y de complementación de las acciones desplegadas por cada una de ellas.

La demanda está constituida por las entidades públicas que para el cumplimiento de sus tareas requieren y contratan estudios y servicios tecnológicos; en especial, por las empresas productoras de bienes y servicios.

En general, los SRI enfrentan aquí su mayor reto. Eso se debe a que se requiere un cambio en la cultura y estrategias empresariales que conviertan al desarrollo de las capacidades tecnológicas y la innovación en pilares de sus estrategias competitivas. Solo de esa forma, valorarán y demandarán las actividades y los servicios del SRI. De otro modo, las infraestructuras y capacidades de apoyo tecnológico construidas por la sociedad, serán subutilizadas, y "sobrarán".

La importancia de este nivel del sistema radica en que materializa los desarrollos tecnológicos y la innovación. Dadas las características de nuestro sistema productivo (en el cual tienen una participación porcentual bastante significativa las PYMES –superior al 90%-), los desarrollos e innovaciones de las empresas dependerán en gran medida del apoyo tecnológico recibido. Esto dependerá, en gran medida, de la articulación de la oferta y demanda tecnológica. Por ello es fundamental, en este nivel, la conformación de redes de innovación, propia de la noción de sistema que encarnan los SRI"[105].

¿En el evento de considerar viable una unión entre actores públicos, el actor empresarial y las universidades, cual cree Usted que debería ser el papel y el procedimiento a seguir de cada uno de estos para un acelerado crecimiento de la competitividad de la región?

R/ Un elemento fundamental para la implementación de cualquier estrategia al respecto, es la responsabilidad que debe asumir cada uno de los actores involucrados en este proceso. Ya en la respuesta anterior se señaló el papel que debe cumplir las diferentes instituciones vinculadas a este proceso.

[105] Malaver, Op. Cit. Páginas 8-10.

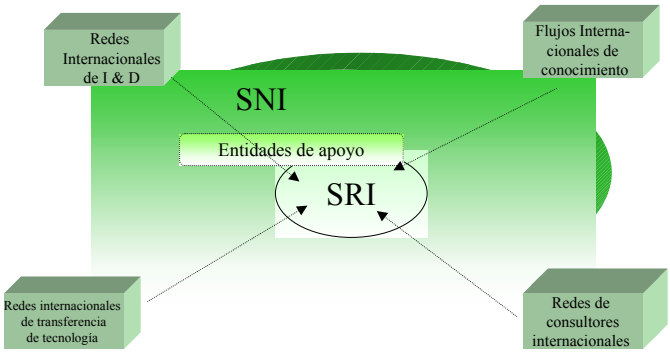
Adicionalmente, “es necesario resaltar que el SRI es un sistema abierto, que se halla en constante interacción con un entorno que incide en su dinámica. SRI hace parte del Sistema Nacional de Innovación, S N I. De él se alimenta, por ejemplo, a través de los programas y recursos que provee el sistema a través de Colciencias, o del accionar de instituciones tales como los CDT’s, que si bien se instalan a nivel regional, tienen una concepción sectorial - nacional. A su vez, en la dirección opuesta, el desarrollo del SRI, alimenta el S N I. Su relación es, entonces, sistémica.

El SRI se alimenta del entorno que le provee recursos a través de instituciones de apoyo tales como el sistema financiero a través de la banca de fomento (como el IFI) y la banca privada que cuentan con programas orientados al financiar proyectos y actividades de CyT. El SRI, tal como lo muestran el Diagrama 2 y el Anexo 1, se halla interconectado con instituciones que desbordan el S N I mismo. Por ejemplo, con las redes internacionales de I&D, entre las cuales se destacan las empresas transnacionales que desarrollan actividades de investigación que se traducen en innovaciones que llegan a través de sus filiales, los contratos de transferencia de tecnología o la misma compra de los bienes de capital”[106].

[106] Malaver, Op. Cit. Páginas 11-12.

Diagrama 2

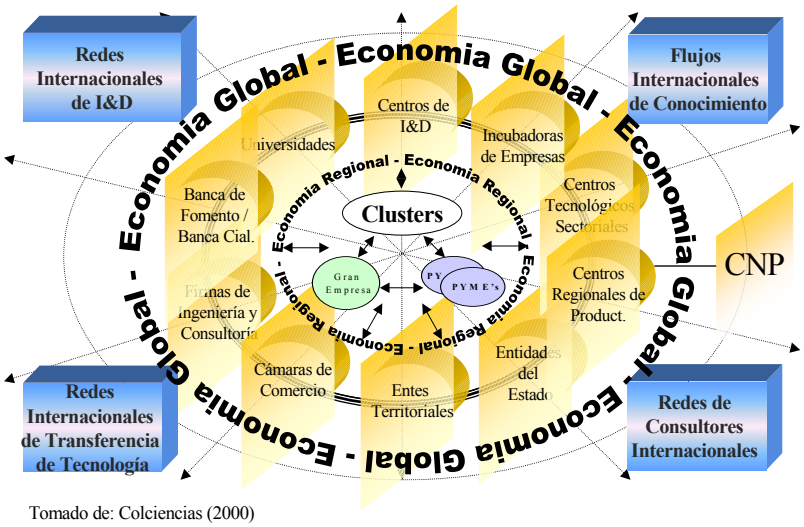
ARTICULACIONES Y APOYOS DEL SRI



Fuente: elaborado con base en Colciencias (2000)

Anexo 1

SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN



Tomado de: Colciencias (2000)

¿Cree Usted que un desarrollo legislativo en áreas específicas que creen beneficios e incentivos para la Competitividad en ciencia, tecnología e innovación sería el núcleo para que la región de Bogotá y Cundinamarca se convierta en un ejemplo a seguir en los próximos años?

R/ Es uno de los componentes en los cuales se requiere trabajar. De acuerdo con lo expuesto en el Estudio contratado por la Cámara de Comercio de Bogotá: "La formulación de la política exige definiciones sobre objetivos estratégicos, focalización temática, definición de metas y acuerdos programáticos y operativos con los demás actores del SRI, además de un plan de acción específico para la consolidación misma del SRI; lo cual implica la definición del mecanismo institucional para orientar la ejecución de la política.

Adicionalmente, en el marco de la política se debe definir una Agenda Regional de Innovación, Ciencia y Tecnología, a través de un proceso de reflexión, concertación y programación de acciones, que conduzca a la focalización en sectores o factores prioritarios para establecer las bases del desarrollo científico y tecnológico, la identificación de proyectos estratégicos y la definición de compromisos institucionales en torno al futuro productivo y científico de la región"[107].

Entrevista Nº 5: José Luis Villaveces. Director del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología

1. ¿Considera usted viable el mecanismo del Consejo Regional de Competitividad, que actualmente esta adoptando la región de Bogotá y

[107] Malaver, Op. Cit. Página 18.

Cundinamarca para ser más competitivos en los campos específicos de la ciencia, la tecnología y la innovación?

Si lo considero viable e importante. La idea de reunir al sector privado y al sector público es una idea importante, que ha dado resultado en el sistema nacional de ciencia y tecnología; no es automática. Ambos lados tienen mucho que aprender en materia de colaborarse, pero el esquema es el correcto. También es fundamental la unión de Bogotá con Cundinamarca. Es absurdo que estos dos entes territoriales no anden mucho más unidos. En el caso de la competitividad en ciencia, tecnología e innovación es importante que se rompan los esquemas de separación del pasado. Bogotá es la capital de Cundinamarca y su realidad más importante, y Cundinamarca es el entorno natural de Bogotá y el primero que le da sentido de región, amen de que muchas de las industrias "Bogotanas" e incluso muchas de las instituciones educativas "Bogotanas" están en territorio de Cundinamarca.

2. ¿Conoce usted de otros modelos implementados en materias como las ya mencionadas que hayan arrojado exitosos resultados en otras regiones del mundo? Si los conoce ¿cuál ha sido su aporte y desde que punto de vista?

La innovación en las últimas décadas ha sido mucho materia de regiones, más que de ciudades. Hay muchos ejemplos conocidos que guardan alguna similitud con el nuestro: el Silicon Valley alrededor de San Francisco, el segundo Silicon Valley alrededor de Seattle, la bio-zona de Alemania, entrada en Hannover, la zona de Carolina del Norte e incluso, yo diría que lo que se conoce como el Medellín metropolitano tienen cada uno sus particularidades, pero en todos ellos y en muchos más hay formas de unión del sector privado y el público para aumentar la competitividad de una región.

3. ¿Cúales considera usted que hayan sido los problemas para que en la Región de Bogotá y Cundinamarca no se haya evolucionado más rápidamente en los campos de la ciencia, la tecnología y lo innovación?

Esta afirmación habría que relativizarla un poco. En la última década la ciencia y la tecnología sí han avanzado bastante en Colombia en general y en la región en particular. Muchas universidades que no investigaban han comenzado a hacerlo, muchas que lo hacían han comenzado a preocuparse más directamente por su región. Cifras y datos buenos tendremos a final de año cuando culmine el trabajo de la agenda regional, pero es un hecho que el número de grupos de investigación en Colombia se ha mas que duplicado desde los días de la misión de ciencia, educación y desarrollo en 1993, desde entonces e crearon los doctorados de los cuales hay varios muy buenos en universidades de la región, se puso en marcha el sistema nacional de innovación y varios centros de desarrollo tecnológico y dos incubadoras de empresas comenzaron a funcionar en la región. Se pueden dar muchos más ejemplos, pero el hecho es que el sector de ciencia y tecnología es un sector en claro ascenso desde hace más de una década. Puede que falte aun mucho para que sea el que necesitamos, pero está creciendo rápidamente. No puede decirse lo mismo de la innovación. La forma en que nuestra capacidad de crear conocimiento no ha crecido a la par con nuestra forma de aplicarlo a la producción y a la competitividad. Yo creo que el obstáculo principal es el desconocimiento mutuo entre los sectores industriales y académicos. Es bien sabido que la academia tiene dificultades para acercarse a la industria, pero los industriales tienen de la universidad una imagen que corresponde, tal vez, a lo que ellos conocieron como estudiantes hace veinte años y la universidad ha cambiado mucho desde entonces. Es necesario que ambas partes se conozcan y muchas estrategias encaminadas a acercarlas son necesarias. En este sentido, el papel del consejo de competitividad y de otras iniciativas que se han relacionado, como la de la agenda de ciencia y tecnología, la alianza

educación empresa de la cámara de comercio de Bogotá, el trabajo de las instituciones de interfase, etc, puede ser importantísimo.

4. Para usted ¿quien o quienes deben ser las instituciones que a nivel regional o nacional tienen la obligación de promover políticas prácticas para el desarrollo de la competitividad en los campos específicos de la ciencia, la tecnología y la innovación?

Tanto las autoridades públicas como la dirigencia privada tienen esta obligación. Por eso el papel del consejo de competitividad es importante. Si me pregunta cuáles entre las autoridades públicas yo diría, en primer lugar, que la gobernación y la alcaldía, pero el concejo y la asamblea tienen una responsabilidad muy grande.
Muchos departamentos de Colombia tienen planes de ciencia y tecnología con presupuestos y mecanismos administrativos desde hace años. Los ejemplos de Santander y la zona de Bucaramanga, de Antioquia o de la zona cafetera deben tenerse en cuenta. En nuestra región estamos quedados en este sentido. También son responsables muy directamente las dos secretarías de educación, pero no lo podrán hacer mientras no cambien radicalmente su concepción. Actualmente son sobre todo unas administradoras de colegios para niños pobres. Con esa concepción no incidirán en la competitividad. Lo harán cuando entiendan que tienen la responsabilidad de la política educativa y que la educación es uno de los factores clave en el desarrollo de la competitividad. Cuando se vean como "secretarías de educación, conocimiento y competitividad". No creo, por otro lado, que las oficinas de planeación sean muy llamadas a tener un papel protagónico en esto, dado que están muy ligadas a lo territorial y geográfico.

5. En el evento de considerar viable una unión entre actores públicos, el actor empresarial y las universidades, ¿cuál cree usted que debería ser el

papel y el procedimiento a seguir a cada uno de estos para un acelerado crecimiento de la competitividad de la región?

Lo que hay que hacer es procurar muchos encuentros y diálogos. Pero cuando digo encuentros y diálogos, me refiero no a reunioncitas con videobeam y refrigerio sino a trabajo conjunto de verdad. El modelo español en el que profesores - investigadores pasan un semestre trabajando en las empresas, mientras que los técnicos de las empresas pasan un semestre en las universidades es bueno. Podría hacerse algo parecido y luego gestionar proyectos. No creo en los esquemas de aumentar la oferta y demanda del conocimiento en el momento actual, pues una oferta y una demanda producidos por grupos humanos que se desconocen mutuamente no tiene esperanzas de salir muy bien. Hay que hacer que los dirigentes empresariales vayan a los laboratorios de las universidades y los mejores investigadores vayan a las juntas directivas de las empresas. Yo acabaría con las pasantías de los estudiantes -por un tiempo- porque sirven para lavar la conciencia "tenemos relaciones con la industria" dice la universidad porque envía un estudiante a que trabaja mal pagado. Este estudiante generalmente es aún muy novato para poder constituir verdaderamente el eje de un diálogo constructivo, que debe ser entre los líderes de la producción científica y tecnológica. Hay que quitarle también a la investigación el aura de medicina-bruja. El cuentico de que los investigadores pueden "resolver los problemas de la industria" se percibe muchas veces como que hay que esperar que a la industria le duela algo -el problema- para que el investigador venga y con una danza mágica, en pocos días le cure el dolor. Lo que se necesita es un cambio cultural que haga entrar la creación de conocimiento como un factor esencial en el proceso de producción y eso sólo se logra después de mucho tiempo, pero el primer paso para los cambios culturales es el diálogo desaprensivo.

6. ¿Cree usted que un desarrollo legislativo en áreas específicas que creen beneficios e incentivos para la Competitividad en ciencia, tecnología e innovación sería le núcleo para que la región de Bogotá y Cundinamarca se convierta en un ejemplo a seguir en los próximos años?

Los incentivos están muy bien y deben crearse. Si se quiere una política en la que muchos ciudadanos participen, estos ciudadanos deben sentir que hay una diferencia entre participar y no hacerlo. Parte de la diferencia puede estar en beneficios e incentivos inmediatos, de tipo tributario, crediticio o similar, pero no se puede tratar a los ciudadanos sólo como caballos que caminan ciegamente para donde está la zanahoria. hay que trabajar por un cambio cultural en el que el empresario entienda que la mejor manera de que su negocio funcione bien en el siglo XXI es incorporarle mucho conocimiento. Que en la transición requiera un apoyo del estado es real y por eso se necesitan estímulos, pero estos no deberían ir más allá de la transición, sino estaríamos creando una situación premoderna de estado de beneficencia, que es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer para estimular la competitividad. Esto lo sostengo, aunque puede ser que la transición dure cien años. Yo estoy hablando de la transición entre dos culturas y eso con seguridad, toma más de una generación.

Entrevista Dra. Claudia Forero. Coordinadora Mesa de Biotecnología Bogotá- Cundinamarca

1. Considera usted viable el mecanismo del Consejo Regional de Competitividad, que actualmente esta adoptando la región de Bogotá y Cundinamarca para ser más competitivos en los campos específicos de la ciencia, la tecnología y la innovación?

Me parece que es viable solo si hay un compromiso real de todos los actores involucrados, en particular del Estado, el cual debe reconocer su importancia en el desarrollo regional y nacional.

2. Conoce usted de otros modelos implementados en materias como las ya mencionadas que hayan arrojado exitosos resultados en otras regiones del mundo? Si los conoce cual ha sido su aporte y desde que punto de vista?

Creo que el Singapur y en Canadá Ha habido este tipo de iniciativas, con resultados muy favorables. Aquí e Colombia creo que en Antioquia pero yo no he tenido nada que ver.

3. Cuales considera usted que hayan sido los problemas para que en la Región de Bogotá y Cundinamarca no se haya evolucionado más rápidamente en los campos de la ciencia, la tecnología y lo innovación. La situación general del país no ha favorecido el desarrollo de ciencia y tecnología en la región, no se invierte en capacitación especializada, en proyectos de investigación que involucren innovación, no ha apoyo financiero para iniciativas de industria de base biotecnológica o que involucren biotecnología . La educación en Colombia tiene que formar investigadores, especialistas en gestión de la biotecnología y bionegocios, entre otros.

4. Para usted quien o quienes deben ser las instituciones que a nivel regional o nacional tienen la obligación de promover políticas prácticas para el desarrollo de la competitividad en los campos específicos de la ciencia, la tecnología y la innovación?

La Presidencia de la República, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá, Colciencias, los Ministerios de Agricultura, Medio Ambiente, Salud, Comercio, Relaciones Exteriores y por supuesto Planeación Nacional y

Distrital. Cámara de Comercio de Bogotá, Universidades, empresas, corporaciones.

5. En el evento de considerar viable una unión entre actores públicos, el actor empresarial y las universidades, cual cree usted que debería ser el papel y el procedimiento a seguir a cada uno de estos para un acelerado crecimiento de la competitividad de la región?
Primero crear espacios de dialogo que permitan identificar los problemas y las posibles soluciones y determinar claramente como cada uno de ellos debe intervenir en el proceso de involucrar la ciencia Y la tecnología en el desarrollo y la competitividad de la región

6. Cree usted que un desarrollo legislativo en áreas específicas que creen beneficios e incentivos para la Competitividad en ciencia, tecnología e innovación sería le núcleo para que la región de Bogotá y Cundinamarca se convierta en un ejemplo a seguir en los próximos años?

Si es uno de los factores que ayudaría, pero unido a otros

Entrevista Nº7: Dr. Jorge Oviedo Albán . Profesor del Área de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana

Quiero decirle que comparto totalmente sus apreciaciones. Si me pide mi opinión al respecto, me parece que el problema es de "fragmentación" del derecho, por lo menos en cuanto tiene que ver con el derecho mercantil, se nota una creciente "disgregación" de los temas que antes tenían una unidad sistemática en el cuerpo del código.

Sobre como afrontarlo: pues son diversas las opiniones, hay quienes creen que debería tratar de recuperarse la unidad sistemática de las leyes, otros que deben reducirse, etc. Por ejemplo, el Profesor y hoy Ministro Fernando Londoño Hoyos, es de los que cree que el país vive una inflación legislativa que es necesario reducir. Yo comparto en parte lo que afirma el profesor

Londoño, por lo menos en cuanto a derecho mercantil se refiere es necesario una urgente revisión de la legislación comercial y armonización para darle la sistematicidad que el tema merece.

En cuanto a mecanismos: es urgente una redefinición de la estructura administrativa y judicial del Estado, que concrete, reduzca y sintetice el tema frente a juzgados y superintendencias y demás órganos administrativos relacionados con estos temas. Si mal no estoy el Presidente Uribe está comprometido con este tema y se está adelantanto un proyecto para reducir, fusionar y reorganizar el aparato administrativo.

Entrevista Nº 8: Dr., *J*uan Carlos Gallego, profesor del Área de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana

Estamos ahogados en nuestra legislación; es increible pero desde nuestros inicios como País independiente, existe evidencia de lo proclives que eran nuestros primeros legisladores en redactar normas y mas normas. Sin embargo me he dado cuenta que es tan tupido el bosque de legislación que no permite apreciar la necesidad de regular temas importantes; es aquí donde los estudiosos del derecho en Colombia (que son pocos), comiencen a proponer legislaciones que integren. Parece una paradoja pero es ahora más que nunca que se debe ver el problema más holísticamente y proponer leyes que integren e ir derogando y reduciendo el espectro legal colombiano.

Te voy a dar un ejemplo, la legislación sobre entidades sin ánimo de lucro, es totalmente dispersa, son muchas normas que tocan el tema; considero que todas ellas se deberían reducir a una sola (como sucedío en España). Sin embargo esta Ley debe ser tan estudiada por los foros que conocen el tema, y no simplemente (como sucede) que una iniciativa parcial (y con intereses) impulse una Ley donde los que debaten el tema no son abogados (y muchas veces no son buenas personas), lograndose, como en muchas ocasiones, esperpentos jurídicos.

Entrevista Nº9: Dr. Álvaro Mendoza Ramírez , Rector de la Universidad de La Sabana.

En mi opinión, la ley debe ser el mínimo de las reglas de convivencia social, debiendo estar la mayoría de ellas basadas en una cultura ciudadana, que no requiera del constreñimiento del Estado para actuar en función del bien común. La inflación legislativa suele ir pareja con la descomposición social y, no solamente no arregla esta última, sino que hace del Derecho algo cada vez más complicado, y cada vez más alejado del conocimiento y de la aceptación sociales. A mi juicio, más que una necesidad de nuevas normas, se requiere de procesos educativos que tiendan a crear y a desarrollar una adecuada cultura ciudadana. Lo anterior no es imposible y la ciudad de Bogotá, que a pesar de sus problemas ha venido siendo calificada como la capital más hermosa y organizada del área latinoamericana, es una buena muestra. Aún cuando existen muchos aspectos en que se deben mejorar, la ciudad cambió de manera radical su cultura en el espacio de muy pocos años. Creo que la investigación y el proceso del conocimiento más que de normas, requieren de estímulos adecuados y de facilidades. Conviene creer en que la gente, si se la incentiva debidamente, tiene una gran capacidad de respuesta.

Entrevista Nº 10: Dr. Obdulio Velásquez. Ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Sabana.

El problema no esta en la proliferación. No estoy tan seguro que otros países no tengan un sin numero de leyes. valdría la pena indagarlo para quitarnos ese pre- juicio de que en Colombia tenemos muchas leyes. En los sistemas anglosajones he encontrado toneladas de leyes. no solo by statute (legislacion by parliament) sino by common law.(son inmensurables los volúmenes de casos que contienen la ley en estos países, pero al contrario de lo que uds sienten, no hay una sensación de ahogo. por que? no he hecho un estudio como para dar una opinón docta

me atrevo a adivinar.. que el sistema jurídico opera bastante coherencia. sistema..ojo a la palabra..no ley. el sistema jurídico leyes, jueces y cultura ciudadana. respeto y acatamiento de la ley. Hemos querido quizá crear cultura de cumplimiento de la ley, con la creación de leyes y no con su ejecución

entonces el problema es de la legislación colombiana?...fíjense que hace 150 años estamos en la misma crisis..entonces vino la tendencia de CODIFICAR hace códigos..un código un libro completo sobre una materia hasta agotarla..Código Comercial...y la verdad hoy esta desbordado...y en algunos ambientes se considera que el código ya no ofrece soluciones. Una prueba mas de que aquí se cumple la ley son las absurdas marchas por la no liberación de Irak - o la no guerra-. resulta que aquí fueron multitudinarias...libre expresión. ..pero cuando intentaron faltar a clase los alumnos por eso..ahí si la protesta oficial..la ley se hizo cumplir..uno señores..decidieron en sydney montarse en el techo de la Opera House..emblema de la ciudad y pintar..No war pues hoy aceptaron pagar los cien mil dólares que valen los danos. como quien dice..fueron a la corte...los juzgaron y aceptaron pagar...la ley se cumplió..... importante no es la SEVERIDAD DE LA PENA, SINO LA SEGURIDAD EN LA PENA ....si por robar un reloj da 6 meses de cárcel y se aumenta a 4 anos..pero las posibilidades de ser condenado son remotas..el delito se mantiene. si solo son 3 meses..pero es muy probable que los condenen...el delito disminuye.

ANEXO Nº 24

APORTES A LA INNOVACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLÓGIA DE CIENTÍFICOS COLOMBIANOS

Realizamos un breve recuento de ciertos proyectos adelantados por investigadores colombianos dentro y fuera de nuestro país y mencionamos la labor de algunos de nuestros científicos mas conocidos para recordar y hacer énfasis en cuanto a que nuestras deficiencias no radican en la imposibilidad de

desarrollar proyectos relacionados con innovación, ciencia y tecnología. El talento y los recursos humanos están presentes; lo que se necesita es el apoyo decidido las investigaciones emprendidas mediante políticas coherentes de financiación, personal investigador e infraestructuras.

- En Junio 22 de 2001, conocimos la noticia acerca de tres médicos colombianos quienes presentaron medicamento que atenúa efectos del Sida elaborado a partir de plantas amazónicas y esencias florales, y que ya fue probado con éxito en pacientes con esta enfermedad.
- Otro grupo de científicos colombianos en el Reino Unido trabajan en varios proyectos. Uno de ellos incluye la transformación genética de la curuba para un mayor desarrollo comercial dado que la planta presenta serios problemas agronómicos, como las pestes causadas por hongos e insectos, los cuales limitan la explotación comercial en Europa y Estados Unidos. Los experimentos tiene como fin desarrollar un sistema de transformación genética en esta especie que permita insertar genes que mejoren la calidad del fruto o toleren el ataque de las plagas. Otro proyecto se trata del conocimiento de la evolución geológica del valle medio del Magdalena por cuanto esta región ha sido desde 1916 una de las principales áreas para la exploración de hidrocarburos y otros minerales. Finalmente otra investigación adelantada hace relación al aprovechamiento del carbón mineral, adelantando trabajos científicos para investigar nuevos métodos que puedan proveer una rápida y acertada caracterización de los carbones para asegurar una excelente eficiencia en la operación de las plantas térmicas.
- Científicos llaneros trabajan en la forma de criopreservar una de las especies de los rios llaneros: el Yamú, con fines comerciales y para conservar la especie. El grupo de investigadores estudia las características seminales de machos adultos mantenidos en cautiverio y

evalúa varios protocolos para la criopreservación del semen de la especie.

- Tres científicos colombianos han diseñado un dispositivo para prevenir la trombosis venosa originada por el síndrome de la clase turista, que ha provocado la muerte de varias personas después de vuelos de gran duración. Se trata de un marcapasos que se usa externamente, durante un viaje en avión o en autobús, así como en cualquier situación de inmovilidad que supere las tres horas. Este marcapasos tiene el objetivo de prevenir la formación de coágulos en las venas, un problema que afecta a cualquier parte del cuerpo pero que en el 90 por ciento de los casos se presenta en las piernas y puede provocar la muerte
- Con la fibra del fique conocido como "Uña de Aguila", científicos colombianos demostraron que se podrán fabricar casas más resistentes. La cabuya podrá reemplazar en la construcción a fibras minerales como el asbesto, considerado cancerígeno, y a otras fibras sintéticas no biodegradables. Los investigadores descubrieron que la cabuya corta que se desecha al desfibrar el fique, puede emplearse con exito para reforzar vigas, columnas, tejas, adoquines, baldosas, entre otros. Estos investigadores son también los primeros en el mundo en estudiar la aplicabilidad de los jugos o licores del fique como plastificante para concreto y masas cerámicas, pues estas sustancias actualmente se vierten a los ríos sin controles ecológicos. De igual manera, se emplea el fique para extraer acetato de celulosa, materia prima en la obtención de plástico, y para la producción de carbón activado, purificador de líquidos.
- Científicos colombianos desarrollan un sistema para realizar cirugías de columna vertebral por computador con ayuda de un brazo robot. Se trata de un brazo que le da al médico la posibilidad de programar previamente la cirugía con base en imágenes de tomografía computarizada. La tecnología, que está en su última fase de experimentación, será de

utilidad para pacientes que necesitan cirugía de columna por problemas de escoliosis, fracturas vertebrales por accidentes y enfermedades degenerativas de la columna, y permitirá intervenir al paciente con un riesgo menor al actual. "El proyecto tiene entre sus objetivos minimizar el riesgo quirúrgico inherente para el paciente en este tipo de cirugías, como lesiones neurológicas, aflojamiento del material de osteosíntesis o pérdida de la corrección y disminuir los riesgos que implica para el equipo médico la exposición a la continua emisión de rayos x de los equipos

- Un científico colombiano trabaja junto con investigadores de varios países en Estados Unidos, en cambiar la composición del disco duro convirtiendo las capas en puntos magnéticos del tamaño de una millonésima parte de un milímetro, lo que implica que diez millones de puntos magnéticos, colocados uno seguido del otro, sin dejar espacio, ocuparían sólo un centímetro de longitud. Con esta herramienta tecnológica, en un centímetro lineal de puntos magnéticos que equivalen al tamaño de la cabeza de un alfiler, se podrá acumular más información que un disco duro convencional.
- Un grupo de científicos colombianos patentó un aparato que puede detectar un ataque cardíaco en las primeras cuatro horas. Un ataque cardíaco se produce por la formación de un trombo, o coágulo, que obstruye el libre paso de la sangre al corazón por las arterias coronarias. Sin embargo lo que mata no es la obstrucción en sí sino la demora en acudir a un centro hospitalario. Mientras más tiempo pase es probable que el trombo se instale y deje de irrigar sangre a una buena parte del corazón. Cuando éste no recibe oxígeno el músculo muere y ese daño es irreparable. Por eso es importante acudir rápido al médico. Si se evita la muerte del músculo es probable que el paciente no sólo se salve sino que viva más años y tenga una mejor calidad de vida. Los investigadores patentaron el prototipo llamado Cardiost, un novedoso

aparato que tiene la capacidad de indicarle al paciente si su dolor en el pecho es producto de una indigestión o si en realidad es un ataque cardíaco.

- Mientras la yuca en la industria colombiana se destina a producir bienes de bajo valor agregado, como harinas e insumos para el sector de alimentos, en otras partes del mundo se le está dando un creciente aprovechamiento industrial. Los almidones de este tubérculo son reconocidos como materia prima adecuada para producir dextrinas, sustancias básicas que ofrecen una amplia aplicación en la industria de adhesivos, papel y textiles. Ingenieros colombianos diseñaron un proceso para obtener dextrinas a partir de yuca, con propiedades que superan a otras existentes en el comercio. El trabajo adelantado espera generar tecnología propia que promueva el fortalecimiento del sector yuquero, con miras a aprovechar, mediante los derivados industriales, el mercado potencial y fortalecer la cadena productiva de la yuca.

- En el Pacífico se procesa el fruto del borojó para producir vinos, pulpas, néctares y mermeladas, además, de la pepa, que tiene un contenido de cafeína de aproximadamente 0.25% de donde se extrae el denominado Biotinto. Que se obtiene luego de purificar un compuesto, que es fermentado en tanques desarrollados con tecnología colombiana y tiene la ventaja ambiental de que su proceso de fabricación no conlleva los daños ecológicos que se producen durante el beneficio tradicional del café.
- Jóvenes empresarios tolimenses diseñaron un proceso para extraer jugo de limón tahití, logrando un producto que no necesita refrigeración y que, además, no tiene sabor amargo, principal dificultad a la hora de comercializar este tipo de productos. A pesar de que el jugo no está concentrado, su rendimiento es considerable, puesto que, al diluir una pequeña parte en agua, se obtiene una bebida refrescante y agradable.

Las características del limón tahití para extraer zumo son consideradas mejores que las de la variedad común. Entre las ventajas se destacan el tamaño, el mayor contenido de jugo (que es de aproximadamente el 50% en peso) y el sabor, ya que es menos ácido y, por tanto, es más aceptado por parte de los consumidores.

- Investigadores colombianos trabajan en la búsqueda de nuevos materiales para reemplazar los usados en pilas y baterías que además de ser contaminantes no permiten la reducción de los aparatos. En un futuro próximo se espera mejorar la calidad de las pilas y las baterías para que no contaminen, prolonguen su duración y reducir su tamaño. Desarrolló un material de electrolito sólido con base en el pegante conocido como Colbón. Este se lava con agua, se deja evaporar hasta que queda una membrana del grosor de una hoja de papel y luego de un proceso de mezclas con otras sales y ácidos queda convertido en una fina capa con capacidad para generar energía, casi tan eficiente como la solución acuosa que usan las pilas que se encuentran en el mercado. Con este nuevo material se utilizaron diferentes electrodos o conductores de energía, tales como láminas de carbono, plata y acero inoxidable. Como resultado, el nuevo material generó un voltio de energía por celda, mientras que una pila o una batería normal con electrolitos líquidos produce hasta 1,5 voltios por celda.
- Manuel Elkin Patarroyo logró desarrollar la primera vacuna contra la malaria en enero de 1986. Donó la patente de su invento a la Organización Mundial de la Salud, para asegurar su uso en beneficio de la humanidad y no el de las casas farmacéuticas o el suyo propio. Actualmente, trabaja tanto en la mejora de la segunda generación de la vacuna de la malaria como en las vacunas de la tuberculosis y de la hepatitis B, enfermedades que cada año acaban con la vida de 7 millones de personas en el mundo. Recibió The Edinburgh Medal - el más alto reconocimiento que Inglaterra concede a un científico-, el

Premio Príncipe de Asturias y el Premio Roberth Koch, considerado por muchos como la antesala del Nóbel.

- No podemos olvidar a los reconocidos científicos colombianos Rodolfo Llinás, investigador del cerebro humano y el origen de la conciencia, y se opone a la teoría de la conectividad celular. Llinás plantea que la imagen no se produce gracias a una actividad espacial del cerebro, sino a partir de una actividad en el tiempo; es decir, las neuronas intercomunicadas no forman un tejido en el que cada percepción ocupa un lugar, sino que cada neurona contiene su respectiva percepción en forma de señal cargada eléctricamente, de tal forma que el tálamo, por medio de un barrido, forma un momento de conciencia. Para este fin, ha desarrollado una técnica de exploración cerebral, la magnetoencefalografía. Ha publicado más de 200 artículos y varios libros. Salomón Hakim, quien ha trabajado en grandes realizaciones científicas en el campo de las neurociencias, y de la tecnología mediante la creación y fabricación de válvulas para combatir la hidrocefalia con presión normal -cuyo síndrome descubrió- y de innumerables piezas, prototipos, instrumentos y aparatos inventados y fabricados con sus propias manos. Jorge Reynolds Pombo, investigador del corazón a través del estudio de las ballenas, quien ha que ha creado e implantado el primer marcapasos cardíaco en Colombia. Conoce más que nadie del corazón de los cetáceos, y de muchas especies animales, además del hombre. Todas sus investigaciones están relacionadas con electrofisiología cardiaca en el hombre y comparativa con los animales. En el ámbito de los mamíferos marinos ha realizado electrocardiogramas a ballenas jorobadas, cachalotes, orcas y delfines, así como desarrollado el uso de tecnología satelital para su implementación en investigación científica inocua. Es Miembro de 38 Sociedades Científicas en Colombia y el exterior, en varias de ellas como Miembro Honorario y ha dictado más de 490 Seminarios, Cursos, Conferencias y presentado

trabajos científicos en Congresos Nacionales e Internacionales. Ha recibido 38 condecoraciones, entre ellas la Orden de Boyacá Grado Gran Oficial en el país y el Premio Medalla de Plata al Mérito Científico, Reino Unido en el Exterior.

- Patarroyo en una ocasión dijo que "la industria farmacéutica no hace todo lo que podría por los enfermos de SIDA, y sólo se ocupa de buscar métodos de curación que alargan el tratamiento pero no acaban con la patología. Todo, por motivos económicos. Nadie tiene ni idea de cómo va a ser la evolución de la humanidad y probablemente quienes hoy están arriba, mañana pueden estar abajo. Creo que hasta por egoísmo hay que ser solidario"[108]. Hasta el mismo tuvo ciertas dificultades con el Ministerio de Salud, frente al Estado por la falta de interés en las investigaciones científicas. En palabras de Efraim Otero Ortíz[109] es necesario "hacer un llamamiento para que la industria cambie sus criterios y su actitud frente a la investigación en el país, que se entre a financiar proyectos de gran envergadura, con dotación de laboratorios, universitarios o no pero siempre calificados óptimamente dentro de las convocatorias que Colciencias viene haciendo periódicamente en el país... que se entre a colaborar con instituciones como Icfes, Colciencias ó Colfuturo en la financiación de becas para investigadores básicos o clínicos que después van a beneficiar a la misma industria, la cual recuperará su inversión en el largo plazo."

---

[108] Palabras de Manuel Elkin Patarroyo en la elección por la Organización Manos Unidas en favor de proyectos de desarrollo en países

[109] En "LA INVESTIGACION MEDICA EN COLOMBIA: Perspectivas hacia el final del Milenio* consultado en http://www.encolombia.com/medicina/academedicina/j-02imedica.htm el 07/04/03

ANEXO Nº 25
Notas periodísticas sobre competitividad en la región y en el país

NOTA PUBLICADA EN EL DIARIO LA REPÚBLICA, EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2002

Empresarios de Cundinamarca se vinculan a grupos de gestión

Hombres de negocios cundinamarqueses dijeron que el Consejo Regional de Competitividad es una gran oportunidad que hay que aprovechar.

LA REPUBLICA

Como un cuarto de hora que hay que aprovechar, calificaron los empresarios cundinamarqueses al Consejo Regional para la Competitividad de Bogotá y Cundinamarca, proyecto liderado por la *Cámara de Comercio de Bogotá,* la Alcaldía Mayor, la Gobernación de Cundinamarca, el Comité Intergremial y la CAR, entre otras entidades.

Según los hombres de negocios consultados por **LA REPUBLICA**, y quienes se vincularon esta semana a los grupos de gestión contemplados en el proyecto, es la primera vez que se está tratando de planificar hacia adelante en el marco de un territorio competitivo, como lo es Bogotá y Cundinamarca. De acuerdo con Luis Eduardo Gutiérrez, presidente de la Junta Directiva de Fedepapa, la convocatoria a los empresarios cundinamarqueses por parte de las entidades que lideran el Consejo Regional es muy importante, ya que, a su juicio, es fundamental que haya una agricultura en la que todos los sectores participen, con el fin de que se vuelva más competitiva.
Así mismo, señaló que siempre ha habido la clara necesidad de crear comités y

asociaciones, para así obtener el apoyo del gobierno y trabajar conjuntamente. "Es importante contar con la ayuda del gobierno para exportar o emprender otro tipo de proyecto. Es más difícil que un agricultor trabaje solo a que lo haga con la comunidad".

Del mismo modo, agregó que es satisfactorio que el gobierno esté tan interesado en hacer la región competitiva.

De otro lado, sostuvo que una de sus propuestas para el gobierno es que se controle la calidad de las semillas. "Es fundamental que éstas sean buenas y sanas, certificadas por el gobierno y por instituciones que también están produciendo. Eso es una meta muy importante, porque si uno entra a trabajar con semillas de baja calidad, comienza el fracaso".

Por su parte, Juan David Londoño, presidente nacional de la Asociación Holstein, las expectativas en el marco del Consejo Regional de Competitividad son muchas. "Es una gran oportunidad y un cuarto de hora que hay que aprovechar. Yo creo que esas cadenas de competitividad, de trabajar hacia un mismo lado, es algo que hay que tener muy presente en el marco de una economía globalizada en la que cada uno por su lado no llega a ningún lado".

Sugerencias, seguir haciendo esta serie de cosas, que las empresas del agro que vinieron acá se vinculen a los grupos de gestión.

Que el estado nos siga apoyando, que necesitamos tener personal más calificado, tener insumos de mejor calidad a mejores precios, ayudándonos con los aranceles, con toda la parte que es de importaciones que sean más baratos, para así poder producir más económicamente y ser más productivos en el exterior y regionalmente.

Flores Colombianas Ltda. Mario Nannetti, gerente general.

Por primera vez se está tratando de planificar hacia delante. En realidad, un territorio competitivo dentro del proceso de globalización, es decir, utilizar a Bogotá y Cundinamarca conjuntamente, para poder competir con regiones a nivel mundial.

El plan se basa en que se está buscando en diez años multiplicar por siete las

exportaciones en dólares actuales que están alrededor de los US$1.500 millones, entonces la meta que se ha puesto para Bogotá y Cundinamarca son US$10.000 millones cuando terminemos diez años.
Se busca es subir el nivel educativo de cada actor, en cambio de mirar al trabajador como un factor de producción, hay que convertirlo en un agente de innovación.
"El gran reto para nosotros es lograr que la mano de obra de Cundinamarca y Bogotá se tecnifique y ayude a innovar, empezamos a competir favorablemente con el mundo".

NOTA PUBLICADA EN EL DIARIO EL TIEMPO, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2002

Bogotá define su futuro

El nuevo Consejo de Competitividad, que reúne a dirigentes, ciudadanos y empresarios, será la instancia para hacerles frente a los enormes retos de Bogotá que reclaman grandes decisiones.

Todos quieren que la ciudad mantenga el ritmo de inversión y desarrollo de los últimos años y que se actúe con celeridad en los frentes pendientes. Con este objetivo, la administración del alcalde Antanas Mockus, desde el inicio de su mandato, ha propuesto una reforma tributaria para aumentar los recursos permanentes de la ciudad en $1,6 billones de aquí al 2004. Los gremios se han opuesto a la mayoría de los incrementos en las tarifas y el Concejo de Bogotá ha rechazado en cinco oportunidades la reforma del Alcalde.

Este disenso es infortunado puesto que a Bogotá le ha tomado mucho tiempo convertirse en ejemplo de esperanza. Bogotá 2002 es fruto de una revolución en la administración pública del distrito capital. Una sucesión de alcaldes

responsables demostraron que sí es posible invertir con honestidad y eficiencia los recursos de las privatizaciones y los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas. Debido a este giro, todos los bogotanos tienen hoy una mejor calidad de vida y los más pobres cuentan con mayor acceso a servicios públicos, educación y salud. La brecha social comenzó a reducirse y, por fin, el concepto de justicia social dejó de ser algo abstracto. Este cambio en la fortuna de la ciudad también les ofrece a las empresas un entorno mucho más favorable para aumentar su productividad y enfrentar con mayor éxito un mundo cada vez más integrado y competido. En Bogotá se vive una revolución pacífica en la medida en que, con estas acciones, se construye una sociedad más igualitaria y amable.

Pero avanzar en el proceso de construcción de esta visión de ciudad, que además es ejemplo para un país donde tristemente priman la violencia y la pobreza, exige esfuerzo y compromiso de sus dirigentes y, necesariamente, recursos.

El próximo 20 de marzo se instalará oficialmente el Consejo Regional de Competitividad para Bogotá y Cundinamarca, una instancia de concertación producto del largo proceso que ha tenido lugar en la última década, impulsado en un principio por la Cámara de Comercio de Bogotá y el Foro de Presidentes. En este importante espacio de diálogo y de acción productiva, donde concurren 350 organizaciones vinculadas, se jugará el destino de la ciudad en la medida en que empresarios y gobernantes logren definir un norte para mantener, profundizar y consolidar el progreso alcanzado.

Uno de sus primeros retos será definir qué acciones son consistentes con una visión compartida de ciudad. En el tema tributario, la administración intentará convencerlos de la importancia de mantener los logros alcanzados para contar con su visto bueno a un nuevo proyecto de reforma tributaria para incrementar la productividad y la competitividad de la ciudad. La escalada terrorista asegura

que la reforma tributaria será más exigente que los proyectos anteriores. La ciudad estará definiendo su destino.

Bogotá productiva

Bogotá está descubriendo que puede mejorar su competitividad y productividad para comenzar a ser parte de la red global de ciudades. Esto ha sido posible, según los empresarios consultados por Dinero, por dos grandes avances concurrentes. El primero es haberle añadido valor a la ciudad al incrementar su patrimonio público, con una inversión de $14,6 billones (a precios del 2001) en los últimos 7 años, y que esta acción es visible: la aparición de TransMilenio, la recuperación de la educación pública, los parques y andenes, la construcción de las ciclorrutas, las bibliotecas y el incremento de la actividad cultural, entre otros. En segundo lugar, se percibe una notable mejoría en la eficiencia del funcionamiento de Bogotá y de su administración, y su interés en trabajar de la mano con el sector privado. De esta manera, la capital se torna más atractiva para la inversión y para los ejecutivos que viven en ella.

Estos dos elementos han reforzado otras ventajas ya existentes como el gran tamaño del mercado bogotano y su ubicación estratégica en cuanto acceso a otros mercados, como el andino. Según Carlos Mariño, presidente de Avantel, "Bogotá ofrece de por sí aspectos que le dan un potencial envidiable para un empresario y su familia. La radical mejoría en el estándar de vida complementa el atractivo. Destacaría también que la ciudad cuenta con un excelente nivel profesional y de servicio, lo cual es fundamental para crear un ambiente positivo para los negocios".

"Bogotá tiene una vocación de ciudad de servicios por su carácter mediterráneo", dice el alcalde Mockus. De hecho, los servicios representaron 65% del PIB y la industria 15% del PIB en 1999. En este sentido, la existencia de un recurso humano calificado le da una ventaja importante a Bogotá y, según la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), la ciudad, que genera el 23%

del PIB nacional, se proyecta entonces como exportadora de servicios con alto valor agregado, con fortalezas en recurso humano calificado, telecomunicaciones y transporte aéreo.

Hay, por supuesto, varios temas pendientes en la agenda de Bogotá. El nivel de desempleo es elevado y se ubicó en 18,7% el año pasado, mientras que el total nacional fue de 15%. A su vez, si bien el número de homicidios anuales pasó de 4.450 a 1.993 entre 1994 y 2001, según cifras de la Alcaldía, el resto de la criminalidad sigue siendo la principal causa de desprestigio de la ciudad. Y el crecimiento vegetativo y las migraciones, producto del preocupante fenómeno de los desplazados que llegan por la violencia, hace que la población crezca en alrededor de 170.000 nuevos habitantes por año, según la Secretaría de Hacienda del Distrito (SHD). "Esta es una presión adicional del tamaño de una ciudad intermedia a la que hay que responder con bienes y servicios públicos y para esto no se han destinado recursos adicionales", sostiene Israel Fainboim, secretario de Hacienda de Bogotá.

Por tanto, apenas comienza la tarea de posicionar a Bogotá como plataforma ideal para los negocios y aumentar su productividad. Para lograr este objetivo, la ciudad debe ahora mantener en operación las inversiones ya realizadas y continuar invirtiendo en mejorar la infraestructura y en el gasto social.

Las finanzas de Bogotá

Diversos expertos y estudios coinciden en señalar que las finanzas de Bogotá son sostenibles. Bogotá tiene plata, lo que pasa es que las decisiones de inversión del pasado generan grandes responsabilidades y necesidades de gasto a lo largo del tiempo. Se estima, por ejemplo, que mantener un cupo educativo cuesta $1,1 millones anuales. Así mismo, el mantenimiento de las obras y los espacios públicos que se han realizado en la ciudad genera obligaciones permanentes (o gastos recurrentes).

Como señala el alcalde Mockus en su entrevista con Dinero, la administración viene sacrificando el mantenimiento de las obras para continuar cumpliendo las metas de cobertura de su plan de desarrollo. Pero "los recursos que tenemos ya no dan y no hemos podido gastar en el mantenimiento necesario de otras inversiones ya realizadas", puntualiza Fainboim.

Pedagogía tributaria

Este año, la administración Mockus presentará una nueva propuesta de reforma tributaria al Concejo; pero esta vez será más exigente que las anteriores por las nuevas amenazas a la seguridad de la ciudad con motivo del rompimiento del proceso de paz con la guerrilla de las Farc y el reciente escalamiento del conflicto. Además, Fainboim dijo a Dinero que propondrá aumentar las tarifas de todos los impuestos en 1 x 1.000 por año durante 4 años y planteará un cobro total del costo del alumbrado público.

La aprobación de la reforma no será tarea fácil. El Concejo del Distrito hundió la propuesta en cinco ocasiones el año pasado. Para David Luna, concejal ponente del proyecto en las cinco oportunidades, la reforma no se ha aprobado por la época electoral que vivimos y porque los gremios no la respaldan. "En esta medida, el Concejo se negaba siquiera a debatir la propuesta. El concejal liberal Flavio Maya se dedicó a presentar ponencias negativas en cada ocasión". Juan Carlos Flórez, un concejal independiente, cree que los gremios no han entendido que "la inversión en la ciudad los beneficia, pues contribuye a mejorar la productividad" y, por tanto, considera que "los gremios no han tenido grandeza con la ciudad".

Por lo general, los gobiernos nacionales y locales ofrecen prebendas a los legisladores para que voten a favor del proyecto. Pero Mockus no las utiliza y, por tanto, requiere el apoyo de los gremios para que los concejales modifiquen su posición.

El Alcalde le apuesta a que puede cambiar la forma en que se toman decisiones de trascendencia para la capital y parte de la filosofía de mantener un proceso de diálogo constructivo. La alternativa sería buscar una estrategia para dividirlos y, luego, confrontarlos. Pero Mockus cree que el Comité Intergremial continuará aceptando argumentos a favor de la reforma.

De hecho, Mockus y Fainboim llevan ya nueve meses intercambiando opiniones con el Comité Intergremial sobre la reforma tributaria. El Secretario de Hacienda dice que "ha sido un proceso lento y difícil, pero las relaciones con el comité se han estrechado mucho. Los argumentos han ido calando y poco a poco se ha entendido que los bogotanos le aportan muy poco a la ciudad y que nuestra propuesta no aumenta significativamente la presión tributaria". Este comité, que tiene representantes de Acopi, Andi Bogotá, Fenalco Bogotá, Camacol Cundinamarca, Cámara de Comercio de Bogotá, Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, Sociedad Colombiana de Ingenieros, Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá y la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bogotá y Cundinamarca, constituye una instancia de cooperación y coordinación de la administración con los empresarios.

María Fernanda Campo, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, mantiene su oposición al grueso de la reforma (aumento en las tarifas del impuesto de Industria y Comercio, ICA y el predial), porque considera que "este momento no es el adecuado para la reforma cuando apenas se dan señales de reactivación". Además, está convencida de que la administración debe luchar contra la evasión y la elusión antes de incrementar las tarifas. Esta posición también es respaldada por Fasecolda, a pesar de entender que lo que está en juego es la conservación de la inversión ya realizada y el aumento de las coberturas del gasto social.

El futuro

Con la puesta en marcha del Consejo Regional de Competitividad, la administración Mockus espera tener una plataforma con representación más amplia de los intereses de la ciudad para diseñar una visión compartida de Bogotá. La cooperación entre el sector público y el privado tiene como meta incrementar la toma de decisiones conjuntas en beneficio de la productividad y competitividad de Bogotá y sus alrededores.

La primera prueba para este Consejo consistirá en definir su posición respecto a las inversiones que requiere Bogotá para continuar mejorando su perfil competitivo. El proceso no será nada fácil, pero está claro que si los empresarios no se ponen a la altura del reto, el proceso sencillamente sufrirá un retroceso indeseable y la ciudad será otra en el largo plazo.

NOTA PUBLICADA EN EL DIARIO EL TIEMPO, EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2002

Colombia, puesto 44 en competitividad mundial

Estados Unidos sigue siendo el país más competitivo del mundo en el 2002, según una encuesta anual de empresarios divulgada ayer.

Entre los países latinoamericanos, el mejor situado es Chile, que ascendió al puesto 20 desde el 24 el año pasado. Colombia ascendió al puesto 44 del 46. Brasil cayó al 35 desde el 31 y México cayó al 41 desde el 36. Argentina cayó al último lugar y Venezuela al anteúltimo entre un total de 49.

Singapur y Hong Kong perdieron terreno en el agitado ambiente económico mundial, en tanto Japón, que llegó a encabezar la lista durante ocho años seguidos, cayó al puesto 30 en la encuesta realizada por el International Institute for Management Development.

La encuesta dijo que el 2001 fue "un año olvidable" en materia de competitividad y pronosticó que el camino hacia la mejoría en el 2002 será arduo.

"La economía perdió impulso rápidamente y el mercado de valores cayó, arrastrado por el sector tecnológico. Los sucesos dramáticos del 11 de septiembre acentuaron la corrección", dice el informe.

"La economía seguirá siendo altamente volátil, sobre todo en Asia". Finlandia, Luxemburgo y Holanda ascendieron un puesto a segundo, tercero y cuarto, respectivamente, mientras Singapur cayó al quinto.

Suiza, con su estabilidad económica, ascendió del 10 al séptimo y Canadá ascendió al octavo desde uno más abajo. Hong Kong, la economía de mayor crecimiento en el 2000, e Irlanda cayeron tres puestos a noveno y 10 respectivamente.

Estados Unidos, que encabeza la encuesta desde 1994, fue primero en eficiencia empresaria, inversiones directas y uso de computadoras.

Sin embargo, ocupó el último puesto debido a su déficit en cuenta corriente de 413.600 millones de dólares y como exportador de bienes como porcentaje del producto bruto interno. También tuvo bajo puntaje en áreas como costo de vida, conflictos industriales, abuso de alcohol y drogas y desempleo juvenil.

La encuesta halló que el derrumbe de la empresa comercializadora de energía Enron y el consiguiente escándalo había reducido la confianza del público en las figuras empresarias.

"Tal vez una renovación profunda de las normas de contabilidad y auditoría sea el precio a pagar para recuperar la confianza", dijo el documento.

Japón, la segunda economía del mundo, sufre una "crisis de la madurez" más prolongada y profunda que lo previsto. En general, dice el informe, a pesar de la desaceleración económica y la mayor consolidación de los mercados en el 2002, "el crecimiento continuo de los mercados mundiales sigue siendo el factor de largo plazo que más afecta la competitividad mundial”